



Facultad de Derecho de Málaga
Área de Derecho Procesal

PRESENTE Y FUTURO EN LA COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

TESIS DOCTORAL

▪ *DOCTORANDO*

FRANCISCO TORRES YANES

▪ *DIRECTORES*

DR. D. JUAN ANTONIO ROBLES GARZÓN

DRA. D.^a YOLANDA DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

AUTOR: Francisco Torres Yanes

 <http://orcid.org/0000-0003-3870-2473>

EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores.

No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Departamento de Ciencia Política, Derecho
Internacional Público y Derecho Procesal

Los abajo firmantes, certifican que la tesis doctoral titulada “PRESENTE Y FUTURO EN LA COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES DE LA JURISDICCIÓN CIVIL”, del doctorando Francisco Torres Yanes, ha sido realizada bajo nuestra dirección, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su presentación, y autorizan su defensa para optar al Grado de Doctor.

Y para que conste a los efectos oportunos, firman la presente en Málaga, a dieciséis de noviembre de dos mil quince.

Fdo.: Dr. Juan Antonio
Robles Garzón

Fdo.: Dra. Yolanda
De Lucchi López-Tapia

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA





UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
FACULTAD DE DERECHO



**PRESENTE Y FUTURO EN LA COMUNICACIÓN
DE LOS ACTOS PROCESALES
DE LA JURISDICCIÓN CIVIL**

Tesis Doctoral realizada por:
Ldo. Francisco Torres Yanes

Directores:

Vº Bº

Vº Bº

Fdo.: Dr. Juan Antonio
Robles Garzón

Fdo.: Dra. Yolanda
De Lucchi López-Tapia



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

*A María,
por su amor incondicional a un ausente*



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

ÍNDICE

Abreviaturas utilizadas.....	15
INTRODUCCIÓN.....	17

Capítulo I LA COMUNICACIÓN JUDICIAL COMO ACTO PROCESAL

1.- LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN COMO ACTOS PROCESALES.....	25
1.1.- RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.....	25
1.2.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.....	28
1.3.- PRINCIPIOS PROCESALES RECTORES DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.....	32
1.4.- NORMATIVA REGULADORA	35
2.- ASPECTOS COMUNES DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL CIVIL.....	46
2.1.- CLASES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN EN LA LEC.....	46
2.1.1.- Notificaciones.....	47
2.1.2.- Emplazamientos.....	48
2.1.3.- Citaciones	51
2.1.4.- Requerimientos	52
2.1.5.- Mandamientos y oficios	53
2.1.6.- Los exhortos como clase de actos de comunicación	57
2.2.- FORMAS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN: EL ARTÍCULO 152 LEC.....	58
2.3.- LUGAR DONDE PRACTICAR LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL.....	63
2.3.1.- Comunicaciones en sede judicial	65
2.3.2.- El domicilio del demandado.....	69
2.4.- TIEMPO DE LAS COMUNICACIONES JUDICIALES.....	74
2.4.1.- Días y horas hábiles	74
2.4.2.- Plazos y términos procesales	77
a) <i>Plazo de notificación de las resoluciones</i>	77
b) <i>Ficción legal de la realización del acto de comunicación con determinados sujetos</i>	79
c) <i>Actos de comunicación y preclusión procesal</i>	83
2.5.- FORMATO DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	85
2.5.1.- De las copias de las resoluciones, de las cédulas y de los exhortos: Formato extrínseco.....	85
2.5.2.- Lengua oficial.....	89
2.5.3.- El lenguaje jurídico empleado.....	92
2.5.4.- Prevenciones legales	94
a) <i>Advertencias y apercibimientos</i>	96
b) <i>Información sobre derechos</i>	98
3.- SUJETOS ACTIVOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	101
3.1.- CONSIDERACIÓN DE SUJETO ACTIVO.....	101
3.2.- EL ÓRGANO JUDICIAL COMO AUTOR Y EMISOR DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	102

3.2.1.- El Juez o Magistrado	102
3.2.2.- El Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario judicial)....	104
3.2.3.- Los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia	108
3.2.4.- Responsabilidad de los funcionarios intervinientes	112
3.3.- LOS SERVICIOS COMUNES PROCESALES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN	115
3.4.- ACTOS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE AUXILIO JUDICIAL	119
3.4.1.- Auxilio judicial nacional	119
a) <i>Presupuestos</i>	119
b) <i>Los exhortos y las limitaciones de los Juzgados de Paz</i>	122
3.4.2.- Auxilio judicial internacional: las comisiones rogatorias	124
a) <i>Régimen comunitario</i>	124
b) <i>Régimen convencional</i>	126
c) <i>Régimen autónomo español</i>	127
3.5.- EL PROCURADOR COMO EJECUTOR DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	124
3.5.1.- Estatuto jurídico del procurador.....	128
3.5.2.- Habilitación y competencias. Evolución legislativa	129
a) <i>Ley Orgánica 19/2003 y Ley 13/2009</i>	130
b) <i>Ley 42/2015: capacidad de certificación</i>	132
3.5.3.- Responsabilidad.....	134
4.- SUJETOS PASIVOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	135
4.1.- LAS PARTES COMO DESTINATARIOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	135
4.1.1.- Las partes personadas.....	135
4.1.2.- Comunicaciones al rebelde procesal	137
4.2.- LA REPRESENTACIÓN PASIVA DEL PROCURADOR	143
4.2.1.- Habilitación legal	143
4.2.2.- Los servicios de recepción de los Colegios de Procuradores.....	147
4.3.- PERSONAS NO PARTES EN JUICIO	148
4.3.1.- Testigos y peritos	148
4.3.2.- Notificaciones a terceras personas y entidades.....	148
5.- NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	156
5.1.- COMUNICACIONES NULAS, ANULABLES E IRREGULARES. COMUNICACIONES INEXISTENTES ...	157
5.1.1.- El artículo 166 de la LEC	157
5.1.2.- Subsanación y convalidación del acto defectuoso o nulo	159
5.1.3.- Inexistencia del acto de comunicación	159
5.1.4.- La mera irregularidad	160
5.2.- CAUCES PROCESALES PARA DEJAR SIN EFECTO COMUNICACIONES DEFECTUOSAS.....	161
5.2.1.- Medios prioritarios y excluyentes: los recursos	163
a) <i>Recursos ordinarios</i>	163
b) <i>Recursos extraordinarios</i>	165
5.2.2.- Rescisión y revisión de sentencias firmes por el demandado rebelde	167
a) <i>La acción de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde</i>	167
b) <i>Revisión de sentencias firmes por “maquinación fraudulenta”</i>	169
5.2.3.- La declaración autónoma de nulidad de actuaciones	170
a) <i>Posibilidad de la declaración de oficio durante la sustanciación del proceso</i>	171
b) <i>El incidente excepcional de nulidad de actuaciones</i>	174

5.2.4.- Alternativas tras el agotamiento de la jurisdicción ordinaria	176
---	-----

Capítulo II

LA COMUNICACIÓN MEDIANTE REMISIÓN POSTAL

1.- EL SISTEMA DE REMISIÓN POSTAL	179
1.1.- ANTECEDENTES Y NORMATIVA SECTORIAL	179
1.1.1.- La liberalización del sector postal.....	183
1.1.2.- El Servicio Postal Universal y la presunción de veracidad y fehaciencia	185
1.1.3.- La intervención de operadores privados	190
1.1.4.- El Reglamento de prestación de los servicios postales.....	191
1.2.- REQUISITOS FORMALES	193
1.2.1.- La constancia de la comunicación	193
a) <i>De la recepción y de su fecha</i>	193
b) <i>Del contenido de lo remitido</i>	196
1.2.2.- La excepción del artículo 155.4 LEC.....	197
1.3.- MODO DE HACER LA ENTREGA	199
1.3.1.- Lugar de entrega. Remisiones simultáneas.....	199
1.3.2.- Receptores posibles.....	200
1.3.3.- Actuaciones en el momento de la entrega	203
1.3.4.- Confusión jurisprudencial entre la comunicación postal domiciliaria y la comunicación mediante entrega personal.....	206
2.- CASOS EN QUE PROCEDE	209
2.1.- PREVISIONES LEGALES.....	209
2.2.- IDONEIDAD DEL USO DEL CORREO PARA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O CITACIÓN A LA PARTE DEMANDADA.....	214
2.2.1.- La discutible opción del legislador.....	214
2.2.2.- Viabilidad de prescindir de oficio y desde el principio de sistema del remisión para el primer emplazamiento o citación.....	217
2.3.- LA LIMITACIÓN LEGAL DEL USO DE SISTEMA DE REMISIÓN: LA CLÁUSULA DEL SALVAGUARDA DEL ART. 158 LEC.....	220

Capítulo III

LA COMUNICACIÓN MEDIANTE REMISIÓN ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA O TELEMÁTICA

1.- HACIA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2.0	223
1.1.- CAMBIO DE FILOSOFÍA HACIA EL “PAPEL CERO”	223
1.2.- EVOLUCIÓN POLÍTICO-LEGISLATIVA.....	226
1.3.- DE LA VOLUNTARIEDAD A LA OBLIGATORIEDAD	232
1.3.1.- Situación hasta la Ley 42/2015.....	232
1.3.2.- La Ley 42/2015: Previsiones de Derecho transitorio	233
1.3.3.- Reformas realizadas en el artículo 162 de la LEC	236
1.4.- LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, TELEMÁTICOS, INFOTELECOMUNICACIONES O DE OTRA CLASE SEMEJANTE	240

1.4.1.- Requisitos técnicos	241
1.4.2.- Instrumentos	247
a) <i>El fax</i>	247
b) <i>El correo electrónico</i>	251
c) <i>El sistema Lexnet (remisión)</i>	252

2.- LA INTERRELACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL Y LAS PARTES:

EL SISTEMA “LEXNET”	252
2.1.- REGULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS	252
2.2.- FUNCIONAMIENTO	255
2.2.1.- Tiempo hábil. Cómputo de plazos	255
2.2.2.- Simulación práctica	257
2.2.3.- Usuarios del sistema. Funcionarios judiciales competentes	260

Capítulo IV LA COMUNICACIÓN MEDIANTE ENTREGA POR FUNCIONARIO O PROCURADOR

1.- PRECISIONES TERMINOLÓGICAS	265
1.1.- REMISIÓN <i>VERSUS</i> ENTREGA	265
1.2.- LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN PERSONAL	266
2.- CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE ENTREGA	269
2.1.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA INICIAL	270
2.2.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA SUBSIDIARIA	272
2.2.1.- Personación en juicio	272
2.2.2.- Otras comunicaciones relativas a la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones	273
a) <i>Con carácter general</i>	273
b) <i>Con carácter particular</i>	273
2.2.3.- Supuestos dudosos o controvertidos	274
3.3.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA FACULTATIVA	277
3.- LA ENTREGA DIRECTA AL PROPIO DESTINATARIO	278
3.1.- LUGAR DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA	278
3.2.- CONTENIDO DE LA DILIGENCIA	279
3.3.- LA NEGATIVA A LA RECEPCIÓN POR EL DESTINATARIO	282
4.- LA COMUNICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA A TRAVÉS DE TERCEROS	283
4.1.- REQUISITOS INESCINDIBLES EXIGIDOS	283
4.2.- LA PROBLEMÁTICA EXPRESIÓN “PODRÁ” DEL ARTÍCULO 161.3 LEC	290
4.3.- NEGATIVA DEL TERCERO A LA RECEPCIÓN: LA INDEBIDA EXTENSIÓN DE EFECTOS DEL ARTÍCULO 161.2 AL ARTÍCULO 161.3 LEC	296
5.- DESTINATARIO AUSENTE: EL ARTÍCULO 161.4 LEC	298

Capítulo V LA COMUNICACIÓN EDICTAL

1.- LA VÍA EDICTAL COMO FORMA SUBSIDIARIA DE COMUNICACIÓN PROCESAL	303
1.1.- EL EDICTO COMO ÚLTIMO RECURSO: EXIGENCIAS JURISPRUDENCIALES	303
1.2.- PREVISIONES LEGALES	307
1.2.1.- El ambivalente e incompleto artículo 164 de la LEC	307
1.2.2.- Otros supuestos en la LEC	310
1.3.- LA AVERIGUACIÓN DOMICILIARIA DEL DEMANDADO Y EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS DISPONIBLES	310
1.3.1.- La carga procesal del demandante	310
1.3.2.- La responsabilidad y la “diligencia debida” del demandado	311
1.3.3.- Extensión y límites de la investigación judicial	315
a) <i>Personas físicas</i>	316
b) <i>Personas jurídicas: la prevalencia del domicilio social</i>	316
c) <i>La ampliación de la búsqueda a los administradores societarios</i>	321
1.3.4.- Los medios a disposición de órgano judicial	324
a) <i>El Punto Neutro Judicial</i>	325
b) <i>El Registro Central de Rebeldes Civiles</i>	327
c) <i>Otros recursos</i>	328
2.- LA COMUNICACIÓN EDICTAL DIRECTA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN	330
2.1.- EXCEPCIONES LEGALES AL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA COMUNICACIÓN EDICTAL	330
2.2.- LA VÍA EDICTAL COMO MEDIO DE PUBLICACIÓN	331
2.2.1.- Notificaciones-publicaciones colectivas	332
2.2.2.- Emplazamientos colectivos	333
3.- ACUERDO Y EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EDICTAL	336
3.1.- RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL	336
3.2.- LUGARES DE PUBLICACIÓN	337
3.2.1.- El tablón de anuncios: Del papel a la sede judicial electrónica	337
3.2.2.- Los boletines oficiales	338
3.2.3.- Otros	341

Capítulo VI ESPECIFICIDADES DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS PROCESALES

1.- COMUNICACIONES EN LA EJECUCIÓN ORDINARIA	343
1.1.- PROYECCIÓN SUBJETIVA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA	343
1.2.- ACTOS DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE EJECUTADA	344
1.2.1.- Notificaciones	344
a) <i>Notificación del despacho de ejecución</i>	345
b) <i>La previa notificación del saldo deudor</i>	348
c) <i>Notificación del señalamiento de subasta (remisión)</i>	351
1.2.2.- Requerimientos	352
a) <i>Requerimiento de pago</i>	352

b) <i>Requerimiento de manifestación de bienes</i>	352
c) <i>Requerimiento de aportación de títulos de propiedad</i>	354
1.2.3.- Citaciones y emplazamientos	354
1.3.- NOTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CÓNYUGE NO DEUDOR	355
1.4.- COMUNICACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	356
1.5.- COMUNICACIONES CON EL TERCER POSEEDOR	359
1.6.- COMUNICACIONES CON LOS ACREEDORES	360
1.6.1.- Titulares de créditos anteriores	360
1.6.2.- Titulares de créditos posteriores	361
a) <i>Situaciones</i>	361
b) <i>Finalidad de la comunicación</i>	363
c) <i>Forma de practicar la comunicación</i>	364
d) <i>Omisión y defectos en las comunicaciones</i> <i>del Registro de la Propiedad a los titulares posteriores</i>	367
1.7.- COMUNICACIONES A ARRENDATARIOS Y OCUPANTES DE HECHO	368
1.8.- COMUNICACIONES RELATIVAS A LA SUBASTA	370
1.8.1.- Notificación al ejecutado no personado	370
a) <i>Situación anterior a la Ley 19/2015</i>	370
b) <i>Situación actual tras la Ley 19/2015</i>	373
1.8.2.- Publicidad de la subasta	373
a) <i>Publicidad obligatoria de la subasta electrónica</i>	373
b) <i>Publicidad opcional</i>	375
1.9.- NOTIFICACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES A EFECTOS DE EJECUCIÓN	376
2.- COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA	378
2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS	378
2.2.- EL PROBLEMA DEL DOMICILIO HIPOTECARIO	382
2.2.1.- La fijación del domicilio como presupuesto de la ejecución hipotecaria	382
2.2.2.- Caracteres del domicilio hipotecario	384
2.2.3.- La ineficacia del domicilio hipotecario y la doctrina del Tribunal Constitucional: Hacia el desmantelamiento de la ejecución hipotecaria	389
a) <i>La posición excesivamente garantista del Tribunal Constitucional</i>	389
b) <i>La Ley 13/2009 y la interpretación 'secundum constitutionem'</i> <i>del artículo 686.3 LEC</i>	392
c) <i>Homogeneización con la Ley 19/2015</i>	394
d) <i>Debate doctrinal</i>	395
e) <i>Conclusiones y argumentos a favor de la tesis rígida</i>	399
2.3.- LA NOTIFICACIÓN DEL SALDO DEUDOR EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA	402
2.4.- PRÁCTICA DEL REQUERIMIENTO DE PAGO: EL ARTÍCULO 686 LEC	404
2.4.1.- El previo requerimiento extrajudicial	404
a) <i>Reglas que aporta la LEC</i>	405
b) <i>Reglas que aporta el Reglamento Notarial</i>	409
2.4.2.- El desconocimiento inicial del domicilio vigente en el Registro	412
2.4.3.- Forma de practicar el requerimiento judicial	414
2.4.4.- Plazo de pago	415
2.5.- COMUNICACIONES AL TERCER POSEEDOR Y A LOS ACREEDORES POSTERIORES	416
2.5.1.- Tercer poseedor	416
a) <i>Diferencias con la ejecución ordinaria</i>	416
b) <i>Órgano competente para notificar al tercer poseedor</i>	

<i>la existencia del proceso hipotecario</i>	418
c) <i>Simple notificación y no requerimiento de pago al tercer poseedor</i>	421
2.5.2.- Acreedores posteriores. Omisión o defectos en las comunicaciones	422
3.- COMUNICACIONES EN EL AMBITO DEL JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO	422
3.1.- DIFERENTES TIPOS DE JUICIO DE DESAHUCIO	422
3.2.- EVOLUCIÓN LEGISLATIVA	423
3.2.- SITUACIÓN ACTUAL TRAS AL LEY 42/2015	437
3.3.- EFICACIA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN EN EL INMUEBLE ARRENDADO	440
4.- COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS MONITORIO Y CAMBIARIO	444
4.1.- PROCESO MONITORIO	444
4.1.1.- Importancia del requerimiento de pago en forma personal	444
4.1.2.- Monitorio por gastos comunes de Comunidades Propietarios	446
a) <i>La excepción a la prohibición del requerimiento por edictos</i>	446
b) <i>El requisito pre-procesal de la aprobación y notificación de la deuda al propietario moroso</i>	447
4.2.- JUICIO CAMBIARIO	449
4.2.1.- El requerimiento de pago	449
4.2.2.- El domicilio del deudor cambiario	450
4.2.3.- La diligencia de requerimiento y embargo preventivo	452
4.2.4.- Posibilidad de comunicación edictal en el juicio cambiario	453

Capítulo VII CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	457
---------------------------	-----



Bibliografía consultada	475
--------------------------------------	-----

ANEXO A: JURISPRUDENCIA CITADA	493
---	-----

ANEXO B: PROPUESTA ESENCIAL DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN	499
---	-----

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AC	<i>Repertorio Aranzadi Civil de jurisprudencia</i>
ALEC	<i>Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil</i>
Ar.	<i>Repertorio Aranzadi de jurisprudencia</i>
art.	<i>artículo</i>
AJPI	<i>Auto de Juzgado de Primera Instancia</i>
AJM	<i>Auto de Juzgado de lo Mercantil</i>
AAP	<i>Auto de Audiencia Provincial</i>
ATS	<i>Auto del Tribunal Supremo</i>
BIMJ	<i>Boletín de Información del Ministerio de Justicia</i>
BMJ	<i>Boletín del Ministerio de Justicia</i>
BOC	<i>Boletín Oficial de Canarias</i>
BOGC	<i>Boletín Oficial de las Cortes Generales</i>
BOCM	<i>Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</i>
BOPMA	<i>Boletín Oficial de la Provincia de Málaga</i>
BOPA	<i>Boletín Oficial del Principado de Asturias</i>
BOCM	<i>Boletín Oficial del País Vasco</i>
C-Advo.	<i>Contencioso-administrativo</i>
C.c.	<i>Código civil español</i>
CE	<i>Constitución Española</i>
c.e.	<i>corrección de errores</i>
cit.	<i>citado/a</i>
cfr.	<i>confróntese</i>
DGRN	<i>Dirección General de los Registros y del Notariado</i>
Dir.	<i>Director/es</i>
disp.	<i>disposición</i>
DOGC	<i>Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña</i>
DOUE	<i>Diario Oficial de la Unión Europea</i>
DOCV	<i>Diario Oficial de la Comunidad Valenciana</i>
DOGA	<i>Diario Oficial de Galicia</i>
E.M.	<i>Exposición de Motivos</i>
F. D.	<i>Fundamento de Derecho</i>
F. J.	<i>Fundamento Jurídico</i>
infra	<i>abajo</i>
LAECSP	<i>Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos</i>
LArb.	<i>Ley de Arbitraje</i>
LH	<i>Ley Hipotecaria</i>
LJS	<i>Ley reguladora de la Jurisdicción Social</i>
LOPJ	<i>Ley Orgánica del Poder Judicial</i>
LOTG	<i>Ley Orgánica del Tribunal Constitucional</i>
LPH	<i>Ley de Propiedad Horizontal</i>
LRJAP	<i>Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común</i>
LSC	<i>Ley de Sociedades de Capital</i>
LUTICAJ	<i>Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia</i>
op. cit.	<i>opus (obra) citada</i>
PLEC	<i>Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil</i>
p. / párr.	<i>párrafo</i>
pág. / págs.	<i>página/páginas</i>
Regl.	<i>Reglamento</i>

RGD	<i>Revista General de Derecho</i>
RH	<i>Reglamento Hipotecario</i>
RN	<i>Reglamento Notarial</i>
RRM	<i>Reglamento del Registro Mercantil</i>
ROJ	<i>Repertorio jurisprudencial del CENDOJ</i>
ROSJ	<i>Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales</i>
SAP	<i>Sentencia de Audiencia Provincial</i>
SAN	<i>Sentencia de la Audiencia Nacional</i>
SGAJ	<i>Secretario General de la Administración de Justicia</i>
SJPI	<i>Sentencia de Juzgado de Primera Instancia</i>
STEDH	<i>Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos</i>
STS	<i>Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª, salvo mención expresa)</i>
STSJ	<i>Sentencia Tribunal Superior de Justicia</i>
supra	<i>arriba</i>
TCE	<i>Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea</i>
vid.	<i>véase</i>
VV.AA.	<i>Varios Autores</i>

NOTAS DE ESTILO Y REDACCIÓN

- Debido a la nueva denominación del Cuerpo de Secretarios Judiciales en *Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia*, introducida por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, *por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*, y conforme a su Disposición adicional primera, a partir de la entrada en vigor de esta Ley [1 de octubre de 2015], todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, “así como en otras normas jurídicas”, a Secretarios judiciales, [...] deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia [...]”. Hasta tanto no se modifiquen, en su caso, las respectivas leyes procesales, hemos optado por respetar la literalidad de las fuentes legales y seguir transcribiendo el término “Secretario judicial” allí donde continúa presente.
- Se han tenido en cuenta las nuevas reglas ortográficas de la Real Academia Española publicadas en la última edición de la *Ortografía de la lengua española* (2010) en relación con la tilde diacrítica de la palabra “solo”, tanto si es adverbio como si es adjetivo, y los pronombres demostrativos “este”, “ese” y “aquel”, que «no deberán llevar tilde».
- En las notas a pie de página los preceptos reseñados se refieren a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo indicación expresa de otra normativa.
- Las transcripciones de las disposiciones legales en vigor se presentan en cursiva.
- Las referencias jurisprudenciales van referidas a la base de datos del CENDOJ, salvo donde se se informe de otra fuente (Aranzadi o La Ley), por no haberse encontrado en dicho Centro.
- Excepto donde se indique, las resoluciones del Tribunal Supremo son de la Sala 1ª.

¡Una y no más, Santo Tomás!
(Doctorando anónimo, s. XIV)

INTRODUCCIÓN

I.- El tema

“El de los actos de comunicación del órgano jurisdiccional aparece, de entrada, como tema árido y desprovisto de enjundia jurídica especial, como un asunto que, ciertamente, exige ocuparse de él, pero a sabiendas de su aspe-
reza y sequedad. Características que, en principio solemos atribuir a los temas más estrictamente «procedimentales». Sin embargo, se trata de un aspecto crucial de la legislación y de la realidad procesales”.

Así comenzaban los profesores DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ LÓPEZ¹ la exposición en uno de sus manuales del tema dedicado a los actos de comunicación procesal y así deseamos dar inicio también a la presente tesis doctoral, al ser una buena carta de presentación de una materia que, ‘a priori’, parece secundaria, instrumental, incapaz de ponerse a la altura de grandes institutos jurídico-procesales como el concepto de acción, el objeto del proceso civil, la jurisdicción o la ejecución forzosa, por citar algunos. Pero, como bien anunciaban aquellos autores, nada más lejos de la realidad. Los actos de comunicación vertebran el proceso y sin ellos el proceso civil perecería, porque, como destaca de forma muy gráfica HERNÁNDEZ LÓPEZ, los actos procesales de comunicación “son la infraestructura del proceso, el pe-

¹ DE LA OLIVA, ANDRÉS y FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL: *Derecho procesal civil II*, 4ª ed. (1ª reimpresión), Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996, pág. 161.

queño tornillo de su mecánica que, como el surtidor del carburador, cuando se obstruye paraliza el automóvil y lo hace inútil. Todo proceso es ineficaz sin su resolución definitiva, en general sentencia, pero la sentencia es inútil sin la notificación”².

En efecto, los actos de comunicación afectan de forma transversal a todo el conjunto de la actividad jurisdiccional y su correcta práctica forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española. Un emplazamiento mal hecho o una citación no intentada ajustándose a las prescripciones legales pueden acarrear la grave consecuencia de la anulación de las actuaciones por indefensión y la retroacción de las mismas casi al instante mismo de la incoación de la demanda. Baste apuntar, por ahora, que el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de nuestra postura crítica que en algunos aspectos mostraremos hacia el mismo, ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en infinidad de ocasiones al respecto³, lo que ya de por sí demuestra la magnitud de la cuestión, como también lo han hecho el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor.

Y en íntima conexión con lo anterior, es notorio entre los profesionales del Derecho que los actos de comunicación son uno de los mayores causantes del retraso en la sustanciación de los procesos judiciales, lo que unido a la elevada litigiosidad que reflejan las estadísticas, con más de ocho millones y medio de asuntos en toda España según la Memoria Anual de 2014 del Consejo General del Poder Judicial⁴, da como resultado la acumulación de los asuntos, la excesiva dilación en la resolución de los mismos y, a la postre, el desencanto de los ciudadanos hacia la Justicia.

El retraso en la tramitación de los procedimientos es endémico en los Juzgados y Tribunales de España, en particular en muchos municipios costeros y sobre todo en aquellos partidos judiciales donde no existe separación entre juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción (juzgados mixtos), y sin duda es de lamentar que ello vaya muchas veces en detrimento de quien, habiendo solicitado tutela judicial, observa cómo la contraparte demandada se aprovecha, deliberadamente o no, de una situación estructural que desde todos los sectores del foro se lleva años denunciando con desigual resultado. Se trata de una realidad que no

² HERNÁNDEZ LÓPEZ, VIDAL: “La notificación normalizada” (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985] Madrid, 1985, CGPJ, pág. 339.

³ Vid., v. gr., SSTC 76/2013, 242/2012, 61/2010, 54/2010, 28/2010, 104/2008, 93/2009, 255/2006, 161/2006, 76/2006, 38/2006, 21/2006, 184/2005, 94/2005, 19/2004, 102/2003, 1/2002, 268/2000, 65/2000, 219/1999, 65/1995, 275/1993, 74/1993, 37/1990, 72/1988, 22/1987, 1/1983 o 9/1981.

⁴ Aprobada por el Pleno de 24 de julio de 2014. No obstante, la Memoria, sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales en el año 2013 informa, no obstante, de una ligera mejoría, pues “por cuarto año consecutivo ha descendido el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles. Los 8.636.016 asuntos ingresados, representan un 3,8% menos que los ingresados en 2012” (pág. 451).

es puntual ni pasajera, sino que se encuentra instalada de forma permanente en la historia de la Justicia de nuestro país.

Precisamente, que los actos de comunicación judicial constituyen un relevante factor de peso en la producción del problema lo testimoniaba ya en 1997 el CGPJ en su conocido *Libro Blanco de la Justicia*⁵, en el que afirmaba que “una opinión muy extendida en la práctica, corroborada por los datos obtenidos por el Consejo General del Poder Judicial y por el trabajo de campo realizado para la confección de este Libro Blanco, es que los actos de comunicación constituyen una de las rémoras más importantes en el proceso civil. De acuerdo con el estudio sobre dilación de los procesos civiles realizado por la Fundación Carlos III, a que antes nos hemos referido, aproximadamente una tercera parte del tiempo total de duración de un proceso lo consume el simple acto de emplazar a los demandados”.

Ambos aspectos parecen antagónicos, pero en realidad uno es consecuencia del otro. El legislador tiene la misión de proporcionar a los ciudadanos instrumentos jurídicos y cauces jurisdiccionales con los que tutelar sus legítimos derechos y pretensiones frente a quienes los perturben o lesionen con la mayor prontitud y eficacia posibles, pues así lo tiene mandado por la Carta Magna, pero, al mismo tiempo, dicha tutela no puede obtenerse sin más a costa de estos últimos y sin ser oídos, sino que ha de abstraerse para garantizar el cumplimiento de una serie de principios rectores de los procesos judiciales que afectan a unos contendientes y a otros. ¿Dónde está, pues, el punto de equilibrio? ¿Por qué no es posible evitar que los procesos se eternicen? Para responder a estas preguntas hay que estudiar en primer lugar el régimen jurídico de los actos de comunicación y detectar por qué muchos de ellos se frustran en la finalidad que tienen de llegar a sus destinatarios, con la consiguiente reiteración de los mismos y la prolongación en el tiempo de los procesos. Lo anterior resulta, sin embargo, una tarea compleja. Hay que ser conscientes de la dificultad que caracteriza una materia en la que están en juego diversos factores que reclaman una atención personalizada y que vienen referidos, por una parte, al respeto a las formas y ritos del proceso a que obliga el principio de legalidad, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y la necesidad de garantizar el derecho de las partes, dando como resultado un conflicto de intereses cuya ponderación se advierte difícil para quienes a diario han de aplicar las normas jurídicas y tienen que llevar a cabo esa función tan noble como difusa llamada “impartir Justicia”.

El tema elegido goza, sin haber tenido este doctorando el más mínimo ánimo oportunista, de una innegable actualidad. Por un lado, la teoría y la práctica de los actos de comunicación es un tema vivo y recurrente que ha provocado desde siempre interpretaciones dispares en la doctrina académica, en la jurisprudencia, entre los hoy denominados Letrados de la Administración de Justicia, antes Secretarios judiciales, y resto de funcionarios de la Administración de Justicia, Jueces y

⁵ *Libro Blanco de la Justicia*, CGPJ, Madrid, 1997, pág. 190. Trabajo aprobado por el Pleno del Consejo el 8 de septiembre de 1997.

Magistrados, Fiscales, así como procuradores, abogados y resto de profesionales de la Justicia. Son mil y una cuestiones las que se suscitan a diario en la práctica forense. Por otro, la coyuntura extraordinaria iniciada el pasado verano y a principios de otoño del presente año 2015, relativa a la inusitada promulgación por el legislador en un espacio de tiempo muy breve de numerosas reformas legales han desencadenado una auténtica “revolución” que tiene una precipitada, pero exhaustiva proyección en el trabajo. Así, en este contexto de “tormenta legislativa” y estando ya muy avanzada la presente tesis, se han aprobado en menos de cuatro meses casi una decena de leyes que han afectado directa o indirectamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la materia del trabajo, destacando sobre todas ellas la Ley 19/2015, de 13 de julio, *de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil*, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, *de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

II.- Metodología de trabajo y fuentes

La metodología empleada parte principalmente del estudio pormenorizado del derecho positivo orgánico y procesal conformando por la Constitución Española, la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo lo referido a los actos de comunicación, pero sin olvidar la existencia de toda una miríada de regulaciones de variopinta naturaleza jurídica y rango normativo, desde leyes ordinarias hasta reales decretos, pasando por instrucciones y hasta circulares, que, de forma más o menos tangencial, completan e informan nuestro sistema procesal civil en materia de actos de comunicación.

Como criterio metodológico hemos optado por integrar en el discurso teórico el análisis de la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales en la aplicación concreta de la normativa, al tiempo que nos hacemos eco de cuáles han sido hasta la fecha las soluciones aportadas por la jurisprudencia y la doctrina. Estas ideas, unidas a las que este propio doctorando pueda incorporar como consecuencia de la investigación y de su propia experiencia, constituirán la base de lo que, ‘de lege ferenda’, se propondrá al final de la obra.

Para la teoría, habida cuenta de la literatura jurídica que con el paso de los años, aunque dispersa, se ha ido creando sobre la disciplina, la tarea se presenta ardua pero por ello apasionante. En este punto es justo destacar el referente que han supuesto para nosotros las dos únicas monografías existentes hasta la fecha que con una pretensión exhaustiva y global han abordado el instituto de los actos de comunicación procesal⁶. La primera, *La comunicación procesal en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, del profesor Ignacio José CUBILLO LÓPEZ (Edersa, Madrid,

⁶ Con pretensiones mucho más modestas se publicó en 2012 el libro *Actos de comunicación procesal y derechos fundamentales*, de Manuel CERRADA MORENO (Aranzadi, Cizur Menor). Y ya con unfoque más particularizado que la diferencia de las demás es la obra de Estela YÉLAMOS BAYARRI titulada *Nulidad procesal y comunicaciones judiciales fallidas. La urgencia de un replanteamiento* (Atelier, Barcelona, 2006).

2001), y la segunda, *Las comunicaciones procesales*, de la también profesora Noelia FURQUET MONASTERIO (Atelier, Barcelona, 2005). Ambos trabajos, originariamente concebidos como tesis doctorales, destacan por su seriedad, profundidad y rigor, tres virtudes que anhelamos nosotros también alcanzar, al tiempo que, habiendo transcurrido ya toda una década desde el segundo de ellos, trataremos de hacer una puesta al día de la materia.

En cuanto a la práctica, intentaremos aprovechar al máximo nuestra privilegiada condición (a estos efectos) de funcionario judicial de los Cuerpos de Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial que desarrolla y ha venido desarrollando su labor, principalmente, en los órganos judiciales de la jurisdicción civil. Por ello, como testigo directo, “desde dentro”, de la actividad judicial, podremos plasmar en el trabajo las ideas y soluciones de los profesionales que desde el juzgado abordamos de lleno la materia, así como las quejas recurrentes, pero también en no pocas ocasiones las ilustrativas aportaciones de procuradores y abogados que a diario colaboran con la Administración de Justicia. Con ello se podrá preservar el siempre anhelado deseo de que la academia y el foro estén estrechamente relacionados, so pena de que las aulas se pierdan en los a veces etéreos e idílicos dominios de la teoría y terminen distanciándose de la realidad que se vive en la calle y a la que el Derecho ha de responder.

III.- Estructura de la tesis

El trabajo se estructura en siete capítulos en los que estudiaremos la actual normativa que regula los actos de comunicación, si bien no siempre por la vía del estudio estrictamente lineal y sistemático de los artículos 149 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, enmarcados en un capítulo, el “De los actos de comunicación judicial”, en que, en apariencia, se condensa la materia, sino partiendo de una consideración global de dicha regulación, esquematizándola en grandes grupos conceptuales a través de los que se estudia la legalidad vigente con el debido detenimiento académico.

El primer capítulo constituye, como punto de partida, una composición de lugar y, siguiendo los cánones, bien podría entenderse como la parte general de la obra. Con el título de *la comunicación judicial como acto procesal* intentamos mostrar, en primer lugar, la relevancia constitucional que tienen los actos de comunicación y su concepto teórico. A continuación, dos bloques relativos a detallar la normativa reguladora y los aspectos comunes que caracterizan y regulan los actos de comunicación, en buena medida derivados de su condición de actos procesales o actos jurídicos-procesales que, por ello, tienen una incidencia directa en el proceso. Ahí abordaremos el objeto y los requisitos clásicos de la forma, el tiempo o el lugar de dichos actos, y otros más novedosos y menos desarrollados como los del formato, la lengua o el lenguaje jurídico a emplear. Proseguiremos con este panorama caracterizado por su multiplicidad de facetas con el estudio de los diversos operadores jurídicos que en el intervienen, efectuando una distinción entre los

sujetos activos que participan en la producción de este fenómeno procesal en sus diferentes roles y competencias –como los Letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios del Cuerpo de Auxilio judicial y los procuradores, pasando por estructuras organizativas dedicadas a dicha tarea, e incluso, desde cierto punto de vista, el propio Juez o Magistrado– y los sujetos pasivos o destinatarios de los mismos. El capítulo finaliza con la difícil cuestión de los actos de comunicación defectuosos o nulos, en el que examinaremos la diferente gradación que tienen en orden a los efectos que producen y los diferentes cauces legales de que dispone la parte perjudicada por los mismos para atacarlos y dejarlos sin efecto.

Una vez examinado el “continente”, qué son los actos de comunicación, cómo, dónde y quién los produce, el capítulo segundo inaugura con el título de *la comunicación mediante remisión postal* el estudio de lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil denomina *forma* de efectuar los actos de comunicación, es decir, el modo en que los mismos se transmiten y hacen llegar a sus destinatarios, que son, esencialmente, dos, el que ya anuncia el capítulo, la *remisión*, caracterizada por la ausencia de contacto físico entre el emisor y el receptor, y la *entrega*, la forma más antigua y simple, aquella que se efectúa de forma directa, entre personas, sin intermediarios y sin el empleo de medios creados por el hombre de carácter técnico para salvar las distancias entre unos y otros. En este capítulo analizaremos ese primer sistema de remisión en su esquema tradicional, aquel en el que correo postal, junto al telegrama y otros medios similares, ha sido, y sigue siendo, la vía de comunicación elemental para los órganos judiciales y los casos en que actualmente procede su uso. A continuación, con el capítulo tercero, de *las comunicaciones electrónicas, informáticas o telemáticas*, seguiremos con el sistema de remisión, pero lo haremos desde una perspectiva totalmente diferente, tan diferente que la materia trasciende y alcanza a la propia fisonomía de la Administración de Justicia, pues, como el resto de Administraciones públicas, se encuentra en plena transformación hacia lo que ya se ha acuñado como “e-Administración”, en nuestro caso “e-Justicia”. En ella, las relaciones de los órganos judiciales con los ciudadanos, y de los ciudadanos con ellos, no son ya presenciales, sino “virtuales”, y, por tanto, las comunicaciones se envían y se *remiten* telemáticamente, como ya está ocurriendo desde hace unos años con los actos de comunicación judicial con los procuradores de las partes, principalmente, y, más recientemente, con la presentación de escritos y documentos por parte de estos a los diversos órganos judiciales. Estudiaremos esta enormemente compleja realidad en constante e incesante evolución y el impulso realizado por el legislador en las que las comunicaciones telemáticas están convirtiéndose en el sistema prevalente, muy pronto obligatorio para los “profesionales de la Justicia”, pero con la pretensión última de ser en un futuro no demasiado lejano, si no el único, sí el principal medio de comunicación, independientemente del perfil y aptitud del interlocutor.

Si los dos anteriores capítulos se ocupan del sistema de remisión en sus dos submodalidades, postal y electrónica o telemática, el cuarto, que titulamos *la comunicación mediante entrega en persona por funcionario o procurador*, versa sobre el segundo de los sistemas de comunicación citados, constituyendo el medio más

seguro de todos, pero, al mismo tiempo, el más costoso. Al realizarse de persona a persona, la movilización de medios materiales y humanos es mayor, lo que no es óbice para que deba seguir empleándose, sobre todo para aquellas comunicaciones del órgano judicial que revistan especial transcendencia en el proceso, como puede ser la de la propia puesta en conocimiento del mismo a la parte demandada a fin de que pueda comparecer y ejercer su derecho fundamental a la defensa y de los que de él derivan.

La frustración en la efectividad real de las comunicaciones es la razón que inspira *la comunicación edictal*, capítulo quinto con el que afrontaremos el análisis de una modalidad procesal de comunicación que el legislador sitúa fuera de su relación de *formas* de comunicación, quizá porque, en realidad, estamos ante un sistema de comunicación “virtual” (diríamos directamente de “no comunicación”), de una ficción legal que el Ordenamiento necesita crear para tener por cumplido uno de los trámites esenciales del procedimiento y le permita así seguir avanzando hasta el final del proceso y la resolución del litigio, aun siendo consciente de que la comunicación es puramente formal, artificial, y no real ni material. Por ese motivo, esta opción tiene un empleo subsidiario, aunque ello no impide que en determinados supuestos establecidos por el propio legislador se ordene acudir a ella sin tal carácter.

Finalmente, el capítulo sexto, denominado *especificidades de los actos de comunicación en diferentes ámbitos procesales*, ahonda en el análisis de estos actos en parcelas de la normativa procesal donde se hace necesaria un específico tratamiento en la materia. En efecto, además de las previsiones generales que para los actos de comunicación establece nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, a lo largo de ella existen otros preceptos insertos en la regulación de determinados procedimientos que no solo tienen incidencia en la materia, sino también una influencia muy notable en el desarrollo de los mismos y se refieren a modos o momentos concretos de practicar una determinada notificación, citación, emplazamiento o requerimiento en función del proceso que se sustancie, de la persona a que aquellos actos van dirigidos o de la finalidad pretendida. Así, deviene imprescindible el estudio de los actos de comunicación a practicar en el ámbito del proceso de ejecución civil, tanto en el común u ordinario, como en el especial hipotecario, así como en el ámbito de los procesos declarativos como el juicio verbal de desahucio, que ha sido objeto de numerosas reformas. El capítulo concluye con el análisis de las especificidades presentes de dos de los procesos especiales del Libro IV de la LEC, en particular el exitoso proceso monitorio y el juicio cambiario.

Como corolario de todos los capítulos anteriores, se presentan las imprescindibles *conclusiones* de la investigación realizada, que tienen su proyección inmediata en la que quizá sea la parte más comprometida de la misma y en la que se demuestra la intención de aportar nuestro “grano de arena” para alcanzar una regulación legal de la materia más eficaz. Nos referimos a la última parte del trabajo que presentamos en anexo rubricado como *propuesta esencial de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de actos de comunicación*. En ella presen-

tamos a modo de cuadros comparativos, por un lado, los preceptos legales tal y como están actualmente redactados y, por otro, el texto reformado, destacando los cambios que quizá con mayor premura sugerimos.

El trabajo se completa, acorde con el más puro rigor academicista, con una relación de la *bibliografía* consultada y un índice de la *jurisprudencia* citada.

Francisco Torres Yanes
Málaga, 14 de noviembre de 2015.

I

La comunicación judicial como acto procesal

1.- LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN COMO ACTOS PROCESALES

1.1.- RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

Los actos de comunicación procesal entroncan con una serie de derechos fundamentales que se encuentran condensados en el artículo 24 de la Constitución Española, precepto que, después de treinta y siete años, ha sido mencionado en infinidad de ocasiones en nuestra literatura jurídica. Pero no por ello podemos tomarnos la licencia de no hacerlo aquí, y además de forma destacada mediante su transcripción íntegra, dado que se trata para la materia que abordamos de un precepto nuclear, que irradia y al mismo tiempo informa y condiciona al conjunto del ordenamiento jurídico-procesal:

*1. Todas las personas tienen derecho a obtener **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin** que, en ningún caso, pueda producirse **indefensión**.*

*2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un **proceso público sin dilaciones indebidas** y **con todas las garantías**, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.*

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Tanto el primer apartado como el segundo de esta disposición tienen plena aplicación en la materia de los actos de comunicación y se encuentran íntimamente relacionados. El primero eleva a categoría de derecho constitucional el derecho de todas las personas a la tutela efectiva que han brindar jueces y magistrados, tutela que, lo queremos subrayar desde el principio, no es solo para quienes la demanden, sino también frente a quienes se demanda. El derecho a la tutela judicial efectiva es la esencia, tiene un contenido poliédrico y de él se derivan o son manifestaciones los demás derechos. De él nacen los derechos o principios de defensa, de audiencia bilateral y de contradicción; y el derecho público con toda una serie de garantías procesales, específicamente señalado en el epígrafe segundo, entre las que se encuentra la del proceso sin dilaciones indebidas.

Así, conforme entiende CASERO ALONSO, los actos de comunicación procesal “tienen transcendencia constitucional en cuanto afectantes al derecho fundamental a la tutela efectiva, sin indefensión, y garantes de los principios de bilateralidad, contradicción, audiencia e igualdad de armas que gobiernan el proceso”⁷. En palabras de la **STC 113/2001**, de 07.05⁸:

“[...] el emplazamiento y citación han de ser realizados por el órgano judicial con todo el cuidado y respeto de las normas procesales que regulan dichos actos de comunicación, como deber específico integrado en el de la tutela judicial efectiva, dado que no son un formalismo, sino una garantía para las partes en el procedimiento y una carga que corresponde llevar a cabo al órgano judicial, integrante del contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la Constitución [...]” (F. J. 6)⁹.

Con los actos de comunicación se pretende la efectividad del derecho o principio de audiencia, tan básico en el proceso que sin él deja de tener razón de ser. Si al demandado no se le brinda la oportunidad de tener conocimiento del proceso, no se podrá defender, no habrá contradicción ni tampoco inmediatez del órgano judicial que haya de resolver el litigio. Como dijo la **STC 114/1986**, de 02.10¹⁰:

“El art. 24.1 de la Constitución Española, en efecto, en el amplio ámbito de la tutela judicial efectiva, no sólo comprende el derecho de acceso al proceso y a los recursos -y con ello al uso de los instrumentos legales y procesales que las leyes prevén- sino también el derecho de audiencia bilateral configurado por el principio de contradicción, el cual se convertiría en inútil e imposible sin el deber judicial previo de garantizar esa audiencia (medio, en definitiva, de defensa) mediante las oportunas citaciones y notificaciones señaladas por la ley procesal, ley que en su concepción más amplia, no rituaría, no consiste sino en un sistema de garantías, no en mero contenido formal” (F. J. 2).

⁷ CASERO ALONSO, JOSÉ LUÍS: “Principios constitucionales que rigen los actos de comunicación. Plan provincial de Oviedo”, *Civil (Volumen II). Recopilación de ponencias y comunicaciones. Planes provinciales y territoriales de formación. Año 1996*, CGPJ, Madrid, 1997, pág. 548.

⁸ BOE de 08.06.2001.

⁹ Ya lo había dejado dicho en STC 37/1984: “no son un formalismo, sino una garantía para el afectado en el procedimiento y una carga que corresponde llevar al órgano judicial”.

¹⁰ BOE de 22.10.1986.

Por ello, este principio conlleva la imposición a los órganos judiciales “un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal que asegure, en la medida de lo posible, su recepción por los destinatarios (**STC 199/2002**, F. J. 2º, que cita, a su vez, las SSTC 167/1992, 103/1993, 316/1993; 317/1993, 334/1993, 108/1994, 186/1997 y 158/2001).

Lo anterior implica además que se intente que la comunicación sea personal con el destinatario: **STC 39/2000**, de 14.02¹¹:

“Es reiterada doctrina de este Tribunal, ya desde la STC 9/1981, de 31 de marzo, que el art. 24.1 CE contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete para promover el derecho de defensa lo cual comporta la exigencia, en lo posible, del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal sólo para aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio y 36/1987, de 25 de marzo, por otras)” (F. J. 4º).

Sin embargo, y al mismo, no habrá indefensión con relevancia constitucional si la misma es consecuencia de la falta de diligencia de las partes. Así, declara la **STC 211/1989**, de 19.12 que:

“Corresponde a las partes en un proceso mostrar la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de actuar con una diligencia razonablemente exigible” (F. D. 2º).

La indefensión alegada suele venir aducida por la parte afectada por la sustanciación del proceso judicial en su ausencia, pero, como estimó la **STC 123/1989**, de 06.07, se exige que se trate de una *indefensión material* imputable al órgano judicial:

“[...] no toda resolución judicial dictada *inaudita parte* implica necesariamente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por causar indefensión, pues la indefensión que proscribe el artículo 24.1 de la Constitución es la material, esto es, la que se traduce en una real privación o limitación del derecho de defensa como directa consecuencia de una acción u omisión del órgano judicial, pero no aquella que es imputable al propio interesado, que no actuó con la diligencia exigible para comparecer en el proceso por otros medios distintos del emplazamiento la existencia del proceso” (F. D. 2º)¹².

Efectivamente, el inciso final del art. 24.1 que establece que *en ningún caso, pued[e] producirse indefensión* ha sido interpretado por el TC y aplicado a cada caso concreto que ha conocido en amparo partiendo de una distinción creada por él mismo en la que diferencia entre la indefensión jurídico-constitucional y la indefensión jurídico-procesal. La primera es la indefensión “material”, es decir una indefensión real, la única que protege, mientras que la segunda es la indefensión “formal”.

¹¹ BOE de 17.03.2000.

¹² En el mismo sentido, SSTC 48/1984, 159/1988, 48/1990, 174/1990, 8/1991, 153/1993, o 108/1995.

En nuestra opinión, a este requisito de la diligencia debida no se le ha dado la suficiente importancia. Puede haberse producido un perjuicio real, una petición no atendida de subsanación y que, de haberse subsanado hubiese tenido una influyente decisión en la resolución del fondo del litigio, y, sin embargo, haberse producido la indefensión por la propia negligencia de la parte perjudicada. Un arrendatario que abandona el inmueble sin dar aviso al arrendador y sin pagar las rentas, y que posteriormente es demandado por este para recuperar la posesión y reclamar aquellas, produciéndose el desahucio ‘inaudita parte’, no debería luego denunciar que no ha tenido conocimiento del proceso, porque el perjuicio real (el lanzamiento y la condena al pago de aquellas rentas y las costas sin haberse defendido en aquel) lo ha sido por causa exclusivamente a él imputable.

1.2.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

Los actos de comunicación pertenecen a la categoría de los actos procesales, que son los integradores, por la sucesión de los mismos en el tiempo, del proceso judicial¹³. Más concretamente, como afirmó PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, “actos procesales son el conjunto de actividades que realizan las partes y Tribunal para preparar, iniciar, impulsar y terminar el procedimiento, logrando el fin que el proceso se propone”¹⁴. Y esos actos o actividades tienen el apelativo de jurídico-procesales porque “tienen por consecuencia, la *constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición* de una relación procesal” (CHIOVENDA¹⁵).

¹³ En el que se aplica, a través del procedimiento judicial, el Derecho sustantivo o material, integrado, a su vez, por hechos jurídicos (v. gr., la muerte de una persona) y actos jurídicos (la celebración de un contrato de compraventa). Sobre el concepto de hecho y acto jurídico, vid. GUASP DELGADO, JAIME: *Derecho procesal civil*, Tomo I, 3ª ed. corregida, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1973. El autor desglosa, de lo general a lo particular, las nociones de “hecho jurídico”, “aquel suceso o acaecimiento en virtud del cual se crea, sea modifica o se extingue una relación jurídica” (pág. 259); y de “hecho jurídico procesal”, “aquel suceso o acaecimiento por el cual se crea, modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal” (pág. 260); llegando así al “acto jurídico procesal”, que define como “aquel acto o acaecimiento, caracterizado por la intervención de la voluntad humana, por el que se crea, modifica o extingue alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal. Se deduce de este concepto que lo caracteriza, específicamente, a un acto cualquiera como acto procesal, es la clase de influencia o repercusión que produce. Cuando tal influencia o repercusión opera sobre un proceso, la calidad procesal del acto puede afirmarse en principio, y la inversa en caso contrario” (ídem).

FENECH NAVARRO, MIGUEL, por su parte, distingue entre presupuestos, requisitos y condiciones de los actos jurídicos, siendo los presupuestos aquellas circunstancias que, siendo independientes, anteriores y exteriores al acto mismo, deben concurrir para que sea admisible y eficaz; requisitos aquellas circunstancias coetáneas al acto que deben concurrir para que sea admisible; y condiciones, aquellas circunstancias posteriores a la realización del acto de las cuales depende su eficacia (*Derecho procesal penal*, tomo I, Barcelona, 1952, pág. 327).

¹⁴ PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, LEONARDO: *Cuestiones de Derecho procesal*, Reus, Madrid, 1947, pág. 65; idea reiterada en *Tratado de Derecho Procesal Civil. Proceso declarativo. Proceso de ejecución*, I, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 1985, pág. 555.

¹⁵ CHIOVENDA, GIOVANNI: *Principios de Derecho procesal civil* (traducción española de la tercera edición italiana -*Principii di diritto processuale civile*, 1913-, prólogo y notas de José Casais Santaló, 1922), Tomo II, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1977, págs. 257-258 (la cursiva es literal).

Por descontado que no hay duda de que los actos de comunicación son actos procesales y, como afirma GUTIÉRREZ CARBONELL, son “actos procesales de ordenación del desarrollo del procedimiento, decretados por el Juez o Secretario, y ejecutados por éste, el Oficial (Auxiliar) o Agente judicial”; precisamente porque participen de las características de los actos procesales, “se definen como actuaciones regladas de los sujetos del órgano jurisdiccional, partes, terceros, o meros interesados, realizadas en el procedimiento y que producen sus efectos directa o inmediatamente en el mismo”¹⁶. También cabe decir, como hacía MANRESA en 1881, que “estas diligencias pertenecen a la categoría de actuaciones judiciales”¹⁷, o RODRÍGUEZ MERINO, para quien “la actividad procesal de comunicación es una actividad del órgano jurisdiccional”¹⁸.

De los actos procesales es unánime en la doctrina la distinción o clasificación, básica o elemental, que atiende a su origen o sujetos que los producen, esto es, entre actos procesales del órgano judicial y actos procesales de las partes (PRIETO-CASTRO¹⁹, MORENO CATENA²⁰), aunque hay autores que añaden los actos procesales producidos por terceras personas (HERCÉ QUEMADA²¹, GARBERÍ LLOBREGAT²²). Comenzando por las partes, sus actos pueden subdividirse en peticiones (o actos de petición), alegaciones, actos de prueba y conclusiones (MORENO CATENA²³). Del órgano judicial se distingue entre actos jurisdiccionales, producidos por los jueces y magistrados como titulares de la potestad jurisdiccional y exteriorizada a través de sus resoluciones (providencias, autos y sentencias) y actos no jurisdiccionales, emanados de aquellos mismos cuando no ejercen aquella potestad (acuerdos) y de los actuales Letrados de la Administración de Justicia, antes Secretarios judiciales, también a través de sus resoluciones (diligencias de ordenación y decretos), encaminadas a dar cumplimiento a las determinaciones de aquellos y a la ordenación e impulso del procedimiento legalmente establecido. Los actos de comunica-

¹⁶ GUTIÉRREZ CARBONELL, MIGUEL: “Artículo 149” (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo II (Artículos 99 a 205), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 430-431.

¹⁷ MANRESA Y NAVARRO, JOSÉ MARÍA: *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo I, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1881, pág. 518.

¹⁸ RODRÍGUEZ MERINO, ABELARDO: “Artículo 149”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Dir.: LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA), TOMO I, Lex Nova, Valladolid, 2ª ed., noviembre 2000, pág. 989.

¹⁹ PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ: *Cuestiones...*, op. cit., pág. 73; *Tratado...*, op. cit. pág. 555; *Sistema de Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1989, pág. 125.

²⁰ MORENO CATENA, VÍCTOR: “Tema 13. Los actos procesales (II)” (VV.AA.: ALMAGRO NOSETTE, JOSÉ; GIMENO SENDRA, VICENTE; CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN; MORENO CATENA, VÍCTOR), *Derecho procesal*, Tomo I (Vol. I), Parte General Proceso civil (1), 6ª ed., Tirant lo Blanch, 1992, pág. 219.

²¹ HERCÉ QUEMADA, VICENTE: *Derecho procesal penal* (junto con Gómez Orbaneja, Emilio), 10ª ed., Madrid, 1984, pág. 128. El autor comenta una segunda clasificación “en atención a las distintas fases o etapas que integran el ciclo del proceso” y con la que “se clasifican los actos procesales en *actos de iniciación*, *actos de desarrollo* y *actos de conclusión*”; en la segunda de ellas estarían “las comunicaciones en general” (ídem).

²² GARBERÍ LLOBREGAT, JOSÉ: *Derecho procesal civil II*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 2012 pág. 209-10.

²³ MORENO CATENA, “Tema 13...”, op. cit., pág. 220-21.

ción son, en este sentido, actos de ejecución²⁴ de lo acordado en el proceso y están, por definición, incardinados en el ámbito de actuación del Letrado de la Administración de Justicia en tanto que emisor o sujeto activo mediato de los mismos, y en todo caso por estar bajo su dirección y responsabilidad última la ejecución material de los mismos, efectuada por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o, cuando las partes así lo pidan, por los procuradores (sujetos activos inmediatos).

Ubicados ya los actos de comunicación dentro de los actos procesales, cabe realizar su propia sistematización, pudiendo hacerse la misma desde diferentes perspectivas y dando como resultado numerosas clasificaciones posibles:

- **Según su objeto o finalidad:** Todos los actos de comunicación tienen un objeto o finalidad esencial que podríamos denominar “neutra”, consistente en poner en conocimiento de su destinatario una determinada resolución o actuación. Si junto a esa transmisión de conocimiento el órgano judicial pretende algo más, entonces habrá una finalidad inmediata y otra mediata, consistente la primera en hacer acto de presencia ante el destinatario y la segunda en reclamarle la realización de una actividad o la adopción de una actitud omisiva, unas veces con carácter conminatorio (una orden) o no (una petición a otro juzgado), pero en la generalidad de los casos con efectos procesales. Esta es la perspectiva que utiliza la LEC para efectuar su propia clasificación de actos de comunicación, así, en plural, pues en función de esas finalidades alcanza a conceptuar, no una *clase*, sino varias *clases* de actos de comunicación, que son las que relaciona en su art. 149, en virtud de las cuales informa al órgano judicial del nombre que ha de utilizar según quiera limitarse a dar noticia de una resolución o actuación, o interesar otra (*notificaciones* y *oficios*), llamar el proceso a una determinada persona en un determinado momento (*citaciones*) o plazo (*emplazamiento*), u ordenar una conducta, actividad o inactividad (*requerimientos* y *mandamientos*).
- **Según su destino:** La clasificación más frecuente en la doctrina, sin embargo, no es la que se refiere al objeto, sino al sujeto destinatario de los actos de comunicación. Así, BARONA VILAR distingue entre actos “hacia el exterior del órgano” y “hacia el interior del órgano”, los primeros para “poner en comunicación al tribunal tanto con las partes, como con terceros o interesados, y aún con otros tribunales o entidades públicas”, y los segundos referidos a “la dación de cuenta de los escrito y documentos presentados”, que “permite la comunicación desde el exterior hacia el tribunal (art. 178), efectuándose por el secretario judicial”²⁵. Es el mismo

²⁴ Entiéndase en el sentido de actos de ejecución material, no actos ejecutivos o actos del proceso de ejecución forzosa (Libro III de la LEC).

²⁵ BARONA VILAR, SILVIA: “Lección 23ª”, *Derecho jurisdiccional*, VV.AA. [MONTERO AROCA, JUAN; GÓMEZ COLOMER, JUAN LUÍS; MONTÓN REDONDO, ALBERTO; BARONA VILAR, SILVIA], 10ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 421.

prisma del que parte GUTIÉRREZ CARBONELL al hablar de actos de comunicación “internos o externos”, si bien entiende, al igual que nosotros, que los actos de comunicación “en sentido propio o estricto” son solo los actos de comunicación externa²⁶.

Partiendo de una idea parecida, PRADO ARDITTO realiza el siguiente esquema: “Actos de comunicación con los particulares (notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos)” y “Actos de comunicación con otros órganos jurisdiccionales y con autoridades y funcionarios (auxilio judicial)”²⁷. Y prácticamente la misma puede afirmarse que es la “clasificación tripartita” a la que llega GASCÓN INCHAUSTI: “a) Actos de comunicación con las partes. b) Actos de comunicación con otros órganos jurisdiccionales. c) Actos de comunicación con otras autoridades y funcionarios”²⁸.

En este grupo incorporaríamos los actos de comunicación personales (por carta; por cédula o copia en mano por funcionario o procurador; por medios telemáticos), por contraposición a los impersonales (edictos), distinguiendo dentro de los primeros los que tuvieran carácter personalísimo o no.

- **Según su estructura:** Siguiendo con GASCÓN INCHAUSTI, cabría diferenciar entre actos de comunicación “simples o puros”, caso de las notificaciones, pues “tienen por objeto único y exclusivo dar noticia a la/s parte/s de una resolución, diligencia o actuación”, y “complejos”, supuesto de los emplazamientos, las citaciones y los requerimientos, dado que “a través de ellos no sólo se busca dar noticia de una resolución, diligencia o actuación, sino que, además, se reclama –con mayor o menor intensidad, es decir, dirigiendo mandatos o constituyendo cargas- algún tipo de actividad de su destinatario”²⁹.
- **Según su forma:** Aquí se observaría si la exteriorización del acto de comunicación se realiza de modo oral o escrita. En nuestro Ordenamiento los actos de comunicación están comprendidos en la parte del procedimiento judicial que ha de ser necesariamente escrito, aun cuando la LEC 2000 haya reforzado la prevalencia del principio de oralidad, del que serían claros ejemplos los principios que del mismo derivan como son los de inmediación, concentración y publicidad³⁰. Si las resoluciones judiciales

²⁶ GUTIÉRREZ CARBONELL: “Artículo 149”, op. cit., pág. 431.

²⁷ PRADO ARDITTO, JUAN FERMÍN: “Los actos de comunicación y el auxilio judicial” (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985] Madrid, 1985, CGPJ, pág. 291.

²⁸ GASCÓN INCHAUSTI, FERNANDO: “Artículo 149”, en VVAA.: *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo I: Artículo 1 a 280*, Atelier, Barcelona, 2001, pág. 636.

²⁹ GASCÓN INCHAUSTI: “Artículo 149”, op. cit., págs. 637-638.

³⁰ Vid. MONTERO AROCA, JUAN: *Proceso (civil y penal) y Garantía. El proceso como garantía de libertad y de responsabilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 60 y ss.

civiles han de revestir por regla general la forma escrita (las sentencias en todo caso, art. 210.3), los actos en que se efectúa una determinada comunicación judicial se exteriorizan también de forma escrita, ya sea en el tradicional soporte papel, ya telemáticamente, pero en cualquier caso mediante el uso de la escritura, que queda consignada en documentos impresos o electrónicos (documentos digitales o digitalizados).

- **Otras clasificaciones:** Aún podrían identificarse otras clasificaciones o subclasificaciones derivadas de las anteriores: a) actos de comunicación intimatorios o no, según se haga uso con ellos del poder de coerción del órgano judicial; b) Unilaterales/unidireccionales o bilaterales/bidireccionales, así se espere o no una respuesta del destinatario; c) individuales o colectivos, atendiendo al número de sujetos a los que van dirigidos; d) únicos, simultáneos o coetáneos, sucesivos o alternativos, en función de su producción en el tiempo (v. gr., la notificación simultánea del auto y del decreto despachando ejecución, ‘rara avis’ en la LEC; el emplazamiento dirigido a varios lugares, a la vez o en función del fracaso de unos respectos a otros); e) de oficio o a instancia de parte; etc.

1.3.- PRINCIPIOS PROCESALES RECTORES DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

Los actos de comunicación están regidos en nuestro Ordenamiento por los siguientes principios esenciales:

A.- Principio de orden público: Los actos de comunicación tiene estatus de ‘ius cogens’, porque el Derecho procesal es, ante todo, Derecho público. Así pues, como actuaciones procesales que son, los actos de comunicación han de llevarse a cabo con escrupuloso respeto al principio de legalidad (art. 1³¹), y con carácter reglado, debiendo guardar una serie de requisitos de forma, tiempo y lugar. Dado su carácter imperativo, “escapan al poder dispositivo de las partes y del propio órgano judicial” (SÁNCHEZ CARRIÓN³²) y, como dijo la **STS 04.07.1996**³³:

“[...] dado que el cumplimiento de las formalidades en orden a notificaciones, citaciones y emplazamientos son de evidente orden público, y que las exigencias del art. 268 LEC han de ser cumplidas rigurosamente (sentencia del Tribunal Constitucional 39/1996, de 11 de marzo, Sala 2^a), ha de estimarse la queja de la recurrente” (F. D. 2^o).

B.- Principio de recepción o conocimiento formal: La finalidad de información antes mencionada de los actos de comunicación no solo se tiene por cumplida cuando se constata que el destinatario de los mismos ha tenido realmente co-

³¹ **Art. 1:** *En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.*

³² SÁNCHEZ CARRIÓN, JOAQUÍN LUIS: “Significación actual e incidencia en el proceso de la indefensión jurídico-constitucional”, *Revista del Poder Judicial* n.º 45, Primer trimestre 1997, CGPJ, Madrid, Epígrafe II (Colección Digital 2008, código PJ 9704510).

op. cit., con cita del autor a las SSTC 90/1986 de 02.07, 57/1988 de 05.04, 113/1990 de 18.07, 42/1992 de 30.03 y 173/1993 de 27.05].

³³ Roj: STS 4084/1996.

nocimiento del objeto o contenido de aquellos. Antes al contrario, existe otro factor que la condiciona o modula, que es el de la tutela de la propia parte demandante, que no puede quedar indefinidamente postergada, y que hace que rija la presunción de aquel conocimiento cuando se hayan respetado las normas reguladoras de estas actuaciones. Es la “observancia absoluta” de esos requisitos formales, decía PRIETO-CASTRO, “lo que permite a la ley dar por realizada (aunque sea una ficción) la notificación, no el hecho real del conocimiento del destinatario, pues ello entorpecería la marcha de la administración de justicia”³⁴. Nos hallamos ante el denominado “principio de la recepción” –o “regla de la recepción” (VILATA MENADAS³⁵)–, por contraposición al “principio del conocimiento”, y de ahí que se afirme que las comunicaciones procesales “surten efecto no según su eficacia material (que se reciba realmente la comunicación pretendida), sino según su regularidad formal (que se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos para su práctica)” (DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ LÓPEZ³⁶). Idéntica es la opinión de BARONA VILAR: “la validez del acto no depende de que el interesado haya obtenido real de la resolución, sino que se haya practicado con arreglo a lo dispuesto en la ley”³⁷. Este principio no es nuevo. CHIOVENDA ya lo enseñaba a principios del siglo pasado con la misma determinación³⁸.

En la LEC este principio está en la base del régimen de los actos de comunicación. La expresión más pura y directa de este principio se encuentra en el art. 155.4p1, que de forma valiente viene a decir –aunque luego lo matice– que cuando las partes no estuviesen representadas por procurador y se hiciesen las comunicaciones en determinados domicilios “oficiales” que el mismo precepto señala, las mismas *surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste la recepción por el destinatario*. En este caso el legislador se basa en unos domicilios que tienen un reconocimiento por el Derecho (padrón municipal, Registro Mercantil, Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc.) y que por seguridad jurídica se pretende que tengan una efectividad real y no meramente formal u oficial como para poder presumir que los destinatarios de las comunicaciones van a poder ser localizados en un alto porcentaje de casos en aquellos lugares por ellos mismos designados y que van a recibir aquello

³⁴ PRIETO-CASTRO y FERRÁNDIZ: *Tratado...*, op. cit., pág. 824.

³⁵ VILATA MENADAS, SALVADOR: “Actuaciones procesales: términos y plazos. Presentación de escritos y traslado de copias. Actos de comunicación. Documentación” (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, págs. 132.

³⁶ DE LA OLIVA, ANDRÉS, y FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL: *Derecho procesal civil II*, 4ª ed. (1ª reimprección), Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996, pág. 172 (Capítulo n.º 26: “Los actos de comunicación”); idem, GÓMEZ ORBANEJA, EMILIO: *Derecho Procesal Civil*, 8ª ed., vol. 1º, Madrid, 1979, pág. 211.

³⁷ BARONA VILAR: “Lección 23ª”, op. cit. pág. 428.

³⁸ CHIOVENDA: *Principios...*, op. cit., pág. 392-393. El autor daba cuenta de la fortaleza del principio de recepción: “no es necesario probar que éste haya tenido noticia del contenido del acto; y aun cuando se probare que éste no ha tenido noticia del él (por su incultura, por desconocer el idioma en que el acto viene escrito, porque no quiere recibirlo, porque lo ha perdido antes de leerlo, etc.), esto no tendría importancia jurídica” (pág. 393).

que se les remite, hasta tal punto que resulte innecesario preocuparse de tener constancia de aquella recepción. Otro ejemplo revelador es el de las comunicaciones telemáticas, en las que si consta la correcta remisión del acto en el “buzón electrónico” del destinatario, aunque el mismo no acceda a su contenido, *se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos* (art. 162.2p1).

Con el mismo planteamiento, si el factor “lugar” es lo importante, también puede serlo el factor “persona”. En el emplazamiento al demandado a través de un tercero, si se practica con las prevenciones del art. 161.3, particularmente la de la condición de ese receptor subsidiario (familiar, mayor de 14 años, persona con la que conviva, etc.), se presumirá que el destinatario va a recibir posteriormente la comunicación y, sin tener que esperar a confirmar que así haya sucedido, la ley hace surtir los efectos inherentes a la comunicación desde el hecho de la entrega a aquella persona.

Este principio fue asumido, ‘obiter dicta’, por el Tribunal Supremo. En **STS 08.04.1980**³⁹, consideró:

“[...] todos los actos judiciales de comunicación de resoluciones se rigen por el principio de la recepción y no por el principio del conocimiento efectivo; [...] si bien el acto de comunicación surte efecto sin que sea necesario que llegue forzosamente a conocimiento del mismo destinatario, ello es con la condición indispensable de que se hayan cumplido escrupulosamente los requisitos legales, y así, cuando no sea posible que la diligencia se entienda personalmente con el destinatario de ella y haya de practicarse mediante cédula, se exige para su validez, salvo que el notificado se dé por enterado en el juicio, se cumplan los requisitos que especifica el artículo 268 de la Ley Procesal Civil” (Considerando 3º).

Tesis que mantuvo en la **STS 17.05.1993**⁴⁰:

“El expresado motivo ha de ser desestimado, pues partiendo del supuesto de que los actos judiciales de comunicación de resoluciones se rigen por el principio de la recepción y no por el del conocimiento y que, en concordancia con ello, los requisitos que establece el artículo 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vienen establecidos en función de que quede debidamente constatada la identidad del receptor de la cédula, quien asume la obligación de entregarla al destinatario o destinatarios de la misma, al no haber sido éstos hallados en su domicilio. [...]” (F. D. 6º).

Y lo mismo en la **STS 26.05.1998**⁴¹:

“La jurisprudencia de esta Sala ha decretado, y es aplicable a la cuestión que nos ocupa, que los actos judiciales de notificación se rigen por el principio de recepción y no por el de comunicación (Sentencia de 17 de Mayo de 1.993), y debe de quedar suficientemente acreditada la identidad del testigo que interviene en la diligencia (Sentencias de 29-11-1984 y 4-7- 1996)” (F. D. 1º).

³⁹ Roj: STS 41/1980.

⁴⁰ Roj: STS 3045/1993.

⁴¹ Roj: STS 3437/1998.

No obstante, este principio no es del todo absoluto y genera importantes tensiones con el principio del conocimiento efectivo, de carácter prevalente a tenor de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, conforme veremos a lo largo del trabajo.

D.- Principio de fidelidad. Gracias a HERNÁNDEZ LÓPEZ podemos añadir este principio y los dos siguientes⁴². El de fidelidad se refiere a que “no puede ningún acto de comunicación introducir modificación alguna ni contener extremo que no se halle en la resolución judicial que lo acuerda”.

E.- Principio de celeridad, también señalado, junto al principio de *eficacia*, por JULVE GUERRERO⁴³, que se deduce del actual art. 151.1, entre otros, al disponer que todas las resoluciones se notifiquen *en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación*.

F.- Principio de simplicidad o economía de trámites, que afirma dicho autor deriva del anterior y que se trata de un principio “de carácter negativo, porque no impone eliminar trámites, sino que prohíbe practicar los superfluos o añadir los impertinentes”.

1.4.- NORMATIVA REGULADORA

Pese a su importancia capital, los instrumentos legales vigentes concernientes a los actos de comunicación con los que aunar a un tiempo el compromiso por una Justicia eficaz y sin dilaciones indebidas, pero también con el derecho a la defensa, son complejos y de difícil coordinación. Además de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como vertebradora del Derecho positivo de la materia en nuestro proceso civil, una gran variedad de regulaciones de diverso rango normativo tienen incidencia en las múltiples facetas de los actos de comunicación. De forma abreviada, este conjunto normativo sería el siguiente:

CUADRO NORMATIVO ACTOS DE COMUNICACIÓN 2015		
Constitución Española de 1978 (Art. 24)		
LEY PRINCIPAL: LEY 1/2000, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL		NORMAS RELACIONADAS
• Art. 1: Principio de legalidad procesal		▪ Art. 166.1 LEC.
Arts. 129-147	• Art. 129: Lugar de las actuaciones judiciales	▪ Arts. 268-269 LOPJ.
	• Art. 130: Días y horas hábiles. • Art. 131: Habilitación de días y horas inhábiles	▪ Arts. 182-184 LOPJ.

⁴² HERNÁNDEZ LÓPEZ: “La notificación normalizada”, op. cit., pág. 343-44.

⁴³ JULVE GUERRERO, INMACULADA: “Actos de comunicación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El nuevo papel de los procuradores en el proceso” [Ponencia impartida en el Curso “Ley de Enjuiciamiento Civil, 7ª Edición”, -2000-], *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000, pág. 330.

	· Arts. 132, 133: Plazos y términos. Cómputo de los plazos	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 185 LOPJ.▪ Art. 5 CC.
	· Art. 142: Lengua oficial	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 231 LOPJ.▪ Ley 1/1996, de <i>Asistencia Jurídica Gratuita</i> (traducción en litigios transfronterizos).

← Arts. 149-168: DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL (Libro I, Título V, Capítulo V) →	Art. 149	Clases de actos de comunicación	
	Art. 150	Notificación de Resoluciones y diligencias de ordenación	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 270 LOPJ.
	Art. 151	Tiempo de la comunicación	<ul style="list-style-type: none">▪ Circular 1/2001, de 05.04, de la Fiscalía General del Estado, <i>sobre la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles</i> (Aptdo. III).▪ Ley 52/1997, de <i>Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas</i> (art. 11), + Reglamento del Servicio Jurídico del Estado (RD 997/2003, art. 35).
	Art. 152	Forma de los actos de comunicación	<ul style="list-style-type: none">▪ Arts. 271, 477.a), 478.a) y 543.2 LOPJ.▪ Instrucción 2/2008, Sec. Gob. TSJ <i>Cataluña para la unificación de prácticas en la realización de los actos de comunicación en la jurisdicción civil</i>.
	Arts. 153-154	Comunicación por medio de procurador	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 272 LOPJ.▪ RD 1281/2002, <i>por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España</i> (arts. 1, 39.d, 65.k, 68.1.b, 73.1 y 74.1).
	Art. 155	Comunicación con partes no personadas	<ul style="list-style-type: none">▪ Ley 7/1985, de <i>Bases de Régimen Local</i>, + Reglamento de Población y Demarcación Territorial (RD 1690/1986) (padrón municipal).▪ RDLeg. 1/2002, <i>TR de la Ley de Sociedades de Capital</i>.▪ RD 1784/1996, <i>Reglamento del Registro Mercantil</i>.
	Art. 156	Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio	<ul style="list-style-type: none">▪ Convenios varios de colaboración entre el CGPJ y diversas administraciones y organismos públicas en materia de cesión de información.- AEAT: Convenio de colaboración entre el CGPJ, el Mº de Justicia y la Agencia Estatal de Admón. Tributaria <i>en materia de cesión de información tributaria por la AEAT a Juzgados y Tribunales</i>, de 07.09.2010.
	Art. 157	Registro Central de Rebeldes Civiles	<ul style="list-style-type: none">▪ RD 95/2009, <i>por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia</i>.
	Art. 159	Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que sean parte en el juicio	<ul style="list-style-type: none">▪ Arts. 192-193 LOPJ y art. 292 LEC (multas por incomparecencia).▪ Art. 247.3 LEC (mala fe en los profesionales intervinientes).

	Art. 160	Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal + Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales (RD 1829/1999). ▪ Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas (art. 11) + Reglamento del Servicio Jurídico del Estado (RD 997/2003, art. 35). ▪ Consulta n.º 3/1994, de la FGE, sobre las notificaciones por correo al Ministerio Fiscal.
	Arts. 158-161	Comunicación por medio de entrega	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrucción de 21.05.2008 Sec. Gob. Cdad. Valenciana sobre adopción de medidas para la protección de los datos de carácter personal con ocasión de la práctica de actos de comunicación de forma personal.
	Art. 162	Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley 59/2003, de firma electrónica. ▪ Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. ▪ RD 84/2007, sobre implantación en la Admón. de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. ▪ Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. ▪ Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (régimen transitorio). ▪ Orden JUS/1126/2015, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia. ▪ Circular 2/2015, del SGAJ, relativa a la entrada en funcionamiento del Portal Electrónico de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. ▪ Circular 3/2015, del SGAJ, relativa a las nuevas funcionalidades de la Sede Judicial Electrónica de los órganos judiciales del territorio dependiente del Ministerio de Justicia y el Portal de la Administración de Justicia. ▪ Protocolo marco de actuación para la implantación del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet (Mº de Justicia, 2008). ▪ Convenios de cooperación del Mº de Justicia con diversas Comunidades Autónomas para la implantación del sistema Lexnet. ▪ Protocolos, Instrucciones y Circulares varias dictadas por el Ministerio de Justicia, gobiernos autonómicos, Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y Secretarías Coordinadoras Provinciales de diversos territorios sobre Lexnet⁴⁴.

⁴⁴ Un buen número de estas reglamentaciones pueden encontrarse en la dirección de Internet del Ministerio de Justicia “<https://www.administraciondejusticia.gob.es>”, apartado “marco normativo”.

			<ul style="list-style-type: none"> - Ámbito no transferido (“ámbito Ministerio”⁴⁵): <ul style="list-style-type: none"> ○ Instrucción 2/2014, de 19.03, de la Sec. Gral. de la Admón. de Justicia, <i>relativa a la puesta en marcha de la funcionalidad de presentación de escritos y documentos y traslado de copia a través del sistema Lexnet.</i> ○ Castilla y León: Instrucción 2/2008, de 14.11, del Sec. Coord. Prov. Zamora, <i>de armonización de prácticas en el uso de la aplicación Lexnet en Zamora</i>; Instrucción 1/2009, de 20.05, del Sec. Prov. Ávila, <i>sobre utilización del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para realización de acto de comunicación procesal por medios telemáticos.</i> ○ Ceuta: Instrucción de servicio 1/2011, de 03.03, de la Sec. Gob. TSJ Andalucía, Ceuta y Melilla, <i>sobre la aplicación de comunicaciones telemáticas Lexnet.</i> ○ Murcia: Instrucción 2/2014, 05.06, de la Sec. Gob. TSJ Región de Murcia, <i>sobre implantación integral del sistema de comunicaciones Lexnet con colectivos profesionales que relacionan con la Administración de Justicia.</i> - Andalucía: <i>Protocolo de funcionamiento del sistema telemático de presentación de escritos y emisión de actos de comunicación procesal</i>, de 11.01.2008, suscrito por el CGPJ, el Gobierno de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores. - Cantabria: <i>Protocolo de funcionamiento para el envío y recepción de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en el ámbito de la Admón. de Justicia en Cantabria</i>, de 24.02.2012, aprobado por el TSJ de Cantabria, el Gob. de Cantabria y el Ilustre Colegio de Proc. de Cantabria. - Comunidad Valenciana: Instrucción 1/2009, de 06.02, del Sec. Coord. Prov. Castellón, <i>para la puesta en marcha, de forma efectiva, del sistema de notificaciones electrónicas Lexnet en los órganos unipersonales del orden jurisdiccional civil del partido judicial de Castellón de la Plana.</i> - Navarra: <i>Protocolo de Funcionamiento para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias a las partes y el envío de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en el ámbito de la Admón. de Justicia en Navarra</i> (Gob. de Nava-
--	--	--	--

⁴⁵ Expresión coloquial forense junto a la de “territorio” o “zona” “Ministerio” que se refiere a aquellos territorios gestionados por el Ministerio de Justicia por no haberse transferido las competencias en materia de medios materiales y humanos para el funcionamiento de la Administración de Justicia (en torno al 20% de las unidades judiciales). Hasta la fecha (noviembre de 2015) son los siguientes: Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia; Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; y, como es de suponer, los órganos centrales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Menores, Registro Civil Central), además de las Fiscalías.

			<p>rra).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reglamentos internos de los Colegios de Procuradores de organización del Servicio de notificaciones y traslados telemáticos⁴⁶. ▪ Instrucción 2/2003, 26.02, del CGPJ, <i>por el que se aprueba el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informático al servicio de la Administración de Justicia</i>.
	Art. 163	Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 272 LOPJ. ▪ Reglamento 1/2005 del CPGJ, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (arts. 103-106: "Servicios Comunes Procesales"). ▪ Reglamento 2/2010, del CGPJ, <i>sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los SS.CC. Procesales</i> (Acuerdo de 25.02.2010 del Pleno). ▪ Protocolos, Instrucciones y Circulares varias dictadas por las Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y las Secretarías Coordinadoras provinciales de diversos territorios: <ul style="list-style-type: none"> - Andalucía: Protocolo <i>sobre normas marco de actuación en la organización de los SS.CC. de Notificaciones y Embargos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía</i> (Acuerdo TSJA 18.12.2007); Orden de 20.07.2005 de la Consej. Just. y Admón. Andalucía, <i>por la que se aprueba la Carta de Servicios del S.C.N.E. de los Jzdos. de Sevilla</i>. - Asturias: Instrucción 1/2009, de la Sec. Gob. TSJ Asturias, Protocolo de actuación para los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Asturias. - Baleares: Circular 1/2009, Sec. Coord. Prov. Mallorca, <i>sobre Funcionamiento del S.C.N.E. de Palma</i>. - Cataluña: Circular 1/2009 de la Secretaría Coordinadora Provincial de Barcelona, <i>sobre la forma en que actuarán los Servicios Comunes Procesales Generales en la práctica de los actos de comunicación civiles que les sean encomendados</i>. - Madrid: Instrucción 3/2008, del Sec. Coord. Prov. Madrid, <i>en relación con la ordenación de reglas de actuaciones en el cumplimiento de las notificaciones por el S.C.A.C.E.</i>
	Art. 164	Comunicación edictal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 236 LOPJ. ▪ RD 181/2008, <i>de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»</i>. ▪ Instrucción 6/2012, de 14.12, de la Sec. Gral. Admón. Justicia (Mº de Justicia), <i>relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos</i>. ▪ Resolución de la Agencia Estatal BOE de 17.02.2010 <i>por la que se crea la sede electrónica y el registro</i>

⁴⁶ Vid., v. gr. **Galicia**: A Coruña: *Reglamento de organización del servicio de recepción de notificaciones y traslado previo de copias de escritos y documentos telemáticas mediante el sistema Lexnet del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña* (de 14.05.2009).

			<i>electrónico de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.</i>
	Art. 166	Nulidad y subsanación de los actos de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Arts. 225-231 LEC. Arts. 238 a 243 LOPJ.
	Art. 167	Remisión de oficios y mandamientos	<ul style="list-style-type: none"> Ley Hipotecaria + Reglamento Hipotecario. LEC, art. 162 (medios electrónicos) Ley 18/2011, art. 33.6.
	Art. 168	Responsabilidad de los funcionarios y profesionales intervinientes en la comunicación procesal	<ul style="list-style-type: none"> Arts. 534 a 540 LOPJ. RD 796/2005, Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia. RD 1281/2002, <i>por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España</i> (arts. 4 y 57 a 76).
Arts. 169-177	Arts. 169-176. Del auxilio judicial [+ Art. 165 : “Actos de comunicación mediante auxilio judicial”]		<ul style="list-style-type: none"> Arts. 273-274 LOPJ. Reglamento 1/2005 del CPGJ, <i>de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales</i> (arts. 64-73). Instrucción 4/2001, del CGPJ, <i>sobre el alcance y los límites del deber de auxilio judicial</i>. Circular 1/2012, Sec. Gral. Admón. Justicia, <i>relativa a la utilización obligatoria del servicio de intercambio telemático de exhortos del Punto Neutro Judicial del CGPJ</i>.
	Art. 177. Cooperación judicial internacional.		<ul style="list-style-type: none"> Arts. 276-278 LOPJ. Ley 29/2015, <i>de cooperación jurídica internacional en materia civil</i> (arts. 5 y 20 a 27). Reglamento (CE) 1393/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, <i>relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil</i>. Otros convenios internacionales multilaterales y bilaterales. Reglamento 1/2005 del CPGJ, <i>de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales</i> (arts. 74-85: “La cooperación jurisdiccional internacional”). Instrucción 2/2009, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, <i>relativa al fomento de la cooperación jurídica internacional</i>.
≈	Especialidades varias		<ul style="list-style-type: none"> Régimen de notificaciones con el demandado rebelde (arts. 496-498). Juicio verbal de desahucio. Proceso de ejecución forzosa. Proceso monitorio y juicio cambiario.

La norma principal en materia de actos de comunicación procesal en la jurisdicción civil se encuentra residenciada en la **Ley 1/2000**, de 7 de enero, *de Enjuiciamiento Civil*⁴⁷ (en adelante, “LEC”), principalmente en su Libro I, cuyo Capítulo

⁴⁷ BOE de 08.01.2000 (c-e, 14.04.2000 y 28.07.2001). Entró en vigor el 08.01.2001 (D. F. 27ª).

V lleva por rúbrica “De los actos de comunicación judicial” y comprende los artículos 149 a 168. La actual ley procesal civil supuso un gran avance respecto de su predecesora de 1881, presentándose como la solución a las deficiencias que padecía aquella y haciendo gala en su Exposición de Motivos de que los actos de comunicación *son regulados con orden, claridad y sentido práctico* (Aptdo. IX), afirmación un tanto pretenciosa que ya fue objeto de crítica al tiempo de su aprobación⁴⁸. Lo cierto es que la LEC, pese a las numerosas reformas realizadas desde su promulgación⁴⁹, presenta una regulación notablemente fragmentada, confusa y dispar, con demasiadas remisiones entre artículos que hace que la lectura de un único precepto resulte incómoda e incompleta, y que solo mediante un concienzudo estudio de conjunto sea posible alcanzar un entendimiento correcto de sus postulados, por no hablar de una vocación de generalidad que a veces no se concilia con las especificidades de determinados procedimientos.

Hasta la fecha, de las más de cincuenta reformas que en quince años se han realizado en la LEC⁵⁰, quince han incidido con mayor o menor repercusión en los actos procesales de comunicación civil:

⁴⁸ Así, JULVE GUERRERO, quien mostraba su “doble sorpresa, por un lado, ante la seguridad que el legislador de su propio trabajo, utilizando los términos «orden, claridad y sentido práctico» deja evidenciado el hecho de considerar que la regulación de los actos de comunicación es completa y satisfactoria, dejando aparte que por talante personal ese tipo de manifestaciones nos parecen inapropiadas por cuanto todo puede ser mejorado; es asimismo constatable que no todo han sido aciertos y que se adolece de imprecisiones técnicas en su regulación” (“Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 328).

Por su parte, ROIG VALDIVIESO, JOSÉ LUÍS, comentaba, con cierta perspicacia, que “a estas alturas de la fecha de entrada en vigor de la ley es seguro que la mayoría ya se habrá formado una idea acerca de si esa primera afirmación de la Exposición de Motivos se ha logrado o no. Como ejemplo de tal claridad se puede señalar el art. 158 (se nos dice en el mismo cómo tendremos que actuar cuando se produzca un determinado supuesto reglado en otro artículo; y esa forma de actuar, a su vez, se indica en otro)” (“Las actuaciones judiciales. Actuaciones y caducidad de la instancia. Lugar, tiempo y forma. Fe pública judicial y documentación de las actuaciones. Actos de comunicación y auxilio judicial. Resoluciones judiciales y diligencias de ordenación”, *Presupuestos, actos procesales, recursos y ejecución en la LEC 1/2000*”, Curso del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), edición digital, 2001, pág. 87).

⁴⁹ Incluso antes, con el Proyecto de Ley de 1998, igual, en lo esencial, al resultado final, ya se había dicho que “en lo tocante a los actos de comunicación [...], el PLEC introduce diversas aportaciones acertadas en este ámbito, pero la regulación sigue siendo excesivamente compleja” [CACHÓN CADENAS, MANUEL: “Jurisdicción, partes y actos procesales”, *Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo I (Dir.: BARBANCHO TOVILLAS, FRANCISCO JOSÉ), Estudios de Derecho Judicial n.º 17/1999, CGPJ, Madrid, 2000, pág. 382].

⁵⁰ Leyes 39/2002, 22/2003, 41/2003, 42/2003, 59/2003, 60/2003, LO 19/2003, RDLeg. 8/2004, LO 1/2004, 15/2005, 16/2006, 19/2006, LO 3/2007, 15/2007, 41/2007, 54/2007, 13/2009, 19/2009, 29/2009, 4/2011, 11/2011, 16/2011, RD-ley 8/2011, 20/2011, RD-ley 12/2011, 37/2011, 38/2011, 5/2012, 10/2012, RD-ley 3/2013, 1/2013, 4/2013, 8/2013, RD-ley 3/2013, RD-ley 7/2013, RD-ley 4/2014, 3/2014, 14/2014, RD-ley 11/2014, 21/2014, 9/2015, 15/2015, 19/2015, LO 7/2015, 26/2015, 29/2015, LO 8/2015, 35/2015, 42/2015 y LO 16/2015.

MODIFICACIONES DE LA LEC EN MATERIA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 2001-2015	
LEY	ARTÍCULOS AFECTADOS (Objeto)
Ley 22/2003 , de 09.07 ⁵¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arts. 463, 472 y 482: Introduce en los recursos devolutivos (salvo el de queja) el emplazamiento formal a las partes para que se personen ante el órgano ‘ad quem’, estableciendo asimismo un término para ello (10 días en apelación; 30 días en extraordinario por infracción procesal y en casación).
Ley 23/2003 , de 10.07 ⁵²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 155 y 161: Introduce el inmueble arrendado como domicilio hábil a efectos de actos de comunicación en el juicio verbal de desahucio del art. 250.1 (aptdo. 3p2 art. 155 y aptdo. 3 art 161). ▪ 440: Introduce la obligación de incluir en la citación al demandado a juicio verbal del desahucio por falta de pago el apercibimiento de que se declarará el desahucio sin más trámites si no comparece a la vista de juicio verbal (aptdo. 3).
Ley Org. 19/2003 , de 23.12 ⁵³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 143: Introduce la posibilidad de habilitar intérprete a cualquier persona cuando fuere preciso dar a conocer personalmente alguna resolución a quien no conozca el castellano ni la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma. ▪ Disp. Ad. 5ª (nueva): Crea las <i>Oficinas de Señalamiento Inmediato</i>.
Ley 15/2007 , de 03.07 ⁵⁴	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 212/404/461/465: Se introducen “diversos mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación de los órganos administrativos con los judiciales” (Preámbulo) en particular con la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Ley 41/2007 , de 07.12 ⁵⁵	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 135: Mejoras técnicas en la regulación de la <i>presentación de escritos</i>. ▪ 151: Mejoras técnicas en cuanto al <i>tiempo de la comunicación</i>. ▪ 154: Mejoras técnicas respecto al <i>lugar de comunicación de los actos a los procuradores</i> (aptdo. 2). ▪ 162: Mejoras técnicas de los <i>actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares</i>.
Ley 54/2007 , de 28/12 ⁵⁶	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 164: Añade el actual párrafo 3º para obligar a omitir en los edictos los datos personales de los menores u otras circunstancias que pudieran permitir su identificación.
Ley 13/2009 , de 03.11 ⁵⁷	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26: Añade el ordinal 8º para establece la obligación del Procurador de realizar actos de comunicación <i>que su representado le solicite</i> (aptdo. 2). ▪ 149: Adaptaciones menores del texto relativo a <i>clases de actos de comunicación</i> a la Ley 55/1999, la LO 19/2003 y a la nueva distribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales. ▪ 150: Adaptación puntual al nuevo concepto de <i>resoluciones procesales</i>; mejora técnica menor en la notificación a terceros de la pendencia del proceso (sustituye

⁵¹ Ley 22/2003, de 9 de julio, *Concursal* (BOE de 10.07).

⁵² Ley 23/2003, de 10 de julio, *de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo* (BOE de 11.07).

⁵³ Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, *de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial* (BOE de 26.12).

⁵⁴ Ley 15/2007, de 3 de julio, *de Defensa de la Competencia* (BOE de 04.07).

⁵⁵ Ley 41/2007, de 7 de diciembre, *por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria* (BOE de 08.12).

⁵⁶ Ley 54/2007, de 28 de diciembre, *de Adopción internacional* (BOE de 29.12; D. F. 2ª. Dos).

⁵⁷ Ley 13/2009, de 3 de noviembre, *de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial* (BOE de 04.11). En el cuadro no incluimos las numerosas modificaciones puntuales en las que se sustituye la palabra “tribunal” por “Secretario judicial” consecuencia de la distribución y aclaración de competencias entre Jueces o Magistrados y Secretarios judiciales operada por dicha Ley; tampoco las sustituciones de “tribunal” por “oficina judicial” conforme al nuevo modelo introducido por LO 19/2003.

- “sentencia que en su momento se dicte” por “resolución que ponga fin al proceso”).
- **152:** Desapodera al Secretario judicial de la ejecución material de los actos de comunicación; atribuye dicha competencia al *procurador de la parte que así lo solicite, a su costa*.
 - **155:** Introduce la obligación de hacer constar en la cédula de emplazamiento o citación *el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla* (aptdo. 1); incorpora la *dirección de correo electrónico* como uno más de los *instrumentos de comunicación con la Oficina judicial* (aptdo. 5).
 - **156:** Atribuye al Secretario judicial la competencia para utilizar los medios de averiguación sobre el domicilio del demandado (sustituyendo el anterior e impersonal “se utilizarán”) (aptdo. 1); subsana el error en la remisión al art. 152 (apartado 2 en lugar de al 1) (aptdo. 3); precisa que sea el Secretario judicial quien ordene la comunicación por edictos (antes, simplemente, “se llevará a cabo”) (aptdo. 5).
 - **157:** Mejoras técnicas en la regulación del *Registro Central de Rebeldes Civiles*.
 - **160:** Se adapta a la nueva competencia del procurador ex art. 152 incorporando la *documentación aportada* por él que acredite la *constancia de la recepción* (aptdo. 1).
 - **161:** Se adapta al art. 152 (aptdos. 1, 2, 3 y nuevo 5); elimina la “amonestación” al destinatario que se niegue a recibir la comunicación o a firmar la diligencia (aptdo. 2); añade “o persona con la que conviva” a los posibles receptores subsidiarios y sustituye “destinatario de la misma” por “destinatario de ésta” (aptdo. 3); regula la circunstancia del acto de comunicación infructuoso realizado por el procurador (aptdo. 5).
 - **162:** Potencia la efectividad de las comunicaciones telemáticas a los procuradores; si no acceden al servicio de notificaciones en tres días, *se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legamente*, sin que proceda, como desde la reforma de 2007, a la entrega vía art. 161, salvo en caso de errores técnicos (aptdo. 1p4).
 - **163:** Se adapta a la nueva nomenclatura de la NOJ (sustituye “Servicio Común de Notificaciones” por “Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación”) y a la nueva función de los procuradores como ejecutores de los mismos.
 - **164:** Introduce la posibilidad de utilizar *medios telemáticos, informáticos o electrónicos*.
 - **165:** Se adapta a la nueva función de los procuradores, permitiendo que las comunicaciones que de otro modo habrían de practicarse por exhorto, se puedan realizar alternativamente por ellos.
 - **168:** Corrige la falta de adaptación a la nueva denominación de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia introducida por LO 19/2003, sustituyendo “oficial, auxiliar o agente” por el más genérico “el funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia”.
 - **177:** Añade “en las normas comunitarias que resulten de aplicación”.
 - **212:** Precisa que será el Secretario judicial quien ordene la notificación y archivo de las sentencias y demás resoluciones definitivas; suprime “en la Secretaría del tribunal” (aptdo. 1).
 - **212/404/465:** Introduce determinadas comunicaciones que el Secretario judicial ha de realizar la Comisión Nacional de la Competencia en los procedimientos que refiere (traslado de la resolución que admita la demanda, art. 404.3 y comunicaciones relativas a la sentencia (arts. 212.3 y 465.5 y 6).
 - **496:** Precisa que será el Secretario judicial quien declara en rebeldía al demandado, salvo los supuestos en que corresponda al Tribunal (aptdo. 1).
 - **497:** Relaja el requisito de notificación en Boletines oficiales de la sentencia al demandado en paradero desconocido a la mera publicación de *un extracto de la misma* (aptdo. 2) y hace meramente potestativa su publicación en dichos medios cuando la sentencia no tenga efectos de cosa juzgada, bastando en su lugar el edic-

	<p>to en el tablón de anuncios de la Oficina judicial (nuevo aptdo. 3); introduce la alternativa de la publicación telemática, informática o electrónica (nuevo aptdo. 4).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 500: Corrección menor (añade “Boletín Oficial”); se adapta a la previsión en la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos del art. 497. ▪ 660: Mejora técnica en la comunicación a los acreedores posteriores de la existencia de la ejecución (la certificación de dominio y cargas <i>deberá expresar la realización de dichas comunicaciones</i> (aptdo. 1). ▪ 663/664: Añade la posibilidad de que el procurador del ejecutado practique el requerimiento al ejecutado de presentación de los títulos de propiedad; aclara que el Secretario judicial, en caso de negativa del anterior, podrá facultar al procurador para obtener por sí los títulos de los registros o archivos en que se encuentren, si fueran públicos. ▪ 686: Autoriza legalmente el requerimiento de pago por edictos al deudor cuando resulte <i>intentado sin efecto en el domicilio que resulte del Registro</i> (nuevo aptdo. 3). ▪ 691: Corrección gramatical en el plazo mínimo para anunciar la subasta (“por lo menos” por “al menos”); se adapta a la novedad de la publicación edictal del art. 686.3. ▪ 815: Aclara que solo cabe el requerimiento de pago por edictos en monitorios de Comunidad de Propietarios (aptdo. 1). ▪ Disp. Ad. 5ª: Modifica la regulación de las <i>Oficinas de Señalamiento Inmediato</i>.
Ley 19/2009, de 23.11 ⁵⁸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 153: Actos de comunicación en juicio verbal de desahucio por falta de pago o por expiración del plazo (aptdo. 3) ▪ 155: Introduce la vivienda o local arrendado como domicilio por defecto hábil para actos de comunicación; introduce el domicilio de los administradores y representantes de la sociedad como lugar hábil para comunicaciones con ésta (aptdo. 3). ▪ 497: tratándose de sentencias condenatorias de desahucio por falta de pago o expiración del plazo, lo reduce a la simple fijación del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial (nuevo aptdo. 3).
Ley 4/2011, de 24.03 ⁵⁹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 813: Añade un párrafo 3º para acabar con los monitorios “ambulantes”; si no se puede requerir de pago al deudor ex art. 161 y las averiguaciones domiciliarias son infructuosas o se le encuentra en otro partido judicial, se archiva el proceso (regla no aplicable a los monitorios de Comunidad de Propietarios).
Ley 37/2011, de 10.10 ⁶⁰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 26: Nueva modificación del ordinal 8º para prever que el Procurador realice los actos de comunicación, no solo cuando los solicite su representado, también cuando <i>en interés de éste</i> así lo acuerde el Secretario judicial (aptdo. 2). ▪ 440: Introduce la “monitorización del desahucio” por falta de pago (aptdos. 3 y 4).
Ley 5/2012 de 10.10 ⁶¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 414/440: Introduce el deber información a las partes en el emplazamiento (juicio ordinario) o citación (juicio verbal) <i>de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación</i>.
Ley 1/2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 668: Amplia la publicidad de la subasta a un nuevo <i>portal de subastas electrónicas existentes y dependientes del Ministerio de Justicia</i>.

⁵⁸ Ley 19/2009, de 23 de noviembre, *de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios* (BOE de 24.11).

⁵⁹ Ley 4/2011, de 24 de marzo, *de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía* (BOE de 25.03).

⁶⁰ Ley 37/2011, de 10 de octubre, *de medidas de agilización procesal* (BOE de 11.10).

⁶¹ Ley 5/2012, de 6 de julio, *de mediación en asuntos civiles y mercantiles* (BOE de 07.07).

de 14.05 ⁶²	
Ley 4/2013, de 04.06 ⁶³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 164: Cuarta modificación del precepto (Leyes 54/2007, 13/2009 y 19/2009) para añadir la cédula <i>de requerimiento</i> a fijar por edicto en caso de desahucio por falta de pago o por expiración del plazo. ▪ 440: Modifica (a peor) el requerimiento del desahucio por falta de pago. ▪ 497: Elimina la obligación de publicación edictal en los boletines oficiales de la sentencia de desahucio por falta de pago con acumulación de rentas.
Ley 19/2015, de 13.07 ⁶⁴	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 551: Introduce nuevas comunicaciones de carácter recíproco entre el órgano judicial y el Registro Público Concursal respecto a las ejecuciones singulares de deudor persona física o jurídica (aptdo. 3). ▪ 645: Establece el BOE como lugar de anuncio de las subastas –a costa del ejecutado (aptdo. 3)–, <i>sirviendo de notificación al ejecutado no personado</i>, publicándose igualmente en el <i>Portal de la Administración de Justicia</i>, pero solo a efectos informativos (aptdo. 1). ▪ 646/668: Regula el contenido del anuncio de la subasta en el BOE y en el <i>Portal de Subastas</i> (aptdo. 1). Instauro, ya obligatoriamente, la <i>subasta electrónica</i>. ▪ 656: Introduce la información continuada del Registrador al Secretario judicial y al <i>Portal de Subastas</i> sobre los títulos posteriores a la certificación de cargas (aptdo. 2). ▪ 657: Reduce de veinte a diez días el plazo para informar de las cargas anteriores (aptdo. 3). ▪ 660: Facilita la constancia de los domicilios, de los titulares de cargas y derechos, pudiendo emplearse medios telemáticos y sin necesidad de acta notarial (aptdo. 1). ▪ 661: Introduce la posibilidad de practicar por el procurador la notificación y requerimiento a los arrendatarios y ocupantes de hecho; insiste en que la situación posesoria se exprese en el Portal de Subastas (aptdo. 1). ▪ 667: Introduce la obligación de expedir por los Registro de la Propiedad una <i>información registral electrónica y permanentemente actualizada</i> referida a la finca subastada, incluida en su caso las <i>bases gráficas</i>, y que <i>será servida a través del Portal de Subasta</i> (aptdo. 2). ▪ 682: Introduce la <i>dirección electrónica</i> como domicilio hipotecario (aptdo. 2). ▪ 683: Relaja el modo de inscribir los cambios del domicilio hipotecario, introduciendo otros medios, incluso el electrónico (aptdo. 2). ▪ 685: En caso de continuación de la ejecución ex art. 579.1, introduce la obligación de haber notificado la <i>demanda ejecutiva inicial</i> hipotecaria a los nuevos ejecutados (fiadores). (nuevo aptdo. 5). ▪ 686: Mejora el trámite de requerimiento de pago hipotecario: elimina al vecino como posible receptor del requerimiento previo notarial y del judicial (aptdo. 2); sucumbe al criterio del TC de tener que agotar las medidas de localización del deudor (a pesar de tratarse de la ejecución hipotecaria) (aptdo. 3). ▪ 688: Exige que en la Certificación de cargas conste <i>inserción literal de la inscripción de hipoteca</i>, con lo que ya se podrá conocer el domicilio hipotecario que, en su caso, se haya pactado e inscrito (aptdo. 1). ▪ 691: Introduce la obligación del Registrador de la Propiedad de notificar a la Oficina judicial la <i>inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada</i>, así como su afección o no a la actividad del deudor (aptdo. 5).

⁶² Ley 1/2013, de 14 de mayo, *de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social* (BOE de 15.05).

⁶³ Ley 4/2013, de 04 de junio, *de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas* (BOE de 05.06).

⁶⁴ Ley 19/2015, de 13 de julio, *de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil* (BOE de 14.07).

<p>Ley 42/2015 de 05.10⁶⁵</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23: Aclara que la no preceptividad de procurador en los juicios verbales se refiere a los que son por razón de la cuantía y no supera 2.000 euros (aptdo. 2.1^º) (ídem art. 31 respecto a los abogados); se potencia la figura de procurador y se le otorga capacidad de certificación en los actos de comunicación que practique (nuevo aptdo. 5); ▪ 152: Obliga al demandante a expresar al inicio del proceso si interesa la práctica de los actos de comunicación por su procurador; incorpora la <i>dirección electrónica</i>, la <i>comparecencia electrónica</i> y otros medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario como lugares hábiles (aptdo. 1); introduce precisiones en el contenido de las cédulas (aptdo. 4). ▪ 155: Añade la <i>dirección de correo electrónico o similares</i> del demandado como un dato más a aportar por el actor en su demanda (aptdo. 2). ▪ 159: Prevé que el procurador pueda también realizar las comunicaciones a testigos, peritos y otras personas no partes en juicio. ▪ 161: Introduce la entrega <i>en sobre cerrado</i> y se acentúa la protección de datos en la comunicación personal a terceros receptores (aptdo. 3); suprime la necesidad de testigos u otros medios de prueba en las comunicaciones con dichos terceros practicadas por el procurador (anterior aptdo. 5). ▪ 162: Modifica el régimen de las comunicaciones telemáticas, que pasa a ser prioritario y obligatorio para los órganos judiciales y determinados colectivos. ▪ 165/167/172: Obliga a la remisión telemática de los exhortos, los mandamientos y los oficios, salvo que lo solicite el procurador; elimina la nota de territorialidad de este, ya desaparecida con la Ley “Ómnibus”. ▪ 438 y concordantes: Introduce la contestación escrita en el juicio verbal y la posibilidad de no celebrar vista, afectando con ello a un buen número de preceptos, que precisan ser adaptados a esta nueva fórmula. ▪ 551: Se adapta a la posibilidad de que el requerimiento de pago lo practique el procurador del ejecutante (aptdo. 3).
---	---

2.- ASPECTOS COMUNES DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL CIVIL

2.1.- CLASES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN EN LA LEC

Nuestra LEC realiza una distinción entre las *formas* en que han de efectuarse los actos de comunicación y las *clases* de dichos actos de comunicación, o lo que es lo mismo, las distintas modalidades que tiene el juzgado o tribunal de manifestarse. A enunciarlas y a definir las sucintamente se dedica el art. 149 con la rúbrica “clases de actos de comunicación” y con el siguiente tenor literal⁶⁶:

⁶⁵ Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE de 06.10).

⁶⁶ La redacción vigente es la dispuesta por Ley 13/2009, si bien es esencialmente la misma que la originaria de la Ley 1/2000. Los únicos cambios son la eliminación “del tribunal” en la primera línea, fruto de la reforma en las competencias de los Secretarios judiciales; la eliminación en el ordinal 5º de la mención a los “corredores colegiados de comercio”, que quedaron unificados con los notarios por Ley 55/1999, de 29.12, y la sustitución en el mismo punto de “agentes del Juzgado o Tribunal” por “funcionarios al servicio de la Administración de Justicia”, adaptándose a la supresión de aquella denominación operada en la LOPJ por LO 19/2003, de 23.12. A su vez, la redacción con la que se promulgó el artículo procede del Proyecto de Ley de 1998, con la única salvedad de que se optó por suprimir en los requerimientos la previsión de una multa en caso de incumplimiento. El apartado decía así: “4.º Requerimientos, para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad, bajo apercibimiento, en su caso, de multa no inferior a 30.000 pesetas ni superior a la quinta parte de la

Los actos procesales de comunicación serán:

- 1º. **Notificaciones**, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación.
- 2º. **Emplazamientos**, para personarse y para actuar dentro de un plazo.
- 3º. **Citaciones**, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
- 4º. **Requerimientos** para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
- 5º. **Mandamientos**, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- 6º. **Oficios**, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

El art. 149 habla de actos procesales “de comunicación”, pasando a continuación a clasificarlos (algo que no hizo la ley de 1881). Estudiamos, pues, cada una de estas clases de actos.

2.1.1.- Notificaciones

En primer lugar nos dice el apartado 1º del art. 149 que *los actos procesales de comunicación serán notificaciones cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación*. La notificación⁶⁷ constituye la clase más elemental de todas cuantas integran los actos de comunicación y su finalidad se consuma al poner en conocimiento de su destinatario una determinada decisión o actuación judicial, sin que el mismo sea llamado a adoptar una actitud más o menos activa, como ocurre en las otras clases que se señalan, porque la notificación consiste “en una puesta en conocimiento en estado puro” (BARONA VILAR⁶⁸). Así pues, la notificación no es un acto procesal independiente, sino que es derivado de otro anterior (la resolución que se notifica) y es susceptible de provocar otro posterior (una comparecencia, la realización de una determinada actividad, etc.).

Desde un punto de vista dogmático, parte de la doctrina considera a la notificación, no como una clase o especie de acto de comunicación, sino como un género “en el que están comprendidos, como especies, las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos” (DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ⁶⁹), de modo que estas tres últimas

cuantía o valor de la demanda o a 250.000 pesetas, si la cuantía fuese indeterminada” (BOCG Serie A, n.º 147-1, pág. 48).

⁶⁷ Voz “Notificación”: “1. f. Acción y efecto de notificar. 2. f. *Der.* Documento en que consta la notificación de una resolución” (DRAE, ed. 23ª, 2014).

⁶⁸ BARONA VILAR: “Lección 23ª”, op. cit., pág. 422; ídem, CERRADA MORENO, *Actos de comunicación...*, op. cit., pág. 34.

⁶⁹ DE LA OLIVA, ANDRÉS, y FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL: “Capítulo n.º 26. Los actos de comunicación”, *Derecho Procesal Civil II*, 4ª ed. (1ª reimpresión), Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996, pág. 167.

serían “actos de notificación *específicos* (especies del género notificación)” (CUBILLO LÓPEZ⁷⁰).

La notificación es también el término utilizado tradicionalmente para referirse en sentido genérico a las comunicaciones provenientes de la Administración pública y, por ende, de la Administración de Justicia (cfr. art. 271 LOPJ). Mención aparte de los casos en que es la propia LEC la que habla de notificación en sentido amplio o impropio, por no decir inapropiado⁷¹, esta clase de comunicación habrá de ser la empleada con carácter subsidiario o residual cuando la ley no ordene expresamente que se acuda a alguna de las demás⁷².

La redacción de este apartado 1º es prácticamente la misma que la del proyecto de ley de 1998⁷³, aunque habríamos preferido que se hubiera acogido parte de la enmienda que presentó el Grupo Socialista y que proponía como texto el de “1.º Notificaciones, cuando trasladen una resolución⁷⁴”. El término “traslado” es de uso generalizado en la práctica forense y transmite muy gráficamente el propio hecho del desplazamiento o transmisión de la información del tribunal a su destinatario con independencia del efecto procesal que la misma conlleve. Podría decirse en realidad que se trata de un emplazamiento impropio.

Si tratamos de buscar diferencias entre las notificaciones en sentido estricto y las citaciones, emplazamientos y requerimientos, cabe señalar que estos actos contienen, además de una puesta en conocimiento de una resolución, una intimación más o menos coactiva para que la actividad que se pretenda sea desarrollada, constituyendo por ello actos complejos de comunicación e intimación. Cuando la intimación tiene por objeto la comparecencia dentro de plazo, el acto se denomina “emplazamiento”; si la comparecencia debe producirse en un momento concreto, “citación”; y cuando la intimación versa sobre cualquier otra conducta, se habla de “requerimiento”.

2.1.2.- Emplazamientos

Los emplazamientos serán la clase de acto procesal de comunicación previstos *para personarse y para actuar dentro de un plazo* (aptdo. 2º del art. 149). De entre

⁷⁰ CUBILLO LÓPEZ, IGNACIO: “Los actos de comunicación. Estudio de la nueva regulación de la notificación a Procurador” (Ponencia impartida en el Curso “Ley de Enjuiciamiento Civil, 3ª Edición”, 2000), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000, Centro de Estudios Jurídicos, pág. 296.

⁷¹ Como cuando habla de la *notificación de la demanda* al demandado (art. 32.2), caso en el que, obviamente, este no la ha de recibir sin más, sino que lo habrá de ser acto seguido del emplazamiento que se le habrá de practicar para contestarla.

⁷² En el mismo sentido, GASCÓN INCHAUSTI: “Artículo 149”, op. cit., pág. 638.

⁷³ Asignado con el n.º 121/000/147. El proyecto preveía dar noticia de las diligencias, lo que resulta un tanto redundante por su similitud con las actuaciones: “1.º Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación” (BOCG, Serie A, Núm. 147-1, 13.11.1999, pág. 48).

⁷⁴ La motivación fue la de que “sólo las resoluciones deben de notificarse, no cualquier acto procesal de mero impulso y sin trascendencia para las partes, y menos las meras diligencias” (Enmienda n.º 236 al Proyecto del Ley, BOCG, Serie A, Núm. 147-9, 26.03.1999, pág. 236).

las numerosas acepciones que la doctrina científica ha aportado, todas ellas muy parecidas, nos quedamos con la más que centenaria de MANRESA, comentarista de la vetusta LEC de 1881 que en 1895 entendió por *emplazamiento* “el llamamiento que se hace á los litigantes para que comparezcan en juicio á defenderse ó á hacer uso de su derecho”⁷⁵. Vemos con ello que estamos ante un “acto procesal de naturaleza mixta”, como entendió la **STS 03.04.1987**⁷⁶:

“[...] pues se compone de un acto de comunicación en sentido estricto por el cual se notifica al destinatario la existencia de un proceso contra él y se le da traslado de la demanda y de los documentos presentados a medio de las oportunas copias de una y otros y se integra, además, por un acto de intimación, conminándole a realizar una determinada conducta, en el lapso de tiempo que se le señala, para comparecer o personarse en dicho proceso con la prevención de que, de no realizarlo, le parará el perjuicio a que hubiese lugar en derecho” (F. D. 1º).

Con el emplazamiento la comunicación lleva aparejada la imposición de una carga procesal⁷⁷, que no obligación, una intimación al destinatario para que desarrolle una actividad determinada (contestar a la demanda, como ejemplo típico), debiendo realizarla además con una concreta finalidad, *para personarse y para actuar*, y en un espacio de tiempo o *dentro de plazo* predeterminado legalmente. El precepto no dice cómo ha de verificarse dicha personación, pero habrá de ser respetando las reglas sobre postulación procesal que permita que con esa actuación el destinatario se constituya en parte.

El anterior aserto nos obliga a estudiar la figura de la personación, pues acaso podría plantearse si el emplazamiento se entiende cumplido con la simple comparecencia de la persona en la oficina judicial, es decir, haciendo acto de presencia en dicho lugar. Pero el artículo no dice “para comparecer y para actuar”, sino que dice con una intachable corrección técnica “para personarse”, quedando subsumido lo primero en lo segundo, no al revés. Ahora bien, pudiera pasar desapercibido el hecho de que el art. 149.2º utiliza dos veces la preposición *para*, pudiendo parecer a simple vista una redundancia o más bien una simple cláusula de estilo que vendría a aclarar el objeto de aquella personación. Creemos, sin embargo, que lo que pretende es dar cabida tanto al emplazamiento en su sentido más estricto y técnico, tradicionalmente asociado a la constitución formal del litigante en parte, de ahí el primer *para personarse*, como al emplazamiento en sentido más genérico

⁷⁵ MANRESA Y NAVARRO: *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pág. 518.

⁷⁶ Roj: STS 2389/1987 (resolución repetida en Roj: STS 9000/1987).

⁷⁷ Comenta GASCÓN INCHAUSTI que “los emplazamientos no contienen mandatos imperativos, cuya infracción pueda ser objeto de sanción en sentido propio, sino que sirven para arrojar sobre su destinatario una carga procesal, la de actuar en consonancia con su contenido. Son, por ello, un instrumento idóneo para fomentar el avance del proceso, como el civil, en el que la actividad de las partes se constituye más sobre la base de las cargas y las preclusiones que sobre los deberes y las sanciones” (“Artículo 149”, op. cit., pág. 638-39).

y por ello menos jurídico, y con ello el segundo *para actuar dentro de un plazo*; de ambos, por cierto, da cuenta el Diccionario de la Lengua Española⁷⁸.

Establecido así el concepto de emplazamiento en el art. 149, se constata que la utilización concreta del mismo a lo largo de la LEC es notablemente irregular, tanto en la forma como en el fondo. Comenzando por esto último, en la mayoría de las ocasiones se emplaza a las partes ‘*stricto sensu*’, esto es, para que el litigante se constituya en parte, siendo paradigma el del emplazamiento al demandado en juicio ordinario para que conteste a la demanda (art. 404.1), al que con la Ley 19/2015 se ha unido la contestación escrita en el juicio verbal (art. 438.1). Junto a ellos, tenemos el emplazamiento para hacer lo propio en los otros procesos en los que ya estaba previsto que la demanda que se contestara por escrito, es decir, en los comunmente conocidos como de Familia (arts. 753.1, 780.4 y 781.3); para la personación de los sucesores del litigante fallecido (art. 16.2); ante el órgano considerado competente en casos de conflictos de competencia (arts. 60.3, 65.5 y 94.2); la personación del demandado en el juicio verbal de los arts. 250.1, 10º y 11º para formular oposición (art. 441.4p2); la personación en el tribunal superior en los recursos de apelación (art. 463.1), extraordinario por infracción procesal (art. 472) y de casación (arts. 482.1 y 484.1); y revisión de sentencias firmes (art. 514.1). En muchos de estos casos se utiliza expresamente este término, tanto en su expresión nominal (*con emplazamiento de las partes*) como verbal en sus diferentes conjugaciones⁷⁹. Y decimos casi todos porque en los casos del juicio ordinario y del juicio verbal los artículos 404.1 y 438.1 lo sustituyen por el más genérico de “traslado”, usado en este contexto de forma impropia, de tal modo que el Letrado de la Administración de Justicia no “emplazará” al demandado para que conteste a la demanda, sino que le *dará traslado de ella*⁸⁰ con la misma finalidad. Curiosamente, esta acepción actúa en el primer apartado del citado art. 404 como sinónimo de emplazamiento, mientras que en el tercero lo hace como simple notificación o comunicación, con la que *el Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia de la resolución admitiendo la demanda en el plazo previsto en el párrafo primero*; y no añade “para que la conteste”, porque tal cual está redactado se está refiriendo al tiempo en que ha de ponerse aquella resolución en conocimiento de aquel organismos (veinte días), apartándose, por cierto, de los tres días que marca el art. 151.1.

En un segundo grupo más reducido estarían aquellos artículos en los que el emplazamiento explícito va dirigido a partes ya constituidas en el litigio, de ahí

⁷⁸ Voz “Emplazamiento”: “1. tr. Dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo. 2. tr. Citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que dé razón de algo. [...] 4. tr. Der. Citar al demandado con señalamiento del plazo dentro del cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas, excepciones o reconvencciones” (DRAE, ed. 23ª, 2014).

⁷⁹ Así: *emplazándolas* [a las partes] (arts. 16.2, 461.1, 787.1); *sea emplazado* [el demandado] (art. 20.2); *emplazarán* (art. 94.2); *ser emplazados* (art. 399.1); *ordenando emplazar* (art. 420.1); *emplazará* (arts. 441.4p2; 514.1; art. 780.4); *se emplazará* (art. 643.1).

⁸⁰ Si bien hay que decir que el art. 404.1 sí contiene en su rúbrica la mención al “emplazamiento al demandado”, a diferencia del nuevo art. 438.

que no se busque su personación, sino su intervención en un determinado trámite procesal *dentro de un plazo*, coincidiendo por tanto con el significado más genuino de “traslado”. Esa actuación se concreta en la presentación de un escrito concreto, como el de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada (art. 461.1); el de alegaciones a la eventual formación de lotes de bienes para subasta (art. 643.1); o el de oposición a las operaciones divisorias de la herencia (art. 787.1).

Y en tercer lugar, en una posición intermedia estaría el singular trámite previsto en el art. 160.3, en el que la utilización de la voz “emplazamiento” no busca la personación en forma de litigante ni se refiere a quien ya se encuentra personado, sino que pretende su mera presentación en la sede judicial *a efectos de ser notificado o de dársele traslado de algún escrito*.

En cuanto a la forma o expresión, también se aprecia cierta falta de sistemática. Precisamente es bajo la denominación de “traslado” antes mencionada, y excepción hecha de los art. 404.1 y 438.1, cuando la LEC quiere emplazar a las partes con el segundo de los significados ya estudiados, abriéndoles un plazo determinado, siempre preclusivo, para que actúen a efectos de ser oídas, o de tenerles por conformes si guardan silencio, previamente al dictado de una determinada resolución procesal. Así, v. gr., practicada la tasación de costas por el Letrado de la Administración de Justicia, *se dará traslado de ella a las partes por plazo común de diez días* (art. 244.1). Incluso puede ocurrir que el término “traslado” se emplee tácitamente, bastando la fórmula al uso de “...previa audiencia de las partes por plazo de...”⁸¹.

2.1.3.- Citaciones

Estaremos ante las citaciones, nos dice el apartado 3º del art. 149, *cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar*. La citación⁸² es una variante del emplazamiento del que comparte su carácter conminatorio y su pretensión de convocar a su destinatario a presencia judicial, pero del que se diferencia por diferir la actuación de su destinatario a un momento concreto que el órgano judicial le habrá de señalar. También en este caso deberá personarse, o comparecer como dice ahora este apartado como sinónimo, pero su *actuar* se ha de verificar ‘in situ’.

La citación habrá de emplearse para contar con la presencia de las partes en la vista del juicio verbal (art. 440.1), que es el caso paradigmático, reconstrucción de autos (art. 234.1), práctica de diligencias preliminares (art. 259.1), práctica de

⁸¹ Caso, v. gr., del art. 13.2: *La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días*.

⁸² Voz: “Citación: (Del lat. *citatio*, -ōnis). 1. f. Acción de citar. 2. f. *Der.* Acto de la autoridad judicial o administrativa por el que se convoca a una persona para su comparecencia. ~ de evicción. 1. f. *Der.* La que se hace al vendedor para que responda al saneamiento por evicción. ~ de remate. 1. f. *Der.* La que en juicio ejecutivo se hace al deudor emplazándolo para que pueda oponerse a la ejecución” (DRAE, ed. 23ª, 2014).

pruebas fuera del juicio o vista (art. 291), declaraciones de testigos y peritos (arts. 292.1, 429.5), interrogatorio de parte (art. 304), designación judicial de perito (art. 341.2), adopción de medidas cautelares (arts. 734.1 y 741), Juntas de herederos y legatarios, vistas y comparecencias en asuntos de Familia en sentido extenso (arts. 773.3, 774.1, 776.4º y 777.3), incluidos los de división judicial de patrimonios (arts. 783.1, 793.3, 794, 809 y 810), o citación a vista de oposición cambiaria (art. 826). Ya en fase ejecutiva, la citación es la clase de comunicación a utilizar para la resolución del eventual incidente de existencia de terceros ocupantes del inmueble adjudicado (art. 675), para la oposición a la ejecución ordinaria por motivos de fondo (art. 560), para las tercerías (arts. 599 y 617) y para la oposición a la ejecución hipotecaria (695.2).

Tratándose la citación de un acto de comunicación independiente y a salvo de que las partes ya cuenten con procurador, la misma ha de practicarse también de forma separada a cualquier otro acto, no siendo suficiente con notificar la copia resolución en que aquella se acuerda, sino que será preciso verificarla, al igual que el emplazamiento, mediante la correspondiente y preceptiva cédula (art. 152.3.3º)⁸³. Así debería ser también, ‘de lege ferenda’, con los requerimientos y en determinadas circunstancias con las propias notificaciones.

2.1.4.- Requerimientos

Según el aptdo. 4º del art. 149, los requerimientos sirven para *ordenar, conforme a la Ley, una conducta o inactividad*. El requerimiento⁸⁴ es el instrumento donde más claramente se percibe el poder coactivo de los órganos jurisdiccionales, como se deduce del empleo del verbo *ordenar*, dando así la idea de que su destinatario no tiene opción para decidir si cumple o no con el mismo. Con esta clase de comunicación no se trata de hacer traer al requerido al Juzgado, pues para eso están el emplazamiento y la citación, sino de que haga o no haga una determinada cosa, *conducta o inactividad*.

Como supuestos previstos en la LEC, podemos citar los requerimientos realizados al poderdante o parte defendida para que abone la cuenta de su procurador (art. 34.2) o abogado (art. 35.2); de exhibición de documentos en las diligencias preliminares (art. 256); de pago, desalojo u oposición en el juicio verbal de desahucio por falta de pago (art. 440.3); de pago en la ejecución de títulos extraprocesales (art. 581); de manifestación de bienes y derechos al ejecutado (art. 589.1);

⁸³ Vid. **SAP Granada (Secc. 3ª) 11.09.2009** (Roj: SAP GR 1223/2009): “Sin embargo, y diferenciando claramente, el artículo 149 LEC, entre notificaciones y citaciones, tratándose aquí de este último acto de comunicación, en ningún caso se hace constar en la diligencia la entrega de cédula alguna, conforme a las exigencias del artículo 440.1 LEC, y solo se hace constar, la entrega de copia literal de la resolución que se ha de notificar, pero no de cédula alguna, pudiendo en consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 152.1.3º LEC, estimar que no estamos ante citación alguna [...]” (F. D. 1º).

⁸⁴ Voz “Requerimiento”: 1. m. Acción y efecto de requerir. 2. m. *Der.* Acto judicial por el que se intima que se haga o se deje de ejecutar algo. 3. m. *Der.* Aviso, manifestación o pregunta que se hace, generalmente bajo fe notarial, a alguien exigiendo o interesando de él que exprese y declare su actitud o su respuesta” (DRAE ed. 23ª, 2014).

de pago al ejecutado hipotecario (art. 686.1); de pago monitorio (art. 815.1); o de pago cambiario (art. 821.2.1º).

2.1.5.- Mandamientos y oficios

El art. 149 dedica sus dos últimos apartados, el 5º y el 6º a establecer y a definir las categorías de los mandamientos y de los oficios. Los primeros sirven *para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación que corresponda a Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia*; los segundos, *para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior*.

Tratamos conjuntamente estas dos figuras porque en puridad ambas conforman los muy variados despachos que ha de cursar el juzgado o tribunal en su quehacer diario, ya a iniciativa propia, ya a instancia de parte, en sus relaciones, no con las partes o terceros intervinientes ‘strictu sensu’, sino con el conjunto de administraciones y organismos y con otros funcionarios y autoridades públicas en un ejercicio, más que de simple comunicación, de colaboración o apoyo interinstitucional en lo que suele denominar doctrinalmente como “actos de auxilio a la Justicia”, por contraposición al “auxilio judicial”.

El legislador ha preferido llamar *mandamiento*⁸⁵ a la comunicación que se dirija específicamente a los Registradores y a los Notarios, por un lado, y a los funcionarios judiciales, por otro, pero nada hubiera pasado si hubiera acudido al *oficio*, pues a todos ellos, sin distinción, está “mandado” el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la colaboración con la Administración de Justicia (art. 118 CE⁸⁶ y art. 17.2 LOPJ⁸⁷), amén de que a los últimos les obliga específicamente su obediencia debida a Jueces y Secretarios en virtud del principio de dependencia jerárquica que les une (art. 435.2 LOPJ⁸⁸). También se ha aducido para su empleo que “puede deberse bien a una relativa dependencia de éstos del órgano judicial,

⁸⁵ Voz “Mandamiento” “(De *mandar*). 1. m. Precepto u orden de un superior a un inferior. 2. m. Cada uno de los preceptos del Decálogo y de la Iglesia. 3. m. *Der.* Despacho del juez, por escrito, mandando ejecutar algo. 4. m. pl. coloq. Los cinco dedos de la mano. *Come con los cinco mandamientos*. *Le puso en la cara los cinco mandamientos*” (DRAE ed. 23ª, 2014).

⁸⁶ **Art. 118 CE:** *Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.*

⁸⁷ **Art. 17 LOPJ:** *1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.*

2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

⁸⁸ **Art. 435.2 LOPJ:** *La estructura básica de la Oficina judicial, que será homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve, estará basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.*

bien a una mayor tipicidad legal de auxilio que deben éstos prestar a los órganos jurisdiccionales”⁸⁹.

En nuestra opinión, por el contrario, no tiene sentido hablar de “mandamientos” porque los Registradores y los Notarios, aun con un estatuto jurídico público-privado, son también empleados públicos y transmite una idea de subordinación o sometimiento ‘strictu sensu’ a la autoridad judicial que no se corresponde con la realidad.

La mayoría de los supuestos en que la LEC exige expresamente que la comunicación se efectúe mediante mandamiento se encuentran en el ámbito de la ejecución forzosa (Libro III) y van dirigidos principalmente a los Registradores de la Propiedad. Así, tenemos el mandamiento de modificación e inscripción de asientos registrales en virtud de sentencias constitutivas (art. 521.2); de anotación preventiva de embargo de bien inmueble o de otro bien susceptible de inscripción o anotación registral (art. 629.1); de inscripción del dominio tras realización por persona o entidad especializada (art. 642.2p3); para la expedición de certificación de dominio y cargas (arts. 656.1 y 688.1); para la actualización de cargas ex art. 144 LH (art. 657.2); de cancelación de las mismas para la libre inscripción del dominio adquirido en subasta (arts. 674p2 y 692.3); de cancelación de la nota marginal de haberse expedido certificación de dominio y cargas en ejecuciones hipotecarias (art. 688.2, párr. 2º); de anotación o inscripción registral de la resolución de condena a emitir una declaración de voluntad (art. 708.1); o de anotación en el Registro de la Propiedad del nombramiento de administrador de las fincas de la herencia (art. 797.3).

Los Notarios serán los destinatarios de los mandamientos para el libramiento de certificaciones y testimonios y para la expedición de la segunda copia de escritura pública ex art. 517.2.4º; también en caso de enajenación de participaciones y acciones societarias u otros valores que no coticen en Bolsa que refiere el art. 635.1, supuestos en los que ese *ordenará* del Letrado de la Administración de Justicia deberá instrumentarse en un mandamiento dirigido a dicho fedatario público.

Además, aunque no se emplee el término explícitamente, otras actuaciones judiciales de carácter ejecutivo han de realizarse en virtud de mandamiento, como ocurre con todas las diligencias que tengan que efectuarse en Comisión Judicial por parte del funcionario de Auxilio judicial y del Gestor procesal⁹⁰, es decir, embargos, remociones de depósito, entregas de la posesión y lanzamientos.

Ya fuera de la ejecución tenemos los diferentes mandamientos con los que hacer efectivas determinadas medidas cautelares, como la de embargo preventivo

⁸⁹ VV.AA. (FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL; RIFA SOLER, JOSÉ MARÍA; VALLS GOMBAU, JOSÉ FRANCISCO): *Derecho procesal práctico*, Tomo I, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, pág. 533, nota al pie n.º 29; en parecidos términos, DE LA OLIVA y FERNÁNDEZ, *Derecho Procesal Civil II*, op .cit., pág. 166.

⁹⁰ Excepcionalmente el Letrado de la Administración de Justicia ex 476.c LOPJ.

de bienes (art. 727.1^a), de depósito de cosa mueble (art. 727.3^o), o la de anotación preventiva de demanda (art. 727.5^o).

La última clasificación, la sexta, que establece la LEC corresponde con los *oficios*⁹¹. En teoría han de emplearse, en primer lugar, *para las comunicaciones con autoridades no judiciales*, pero esta exclusión a las judiciales resulta de todo punto contradictoria. Si bien la redacción inicial del Proyecto de la que luego sería la vigente Ley 1/2000 no distinguía entre autoridades judiciales y no judiciales⁹², posteriormente prosperó la enmienda n.º 1.131 al Proyecto de LEC que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al entender que, “habida cuenta que las comunicaciones para recabar el auxilio judicial se realizan por medio de exhortos (artículo 170 del Proyecto), es más correcto excluir expresamente a las autoridades judiciales de los posibles destinatarios del oficio”⁹³. Esta justificación no se sostiene, por cuanto, primero, los oficios constituyen la forma más tradicional y elemental de comunicación interna en la Administración y entre juzgados y tribunales, y, segundo, porque no solo para pedir auxilio judicial necesita un órgano judicial comunicarse con otro. Por ejemplo, si por equivocación se recibe en un juzgado un sobre postal de la Policía Nacional que de forma manifiesta va dirigido a otro juzgado, el primero reenviará dicho sobre al segundo mediante un simple oficio participándole el error y no mediante un exhorto. Asimismo, la elevación de los autos al órgano superior para conocer de un recurso devolutivo se realiza mediante un oficio (oficio remisorio⁹⁴) –y con otro oficio, a su vez, el segundo acusará recibo al primero de la recepción– y no a través de exhorto porque ningún auxilio hay que prestar. O cuando se remiten los autos a Fiscalía para que emita informe, a los que se acompaña también el aludido oficio remisorio. La diferencia estriba en que si la comunicación tiene por objeto la práctica de diligencias procesales que deban surtir efecto en las actuaciones de las que conoce el órgano emisor y que este no pueda efectuar por sí mismo (art. 169.2), estaremos ante un exhorto o auxilio judicial; si el efecto se ha de producir en actuaciones que corresponden al órgano receptor de la comunicación, entonces habrá de emplearse un oficio. En otras palabras, los oficios representan una comunicación unidireccional; los exhortos, en tanto que implican una cooperación y esperan una respuesta, bidireccional.

⁹¹ Entre las acepciones que de “oficio” establece oficialmente la Real Academia Española se encuentra la de “comunicación escrita, referente a los asuntos de las Administraciones públicas” (DRAE ed. 23.^a, 2014). Obviamente, no hay que confundir el distinto significado del término cuando se le añade delante la preposición “de”, en cuyo caso el propio DRAE lo define así: “se dice de las diligencias que se practican judicialmente sin instancia de parte, y de las costas que, según lo sentenciado, no debe ser pagadas por nadie” (ídem).

⁹² El Proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil decía: “Art. 149: Los actos procesales de comunicación del tribunal serán: [...] 6.º Oficios, para las comunicaciones con otras autoridades y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.” (BOCG, Serie A, n.º 147-1, 13.11.1998, pág. 48).

⁹³ BOCG, Serie A, n.º 147-9, 26.03.1999, pág. 505.

⁹⁴ Aunque la LEC no dice expresamente bajo qué fórmula habrá de materializarse la remisión de los autos (vid., v. gr., art. 463.1), la práctica sistemática es la de los oficios.

Sin embargo, en la práctica forense se emplean también los oficios, aunque vayan dirigidos a autoridades judiciales⁹⁵, para participar la realización de alguna actuación o hecho de trascendencia procesal. En cualquier caso, ni la práctica diaria ni la propia ley en su desarrollo posterior siguen la dicción literal del art. 149.6º, pues hay supuestos en que la LEC ordena la remisión de oficios a autoridades que sí son judiciales, contradiciéndose con ello a sí misma:

- Cuando el demandado presenta declinatoria ante el tribunal de su domicilio y este no es el que está conociendo del pleito, caso en que aquel deberá *remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación* (art. 63.2). No obstante, quizá el legislador quiso decir “de oficio” en lugar de “por oficio”, en cuyo caso no sería este precepto un ejemplo válido para ilustrar la incoherencia que padece el art. 149.6º.
- Cuando un tribunal acuerda la acumulación de un proceso pendiente ante otro tribunal, habrá de *dirigir oficio al que conozca del otro pleito, requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos* (art. 89p1). La elección del verbo “requerir” resulta excesiva y quizá hubiera sido mejor sustituirlo por “interesar”, pues no hay ninguna suerte de subordinación entre dichos tribunales por la cual uno de ellos tengan que acatar sin más el requerimiento del otro, sino que la propia ley establece una tramitación (arts. 90-97) para determinar si procede aceptar o denegar el mismo⁹⁶. El empleo expreso del oficio abunda en esta idea, descartando de todo punto el uso de los requerimientos ex art. 149.4º.

Por otro lado, la propia naturaleza del oficio aparece desdibujada en la LEC en determinados trámites, como ocurre en el art. 590 cuando el Letrado de la Administración de Justicia acuerda *dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia*. Como puede observarse, entre los destinatarios hay sujetos privados y, sin embargo, el precepto habla de los *oficios que hubieran sido librados a tal efecto*. Lo mismo cabe decir de los *oficios que se expidan* por dicho Letrado para dirigirse a los titulares de créditos anteriores y preferentes al de la parte ejecutante a fin de que informen de su subsistencia y cuantía (art. 657.1p2), cuando lo correcto hubiera sido emplear los requerimientos. De hecho, el propio art. 657 da por sentando en su apartado 3 que lo que se han cursado es un requerimiento y no un

⁹⁵ Y así se sostiene en la doctrina. Vid. CUBILLO LÓPEZ: “Si la comunicación se dirige a funcionarios o autoridades públicas en general, los actos de se denominan *oficios*; salvo que se trate de fedatarios públicos a los que se solicita una determinada actuación, en cuyo caso serán *mandamientos*” (“Los actos de comunicación...”, op. cit., págs. 293-294).

⁹⁶ No ocurre así en los supuestos de pérdida de competencia objetiva civil ante actos de violencia sobre la mujer que regula el art. 49bis.3 cuando el JVM tiene abiertas diligencias penales por violencia de género y tiene conocimiento de un proceso civil en los términos, a su vez, del art. 87ter.3 LOPJ. En ese caso dispone taxativamente que el Tribunal civil *deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente*.

simple oficio: *Transcurridos diez días desde el “requerimiento” al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la ejecución, se encuentra actualizada al momento del “requerimiento” en los términos fijados en el título preferente.*

Aunque nos adherimos a quienes han postulado la eliminación⁹⁷ de los mandamientos como clase autónoma y su inclusión en el concepto de oficio, lo que como mínimo debería hacerse es modificar el art. 149.6º y suprimir el inciso *no judiciales* después de *autoridades*, con lo que volveríamos a la redacción originaria presente en el Proyecto de Ley de 30.10.1998 y sin perjuicio de lo establecido para el auxilio judicial.

2.1.6.- Los exhortos como clase de actos de comunicación

A las anteriores seis clases de actos de comunicación el legislador debería haber añadido por coherencia sistemática una «7ª», que es la de los *exhortos*, que son las comunicaciones a través de las cuales se recaba *auxilio judicial* entre órganos jurisdiccionales en *aquellas actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica* (arts. 169.1 y 171.1). Así, si un juzgado ha de requerir de pago en proceso monitorio a un deudor con domicilio en la circunscripción de un Juzgado de Paz, correspondiendo por ello a este la competencia para su práctica (arts. 165 y 170), ninguna de las categorías del art. 149 tendrán encaje para hacerle llegar la petición, ni siquiera la del oficio por no tratarse de una autoridad no judicial, y, sin embargo, no deja de ser un acto de comunicación de un órgano a otro, en este caso para interesar, a su vez, la realización de otro acto de comunicación con un particular.

Sobre el carácter de auténtico acto de comunicación no parece que exista discrepancia en la doctrina. Para CERRADA MORENO “éste es el acto de comunicación mediante el cual un órgano judicial pide auxilio a otro”⁹⁸. FURQUET MONASTERIO, por su parte, siguiendo a GUASP, precisa que “los *exhortos* imponen una obligación a su destinatario, de forma que entrarían en la categoría ya mencionada de *actos de comunicación impuros o mixtos*”⁹⁹; incluso RODRÍGUEZ MERINO critica al legislador, como lo hacemos nosotros ahora, por “no haber[los] incluido dentro del catá-

⁹⁷ Ya en sede parlamentaria se apuntó la idea de su eliminación. El Grupo Socialista entendió la distinción entre mandamiento y oficio “en absoluto funcional”, así como que “debería ir desapareciendo en cuanto se modificaran las leyes en que se recoge tal nominación especial” (Enmienda n.º 236, ya citada).

⁹⁸ CERRADA MORENO: *Los actos de comunicación*, op. cit. pág. 42.

⁹⁹ FURQUET MONASTERIO: *Las comunicaciones procesales*, op. cit., pág. 31.

logo de actos de comunicación”¹⁰⁰, reproche que también hace CANCIO FERNÁNDEZ¹⁰¹.

Pese a tal consideración, los exhortos (art. 171) se encuentran en la LEC separados del resto de actos de comunicación, a continuación de aquellos en el capítulo que se dedica a regular la figura del auxilio judicial (el VI) y sin una definición legal que bien pudiera ubicarse en el art. 149 dada su naturaleza y finalidad homogéneas al resto de *clases* que en dicho precepto se dan cita. En ese sentido, propondríamos rescatar parcialmente el sistema de la LEC de 1881, que contenía la sección “De los exhortos, oficios y mandamientos”¹⁰², como un bloque unitario para comunicaciones intrajudiciales o interadministrativas, frente a la sección dedicada a los particulares y relativa a las “notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos”¹⁰³.

2.2.- FORMAS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN: EL ARTÍCULO 152 LEC

Punto capital de nuestro estudio lo constituye el art. 152 de la LEC, dedicado a la “Forma de los actos de comunicación”, si bien el mismo es desarrollado y completado por otras disposiciones en la propia ley que también inciden sobre la materia. En la medida en que constituye una de las disposiciones de los más importantes sobre los que pivota nuestro estudio y que al mismo aludiremos en numerosas ocasiones, lo reproducimos literalmente a continuación en el siguiente cuadro comparativo donde se pueden apreciar las modificaciones introducidas en su redacción originaria del año 2000 por las dos leyes que hasta la fecha lo han reformado, la Ley 13/2009 y la Ley 42/2015:

¹⁰⁰ RODRÍGUEZ MERINO: “Artículo 149”, op. cit., pág. 995-96. Como mucho atino esgrime el autor que “si se opta por separar los denominados actos de «auxilio judicial», deberían haberse separado también los actos denominados de «auxilio a la Justicia», ya que éstos tienen también una identidad propia, y sin embargo se recoge dentro del precepto que hemos comentado” (ídem).

¹⁰¹ CANCIO FERNÁNDEZ, RAÚL C.: “Los actos de comunicación judicial y la intervención del Secretario en nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista de Derecho Procesal*, año 2001, n.º 1-3, Edersa, Madrid, pág. 57.

¹⁰² Sección 5ª del Título VI, Libro I, arts. 284-300. La rúbrica obedece la modificación realizada por Ley 34/1984, de 06.08 (BOE de 07.06; c. e. 09.01.1985), que suprimió los *suplicatorios* y las *cartas-orden*, vestigios que todavía se encuentran presentes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 183 y ss.).

¹⁰³ Sección 3ª, arts. 260-280.

ARTÍCULO 152 LEC		
REDACCIÓN ORIGINARIA POR LEY 1/2000	REDACCIÓN POR LEY 13/2009	REDACCIÓN POR LEY 42/2015
<p>Artículo 152. <i>Forma de los actos de comunicación. Respuesta.</i></p> <p>1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario Judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquél designe, y en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:</p>	<p>Artículo 152. <i>Forma de los actos de comunicación. Respuesta.</i></p> <p>1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:</p> <p>1º. Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.</p> <p>2º. El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.</p> <p>Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando</p>	<p>Artículo 152. <i>Forma de los actos de comunicación. Respuesta.</i></p> <p>1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:</p> <p>1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.</p> <p>2.º El procurador de la parte que lo solicite.</p> <p>A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que todos los actos de comunicación se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita.</p> <p>Los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el secretario judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.</p> <p>Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la</p>

	<p>quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario.</p> <p>A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.</p>	<p>diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.</p> <p>A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.</p> <p>2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.</p> <p>No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.</p> <p>El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de</p>
--	---	--

<p>1.^a A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.</p> <p>2.^a Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.</p> <p>3.^a Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la cédula de citación o emplazamiento.</p> <p>2. La cédula expresará el tri-</p>	<p>2. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta ley:</p> <p>1.^a A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.</p> <p>2.^a Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.</p> <p>3.^a Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.</p> <p>3. La cédula expresará el</p>	<p>notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.</p> <p>3. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:</p> <p>1.^a A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.</p> <p>2.^a Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.</p> <p>3.^a Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.</p> <p>4.^a En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.</p> <p>4. En la cédula se hará cons-</p>
--	--	---

<p>bunal que hubiese dictado la resolución, y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.</p> <p>3. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.</p>	<p>Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución, y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.</p> <p>4. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.</p>	<p>tar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.</p> <p>5. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.</p>
--	---	--

En principio parece que el art. 152.3 establece con sus cuatro ordinales cuatro *formas* de efectuar los actos procesales de comunicación, pero, en realidad, se podrían reducir a dos: comunicación por *remisión* y comunicación mediante *entrega*. La palabra “forma” es aquí sinónimo de “modo”, “método”, “procedimiento” o “técnica”, lo que no debe confundirse con “forma” en el sentido de aspecto, apariencia, representación o exteriorización del acto de comunicación, pues esto último se refiere al empleo, bien de las cédulas, bien de las simples copias de las resoluciones (art. 152.4). Pero, a pesar de su rúbrica, el art. 152 es un precepto incompleto. La propia ley contempla otra modalidad adicional como es la que se realiza mediante edictos conforme al art. 164. También puede decirse que la comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares que refiere el mismo art. 152.3.4^a y que regula el art. 162 constituye otra forma más¹⁰⁴, aunque nosotros entendemos que no deja de ser una submodalidad de la comunicación por *remisión*, por contraposición a la modalidad tradicional del correo postal, dada la modernidad que supone la utilización del correo electrónico y sus diversas manifestaciones y evoluciones basadas en el, entre ellas el sistema *Lexnet* para la presentación y traslado de escritos y documentos, así como para la notificaciones

¹⁰⁴ Así lo entiende MARES ROGER, FRANCISCO, en “Los actos de comunicación judicial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (perspectivas de práctica forense) (I)”, *Diario La Ley* n.º 5282, 4 de abril de 2001, La Ley, Madrid, pág. 5.

en sentido amplio a los procuradores y otros profesionales de la Justicia. Lo mismo sucede con la primera forma a través del Procurador, al que el órgano judicial “remite” las comunicaciones. Por estos motivos y por intentar aclarar desde el principio el ámbito en que nos movemos, podemos extraer el siguiente cuadro-resumen:

FORMAS DE PRACTICAR LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL	
Modalidad	Artículos
1.- POR REMISIÓN 1.A.- Comunicación por remisión por correo, telegrama y similar 1.B.- Comunicación por remisión telemática, incluida la comunicación a través del procurador.	<ul style="list-style-type: none"> • 152.3.1.^a, 2.^a y 4.^a: Previsión legal. • 155: Remisión al domicilio. • 158: Ineficacia de la remisión por correo. • 159: A testigos, peritos y otras personas. • 160: Requisitos de la remisión por correo. • 153: Comunicación por medio de procurador. • 154: Lugar de comunicación a procuradores. • 162: Medios electrónicos, telemáticos.
2.- POR ENTREGA Mediante entrega personal o domiciliaria por funcionario judicial o procurador-cooperador (comunicación directa)	<ul style="list-style-type: none"> • 152.3.3.^a: Previsión legal. • 158: Carácter subsidiario. • 160.3: Modalidad híbrida en Sede. • 161: Requisitos de la entrega. • 163: Intervención de los SCACs. • 168: Responsabilidad de los profesionales. • 440.3: Desahucio por falta de pago. • 815.1: Monitorio.
+ 3.- Por edictos	<ul style="list-style-type: none"> • 156.4: Tras averiguaciones infructuosas. • 157.2: Directa tras consulta al RCRC. • 164: Carácter excepcional. • 155.3: Especialidades desahucio. • 497.2 y 3: Especialidad juicios sumarios. • 815.2: Especialidad monitorios LPH.

Dicho lo anterior, parte de nuestro trabajo consiste en el análisis teórico y aplicación práctica de *formas* antes señaladas. Respecto a la cuarta modalidad de las modalidades, la comunicación por edictos, bien podríamos decir que estamos ante un sistema de actos de comunicación “2+1” para enfatizar la necesidad de considerarla como una vía (la “+1”) subsidiaria y excepcional, como veremos en el capítulo que dedicamos a su estudio y con las excepciones que a aquellos caracteres se establecen.

2.3.- LUGAR DONDE PRACTICAR LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL

Más allá de la un tanto trivial previsión de que *las actuaciones judiciales* –entiéndanse en sentido extenso– *se realizarán en la sede de la Oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar* (art. 129.1), la LEC carece de una norma específica donde se defina el lugar en que han de realizarse los actos de comunicación judicial. De hecho, la propia *naturaleza* ‘ad extra’ de los mismos hace que la excepción a dicho precepto se convierta habitualmente en regla y se practiquen fuera de la Oficina Judicial (comunicaciones domiciliarias;

exhortos; Servicios Comunes; Salón de Procuradores; telemática a través del sistema Lexnet; etc.).

La regulación se encuentra diseminada por todo el Título V del Libro I y es preciso hacer un esfuerzo para localizar ese *otro lugar*, teniendo en cuenta además que actuarán como factores condiciones la forma en que han de practicarse dichos actos de comunicación y quiénes sean sus destinatarios. El resultado lo resumimos en el siguiente cuadro:

DESTINATARIOS	LUGAR DE PRÁCTICA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN
PARTES CON PROCURADOR	<p>1.- Internet ("Salón virtual"/ telemático) (Lexnet) (art. 162; RD 84/2007).</p> <p>2.- Presencial en la sede judicial (excepcionalmente desde 01.01.2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>En el Salón de Procuradores</i> (arts. 28.3 y 154.1) (art. 272 LOPJ) ▪ <i>En la sede de la Oficina judicial</i> ("tribunal", art. 154.1).
PARTES SIN PROCURADOR	<p>1.A.- Internet (Lexnet) obligatorio/potestativo según el destinatario.</p> <p>1.B.- Internet (Sede judicial electrónica) (desde 01.01.2017, salvo para comunicación edictal, ya vigente)</p> <p>2.A.- Presencial en la <i>sede de la Oficina judicial</i> (arts. 129.1 y 160.1): <i>En persona</i> (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3 por analogía). <p>2.B.- Presencial en la sede del SCACE (donde esté establecido) (art. 163) (3): <i>En persona</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3 por analogía). <p>2.C.- Presencial en la sede del órgano exhortado: Solo cabe <i>en persona</i> (art. 165p1).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3 por analogía). <p>2.- En su domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Por correo</i> (art. 155.1). <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 32.1 Regl. Servicios Postales). ○ De forma indirecta a 3º (art. 32.1 Regl. Servicios Postales). ▪ <i>En persona mediante entrega</i> por funcionario o procurador (art. 161). <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3).
TESTIGOS, PERITOS Y TERCERAS PERSONAS	<p>1.A.- Internet (telemático) opcional.</p> <p>2.- En su domicilio (norma general):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Por correo</i> (art. 159.1). <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 32.1 Regl. Servicios Postales). ○ De forma indirecta a 3º (art. 32.1 Regl. Servicios Postales). ▪ <i>En persona mediante entrega</i> por funcionario o procurador (art. 159.2). <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3). <p>2.- En la sede de la Oficina judicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>En persona</i> (2): <ul style="list-style-type: none"> ○ De forma directa (art. 161.1 y 2). ○ De forma indirecta a 3º (art. 161.3 por analogía).
OTROS ÓRGANOS JUDICIALES	<p>1.- Internet (telemático) (Lexnet) (art. 162; RD 84/2007) (1)</p> <p>2.- En la sede del órgano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se trata de exhortos: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Por remisión telemática</i> (art. 172.1) (Obligatorio desde Circular 1/2012 Sec. Gral. Adm. Jus.).

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>En persona mediante entrega</i> por la parte que lo solicite (art. 172.2) ▪ Resto de comunicaciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Por correo/mediante entrega</i> (excepcional desde 01.01.2016)
OTROS ÓRGANOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS	1.- Internet (telemático) (Lexnet) (art. 162; RD 84/2007) (1) 2.- Presencial en la sede judicial (excepcional desde 01.06.2016) <ul style="list-style-type: none"> ▪ En la sede de la respectiva Abogacía si se trata de Administración General del Estado, Organismos autónomos u órganos constitucionales (art. 11.1 Ley 52/1997) (4). ▪ En la sede oficial del organismo, en el resto.

Notas:

(1): A partir de 01.01.2016, “todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal” (Disp. Ad. 1º Ley 42/2015). Resto: desde 01.01.2017, obligatorio o potestivo, según los casos (Disp. Ad.ª 4ª).

(2): En teoría, a practicar por el funcionario de Auxilio judicial adscrito al órgano judicial, art. 152.1.1º).

(3): En teoría, a practicar el funcionario de Auxilio judicial adscrito al Servicio Común, art. 152.1.1º en relación con art. 163; salvo régimen transitorio y funciones de las RPTs en territorios con NOJ).

(4) ...salvo que las normas internas de estos últimos o las leyes procesales dispongan otra cosa (art. 11.1 Ley 52/1997).

2.3.1.- Comunicaciones en sede judicial

Mención aparte de los actos de comunicación por medios informáticos o telemáticos (principalmente Lexnet) y en los que no existe un lugar físico propiamente dicho equiparable a los lugares donde las comunicaciones se realizan por medios tradicionales, la sede judicial, o sede *del tribunal* como dice la LEC, ocupa un papel destacado y como tal se prevé que en ella puedan efectuarse actos de comunicación con cualquier *destinatario* (art. 161.1). El supuesto habitual es el del litigante no representado con Procurador, o aún no personado a través de dicho profesional, que acude “a los Juzgados”, bien de forma espontánea para interesarse de un determinado proceso que le concierne, bien involuntaria, propiciada por el llamamiento formal y conminatorio que al efecto se le haya podido realizar¹⁰⁵, aunque también por habérsele dejado un aviso en su domicilio tras haberse intentado allí sin éxito la comunicación.

Aquí es preciso atender al significado amplio de “sede del tribunal”, que incluye al órgano jurisdiccional propiamente dicho, y también entre “sede de la Oficina judicial” y “edificio judicial”, cuestión quizá ajena al ciudadano de a pie, que probablemente pensará en ir “al juzgado” sin más, pero necesaria porque en el edificio judicial puede que tenga que dirigirse a alguna de las siguientes dependencias:

A.- La sede de la Oficina judicial: Si en el partido judicial o ciudad no está implantada la (ya no tan novedosa) “Nueva Oficina Judicial” (NOJ) o el mismo no está dotado de Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación o análogo, los actos

¹⁰⁵ Por ejemplo, al amparo del art. 160.3, con el que se le emplaza para que comparezca en la sede del órgano a efectos de, su vez, *ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito*. Vid., ‘infra’, Capítulo II.

de comunicación pueden ser practicados en la propia Oficina judicial, denominación actual establecida por la LO 19/2003¹⁰⁶ de lo que tradicionalmente se ha conocido como Secretaría del Juzgado; hablamos del ‘corpus’ material de lo que se entiende por Juzgado o Tribunal integrado por una o varias dependencias, más o menos interconectadas, en las que se ubica un determinado número de mesas, negociados o secciones encargadas de la tramitación de los expedientes judiciales. A una de esas mesas será dirigido en la práctica el destinatario y allí será donde se efectúe la comunicación, pues no existe un negociado específico para estas tareas y raro es que el funcionario de Auxilio judicial adscrito al órgano se encargue de practicarlas, pese a ser su función ‘ex lege’ sin distinción de si es fuera o dentro de la Oficina judicial. Tampoco hay habilitado, por lo general, una ventanilla o mostrador donde atender a los ciudadanos, quedando estos físicamente separados de la oficina, sino que entran directamente en ella.

Lo anterior es aplicable también, aunque ya residualmente, los procuradores, al seguir prevista en la LEC que también con ellos se puedan realizar *en la sede del tribunal* (art. 154.1) los actos de comunicación, lo que ocurrirá las menos de las veces al disponer estos profesionales de su propio *servicio común de recepción* (art. 153), desde hace varios años de forma telemática.

Caso de haberse instaurado la estructura de la NOJ, la Oficina judicial en nuestra percepción tradicional se habrá quedado reducida a una “UPAD” o *unidad procesal de apoyo directo*¹⁰⁷ y estos actos de comunicación estarán en principio asig-

¹⁰⁶ **Art. 435.1 LOPJ:** *La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.*

¹⁰⁷ **Art. 436.1 y 2 LOPJ:** *1. El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos.*

2. En atención a sus funciones se distinguirán dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo [] y servicios comunes procesales.*

La actividad principal de estas unidades viene determinada por la aplicación de normas procesales.

[*] Art 437 LOPJ: *1. A los efectos de esta ley orgánica se entiende por unidad procesal de apoyo directo aquella unidad de la Oficina judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten.*

2. Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o en su caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial.

3. Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un secretario judicial que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio, un mismo secretario judicial podrá actuar en más de una de estas unidades.

4. Cada unidad contará, además, con los puestos de trabajo necesarios para la atención del órgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.

5. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con competencias asumidas, determinará las dotaciones básicas de estas unidades procesales de apoyo directo, que garantizarán, en todo caso, el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional.

nados a un “SCP” o *servicio común procesal*¹⁰⁸, a donde habrán de acudir los interesados.

Antes de pasar al siguiente inciso tenemos que hacer una breve alusión a un “lugar” de nuevo cuño, de hecho todavía ausente en la LEC: la **sede judicial electrónica**, figura creada por la Ley 18/2011, de 05.07, *reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*. En su novedosa regulación vigente dicha sede virtual no puede ser equiparada aún a la sede real y, a efectos de la práctica de actos de comunicación judicial, solo está prevista, de momento, para la *publicación electrónica, cuando proceda, de resoluciones y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos*¹⁰⁹,

¹⁰⁸ **Art. 438 LOPJ:** 1. A los efectos de esta ley, se entiende por servicio común procesal, toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

2. Prestarán su apoyo a todos o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción.

3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrán solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades.

Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

4. En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales, podrán estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos.

5. Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina judicial habrá un secretario judicial, de quien dependerán funcionalmente el resto de los secretarios judiciales y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo.

En aquellos partidos judiciales en que el escaso número de órganos judiciales lo aconseje, el mismo Secretario Judicial de la unidad procesal de apoyo directo podrá estar al frente de los servicios comunes procesales que se constituyan con las funciones relacionadas en el apartado 3 de este artículo.

6. El secretario judicial que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las ordenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.

7. El Consejo General del Poder Judicial podrá establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia.

¹⁰⁹ Art. 2.g) de la Orden JUS/1126/2015, de 10.06, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia (BOE de 16.06.2015), operativa desde el pasado 23.09.2015 accediendo al dominio “<https://sedejudicial.justicia.es>”. Allí se explica qué es la sede judicial electrónica: “La Sede Judicial Electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y profesionales a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de Justicia.

Es un portal Web con un nivel superior de garantías y seguridad en los contenidos y trámites electrónicos donde usted podrá realizar consultas y trámites de forma telemática con la Administra-

aunque a partir de 2017 será el lugar en el que podrán los ciudadanos efectuar la *comparecencia electrónica* a que se refiere el art. 152.1p4.

B.- La sede del Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación o análogo: La ausencia de implantación de la NOJ en un determinado territorio no impide la existencia de servicios comunes, ya presentes de forma incipiente desde finales de los años ochenta, precisamente para la práctica de actos de comunicación, como veremos más adelante. De existir estos servicios, tendremos el mismo proceder ya descrito en el punto anterior.

C.- El “Salón” de Procuradores: Si las partes están representadas con procurador las comunicaciones se harán a través de estos (art. 153), pudiendo realizarse, bien *en la sede del tribunal*, lo acabamos de decir, bien, lo normal, *en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores* (art. 154)¹¹⁰, que en el práctica también se ha llamado con el término un tanto ya avejentado de “Salón de Procuradores” o, directamente, “Colegio de Procuradores”. Precisamente la primera vez que la LEC se refiere a un lugar donde llevar a cabo de los actos de comunicación ocurre en su art. 28.3, donde establece la obligatoriedad de que *en todos los edificios que sean sede del tribunales civiles exista un servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores*. Las propias necesidades organizativas y la dispersión de sedes judiciales existente en muchas ciudades han hecho que este precepto haya quedado incumplido, siendo lo habitual que exista un único local o dependencia reservada a dichos Colegios en un solo edificio (no *en todos los edificios*), normalmente en aquel en que se ubica la oficina del Decanato. Por otro lado, obsérvese que, como su nombre indica, solo se trata de un servicio “de recepción”, por lo que desde su propia concepción legal nace ya con una función limitada de carácter pasivo, desperdiciándose con ello la posibilidad de que también hubiera podido ser un lugar o servicio para practicar comunicaciones cuando es el procurador quien solicita ejecutarlas al amparo del art. 152.1.2º.

Para acabar con el desarrollo del art. 129, “lugares” de práctica de los actos de comunicación son también las sedes de los **órganos judiciales exhortados**, a

ción de Justicia. Está dirigida a ciudadanos y profesionales de la justicia que quieren interactuar con la Administración de Justicia a través de internet.

La Sede Judicial Electrónica proporcionará servicios tales como verificación de certificados electrónicos, presentación de quejas y sugerencias, consulta del estado de un procedimiento judicial, publicación electrónica de resoluciones y comunicaciones en el tablón de edictos, comprobación de autenticidad e integridad de los documentos emitidos, iniciar procedimientos judiciales y presentar escritos de mero trámite, firmado de documentos de manera electrónica, etc.” (fecha consulta 28.09.2015).

¹¹⁰ GONZÁLEZ GRANDA, PIEDAD, considera que “habrá que entenderse que, sólo cuando no exista dicho Servicio Común, la recepción de los actos de comunicación por parte de los procuradores en nombre de sus clientes será en la propia sede del órgano judicial” (“Tomo I. Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas procesales”, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* -5 tomos-; Coord.: CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN, y MORENO CATENA, VÍCTOR) Tecnos, Madrid, 2000, pág. 269), interpretación que no compartimos porque deja fuera la posibilidad, cierto que poco frecuente, de que el procurador pueda recoger una determinada comunicación como apoderado de alguien no personado.

quienes por auxilio judicial corresponde su realización (art. 165), por sí mismos o directamente por los Servicios Comunes que se hubiese creado en sus respectivas circunscripciones.

2.3.2.- El domicilio del demandado

Si las partes no actúan con procurador o se trata del primer emplazamiento o citación al demandado, dispone el art. 155 que *los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes*. Ni ese precepto ni en ningún otro de la LEC encontraremos, sin embargo, una definición legal de domicilio¹¹¹. Lo que sí hace es determinar los lugares que se considerarán como tal y, después de establecer que se entenderá como domicilio del propio demandante *el que haya hecho constar en la demanda o en la solicitud con que se inicie el proceso*, el precepto exige al demandante que en dicho primer escrito designe *como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste*, no uno cualquiera, sino, y esto es lo extraño, *uno o varios lugares a que se refiere el apartado siguiente* (art. 155.2¹¹²). En consecuencia, nos encontramos, por un lado, con una especie de presunción provisional, sin necesidad de comprobación alguna inicial, de que el domicilio o señas efectivas de aquel será el indicado por el demandante, y, por otro, con una incomprensible limitación en la determinación del domicilio, pues el artículo no dice que aquel podrá designar, no el que entienda que pudiera resultar eficaz, sino únicamente el referido a los lugares que el mismo precepto contiene en su apartado siguiente.

La remisión a que obliga dicho apartado respecto a esos *lugares*, que son los que *podrá[n] designarse como domicilio a efectos de actos de comunicación*, y que podríamos denominar como domicilios “oficiales” o “legales”, son los siguientes (art. 155.3):

- *El que aparezca en el **padrón municipal**. Según su normativa reguladora, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que se resida habitualmente*¹¹³.

¹¹¹ Tampoco realiza una distinción formal entre domicilio y residencia.

¹¹² Precepto que exige además al demandante indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de este, como *números de teléfono, de fax dirección de correo electrónico o similares* (párr. 2º).

¹¹³ Art. 15 de la **Ley 7/1985**, de 02.04, *Reguladora de las Bases de Régimen Local*, así como art. 54.1 del **RD 1690/1986**, de 11.07, *por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales*. Según ambos textos, *el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos* (art. 16.1 de la Ley y art. 53.1 del Reglamento).

La inscripción en el Padrón es obligatoria a tenor de lo que establece el art. 15 de la Ley: *Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del*

- ***El que conste oficialmente a otros efectos.*** Podemos citar aquí:
 - El domicilio fiscal, que puede ser el que figure en la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las distintas Administraciones autonómicas respecto de tributos cedidos.
 - El obrante en su afiliación a la Seguridad Social, ya como empresa o profesional autónomo, ya como empleado por cuenta ajena.
 - El que pueda aparecer en el Registro Central de Rebeldes Civiles (art. 157.2¹¹⁴).
- ***El que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratase, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente.*** Se trata de una concreción del anterior que podría subsumirse en él. Piénsese en:
 - El Registro de la Propiedad, por ejemplo, el domicilio hipotecario que hubiere podido fijar el deudor y/o el hipotecante no deudor.
 - El Registro Mercantil, respecto del domicilio social las sociedades inscritas. En este registro público se identifica también a los administradores societarios, pero, salvo que se trate, a su vez, de otra persona jurídica, no siempre figurará su domicilio¹¹⁵ o podrá

municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

La anterior previsión se desarrolla en el art. 70 del Reglamento al disponer que *cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el padrón del municipio de destino, el cual, en los diez primeros días del mes siguiente, la remitirá al municipio de procedencia, donde se dará de baja en el padrón al vecino trasladado sin más trámite. En el caso de que la persona no estuviera empadronada con anterioridad o desconociera el municipio de su anterior inscripción padronal, lo hará constar así.*

Asimismo, conforme al art. 100.1, *todo español residente en el extranjero que traslade su residencia a territorio español deberá solicitar el alta en el padrón municipal del municipio donde vaya a fijar su residencia.*

¹¹⁴ **Art. 157.2:** *Cualquier Secretario judicial que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso, mediante diligencia de ordenación, podrá acordar directamente la comunicación edictal del demandado.* Estudiaremos este Registro tan singular en el Capítulo V.

¹¹⁵ Sí apareció en el caso conocido por la **SAP Badajoz (Secc. 3ª) 15.07.2014** (Roj: SAP BA 772/2014): *“El apelante recurrió la sentencia de fecha 9 de febrero de 2012, una vez le fue notificada la misma en el domicilio personal que constaba en el documento aportado, y admitido por esta Sala, en el recurso de apelación. El documento es una nota simple literal del Registro Mercantil de Badajoz referente a la mercantil «SINVEEX, S.L.», en el que además de constar el domicilio social, consta el domicilio personal de don Jose Miguel [EL APELANTE]. [...] El Secretario Judicial y la parte demandante actuaron omitiendo la diligencia debida. La parte actora debió ofrecer la información relativa al domicilio particular de don Jose Miguel, que constaba en el Registro Mercantil de Badajoz, pues ella misma se sirvió de este para indicar en su demanda el domicilio social de ella que constaba en el Registro Mercantil de Badajoz, y referente a la mercantil «SINVEEX, S.L.». Por su parte el Secretario Judicial, constando esta información en un Registro público, tendría que haber indagado esta,*

aparecer de forma incompleta (solo se indica la ciudad), por lo que cabe plantearse si el órgano judicial ha de averiguar de oficio aquellas señas en el marco del agotamiento de las posibilidades de comunicación personal con la parte que con tanta reiteración proclama la jurisprudencia. Como veremos en otro capítulo, la respuesta doctrinal y jurisprudencial se decanta en sentido afirmativo (vid., 'infra', Capítulo V).

- Revistas especializadas editadas por los Colegios de abogados, procuradores, médicos, arquitectos, incluso la *lista de colegiados o asociados* dispuestos a actuar como peritos judiciales a que se refiere el art. 341.1.
- *El lugar en que se desarrolle **actividad profesional o laboral** no ocasional.*
- *El de la **vivienda o local arrendado**, tratándose de demandas de desahucio por falta de pago fin del contrato del art. 250.1.1º, si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio¹¹⁶.*
- De forma alternativa, tratándose de demandados personas jurídicas como acabamos de indicar, *podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como **administrador**, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial¹¹⁷.*

Lo anterior nos plantea el interrogante de qué ocurre si el demandante sabe que el demandado puede ser localizado en un determinado lugar y este no se corresponde con ninguno de los mencionados en el art. 155.3 LEC. En teoría esa designación no sería válida *a efectos de actos de comunicación* pese a que pueda llegar a cumplirse el objetivo esencial de que los mismos lleguen a conocimiento del destinatario. Por incomprensible que esto pueda parecer, lo cierto es el que el precepto no introduce una cláusula abierta del tipo "y/o cualquier otro lugar donde el demandado pueda ser hallado", como sí ocurre, por cierto, en sede de ejecución forzosa, a la hora de fijar el lugar donde el ejecutado puede ser requerido de

debido a su fácil disponibilidad, antes de recurrir a la comunicación edictal, ya que el apelante constaba inscrito con fecha de 22 de octubre de 2004 como Consejero de «SINVEX, S.L.» en el Registro Mercantil de Badajoz, constando también su domicilio personal, el que a la postre sirvió para notificar de forma efectiva la Sentencia apelada. [...] La comunicación edictal, en el presente caso, ha constituido una clara vulneración de las normas procesales esenciales del procedimiento, generando indefensión en el apelante" (F. D. 2º).

¹¹⁶ Vid. **SAP Madrid (Secc. 20ª) 26.12.2012** (Roj: SAP M 22592/2012).

¹¹⁷ Vid. **SAP León (Secc. 1ª) 05.07.2013** (Roj: SAP LE 1021/2013), que conoció el supuesto inverso, es decir, del emplazamiento al demandado administrador en el domicilio social de la mercantil, y que terminó por no considerarlo válido.

pago (art. 582¹¹⁸). No obstante, en la doctrina se ha entendido mayoritariamente que la relación de domicilios del art. 155.3 no tiene carácter taxativo sino meramente enunciativo, planteamiento que nos resulta totalmente acertado y deseable para que no estemos ante una disposición legal sin sentido, pero al mismo tiempo incompatible con la dicción literal, clara y determinante, del apartado segundo, cuyo mandato se concreta en el apartado tercero¹¹⁹. Solo una aplicación aislada del apartado 3 del art. 155, desconectado del apartado 2, parece lógica¹²⁰.

En cualquier caso, se trata de una disquisición carente de repercusión práctica, pues en la vida diaria judicial esa vinculación pasa, sencillamente, desapercibida aplicando “a vuela pluma” el art. 155.2. Difícilmente podrá ser declarado nulo un proceso en el que, citado o emplazado el demandado, desde luego si lo ha sido en forma personalísima, en un lugar distinto de los enunciados por dicho precepto, tanto más si el mismo ha podido comparecer y ejercitar oportunamente su derecho de defensa. Y no solo en el foro: la jurisprudencia y la doctrina parecen omitir de plano¹²¹ este sin sentido y exigen que el demandante informe de todos los do-

¹¹⁸ **Art. 582p1:** “Lugar del requerimiento de pago”. *El requerimiento de pago se efectuará en el domicilio que figure en el título ejecutivo. Pero, a petición del ejecutante, el requerimiento podrá hacerse, además, en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado.*

¹¹⁹ MARES ROGER entiende “que la previsión del art. 155.3 tiene un sentido más enunciativo que taxativo, como lo denota no sólo el carácter potestativo de su tenor («podrá designarse como domicilio»), sino la subsidiariedad respecto del domicilio que conozca directamente la parte demandante –que perfectamente pueda no coincidir con el que resulte del padrón o Registro público–” [“Los actos de comunicación... (I)”, op. cit., pág. 4]. En el mismo sentido FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO, JAVIER ÁNGEL: “la LEC permite al demandante designar no uno, sino varios lugares como posibles domicilios, para lo cual, el art. 155 LEC señala varios posibles (básicamente los que consten en registros y el lugar de trabajo no ocasional), si bien puede designar cualquier otro que conozca” (“La averiguación del domicilio del demandado para la práctica de los actos de comunicación”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 2139, febrero de 2012, Madrid, pág. 9); FURQUET MONASTERIO: “en todo caso, el domicilio oficial parece ser subsidiario respecto de aquél que indique el propio demandante, en virtud de los términos con que se expresa el art. 155.3: “A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio”. Este *podrá* tiene carácter facultativo, introduce una enumeración de los posibles lugares que pueden designarse como domicilio, pero ello no significa que el demandante no pueda indicar cualquier otro que conozca” (*Las comunicaciones procesales*, op. cit., pág. 94); o REVILLA PÉREZ, que habla de un “sistema de *numerus clausus* relativo” (“Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 272).

¹²⁰ Aplicación aislada que también sugerimos del apartado 3 del art. 155 con el apartado 1 del art. 156, donde se habla del caso de que el demandante manifestara que les imposible designar *un* domicilio, pero sin aludir expresamente a unos de los domicilios del precepto anterior.

¹²¹ Vid. **SAP Albacete (Secc. 2ª) 24.09.2009** (Roj: SAP AB 764/2009), que omite directamente el aptdo. 2 del art. 155: “El artículo 152.1 de la LEC establece que: [...]. Y el artículo 155.3 del mismo Texto Legal determina que: [...]” (F. J. 4º); **SAP Valencia (Secc. 9ª) 28.07.2009** (Roj: SAP V 3129/2009): “no es de apreciar por la Sala motivo de nulidad en relación con la forma en que se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Sr. Pablo, por cuanto la diligencia se practicó en el domicilio que a la parte actora le constaba en el contrato de préstamo del que resultaba la deuda” (F. J. 2º); **SAP Madrid (Secc. 20ª) 09.12.2010** (Roj: SAP M 17963/2010): “De lo actuado se acredita que la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.2 de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establece que el demandante podrá designar, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios lugares como

micilios que conozca, sin sujeción a ‘*numerus clausus*’ alguno y con la única premisa de la efectiva localización del demandado. De este modo se ha dado por bueno el emplazamiento practicado, por ejemplo, en el domicilio contractual¹²² o en el domicilio designado en la solicitud de asistencia jurídica gratuita¹²³, e incluso se ha exigido intentar la comunicación en un apartado de correos¹²⁴.

Por otro lado, esta restricción a la hora de designar el domicilio del demandado, siempre que sea persona física, no tiene en cuenta que una cosa es el domicilio “legal” y otra el domicilio “real”, coincidente con el lugar de “residencia”¹²⁵. La LEC debiera acoger por tanto una acepción amplia de domicilio que permita “abarcar[r] una dimensión plural amplia”, como entendió la **STS 30.01.1993** al estudiar el art. 40 CC¹²⁶. En otro momento (‘*infra*’, Capítulo V) sostendremos que esta valoración no debería aplicarse a las personas jurídicas.

Y en realidad nos atreveríamos a ir más allá y no exigir siquiera la existencia de un domicilio como tal, sino simplemente *cualquier lugar* donde el destinatario *pudiera ser hallado*, como permite el art. 582 a efectos del requerimiento de pago

domicilios, en los que, a su entender, pudiere efectuarse con éxito la comunicación, facilitó, o tres, como sostiene la parte demandada o, en todo caso, dos, como aduce la parte actora” (F. J. 2º).

¹²² **SAP Madrid (Secc. 20ª) 22.01.2013** (Roj: SAP M 634/2013): “el emplazamiento se efectuó de manera correcta y no se aprecia en ello vulneración de los derechos del demandado por cuanto el domicilio designado en la demanda y en el que se acordó efectuar el emplazamiento, era el que se correspondía con el que constaba en los contratos suscritos por el demandado y donde fue requerido el propio demandado” (F. J. 4º); ídem **SAP Madrid (Secc. 12ª) 11.07.2012**, F. J. 5º (Roj: SAP M 13719/2012)

¹²³ **SSAP Barcelona (Secc. 13ª) 14.09.2010**, F. J. 1º (Roj: SAP B 7233/2010) y **14.03.2005**, F. J. 3º (Roj: SAP B 2243/2005).

¹²⁴ **SAP Madrid (Secc. 20ª) 09.12.2010** (Roj: SAP M 17963/2010): “[...] se ha vulnerado lo establecido en el artículo 155.2 de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil, y no se ha practicado la diligencia de emplazamiento en uno de los domicilios designados por la propia parte actora en la demanda. [...] con independencia de todas las vicisitudes habidas en cuanto a la práctica del emplazamiento en el primer domicilio designado por la actora, se ha omitido toda actividad en cuanto al facilitado del apartado de correos, donde consta que recibía documentación y era conocido por la demandante” (F. J. 2º).

¹²⁵ **Art. 40p1 CC**: *Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, en que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

¹²⁶ Roj: STS 294/1993: “El referido precepto sustantivo sólo contiene en forma aproximada lo que debe entenderse por el domicilio de las personas naturales, al hacer referencia para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones civiles el del lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero el concepto del domicilio abarca una dimensión plural amplia, pues aparte del real, que corresponde a la residencia permanente e intencionada en un precisado lugar o como también ha sostenido esta Sala en forma objetivizada (sentencias de 3-12-1955 y 18-5-1956), al tenerse sólo en cuenta la efectiva vivencia y habitualidad, con raíces familiares y económicas, también prevén los ordenamientos los denominados domicilios legales, así como las vecindades administrativas –no coincidentes siempre con el efectivo domicilio (STS 8-3-1983), los de los comerciantes y otros, como los de naturaleza exclusivamente procesal, foral, internacional, social, diplomática, de militares, domicilios oficiales, etc.” (F. J. 2º).

ejecutivo y como también se prevé en el ámbito notarial¹²⁷.

2.4.- TIEMPO DE LAS COMUNICACIONES JUDICIALES

2.4.1.- Días y horas hábiles

Los actos de comunicación no pueden realizarse en cualquier momento que tenga por oportuno el órgano judicial o según mejor le convenga al sujeto activo que los practica. Han de sujetarse, como el resto de actos procesales, a una serie de reglas dispuestas por las leyes sobre cuándo y en qué plazo han de llevarse a cabo. El marco genérico lo establece el art. 130.1, según el cual *las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles*. Respecto a los días, la LEC los determina en sentido negativo o inverso, lo mismo que la LOPJ en su art. 182.1¹²⁸, estableciendo cuáles son los **inhábiles a efectos procesales**, a saber (art. 130.2):

Los sábados y domingos,...

...y los días 24 y 31 de diciembre,...

....los días de fiesta nacional...

...y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma...

...o localidad.

*También serán inhábiles los días del mes de agosto*¹²⁹.

Las horas hábiles sí que se establecen en sentido positivo, considerándose como tales, señala el art. 130.3p1, *las que median desde la ocho de la mañana a las ocho de la tarde*. Lo mismo dice el art. 182.2 LOPJ¹³⁰, que por su vocación de aplicación general para todas las jurisdicciones añade el inciso *salvo que la ley disponga lo contrario*. Así sucede en la LEC, donde se establecen las siguientes excepciones:

1ª Dos horas más para los actos de comunicación y ejecución: Para la materia que nos ocupa, además de para los actos de ejecución, la LEC permite que la

¹²⁷ Posibilidad también prevista en el Reglamento Notarial a la hora de realizar notificaciones y requerimientos: La diligencia podrá practicarse en cualquier lugar distinto del designado, siempre que el destinatario se preste a ello y sea identificado por el notario (art. 202, párr. 7º).

¹²⁸ **Art. 182.1 LOPJ:** *1. Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad.*

El Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitar estos días a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes.

¹²⁹ **Art. 183 LOPJ:** *Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.*

Este precepto se dictan en concordancia con el año judicial, que el **art. 179 LOPJ** define como el período ordinario de actividad de los Tribunales y que se extenderá desde el 1 de septiembre, o el siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada año natural.

¹³⁰ **Art. 182.2 LOPJ:** *Son horas hábiles desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario.*

jornada se extienda *hasta las diez de la noche* (art. 130.3p2), medida pensada para tratar de asegurar el éxito de los actos de comunicación personal y de las medidas de ejecución, sobre todo con aquellos destinatarios que por tener jornada laboral de tarde difícilmente pueden ser hallados en su domicilio antes de las 20:00 horas. Los usos y costumbres sociales suelen marcar dicha hora como el comienzo del cierre de muchos negocios y establecimientos, profesiones liberales y comercios, excepción hecha de las grandes superficies, que en España prolongan la actividad comercial hasta las 22:00 horas.

Se trata de una previsión que no estaba presente en el Borrador del Proyecto de la LEC de 1998 (cuyo art. 129 –luego art. 130– solo contaba con el primer párrafo del actual) y que fue introducida en el Congreso tras la aceptación de la enmienda presentada al efecto por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU)¹³¹. Y es más, el CGPJ, al que se sumó el Consejo de Estado¹³², había llegado previamente a proponer (sin éxito) la plena libertad temporal (“en cualquier hora y día”) para la práctica actos de comunicación en su preceptivo Informe de 1998 al Anteproyecto de LEC de 1997¹³³, medida sin duda excesiva¹³⁴ en el ámbito de la jurisdicción civil

¹³¹ Enmienda n.º 1.119 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, “a los efectos de adicionar un segundo párrafo al apartado 3 del artículo 129. Redacción que se propone: «Artículo 129. 3. Se entiende.../... otra cosa. Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.» JUSTIFICACIÓN Permite la realización de los actos de comunicación y ejecución en horas en que las personas afectadas pueden hallarse en sus domicilios” (BOCG, Serie A, n.º 147-9 de 26.03.1999, pág. 502).

El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también puso objeciones a la medida, aunque con su enmienda n.º 1629 planteaba de forma radical “suprimir la totalidad del Título V del Libro Primero” (BOCG, Serie A, n.º 147-9 de 26.03.1999, pág. 646). Sobre el particular aducía que “el Proyecto incurre en error de gran trascendencia práctica en materia de horas hábiles para realizar los actos de comunicación. Practicar las notificaciones en los domicilios es muy difícil sobre todo si se hace durante los horarios de mañana. Está demostrado que el nivel de efectividad total de las notificaciones se produce después de las 8 de la noche, y curiosamente el Proyecto insiste de nuevo en que los actos procesales no pueden realizarse nada más que de 8 de la mañana a 8 de la tarde (art. 129.3). El que para poder hacer una notificación después de las 8 de la tarde sea preciso una habilitación especial (art. 130) es algo incomprensible. ¿A qué se debe que la LEC de finales del siglo XX diga exactamente lo mismo que la del final del siglo XIX cuando la realidad social ha variado radicalmente? En 1881 la luz eléctrica era casi impensable y los medios mecánicos de comunicación eran muy escasos, motivos por los cuales se comprende la importancia de las horas solares para llevar a cabo las actuaciones judiciales. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro mundo? Ahora las notificaciones se hacen fundamentalmente por la mañana y resulta muy difícil encontrar a quien se busca. Por eso no es fácil de entender por qué no se permite un horario mucho más flexible en materia de notificaciones” (ídem, pág. 648).

¹³² “Este Consejo comparte la sugerencia del Consejo General del Poder Judicial de que el artículo 128 del Anteproyecto precise que, a los efectos de practicar actos de comunicación, todos los días y horas serán hábiles” (Dictamen de 17.09.1998 relativo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, Consideración decimosegunda).

¹³³ “Por razones de eficacia evidentes debería incluirse un nuevo apartado en el artículo 130 del Anteproyecto por el que se dispusiera que la realización de los actos de comunicación se puedan realizar en cualquier día y hora sin necesidad de previa habilitación. Se trata de actuaciones materiales que no se deben encuadrar en el concepto técnico de actos procesales [sic], permitiendo con ello resolver los múltiples problemas que se dan en la realidad, habida cuenta que muchas de estas acti-

que no atendía al debido respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, además de la “dificultad que entraña disponer de un servicio que abarque todas las horas del día para practicar esas diligencias” (CUBILLO LÓPEZ¹³⁵).

2.ª Posibilidad de habilitación de días y horas inhábiles: La LEC aprovecha la cobertura que proporciona el art. 184.2 LOPJ¹³⁶ y dispone en su art. 131.1p2 que, *de oficio o a instancia de parte, los Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija*. El párrafo 2º de dicho precepto fue reformado por Ley 13/2009 para matizar que *esta habilitación se realizará por los Secretarios Judiciales cuando...*

- *...tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia,...*
- *...cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas...*
- *...o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los Tribunales.*

Por tanto, si es necesario habilitar un día inhábil para la práctica de un acto de comunicación, habrá de ser el Letrado de la Administración de Justicia quien lo acuerde¹³⁷, siempre que se dé el presupuesto de la medida, la *urgencia*, que la propia ley procesal se encarga de definir en el art. 131.2: *Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora...*

- *...pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia,*
- *... o provocar la ineficacia de una resolución judicial.*

Suele ocurrir, sin embargo, que en aquellas poblaciones con gran demanda de trabajo se realice por parte de los Servicios Comunes una interpretación excesivamente laxa de esta noción de “urgencia”, procediendo el Letrado de la Adminis-

vidades no se pueden llevar a efecto con resultado positivo dentro de los días y oras hábiles que se fijan en el apartado nº 2 del artículo 129 del Anteproyecto. Lógicamente, los efectos de los actos de comunicación, en cuanto al cómputo de los plazos para los destinatarios, no comenzarán hasta el primer día hábil siguiente a su realización” (Informe de 11.05.1998 al ALEC de 26.12.1997, pág. 81).

¹³⁴ “Radical” fue el término empleado por CACHÓN CADENAS, a quien le pareció oportuno la enmienda de CiU (“Jurisdicción, partes y actos procesales”, op. cit. pág. 379-380).

¹³⁵ CUBILLO LÓPEZ, IGNACIO: *La regulación de las actuaciones del juicio*, La Ley, Madrid, junio 2001, pág. 25-26.

¹³⁶ **Art. 184 LOPJ:** 1. *Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.*

2. *Los días y horas inhábiles podrán habilitarse con sujeción a lo dispuesto en las leyes procesales.*

¹³⁷ Aunque nada dice el precepto acerca de qué tipo de resolución hay que dictar, es práctica común que el Letrado de la Administración de Justicia emplee el Decreto, por ser *preciso o conveniente razonar lo resuelto* (art. 206.2.2ª). Frente a dicha resolución *no se admitirá recurso alguno* (art. 131.4).

tración de Justicia a cargo de los mismos a habilitar todo el mes de agosto para la práctica de diligencias como si de un mes cualquiera se tratara, pero informando al destinatario de que los eventuales plazos procesales comienzan a correr a el primer día hábil de septiembre¹³⁸. Creemos que esto es improcedente. La acumulación de diligencias se ha de solucionar con más personal o realizando una mejor organización del ya existente, no forzando la letra de la ley.

2.4.2.- Plazos y términos procesales

a) *Plazo de notificación de las resoluciones*

Establecido el marco temporal en que pueden y deben practicarse los actos de comunicación, lo siguiente es determinar el plazo en que han de llevarse a cabo desde que se acuerda su realización por la autoridad competente, aspecto en el que la ley es notablemente incompleta y sesgada. El único precepto de la LEC que, según se deduce de su título (“Tiempo de la comunicación”), pretende regular este requisito, el art. 151, es, desafortunadamente, un buen ejemplo de deficiente técnica legislativa. Veamos por qué:

1º.- Solo se refiere una clase de acto de comunicación como son las notificaciones, estableciendo que *todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de 3 días¹³⁹ desde su fecha o publicación* (aptdo. 1º). Visto que nada dice del resto de tipologías del art. 149, el plazo máximo para practicarlas vendrá determinado únicamente por el bienintencionado art. 132.2: las actuaciones del proceso, *cuando no se fije plazo ni término, se entenderán que han de practicarse “sin dilación”*. Curiosamente, cuando los actos de actos de comunicación se hayan de practicar a través de auxilio judicial por tribunal distinto del que los ordene (art. 165p1), sí que se le impone un plazo, que ha de ser *no superior a 20 días para su cumplimentación, contados a partir de su recepción* (art. 165p2).

2º.- La disposición se refiere a la práctica material del acto de comunicación, cuestión que en el caso de las notificaciones puede tener sentido, pero no cuando se trate del resto de comunicaciones, en las que su realización depende en gran medida de factores externos y de otros sujetos que escapan a la voluntad del emisor. Si la ley hubiera tenido en cuenta la distinción entre envío, recepción y realización, la mencionada rúbrica de “tiempo de la comunicación notificación” debería haberse titulado “plazo para la práctica de los actos de comunicación”, y, aún así, tendría que ser entendido como indica CUBILLO LÓPEZ cuando afirma que “el plazo señalado de tres días debería referirse al tiempo máximo en que el Secre-

¹³⁸ A veces se le entrega una copia del Decreto de habilitación “general”; otras una escueta nota fotocopiada informativa o, en el peor de los casos, advirtiéndolo oralmente.

Vid. “consulta” “Cómputo del plazo en la notificación persona a la parte en el mes de agosto”: en ella se contesta que “el plazo empieza el día siguiente hábil (1 de septiembre)”, *Proceso civil, Cuaderno Jurídico*, n.º 118, 1er trimestre 2015, pág. 43 (SP/CONS/85926), Sepin, Madrid.

¹³⁹ El correlativo de este precepto en la regulación anterior era más rígido; art. 260p1 LEC 1881: “Todas las providencias, autos y sentencias se notificarán a quienes sean parte en el juicio, en el mismo día de su fecha o publicación, y, no siendo posible en el siguiente”.

rio judicial debe *dar curso* al acto de comunicación, y no tanto al tiempo en que la notificación ha de quedar materialmente efectuada”¹⁴⁰. Con ello tendríamos un precepto igual –excepto en el plazo– al existente en el procedimiento administrativo, donde, tanto el art. 58 de la todavía vigente Ley 30/1992¹⁴¹, como el art. 40.2 de la Ley 39/2015¹⁴² que la sustituirá el 02.10.2016¹⁴³, disponen que *toda notificación “deberá ser cursada” dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado*.

Este plazo de tres días de la LEC bien podría emplearse para el resto de actos de comunicación, de forma que una citación a un testigo, por ejemplo, no debería tardar más de ese tiempo en ser expedida y remitida o “cursada”¹⁴⁴ por el órgano judicial, ya sea por correo, o para su entrega al SCNE o al procurador, o incluso para su envío telemático al correo electrónico reconocido del destinatario. No obstante, hay que señalar que desde la implantación del sistema de comunicación telemática Lexnet (y análogos¹⁴⁵) la previsión legal del art. 151.1 ha cobrado sentido de forma sobrevenida, al ser ya posible que la notificación de las resoluciones se pueda efectuar materialmente casi de forma inmediata.

3º.- El apartado segundo, del que nos ocuparemos enseguida, y 3¹⁴⁶ introducen una importante modulación respecto al momento en que se han de tener realizados los actos de comunicación cuando vayan dirigidos a determinados destinatarios o a la necesidad de acompañar documentos y, en tanto que se encuentra en íntima conexión con el cómputo de los plazos procesales, se ha dicho que inclu-

¹⁴⁰ CUBILLO LÓPEZ: “Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 304. En el mismo sentido de que “se refiere al tiempo límite para que salga de la Secretaría”, COLOM PERPIÑA, JORDI: “Las notificaciones en los procesos judiciales con especial referencia al contencioso-administrativo y propuestas de reforma”, *Las notificaciones. Problemas y reformas* (VV.AA.), Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2008, pág. 23.

¹⁴¹ Ley 30/1992, de 26.11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992).

¹⁴² Ley 39/2015, de 01.10, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 02.10.2015).

¹⁴³ Disposición final séptima: “Entrada en vigor”. *La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» [...]*.

¹⁴⁴ “Con el término «cursar» se hace referencia al momento inicial en que se pone en movimiento el oficio o documento de notificación, con el deseo de hacerlo llegar a su destinatario”, según explican FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ, y DEL CASTILLO VÁZQUEZ, ISABEL-CECILIA, al estudiar el art. 58 LRJAP, mientras que en la precedente Ley de Procedimiento Administrativo de 17.07.1958 se decía la “práctica” de la notificación, expresión que “incluía, o al menos así se ha venido interpretando, todo el proceso hasta su recepción efectiva por el destinatario” (*Manual de las Notificaciones Administrativas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pág. 234).

¹⁴⁵ Vid., infra, Capítulo III, respecto de los sistemas informáticos implantados en las Comunidades Autónomas de Cantabria, País Vasco y Navarra.

¹⁴⁶ **Art. 151.3:** *Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento.*

sión en este precepto “a efectos sistemáticos no parece adecuada”¹⁴⁷ porque quizá pudieran estar mejor ubicados a efectos aclaratorios en el art. 133.

b) Ficción legal de la realización del acto de comunicación con determinados sujetos

Este precepto, de estructura compleja recientemente modificada por la Ley 42/2015, contiene una serie de previsiones que necesitan ser desglosadas para su mejor entendimiento. Dice así:

Los actos de comunicación...

...al Ministerio Fiscal...,

...a la Abogacía del Estado,...

...a los Letrados...

...de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas,...

...o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social,...

...de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas...,

...o de los Entes Locales,...

...así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores,...

...se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste...

...en la diligencia...

...o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil¹⁴⁸.

El precepto introduce una modulación de la norma general del cómputo de los plazos (*...comenzarán a correr desde el día siguiente...*) que preceptúan los art. 133.1 y 278 en caso de que los actos de comunicación vayan destinados a los sujetos que relaciona, creando la “ficción legal” (REVILLA PÉREZ¹⁴⁹) de que se han practicado, en principio, el día hábil posterior a la fecha de recepción (día $n+1$). La

¹⁴⁷ FURQUET MONASTERIO, *Las comunicaciones procesales*, op. cit., pág. 115, nota al pie n.º 385.

¹⁴⁸ La redacción anterior este apartado del precepto, dada por Ley 41/2007, era como sigue: “Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley”.

¹⁴⁹ REVILLA PÉREZ, LUÍS: “Los actos de comunicación en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, págs. 247 y 250.

alteración no está en el ‘dies a quo’ de los plazos procesales, que sigue siendo el día siguiente a que el acto de comunicación se tiene por *efectuado* (art. 133.1) o *realizado* (art. 151.2), sino en que ese día no es tal, sino el inmediatamente posterior.

En cuanto a la recepción, la misma deberá constar, bien *en la diligencia*, si se han remitido por la vía tradicional y en formato papel, bien *en el resguardo acreditativo de su recepción* cuando se hayan empleado medios telemáticos ex art. 162. La frase que aparece punto y seguido, añadida por la Ley 42/2015, ha de entenderse referida a este segundo supuesto y solventa los problemas surgidos hasta ahora con las comunicaciones telemáticas realizadas fuera del horario matinal habitual, estableciendo la excepción de la excepción para aquellos que hayan sido remitidos con posterioridad a las 15:00 horas, que se tendrán por *recibidos* al día siguiente hábil (día $n+2$).

Esta regla especial de otorgar un “día de más” a los destinatarios mencionados ha merecido la crítica de parte de la doctrina, e incluso fue puesta en duda por el CGPJ¹⁵⁰, desde que se introdujo por la LEC 2000¹⁵¹, entendiéndose que otorga un trato preferente o privilegiado que ocasiona un agravio comparativo respecto de los litigantes particulares u otros profesionales como los abogados (BERNAL LÓPEZ¹⁵²; DE HOYOS SANCHO¹⁵³; COLOM PERPIÑA¹⁵⁴; JULVE GUERRERO¹⁵⁵). La ‘ratio’ de la disposición es la de estar ante actos de comunicación que no se practican directamente con sus destinatarios o sus representantes, sino por mediación de la organización en la que se integran. Así, los procuradores a través de los *servicios de recepción de notificaciones* (arts. 28.3 y 154.2) y el Ministerio Fiscal, en principio, en las Oficinas fiscales. En el caso de la Abogacía del Estado, el día adicional no está tan justificado –para AZNAR LÓPEZ, “privilegio de la administración, sin fundamento”¹⁵⁶–, en tanto que cuenta con una ley especial, la Ley 52/1997, de 27.11,

¹⁵⁰ Duda o, sencillamente, incompreensión, pues en el Informe al ALEC de 1997 no dijo más al respecto que lo siguiente: “una observación de detalle que cabe hacer es que no se entiende que el que el art. 151.2 del Anteproyecto conceda un día más de plazo cuando los destinatarios de la comunicación son la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal o los Colegios de Procuradores” (*Estudios, informes...*, op. cit., pág. 186).

¹⁵¹ En cuyo Anteproyecto de 1997 ya estaba presente: “Artículo 151. [...] 2. Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia”. El texto no experimentó cambios durante la tramitación posterior y así quedó en la Ley 1/2000.

¹⁵² BERNAL LÓPEZ, M^a DEL CARMEN: “Actos de comunicación, auxilio judicial y presentación de escritos en la L.E.C.; pasado, presente y futuro” (Ponencia impartida en las Jornadas “Actos de comunicación: nuevas tecnologías” –2001–), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º VI, 2001, pág. 735-36.

¹⁵³ *Ley de Enjuiciamiento Civil: Respuestas a 100 cuestiones polémicas* (Coord: JIMÉNEZ CONDE, FERNANDO), Sepin, Madrid, 2002, Cuestión 10, pág. 123.

¹⁵⁴ COLOM PERPIÑA: “Las notificaciones...”, op. cit., pág. 23.

¹⁵⁵ JULVE GUERRERO: “Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 342.

¹⁵⁶ AZNAR LÓPEZ, MARÍA ISABEL: “Actos de comunicación y embargo” (Ponencia impartida en el curso “Macrooficinas judiciales y servicios comunes. Una Visión práctica de los mismos), *Estudios Jurídicos*.

de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que expresamente ordena que las comunicaciones se entiendan *directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial* (art. 11.1¹⁵⁷), no con la “Abogacía del Estado” como institución. No obstante, la promulgación de la Ley 42/2015 ha provocado que haya quedado en un segundo plano esa disposición. La obligatoriedad de relacionarse por medios telemáticos con estos profesionales por parte del órgano judicial hace innecesario dirigirse a la sede oficial correspondiente para practicar los actos de comunicación por las vías convencionales, salvo que no sea posible por *causas técnicas*, eventualidad para la que el art. 162p2 prevé que *el acto de comunicación se entregará mediante entrega de copia de la resolución*.

La aparente aplicación unitaria de esta disposición a dichos destinatarios se disipa en cuanto se estudian las remisiones internas existentes, debiendo distinguirse los tres grupos siguientes de destinatarios:

1.- **Ministerio Fiscal.** Quienes se muestren contrarios al privilegio que otorga el art. 151.2 a los colectivos anteriores podrán acrecentar su crítica tras la Ley 42/2015, que mediante la disposición transitoria cuarta, apartado 1¹⁵⁸, otorga al Ministerio Fiscal lo que no puede llamarse sino un superprivilegio, al extender a nada menos que a *los diez días naturales* el momento en que habrán de considerarse realizados los actos de comunicación con aquel. La disposición transitoria emplea el término *plazo*, que no existe propiamente dicho en el precepto afectado, indica que son naturales, cuando por sistemática debieran ser procesales, y fija este muy discutible régimen *hasta el 1 de enero de 2018*.

Por tanto, con esta nueva excepción, introducida por el Senado en el proyecto de ley remitido por el Congreso¹⁵⁹, los actos de comunicación al Ministerio público

Cuerpo de Secretarios Judiciales n.º IV, 2002, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, pág. 520.

¹⁵⁷ **Art. 11.1 Ley 52/1997:** *En los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración General del Estado, los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que las normas internas de estos últimos o las leyes procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado.*

La disposición es completada por el art. 35.1 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado (RD 997/2003, de 25.07): *Los Abogados del Estado cuidarán de que todas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal que deban practicarse en los procesos en que sean parte se entiendan directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado. A tal efecto, si fuera necesario, en los primeros escritos que dirijan a los órganos jurisdiccionales y en cualquier otro caso en que resulte procedente se hará constar la sede de la Abogacía del Estado competente.*

¹⁵⁸ Disp. Trans 4ª, aptdo. 1: *Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, el plazo que se establece en el artículo 151.2 será de diez días naturales.*

¹⁵⁹ Enmienda n.º 281 presentada por el Grupo Popular en el Senado (GPP), con la siguiente “Justificación”: “Se hace necesario ampliar el plazo de efectividad de los actos de comunicación dirigidos al Ministerio Fiscal dadas sus especiales características organizativas y de intervención en todo tipo de órdenes y procesos así como el volumen de actos de comunicación que reciben. Considerando

se tendrán por realizados “a los diez días naturales siguientes a la fecha de recepción”, espacio de tiempo a todas luces excesivo que causará una injustificable dilación de los procesos en los que sea parte o deba intervenir de otro modo. Y por si esto no fuera ya sangrante, aún podrá disponer de tres días (procesales) adicionales si la comunicación se realiza por medios telemáticos, como será obligación con el Ministerio público y otros profesionales a partir del 01.01.2016 (art. 152.3.4º LEC y D. T. 1ª Ley 42/2015), al disponer el art. 162.2p1 que cuando *transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente todos sus efectos*: con ello el precepto está tácitamente tolerando que el destinatario pueda esperar al tercer día para tenerse por notificado, emplazado, citado o requerido.

2.- Procuradores a través de sus Colegios.- La anterior regla de los tres días de margen del art. 162.2p1 no se aplica, sin embargo, *a los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores*, que el propio precepto exceptúa (...salvo...) para estos profesionales. En consecuencia, y salvo que existan problemas técnicos, aquellos actos se tendrán por realizados *el día siguiente a la fecha de recepción* en aquellos servicios y será irrelevante a efectos procesales cuándo el procurador accede a su “buzón virtual” a recoger la notificación. El ‘dies a quo’ será el día $n+1$, fecha en que se le tendrá por notificado, y el cómputo de los plazos será a partir del segundo día de n , lo que operará tanto para bien como para mal. Si por cualquier circunstancia el procurador tiene conocimiento del objeto de la comunicación el mismo día en que es dictada por el órgano judicial, no por ello se le podrá exigir que comience a contar el plazo desde ese momento, sino que habrá en todo caso que esperar al segundo día hábil posterior a la *fecha de recepción* por el Colegio, cuando formal y oficialmente se tenga por practicada la notificación; por el contrario, si el profesional pretende no tenerse por notificado no accediendo a su buzón de Lexnet, no por ello dejará de estar su patrocinado formalmente notificado el día que imperativamente señala el art. 151.2.

3.- Resto.- A los restantes destinatarios del precepto, es decir, *a la Abogacía del Estado y los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas, o de los Entes Locales*, se les aplica el mismo régimen que al Ministerio Fiscal, excepto en lo relativo a extensísimo margen de tiempo transitoriamente brindado al mismo por la Ley 42/2015. Por lo demás, también dispondrán como aquel del margen de tres días que establece el art. 162.2 antes citado, lo mismo que cualquier otro destinatario distinto de todos los anteriores (abogados, graduados sociales y otros sujetos, como los “ciudadanos”) que esté igualmente obligado o pueda optar a la utiliza-

que el plazo transitorio de dos años resulta adecuado para su adaptación al sistema general previsto en el artículo 151.2” (BOCG, Senado, n.º 571, 28.07.2015, pág. 275).

ción de los medios telemáticos en los términos dispuestos por la Disposición adicional primera de aquella Ley¹⁶⁰.

c) *Actos de comunicación y preclusión procesal*

Los actos de comunicación suelen llevar aparejado el efecto procesal de iniciar un período de tiempo en el que sus destinatarios pueden ejercitar un derecho de naturaleza procesal (v. gr., oponerse a un recurso) o cumplir con el mandato objeto de la comunicación (v. gr., requerimiento de pago por diez días). Nos referimos a los *plazos*. Si el acto de comunicación lo que hace es señalar un día, o un día y una hora en concreto para realizar una determinada actuación, entonces estaremos hablando de los *términos* (así, la citación al demandado para que comparezca a la vista de juicio verbal señalada para el día “x” a la hora “y”). Nuestra LEC, dando por sentado que el operador jurídico conoce ambas figuras jurídicas, establece en su art. 133, sin más preámbulos, la regla general de cuándo comienzan a correr los plazos procesales y cómo se computan¹⁶¹.

Al anterior efecto se añade uno más si el transcurso de estos plazos o términos significa para las partes impide a las partes pedir, y al órgano judicial conceder, la realización en un momento posterior de aquello para lo cual habían sido otorgados: estamos ante el instituto procesal de la *preclusión*, del que se ocupa el art. 136: *Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcur-*

¹⁶⁰ De ella nos ocuparemos, ‘in extenso’, en el Capítulo III, ‘infra’.

¹⁶¹ **Art. 133:** “Cómputo de los plazos”. 1. *Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.*

No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.

2. *En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.*

Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos.

3. *Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha.*

Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

4. *Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.*

Cfr. **art 185 LOPJ:** 1. *Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil [*]. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles.*

2. *Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.*

[*] **Art. 5 CC:** 1. *Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.*

2. *En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.*

so del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda.

Trataremos de ilustrar lo anterior con un ejemplo partiendo de un supuesto típico. Supongamos que en un Juzgado de 1ª Instancia determinado el Letrado de la Administración de Justicia dicta una diligencia de ordenación un lunes día 1 del mes en la que otorga un plazo de cinco días a la parte actora para que, si a su derecho conviene, pueda efectuar alegaciones a ciertas manifestaciones realizadas por la parte demandada. El mismo lunes, el funcionario (tramitador o gestor), dentro del plazo de que dispone de tres días desde su fecha para su notificación (art. 151.1), deberá actuar de la siguiente manera, según estemos ante una u otra de las dos siguientes situaciones:

a) Si se trata de partes personadas con Procurador: 1º Envió la diligencia al sistema Lexnet desde el programa informático de gestión procesal utilizado por la Oficina judicial o fiscal; 2º Accederá con sus credenciales al citado sistema Lexnet y completará el envío de la resolución mediante su remisión informática al buzón de correo electrónico del procurador correspondiente a través de su Colegio de Procuradores, pudiendo obtener el funcionario un resguardo o detalle de la recepción a efectos de constancia; 3º Suponiendo que no existan en esas fechas días festivos, la resolución, recepcionada el mismo lunes, se tendrá por notificada (o realizada su notificación) el día martes, por lo que el cómputo de los 3 días se iniciará el miércoles (art. 133.1), disponiendo por ello hasta el miércoles de la semana siguiente, las 24 horas de cada día y hasta las 15:00 horas de ese día de gracia para presentar, obligatoriamente por medio telemático (Lexnet o análogo), el correspondiente escrito formulando las alegaciones (art. 135.1).

Notificación de una diligencia de ordenación a parte con procurador (por Lexnet)						
Lun 1	Mar 2	Mié 3	Jue 4	Vie 5	Sáb 6	Dom 7
Dictado y firma de la resolución	Envío (09:00h) y recepción (09:01h) por Lexnet (suposición)	Día en que se tiene por realizada la notificación (art. 151.2)	Día 1/5 (Día inicial del cómputo; art. 133.1)	Día 2/5	(Inhábil; art. 130.2 LEC)	(Inhábil; art. 130.2 LEC)
Lun 8	Mar 9	Mié 10	Jue 11	Vie 12	Sáb 13	Dom 14
Día 3/5	Día 4/5	Día 5/5 (último día)	Día de gracia hasta las 15:00h. (art. 135.1)	(extemporáneo)	-	-

b) Si se trata de partes no personadas o personadas sin necesidad de Procurador y sin obligación de usar medios telemáticos: 1º No tratándose de un trámite del que dependa la personación o intervención personal del destinatario (art. 158), dentro de los tres días siguientes el funcionario remitirá al mismo copia de la resolución por correo certificado con acuse de recibo; 2º Recepcionada por el

destinatario la carta, dispondrá hasta las 15:00 horas del sexto día, a contar desde el día siguiente, para presentar en el Decanato del juzgado (o *servicio común procesal creado a tal efecto*, art. 135.1), o, de no existir, en el propio órgano judicial, para presentar el correspondiente escrito.

Notificación de una diligencia de ordenación a parte sin procurador (por correo postal)						
Lun 1	Mar 2	Mié 3	Jue 4	Vie 5	Sáb 6	Dom 7
· Dictado de la resolución · Remisión por correo postal	-	-	Fecha de recepción de la carta certificada (suposición)	Día 1/5 (Día inicial del cómputo; art. 133.1)	(Inhábil; art. 130.2 LEC)	(Inhábil; art. 130.2 LEC)
Lun 8	Mar 9	Mié 10	Jue 11	Vie 12	Sáb 13	Dom 14
- Día 2/5	Día 3/5	Día 4/5	Día 5/5 (último día)	Día de gracia hasta las 15:00 h. (art. 135.1)	(Inhábil; art. 130.2 LEC)	(Inhábil; art. 130.2 LEC)

2.5.- FORMATO DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

Si el proceso judicial es un rito y si los órganos jurisdicciones exteriorizan y dejan constancia de sus actuaciones en forma escrita –excepción hecha de las resoluciones orales–, lógico es pensar, ‘a priori’, que las leyes procesales van a dedicar una especial atención a establecer tanto el contenido como la forma, no solo de las resoluciones procesales, sino también de las comunicaciones con las que aquellas se dan a conocer o se da cumplimiento a lo que las mismas ordenan. Surgen así de forma natural cuestiones como la del modo de documentar aquellos actos, la lengua a utilizar, si hay que adoptar alguna medida a la hora de comunicarse con personas extranjeras que residen en nuestro país pero no conocen el castellano, si hay que emplear el lenguaje jurídico o, de algún modo, atemperarlo ante los tecnicismos con los que está construida la ciencia del Derecho; etc. Paradójicamente, poco o muy poco de estos particulares está presente en nuestras normas, a pesar de la trascendencia que tienen.

2.5.1.- De las copias de las resoluciones, de las cédulas y de los exhortos: Formato extrínseco

Respecto a la primera de esas cuestiones, la LEC ha abordado la cuestión de forma incompleta, centrando su atención en determinar el nombre y el contenido de las resoluciones procesales, pero descuidando el formato o forma extrínseca de los documentos oficiales en que las mismas se dan a conocer y en que se consigna su resultado. La LEC parece distinguir entre de dos formatos diferenciados para practicar la comunicación: la *copia de la resolución* y la *cédula*, aunque habla también de los *exhortos*, que no dejan de ser una especie de estas últimas. De las dos primeras no explica cuándo procede el empleo de una u otra, sino que da por sen-

tado que la cédula es *de citación o emplazamiento*, indicando así su finalidad, y la *copia literal de la resolución* para el *requerimiento del tribunal* y para la notificación (art. 152.3.3ª), mientras que del exhorto sí que establece que mediante él se solicitará el auxilio judicial (art. 171.1). En cuanto al contenido, únicamente de las **cédulas**¹⁶² y de los exhortos se detiene la LEC a especificar sus contenidos¹⁶³. De las primeras se ocupa el art. 152.4, al establecer que *en la cédula...*

- ... se hará constar claramente el carácter judicial del escrito,...
- ...y expresará el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído,...
- ...el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento,...
- ...y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso,...
- ... el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento,...
- ...con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

Además de las anteriores indicaciones generales, cuando se trate de la cédula de emplazamiento o citación a partes aún no personadas, se añade que se hará *constar el derecho de solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla* (art. 155.1).

No alcanzamos a comprender el por qué del legislador del 2000 de no incluir al requerimiento como la tercera clase de comunicación a transmitir mediante cédula, salvo que ni siquiera reparara en ese detalle y se hubiese limitado a dar continuidad a lo establecido en la LEC 1881, donde su art. 271 disponía que “las *citaciones* y los *emplazamientos* de los que sean parte en el juicio, se harán por cédula [...]”, mientras que “los *requerimientos* se harán notificando al requerido, en la forma prevenida, la providencia en que se mande [...]” (art. 275). Con todo, no vemos inconveniente alguno en remitir cualquier actuación judicial mediante cédula, que si no se trata de citar (cédula de citación), emplazar (cédula de emplazamiento) o requerir (cédula de requerimiento), podrá ser simplemente de notificación, como se contemplaba en la LEC 1881 (art. 267), tanto más si cabe en aquellos ámbitos territoriales en lo que se emplea papel común sin respetar las prescripciones técnicas establecidas en lugar del ya desaparecido papel de oficio,

¹⁶² Según la RAE, la cédula “(del lat. *schedŭla*, dim. de *scheda*, hoja de papel)”, tiene dos acepciones: “1. f. Papel o pergamino escrito o para escribir en él algo; 2. f. Documento oficial en que se acredita o se notifica algo.” (DRAE, ed. 23ª).

¹⁶³ De las diligencias, a pesar de su importancia, no existe una disposición dedicada a detallar su contenido. Tan solo alude la LEC a dicho aspecto en las comunicaciones mediante entrega, de las que expresamente exige que en la diligencia por la que se documente dicha entrega habrán de consignarse la firmas del funcionario o procurador que la efectúe y la de la persona a quien se haga (at. 161.1p2).

dándole así mayor impronta de oficialidad¹⁶⁴.

En cuanto a los **exhortos**, el art. el 171 se dedica a detallar su contenido, *que contendrá*:

- 1º. *La designación de los tribunales exhortante y exhortado.*
- 2º. *La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.*
- 3º. *La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores.*
- 4º. *La indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa.*
- 5º. *Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en la que éste finaliza.*
- 6º. *Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos.*

A la anterior relación habría que añadir un ordinal séptimo en el caso de que las partes hubiesen pedido diligenciar la remisión del exhorto ante el órgano exhortado, debiendo entonces expresarse por disposición del art. 172.2 *la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser el propio litigante o procurador que se designe*.

Finalmente, de la *copia de la resolución* nada se detalla sobre su formato, ya sea en soporte papel o en digital. Del medio tradicional adelantamos que se ha de usar papel común para la impresión de todas las actuaciones judiciales, pero hasta él ha habido un largo camino desde el antiguo papel sellado, que se exigió hasta 1992 por la entonces vigente LEC 1881, cuando ordenaba que “todas las actuaciones judiciales deberán escribirse en el papel sellado que prevengan las Leyes y Reglamentos” (art. 248p1). No obstante, el art. 278 disponía que “las cédulas para las notificaciones, citaciones y emplazamientos se extenderán en papel común”. Con la Ley 10/1992¹⁶⁵ se dispuso que el art. 248 quedara sin contenido. Ya con la Ley 25/1986 había quedado suprimida desde el 01.01.1987 dicha exigencia respecto de los escritos de las partes, que tendrían que extenderse desde entonces en papel común (Disp. Ad. 2ª¹⁶⁶). Finalmente, por Ley 66/1997 se suprimió definitivamente el papel de oficio en la Administración de Justicia¹⁶⁷ (tanto para las ac-

¹⁶⁴ No creemos que un simple folio con un sencillo sello de “ES COPIA” y, si acaso, el de la “Secretaría del Juzgado”, transmitan con toda claridad al receptor la idea de que es el Estado, la Administración de Justicia, el órgano judicial, el que se están dirigiendo a él con toda la fuerza de la Ley.

¹⁶⁵ Ley 10/1992, de 30.04, de *Medidas Urgentes de Reforma Procesal* (BOE de 05.05.1992).

¹⁶⁶ Ley 25/1986, de 24.12, de *Supresión de las Tasas Judiciales* (BOE de 31.12.1986): Disp. Adic. 2ª “Las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales se extenderán en, papel de oficio. Para los escritos de las partes relacionadas con ellas se utilizará papel común, cuyas características y formatos se determinarán reglamentariamente”.

Disp. Final: *Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo o ejecución de la presente Ley, que entrará en vigor el día 1 de enero de 1987.*

¹⁶⁷ Ley 66/1997, de 30.12, de *Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social* (BOE de 31.12.1997). Art. 101: “Actuaciones y resoluciones jurisdiccionales”. *Las actuaciones y resoluciones*

tuaciones y resoluciones jurisdiccionales como los escritos de las partes), sustituyéndolo por papel común con las características luego desarrolladas por el todavía vigente Real Decreto 1184/1998, de 12.06, *por el que se determinan las características técnicas del papel a utilizar en la Administración de Justicia*. Según esta norma, *[e]l papel común en que se extenderán las actuaciones y resoluciones judiciales tendrá las características que se determinan en el anexo del presente Real Decreto (art. 1)*. Y dicho Anexo establece:

a) *Formato: UNE A-4.*

b) *Gramaje: 80 gramos/metro cuadrado.*

c) *En el ángulo superior izquierdo figurará el escudo de España regulado por Ley 38/1981, de 5 de octubre, y Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, impreso en tinta color negro y debajo la leyenda ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.*

d) *Llevará estampada en tinta negra una línea vertical a 3 centímetros del margen izquierdo en el anverso y a 3 centímetros del margen derecho, en el reverso, que permita su unión en las actuaciones o su incorporación al correspondiente libro o protocolo.*

No obstante, este Real Decreto no es de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias en materia de medios personales materiales de la Administración de Justicia, habiéndose dictado por parte de diversos gobiernos autonómicos sus propias regulaciones¹⁶⁸.

jurisdiccionales y escritos de las partes relacionados con ellos, se extenderán en papel común, cuyas características y formatos se determinaran reglamentariamente.

Disp. Derogatoria única: [...] *Siete. Queda derogada la disposición adicional segunda de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, y el Real Decreto 637/1993, de 3 de mayo.*

¹⁶⁸ Así ocurre, por ejemplo, en Andalucía, que cuenta con el Decreto 199/1999, de 21.09, *por el que se determinan las características técnicas del papel a utilizar por la Administración de Justicia en Andalucía* (BOJA 09.10.1999) Este texto reglamentario presenta un contenido muy similar al del Ministerio de Justicia, aunque desafortunadamente en la práctica judicial andaluza suele ser norma general lo que sólo se prevé de *modo excepcional*, es decir, el uso de papel común sin cumplir con los requisitos exigidos cuando no se disponga materialmente del mismo, *debiendo figurar en su encabezamiento la identificación del órgano judicial de que se trate* (art. 2.2).

Otras Comunidades Autónomas que han dictado normas propias al respecto:

- Asturias: Decreto 125/2006, de 14.12, *por el que se aprueban las características del papel a utilizar por la Administración de Justicia en el Principado de Asturias* (BOPA de 07.01.2007).

- Canarias: Decreto 18/2011, de 10.12, *por el que se aprueban las características del papel a utilizar por la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias* (BOC de 18.02).

- Cataluña: Decreto 298/1995, de 11.10, *por el que se aprueban las características del papel de oficio para la Administración de justicia en Cataluña* (DOGC de 22.11; corrección de errores en DOGC de 03.06.1996), modificado por Decreto 208/1999, de 27.07 (DOGC de 03.08).

- Comunidad Valenciana: Decreto 146/1996, de 30.07, del Gobierno Valenciano, *por el que se aprueban las características técnicas del papel de oficio para la administración de justicia en la Comunidad Valenciana* (DOCV de 12.08).

- Galicia: Orden de 19.05.1998, *por la que se aprueban las características técnicas del papel a utilizar en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Galicia* (DOGA de 09.06).

- Madrid: Decreto 126/2002, de 05.07, *por el que se aprueban las características del papel de oficio a utilizar por la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid* (BOCM de 15.07).

En cuanto la notificación de las copias de las resoluciones por medios telemáticos, a falta de regulación ‘ad hoc’ se han de entender extrapolables las anteriores características, excepto, obviamente, la señalada con la letra “b)”, de modo que si el destinatario deseara imprimir la resolución recibida en formato digital – normalmente formato informático “rtf”, aunque también en “pdf”–, habría de obtener el mismo resultado.

2.5.2.- Lengua oficial

Por mandato del art. 142.1¹⁶⁹, *en todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado* (ídem art. 231 LOPJ¹⁷⁰). Esta norma, no obstante, se muestra insuficiente a la hora de aplicarla a los actos de comunicación, surgiendo fácilmente la cuestión de qué ha de hacer el funcionario o procurador que acude al domicilio del destinatario y se encuentra con que este no conoce el castellano; en ese trance se preguntará si debe abstenerse o no de

- País Vasco: Decreto 178/1994, de 17.05, *por el que se aprueban las características del papel de oficio para la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco* (BOPV de 06.06).

¹⁶⁹ **Art. 142:** “Lengua oficial”. 1. *En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.*

2. *Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiese producir indefensión.*

3. *Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.*

4. *Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.*

5. *En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.*

¹⁷⁰ **Art. 231 LOPJ:** 1. *En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.*

2. *Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales pondrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiese producir indefensión.*

3. *Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, pondrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.*

4. *Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.*

5. *En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla.*

hablarle en su idioma, aunque lo conozca, por estar asumiendo una representación pública, y de hacer de intérprete improvisado. Tampoco hay respuesta legal al supuesto de que una persona acuda a la sede del Servicio Común de Actos de Comunicación o análogo, o a la Oficina judicial, porque se le haya dejado un aviso en su domicilio o haya recibido una carta certificada conteniendo una notificación, y manifieste en un español muy rudimentario no saber de qué se trata porque es de otro país y desconoce nuestro idioma.

Nuestras leyes procesales no han previsto específicamente unas situaciones como las descritas, limitándose a establecer con carácter general la posibilidad de nombrar intérprete, entre otros motivos, *cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución* (art. 143.1p1)¹⁷¹, pero sin resolver el modo de articular esta previsión y revelando estar el precepto citado más orientado a supuestos de interrogatorios o de declaraciones por personas que no conozcan el castellano ni la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma. Por esta razón, centrándonos en los casos de actos de comunicación domiciliaria, lo que se suele hacer en la práctica es suspender la diligencia y esperar a recibir instrucciones del órgano judicial, pero, a partir de aquí, este mismo carece de apoyo legal en su modo de proceder ante los varios interrogantes que se plantean, que, solo en lo esencial, son los siguientes:

1.º Verificación del desconocimiento del idioma por parte del destinatario. El órgano judicial se encuentra totalmente indefenso frente a actitudes fraudulentas o dilatorias por quienes hayan de recibir, partes o no, los actos de comunicación, pues no hay modo de controlar si la persona que dice o trata de decir que no habla el castellano efectivamente lo desconoce, a menos que así se desprendiera de los propios autos. No queda otra, por tanto, que confiar en la buena fe de aquella persona, que es un caso verdadero y que pensar lo contrario podría ocasionar una situación de indefensión.

2º Nombramiento de intérprete: Partiendo del propio art. 143.1p1, el Letrado de la Administración de Justicia podría, en teoría, requerir a la parte actora para que designare a una persona conocedora del idioma del destinatario, no siendo

¹⁷¹ **Art. 143:** “Intervención de intérpretes”: 1. *Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el Secretario por medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción.*

Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará en todo caso la prestación de los servicios de interpretación en los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita.

De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial, y que será firmada también por el intérprete.

2. *En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al intérprete de lengua de signos adecuado.*

De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas se levantará la oportuna acta.

necesario que tenga titulación oficial, a efectos de ser nombrada intérprete mediante decreto. Nada impediría que esa persona fuese una de la confianza de la parte o que esta solicitara la designación de un profesional por parte del órgano judicial.

3º Cometido de dicho intérprete: Siguiendo el supuesto de una comunicación personal en el domicilio del interesado (art. 161), una vez nombrado el intérprete, el Letrado de la Administración de Justicia tendría que acordar la reiteración del acto de comunicación con indicación de que aquella persona habría de acompañar al funcionario o procurador, previo concierto entre ellos de un día y hora, para poder así ejercer su labor. Suponiendo que el destinatario se encontrara presente en el domicilio, parece claro que lo mínimo que tendría que hacer ese intérprete es traducir oralmente lo que el actuario transmitiera al interesado el momento de practicar la diligencia de comunicación de que se trate, pero no está tan claro que también deba, al menos, leer en su idioma los documentos (cédula, resolución procesal, demanda, etc.) que se le entreguen para que así pueda aquel comprender, no solo el por qué de la visita de aquellas personas, sino también qué es lo que recoge. Se trata de un problema presente sobre todo en ciudades costeras, donde, a pesar de residir de forma permanente un importante contingente de ciudadanos extranjeros, se echa en falta una mayor integración social en la comunidad local y se aprecia una cierta endogamia en las relaciones por razón de la nacionalidad¹⁷², y en el que el aprendizaje del castellano únicamente queda a la necesidad o conveniencia de cada uno¹⁷³.

4.º Remuneración del intérprete: Nada de este aspecto existe en la LEC o en la LOPJ, a salvo la mención en el art. 143.1p2 al caso concreto de los litigios transfronterizos, en los que *se garantizará en todo caso la prestación de los servicios de interpretación*, pero con las limitaciones y exigencias de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la que como norma en blanco se remite¹⁷⁴. Fuera de este supuesto,

¹⁷² No es infrecuente encontrar urbanizaciones o comunidades enteras en la Costa del Sol y en otras zonas de la costa mediterránea, incluyendo a las Islas Baleares, en la que sus vecinos son de una sola nacionalidad extranjera (inglesa, alemana, finlandesa, etc.) y en la que se vertebra una actividad social, económica y cultural introspectiva hecha por y para sus propios integrantes.

¹⁷³ Recordemos que sólo los españoles *tienen el deber de conocer* la lengua española, además del *derecho a usarla* (art. 3.1 CE).

¹⁷⁴ **Ley 1/1996**, de 10.01. La propia ley define “litigio transfronterizo” en su **art. 47.1** como *aquel en el que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro donde se halle el Juzgado o Tribunal competente para su conocimiento o en el que deba ejecutarse la resolución*.

En este contexto, se establecen los “requisitos para el reconocimiento del derecho”: **art. 49: 1.** *Quien solicite asistencia jurídica gratuita al amparo de esta Sección habrá de residir o estar domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Para el reconocimiento de este derecho se observarán los requisitos establecidos en los artículos 3 a 5 de esta ley.*

2. *Los límites económicos establecidos en esta ley no impedirán que el solicitante que los supere pueda obtener el beneficio si prueba que no puede hacer frente a los gastos procesales debido a las diferencias en el coste de la vida entre el Estado miembro de su residencia o domicilio y España. En tal caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter económico aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia habitual para conceder la justicia gratuita.*

cabe deducir, en principio, que tratándose de litigios en los que se ventilen intereses privados, será la parte actora la que deba adelantar los gastos que, en su caso, le supongan la intervención del intérprete y que posteriormente, si resultara vencedora en costas, se le permita la inclusión de los honorarios satisfechos como gasto del proceso bajo el concepto de *derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso* que prevé el art. 241.1.4º.

2.5.3.- El lenguaje jurídico empleado

Dispone el Reglamento Notarial¹⁷⁵ que *los instrumentos públicos deberán redactarse empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término alguno oscuros ni ambiguos, y observando, de acuerdo con la Ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma* (art. 148). Lamentablemente, no se contempla en la LEC precepto semejante al descrito, ni tampoco en la LOPJ, que solo se ocupan de establecer qué lengua utilizar en las actuaciones judiciales, pero no de cómo utilizarla. Con ello revelan no tener en cuenta que los destinatarios de las actuaciones judiciales no tienen por qué ser siempre los profesionales del Derecho, sino que pueden ser personas totalmente ajenas al mundo de la Justicia.

No obstante, hay que reconocer que la LEC 1/2000 constituye una mejora respecto de su predecesora de 1881 por lo que a la redacción de sus preceptos se refiere. La Exposición de Motivos dedica unas líneas a este particular:

“[...] la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más asequible para cualquier ciudadano, con eliminación de expresiones hoy obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a antiguos

Y en cuanto al “contenido material del derecho”, reza así el **art. 50: 1**. *El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta Sección comprende todas las prestaciones indicadas en el artículo 6, con excepción de su apartado 2, con la extensión temporal del artículo 7, y, además:*

- a) Los servicios de interpretación.*
- b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto.*
- c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración. Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito, los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas aplicables.*
- d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.*

2. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en aplicación de este Capítulo estarán exentos de legalización y de cualquier otra formalidad equivalente.

¹⁷⁵ Decreto de 02.06.1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado (BOE de 07.07.1944).

usos forenses que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fenómeno ha sido acogido tanto en el lenguaje común como en el jurídico. Así, por ejemplo, se siguen utilizando los términos "juicio" y "proceso" como sinónimos y se emplea en unos casos los vocablos "pretensión" o "pretensiones" y, en otros, el de "acción" o "acciones" como aparecían en la Ley de 1881 y en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante más de un siglo, sin que ello originara problema alguno" (Aptdo. IV, párr. 5º) (la cursiva es nuestra)¹⁷⁶.

Pero, a pesar del esfuerzo, se mantienen palabras ya superadas (como *pliego*; en el art. 311.2, *de preguntas*) y expresiones que pueden resultar naturales al oído de los profesionales, pero sorprendentes, cuando menos, a los ciudadanos legos. Entre ellas destacan *parte actora o actor* –por su inmediata asociación al mundo del cine–, *ejecutado o parte ejecutada* –por su vinculación con lo criminal y la muerte de la persona–, *auto* –no en pocas ocasiones hay que aclarar que no se refiere a un vehículo–, *lanzamiento* –por su despiadada y gráfica literalidad–, *providencia* –por sus connotaciones religiosas–, *enervación* –concepto ajeno a la irritabilidad de la persona–; *apud acta* –expresión que, a pesar de ser latín, goza de plena vigencia e incluso se recoge tal cual en el art. 24.2–; y aún podríamos seguir: *traslado*, *tercero*, *fehaciente*, *rebeldía*, *personación*, *allanamiento*, *remoción del depósito*, *avalúo*, *liberar el bien*, *remate*, *audiencia*, *verificar*, etcétera. Incluso no sería necesario salirnos de los actos comunicación: *cédula* –que no "célula"–, *diligencia* –nada que ver con las películas del western–, *emplazar*,..., sin olvidarnos del anticuado (e ilícito) apercibimiento que todavía es posible encontrar en la práctica de "le parará el perjuicio a que hubiere lugar".

De lo visto se puede deducir el carácter introspectivo de una Ley de Enjuiciamiento Civil que está hecha por y para juristas y que resulta en muchas ocasiones difícil de conciliar con los postulados de la ***Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia*** de 2002¹⁷⁷. En este texto, que supone el cumplimiento del punto n.º 13 del *Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia* firmado el 28 de mayo de 2001, se establece en el epígrafe de "Una justicia comprensible", en desarrollo del principio denominado "Una justicia moderna y abierta a los ciudadanos", que:

¹⁷⁶ Sobre este pasaje comentaba ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, LUIS, que la LEC "ha pretendido innovar el tradicional lenguaje jurídico, lo cual es un noble propósito. Convertir el farragoso y anticuado idioma de las leyes en algo comprensible para el ciudadano es algo eminentemente plausible" ("La Ley de Enjuiciamiento Civil: Un folletón por entregas", -VV.AA- *Procesos de familia. Aspectos dudosos: soluciones e interpretaciones* -Asociación Española de Abogados de Familia-, Dykinson, Madrid, 2003, pág. 27).

¹⁷⁷ Esta *Carta*, rebotante de grandes ideales y de compromisos tan solemnes como alejados de la realidad judicial en que vivimos, es una Proposición no de Ley presentada el 15.03.2002 por los Grupos Parlamentarios (Grupo Popular en el Congreso, Socialista, Catalán –Convergència i Unió–, Federal de Izquierda Unida, Vasco –EAJ-PNV–, de Coalición Canaria y Mixto) y aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios el día 16.04.2002 (BOCG Serie D, n.º 340, de 22.04.2002, pág. 9).

“5. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

6. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.

- Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.

7. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

8. El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador”¹⁷⁸.

Por su parte, desde el Gobierno también se ha mostrado cierta preocupación por una cuestión tan esencial como es de la comprensión de las normas jurídicas por la colectividad a quien se destina¹⁷⁹. Destaca, por un lado, el denominado **Plan de Transparencia Judicial**, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 21.10.2005, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas¹⁸⁰, configura como uno de sus *instrumentos* (el séptimo) la *modernización del lenguaje jurídico*:

“El Plan de Transparencia contiene igualmente el compromiso del Gobierno de proceder al impulso y entrada en funcionamiento de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, creada por Orden JUS/3126/2003, de 30 de octubre, con objeto de alcanzar la aspiración de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia consistente en obtener una Justicia comprensible, tanto en las comunica-

¹⁷⁸ BOCG Serie D, n.º 324, de 15.03.2002, pág. 24.

¹⁷⁹ En palabras de GONZÁLEZ SALGADO, JOSÉ ANTONIO, se trata de “minimizar el hermetismo que tradicionalmente ha caracterizado la redacción jurídico-administrativa”, poniendo de relieve el autor que se dan dos “paradojas” en este tipo de lenguaje. Por un lado, “la *paradoja del objeto* se puede definir como el desajuste que se produce entre el lenguaje empleado en los documentos jurídico-administrativos y las características de la mayoría de los receptores de esos documentos. Cualquier ciudadano, con independencia de su condición social o nivel cultural, es objeto de escritos que emanan de la administración o de instituciones que usan un lenguaje que muchos expertos consideran poco apropiado (un lenguaje que el ciudadano no entiende)”; por otro, “la *paradoja del contenido* hay que definirla como el procedimiento empleado por el lenguaje de los juristas con el que se intenta conseguir la máxima precisión, pero que tiene como resultados la ambigüedad y la complejidad. Desde nuestro punto de vista, los principales defectos que suelen censurarse del lenguaje jurídico están relacionados con esta paradoja del contenido, a la que hemos denominado también *falsa precisión*” (“El lenguaje jurídico del siglo XXI”, *Diario La Ley* n.º 7209, 2 de julio de 2009, La Ley, Madrid, pág. 1).

¹⁸⁰ Vid. Resolución de 28.10.2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial (BOE de 01.11); también disponible en el BIMJ, suplemento al n.º 2001, de 15.11.2005.

ciones escritas como en las vistas o comparecencias y en las propias resoluciones judiciales, todo ello sin perjuicio de las exigencias que deriven de la correcta técnica jurídica. Convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y, especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las Oficinas judiciales dirijan a los ciudadanos, quienes en las últimas Encuestas a usuarios de la Administración de Justicia realizadas por el Consejo General del Poder Judicial todavía manifiestan, en un porcentaje que sería deseable reducir que no han entendido el lenguaje jurídico que los tribunales han empleado, permaneciendo como usuarios con más problemas con este lenguaje los de clase baja o media-baja, los usuarios de juicios de faltas y juicios penales y, más en concreto, los denunciados, los acusados, los testigos y los testigos-víctimas, por este orden”.

Por otro lado, también a iniciativa del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros en su reunión de 30.12.2009 acuerda crear la denominada *Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico*, compuesta por un grupo de expertos¹⁸¹ al que encarga la elaboración de un informe con dicho objeto. El *Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico* fue presentado público en septiembre de 2011 por el Ministro de Justicia, quien defendió “la necesidad de que el Derecho hable ‘como habla la gente’ y reclamó a los profesionales y a las instituciones que empleen un lenguaje jurídico comprensible para el ciudadano, ya que el acceso a la Justicia también radica en el derecho a comprender”¹⁸². Aquella exhortación del Ministro tuvo su fruto en el *Convenio Marco de Colaboración para promover la claridad del lenguaje jurídico*, suscrito en Madrid el 21.12.2011 entre la Real Academia Española, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el propio Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores y la Conferencia de Decanas y Decanos de las Facultades de Derecho de España, que, a su vez, acordó la constitución de la *Comisión para la claridad del lenguaje jurídico* (CMLJ).

Los loables, sin duda, propósitos de las anteriores iniciativas de corte político-gubernativo no han tenido, sin embargo, un reflejo en nuestras leyes procesales, al menos en lo que los actos de comunicación se refiere. Seguimos careciendo de unas mínimas normas generales que disciplinen la elaboración de las disposiciones legales con la prevención de un uso moderado del lenguaje jurídico que aúne la claridad en la exposición con el rigor y precisión que muchas veces solo los tecnicismos pueden proporcionar.

¹⁸¹ La Comisión, constituida el 18 de febrero de 2010 dentro del Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, ha estado compuesta por Víctor García de la Concha, ex director de la Real Academia Española de la Lengua, Gabriela Bravo Sanestanislaos, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía; Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española; Gabriela Cañas Pita, periodista de El País; Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe; Jesús María García Calderón, fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de El Mundo, y Mercedes Bengoechea Bartolomé, profesora de Filología en la Universidad de Alcalá de Henares.

¹⁸² Nota de prensa oficial del Ministerio de justicia de la misma fecha (versión online, disponible en su portal oficial, “www.justicia.es” o “www.mju.es”; fecha consulta 20.04.2015).

3.5.4.- Prevenciones legales

Otro aspecto importante del contenido de los documentos judiciales que se han de entregar a los destinatarios de los actos de comunicación es el relativo a las prevenciones legales. Se trata de una cuestión de política legislativa que ha de encontrar un punto de equilibrio entre una información concisa, pero comprensiva y eficaz, y otra llena de detalles sin cometer el error de llegar a hacerla ininteligible para un destinatario cuyos conocimientos en Derecho son desconocidos. Es cierto que el Código Civil contiene una admonición ‘erga omnes’ según la cual *la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento* (art. 6.1), pero la misma no es suficiente. Si así fuere, los órganos judiciales se limitarían a actuar sin importar si los destinatarios de sus resoluciones y actuaciones conocen o no unas leyes procesales que, con aquella norma en la mano, están obligados a conocer. No existirían, en fin, dichas prevenciones legales, en las que por definición se advierte de la existencia de determinada carga u obligación procesal y, no siempre, de las consecuencias por su incumplimiento, aunque también pueden cumplir el cometido contrario, informar de determinados derechos o posibilidades procesales que pueden ser ejercitados.

Se trata de una cuestión inspirada en el respeto al derecho a la tutela judicial que, sin embargo, no cuenta en la LEC, ni tampoco en la LOPJ, con una disposición general que establezca cuándo debe el órgano judicial desempeñar esta especie de asistencia técnica preventiva y mínima a las partes, aun correspondiendo dicha tarea a los abogados. En uno y otro caso solo se prevé para supuestos puntuales cuyos únicos puntos en común son, uno, el de su importancia, sobre todo cuando transmiten un apercibimiento o advertencia, acarreando su inobservancia perjuicios procesales a veces irreparables; dos, que en la mayoría de las ocasiones¹⁸³ el momento elegido para exteriorizar esas prevenciones es el de la práctica de los actos de comunicación; y tres, que predominan en el ámbito del juicio verbal, donde el principio de concentración es más intenso, aunque ahora con la Ley 42/2015 se haya relegado con la introducción de la contestación escrita a la demanda.

a) *Advertencias y apercibimientos*

La LEC prevé únicamente los siguientes, la mayoría dirigidos a la parte demandada y para los procesos que sustancien por el juicio verbal.

1.- Conducta del demandado en determinados juicios verbales. Tenemos los siguientes supuestos:

¹⁸³ No en todas. Sirva ejemplo del art. 159.3, que ordena que a los testigos, peritos y otros intervinientes se les informe de la obligación de *comunicar a la Oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso*, no cuando se les cite, sino (extrañamente) *en la primera comparecencia que efectúen*.

- Todos los juicios verbales: Se le prevendrá que la vista no se suspenderá por su inasistencia y que *se procederá a la celebración del juicio* (arts. 440.1p3 y 442.2)¹⁸⁴.
- Juicio verbal de tutela de derechos reales (art. 250.1.7º): Se deberá apercibir al demandado al tiempo de la citación de que se dictará sentencia estimatoria si no comparece a la vista o lo hace sin prestar caución (art. 440.2¹⁸⁵).
- Juicio verbal de desahucio por falta de pago (art. 250.1.1º): Hay que apercibir al demandado al practicar el requerimiento que si no desaloja el inmueble, ni paga ni se opone, *se procederá a su lanzamiento inmediato* (art. 440.3p4) en el día y hora que habrá de venir expresado en dicho requerimiento (entendemos que también en la cédula) (art. 440.3p3); que si no se opone, se supondrá su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento (ídem); que si se opone, se procederá al lanzamiento si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera; y que si necesita abogado y procurador de oficio, deberá solicitar la asistencia jurídica gratuita en los tres días siguientes (ídem).
- En los tres juicios verbales de desahucio (falta de pago, solo en caso de oposición del demandado; expiración del contrato; precario): se apercibirá al demandado en el *requerimiento* (añádase “o citación”) que si no comparece a la vista, *se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista* (art. 440.4).

2.- Medios de prueba: En citación a juicio verbal *se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse* (art. 440.1p3) y que, *en los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial* (art. 440.1p4). Por su parte, para el supuesto específico de la ‘ficta confessio’ y con efectos para ambas partes, tanto en el juicio ordinario (art. 304¹⁸⁶) si se pide cómo prueba el interrogatorio de parte, como en el verbal (art.

¹⁸⁴ También hacerse prevención al demandante sobre su inasistencia a la vista: *Si... el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditar los daños y perjuicios sufridos* (art. 440.1).

¹⁸⁵ **Art. 440.2:** *En los casos del número 7º del apartado 1 del artículo 250, en la citación para la vista se apercibirá al demandado de que, en caso de no comparecer, se dictará sentencia acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor. También se apercibirá al demandado, en su caso, de que la misma sentencia se dictará si comparece al acto de la vista, pero no presta caución, en la cuantía que, tras oírle, el tribunal determine, dentro de la solicitada por el actor.*

¹⁸⁶ **Art. 304:** “Incomparecencia y admisión tácita de los hechos”. *Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha*

440.1p3), en la citación se apercibirá al interesado, que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior (art. 304.1p1).

3.- Desistimiento y rebeldía: Como ya hemos señalado respecto al demandado, en la citación de todos los juicios verbales *se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442 para el caso de que no compareciere a la vista* (art. 440.3 'in fine'), o sea, que al actor se le tendrá por desistido con costas si no comparece y el demandado no pide la continuación del juicio, y a este que continuará el juicio en su ausencia.

b) *Información sobre derechos*

1.- Postulación procesal. A pesar de que el correcto conocimiento de las reglas sobre postulación procesal es elemental, la LEC no contiene un precepto en el que se establezca con carácter general el deber de informar al demandado al darle traslado de la demanda del carácter preceptivo o no de la intervención de abogado y de procurador¹⁸⁷. Solo recientemente, con la Ley 42/2015, se ha dispuesto en el juicio verbal que, al emplazarle para que conteste a la demanda, *en los casos en que sea posible actuar sin abogado ni procurador, se le indicará así* (art. 440.1p2), lo que parece dar a entender, 'a sensu contrario', que no habrá que hacerle indicación alguna sobre el particular si no es el caso. Mientras, en el juicio ordinario, el art. 404.1 se limita a decir que *el Secretario judicial, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días*, omitiendo cualquier mención al contenido de ese decreto en lo concerniente a las prevenciones legales en general y a la intervención de profesionales en un tipo de procedimiento donde justamente no hay excepciones sobre la postulación. Es verdad que el art. 154.4 'in fine' establece que en las cédulas se exprese el objeto de las citaciones y de los emplazamientos *con la prevención de los que efectos que, en cada caso, la ley establezca*, pero es una previsión excesivamente genérica. Lo mismo que la propia LEC establece en el art. 155.1 que en dichas cédulas se haga constar *el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla*¹⁸⁸, así debería hacerse con la necesidad o no de recabar asistencia letrada y representación técnica.

2.- Posibilidad de mediación. La Ley 5/2012 modificó la LEC en un intento de paliar la carga de trabajo de los órganos judiciales mediante la incentivación de las vías extrajudiciales o no jurisdiccionales de solución de conflictos, como el

parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley.

En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior.

¹⁸⁷ Afortunadamente, sí se hace en la práctica y se incluye tal prevención en los modelos y plantillas judiciales (cédulas).

¹⁸⁸ Del mismo modo, en el juicio verbal de desahucio por falta de pago se habrá de informar al demandado del plazo de tres días de que dispone para, en su caso, solicitar asistencia jurídica gratuita (art. 440.3p3).

arbitraje y, en particular, la mediación. Así, en el juicio ordinario se dispone desde aquella ley que la convocatoria a las partes para celebrar la audiencia previa, y *si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma* (art. 414.1). Y en el juicio verbal, caso de que se celebre vista, se establece que en la citación *se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma* (art. 440.1p2).

3.- Condonación de rentas en desahucio. Cuando se trate del juicio verbal de desahucio por falta de pago y el actor asuma el compromiso de condonar las rentas a fin de alentar el desalojo voluntario de la finca por el demandado, habrá de ponerse de manifiesto al mismo esta posibilidad en el requerimiento inicial de pago (art. 440.3p2).

4.- Instrucción o información de recursos. Hasta el año 2009 el artículo 208.4 establecía que “al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir”. Se estaba refiriendo, únicamente, a las providencias, auto y sentencias, y era poco más que un espejo de lo que decía y sigue diciendo actualmente el art. 248.4 LOPJ: *Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.*

Sin embargo, aquella sintonía desaparece con la modificación que de la disposición de la LEC vino a realizar la Ley 13/2009, que desde entonces establece que *toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.* A simple vista puede parece que repite lo anterior, pero, si se observa bien, ahora dice “toda” resolución, incluyendo también a las diligencias de ordenación y decretos del Letrado de la Administración de Justicia, e introduce una importante alteración que afecta sustancialmente a su aplicación práctica: de la previsión orgánica no se deduce que la instrucción sobre los recursos¹⁸⁹ tenga que formar parte de la resolución, sino del acto en sí en el que la misma se notifica, mientras que en el reformado artículo del proceso civil sí que se ordena que se incluya en su estructura interna. Esta diferencia no es nada intrascendente, porque con una de las disposiciones el deber de información concierne al propio Juez o Tribunal y se materializa de forma escrita, mientras que con la otra se traslada dicha obliga-

¹⁸⁹ El empleo del término “recursos” es aquí en sentido estricto, dejando fuera la información de los medios de impugnación o revisión de las resoluciones judiciales firmes, como acertadamente señalan LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ y REVERÓN PALENZUELA [“Artículos 206 a 216, *Proceso Civil Práctico*, Tomo III (Artículos 206 a 280) (Dir. GIMENO SENDRA), La Ley, Madrid, 2002, pág. 37].

ción al momento posterior de la notificación, haciendo con ellos responsables a otros sujetos (funcionario o procurador que ejecuta el acto de comunicación y, en último término, al Letrado de la Administración de Justicia, art. 152). Tal es así que la reforma de 2009 ha provocado que toda la jurisprudencia y doctrina anterior que se ha pronunciado sobre la cuestión haya quedado desfasada¹⁹⁰. Gráficamente y si se nos permite la licencia, es como si la LOPJ (Jueces) hubiese echado en 1985 la pelota en el tejado de la LEC (Letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios) y esta se la hubiese devuelto en 2009. De todos modos, es perfectamente posible sostener que los dos preceptos, aun siendo distintos, no son incompatibles, sino complementarios, y que redundan con su aplicación conjunta en mayores garantías para el ciudadano, aunque no con ello quede resuelto el problema:

- No está tan claro que baste con la información escrita: en apoyo de una respuesta afirmativa tenemos la propia LEC y su art. 152, que excluye el uso de las cédulas para las notificaciones y que, en su lugar, dice que se entregue al destinatario, simplemente, *copia literal de la resolución que se haya de notificar* (aptdo. 3.3º). Se podría decir que la ley confía en que en la resolución se habrá respetado lo ordenado por el art. 208.4 y que por ello es suficiente con una copia de la misma. Por el contrario, la defensa de la respuesta negativa se encuentra en la LOPJ, que apunta a un momento muy concreto en el que hay que cumplir con la información de los recursos, y ese no es otro que *al notificarse la resolución*.
- La LOPJ señala el cuándo, pero no el cómo ni el quién. El referido *se indicará* tiene fácil acomodo en las comunicaciones mediante entrega del art. 161, en las que el funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial o el procurador que practique la notificación podrán cumplir en el mismo acto con aquella regla. No ocurrirá lo mismo con las comunicaciones por remisión, que incluyen en nuestra concepción amplia al correo postal y a los medios telemáticos como Lexnet, en las que si la resolución a notificar no incluye la mención de los recursos tendría que ir acompañada de una cédula, o ser transcrita en ésta, que viniese a subsanar la omisión.

En cualquier caso, tanto con el régimen anterior a 2009 como después y en la actualidad, entendemos junto a MARTÍN DE LA LEONA que “la ausencia de este requisito en la resolución sólo podrá causar indefensión efectiva, en aquellos proce-

¹⁹⁰ Así, p. ej., la **STC 155/1991**, de 10.07, que decía: “...la indicación de los recursos, preceptiva según el art. 248.4 LOPJ, no constituye una parte del contenido decisorio de la resolución notificada, sino una información al interesado [...] que debe hacerse al notificarse la resolución, lo cual reduce obviamente su valor legal en cuanto la desvincula de la resolución notificada...”.

dimientos en los que la parte, por autorizarlo así expresamente las leyes procesales, actúa voluntariamente sin la asistencia de defensa técnica”¹⁹¹.

3.- SUJETOS ACTIVOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

3.1.- CONSIDERACIÓN DE SUJETO ACTIVO

La noción de sujeto activo de los actos de comunicación contiene diferentes aspectos que nuestras leyes no se preocupan de desarrollar. Está claro que los actos de comunicación son actos del órgano judicial en su concepción más amplia, pero bajo su manto pueden identificarse los diferentes sujetos que ordenan la realización de los actos de comunicación, los que ejecutan materialmente los mismos y los que colaboran o coadyuvan a su efectiva realización, profesionales que en la mayoría de las ocasiones permanecen anónimos y cuya labor silenciosa y desapercibida es determinante para el buen desarrollo del proceso.

Así, LÓPEZ MERINO diferencia entre “sujeto o agente emisor” y “autor del acto notificado”, siendo el primero “el autor jurídico del «mensaje» o «comunicado», independientemente de que sea o no autor del acto o declaración que constituye el objeto de aquel. Cuando la notificación se realice por escrito, será agente emisor quien suscriba el oficio, la cédula, la carta; si se verifica oralmente en presencia del destinatario, quien verbalmente exprese el mensaje”¹⁹². Por tanto, podemos diferenciar entre un sujeto activo “inmediato”, ejecutor del acto de comunicación, “transmisor” o “notificador”, o “realizador material de la comunicación” (CASTILLO SOLSONA¹⁹³), y un sujeto activo “mediato” o sujeto activo “ordenante” o “decisor” (GUTIÉRREZ CARBONELL¹⁹⁴), encarnado en la persona del Secretario judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, que es el que, en principio, ordena su práctica o a quien se atribuye la autoría o “titularidad” (PRADO ARDITTO¹⁹⁵) del mensaje. En este sentido, SEOANE CACHARRÓN distinguía en 1986 entre “sujeto emisor” y “sujeto ejecutor” de las comunicaciones judiciales y explicaba que “el sujeto activo que emite la comunicación judicial es el Secretario Judicial. No sucede así con el encargado de ejecutar la comunicación emitida por el Secretario, que puede ser éste o puede encomendarse a otro funcionario judicial, administrativo o a la

¹⁹¹ MARTÍN DE LA LEONA, JOSÉ MARÍA: “Artículo 227” [comentarios], *Proceso Civil Práctico*, Tomo III (Artículos 206 a 280), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 445.

¹⁹² LÓPEZ MERINO, FRANCISCO: *La notificación en el Ordenamiento jurídico español*, 2ª ed., Comares, Granada, 1989, pág. 125.

¹⁹³ CASTILLO SOLSONA, M. MERCÈ: “Las notificaciones en el Derecho Tributario: análisis del régimen vigente y propuestas de reforma”, *Las notificaciones. Problemas y reformas*, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2008, pág. 49.

¹⁹⁴ GUTIÉRREZ CARBONELL, “Artículo 149”, op. cit., pág. 433

¹⁹⁵ PRADO ARDITTO, JUAN-FERMÍN: “La notificación de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en la nueva LOPJ”, *Justicia* 86, n.º I, Bosch, Barcelona, 1986, pág. 83. Artículo también publicado en *Segundas Jornadas sobre la Fe Pública Judicial. Alicante, 7-9 de abril de 1986*, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, págs. 235-251.

Administración de Correos^[196], Telégrafos, Radiodifusión, Televisión, etc., en cuyo caso aquél se limita a expedir la copia o la cédula correspondiente”¹⁹⁷.

Partiendo de estas distinciones, que demuestran la elasticidad de la noción de sujeto activo, damos paso en los siguientes epígrafes a su estudio particularizado.

3.2.- EL ÓRGANO JUDICIAL COMO AUTOR Y EMISOR DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

3.2.1.- El Juez o Magistrado

Consecuencia lógica de su función estrictamente jurisdiccional, el Juez o Magistrado carece de competencia en el ámbito de la ejecución de los actos de comunicación, por lo que puede resultar extraño que dediquemos un epígrafe a su figura. Sin embargo, existen tres supuestos o excepciones en las que sí le compete ordenar su práctica, e incluso contamos con otros tres momentos en los que es el propio titular del órgano judicial quien, de hecho o implícitamente, la efectúa:

A.- El Juez o Magistrado como sujeto activo “mediato” y sujeto “decisor” del acto de comunicación:

- 1º. La primera, ya estudiada, es la del art. 150.2 para el supuesto de la notificación a terceros de la pendencia del proceso, a criterio y *por disposición del Tribunal*.
- 2º. La segunda excepción se halla en sede de ejecución hipotecaria, concretamente en el art. 686.1, por el que será *en el auto* por el que se autorice y despache la ejecución donde *se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor*.
- 3º. Y la última cuando en el auto de admisión a trámite del juicio cambiario *adopta la medida de requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días* (art. 821.2.1ª).

B.- El Juez o Magistrado como sujeto activo “decisor” y “ejecutor” del acto de comunicación:

¹⁹⁶ Sobre Correos, sin perjuicio de lo que estudiaremos en el Capítulo II, vid. GRANIZO GARCÍA CUENCA: “En este tipo de actos de comunicación el Servicio de Correos asume el papel de agente notificador. Desde el punto de vista de quien debe realizar la notificación, dicho Servicio es un agente externo que se presenta como una organización revestida de la garantía propia del servicio público. Pero dentro de ella, quien practica la entrega del escrito o notificación es el cartero, empleado o funcionario del Servicio, agente no cualificado” (“Los principios constitucionales de contradicción...”, op. cit., epígrafe II.A.c). *al...*, op. cit., pág. 73-74).

Nos distanciamos por completo de la opinión de CUBILLO LÓPEZ, quien, por el contrario, considera que “no puede caerse en el error de creer que es el funcionario de Correos el sujeto activo de la notificación que se efectúa por correo, y de considerar que es él quien da fe o acredita la recepción de la notificación en ese caso” (*La comunicación procesal...*, op. cit., pág. 73-74).

¹⁹⁷ SEOANE CACHARRÓN, JESÚS: “El Secretario judicial como sujeto activo de los actos de comunicación” (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985] Madrid, 1985, CGPJ, pág. 324-25.

- 1º. Citación a juicio en la audiencia previa: Esta circunstancia se encuentra implícitamente presente en la regulación de la audiencia previa del juicio ordinario, en que, *una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles*, dispone el art. 429.2, *se procederá a señalar la fecha del juicio, que deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia*. A continuación precisa que *siempre que el señalamiento pueda hacerse en el mismo acto, se hará por el Juez, [...]*. En los restantes casos se fijará la fecha por el Secretario judicial, conforme a lo prevenido en el artículo 182¹⁹⁸. Así pues, aunque ello no se desprenda literalmente del texto de la ley, es de común aceptación que cuando es el Juez o Magistrado quien fija en la propia audiencia previa un día y hora para que tenga lugar el juicio, las partes entienden que quedan directamente citadas sin necesidad de que posteriormente el Letrado de la Administración de Justicia tenga que disponer mediante diligencia de ordenación posterior la convocatoria en forma a las mismas para aquel acto. En consecuencia, es el titular del órgano judicial el que, ‘de facto’, realiza el acto de comunicación, en este caso una citación.
- 2º. Citación o emplazamiento para la notificación de la sentencia de desahucio: En los juicios verbales de desahucio de finca urbana establece el art. 447.1 que la sentencia (si ha lugar a ella) no se habrá de dictar en los diez días siguientes al término de la vista, sino *en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieren representadas por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco días siguientes al de la sentencia*. El empleo del reflexivo “convocándose” no deja claro quién realiza esa convocatoria, pero en la práctica, dada la ausencia ya generalizada del Letrado de la Administración de Justicia en Sala, es el propio Juez o Magistrado quien lo hace, quedando constancia de convocatoria o citación en la propia grabación del acto, aunque nada impediría que fuese el propio funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial que le asiste quien lo efectúe en ejercicio de una función genuina de su competencia. Por otra parte, el inciso final de *el día más próximo posible dentro de los cinco días siguientes al de la sentencia* deja margen para realizar una citación, si a las partes se les señala un día y una hora

¹⁹⁸ **Art. 182.** “Señalamiento de las vistas”. 1. *Corresponderá a los Presidentes de Sala y a los de Sección de los órganos colegiados el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista.*

Del mismo modo, corresponde al Juez o Presidente el señalamiento cuando la decisión de convocar, reanudar o señalar de nuevo un juicio, vista o trámite equivalente se adopte en el transcurso de cualquier acto procesal ya iniciado y que presidan, siempre que puedan hacerla en el mismo acto, y teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos.

2. *Los titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales y los Presidentes de Sala o Sección en los Tribunales colegiados fijarán los criterios generales y darán las concretas y específicas instrucciones con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes.*

concretos dentro de aquel margen, o un emplazamiento, si se es más flexible y se les insta a comparecer lo más pronto posible en uno de esos cinco días dentro sus posibilidades.

- 3º. En el dictado de las resoluciones orales: En el proceso civil, cabe la posibilidad de dictar resoluciones orales *en el mismo acto* de una vista, audiencia o comparecencia (art. 210.1¹⁹⁹), salvo las sentencias (art. 210.3)²⁰⁰, por lo que el *pronunciamiento* oral de las mismas conlleva su implícita notificación, también oral, a las partes por el propio Juez, Magistrado o Letrado de la Administración de Justicia autor de las mismas. El hecho de todo se realice prácticamente en unidad de acto no empece para que se esté realizando un acto de comunicación procesal, sin el cual no sería posible la declaración de firmeza de la resolución *si todas las personas que fueren parte estuvieren presentes en el acto, por sí o debidamente representadas, y expresaran su decisión de no recurrir* (art. 210.2p1); de no estar todas ellas, *el plazo para recurrir comenzará a recurrir desde la notificación de la resolución debidamente redactada* (art. 210.2p2).

3.2.2.- El Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario judicial)

Los *Letrados de la Administración de Justicia*, nueva denominación de los Secretarios judiciales introducida en nuestra Ordenamiento por LO 7/2015, de 21.07²⁰¹, desempeñan un papel protagonista en materia de actos de comunicación judicial. No en vano, la LEC determina que *los actos de comunicación –dice su art. 152.1– se realizan bajo la dirección del secretario judicial, que será el responsable de la ade-*

¹⁹⁹ **Art. 210.1:** *Salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento, las resoluciones que deban dictarse en la celebración de una vista, audiencia o comparecencia ante el Tribunal o Secretario judicial se pronunciarán oralmente en el mismo acto, documentándose éste con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.*

²⁰⁰ **Art. 210.3:** *En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles.*

²⁰¹ LO 7/2015, de 21.07, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 22.07.2015). A pesar de su trascendencia estética, el Preámbulo de la ley apenas dedica cinco líneas al (muy discutible) nuevo nombre con el que desde el pasado 01.10.2015 han pasado a denominarse los tradicionalmente denominados Secretarios judiciales, o “Escribanos” de la LEC 1881 inicial, limitándose a decir que “con ello se da respuesta a una demanda histórica del mismo, que considera que la denominación de secretarios judiciales conduce a equívocos sobre la función realmente desempeñada” (Preámbulo, IX).

Disp. Ad. Primera: “Referencias en las normas de fecha anterior”. *A partir de la entrada en vigor de esta Ley[*], todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.*

[*] **Disp. Final décima:** “Entrada en vigor”. *La presente Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán al año de su publicación.*

cuada organización del servicio, y se ejecutarán bien por los funcionarios el Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por el procurador de la parte que lo solicite. La norma distingue así entre la dirección y la ejecución material de los actos de comunicación, novedad incorporada por la LEC 2000 que supuso un paso más en el largo proceso por el que, poco a poco, se ha ido descargando a estos funcionarios de los cometidos propios de los actos de comunicación en su vertiente material²⁰² hasta llegar a la actualidad, en la que carecen directamente de dicha competencia desde la reforma realizada por Ley 13/2009, entendiéndose que por su condición de Cuerpo Superior Jurídico²⁰³ deben dedicarse a otro tipo de responsabilidades²⁰⁴, entre ellas la del propio impulso del proceso²⁰⁵. Como excepción, sin embargo, el nuevo art. 778ter, añadido por la LO 8/2015²⁰⁶, dispone que el auto de entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas que se establecen de protección de menores será notificado por el propio el Letrado de la Administración de Justicia al tiempo de practicar la diligencia de entrada, cuando no se haya podido notificar antes a las partes (Aptdo. 6)²⁰⁷. Esto es lógico porque, como ocurre en el proceso penal, se trata de diligencias judiciales que se realizan en unidad de acto y precisan de la intervención personal del fedatario judicial.

²⁰² Siguiendo a SEOANE CACHARRÓN, a los antiguos Secretarios judiciales les correspondía “esta importante actividad de comunicación ya desde la Nueva Recopilación, pasando por la Ley de 4 de junio de 1837 y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, hasta la vigente de 1881, la de Enjuiciamiento Criminal y todas las especiales en materia procesal, con facultad de delegación para su ejecución en personal de Secretaría y, desde la reforma de 6 de agosto de 1984, por medio de correo certificado, con varias excepciones y graves reparos, [...], siendo preceptiva en todo caso la intervención del Secretario en la emisión de la copia o de la cédula correspondiente y sólo facultativa su intervención en la ejecución” (“El Secretario judicial...”, op. cit., págs. 322-323).

²⁰³ **Art. 440 LOPJ:** *Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.* Salvo el nuevo nombre y el inciso final de la dirección de la Oficina judicial, el texto del precepto es el mismo que el introducido por LO 19/2003, que los definió como “técnicos superiores de la Administración de Justicia” (EE.MM. Aptdo. VII).

²⁰⁴ Tal y como ya había dicho en 1997 el CGPJ en su *Libro Blanco de la Justicia*: “[...] no parece muy justificable la pervivencia de un sistema de fe pública tan estricto en los actos de comunicación. [...] no existe justificación alguna para que el secretario judicial, cuya preparación profesional está destinada a otras funciones de mayor responsabilidad, sea el encargado de los actos de comunicación. Por otro lado, la simple comprobación de la experiencia diaria demuestra que es posible realizar una comunicación por un solo funcionario judicial sin necesidad de crear la artificial necesidad de que intervenga el secretario judicial” (*Libro Blanco...*, op. cit., págs. 192-193).

²⁰⁵ **Art. 456.1 y 2 LOPJ:** *1. El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen las leyes procesales.*

2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución.

²⁰⁶ LO 8/2015, de 22.07, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE de 23.07).

²⁰⁷ **Art. 778 ter. 6:** *El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad Pública solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificación antes de la realización de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial procederá a su notificación al practicar la diligencia.*

La ley de 2009 destierra también la posibilidad de que los entonces Secretarios judiciales pudieran delegar esta tarea, como era costumbre, en “el funcionario que aquél designe”²⁰⁸, y acomodaba la ley procesal a lo ya dispuesto cinco años atrás en la LOPJ tras su reforma por LO 19/2003²⁰⁹, que vino derogar tanto el art. 279.3, que atribuía “a los Secretarios la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación y de cooperación judicial en la forma que determinen las leyes”, como el art. 282.1²¹⁰ que era el que daba cobertura legal a las habilitaciones de los Oficiales²¹¹, hoy Gestores procesales.

Lo que sí siguen realizando los Letrados de la Administración de Justicia es, como siempre ha sido, la firma o autorización de todas las cédulas de emplazamiento o de citación, mandamientos, oficios y exhortos, algo que en la LEC no está del todo bien regulado ni explicado. Solamente de los exhortos está expresamente dispuesto que *la expedición y autorización corresponderá al Secretario judicial* (art. 171.2) –debiendo aun así matizar que la “expedición” ha de entenderse en sentido formal o externo, en tanto que su confección material viene atribuida por la LOPJ a los Tramitadores procesales–; de los mandamientos y exhortos solo se dice que serán remitidos directamente *por el Secretario judicial que los expida* (art. 167.1), dando por hecho que tal cometido a ellos les corresponde; y de las cédulas de emplazamiento o citación nada se dice al respecto. El único resorte lo encontramos en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, de quienes ordena que *expedirán los mandamientos, despachos y exhortos* (art. 7.1.f²¹²), pudiendo interpretar-

²⁰⁸ Antes de la reforma indicada el párrafo 2º del art. 152.1 decía: “Tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquél designe [...]”. Con la modificación legal se ha descargado a los Secretarios judiciales de esa tarea en compensación con la muy notable atribución de responsabilidades que dicha Ley ha traído consigo, aunque en realidad lo que haya hecho sea reconocer al autor intelectual, junto a los funcionarios tramitadores y gestores procesales, detrás de la gran parte de las providencias y autos que integran el procedimiento que luego serían firmados por jueces y magistrados.

²⁰⁹ LO 19/2003, de 23.12, *de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*: “Disposición derogatoria única. Derogación normativa”. *Quedan derogados*: [...] b) *El título IV del libro III «De la Fe pública y de la documentación», de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyos artículos 279 a 291 quedan sin contenido.* [...].

²¹⁰ Art. 282 LOPJ original 1985: “1. No obstante lo establecido en el artículo anterior [*], los Secretarios podrán habilitar a uno o más Oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial, así como las diligencias de constancia y de comunicación. 2. Estas habilitaciones subsistirán mientras no sean revocadas; la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaerá sobre el Oficial autorizante”.

[*] Art. 281 LOPJ original 1985: “1.- El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad”.

²¹¹ Además de la derogación del art. 282.1, la LO 19/2003 establecía en su Disp. Ad. 6ª: “Supresión de habilitaciones. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, quedan sin efecto las habilitaciones concedidas al amparo del artículo 282.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985”.

²¹² **Art. 7.1 ROSJ** (RD 1608/2005, de 30.12): *Corresponde al Secretario Judicial el impulso del proceso en los términos que establecen las leyes procesales. En el ejercicio de esta función: [...] f) Expedirán los mandamientos, despachos y exhortos precisos para la ejecución de lo acordado en el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales.*

se que el concepto genérico de “despachos” incluye la especialidad de las cédulas. Además, se da la espalda a lo que es práctica muy común de emplear también las cédulas para los requerimientos y –todavía en la actualidad aunque en mucha menor medida– para las notificaciones, de nuevo rubricadas por los Letrados de la Administración de Justicia. Lo mismo sucede con los edictos, que sistemáticamente se formalizan mediante cédula, aunque lo que se comunique sea una resolución y pese a que el art. 164 prevea la posibilidad de fijar simplemente *la copia de la resolución*.

Es de significar que el Letrado de la Administración de Justicia ostenta con exclusividad y plenitud la fe pública judicial para dejar *constancia fehaciente de la realización de actos procesales* (art. 453.1 LOPJ²¹³), entre ellos, naturalmente, los actos procesales de comunicación. No obstante, dado que ya no tiene competencia para practicarlos practicar materialmente, aquella potestad tiene en nuestra materia una menor repercusión, como lo demuestra el hecho que en la LEC solo le exige que haga uso de ella cuando se trate de la remisión de comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes, en que *dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido* (art. 160.1). Como estudiaremos posteriormente (‘infra’, Capítulo II), la fe pública es aquí limitada: comienza y acaba en la remisión, pero no alcanza al final del trámite, que es realizado por un tercero (el empleado del servicio postal) y dejando constancia de otra forma (el acuse de recibo) quien y como se acredita la realización del acto de comunicación.

Vid. **art. 462 LOPJ**: *Los secretarios judiciales asumirán todas aquéllas otras funciones que legal y reglamentariamente se establezcan.*

²¹³ **Art. 453 LOPJ**: *1. Corresponde a los Secretarios Judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias.*

Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la intervención del Secretario Judicial, en los términos previstos en la ley. En todo caso, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.

2. Los secretarios judiciales expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.

3. Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales.

4. En el ejercicio de esta función no precisarán de la intervención adicional de testigos.

No debe confundirse la ejecución material del acto de comunicación con el hecho de dejar constancia en autos de su práctica (por diligencia), que es lo que sucede, a nuestro juicio, en la respuesta dada a la pregunta “¿Sería válido que lo practicara el Secretario Judicial?” formulada en la obra coordinada por MAGRO SERVET *Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil* (4ª ed.). En ella podemos leer: “Aunque específicamente es competencia de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, ello no es óbice para la validez de la comunicación por parte del Secretario Judicial competente, pues éste ostenta, conforme al art. 453 LOPJ (LA LEY 1694/1985), con exclusividad y plenitud la fe pública judicial para dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas o diligencias. Y no hay que olvidar que según el art. 456 LOPJ (LA LEY 1694/1985) pueden ser estas últimas de comunicación.” (Pregunta n.º 332, pág. 199, 4ª ed. 2010, La Ley, Madrid).

Lo mismo hay que decir, ‘mutatis mutandi’, en las comunicaciones telemáticas (art. 162) y mediante entrega personal (art. 161). En las primeras es el propio sistema informático (en nuestro país, mayoritariamente “Lexnet”) el que proporciona la *constancia fehaciente* mediante el resguardo o comprobante que emite de haberse realizado, mientras que en la entrega al destinatario por la vía del art. 161 la misma *se documenta por medio de diligencia* (art. 161.1p2) extendida por el funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial, cuya fehaciencia viene dada por la capacidad de certificación que ostenta (art. 478.a LOPJ), capacidad que la Ley 42/2015 ha otorgado también al procurador que practique ese mismo tipo de actos.

No sucede lo mismo en la comunicación edictal, en que no se prevé que el hecho de fijar el correspondiente edicto (en realidad *copia de la resolución o la cédula* ex art. 164) se haga constar mediante la extensión en autos de la oportuna diligencia, único modo de acreditar que se ha practicado de ese modo la comunicación, aunque esto no supone ningún problema real porque así se hace en la práctica.

3.2.3.- Los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia

De los tres cuerpos funcionariales que integran los *Cuerpos Generales* de la Administración de Justicia (art. 475 LOPJ²¹⁴), el de Auxilio Judicial es el llamado a *ejecutar* los actos de comunicación, tal y como dispone el art. 478.a) LOPJ:

*Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial [...] la realización de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Asimismo, y entre otras funciones, les corresponderá: a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto ostentará capacidad de certificación y dispondrá de las credenciales necesarias*²¹⁵.

En desarrollo de tal designación orgánica, es a dichos funcionarios, y solo a ellos, a quienes se refiere el art. 152.1.1^º LEC para *ejecutar* materialmente los ac-

²¹⁴ **Art. 475 LOPJ:** *Los cuerpos de funcionarios a que se refiere el artículo anterior[*] se clasificarán en:*

a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores.

Son Cuerpos Generales:

El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La titulación exigida para el acceso a este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.

El Cuerpo de Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de graduado en E.S.O. o equivalente.

[*] Art. 474.1 LOPJ: *El personal funcionario de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se regirá por las normas contenidas en esta ley orgánica, en las disposiciones que se dicten en su desarrollo y, con carácter supletorio, en lo no regulado expresamente en las mismas, por la normativa del Estado sobre Función Pública.*

²¹⁵ Redacción dada por LO 19/2003.

tos de comunicación, siempre que se trate, como veremos, de las comunicaciones mediante entrega personal (arts. 152.3.3ª y 161). No utilizaremos este trabajo como excusa para reivindicar el papel tan transcendental como no reconocido de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, pero sí que aprovecharemos para subrayar que de la buena práctica de los actos de comunicación por ellos efectuada depende el completo devenir del proceso. Son ellos, junto a los empleados del servicio de correos (los populares “carteros”) y sin olvidarnos de los procuradores, los que con su buen hacer permiten que los órganos judiciales tengan voz, por lo que justo es dejar testimonio de la importancia de su labor.

Con carácter particular también se encomienda a los anteriormente llamados “agentes judiciales”²¹⁶ dar cumplimiento a los *mandamientos* cuando esta *clase* de comunicación vaya dirigida *a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia*²¹⁷ a que se refiere el art. 149.5º. Y esos funcionarios son, en plural, los del Cuerpo de Auxilio judicial, pues a ellos concierne, como *agente[s] de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que atribuyan las leyes* (art. 476.b LOPJ), y los del Cuerpo de Gestión Procesal, para *documentar* tales actuaciones (art. 476.c LOPJ).

Como antes apuntábamos, de un sistema procesal a otro, de la ley de 1881 a la de 2000, se ha ido invirtiendo el rol del Letrado de la Administración de Justicia y del “Auxilio judicial”, hasta el punto de que hoy día, apostando por su valía profesional, por mucho que constituya el Cuerpo más inferior, su papel es determinante en este campo y el que, con diferencia, asume el papel más destacado respecto a los funcionarios de los otros dos Cuerpos, sobre todo si hablamos de comunicaciones domiciliarias, pues en ellas habrá de actuar con diplomacia, ponderar los intereses y circunstancias de cada caso y valorar si puede practicar con éxito o no la entrega realizando un esfuerzo mayor o menor en función de los datos que se le hayan dado del destinatario, de las características de su domicilio y de las personas con las que pueda llegar a interactuar.

Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, por su parte, tienen también una función esencial en los actos de comunicación, pues a ellos compete *la confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos*

²¹⁶ En la práctica es sentimiento común el resistirse a no seguir hablando de “agentes judiciales”, denominación desaparecida con la LO 19/2003, al igual que sucedió con los otros dos cuerpos que junto a aquel integran los “Cuerpos Generales” al servicio de la Administración de Justicia. Nos referimos a los Auxiliares judiciales (generando cierta confusión con los actuales “Auxilios” judiciales), hoy Tramitadores, y a los Oficiales de Justicia, en la actualidad Gestores. Con todo, estos funcionarios siguen ostentando la condición de “agentes” de la autoridad ex art. 478.b LOPJ.

Acerca de su origen histórico, que se remonta a la antigua Roma, vid. COMELLAS, MANUEL: “El Cuerpo de Agentes Judiciales”, *Revista de Derecho Procesal*, n.º 3, julio-agosto-septiembre 1946, Madrid, págs. 525-528; o GUERRA VIDAL, JAVIER DANIEL: “El Agente judicial en la Administración de Justicia española”, *Boletín de Información Ministerio de Justicia*, n.º 1874, agosto 2000, págs. 5-17.

²¹⁷ En su redacción anterior a la Ley 13/2009 el art. 149.5º era más preciso y señalaba a los “agentes de Juzgado o Tribunal”.

de comunicación que hubieren de realizarse (art. 477.d LOPJ), aunque hay matizar que no solo les corresponde la redacción de dichas cédulas en sentido estricto (de citación o emplazamiento), sino también la de los oficios y mandamientos, amén de la impresión –todavía hasta la auténtica efectividad del expediente judicial electrónico– de las copias literales de las notificaciones, pues todos ellos se integran en el cometido que tienen para la *tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros le sean encomendados, así como copias de documentos y unión de los mismos a los expedientes* (art. 477.a LOPJ). Por el mismo motivo, ya hemos dicho anteriormente que son ellos los que elaboran los exhortos, por mucho que el art. 172.2 de la LEC diga que corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia, además de su *autorización, su expedición*.

Finalmente, los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Siguiendo la literalidad de la LEC tras la Ley 13/2009, vemos que no pueden intervenir en ninguna de las fases de realización de los actos de comunicación, ni siquiera por la vía de la habilitación o designación, ya desaparecidas. La LOPJ, por su parte, tampoco estipula entre sus competencias (art. 476) ninguna concerniente a la materia. Con todo, son varias las precisiones que hay que hacer:

1ª.- La primera es la completa divergencia de lo que dice la LOPJ y lo que sucede en la práctica, donde los Gestores realizan por la vía de hecho las mismas funciones procesales que los Tramitadores y llevan a cabo la tramitación general de los procedimientos utilizando los mismos medios informáticos y confeccionando los mismos documentos que refiere el art. 477.a), entre ellos los relativos a los actos de comunicación²¹⁸. Unos y otros realizan también las notificaciones telemáticas con los procuradores a través del sistema Lexnet, con lo que –desde nuestro punto de vista– se vulneren las previsiones del art. 478.a) LOPJ y del art. 152.1.º LEC al convertirse en ejecutores por dicho medio de esa clase de actos de comunicación. Como quiera que la cuestión es compleja y existen algunas sentencias so-

²¹⁸ Uno de los motivos que contribuye a ello es la indefinición de la función *gestionar la tramitación de los procedimientos* que a los Gestores procesales atribuye el art. 476.a LOPJ. Ante la dificultad de concretar sus tareas partiendo de tal noción y de su nulo desarrollo legal, en la práctica se han adoptado dos soluciones, ninguna de ellas atendiendo a la relación de funciones de la LOPJ: a) Dar instrucciones para que realicen las mismas tareas procesales que sus compañeros del Cuerpo inmediatamente inferior, a pesar del agravio comparativo que se crea por la mayor retribución que tienen los primeros respecto a los segundos; b) establecer a criterio de cada Letrado de la Administración de Justicia en su respectivo órgano judicial un reparto del trabajo por un motivo meramente cuantitativo (más número de asuntos) o cualitativo (asignación de asuntos más complejos, habitualmente los procesos ejecutivos). Ninguna de ellas es satisfactoria.

Al hecho de que “la práctica forense desde hace décadas ha desdibujado en muchos casos la diferenciación en las funciones entre el Cuerpo de Oficiales y Auxiliares” se refiere también FERNÁNDEZ GOYA, IVÁN, en “De los Oficiales de Sala a los Gestores Procesales: aproximación histórica y perspectivas de futuro del nuevo cuerpo tras la Ley Orgánica 19/2003”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 2172, noviembre de 2014, Madrid, pág. 24, nota al pie n.º 70.

bre el particular, la desarrollaremos en el capítulo dedicado a las comunicaciones telemáticas.

2.^a- Los Gestores procesales son los destinatarios inmediatos del acto de comunicación que el Letrado de la Administración de Justicia expide en forma de mandamiento (art. 149.5^o) para ordenarles la ejecución de determinadas actuaciones en las que se constituyen en “Comisión judicial” junto a sus compañeros del Cuerpo de Auxilio judicial, como por ejemplo para *documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter de representación que le atribuyan las leyes, salvo que el secretario judicial considere necesaria su intervención* (art. 476.c LOPJ); es decir, reciben un acto de comunicación, pero su objeto no es llevar a cabo otro, sino una actuación en el ámbito de la ejecución forzosa.

3.^a Por último, hay que tener en cuenta que existe un régimen transitorio en el marco de los Servicios Comunes de Actos de Comunicación a que se refiere el art. 163 de la LEC y que se encuentra supeditado a la implantación en el territorio correspondiente de la Nueva Oficina Judicial. Allí donde todavía no sea una realidad, los Gestores procesales adscritos a aquellos Servicios Comunes pueden seguir practicando, y de hecho lo hacen, actos de comunicación mediante entrega en la forma establecida en el art. 161 con la cobertura legal que les proporciona la todavía operativa Disposición Transitoria 15.^a de la LO 19/2003²¹⁹, en aplicación de la cual se dictó la Instrucción 3/2010, de la Secretaría General de la Administración Pública (Ministerio de Justicia), *relativa a aspectos derivados del nuevo régimen de competencias de los Secretarios Judiciales establecidos en la Ley 13/2009*. En su apartado Quinto se dispone:

“Práctica de actos de comunicación”: La nueva redacción del artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, de entre los que prestan servicio a la administración de justicia, la ejecución de los actos de comunicación que no se realicen por medios electrónicos, informáticos y similares. En tanto no se establezcan las relaciones de puestos de trabajo específicas de los servicios que realicen funciones de actos de comunicación, los Secretarios Judiciales responsables de los mismos darán las oportunas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que las vengán realizando para que continúen desempeñándolas, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Decimoquinta de la LO 19/2003.

²¹⁹ D.T. 15.^a LO 19/2003: “Régimen transitorio para el establecimiento de las oficinas judiciales”. *La determinación por cada Administración competente del diseño y organización de las oficinas judiciales radicadas en sus respectivos territorios, conforme a la estructura básica y en los términos establecidos en esta ley, se llevará a cabo de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de dichas Administraciones, debiendo en todo caso realizarse con la antelación suficiente que haga posible que la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento y nombramiento del personal a que se refiere la disposición transitoria cuarta de esta ley se lleven a cabo en los plazos establecidos en la misma.*

Hasta tanto se produzcan los citados procesos de acoplamiento y nombramiento, se entenderá que los funcionarios siguen prestando servicios en sus actuales destinos.

Ejemplo de esas relaciones de puesto de trabajo (RPTs), es la Orden JUS/1741/2010, de 22.06, *por la que se determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la NOJ*, entre las funciones de los Gestores del SCP General, estaría la *gestión y control de la realización de los actos de comunicación* (art. 16.1.i).

3.2.4.- Responsabilidad de los funcionarios intervinientes

La LEC atribuye en su art. 168.1 responsabilidad a los funcionarios que intervinieren *en la comunicación procesal*, considerando como tales al *Secretario judicial o [a]l funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia*, cuando diere[n] lugar, por **malicia o negligencia, a retrasos o dilaciones indebidas**, dando lugar a que uno u otro sea *corregido disciplinariamente por la autoridad de quien dependan* y, además, *a la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionara*²²⁰.

El precepto agrupa diferentes tipos de responsabilidades, según estos funcionarios hayan actuado por *malicia*, lo que apunta a la responsabilidad penal, o *negligencia*, refiriéndose a la responsabilidad civil y que se traduce en el deber de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. La primera excluirá la responsabilidad disciplinaria²²¹, pero no la segunda²²².

a) **Responsabilidad profesional o disciplinaria**: Lógicamente, las primeras actuaciones correctoras y sancionadoras deben proceder del ámbito interno de la propia organización a la que pertenece el funcionario. La LOPJ dispone en su art. 534.1 LOPJ que *los secretarios judiciales y los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria y serán sancionados en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en esta ley orgánica*. Esos supuestos los define en el catálogo de faltas que establece el art. 536, que clasifica en *muy graves, graves y leves*, y, si bien ninguna de ellas se refiere especí-

²²⁰ Respecto al régimen anterior desaparece la “morosidad”, que, sin embargo, se mantiene para los procuradores; Art. 280 LEC 1881: “El auxiliar o subalterno que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones que por esta Sección le corresponden, o faltare a alguna de las formalidades en la misma establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez o Tribunal de quien dependa, con una multa de 50 a 200 pesetas.

Será además responsable de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa”.

²²¹ **Art. 534.5 LOPJ**: *La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal.*

En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.

Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos, cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido.

²²² **Art. 536.a) LOPJ**: “Faltas muy graves”. [...] 19. *Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave.*

ficamente a los actos de comunicación, sí que podrían quedar subsumidos en buena parte de los comportamientos que se describe. Así, por ejemplo, piénsese en el *trato discriminatorio* que pudiera tener el funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial al notificar a una persona una resolución *por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social* (aptdo. a.2), o la *falta de consideración* hacia la misa (aptdos. c.5); la *utilización indebida de la documentación* (aptdo. a.5) o la *negligencia en la custodia* (aptdo. a.5; v. gr., extravío del juego de copia de la demanda para el demandado); el mismo *abandono del servicio* (aptdo. a.3); etcétera²²³.

La propia LEC se alude también a este tipo de responsabilidad en el art. 132.3²²⁴ para el caso que se infrinjan los plazos legales para la práctica de las *actuaciones del proceso* (art. 132.1).

²²³ Del catálogo de faltas establecido por el art. 536 LOPJ mostramos a continuación aquellas que de forma más clara pudieran enmarcarse en la materia de los actos de comunicación: **Faltas muy graves** (art. 536.a LOPJ): [...] 2. *Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*; 3. *El abandono del servicio*. [...] 5. *La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función*; 6. *La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos*; 7. *El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas*; [...] 9. *El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas*; 10. *La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales*; [...]. 16. *El acoso sexual*. 17. *La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones*. [...].

Faltas graves (art. 536.b LOPJ): 1. *La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales*; 2. *El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave*; [...] 4. *La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave*; [...] 6. *La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas*; 8. *La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos*; 9. *Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio*. [...].

Faltas leves (art. 536.c LOPJ): 1. *La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave*; 2. *El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave*; 3. *El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave*. [...].

Conforme al **art. 538 LOPJ**, las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son: a) *Apercibimiento*. b) *Suspensión de empleo y sueldo*. c) *Traslado forzoso fuera del municipio de destino*. d) *Separación del servicio*.

El procedimiento disciplinario se encuentra regulado en el *Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia* (RD 796/2005, de 01.07).

²²⁴ **Art. 132.3:** La infracción de lo dispuesto en este artículo [PLAZOS] por los tribunales y personal al servicio de la Administración de Justicia de no mediar justa causa será corregida disciplina-

b) **Responsabilidad civil (responsabilidad patrimonial)**: Por su condición de funcionarios públicos, la eventual reclamación de indemnización por daños y perjuicios que pudieran ocasionar habrá de ser reclamada en vía administrativa por responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y sin perjuicio de la vía de regreso o acción de repetición que ostenta la Administración correspondiente frente a dichos funcionarios (art. 145 Ley 30/1992²²⁵ y art. 36 Ley 40/2015²²⁶).

c) **Responsabilidad penal**: Los retrasos o dilaciones indebidas por la *malicia* que refiere el art. 168.1 LEC tienen respuesta en el ámbito penal. La LEC prefiere utilizar este término en lugar del más técnico-jurídico de “dolo”, que, curiosamente, sí que utiliza cuando se refiere a la responsabilidad del procurador por los mismos actos. No obstante, es el propio Código Penal el que parte del mismo concepto para tipificar como delito el *retardo malicioso en la Administración de Justicia*, que además precisa que *se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima* (art. 449.1²²⁷). A diferencia de la LEC, la ley sustantiva penal incluye al Juez como sujeto activo del ilícito²²⁸.

riamente con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan.

²²⁵ **Art. 145 Ley 30/1992**. “Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas”. 1. *Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.*

2. *La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.*

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

[...].

²²⁶ **Art. 36 Ley 40/2015**, de 01.10, de Régimen Jurídico del Sector Público: “Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.” 1. *Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.*

2. *La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.*

[...].

Vid. ALEGRE ÁVILA, JUAN MANUEL: “El aseguramiento de la responsabilidad civil extracontractual de la Administración pública: procedimiento y jurisdicción”, *DS: Derecho y Salud*, Vol. 13, n.º 1, 2005, Asociación Juristas de la Salud, Albacete, págs. 1-15.

²²⁷ **Art. 449 CP**: 1. *En la misma pena señalada en el artículo anterior [*] incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.*

Conforme entiende MUÑOZ CONDE, “lo importante es, en todo caso, que la conducta del juez (en el art. 449,1 también la del secretario judicial y en el art. 449,2 la de cualquier otro funcionario) infrinja, dolosamente, el derecho fundamental a un «proceso público sin dilaciones indebidas» recogido en el art. 24,2 CE. [...] El retraso por mera negligencia, abulia o escasa capacidad de trabajo del funcionario es, todo lo más, merecedor de sanción disciplinaria (cfr. STS 1020/1995, de 18 de octubre)”²²⁹.

Por otro lado, no porque no lo prevea la LEC, no quiere decir que los funcionarios judiciales no pueden responder por otras conductas delictivas diferentes de los retrasos y dilaciones maliciosos. También podrían incurrir en el delito de falsedad documental en documento público, tanto en su tipo doloso (art. 390.1 CP²³⁰) como imprudente (art. 392 CP²³¹).

3.3.- LOS SERVICIOS COMUNES PROCESALES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

La existencia de dependencias judiciales especializadas para la realización de forma centralizada de determinadas funciones de los Juzgados y Tribunales de una determinada ciudad o población no se preveía en la LEC de 1881, pero sí en la versión originaria de 1985 de la LOPJ, que no hablaba todavía de “servicios comu-

2. Cuando el retardo sea imputable a funcionario distinto de los mencionados en el apartado anterior, se le impondrá la pena indicada, en su mitad inferior.

[*] **Art. 448 CP:** *El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.*

²²⁸ Vid. **STS (Penal) 15.03.1991** (RJ\1991\2150), que declaró no haber lugar al recurso de casación formulado por un Juez de Paz frente a la sentencia de la Audiencia que le había condenado por retrasar con “malicia” la tramitación de un exhorto: “El Juez acusado, lejos de abstenerse, como hubiera debido hacer por tratarse de un asunto propio para que interviniera el Juez de Paz sustituto, ordenó retener el exhorto para ganar tiempo, paralizando voluntariamente la tramitación de la reclamación en su contra durante un año, plazo excesivo e injustificado que perjudicó los intereses legítimos de la entidad acreedora, sin que sea posible alegar ignorancia o falta de malicia ya que es hecho probado que el Secretario del Juzgado le recordó en reiteradas ocasiones que debería darse curso al exhorto citado” (F. D. Único).

²²⁹ MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: *Derecho Penal. Parte Especial*, 19ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 861.

²³⁰ **Art. 390.1 CP:** *1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:*

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

²³¹ **Art. 391 CP:** *La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.*

nes procesales”, sino de un “local de notificaciones común” (art. 272²³²). Al amparo de aquella previsión legal, el primer “Servicio Común de Notificaciones” fue creado en Madrid por Acuerdo Gubernativo 93/87, de 6 de abril de 1987, del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de Madrid²³³. Años más tarde, la LO 16/1994, de 08.11, modificó el art. 272.1 y añadió “y actos de procesales de comunicación”, además de posibilitar la creación de servicios comunes para otras finalidades²³⁴. Poco después, en 1997 el *Libro Blanco de la Justicia* ponía de relieve que “al menos donde el volumen de trabajo lo aconseje –y lo aconseja en casi todos los partidos judiciales de España que cuentan con dos o más Juzgados– es imprescindible la instauración de servicios comunes de actos de comunicación”. El CGPJ apelaba a los servicios comunes en general “en aras a eficacia y a la eficiencia del sistema” y en particular a los de actos de comunicación, pues “no puede permitirse que dos funcionarios de dos Juzgados de la misma localidad acudan al mismo domicilio a poner en conocimiento al mismo ciudadano o compañía una resolución judicial”²³⁵. Esto dio pie a la modificación por el Consejo del Reglamento 5/1995, de 07.06, de *aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales*, al que en 1999 incorporó un nuevo título (el VII) con la denominación “«De los Servicios Comunes»”²³⁶.

²³² **Art. 272 LOPJ** en su redacción originaria: “1. En las poblaciones en que existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad judicial lo justifique, podrá establecerse un servicio común dependiente del Decanato para la práctica de las notificaciones que deban hacerse por aquéllos.

2. También podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios Juzgados y Tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del Procurador que deba ser notificado. La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos.

3. Asimismo, podrán establecerse servicios de Registro General para la presentación de escritos o documentos dirigidos a órganos jurisdiccionales”.

Art. 272 LOPJ, vigente desde la LO 19/2003: *Podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios juzgados y tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del procurador que deba ser notificado. La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos.*

²³³ CUBILLO LÓPEZ (*La comunicación procesal...*, op. cit. pág. 135, nota 206). El autor afirma que comenzó a funcionar el 19 de mayo de ese año, pero según DE FRUTOS VIRSEDA, FRANCISCO JAVIER, lo fue el 14 de mayo: “Los servicios comunes de notificaciones y embargos (nulidad de los actos procesales practicados por los funcionarios destinados en los mismos), *Diario La Ley*, 1992, tomo 1 –versión digital en www.laleydigital.es; ref. LA LEY 17845/2001–, La Ley, Madrid, Aptdo. I).

²³⁴ Art. 272.1 LOPJ modificado por LO 16/1994 [*]: “1. En las poblaciones en que existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad judicial lo justifique, podrán establecerse servicios comunes dependientes de los Decanatos y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales para la práctica de notificaciones y actos procesales de comunicación, para la ejecución de sentencias, la práctica de embargos y lanzamientos, transcripción de sentencias y aquellos otros que sean precisos para la mejor gestión de los órganos judiciales y la atención al ciudadano”.

[*] Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, *por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial* (BOE de 09.11.1994).

²³⁵ *Libro Blanco...*, op. cit., pág. 192.

²³⁶ Acuerdo de 14.04.1999, del Pleno del CGPJ, por el que se modifica el Reglamento 5/1995 (BOE de 0.05.1999). En la Exposición de Motivos que se acompaña como Anexo I se explica que es “conveniente homogenizar la organización y funcionamiento de los referidos Servicios” (Aptdo. I), y que “el

Con aquella normativa se promulgó la LEC 1/2000, en cuyo art. 163 se limita a disponer que *en las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse por la Oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado así la parte a la que represente*.

Dada la parquedad de la LOPJ, que preveía estos servicios pero no los regulaba, y la mera mención de la LEC a sus existencia, se produjo una situación de descoordinación y falta de homogeneización de criterios de actuación, llegándose a hablar incluso del “caos existente entre los cincuenta Servicios Comunes que ya habían sido creados”²³⁷, lo que se trató de paliar por el CGPJ mediante la Instrucción 2/2001, de 09.05, del Pleno del CGPJ, *sobre protocolo de Servicio para la coordinación, conexión e interrelación entre los Juzgados y Tribunales y los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución*²³⁸.

No será hasta la LO 19/2003 “cuando se aborde con seriedad el problema”²³⁹, se venga a colmar el “vacío legal existente hasta el momento”²⁴⁰, al tiempo que se implantan las bases de la denominada “Nueva Oficina Judicial”. Es con aquella cuando se introduce el concepto técnico de *servicios comunes procesales*, que son definidos por un nuevo art. 438.1 como *toda aquella unidad de la Oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales*.

Esas labores o funciones serán, a tenor del art. 438.2 LOPJ:

- ...de registro y reparto,...
- ...actos de comunicación,...
- ...auxilio judicial,...
- ...ejecución de resoluciones judiciales...
- ...y jurisdicción voluntaria.

Consejo General del Poder Judicial dicta el presente Reglamento [sic], compromiso que asumió en el Libro Blanco de la Justicia ante la parca regulación del artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” (Aptdo. II); y que “una de las cuestiones que más preocupa en relación con los servicios comunes es la falta de protocolos de funcionamiento e interrelación con las oficinas judiciales a las que sirven y la necesidad de homogeneizar las prácticas” (Aptdo. III).

²³⁷ JÚLVEZ LEÓN, M.ª ÁNGELES: “Los actos de comunicación, Protocolo de actuación” (Ponencia impartida en el Curso “Derecho e informática” –2001–), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, 2005, pág. 4.

²³⁸ BOE de 23.05.2001.

²³⁹ JÚLVEZ LEÓN, “Los actos de comunicación,...”, op. cit., pág. 4.

²⁴⁰ Explicaba la Exposición de Motivos de la LO 19/2003 que “los servicios comunes procesales son objeto de especial regulación, llenando el vacío legal existente hasta el momento, fomentando su desarrollo y especialización, y estableciendo un sistema que garantice un mejor gobierno especialmente en aquellos casos en los que, por su complejidad o tamaño, resulta imprescindible la existencia de mandos intermedios. Se pretende pues, ante todo, racionalizar y actualizar medios personales y materiales para una mejor y más rápida Administración de la Justicia” (Aptdo. VI ‘in fine’).

Si bien, añade en el art. 438.3 que *las Salas de gobierno y las Juntas de jueces podrán solicitar al Ministerio y a las comunidades autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades. Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento u otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso, será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.*

La Ley 13/2009 se limitará a reformarlo superficialmente y a dejarlo como se encuentra vigente en la actualidad, añadiendo el adjetivo “Procesal” a *Servicio Común*, sustituyendo “Notificaciones” por el más correcto y completo *Actos de Comunicación*; precisando que se trataba de los actos de comunicación “*que hayan de realizarse por la Oficina judicial*”; y a exceptuar los que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado así la parte a la que represente –aunque le faltó añadir que tampoco los que hubieren de realizarse por la vía del art. 161, ya fueren practicado por dicho procurador o por funcionario judicial–.

La antes citada Instrucción 2/2001 fue posteriormente derogada por el vigente **Reglamento 2/2010**, del Pleno del CGPJ de 25.02.2010, *sobre criterios generales de homogenización de las actuaciones de los servicios comunes*²⁴¹, promulgado al amparo del art. 438.7 LOPJ introducido por LO 19/2003²⁴². Al hablar de los “Servicios comunes con funciones de realización de actos de comunicación y de ejecución”, su art. 9.2, párr. 2º establece: *El servicio común llevará a cabo todos los actos de comunicación que le sean encomendados sin restricciones en razón de su clase, número u orden jurisdiccional de procedencia, salvo aquellos que por disposición legal deban realizarse a presencia judicial o bien por cualquier otro medio de comunicación.*

De igual modo, también se han dictado numerosas instrucciones, protocolos y circulares por parte de Secretarios de Gobierno y de Secretarios Coordinadores Provinciales, así como del propio Ministerio de Justicia²⁴³.

Con todo, el ambicioso –y atascado hoy día– plan de hacer de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) una realidad en todo el territorio nacional, con una distinción entre *unidades procesales de apoyo directo* (las “UPADs”) y los *servicios comunes procesales* (los “SCOPs”), entre ellos los de actos de comunicación (art. 438.3 LOPJ), que ha resultado desde el principio polémico e incluso tildada de inoperante, hace que todo esté actualmente sometido a profunda revisión, especialmente porque la “NOJ” solo tendrá una operatividad real cuando fragüe el otro reto monumental

²⁴¹ Aprobado por Acuerdo del Pleno de 25.02.2010 (BOE de 12.03.2010).

²⁴² **Art. 438.7 LOPJ:** *El Consejo General del Poder Judicial podrá establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia.*

²⁴³ Vid. Instrucción 1/2011 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, *sobre el funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo a jueces y magistrados y su actuación coordinada con los servicios comunes procesales.*

en que está inmersa la Administración de justicia: el expediente judicial electrónico.

3.4.- ACTOS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE AUXILIO JUDICIAL

3.4.1.- Auxilio judicial nacional

a) *Presupuestos*

La dinámica de los procesos judiciales y la jurisdicción de los juzgados y tribunales limitada por la ley a un determinado territorio o *circunscripción*, unido a razones de economía procesal y de uso óptimo de los recursos materiales y humanos, hacen imprescindible la colaboración intrajudicial, llamada por la LOPJ *cooperación jurisdiccional* (arts. 273-278²⁴⁴) y por la LEC *auxilio judicial* (arts. 165 y 169 a 177), aunque cuando esta o este se refiere a la petición de ayuda para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero o a la solicitada por autoridades extranjeras utiliza la expresión *cooperación judicial internacional* (art. 177), siendo de uso corriente hablar también de “auxilio judicial internacional”.

Pues bien, bajo la rúbrica de “Actos de comunicación mediante auxilio judicial” el art. 165 establece el motivo por el cual cabe solicitar la colaboración de otros órganos judiciales para la práctica de tales actos:

Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por tribunal distinto del que los hubiere ordenado, el despacho se remitirá por medio del sistema informático judicial salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico, y se acompañará la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción, debiendo ser devuelto conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando no se realicen en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al secretario judicial para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las causas de la dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por procurador, encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior.

De dicha norma se extraen dos exigencias esenciales:

1ª.- Que los actos de comunicación hayan de practicarse de forma personal. Inexplicablemente, la Ley 42/2015 ha eliminado el inciso “según lo dispuesto en el artículo 161 de esta ley”²⁴⁵, que era, precisamente, el que explicaba la necesi-

²⁴⁴ “CAPÍTULO VIII. De la cooperación jurisdiccional” (arts. 273-278). **Art. 273:** *Los Jueces y Tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional.*

²⁴⁵ La anterior redacción, dada por Ley 13/2009, era del siguiente tenor: “Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse según lo dispuesto en el artículo 161 de esta ley por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.

dad de acudir al auxilio judicial, puesto que de no ser así, el acto de comunicación no lo tendría que hacer un tribunal distinto. Lo único que ha cambiado es que el *despacho se remitirá por medio del sistema informático judicial*, pero tanto antes como ahora ese despacho tenía y tiene por finalidad practicar una comunicación mediante entrega directa o personal. Se trata de una restricción que no solamente concierne al órgano exhortante, sino también al exhortado. Sería absurdo e impropio remitir un exhorto a otro Juzgado para que practique un acto de comunicación personal o directa conforme al art. 161 y que el segundo se limitara a citar a la persona por correo, pues eso ya lo podría haber hecho el primero sin más trámites.

2ª.- Que su práctica tenga que realizarse por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado. Si el primer presupuesto o condicionante para recabar el auxilio judicial es de la necesidad de practicar un acto de comunicación por el sistema de entrega, la segunda el de que dicha actuación tenga que efectuarse, por razón del domicilio o paradero del destinatario, *fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto (art. 169.2), o, ya con carácter potestativo según el tenor del art. 169.3 (podrá pedirse), fuera del término municipal, pero dentro del partido judicial o circunscripción correspondiente.*

El modo de proceder, ya sea para solicitar la práctica de un acto de comunicación como otro tipo de actuación, viene regulado en los ya citados artículos 169 a 177, que integran el Capítulo VI del Título V del Libro I de la LEC, a los que se suma el reseñado art. 165, cuyo contenido el legislador ha preferido ubicar en el capítulo anterior, el IV. Dos son las vías de remisión de los exhortos:

a.- Remisión telemática. Conforme al actual art. 172.1, *los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. En todo caso –continúa en un segundo párrafo– el sistema utilizado deberá garantizar la constancia de la remisión y recepción del exhorto.* El sistema informático al que se refiere el precepto viene constituido por la plataforma del Punto Neutro Judicial gestionada por el CGPJ, uno de cuyos múltiples servicios es el de la remisión telemática de exhortos. De hecho, esta modalidad de transmisión no es ninguna novedad en la LEC, que ya

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al Secretario judicial para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las causas de la dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por procurador *legalmente habilitado para actuar ante el órgano exhortado*, encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior.” Destacamos en cursiva los cambios realizados por la reforma de 2015, que, además de eliminar el inciso relativo al art. 161, adapta el precepto a la obligatoriedad en el uso de medios electrónicos para estas comunicaciones y a la supresión del factor de territorialidad derogado tras la modificación de la Ley de Colegios Profesionales por la Ley 25/2009 (Ley “Omnibus”).

lo contemplaba en el año 2000²⁴⁶, pero hasta más de una década después no se ha aprovechado con carácter general esta previsión legal, no sin tener que vencer la cierta renuncia de muchos juzgados y tribunales a utilizar, todavía en la actualidad, dicho sistema²⁴⁷. No obstante, la Ley 42/2015 pretende dar efectividad a lo que ya estaba previsto por la Ley 18/2011²⁴⁸, obligando a que a partir del próximo 01.01.2016 todos los órganos y oficiales judiciales y fiscales utilicen los *sistemas telemáticos existentes*, que en este caso se refiere al PNJ, *respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esa fecha* (Disp. Ad. 1ª). Veremos si este mandato se cumple, sobre todo en las comunicaciones con los Juzgados de Paz, con las carencias y problemas que padecen.

b.- Remisión por las partes. Alternativamente, el propio art. 172 permite en su apartado segundo que, *sin perjuicio de lo anterior, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda encargada de su gestión, que sólo podrá ser el propio litigante o procurador que se designe*. En los casos, no muy frecuentes, en que las partes han hecho uso de esta posibilidad, principalmente para evitar la lentitud burocrática, lo ha sido normalmente estando personadas con procurador, siendo a este a quien el órgano judicial entrega los exhortos para su cumplimiento. A ambos advierte el art. 176 bajo la expresión *al litigante* de la imposición de multa en caso de demora injustificada en la presentación de los mismos ante el órgano exhortado²⁴⁹.

La devolución de los exhortos se efectúa siguiendo el mismo sistema empleado para la remisión (art. 175²⁵⁰) o, como es tradición decir, “por el conducto de su recibo”.

²⁴⁶ Art. 172.1 redacción original: “Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción”.

²⁴⁷ Vid. Circular 1/2012, de la Secretaría General de Administración de Justicia (M^º de Justicia), *relativa a la utilización obligatoria del servicio de intercambio telemático de exhortos del Punto Neutro Judicial del Consejo General de Poder Judicial*. Su punto primero dispone: “Todos los Secretarios Judiciales en cuyo ámbito funcional esté operativo el servicio de intercambio telemático de exhortos del PNJ del Consejo General del Poder Judicial deberá velar por su correcta utilización, comunicando a dicho Órgano cualquier incidencia que se produzca al respecto. En particular, deberán cuidar de que se abran todos los exhortos recibidos a través del citado sistema de comunicación”.

²⁴⁸ Vid., *infra*, capítulo IV.

²⁴⁹ **Art. 176:** “Falta de diligencia de las partes en el auxilio judicial”. *El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido, respectivamente, en el apartado 2 del artículo 172 y en el apartado 2 del artículo anterior*.

²⁵⁰ **Art. 175:** “Devolución del exhorto. 1. *Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 172*.”

b) *Los exhortos y las limitaciones de los Juzgados de Paz*

Indica el art. 170 que el auxilio judicial habrá de ser prestado por *la Oficina del Juzgado de Primera Instancia* del lugar en cuya circunscripción deba practicarse, si bien acto seguido matiza y, si el objeto del auxilio es un acto de comunicación y en dicho lugar existiese un Juzgado de Paz, *a éste le corresponderá practicar la actuación*, atribución de competencia origen de numerosos problemas. La Justicia de Paz se sitúa en la base de la pirámide de nuestra planta judicial y tiene sus particularidades, empezando por la de que, aunque los Juzgados de Paz ostentan la potestad jurisdiccional (art. 26 LOPJ²⁵¹), sus titulares no son profesionales ni pertenecen a la Carrera Judicial (art. 298.2 LOPJ). A su vez, en la gestión y ejecución material de esa potestad están comprometidos los Ayuntamientos respectivos, de los que depende el personal que presta servicios en dichos Juzgados (art. 51.1 LPyD), salvo los de poblaciones *de más de 7.000 habitantes y en aquellos otros Juzgados de Paz en los que la carga de trabajo lo justifique*, casos en los *prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia* (art. 51.2); asimismo, *las instalaciones y medios instrumentales del Juzgado de Paz, salvo cuando fuere conveniente su gestión total o parcial por el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma respectiva, estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo* (art. 51.3). El sistema de financiación –exceptuada las retribuciones de los funcionarios que sí pertenezcan a la Administración de Justicia– también tiene sus connotaciones especiales y está basado en compensaciones económicas y subvenciones a los Ayuntamientos en función los habitantes de derecho de cada municipio que han de prever anualmente los Presupuestos Generales del Estado²⁵² o, allí donde estén

2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas, si no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán por correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes.

²⁵¹ **Art. 26 LOPJ:** *El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y Tribunales: Juzgados de Paz. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Audiencias Provinciales. Tribunales Superiores de Justicia. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo.*

²⁵² **Art. 52 Ley 38/1988**, de 28.12, de Demarcación y de Planta Judicial (LDyP): *En los Presupuestos Generales del Estado se establecerá un crédito para subvencionar a los Ayuntamientos por la atención de los conceptos a que se refieren los dos artículos anteriores. La subvención se modulará en función del número de habitantes de derecho del municipio.*

Art. 404 LOPJ: *Junto a las demás partidas correspondientes a retribuciones de jueces y magistrados, los Presupuestos Generales del Estado contendrán una consignación anual para la dotación de los jueces de paz, otras atenciones de personal judicial a que den lugar los preceptos de esta ley y demás exigencias de la Administración de Justicia.*

Para el año 2015, vid. Orden JUS/1649/2015, de 31.07, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz (BOE de 06.08); nótese que “este acuerdo será de aplicación a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (punto Tercero del Anexo).

transferidas las competencias en medios materiales y económicos, los de las Comunidades Autónomas respectivas.

Todo lo anterior tiene una importante repercusión en el día a día de los Juzgados de Paz, esos grandes olvidados del sistema judicial español, muchos de ellos auténticas calamidades, que se ven desbordados a la hora de cumplir con sus cometidos y se encuentran siempre aquejados de que ni los medios económicos ni el personal asignados son suficientes²⁵³. No en pocas ocasiones deben cubrir demarcaciones judiciales extensas y con núcleos de población dispersos, con el agravante de que si pertenecen a municipios turísticos la población puede aumentar considerablemente en temporada estival.

Estas limitaciones y el abuso de la figura del auxilio judicial, con el consiguiente colapso de los Juzgados de Paz han requerido en varias ocasiones la intervención del CGPJ, destacando la **Instrucción 4/2001**, de 20.06, del Pleno, *sobre el alcance y los límites del deber de auxilio judicial*²⁵⁴. El texto advierte del “carácter complementario” y “restrictivo” de este recurso, sin que deba “utilizarse con carácter general y sistemático” (puntos 1.2 y 4.1), y haciendo las veces de recordatorio general al resto de Juzgados y Tribunales –la LEC llevaba escasos seis meses en vigor– de lo dispuesto, entre otros, en los arts. 155 –prioridad del uso del correo postal y similares con partes sin procurador–, 165 y 170 –solo auxilio judicial cuando proceda “la entrega directa a la persona del destinatario” según el art. 161–. Por su incidencia directa en el tema aquí estudiado, transcribimos sus puntos 2.4, 2.5 y 4.2:

“2.4.- Los actos de comunicación, cuando no hagan referencia a una parte personada en el proceso y, por tanto, no se efectúen a través del Procurador, o cuando, necesaria y justificadamente, hayan de llevarse a efecto mediante la entrega personal al destinatario de copia literal del documento judicial de que se trate, se realizarán por medio del correo, de telegrama o de cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos copia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.”

2.5.- Sólo podrán practicarse mediante el auxilio judicial aquellos actos de comunicación que impliquen necesariamente la entrega directa a la persona del destinatario de la copia de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la cédula de citación o de emplazamiento, como disponen los artículos 152, 161 y 165 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[...] 4.2.- De conformidad con lo que dispone el artículo 170 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter general, cuando se trate de Juzgados de Paz, sólo cabrá utilizar el recurso al auxilio judicial para la realización de los actos procesales de comunicación”.

²⁵³ Vid., respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ: *La situación de los Juzgados de Paz en Andalucía. Informe especial al Parlamento*, Sevilla, noviembre 2003.

²⁵⁴ BOE de 07.07.2014.

3.4.2.- Auxilio judicial internacional: las comisiones rogatorias

Cuando se trate de litigios en los que sea preciso comunicarse con personas o autoridades allende nuestras fronteras, como puede ocurrir con el emplazamiento a un demandado que no tenga domicilio o residencia en España, habrá que tener en cuenta la normativa de Derecho internacional privado aplicable en el ámbito de la cooperación o asistencia judicial internacional y el país extranjero que nos pida o al que pidamos la práctica de actos de comunicación. A este asunto de suma importancia y complejidad, cuyo desarrollo bien hubiera merecido un capítulo monográfico, dedica la LEC un escueto artículo, el 177, que titula “Cooperación judicial internacional” y al que da el siguiente contenido:

1. Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán conforme a lo establecido en las normas comunitarias que resulten de aplicación, en los Tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable.

2. A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles.

En parecidos términos, el art. 276 LOPJ dispone que *las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación*²⁵⁵. Son ambas normas procesales en blanco que anuncian los regímenes o sistema de fuentes jurídicas aplicables, a los que directamente se remite: el régimen comunitario, el convencional –hay autores que incluyen el anterior en este– y el autónomo o interno.

a) Régimen comunitario

En la Unión Europea, fruto de la competencias de los arts. 61 y 65 TCE, es hoy día característica la “europeización” de la cooperación judicial en materia civil” (FERNÁNDEZ ROZAS y SÁNCHEZ LORENZO²⁵⁶), presidiendo nuestra materia el **Reglamento (CE) 1393/2007**, de 13.11, del Parlamento Europeo y del Consejo, *relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil*²⁵⁷. Está en vigor desde el 13.11.2008²⁵⁸ y es de aplicación directa y obligatoria frente a cualquier otra norma concerniente

²⁵⁵ En la misma línea tenemos el **art. 277 LOPJ**: *Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia.*

Además, vid. Reglamento 1/2005 del CPGJ (arts. 74-85) e Instrucción 2/2009, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, *relativa al fomento de la cooperación jurídica internacional*, modificada por la Instrucción 6/2010, *de constitución y regulación de la Red Española de Secretarios Judiciales de Cooperación Jurídica Internacional*.

²⁵⁶ FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS, y SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO: *Derecho internacional privado*, 7ª ed, Civitas, Cizur Menor, agosto 2013, pág. 299.

²⁵⁷ DOUE de 10.12.2007.

²⁵⁸ Según el art. 26p2, salvo el art. 23, aplicable desde el 13.08.2008.

a la notificación y traslado de documentos entre Estados miembros (incluida Dinamarca, que tiene, por decisión propia, un régimen especial), siempre que se cumplan los requisitos relativos a su ámbito objetivo (materia civil y mercantil) y espacial (art. 1). El objetivo del Reglamento comunitario “no es interferir en los sistemas nacionales de notificaciones, sino que en lo esencial sus normas se limitan a indicar vías obligatorias de penetración en el otro Estado miembro (sistemas de importación y exportación de notificaciones)” (CARRILLO POZO y ELVIRA BENAYAS, MARÍA JESÚS)²⁵⁹.

La gran ventaja del régimen comunitario, ya desde el antecesor del texto de 2007, el Reglamento 1348/2000, es la del desarrollo pleno y eficaz de la comunicación directa. Ya no es necesario acudir a una *Autoridad Central* previamente designada por cada Estado, aunque la misma sigue aquí existiendo, denominada *Entidad central* (art. 3) y que en España es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, sino que, prácticamente como si de un exhorto nacional interno se tratase, se cursa la Comisión rogatoria directamente por el órgano judicial (*organismo transmisor*), en concreto el Letrado de la Administración de Justicia, al órgano judicial internacional o agente territorialmente competente para prestar el auxilio (*organismo receptor*) y conforme a los Anexos que periódicamente se van actualizando. Para esta labor sirve de gran ayuda la página de Internet de la Comisión Europea llamado “Portal Europeo de Justicia”²⁶⁰, que junto al “Atlas Judicial Europeo”²⁶¹ (dentro de dicho portal) facilitan enormemente la tarea de confeccionar de forma dinámica a través de diversos modelos normalizados que el propio Reglamento establece de las Comisiones Rogatorias a cursar según la finalidad de la solicitud.

Como alternativa a dichas Comisiones, el Reglamento 1393/2007 prevé que puedan emplearse otras formas o medios de transmisión de las solicitudes, según lo permita o no los diferentes Estados miembros, quienes se reservan el derecho de efectuar “comunicaciones” con las que limitar o establecer condicionantes a las mismas. Así, sería factible la *notificación o traslado por correo* (art. 14), la tradicional del conducto diplomático o consular (arts. 12 y 13) o incluso la *solicitud directa* (art. 15), *por cualquier persona interesada en un proceso judicial, quien podrá efectuar la notificación o traslado de documentos judiciales directamente por medio de los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado miembro requerido*. Dicho de forma más fácil, el interesado podrá hacer llegar la documentación al órgano judicial requerido territorialmente competente (en España, el juzgado Decano) o, en aquellos países donde existan, a los profesionales independientes con potestades en este ámbito para practicar actos de comunicación (como los Huissiers de Justice en Francia), sin tener que esperar

²⁵⁹ CARRILLO POZO, LUÍS FRANCISCO, y ELVIRA BENAYAS, MARÍA JESÚS: *Instrumentos procesales de la UE. Los reglamentos sobre notificaciones y obtención de pruebas*, Comares, Granada, 2012, pág. 11.

²⁶⁰ “https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-es.do”

²⁶¹ “http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm”

a que lo haga el órgano nacional requirente donde se sustancia el litigio, igual que ocurre con nuestros exhortos nacionales (art. 167.1p2 LEC).

Siendo de aplicación el Reglamento, no es obligatoria la traducción, ni siquiera jurada, de la demanda y demás documentos a efectos de la práctica de una Comisión Rogatoria y de ahí que el órgano judicial no deba (pese a que no es infrecuente en la práctica) obligar a la parte a realizar dicha traducción. Pero eso no quiere decir que se pueda solicitar sin más el auxilio judicial internacional, sin brindar a aquella la oportunidad de hacerlo a fin de evitar la posibilidad de que el demandado pueda negarse de forma legítima a tenerse por notificado con el argumento de no conocer el idioma empleado (art. 8.1). Por ello, para el caso de que sea preciso llevar a cabo el emplazamiento en un país comunitario, creemos que lo procedente es que el Letrado de la Administración de Justicia otorgue a la parte actora un plazo prudencial para que, potestativamente, traduzca al idioma correspondiente la demanda, la resolución de incoación del proceso y la cédula de emplazamiento o citación.

b) *Régimen convencional*

Este régimen está protagonizado por los Convenios multilaterales surgidos en el seno de la institución internacional llamada *Conferencia de la Haya de Derecho internacional Privado*²⁶², principalmente el **Convenio de La Haya de 1965** (de 15.11) *relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales*²⁶³, que utiliza como sistema ordinario el de “Autoridades Centrales” y ofrece diversos modelos oficiales para la cumplimentación de la Comisión correspondiente. Así, para emplazar a un demandado domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia, por ejemplo, el órgano judicial español redactaría el modelo oficial establecido por el Convenio, lo remitiría al Ministerio de Justicia (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional), quien lo enviaría a la Autoridad Central designada por el país requerido, que, a su vez, lo haría llegar a la autoridad judicial territorialmente competente.

De corte parecido, destaca igualmente la **Convención Interamericana de Panamá de 1975** (de 30.01) *sobre exhortos o cartas rogatorias*, nacida en el seno de la Organización de Estados Americanos.

Junto a los anteriores textos internacionales, existen numerosos tratados bilaterales suscritos por España²⁶⁴, que solo se aplican en defecto de los anteriores.

²⁶² “<http://www.hcch.net>”.

²⁶³ Ratificado por España mediante Instrumento de 29.04.1987 (BOE de 25.08.1987 y de 13.04.1989).

²⁶⁴ Son numerosos los tratados internacionales suscritos por España y otros países en materia de asistencia judicial internacional, como el que existe con *Marruecos* (Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 30.05.1997); *Túnez* (Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales de 24.09.2001); *Tailandia* (Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y el Reino de Tailandia de 15.06.1998); *Brasil* (Convenio de asistencia judicial en materia

Tanto para unos casos como para otros, resulta de utilidad el llamado “Prontuario de auxilio judicial internacional”²⁶⁵.

c) Régimen autónomo español

A falta de texto comunitario o convencional aplicable, el régimen autónomo o de producción interna está hoy día conformado por la **Ley 29/2015**, de 30.07, de *cooperación jurídica internacional en materia civil*²⁶⁶, y la LOPJ. La primera establece ya en su art. 2 su carácter subsidiario a *las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte* (aptdo. a) y *a las normas especiales del Derecho interno* (letra b), estas segundas- inexistentes en lo relativo a los actos de comunicación, y dedica sus arts. 20 a 27 a los “actos de notificación y traslado de documentos judiciales” (Capítulo II del Título I), inspirándose en la regulación ya existente en el plano europeo y convencional u apostando por las comunicaciones judiciales directas entre los órganos judiciales. Resulta clamoroso que al referirse a esta posibilidad la ley no cite al Reglamento 1393/2007²⁶⁷.

En última instancia, el principio o requisito reciprocidad será el que habrá que regir las solicitudes de cooperación, tanto pasivas como activas, con y por países

civil entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil de 13.04.1989); *Uruguay* (Convenio de cooperación jurídica entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay de 04.11.1987); *República Dominicana* (Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana de 15.12.2003); *Federación Rusa* (Convenio entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil, de 26.10.1990); *China* (Tratado de asistencia judicial en materia civil y mercantil de 02.05.1992); *Argelia* (Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España de 24.02.2005); o *Mauritania* (Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania de 12.09.2006). En la propia Europa hay suscritos convenios por España con “*Gran Bretaña*” (Convenio entre España y la Gran Bretaña sobre mutua asistencia en procedimientos civiles y comerciales de 27.06.1929); “*Checoslovaquia*” (Convenio entre España y Checoslovaquia sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias de 04.05.1987); *Bulgaria* (Convenio entre España y Bulgaria de asistencia judicial en materia civil de 23.05.1993); o con *Portugal* (Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la cooperación judicial en materia penal y civil de 19.11.1997), todos ellos desplazados por el Reglamento 1393/2007 cuando el mismo resulte aplicable.

²⁶⁵ “www.prontuario.org”.

²⁶⁶ BOE de 31.07.2015.

²⁶⁷ Vid. Preámbulo, Apto. II: “A la vista de la importancia que en el mundo de la cooperación jurídica internacional tienen y tendrán las comunicaciones judiciales directas, la ley opta por habilitar a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites marcados por el respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados y a la independencia judicial. La existencia de normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que articula la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, caso de los artículos 11(6), (7) y 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y de los artículos 8, 9 y 31 del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, por ejemplo, hace que deba ya proveerse de base normativa habilitante, aun genérica, a las comunicaciones judiciales directas”.

donde no exista un texto convencional suscrito por ambos Estados (art. 278 LOPJ).

3.5.- EL PROCURADOR COMO EJECUTOR DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

3.5.1.- Estatuto jurídico del procurador

Siguiendo la sistemática de nuestro trabajo, abordamos en este epígrafe la figura del procurador, pero lo hacemos estudiando primero la función menos conocida y aprovechada de estos profesionales, frente a la tradicional de ostentar la representación de las partes²⁶⁸ –con carácter exclusivo en el proceso civil²⁶⁹–, y que se refiere a la posibilidad de ser los sujetos activos ejecutores de los actos de comunicación procesal²⁷⁰. En ese papel no están ejercitando la representación activa de las partes, pues formalmente no actúan en nombre de ellas, sino, en cierto modo, la del propio órgano judicial, aun no perteneciendo a él, en una suerte de comisión de servicio que es expresión directa de su condición de *cooperadores de la Administración de Justicia* que les viene conferida por la LOPJ y por su propio estatuto orgánico. Respecto a la primera, el Libro VIII lleva por título “Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia” (arts. 541-557), refiriéndose, además de al Ministerio público, a los Abogados, a los Procuradores, a los Graduados Sociales y a la Policía Judicial. Más allá del enunciado de ese Libro, creado por LO 19/2003, si bien no se habla expresamente de esa función de cooperación de los Procuradores, la misma está implícita en el art. 543.2: *Podrán realizar los actos de comunicación a las partes del proceso que la ley les autorice*.

En cuanto al desarrollo de su estatuto orgánico y al propio concepto de “procurador”, ambos se contienen en el **RD 1281/2002**, de 05.12, *por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales*²⁷¹ de España, que dedica su art. 3 a establecer una *definición de procurador*:

²⁶⁸ Explican FERNÁNDEZ MONTALVO y XIOL RÍOS que, “históricamente, la necesidad de la intervención del Procurador estuvo reservada a los Tribunales superiores, autorizándose a las partes la comparecencia por sí mismas en los Juzgados inferiores, salvo que tuviesen su residencia fuera de la cabeza de partido o que no ofreciera seguridad o garantía bastante para la entrega de los autos (Novísima Recopilación, Ley 1ª Título XXXI, Libro V y leyes 1ª y 2ª, Título XIII Libro XI). La LEC de 1855, en su artº. 13, estableció el principio general de la necesidad de comparecencia por medio de Procurador con cuatro excepciones (actos de jurisdicción voluntaria y de conciliación, juicios verbales y de menor cuantía) en las que las partes podía comparecer personalmente. Este sistema fue recogido por los arts. 3 y 4 de la LEC de 1881, en su redacción originaria, si bien los supuestos exceptuados la comparecencia podía hacerse por las partes de manera personal, o por medio de administradores o apoderados” (*Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal* [Ley 10/1992], Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pág. 31).

²⁶⁹ **Art. 543.1 LOPJ**: *Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa*.

²⁷⁰ Además de efectuar, como representante activo, actos de postulación ante el tribunal y de trasladar las demandas y escritos a los procuradores de las demás partes ex art. 276.

²⁷¹ BOE de 21.12.2002. Desaparecidos de nuestro Ordenamiento los Procuradores “en Cortes”, la adjetivación “de los Tribunales” resulta ociosa, aunque sigue siendo costumbre muy arraigada escribirlo así en las demandas y escritos que presentan dichos profesionales.

Son los Procuradores de los Tribunales quienes, válidamente incorporados a un Colegio:

- 1. Se encargan de la representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional.*
- 2. Se encargan del fiel cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos servicios que, como cooperadores de la Administración de Justicia, les encomienden las leyes.*
- 3. El procurador podrá ostentar la defensa del cliente cuando no esté reservada por Ley a otras profesiones.*

También se concreta allí la “Función de la Procura” (art. 1):

- 1. La Procura, como ejercicio territorial de la profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.*
- 2. Es también misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser asumidas de forma directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable.*

La función de cooperación se presenta como uno de los “deberes esenciales” de los procuradores en el art. 37:

- 1. Es deber del procurador desempeñar bien y fielmente la representación procesal que se le encomiende y cooperar con los órganos jurisdiccionales en la alta función pública de administrar justicia, actuando con profesionalidad, honradez, lealtad, diligencia y firmeza en la defensa de los intereses de sus representados.*
- 2. En sus relaciones con los órganos administrativos y jurisdiccionales, con sus compañeros procuradores, con el letrado y con su mandante el procurador se conducirá con probidad, lealtad, veracidad y respeto.*
- 3. Con la parte adversa mantendrá, en todo momento, un trato considerado y correcto.*

3.5.2.- **Habilitación y competencias. Evolución legislativa**

Con anterioridad a la LEC 2000, la actuación del procurador en la realización de los actos de comunicación era muy limitada, a pesar de la mejora en la tramitación, como ocurría cuando se encargaban del diligenciado de los exhortos (ARIZA

Vid. art: 8. “Condiciones generales para ser procurador”. *Para ser procurador es necesario:*

a) Tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales o salvo dispensa legal. b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

c) [letra declarada nula por STS 17.06.2005 (BOE 08.08.2005)].

d) Haber obtenido el título de procurador, que será expedido por el Ministerio de Justicia, previa acreditación de los requisitos establecidos en este Estatuto General, de acuerdo con la Ley.

COLMENAREJO²⁷²). Lo explicitó luego en 1997 el CGPJ en su *Libro Blanco*, en el que se quejó de que no hubiera "previsión alguna sobre la posibilidad de que los representantes de las partes puedan realizar al menos las comunicaciones de las que no dependa la personación o emplazamiento de las partes, o la notificación de las sentencias"²⁷³; y lo reiteró en su Informe de 1998 al Proyecto de la que sería la LEC 2000, en el que, al hilo de su comentario a la entonces existente posibilidad de delegación del Secretario judicial en otros funcionarios, añadió: "sin perjuicio de que también los actos de comunicación puedan realizarse por medio de Procurador, tratándose de comunicaciones a partes en los procesos, o cuando así lo pida la parte a quien interese"²⁷⁴.

La Ley 1/2000 no asume esas consideraciones relativas al procurador-cooperador, pero sí refuerza su figura e introduce la innovación de que sean los propios procuradores los que se trasladen entre sí los escritos que presenten al órgano judicial (arts. 26.2.4²⁷⁵ y 276.1²⁷⁶) a través de unos también novedosos servicios de recepción organizados por los Colegios respectivos (art. 28.3), descargando de dicha tarea al primero. Lógicamente, no constituyen actos de comunicación procesal, pero sí una actividad de comunicación que se confiaba a los procuradores, consiguiendo con ello la agilización del proceso y, no menos importante, que todas las partes tengan conocimiento de las peticiones formuladas de contario de forma inmediata y sin tener que esperar a que el órgano judicial acuerde su traslado formal al tiempo de ser proveídas.

a) *Ley Orgánica 19/2003 y Ley 13/2009*

La Ley 13/2009 supuso la reforma más profunda de la LEC²⁷⁷ desde que se promulgara casi diez años atrás tratando de liberar a Jueces y Magistrados de funciones no estrictamente jurisdiccionales y reforzando el papel de los entonces Secretarios Judiciales. Su Exposición de Motivos daba buena cuenta de ello y de otros muchos aspectos, pero pasó por alto la también importante novedad de hacer realidad el hito histórico establecido, 'ex novo', cuatro años antes por la LO 19/2003 de permitir a los procuradores la realización de actos de comunicación

²⁷² ARIZA COLMENAREJO, MARÍA JESÚS: "El acto de comunicación entre las funciones de los procuradores", *Boletín del Ministerio de Justicia*, n.º 2149, diciembre 2012, Madrid, pág. 13; la autora cita el art. 290 LEC 1881: "En la resolución que orden librar el exhorto podrá designarse, a instancia de parte, persona o personas para que intervengan en su diligenciado, con expresión del alcance de su intervención y del plazo de su comparecencia ante el tribunal exhortado, expresando si su incomparecencia determina o no la caducidad del exhorto".

²⁷³ *Libro Blanco de la Justicia*, op. cit., pág. 191.

²⁷⁴ *Estudios, informes...*, op. cit., pág. 178.

²⁷⁵ **Art. 26.2:** *Aceptado el poder, el procurador quedará obligado: [...] 4.º A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el artículo 276.*

²⁷⁶ **Art. 276.1:** *Cuando las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos deberá trasladar a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que presente al tribunal.*

²⁷⁷ Y aún todavía hoy, sin escatimar las sustanciales reformas realizadas últimamente por las Leyes 19/2015 y 42/2015.

directamente con la parte contraria o con otras personas. Fruto de todo ello es que desde el 4 de mayo de 2010, fecha en que entró en vigor la citada modificación de 2009, cabe invocar un precepto, el 152.1 de la LEC, que dice que *los actos de ejecución se ejecutarán por [...] 2º. El Procurador de la que parte que así lo solicite [a su costa]*²⁷⁸. Correlativamente, el procurador queda obligado a un nuevo deber: “a la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales” (art. 26.2.8º en su redacción por dicha Ley 13/2009).

Con ese derecho-deber se materializaba una vieja y persistente aspiración del gremio, que trataba de defender las bondades de apostar por la intervención activa de estos profesionales en estas tareas procesales, dejando de ser meros testigos de las actuaciones de los funcionarios judiciales. Se trataba, en definitiva, de aprovechar todo el potencial de los procuradores, dotándoles de competencia con la que poder hacer más equilátero ese triángulo de facultades que las sintetiza, con los dos vértices en los que desempeñan su papel de representantes procesales de las partes en su doble faceta de representación activa para realizar actos de postulación, como pasiva para ser receptores de los actos de comunicación del órgano judicial y de los traslados efectuados por otros procuradores, y el tercero, menos desarrollado, en su atribución de *colaboradores*, un ‘tertium genus’ en el que representar al propio órgano judicial y, por ende, al Estado, en la práctica de los actos de comunicación propios del asunto en que estuviesen personados. No obstante, en tanto que no se otorgaba la capacidad de certificación en la práctica de los actos de comunicación que también habían demandado (así como en los de ejecución), la ley confiaba en los procuradores cuando *bajo su responsabilidad* (art. 152.1 ‘in fine’) se entendieran directamente con el destinatario y no hubiera habido complicaciones (art. 161.1), pero no así cuando el mismo rehusara la comunicación (art. 161.2) o la misma efectuase a través de un tercero (art. 161.3), o no se encontrara a nadie en el domicilio (art. 161.4), supuestos todos ellos en que no bastaba su firma, sino que se les exigía “acreditar la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, para lo cual podrán auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo” (art. 161.5 antes de ser suprimido por Ley 42/2015).

En la doctrina esta posibilidad había despertado el recelo por parte de algunos autores, sobre todo a raíz de la Ley 13/2009, que aducían, entre otras razones, la existencia de “intereses particulares y partidarios, que coinciden con los de su cliente” (GARCÍA LUBÉN BARTHE²⁷⁹) o que la procura constituye “una actividad profesional privada que impide absolutamente que al Procurador se le puedan enco-

²⁷⁸ Se trata del texto vigente, con la excepción de que la Ley 42/2015 ha eliminado el inciso final entre corchetes.

²⁷⁹ GARCÍA LUBÉN BARTHE, PALOMA: “Sección II. Reformas del Libro I de la LEC sobre disposiciones relativas a los juicios civiles (II): Artículos 129 a 247 LEC”, *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, pág. 194.

mendar funciones de carácter público y, entre ellas, la fe pública” (SÁNCHEZ LÓPEZ²⁸⁰).

Aquellas críticas no hacen mella en el legislador, que más tarde da un pequeño paso más con la Ley 37/2011, de 10.10, *de medidas de agilización procesal*. Con ella, aun cuando el cliente del Procurador no le haya solicitado *la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia*, así lo podrá ordenar de oficio el Letrado de la Administración de Justicia *en interés de éste* (art. 26.2.8º), supuestamente por *corresponderle la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso* (art. 26.2.1º). El empleo de este recurso es, al menos para nosotros²⁸¹ y hasta la fecha, desconocida, toda vez que este nuevo inciso parece cargado de buenas intenciones pero de cuestionable aplicación real. Nadie mejor, se supone, que el propio Procurador para velar por el *interés* de su propio representado, razón de más para que la norma hubiera concretado el supuesto de hecho por el que se puede “obligar” al procurador, gratis además, para realizar una comunicación judicial y sin que la falta de medios personales en la Administración de Justicia pueda servir de fundamento.

b) **Ley 42/2015: capacidad de certificación**

Llegamos, por último, a la Ley 42/2015. Con ella la Procura ha conseguido, por fin, la equiparación jurídica de los procuradores y los funcionarios judiciales *para la realización de los actos de comunicación*, a cuyo fin *ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias* (nuevo aptdo. 5 del art. 23)²⁸².

²⁸⁰ SÁNCHEZ LÓPEZ, BÁRBARA: “Sección I. Reformas del Libro I de la LEC sobre disposiciones relativas a los juicios civiles (I): Artículos 1 a 128 LEC”, *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, págs. 136. La autora también manifiesta que “[f]rente a esta novedad se han alzado, con razón, algunas voces procedentes de los fedatarios públicos notariales –únicos que detentan la fe pública extrajudicial– para criticar la merma en las garantías de autenticidad de la comunicación practicada mediante procurador” (ídem, pág. 135).

²⁸¹ Si podemos citar el testimonio personal que ofrece el procurador ÁLVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS, MANUEL: “Un ejemplo de esta potestad la tuvo el autor de este ensayo en unas diligencias preliminares en la que solicitaba exhibición de informes médicos por cinco facultativos, y en las que el secretario acordó el acto de exhibición tan solo para doce días después, entregando al procurador junto con la admisión de la solicitud, las cédula[s] de requerimiento para los médicos. Todos ellos fueron citados tres días después de la entrega y acudieron al acto del requerimiento, teniendo el ciudadano una ágil respuesta de los tribunales en su petición (“Los actos de comunicación practicados por procuradores: referencia a la próxima Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00”, *ICPM, Revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid*, n.º 32, 1º trimestre 2015, pág. 45).

²⁸² Se trata de un reconocimiento legal explícito que MAGRO SERVET, VICENTE, entendió que ya se encontraba implícitamente presente en el art. 543.2 tras su reforma por LO 19/2003: “entendemos que si el legislador le está otorgando esta facultad para llevar a cabo el acto de comunicación le está atribuyendo, al mismo tiempo, la capacidad de certificación” (“Actos de comunicación y procuradores: reformas de la LEC por LO 19/2003 y futura Oficina Judicial”, *Según Proceso Civil, Cuadernos jurídicos*, n.º 92, marzo-abril 2009, pág. 19).

Como contrapeso se somete su actuación del procurador a la dirección del Letrado de la Administración de Justicia. El nuevo apartado 5 del art. 25 expresamente prevé que *su actuación será impugnabile ante el secretario judicial conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso revisión*. Pero hay que tener en cuenta que el objeto del recurso de reposición, como el de cualquier otro, no es una *actuación*, sino una resolución, de modo que lo que la parte afectada podrá recurrir será la diligencia de ordenación o decreto posterior que posteriormente dicte aquel tomando como antecedente la actuación de aquel profesional. El supuesto más claro es el de la declaración de rebeldía de la parte demandada, que necesariamente ha de partir de la constancia en autos del hecho de que la misma ha sido legalmente emplazada para comparecer en juicio y que, transcurrido el plazo otorgado, no lo ha hecho.

Por otro lado, echamos en falta en la LEC la que el procurador deba ser expresamente designado por el Letrado de la Administración de Justicia para practicar el acto de comunicación, lo que entendemos cabe acordar por diligencia de ordenación o en la propia resolución de incoación. Con “delegación” nos referimos a la encomienda ‘ad hoc’ y expresa para realizar por sí el trámite, una vez que lo interese, normalmente mediante Otrosí en la demanda si estamos en el inicio del proceso.

Dejando al margen los recelos y prejuicios (quizá corporativistas) que ha generado el hecho de poder habilitar a los procuradores para llevar a cabo diligencias judiciales hasta ahora encomendadas a los funcionarios públicos, lo cierto es que los mismos tienen un doble hándicap:

a. Normalmente **se dirigen a la parte contraria** a la que representan, lo que supone que tengan que desdoblarse por su “doble naturaleza jurídica”²⁸³, representando intereses privados (los de su poderdante) y, al mismo tiempo, cumpliendo una función pública que le convierte en un cooperador de la Administración de Justicia con un ‘status’ privilegiado. Vaya por delante que nosotros damos un voto de confianza en estos profesionales y que asumimos que en ellos prevalece esta segunda condición en la que actúan con responsabilidad e imparcialidad, pero en el acto mismo de la práctica del acto de comunicación, a poco que no actúen con un poco de inteligencia y sepan resaltar con sutileza que no se presentan por encargo de la contraparte, sino que “vienen del juzgado”, podrán suscitar el recelo del demandado destinatario.

b. Los **derechos arancelarios** que devenguen habrán de ser sufragados por su propio cliente, sin posibilidad de repercusión posterior en costas y gastos al no estar incluidos en los *conceptos* que indica el art. 241.1º. Este factor es determinante en el hecho de que la Procura no haya interesado ya con mayor asiduidad

²⁸³ DÍAZ FIEIRAS, M.ª JOSÉ: “Actos de comunicación procesales”, *Procuradores*, n.º 88, octubre 2010, Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de España (CGPE), Madrid, pág. 33.

hacer uso de esta atribución, independientemente de que ahora se encuentre reforzada con su capacidad certificadora.

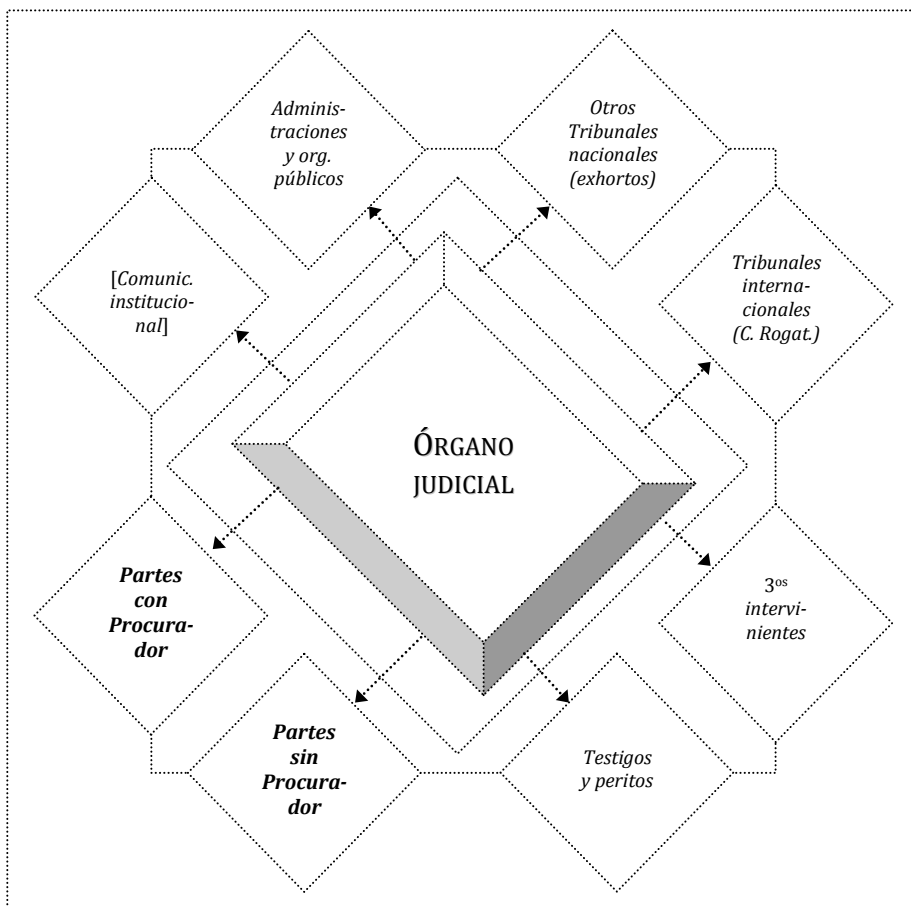
3.5.3.- Responsabilidad

Consecuencia de la intervención que desde el año 2000 se ha ido gradualmente otorgando a los procuradores en los actos de comunicación, la LEC también les incluye en el régimen sancionador establecido en el art. 168, que en su apartado 2 dispone que *el procurador que incurriere en dolo, negligencia o morosidad en los actos de comunicación cuya práctica haya asumido o no respetare alguna de las formalidades legales establecidas, causando perjuicio a tercero, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados y podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en las normas legales o estatutarias*.

Este segundo apartado presenta una redacción diferente al primero y, si para los funcionarios ha de concurrir malicia o negligencia, para el procurador ha de haber *dolo, negligencia o morosidad* en los actos de comunicación, así como un segundo motivo, diferente del anterior, que es el de no respetar *alguna de las formalidades legales establecidas*; si el mal que se pretende evitar con la norma respecto a aquellos es el de los retrasos y dilaciones indebidas, para este es más amplio e indeterminado: causar *perjuicio a tercero*; si aquellos serán (imperativo) corregidos disciplinariamente, este *podrá ser sancionado*. REVILLA PÉREZ considera que, aún siendo los motivos en que se exige responsabilidad más amplios en el caso del procurador, para que la misma nazca “debe haberse producido un resultado lesivo -«causando perjuicio a tercero»-”²⁸⁴, criterio que no podemos suscribir porque respecto a los funcionarios el reproche nace de la producción de unos retrasos o dilaciones indebidas que ya constituyen objetivamente un perjuicio. Efectivamente, los motivos son mayores, pero no por razón del tercero, sino porque en el caso de los funcionarios aquellos quedan circunscritos a dichos retrasos o dilaciones, mientras que respecto de los procuradores es, con carácter general, *en los actos de comunicación cuya práctica haya asumido*.

²⁸⁴ “Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 286.

4.- SUJETOS PASIVOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN



4.1.- LAS PARTES COMO DESTINATARIOS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

4.1.1.- Las partes personadas

Las partes integrantes de un proceso judicial son los destinatarios “naturales”²⁸⁵ o sujetos “directos”²⁸⁶ de los actos de comunicación. No es de extrañar por tal motivo que sean ellas las primeras a quienes se refiere la LEC al comenzar el capítulo dedicado a la materia y al establecer en su art. 150.1, incorrectamente titulado como “Notificación de resoluciones y diligencias de ordenación”²⁸⁷-, que

²⁸⁵ GASCÓN INCHAUSTI: “Artículo 149”, op. cit., pág. 637.

²⁸⁶ GUTIÉRREZ CARBONELL: “Artículos 149 a 177” (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo II (Artículos 99 a 205), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 440.

²⁸⁷ La diferenciación entre resoluciones y diligencias de ordenación no tiene sentido, pues estas últimas también son resoluciones. Esta misma cabecera ya estaba presente en 2000 y no escapó a la crítica. Vid. CANCIO FERNÁNDEZ: “Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 58, quien cita en el mismo sentido a RODRÍGUEZ MERINO.

*las resoluciones procesales*²⁸⁸ *se notificarán a todos los que sean parte en el proceso.*

El precepto, trasunto del art. 270 LOPJ²⁸⁹, es en este pasaje casi idéntico a su predecesor art. 260p1 de la LEC 1881, que disponía que “todas las providencias, autos y sentencias se notificarán a quienes sean parte en el juicio”, siendo necesario subrayar que ni entonces ni ahora se dice que las resoluciones se tengan que notificar “a las partes”, sino solamente a quienes *sean parte*, es decir, a aquellos sujetos que hayan comparecido en el proceso y se hayan constituido formalmente en parte conforme a las reglas generales de postulación (arts. 23 y 32)²⁹⁰. Esto tiene una relevancia procesal importante y pone en entredicho la costumbre de la

²⁸⁸ Tras la Ley 13/2009, las “resoluciones procesales” engloban las resoluciones judiciales propiamente dichas, dictadas *por los jueces y Tribunales* (providencias, autos y sentencias; art. 206.1), como las resoluciones de los Secretarios judiciales (diligencias y decretos; art. 260.2).

²⁸⁹ **Art. 270 LOPJ:** *Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como las que lo sean por secretarios judiciales en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarán a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley.*

²⁹⁰ Al comentar el antiguo artículo 260 SÁNCHEZ SÁNCHEZ acogía la misma interpretación: “Se dice en la LEC que las resoluciones se notificarán a quienes sean parte. A tales efectos se entiende por parte procesal aquella persona que, teniendo capacidad y legitimación, se persona en el proceso, en tiempo y forma (es decir, por sí misma, por representante debidamente acreditado o por medio de Abogado y Procurador, cuando así lo exige la Ley). [...] parece deducirse, *a sensu contrario*, que las resoluciones no se comunicarán a quienes no sean parte, aunque tengan derecho a serlo” (“Artículo 260”, *Ley de Enjuiciamiento Civil*,..., op. cit., pág. 1.111).

Ya con la LEC 2000 RODRÍGUEZ MERINO entiende que “es a las partes, constituidas formalmente como tales, a las que deberán notificarse con carácter general las resoluciones judiciales que se dicten”, y se apoya en lo previsto en el art. 497.1, en cuanto que al demandado rebelde solo se le notificará la resolución que ponga fin al proceso (“Artículo 149”, op. cit., pág. 999-1000).

Con el mismo tenor, vid. **SAP Murcia (Secc. 4ª) 10.06.2010** (Roj: SAP MU 1445/2010): “Dos son las infracciones procesales graves, con indefensión, que la apelante imputa al Juzgado durante la primera instancia. En primer lugar afirma que debió notificársele la providencia de 30-1-09 por la que se rechazaba homologar el acuerdo alcanzado entre las partes ante la falta de personación de una de ellas, indicando que también debía haberle requerido para que subsanara ese defecto de falta de Procurador. Invoca como precepto infringido el art. 11.3 LOPJ, señalando que al desconocer tal resolución no ha podido personarse y subsanar tal defecto.

La obligación de notificar las resoluciones que se dicten en un procedimiento lo es a los que “sean” partes en el proceso (art. 150.1 LEC), y ello exige que se cumplan los requisitos de postulación, esto es que comparezcan con Abogado (art. 31 LEC) y Procurador (art. 23 LEC), salvo supuestos excepcionales que no concurren en el presente caso. La parte demandada fue debidamente emplazada el 6-11-08 (folio 39), por lo que tenía conocimiento de la existencia del procedimiento, y no había comparecido el 5-12-08 cuando se presentó un escrito por ella firmado acompañando un convenio transaccional, de ahí que no tuviera obligación de notificarle el Tribunal tal resolución.

Al no ser parte, no tenía tampoco el Juzgado la obligación de requerirle para subsanar la falta de personación. El artículo 11.3 LOPJ invocado por la apelante establece un principio general anti-formalista, limitando la posibilidad de desestimar pretensiones de las partes por motivos formales cuando fueran subsanables, siendo el artículo 231 LEC el que impone a los Tribunales y Secretarios judiciales la obligación de cuidar la subsanación de defectos de los actos procesales en los que hayan podido incurrir las partes. Ahora bien, en el presente caso no nos encontramos ante un mero defecto formal, sino ante la total falta de personación de la parte que interesa que el Tribunal le requiera para que se persone en debida forma, cuando ya lo había hecho al emplazarle” (F. D. 2).

práctica diaria de notificar, casi de forma mecánica, muchas de las resoluciones que se dictan a quienes no están personados. Incluso respecto de las que sí lo están se quejaba en 1997 el CGPJ en el *Libro Blanco de la Justicia*: “no tiene razón de ser hoy día [...] la necesidad de notificar dentro de un proceso absolutamente todas las resoluciones del Juzgado, aunque sean debidas al impulso de oficio, sin necesidad de ningún acto de las partes”²⁹¹.

4.1.2.- Comunicaciones al rebelde procesal

La rebeldía procesal es aquella situación en que es declarada la parte demandada *que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento* (art. 496.1). Esta declaración, que “deviene de forma objetiva” y “constituye un acto procesal del órgano jurisdiccional de carácter necesario” (GIL SÁEZ²⁹²), compete desde Ley 13/2009 al Letrado de la Administración de Justicia²⁹³, *excepto en los supuestos previstos en esta Ley en que la declaración de rebeldía corresponda al Tribunal*²⁹⁴.

²⁹¹ *Libro Blanco...*, op. cit., pág. 191. El espíritu del CGPJ reflejado en dicha obra fue trasladado, con mayor contundencia, al Informe al Proyecto de LEC de 1998, llegando a decir que “un principio racional de funcionamiento y de eficacia lleva a entender que no es preciso notificar las diligencias de ordenación”, e incluso “las providencias, en cuanto sean actos de impulso”. Como argumento, exponía que “si rige, como es verdad, el impulso de oficio, no parece razonable comunicar en todo momento a las partes que ese mandato legal se está cumpliendo. Por ello, sería oportuno que la exigencia legal de notificar las resoluciones sólo se refiriera a los autos y a las sentencias y al resto de resoluciones que acordaran expresamente un hacer, no hacer o se requiera por su naturaleza el ser comunicada a las partes, testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio. De esta manera se reducirá un gran volumen de trabajo en las secretarías judiciales y en los servicios comunes de notificación, reduciendo en gran medida el peso de la actividad burocrática” (*Estudios, informes...*, op. cit., pág. 177).

²⁹² GIL SÁEZ, JOSÉ MARÍA: “La situación de rebeldía en el proceso civil”, *Cuestiones de Derecho procesal civil (Juicio de rebeldía. Terminación anormal del proceso. Recursos)* (Dir. GIL SÁEZ, JOSÉ MARÍA), Cuadernos de Derecho Judicial n.º 30/1995, CGPJ, Madrid, mayo 1995, págs. 20-21.

²⁹³ Ante el silencio de la LEC sobre la clase de resolución a dictar, se hace por diligencia de ordenación, de forma análoga a la providencia que se dictaba antes de aquella reforma.

²⁹⁴ No dice la LEC cuáles sean dichos *supuestos*, que tras la Ley 42/2015 parece que han quedado reducidos a uno. Hasta ella, que ha introducido la contestación escrita en el juicio verbal, un supuesto claro era el que tenía lugar tras la inasistencia del demandado a la vista de dicho juicio, a la que era directamente citado, disponiendo el art. 442.2 que “al demandado que no comparezca se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso”. El reflexivo “se le declarará” hacía referencia implícita al Juez o Magistrado que celebraba aquel acto. Ahora la ley dispone que *si no compareciere el demandado, se procederá a la celebración del juicio*, lógico por cuanto con la reforma se le ha debido previamente dar traslado de la demanda *para que la conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario* (actual art. 438.1). *Si el demandado no compareciere* –continúa el mismo precepto–, *será declarado en rebeldía conforme al artículo 496*, por lo que ya no hay duda de que lo declarará el Letrado de la Administración de Justicia.

Queda, pues, el otro momento en que la ley prevé la declaración de rebeldía (aparte del art. 496), que es el del art. 418*. Tanto si estamos en la audiencia previa del juicio ordinario como en la vista del juicio verbal (art. 443.2**) si el actor aduce defecto de capacidad o representación en el demandado impositivo de una personación forma y el mismo no fuese subsanable, será de aplicación el apartado 3 de dicho precepto y habrá que entender que será el Juez o Magistrado quien declare oralmente la rebeldía. La duda surge entonces cuando el defecto sí sea subsanable, se suspenda la

La validez de la declaración de rebeldía del demandado parte necesariamente de la existencia de un previo y válido acto formal de emplazamiento o citación al mismo. Si lo fue directamente en su persona, no habrá duda de que conocía la existencia del pleito y su incomparecencia se presumirá voluntaria, a salvo del supuesto de *fuerza mayor* del art. 501.1º previsto para la acción de rescisión; si se hizo a través de tercero receptor (art. 501.2º), dicha presunción será doble, una respecto de la puesta en su conocimiento del proceso por mediación de aquel (art. 161.3) y otra en cuanto a dicha voluntad tácita de no querer comparecer y personarse en el mismo; por último, si el llamamiento al juicio fue por edictos (art. 501.3º), la ley ha de forzar el instituto de las presunciones jurídicas hasta el extremo de llevarlo al terreno de la pura ficción, imponiendo al juzgado o tribunal una tercera presunción, que no es otra que la de suponer, no por propia convicción, sino por imperativo legal, que el demandado ha acudido al tablón de anuncios de la oficina judicial –precisamente a ese y no a otro (!)– o, a partir de ahora, a la sede judicial electrónica, o que, al menos, podía haberlo hecho, para así llegar al mismo punto de partida de la idea del conocimiento del proceso y de su posterior incomparecencia voluntaria.

Una vez tenga el demandado tal consideración de rebelde procesal, la ley es severa con el mismo en lo que al *régimen de comunicaciones* se refiere, al establecer el art. 497 que solamente se le notifiquen las dos resoluciones siguientes:

1ª.- La propia **resolución que declare la rebeldía** (art. 497.1), que habrá de notificarse al demandado *por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no lo fuere, mediante edictos*. La alusión al correo debe entenderse al correo certificado con acuse de recibo (art. 160.1), con el que así poder tener constancia en autos de la recepción de una comunicación que es importante, aunque cierto es que como no se trata de ninguna de las que tiene por finalidad la personación en juicio o la intervención personal de las partes a que se refiere el art. 158, podría sostenerse que sería suficiente con la correcta remisión en los términos del art. 155.4. Al hilo

audiencia o la vista por ese motivo y el demandado no lleve a cabo la subsanación, situación en la que creemos que habrá de ser el Letrado de la Administración el que dicte la correspondiente resolución (diligencia de ordenación) declarando aquella rebeldía.

***Art. 418:** “Defectos de capacidad o representación. Efectos de su no subsanación o corrección. Declaración de rebeldía”. 1. *Cuando el demandado haya alegado en la contestación o el actor aduzca en la audiencia defectos de capacidad o representación, que sean subsanables o susceptibles de corrección, se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento, se concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de la audiencia.*

2. *Cuando el defecto o falta no sean subsanables ni corregibles o no se subsanen o corrijan en el plazo concedido se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente de este precepto.*

3. *Si el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado, se le declarará en rebeldía, sin que de las actuaciones que hubiese llevado a cabo quede constancia en autos.*

****Art. 443.2:** *Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con los artículos 416 y siguientes.*

de lo anterior y frente a otras opiniones (PÉREZ-CRUZ MARTÍN²⁹⁵), estimamos suficiente esta comunicación postal frente a la personal del art. 161, por tratarse de un destinatario que ya ha tenido la oportunidad de mostrar interés y comparecer en el proceso.

2ª.- La **resolución que ponga fin al proceso** (art. 497.1 'in fine'), por lo general la sentencia, pero pudiendo ser también un auto o un decreto. Notificadas esta y la de declaración de rebeldía, *no se llevará a cabo ninguna otra*²⁹⁶, pero hay que hablar de salvedades, porque, primero, la previsión no afecta a las otras clases de actos de comunicación, como la citación a juicio del mismo para el interrogatorio que pueda proponer la actora (art. 301); y segundo, si se trata de un demandado rebelde citado o emplazado por edictos *por carecer de domicilio conocido o hallarse en ignorado paradero* y posteriormente es localizado, entonces no podrá esperarse sin más hasta que llegue el momento procesal de dictar aquella resolución final, sino que *se le comunicará la pendencia del proceso*²⁹⁷, *de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas, "en cuanto se tenga noticia" del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación* (art. 498). Este trámite debería realizarse en todo caso de oficio por el órgano judicial, sin que tenga que dar lugar a que sea *a instancia de parte*, dada su obligación de velar por las garantías procesales de las partes; recuérdese que las notificaciones no solamente valen para dar a conocer

²⁹⁵ PÉREZ-CRUZ MARTÍN, AGUSTÍN-JESÚS: "El tratamiento de la rebeldía del actor en el Borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (especial consideración de los artículos 499 a 503 del Borrador)", *Revista General del Derecho*, n.º 644, mayo 1998, Valencia. El autor estudiaba el art. 500 del Borrador de ALEC, que luego sería el art. 497.1 de la Ley 1/2000 con el mismo contenido todavía en vigor, pareciéndole más apropiada "la comunicación personal de la resolución habida cuenta de la doctrina del Tribunal Constitucional que entiende preciso agotar antes todas aquellas modalidades que aseguren un mayor grado de recepción por el destinatario y de lo dispuesto en el propio Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de comunicación personal – concretamente en el art. 150.1.c)–. Dicha comunicación además debiera ir acompañada [de] la información oportuna acerca de las consecuencias a que da lugar la mencionada declaración de rebeldía" (pág. 5332).

²⁹⁶ Con la regulación anterior se establecía como regla general en estos supuestos la de las notificaciones "en los estrados" (art. 281p2 LEC 1881*), de nula eficacia práctica, tanta que el TC consideró que son, "frecuentemente, notificaciones ficticias" (**STC 83/1983**, de 21.10, pese a lo cual no las consideró inconstitucionales: "No basta ello, sin embargo, para considerarlas constitucionalmente ilícitas por contrarias a los derechos que el art. 24 de la CE garantiza, pues el proceso civil, como institución orientada a la satisfacción de pretensiones, no puede articularse en términos tales que el servicio al principio audiatur et altera pars se alcance a costa de sacrificar el derecho de quien ejercitó la acción, de demorar indefinidamente la satisfacción de su pretensión"; F. J. 2º).

* Art. 281 LEC 1881: "En toda clase de juicios e instancias, cuando sea declarado o se constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio después de citado en forma, no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca.

Todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacerse, se notificarán y ejecutarán en los estrados del Juzgado o Tribunal, salvo los casos en que otra cosa se prevenga".

²⁹⁷ Coincidimos con CUBILLO LÓPEZ en que habrá de hacerse primero por remisión postal y, en su caso, mediante entrega, "conforme a las normas generales sobre el emplazamiento o citación inicial" (*La regulación...*, op. cit., pág. 143), aunque lo cierto es que el art. 497.1 no ordena ni que se le emplazase al demandado ni que se le cite nuevamente, porque ya se hizo legalmente por edictos; bastará, pues, una simple notificación.

una resolución, sino también para dar noticia de una actuación (art. 149.1º), como es esta misma de la existencia del litigio que se comunica al demandado para que pueda tener la oportunidad de conocerlo y de personarse²⁹⁸.

El régimen particularizado de comunicaciones con el rebelde se extiende también al modo de notificar esa resolución que ponga fin al proceso, exigiendo el art. 497.1 que se realice *personalmente, en la forma prevista en el artículo 161*, no pudiendo por tanto remitírsele una simple carta certificada con acuse de recibo. Si ya conocemos su domicilio, no habrá problema; pero *si se hallare en paradero desconocido* el art. 497.2 obliga a acudir al sistema de comunicación edictal, donde, de nuevo, se establecen las singularidades que siguen:

a) **Notificación por edictos en Boletín Oficial:** En aquellos procesos en los que por su carácter plenario la sentencia tiene fuerza de cosa juzgada, el art. 497.2p1 obliga a acudir a los Boletines Oficiales para la notificación formal de la misma al demandado rebelde en ignorado paradero, lo que viene a suponer una excepción (no expresada por la LEC) a la publicación en aquellos medios meramente potestativa y *sólo a instancia de parte* que dispone como norma general el art. 164p2. En concreto, el precepto ordena que la publicación de dicha sentencia²⁹⁹ se realice *en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma*³⁰⁰ o, alternatively, *«en el Boletín Oficial del Estado»* y, como contrapartida a la carga que se impone a la parte actora, no íntegramente, sino mediante *extracto*³⁰¹, reduciendo así los costes de publicación.

La falta de mención en ese apartado al Boletín Oficial de la Provincia, que sí estaba presente en la LEC antigua³⁰², se ha interpretado en la práctica como una omisión involuntaria del legislador basándose en una (supuesta) incongruencia con el art. 500p2, donde sí aparece³⁰³, permitiéndose en muchas ocasiones que la

²⁹⁸ Vid. **art. 499:** “Comparecencia posterior del demandado”. *Cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde comparezca, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso.*

²⁹⁹ *Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación, en recurso extraordinario por infracción procesal o en casación* (art. 497.2p2).

³⁰⁰ También debería añadir “o Ciudad Autónoma” para incluir a Ceuta y a Melilla.

³⁰¹ En la práctica ese extracto se traduce en “solamente el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia”, siguiendo la previsión de la ley procesal anterior, que era más precisa que la actual (art. 769p2 LEC 1881).

³⁰² Art. 769 LEC 1881: “La sentencia que se pronuncie en el juicio seguido en rebeldía será notificada personalmente al litigante rebelde, cuando pueda ser habido, si así lo solicitare la parte contraria. En otro caso se hará la notificación en la forma prevenida en los artículos 282 y 283.

En los edictos se insertará solamente el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia, con la firma del Juez que la hubiere dictado, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Diario Oficial de Avisos», si lo hubiere, en el lugar del juicio.

También se publicarán dichos edictos en la «Gaceta de Madrid» cuando las circunstancias del caso lo exigieren, a juicio del Juez”.

³⁰³ Incluso con reflejo en publicaciones jurídicas. Vid. revista *Práctica de Tribunales*, n.º 45, enero 2008 (La Ley, Madrid), sección “Consulta de los suscriptores”, “Notificación de la sentencia al demandado rebelde”: “[...] la primera duda que surge de si se lleva a cabo n el BOP o en el BO de la CA viene del art. 500.2 (LA LEY 58/2000) en donde al tratar de los plazos para interponer los recursos

parte actora inserte el edicto en dicha publicación, de menor coste que las demás. Sin embargo, entendemos que esa interpretación es errónea, cercena la mayor difusión de los otros boletines y no se percata de que el citado art. 500p2 se redactó pensando en que cuando entrara en vigor, cosa que hizo el 07.01.2001, la nueva ley procesal habría de prever una norma de derecho transitorio que tuviese en cuenta todos aquellos procesos sustanciados conforme a la ley derogada en los que la sentencia se hubiese notificado al demandado rebelde en el Boletín provincial. Además hay que tener en cuenta que, tratándose de comunicación edictal, el carácter restrictivo con que se ha de aplicar es inversamente proporcional a la amplitud con que se ha de dar publicidad al edicto, acudiendo así al medio que tenga, cuando menos, difusión nacional, en detrimento del circunscrito al ámbito geográfico regional o local. Después de casi dieciséis años creemos que el legislador tendría que haber modificado ya el art. 500 para eliminar este inciso controvertido, dejando claro que la publicación ha de hacerse alternativamente en el BOE o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (o Ciudad, de lo que también se olvida la LEC).

b) Notificación por edictos en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial (hoy sede judicial electrónica): Las Leyes 13/2009, 19/2009 y 4/2013 han incorporado un régimen excepcional en los apartados 2 y 3 del art. 497³⁰⁴ mediante el que se prescinde de los Boletines Oficiales y se entiende suficiente la publicación del edicto correspondiente *en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial* cuando estemos ante juicios verbales de carácter sumario. La LEC no lo expresa exactamente así, sino que lo establece de una forma complicada, parcheada y redundante producto de aquellas tres reformas mencionadas:

por el demandado rebelde se refiere a que el cómputo de inicia desde el día siguiente a la publicación del edicto de notificación de la sentencia —y añade— en «los» Boletines Oficiales del Estado, CA o de la provincia. Ello nos lleva a entender que la notificación edictal de la sentencia puede llevarse a cabo perfectamente en el BOP, lo que será a solicitud del actor, siendo válido en el del Estado, CA o en el BOP, al integrar y complementar el art. 497.2 (LA LEY 58/2000) con el art. 500.2 LEC". En el mismo sentido, MAGRO SERVET (Coord.), *Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pág. 206: "¿No cabe en el *Boletín Oficial de la Provincia*? Debe entenderse que sí cabe, pese a la omisión del legislador en dicho precepto, pues el art. 500 LEC (LA LEY 58/2000), por el contrario, sí hace mención a dicho medio de comunicación a la hora de establecer el cómputo para los recursos de apelación o el extraordinario por infracción procesal o el de casación cuando procedan, debiéndose entender, por tanto, una omisión involuntaria del legislador en el art. 497 LEC".

³⁰⁴ Este régimen no se contemplaba en la redacción originaria del art. 497: "Régimen de notificaciones. 1. La resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no lo fuere, mediante edictos. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.

2. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado personalmente, en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley. Pero si el demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación, en recurso extraordinario por infracción procesal o en casación".

- *Sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación.* En este caso se ordena que la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial (art. 497.2p3), a diferencia de lo que sucede en el apartado 3, donde se dice que “basta” la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, dejando así abierta la posibilidad de notificación en los Boletines Oficiales a instancia de parte y de forma complementaria³⁰⁵.
- *Procedimientos en los que la sentencia no tenga efectos de cosa juzgada* (art. 497.3), lo que sucede en los siguientes juicios verbales:
 - El ya citado verbal de desahucio por falta de pago o expiración del plazo (arts. 250.1.1º, en relación con el art. 447.2³⁰⁶), de ahí la redundancia a la que no referíamos antes.
 - Los cuatro juicios verbales sobre *tutela sumaria de la posesión* (art. 250.1.3º –bienes hereditarios–, 4º –retención o recobro de la posesión–, 5º –suspensión de obra nueva– y 6º –obra ruinos–, en relación con el art. 447.2).
 - El juicio verbal para la *tutela de los derechos reales inscritos* (art. 250.1.7º, en relación con el art. 447.3).
 - Los dos juicios verbales en materia de *compraventas a plazos y de arrendamientos financieros* (art. 250.1.10º y 11º).
- *Procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas* (art. 497.3). Otra vez se repiten los procesos de desahucio (doble redundancia) y se incurre en error, porque conforme a la doctrina mayoritaria la sentencia que se dicte en los mismos carece de fuerza de cosa juzgada, aunque a la acción de desahucio se haya acumulado una segunda acción de reclamación de rentas o no (art. 447.2)³⁰⁷.

³⁰⁵ No creemos que quepa interesarlo y acordarlo de forma alternativa al tablón, que sigue siendo el lugar el obligatorio.

³⁰⁶ El juicio de desahucio por precario (art. 250.1.2º) es plenario y, en consecuencia, sí tiene fuerza de cosa juzgada material. Igual sucede con los verbales de reclamación de *alimentos* (art. 250.1.8º); de *rectificación de hechos* inexactos o perjudiciales (art. 250.1.9º); en aquellos en que se ejercita la *acción de cesación* en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios (art. 250.1.12º); y en los de demandas para hacer valer el *derecho de visita* a los hijos menores reconocido en el art. 160 CC a favor los padres, abuelos y otros parientes y allegados (art. 250.1.13º).

³⁰⁷ Vid. IBARRA SÁNCHEZ, JUAN LUÍS: *Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio*, La Ley, Madrid, 2012, pág. 175.

Siendo el exto actual del párrafo 3º obra de la Ley 4/2013, creemos que en lo que estaba pensando el legislador al redactarlo era en el verbal de desahucio por falta de pago y en el decreto que pudiera dictarse poniendo fin al mismo en caso de que el demandado no atienda el requerimiento de pago,

No obstante la referencia al *tablón de anuncios de la Oficina Judicial*, el cuarto y último apartado del art. 497.4 permite que la publicación en dicho lugar pueda *ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, conforme a lo previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*, lo que hoy se traduce en la *publicación electrónica* del edicto en las *sedes judiciales electrónicas* (art. 11.1 Ley 18/2011).

4.2.- LA REPRESENTACIÓN PASIVA DEL PROCURADOR

4.2.1.- Habilitación legal

La llamada representación “pasiva” del procurador se refiere a la función típica de este profesional de ser el receptor válido y eficaz a todos los efectos de cualquier acto de comunicación que el órgano judicial tenga que realizar a su poderdante, así como, desde la LEC 2000, de los escritos que presenten los procuradores de las demás partes cuyo traslado recíproco previo y obligatorio establece el art. 276. Ya en su Exposición de Motivos la LEC hace referencia, sin nombrarla, a esta atribución de recepción de los procuradores, a quienes considera como “pieza importe” del “nuevo diseño” de los actos de comunicación³⁰⁸, al tiempo que anuncia también su representación activa a la hora de trasladar los escritos a las otras partes procuradores:

“[...] por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, están en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos. Para la tramitación de los procesos sin dilaciones indebidas, se confía también en los mismos Colegios de Procuradores para el eficaz funcionamiento de sus servicios de notificación, previstos ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial” (IX, aptdo. 5)³⁰⁹.

desalojo u oposición del art. 440.3. De ser así, dicho decreto se fijará simplemente en el tablón de la oficina judicial hará posible el lanzamiento directo que prevé el art. 550.3.

³⁰⁸ Consideración que recoge el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales (RD 1281/2002) en su Preámbulo: “La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su exposición de motivos subraya el importante papel de los procuradores en el nuevo diseño de los actos de comunicación, permitiendo que a través de una óptima gestión por parte de los procuradores se aminoren los retrasos en la tramitación. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los procuradores, en su condición de representantes de las partes y como profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, reciban notificaciones y trasladen a la parte contraria escritos y documentos. La Ley atribuye a los procuradores nuevas funciones en el proceso, entre las que destaca el servicio de recepción de comunicaciones, organizado por los colegios profesionales y que se ubica en todos los edificios judiciales del orden civil. Las nuevas responsabilidades recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la previsión del Pacto de Estado para a la reforma de la Justicia relativa al fomento en los Colegios de Procuradores del uso de las nuevas tecnologías en los actos de notificación, tienen su fiel reflejo en esta norma estatutaria” (Preámbulo, párrafo 2º).

³⁰⁹ Apréciase que el legislador de 2000 no contemplaba que los procuradores practicasen actos de comunicación procesal, algo para lo que habría que esperar nueve años, hasta la Ley 13/2009, como vimos anteriormente.

Esta importante atribución viene establecida en varias disposiciones de la LEC, principalmente en el art. 28, aptdos. 1 y 2, y en el art. 153, en ciertos puntos redundantes aunque no exactamente coincidentes:

<p>Art. 28: “Representación pasiva del procurador”</p> <p>1. Mientras se halle vigente el poder, el procurador oír y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.</p> <p>2. También recibirá el procurador, a efectos de notificación y plazos o términos, las copias de los escritos y documentos que los procuradores de las demás partes le entreguen en la forma establecida en el artículo 276.</p>	<p>Art. 153: “Comunicación por medio de procurador”</p> <p>La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través de su Procurador cuando éste las represente. El Procurador firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizarse personalmente el poderdante.</p>
---	--

También se aprecia en el art. 23.3 al establecer que *el procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación* [...].

Al mismo tiempo constituye una obligación legal para los procuradores, tal y como dispone el art. 26.2: una vez que acepte el poder, *el procurador quedará obligado a: [...] 9.º A acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones*³¹⁰. En el mismo sentido, en su Estatuto General también se prevé expresamente entre los deberes del procurador el de *acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones o de servicios comunes y a los órganos administrativos, para oír y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquier clase que se le deban realizar* (art. 39.d RD 1281/2002).

Las anteriores disposiciones en su conjunto no dejan lugar a dudas de que el procurador es la parte a todos los efectos y a ojos del órgano judicial. Sin embargo, el cuarto y último apartado del art. 28 contiene una previsión que tergiversa la apuesta firme y confianza del legislador a favor del procurador explicitada en los apartados primero y segundo para recibir los actos de comunicación *de todas cla-*

³¹⁰ Por otra parte, esta representación pasiva tiene su efecto en la relación interna entre el procurador, su cliente y el abogado designado, conteniendo el art. 26.2.3º entre sus deberes el de *tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las demás partes, luego desarrollo por el art. 276.*

ses dirigidos a su cliente, algo en que insiste posteriormente con un contundente art. 153. Este enigmático apartado dice:

Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona.

Para nosotros el art. 28.4 no tiene ningún sentido y apostaríamos directamente por la supresión de una disposición que viene de la LEC de 1881 tras su modificación de 1992³¹¹, que contradice abiertamente al citado art. 153³¹² y que, en realidad, hace una previsión que la propia LEC no aprovecha, pues los únicos supuestos que existen en los que la ley disponga la comunicación directa con la parte no son consecuencia del art. 28.4, sino, sencillamente, sino del hecho de referirse a trámites con personas que todavía no están personadas. La doctrina ha denunciado esta contradicción³¹³ y ha intentado dar luz al precepto, pero sin resultados concluyentes. MORENO CATENA, aparte de poner en evidencia que “el precepto resulta difícil de cohonestar con lo dispuesto en el art. 153”, plantea el ejemplo concreto de la citación para el interrogatorio de las partes y respondiendo que “pareciera que el acto de comunicación se entenderá con el procurador, quien ha de trasladarlo a su poderdante con toda diligencia y en su integridad, incluyendo los

³¹¹ Art. 6p2 LEC 1881 tras su reforma por Ley 10/1992, de 30.04, de *Medidas Urgentes de Reforma Procesal*: “Sólo se exceptúan los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona”. Ya entonces surgieron las mismas dudas que hoy. Al comentar aquella reforma MONTERO AROCA decía que “deja abiertas dudas de muy compleja solución”, sin terminar de pronunciarse indubitadamente acerca de cuáles eran esos de comunicación con los propios interesados, si bien, al referirse a los requerimientos, entendía: “El incumplimiento de un requerimiento suele tener en la ley consecuencias más graves que la no atención de una citación o de un emplazamiento, por lo que a pesar de lo que diga el art. 6.II seguimos creyendo que los requerimientos deben seguir haciéndose a la parte siempre que la ley así lo disponga, aunque no se disponga de manera literal de modo expreso, aparte de que esta será la única manera en que el requerido pueda formular su respuesta para que se consigne en la diligencia (art. 276.III)” [“Apartado 4.º: Representación y defensa por procurador y abogado”, *La reforma de los procesos civiles (Comentario a la Ley 10/1992, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal)* (Coord.: MONTERO AROCA), Civitas, Madrid, 1993, págs. 68 y 69].

³¹² Vid. RODRÍGUEZ MERINO, ABELARDO (“Artículo 153”, *Comentarios...*, op. cit. pág. 1019); en la misma obra: VALENCIA MIRÓN, ANTONIO JOSÉ, “Artículo 28”, pág. 323: “la contradicción de este último [del art. 153] con el apartado 4 del artículo 28 no puede ser más evidente”; CANCIO FERNÁNDEZ: “clara contradicción” (“Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 64); MORENO CATENA: “el precepto resulta difícil de cohonestar con lo dispuesto en el art. 153” [“Artículo 28”, *La Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica* (Dir.: CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín, y MORENO CATENA, Víctor), Vol. I, Tecnos, Madrid, 2004, pág. 193].

³¹³ Como GONZÁLEZ GRANDA, pero esta autora se limita a señalar las comunicaciones con partes o terceros aún no personados o que han de ser llamados al proceso de forma sobrevenida, como el primer emplazamiento o citación del demandado –art. 155.1–, o de los nuevos demandados en el caso de la integración voluntaria de la litis –art. 420.1–; la notificación de la existencia del proceso a los sucesores del litigante fallecido –art. 16.2–; etc. (“Tomo I. Sujetos y actuaciones del proceso...”, op. cit., pág. 104); lo mismo sucede con HERRERO PEREZAGUA, antes citado (*La representación...*, op. cit., pág. 71); o con MONTERO AROCA, JUAN, y FLORS MATÍES, JOSÉ, que sólo plantean la cuestión y dejan al lector ávido de respuesta: “lo difícil es luego encontrar un caso en que así se disponga de modo expreso” (*Tratado de Juicio Verbal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág. 614).

apercibimientos que contuviera la comunicación, como la que se practica para la prueba de interrogatorio de las partes (art. 304)³¹⁴.

En sede de tribunales también se ha puesto en cuestión si el emplazamiento para contestar a la demanda por el deudor opuesto al previo proceso monitorio (art. 818.2) puede hacerse al procurador personado en el mismo. El criterio de la **SAP Ávila (Secc. 1ª) 01.09.2005** fue restrictivo y no entendió extensible el poder ‘apud acta’ conferido al procurador en aquel proceso al subsiguiente juicio ordinario por interpretar de forma literal el emplazamiento *al demandado* que realiza el art. 404, por remisión del art. 818.2³¹⁵. Por el contrario, no cabe encuadrar entre las excepciones del art. 28.4 la notificación del despacho de ejecución al ejecutado, que cabe practicar al procurador si ya está representado por él, normalmente por dimanar la misma de un proceso declarativo previo (**AAP Huelva, Secc. 3ª, 30.09.2009**³¹⁶); o el requerimiento a la parte para que designe nuevo letrado tras la renuncia del anterior (**SAP Vizcaya, Secc. 4ª, 16.02.2010**³¹⁷).

Cuestión muy diferente, que no hay que confundir, es la de las excepciones del art. 25.3, que se refiere a *los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse perso-*

³¹⁴ MORENO CATENA: “Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La postulación procesal: Arts. 23 a 30 LEC”, *InDret, Revista para el análisis del Derecho*, n.º 305, Barcelona, octubre 2005, pág. 28.

³¹⁵ Roj: SAP AV 338/2005: “[...] en el juicio monitorio D. Marcos otorgó apoderamiento apud acta a favor del Procurador D. Antonio García García en fecha 3 de Enero de 2003, pero lo fue para presentar escrito de oposición en el mencionado procedimiento, ya que el art. 818-1 párrafo 2º de la LEC así lo exige. [...] Como el art. 818-2 párrafo último de la LEC se remite, en cuanto al traslado de la demanda al demandado, al art. 404 de esa Ley, y este precepto prevé que se dé traslado de la demanda AL DEMANDADO, es claro que el motivo del recurso no puede prosperar. Y esta interpretación es lógica, pues una vez opuesto el demandado en el juicio monitorio, este procedimiento termina, y empieza otro (el ordinario en este caso), que se configura si el actor presenta la demanda” (F. D. 2º).

³¹⁶ Roj: AAP H 736/2009. En esta resolución el tribunal onubense se limita a transcribir los artículos 28.1 y 553.2, pero sin realizar una verdadera fundamentación jurídica que explique por qué el primero no es aplicable al segundo; no obstante, lo que sí hace es desestimar la nulidad de actuaciones invocada: “Sostiene el recurrente que no resulta suficiente que el auto despachando ejecución se notifique exclusivamente al demandado condenado cuando está representado en las actuaciones por Procurador y defendido por Letrado, puesto que la dicción del artículo 28.1 de la LEC no plantea ninguna duda al respecto. En primer lugar debe indicarse que este motivo del recurso ya fue planteado mediante incidente de nulidad de actuaciones, dictándose por el Juzgado providencia de fecha 2 de marzo de 2007 por la que se inadmitía a trámite la petición formulada, y el artículo 228.1 párrafo tercero in fine establece «[...]». En todo caso, olvida el apelante que el n.º4 del citado artículo 28 de la LEC dispone «[...]»; y el artículo 553.2 de la LEC es claro cuando determina que «[...]». Por consiguiente, procede la desestimación del motivo” (F. D. 1º).

³¹⁷ Roj: SAP BI 525/2010: “El caso de autos, pese a la alegación de la parte apelante, no puede ser encuadrado en el supuesto contemplado en el art. 28.4º de la LECn, que dispone que “se exceptúan [...]”, puesto que la parte apelante ni siquiera ha alegado precepto legal alguno en virtud del cual la comunicación de la renuncia de su Letrado deba efectuarse personalmente a sus defendidos. Es evidente que se observaron por el Juzgado a quo las normas procesales referentes a los actos de comunicación judicial, ya que todos ellos se efectuaron a través de su Procuradora” (F. D. 3º).

nalmente por los litigantes, no pudiendo por tanto ser realizadas por el procurador en representación de ellos³¹⁸.

4.2.2.- Los servicios de recepción de los Colegios de Procuradores

Como solución para poder centralizar todas las comunicaciones a los procuradores el art. 272 LOPJ prevé desde su redacción inicial de 1985 la posibilidad de que exista *un servicio para recibir las notificaciones* organizado por el Colegio de Procuradores y cuya recepción *producirá plenos efectos*. No obstante, aquella posibilidad la supedita a dos condiciones:

1. Que se haya establecido *un local de notificaciones común a los varios juzgados y tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional*, es decir los Servicios Comunes judiciales. Este requisito se desprende del comienzo de la segunda oración del precepto (*En este supuesto, en Colegio de Procuradores organizará un servicio...*).
2. Que esas notificaciones *no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del procurador que deba ser notificado*.

Ambos requisitos se encuentran en teoría vigentes en la actualidad, pues aunque el precepto fue reformado por LO 19/2003, esos puntos permanecen inalterados. Ni uno ni otro, sin embargo, tienen nada que ver con la realidad. Los Colegios de Procuradores pueden contar con un servicio interno de notificaciones, existan o no los Servicios Comunes procesales y sin el carácter de subsidiariedad con que aparece en la LOPJ, y el procurador no tiene que comparecer los mismos para ser notificado, sino que lo hace través del sistema telemático Lexnet.

El régimen de aplicación no está en la norma orgánica, sino en la LEC 2000, que partió de la LOPJ para inmediatamente cambiar su originaria concepción, estableciendo el citado *local de notificaciones*, que llama *servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores*, para las comunicaciones con partes personadas con procurador, dejando aparte los servicios comunes judiciales (art. 154.1). Este deslinde entre ambas dependencias, judicial y colegial, respectivamente, no está suficientemente explicitada ni menos todavía coordinada ni en LOPJ ni la LEC, que en su art. 28.3 establece que *en todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existirá un servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores*. Puesto este precepto en relación con el art. 163, se puede caer en el error de pensar que las notificaciones que recibe el Colegio de Procuradores se envían por el Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación, ya que aquel precepto no aclara que este servicio practicará los actos de de comunicación “domiciliarios”, es decir, los realizados por la vía del art.

³¹⁸ GONZÁLEZ GRANDA señala que “la realización necesariamente personal de determinados actos viene referida a actos tales como: - el interrogatorio de la parte contraria o de un colitigante (art. 301.1). - la formación de un cuerpo de escritura a que se refiere el artículo 350.3.1ª” (“Tomo I. Sujetos y actuaciones del proceso...”, op. cit., pág. 97).

161, pero no los que el órgano judicial remite a los procuradores a través de sus respectivos Colegios.

Lo que sí hacen ambas leyes es confiar en los propios Colegios la organización y *régimen interno* del servicio con las únicas pautas que establece el art. 154 y surtiendo en todo caso las comunicaciones realizadas con el mismo los mismos plenos efectos que las directamente efectuadas al procurador de que se trate, con lo que se “convierte al Colegio en el efectivo procurador de las partes” (**SAP Santa Cruz de Tenerife, Secc. 1ª, 11.04.2014**³¹⁹).

4.3.- PERSONAS NO PARTES EN JUICIO

4.3.1.- Testigos y peritos

Junto a las partes procesales y a sus representantes, habrá ocasiones en los que los destinatarios de los actos de comunicación no sean ni unos ni otros, sino terceras personas cuya intervención puede ser requerida para el ejercicio de la actividad jurisdiccional, como sucede con los testigos y peritos. De estos “sujetos de la prueba” se ocupa el art. 159 para determinar el modo de citarlos, en principio *por correo certificado o telegrama con acuse de recibo o por cualquier otro medio semejante* (art. 160.1), aunque también cabe de forma alternativa por medio de entrega con arreglo a lo dispuesto en el art. 161.

4.3.2.- Notificaciones a terceras personas y entidades

El art. 159 también se refiere al modo de comunicarse con *otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él* (aptdo. 1), pero, a diferencia de lo que sucede con los testigos y peritos, existe un precepto concreto en la LEC que sí tiene por objeto determinar con carácter general cuándo han de ser también sujetos pasivos de los actos de comunicación. Se trata del art. 150, que en sus apartados segundo y tercero amplía la actividad de comunicación del órgano judicial, en concreto la de las notificaciones, a determinadas actuaciones del proceso y a un conjunto heterogéneo de terceras personas por la razón de que, aun no siendo partes procesales, bien pueden tener en mayor o menor medida un perjuicio relacionado con el objeto del pleito –sobre todo con su resolución–, bien por exigirse expresamente así por la Ley. Estos apartados, que vienen a establecer, como excepción al principio dispositivo del proceso civil, una ‘litisdenuntiatio’ de oficio, dicen literalmente así:

³¹⁹ Roj: SAP TF 1649/2014. En el juzgado de instancia se citó a una parte a la vista a juicio verbal a través del Procurador, pero al no comparecer la misma, se le tuvo por desistida: “Se viene manteniendo que el sistema de notificaciones a través del citado servicio común convierte al Colegio en el efectivo procurador de las partes, al menos en sus relaciones externas para con el órgano judicial, con la rapidez que supone en las comunicaciones, y, que, en caso de conflicto, determina que las responsabilidades hayan de ventilarse entre el Colegio y quien se considere lesionado en sus derechos. Como consecuencia de ello, y habiéndose recepcionado en el Colegio de Procuradores la notificación de la providencia convocando a juicio, aquella ha surtido plenos efectos, y es válida en todos los casos (STSJ Navarra, sec. 1ª de 15 de mayo de 2006)” (F. J. 3º).

2. Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.

3. También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.

Hemos de resaltar que el espíritu del precepto es la de tutelar a personas que tienen la cualidad de terceros, es decir, quienes no son partes procesales o no tienen por qué serlo para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, de modo que si la repercusión del proceso es tan directa como para estar ante un litisconsorte pasivo necesario que no puede ser preterido, resultará “incuestionable que no simplemente debe comunicársele la existencia del proceso, sino que debe ser emplazad[o] o citad[o] en igualdad de condiciones con los inicialmente demandados” (GONZÁLEZ GRANDA³²⁰). Partiendo de esta importante aclaración, la exégesis de los mismos permite distinguir dos grupos de personas o terceros:

A.- Terceros a las que haya que notificar la pendencia del proceso (art. 150.2). El motivo lo explica el propio precepto y no es otro que el de que estas personas, según se desprenda de los propios autos, *puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al proceso*³²¹. Se trata de una concreción de la obligación que ya establece el art. 270 LOPJ de notificar las resoluciones (sin precisar cuáles), además de a las partes, *también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios*, precepto que, a su vez, ha hecho que sobreviva el viejo art. 260p2 LEC 1881, del que calca prácticamente su contenido³²². Como entonces, este precepto hace depender el acto de comunicación, no del hecho de que venga así preestablecido por la ley, sino *por disposición del Tribunal*, es decir, por su criterio subjetivo sobre la concurrencia del presupuesto objetivo de la norma.

Este apartado puede ser subdividido, a su vez, en dos:

- i. Personas afectadas, en general, por el proceso: Habría que señalar aquí a aquellos a quienes afectará, indirectamente como mínimo, la fuerza de cosa juzgada material de las sentencias firmes establecida en el art.

³²⁰ GONZÁLEZ GRANDA: “Tomo I. Sujetos y actuaciones del proceso...”, op. cit., pág. 97.

Vid. al respecto **STS 22.01.2004** (Roj: STS 254/2004): “Los Tribunales han de cuidar que en el litigio intervengan todas aquellas personas que puedan resultar afectadas por el fallo, de ahí que la excepción de litisconsorcio pasivo necesario revista cuestión de orden público, que queda fuera del ámbito de rogación de partes, por lo que puede ser apreciada de oficio, aunque no haya sido alegada (Sentencias de 1-7-1993 y de 5-XI-1991, que cita la de 22-10-1988, 8-5 y 24-7-1989, 17-3 y 27-11-1990 y 7-2-1991)” (F. D. 1º).

³²¹ Texto vigente introducido por Ley 13/2009. El texto anterior de 2000 era muy similar y se refería a las personas que según los mismos autos pudieran verse afectadas “por la sentencia que en su momento se dictare”.

³²² Art. 260p2 LEC 1881: “También se notificarán [las providencias, autos y sentencias; art. 260p1] cuando así se mande, a las personas a quienes se refieran o puedan parar perjuicio”.

222³²³, además de, obviamente, *a las partes del proceso en que se dicte* (aptdo. 3). Entre aquellos terceros tendríamos:

- *a sus herederos y causahabientes*, previsión a futuro de quienes por su condición de tales se subrogarán ‘mortis causa’ o ‘inter vivos’ en los derechos y, en su caso, obligaciones, de su causante o transmitente.
- *a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley*, o dicho de forma más fácil, a aquellos consumidores o usuarios que no hubiesen litigado junto a las asociaciones que en su día promovieron el proceso en su nombre.
- *a las personas que (según se deduzca de los mismos autos) les pueda afectar la eficacia ‘erga omnes’ de las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad.*
- *por último, a todos los socios, aunque no hubieren litigando, refiriéndose a las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios.*

En cualquier caso, la notificación de la pendencia del proceso, como afirma CUBILLO LÓPEZ, “no conlleva la carga de la comparecencia, porque esto iría en contra [d]el principio dispositivo que rige nuestro proceso civil”³²⁴, sino que queda al arbitrio de dichos terceros decidir si conviene a sus derechos e intereses realizarla o tener que soportar en caso con-

³²³ **Art. 222.** “Cosa juzgada material”: 1. *La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.*

2. *La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvencción, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.*

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. *La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.*

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. *Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.*

³²⁴ CUBILLO LÓPEZ: “Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 299; reiterado en *La regulación de las actuaciones en juicio*, op. cit., pág. 97.

trario las eventuales consecuencias negativas de su incomparecencia. Es por esto que existe un problema de coordinación interna entre el art. 150 con los preceptos que disciplinan los institutos de la intervención, provocada³²⁵ o voluntaria³²⁶, y de la sucesión procesales. Tanto uno como otro hacen depender de la propia iniciativa de la partes o de los propios terceros su intervención en el proceso, por lo que no queda claro y resulta cuestionable hasta qué punto ha de tutelar el órgano judicial a dichos terceros³²⁷. De ejercitarse por estos su entrada en el proceso, el objetivo del art. 150 quedaría cumplido por esa vía sin necesidad de actuación de oficio por parte de dicho órgano.

- ii. Personas afectadas, en particular, por la utilización del proceso *con fines fraudulentos*: Se trata de una eventualidad muy concreta que, en caso de producirse, subsumiría a la anterior por razón de su especialidad³²⁸. A juicio de JULVE GUERRERO la actuación fraudulenta ha de ser de ambas partes, por cuanto si es de una sola, la otra podría advertirlo al tribunal³²⁹.

³²⁵ La “intervención provocada” se regula el art. 14 y refiere a aquellos casos en que una ley sustantiva permita que el demandante o el demandado llamen a un tercero para que intervenga en el proceso. A diferencia de la intervención voluntaria, los supuestos de la intervención provocada son típicos o tasados, es decir, deben estar expresamente previstos por las leyes. Por eso el art. 14, que es el que regula esta figura, comienza diciendo *en caso de que la ley permita al demandante...* (aptdo. 1) y luego dice *cuando la ley permita al demandado...* (aptdo. 2). Estos casos no están previstos en la LEC, sino que se encuentran dispersos en el CC y en otras leyes sustantivas, pudiendo citar como ejemplos el caso del fiador demandado por el acreedor que llama al proceso al deudor (art. 1838 CC); el del deudor solidario demandado de pago que llama a los demás deudores solidarios para luego repetir contra ellos (art. 1145 CC); o el del arquitecto demandado que, al amparo de la LOE (Ley 38/1999) solicita llamar a los otros agentes que hubiesen intervenido en el proceso constructivo (aparejador, promotor, constructor).

³²⁶ La tramitación procesal de la eventual intervención voluntaria de esas personas en el proceso viene dada por el art. 13, que, en lugar de referirse a quienes puedan verse afectadas por el proceso, emplea la más genérica expresión de *quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito* (art. 13.1).

Siguiendo a CACHÓN CADENAS, “hubiera sido conveniente especificar, a título indicativo, otros posibles supuestos en que debe tener lugar a aquella notificación a terceros de la pendencia del proceso” (“Jurisdicción, partes y actos procesales”, op. cit., pág. 382).

³²⁷ Vid., en este sentido, la **STC 54/2010**, de 04.10 (BOE de 29.10) y el voto particular formulado por CONDE MARTÍN DE HIJAS, contrario a la estimación del recurso de amparo otorgado en relación con un proceso en los que los herederos del litigante fallecido no fueron emplazados en el recurso de apelación que había sido planteado. Según el magistrado discrepante al abordar el juego entre los arts 16 y 150.2, no corresponde al tribunal llamar a los herederos: “Conforme a dicho precepto resulta indudable que es el que «deba sucederle en el proceso» el que, para ello, debe comunicar al tribunal la defunción del litigante al que pretende suceder; en otros términos, es él, y no otro, ni el órgano judicial, el que debe asumir la carga de la personación” (punto 4).

³²⁸ CUBILLO LÓPEZ pone como “ejemplo típico” el “del subarrendatario que puede ver rescindido su contrato (de subarriendo), en virtud de una sentencia dictada en un proceso, que tuvo como únicas partes al arrendador y arrendatario” (*La regulación de las actuaciones en juicio*, op. cit., pág. 98), aunque ese supuesto no tiene por qué tener necesariamente un componente fraudulento.

³²⁹ JULVE GUERRERO: “Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 339.

B.- Terceros a los que hay que notificar determinadas resoluciones en los casos en que lo prevea la Ley (art. 150.3): El apartado despierta cierta confusión cuando dice *se hará notificación*, sin emplear artículo definido o determinado alguno, lo que en nuestra opinión hace descartar que se refiera a “la” notificación de la resolución del punto anterior, es decir a la de la pendencia del proceso, sino a cualquier otra que se dicte durante la sustanciación del mismo y que por mandato de la Ley deba ser puesta en conocimiento de otras personas distintas de las partes procesales. Con ello nos situamos ante una cláusula abierta en un triple sentido:

a. No solo puede referirse a los casos previstos en la propia LEC, sino a cualquier otra disposición con rango legal. En este segundo grupo de supuestos el juez no tiene que ya que valorar si puede haber terceros que puedan verse afectados por el proceso, o que este se esté utilizando por las partes fraudulentamente, sino que se limita a hacer el llamamiento por mandato objetivo del legislador.

b. El motivo de de la comunicación no tiene por qué ser necesariamente por un eventual perjuicio que el proceso pueda causar un perjuicio al tercero destinatario, sino también por el beneficio potencial que su personación en el mismo pudiera reportarle.

c. Aun cuando el precepto diga “notificación”, la comunicación puede ir más allá de poner simplemente al tercero en conocimiento de una resolución o actuación, pretendiendo además su citación o comparecencia en el órgano para practicar determinadas diligencias. Por ello creemos que la disposición debería extenderse a las otras clases de actos de comunicación previstos en el art. 149, acomodándose de ese modo a los varios supuestos que la LEC contiene al respecto.

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, en la ley rituaria se prevén los siguientes sujetos a los que hay que efectuar estas comunicaciones:

1. Al **Ministerio Fiscal**: Aunque no sea o no deba ser parte, determinados hechos y actuaciones procesales han de comunicarse al Ministerio público, lo que se realiza mediante la remisión de un oficio a la Fiscalía correspondiente. Cuestión diferente es la de aquellos trámites en los que no se le realiza una simple comunicación, sino un llamamiento para que emita el informe que en determinadas situaciones así lo exigen las normas procesales (v. gr., sobre incompetencia territorial ex art. 58 LEC) o cuando, excepcionalmente, la ley efectúe un integración de oficio del litigio y se le emplace o cite, a él o otras personas, hayan sido o no demandado por el actor (caso del proceso de incapacitación³³⁰). Hecha

³³⁰ **Art. 753.1:** *Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se refiere este título se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero el Secretario judicial dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser*

esta aclaración, nos referimos a los *procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios*, cuya iniciación se le habrá de comunicar *para que valore la posibilidad de su personación* (art. 15.1p2); a la excepción de prejudicial penal en un determinado proceso civil, debiendo el tribunal ponerla en su conocimiento *por si hubiese lugar al ejercicio de la acción penal* (art. 40.1); a la existencia de actuaciones del tribunal producidas con intimidación o violencia, a fin de proceder, en su caso, a la *formación de causa contra los culpables* (art. 226.1); o a la existencia de posible causa de incapacitación en una persona (art. 762.1³³¹).

2. A los **consumidores perjudicados por el producto o servicio que dio origen al proceso**, refiriéndose la ley a aquel que haya sido promovido *por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados*, y con la finalidad de que *hagan valer su derecho o interés individual* (art. 15.1).
3. A la **Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)** (antes Comisión Nacional de la Competencia³³²): Cuando se trate de *procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea*³³³ o los artículos 1 y 2 de la *Ley de Defensa de la Competencia*³³⁴, el art. 404.3 establece que el *Secretario judicial*³³⁵ *dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia de la resolución admitiendo la demanda en el plazo previsto en el párrafo primero*, es decir, veinte días, lo que nos resulta excesivamente amplio, pues no se trata de un plazo de emplazamiento sino de mera comunicación o notificación de haberse admitido a trámite un proceso. Igualmente, el Letrado de la Administración de Justicia habrá de comunicar a dicho organismo las sentencias que se dicten en dichos procedimientos (art. 212.3³³⁶), la eventual suspensión del plazo para dictarlas que pueda acordar el Tribunal (art. 465.6³³⁷) y los también eventuales recursos de apelación que se interpongan contra ellas (art. 461.5³³⁸).

parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405 de la presente ley.

³³¹ **Art. 762.1:** Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.

³³² **Ley 3/2013**, de 04.06, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Disp. Ad. 2ª: "Extinción de organismos". 1. La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia, [...] se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función de que se trate.

³³³ **Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea**, hecho en Roma el 25.03.1957 (versión consolidada 2002, DOCE C 325/33, 24.12.2002): **Art. 81:** 1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

- a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
- b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
- c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
- d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
- e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. [...].

Art. 82: Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

- a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
- b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
- c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
- d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

³³⁴ **Ley 15/2007**, de 03.07, de Defensa de la Competencia. **Art. 1.** “Conductas colusorias”. 1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

- a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
- b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
- c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
- d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
- e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. [...].

Art. 2. “Abuso de posición dominante”: 1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. [...].

Esta ley explica en su Preámbulo que “modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de los órganos nacionales y comunitarios de competencia como «amicus curiae» en los procedimientos de aplicación de la normativa de competencia por parte de la jurisdicción competente así como diversos mecanismos de información para permitir la adecuada cooperación de los órganos administrativos con los judiciales” (Aptdo. II).

³³⁵ Entiéndase el Secretario judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo Mercantil competente (Disp. Ad. 1ª Ley 15/2007: “De los Juzgados de lo Mercantil”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2.ª letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de

4. A determinados **terceros intervinientes en el proceso de ejecución forzosa**. Agrupamos aquí al cónyuge no deudor en caso de embargo de bienes gananciales, debiéndosele notificar dicha traba y *dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución* (art. 541.2); a los titulares de derechos posteriores que figuren en la certificación de cargas tras haberse embargado un bien inmueble, a quienes el Registrador de la Propiedad les *comunicará la existencia de la ejecución* (art. 659.1); a los arrendatarios y ocupantes de hecho de inmuebles embargados, a quienes *se les notificará la existencia de la ejecución para que, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación* (art. 661.1); o al tercer poseedor de inmueble hipotecado, al que *se notificará la existencia del procedimiento [...] para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución* (art. 689.1).

Como novedades incorporadas por la Ley 19/2015, hemos de añadir la comunicación por el *Secretario judicial al Registro Público Concursal de la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache la ejecución* (art. 551.3); y la notificación a los fiadores de créditos hipotecarios de la *demanda ejecutiva inicial* a efectos de una ulterior y eventual continuación de la ejecución frente a ellos en reclamación de la deuda no satisfecha (art. 685.5).

En cuanto al modo de practicar estas comunicaciones, el art. 150.2 no habla de notificar las resoluciones procesales a los terceros antes estudiados, sino de la *pendencia del proceso*, expresión un tanto abstracta que hacer dudar de qué resolución exactamente se ha de comunicar y de cómo se materializa dicho mandato en la práctica. BOLÓS FARIÑAS e IGLESIAS MEJUTO apuntan a “la notificación de la re-

lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley).

³³⁶ **Art. 212.3:** *Las sentencias que se dicten en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán por el Secretario judicial a la Comisión Nacional de la Competencia.*

³³⁷ **Art. 461.6:** *Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el Tribunal tenga conocimiento de la existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al Tribunal.*

Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición.

³³⁸ **Art. 461.5:** *En los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, el Secretario judicial dará traslado a la Comisión Nacional de la Competencia del escrito de interposición del recurso de apelación.*

solución judicial que acuerda precisamente el notificar esa pendencia”³³⁹. Desde luego, no nos parece correcto aplicar a rajatabla el art. 152.3.3º y hacer entrega al tercero de una simple *copia literal de la resolución que se le haya de notificar*, sino que la misma debería ir transcrita en una cédula de notificación –conforme a nuestra idea de rescatar dicha fórmula– expedida por el Letrado de la Administración de Justicia explicando sucintamente el motivo de ese acto de comunicación y los potenciales derechos que su destinatario podrían ejercitar en el proceso. El medio será el correo postal o similar, según previene el art. 159 LEC, con remisión al art. 160.1, que a nuestro entender resulta aquí de aplicación.

Respecto al supuesto del art. 150.3, creemos perfectamente extrapolable lo anterior, exceptuando el caso concreto del llamamiento a los consumidores afectados del art. 15.1, dada la necesidad de efectuarlo de forma colectiva.

5.- NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

NULIDAD, ANULABILIDAD E IRREGULARIDAD		
<i>Institución</i>	<i>Ejemplo</i>	<i>Consecuencia</i>
Nulidad absoluta art. 225.2º (violencia o intimidación)	Citación en el que demandado ha sido coaccionado por el funcionario para recoger la cédula.	• Declaración de nulidad, de oficio, del acto de comunicación y de los demás relacionados con él.
Nulidad relativa = Anulabilidad (arts. 166 y 225.3º)	<i>Caso 1:</i> Demandado citado a juicio verbal un día antes de la vista (anterior a Ley 42/2015). <i>Caso 2:</i> Demandado emplazado a través del vecino.	<i>Caso 1:</i> Opción A: Declaración de nulidad, a instancia de parte, alegando una indefensión que, en este caso, es manifiesta; Opción B: Comparecencia del demandado y celebración la vista sin denuncia (convalidación); Opción C: Incomparecencia del demandado, suspensión de oficio de la vista y nuevo señalamiento (subsanción). <i>Caso 2:</i> Opción A: Declaración de nulidad a instancia de parte si se le declara rebelde; Opción B: Personación y contestación a la demanda (convalidación); Opción C: Transcurrido el plazo del art. 404.1 sin respuesta del demandado, reiteración de oficio del emplazamiento ex art. 161 (subsanción).
Irregularidad	Emplazamiento para contestar a la demanda por exhorto a los tres meses de haberse cursado.	• Responsabilidad disciplinaria, salvo <i>maliicia</i> (responsabilidad penal).

³³⁹ BOLÓS FARIÑAS, CRISTINA, y IGLESIAS MEJUTO, JESÚS: *Practicum de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cedecs, Rubí (Barcelona), mayo 2002, pág. III-132, nota al pie n.º 5.

5.1.- COMUNICACIONES NULAS, ANULABLES E IRREGULARES. COMUNICACIONES INEXISTENTES

5.1.1.- El artículo 166 de la LEC

Como norma especial dispone la LEC que *serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo y **puvieran causar indefensión*** (art. 166.1). Pero continúa diciendo que, *sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá ésta todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a la disposiciones de la ley* (art. 166.2).

La exégesis de los dos apartados del artículo 166 revela que el legislador ha otorgado carácter esencial a los actos de comunicación, en línea con lo reiteradamente declarado por la jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Constitucional, pero que, al mismo tiempo, ha establecido un régimen de nulidad jurídica ‘sui generis’ o, con muchas reservas, nulidad “atenuada”, que persigue la conservación, casi a toda costa, de la eficacia de dichos actos. Y ello por tres razones:

- a) **Transmuta la nulidad en mera anulabilidad:** Un acto nulo es, por definición, insubsanable, se considera que sus efectos no han existido y, además, con efectos retroactivos ‘ex tunc’³⁴⁰. Hablamos de una nulidad que es radical o absoluta y que, sin embargo, no está presente en la regulación procesal de la nulidad de los actos de comunicación, lo que “la convierte prácticamente en una «anulabilidad»” (GUTIÉRREZ CARBONELL³⁴¹) o en una “nulidad «light»” (REVILLA PÉREZ³⁴²). El art. 166.2 habla de la subsanación del acto, lo que va en contra de la esencia del instituto jurídico de la nulidad, razón por la cual el legislador tendría que haber dicho “anulabilidad”, aunque tampoco se ajustaría totalmente a su naturaleza la facultad que tiene el tribunal de apreciarla de oficio como si de un supuesto de auténtica nulidad se tratase.
- b) **Exige que se haya producido indefensión:** A diferencia de su homólogo de la LEC de 1881³⁴³, el precepto añade un requisito adicional que es

³⁴⁰ CUBILLO LÓPEZ, *La comunicación procesal*, op cit., pág. 88, con cita de DE LA OLIVA SANTOS (nota al pie n.º 107).

³⁴¹ GUTIÉRREZ CARBONELL: “Artículo 166”, op. cit., pág. 561.

³⁴² REVILLA PÉREZ: “Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 281.

³⁴³ Art. 279 LEC 1881: “Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en esta Sección.

Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la Ley.

No por esto quedará relevado el actuario de la corrección disciplinaria establecida en el artículo que sigue”.

Vid. **STS 03.04.1987**: “Aunque el artículo 279 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en su párrafo primero prescribe que serán nulas todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practique con arreglo a lo dispuesto en la Sección III del Título VI del Libro I de la Ley, ello no puede

el de la indefensión, pero una indefensión en potencia (*pudiere causar*), lo que no parece cohonestarse con el ‘plus’ de la *efectiva indefensión* que exigen el art. 227.1 de la propia LEC³⁴⁴ y el art. 240.1 LOPJ³⁴⁵. También los tribunales exigen que “ha de ser efectiva y no meramente formal, lo que significa que el defecto procesal haya supuesto un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa del destinatario de la comunicación y, además, es necesario que la indefensión padecida no sea resultado de la falta de diligencia del propio destinatario de la misma (SSTC 116/1986, de 8 de octubre [RTC 1986\116], 4/1994, de 17 de enero [RTC 1994\4], 26/1997, de 11 de febrero [RTC 1997\26], 136/1998, de 29 de junio [RTC 1998\136], y 130/2000, de 16 de mayo [RTC 2000\130], entre otras muchas)” (**SAP Las Palmas de Gran Canaria, Secc. 3ª, 19.02.2009**, F. D. 1^º³⁴⁶). Y no siendo suficiente lo anterior, la indefensión exige, a su vez, “que la parte haya utilizado los recursos a su alcance para denunciar el vicio” (ídem, **09.04.2014**, F. D. 2^º³⁴⁷).

- c) **Fija un momento preclusivo para la denuncia:** La persona afectada ha de “denunciar” la nulidad *en su primer acto de comparecencia ante tribunal*, entendiéndose en caso contrario que tolera tácitamente el defecto y sus consecuencias procesales.

entenderse de modo absoluto porque en el párrafo 2.º de dicho artículo ya se admite la posibilidad de consolidación o sanación «cuando se hubiese dado por enterada en el juicio la persona notificada, citada o emplazada» (Sentencias de 10 de junio de 1964 y 24 de noviembre de 1968) (F. D. 1º); Roj: STS 2389/1987 (resolución repetida como Roj: STS 9000/1987).

³⁴⁴ **Art. 227:** “Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales”. 1. *La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.*

2. *Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.*

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciarse falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

³⁴⁵ **Art. 240 LOPJ:** 1. *La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales.*

2. *Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.*

En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciarse falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

³⁴⁶ Roj: SAP GC 409/2009.

³⁴⁷ Roj: SAP GC 1343/2014.

5.1.2.- Subsanación y convalidación del acto defectuoso o nulo

La impropiedad terminológica del art. 166 se extiende también al propio concepto de “subsanación”, término que se emplea en su cabecera. Aunque la persona *se hubiera dado por enterada y no denunciase la nulidad de la diligencia,... ésta surtiría entonces todos sus efectos*, pero no por ello quedará la misma subsanada, sino convalidada. La primera requiere una repetición de una acción defectuosa o mal hecha, o incluso practicar aquella que no se ha llegado a realizar –de ahí que sí se emplee bien el término en el art. 227.2º–, algo que solo puede hacer el órgano judicial, de oficio, tan pronto como advierta que no ha se han cumplido las prescripciones legales y sin que sea necesario la previa o simultánea declaración de la actuación mal hecha (art. 227.2º ‘a sensu contrario’). A la segunda, por su parte, le basta que únicamente que se dé por buena aquella misma acción, que en el caso de la persona afectada se produce ‘de facto’ sin intervención del tribunal tras una acción diferente de la de denunciar el acto de la que se desprenda que expresa o tácitamente ha aceptado las consecuencias procesales de la comunicación realizada.

5.1.3.- Inexistencia del acto de comunicación

Tanto la LEC como la LOPJ legislan tomando como presupuesto el de un sujeto activo que realiza un acto procesal (*...los actos de comunicación que no se practican con arreglo a...*) y de un sujeto pasivo al que se tiene por receptor de aquel acto, en este caso, de comunicación (*...persona notificada, citada, emplazada requerida...*). Partiendo de aquí, dependiendo de su corrección formal y de su repercusión material sobre el derecho de aquel destinatario, así establecen las normas su incidencia en el proceso. Pero, como acertadamente apunta GUTIÉRREZ CARBONELL, no contemplan como otro supuesto de ineficacia la no realización del acto, es decir, su inexistencia, que dicho autor considera como una variante o modalidad de nulidad pleno derecho³⁴⁸.

³⁴⁸ GUTIÉRREZ CARBONELL: “Artículo 166”, op. cit., pág. 561.

No obstante, habrá también casos en los que exista en realidad un supuesto de anulabilidad, pudiendo por tanto ser convalidados por el propio interesado. Así sucede cuando un juzgado se inhibe de oficio a favor de otro por declararse incompetente territorialmente y no emplaza al actor para que se persone ante aquel órgano (ciertamente, el art. 58 no lo prevé, lo que es incorrecto), pero dicha mismo lo hace por propia iniciativa aun sin saber si está o no sometido a plazo, pues no ha sido advertida al efecto. Algo parecido ocurrió en el caso conocido por el **AAP Madrid (Secc. 12ª) 05.04.2006** (Roj: AAP M 3736/2006), en el que el juzgado inhibido únicamente apercibió a la parte que “debía comparecer en el Juzgado declarado competente” pero no le indicó plazo alguno, ni tampoco fue requerida de personación por el Juzgado declarado competente antes de dictar el auto de inadmisión y archivo que fue el objeto del recurso: “[...] asiste la razón a la apelante, dado que por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de Málaga se declaró su incompetencia territorial, por estimar correspondía a los Juzgados de Madrid, remitiendo al Decano de éstos las actuaciones, pero no emplazó por diez días a la actora para que pudiera comparecer ante al que de aquellos hubiera correspondido. Como quiera que Nicotina Bazar, S.L. se personó mediante escrito de 1 de junio de 2005, notificándosele el auto hoy apelado el 8 de junio de 2005, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 166.2 LEC debe considerarse subsanado el defecto procesal de falta de emplazamiento

Si se declara en rebeldía a un demandado sin haberle siquiera remitido por correo certificado la cédula de emplazamiento y la demanda para que la conteste, difícilmente va a tener conocimiento de la misma. En estos casos tan flagrantes de indefensión se hace necesaria la inmediata reacción del órgano judicial, que ha de corregir el defecto acordando la práctica de dicho trámite a la mayor brevedad posible y, si se trata de citación a juicio, suspendiendo de oficio el señalamiento realizado³⁴⁹.

5.1.4.- La mera irregularidad

Siguiendo, de nuevo, a GUTIÉRREZ CARBONELL, “la irregularidad implica incumplimiento de requisitos del acto no esenciales y no causante de indefensión; el acto (comunicación es válido), cumple el fin que a iba destinado (por ejemplo, notificación fuera de plazo; omisión de aspectos formales secundarios; etc.). Únicamente la irregularidad origina la posible sanción disciplinaria del sujeto ejecutor de la misma (arts. 132.3 LEC y 241 LOPJ). La irregularidad puede ser apreciada de oficio o denunciada”³⁵⁰.

Como supuestos de irregularidad a la hora de practicar el acto de comunicación, podemos citar la falta de indicación del nombre completo de la persona con la que se entiende el funcionario o procurador en el domicilio del destinatario, consignándose simplemente “la madre”, o “su esposa”; no indicarse la hora; el domicilio; etc. También se han dado casos de citación a juicio verbal a través de un menor de edad de catorce años, como el conocido por la **SAP Madrid (Secc. 10ª) 17.09.2009**, que solo la consideró como irregular y no nula por no haber ocasionado indefensión³⁵¹.

observado en el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Málaga, y, en consecuencia, estimándose el recurso de apelación, procede la prosecución del procedimiento” (F. D. 2º).

³⁴⁹ Supuestos claros de nulidad son los de citación a juicio verbal y celebración de la vista sin respetar el plazo mínimo de diez días que hasta la Ley 42/2015 ha venido establecido por el art. 440 LEC. Es el caso de la **SAP Alicante (Secc. 5ª) 29.04.2014** (Roj: SAP A 867/2014), en que se citó al demandado un día 17 y celebrándose aquella el 18, prosperando por ello el recurso de apelación que el mismo interpuso: “Por tanto, concurre la causa de nulidad alegada, dado que al celebrarse el juicio al día siguiente de la notificación para el mismo, se conculca el derecho de defensa, procediendo, en consecuencia y sin examinar el resto de alegaciones formuladas por la parte apelante, declarar la nulidad, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la citación al juicio a fin de que se lleve a cabo con la antelación prevista en la Ley procesal” (F. J. 1º).

No obstante, otras Audiencias son más estrictas y acentúan el requisito de la indefensión: vid. **SAP Girona (Secc. 1ª) 09.01.2014** (Roj: SAP GI 1/2014): “[...] el que no se respetara el meritado plazo no impidió a la parte acudir a la cita judicial, como se reconoce en el propio recurso, y en cuanto a la imposibilidad de aportar testigos, amén de la parcialidad subjetiva del hijo del demandado que se pretendía proponer, en el Decreto judicial que se le notificó, se hacía especial advertencia de que en tres días se podía proponer los testigos, razones todas que vocacionan en la desestimación del recurso” (F. J. 2º).

³⁵⁰ GUTIÉRREZ CARBONELL: “Artículo 166”, op. cit., pág. 561 ídem.

³⁵¹ Roj: SAP M 9867/2009. Dice en particular la resolución: “El primer motivo acusa conculcación de los artículos 161-3 y 225-3 de la LEC y en su desarrollo integrador se viene a sostener que al haberse llevado a cabo el acto de comunicación con persona menor de 14 años, se ha generado una situación de indefensión prevista en el artículo 225-3. El reproche ha de decaer por su inconsisten-

5.2.- CAUCES PROCESALES PARA DEJAR SIN EFECTO COMUNICACIONES DEFECTUOSAS

La *denuncia de la nulidad de la diligencia* a la que se refiere el art. 166.2, como la de que cualquier otra actuación procesal, tiene en la LEC un cauce procedimental ordinario o principal que es el de *los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate* (art. 227.1). Hay que aclarar, no obstante, que en la inmensa mayoría de las ocasiones lo que se ataca no es esa diligencia (entendida esta en el sentido de actuación procesal material), sino la resolución subsiguiente respecto de la que aquella ha sido fundamento para poder ser dictada. Como ejemplo tenemos la diligencia de ordenación de declaración del demandado en rebeldía (art. 496.1) por no haber comparecido tras ser emplazado para contestar a la demanda, que parte necesariamente de la existencia de un previo acto de comunicación que ha sido considerado por el Letrado de la Administración de Justicia como practicado siguiendo las formalidades legales, otorgándole por ello el efecto procesal marcado por la ley. Siguiendo el mismo razonamiento, en la sentencia que dicta el juez o magistrado, parte del dato fáctico y procesal, de esos que por su relevancia han de formar parte del relato de antecedentes de hecho de la resolución, de la previa declaración de rebeldía a la parte demandada incomparecida, dando por sentado, según deduce de los propios los autos, que dicha parte ha sido llamada al proceso en legal forma.

Por otro lado, con carácter secundario y restrictivo se encuentran esos *demás medios que establezcan las leyes procesales* que señala el art. 240.1 LOPJ 'in fine', que en el caso de la LEC serían los siguientes:

- a) La *declaración de nulidad, bien de todas las actuaciones, bien de alguna en particular*, que prescribe el art. 227.2 *antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso*, que puede ser decretada de oficio o a instancia de parte *y siempre que no proceda la subsanación*.
- b) Una vez que ya se ha dictado resolución que ha puesto fin al proceso y que la misma ha devenido firme, quedan los medios de impugnación establecidos frente a ellas –razón por la cual no son técnicamente re-

cia jurídica. Efectivamente, con independencia de la defectuosa redacción del suplico del escrito de interposición del recurso, redactado al amparo del artículo 458 de la LEC, en cuanto que, caso de haberse producido la nulidad del acto procesal de citación lo que debería haberse impetrado es la retroacción del procedimiento al momento ritual en que se produjo la quiebra de la garantía procesal, téngase en cuenta que no puede incardinarse el supuesto enjuiciado en el radio de operatividad del artículo 225-3 de la LEC, puesto que, aun cuando al acto de comunicación parece haberse llevado a cabo con persona menor de 14 años, lo que supone una infracción del artículo 161-3 de la Ley Procesal Civil, la nulidad del acto procesal se subordina en el artículo 225-3 a que se haya podido producir indefensión, con lo que la mera irregularidad procesal per se es insuficiente para acarrear la nulidad del acto procesal que se ve afectado por la misma, sino que se requiere que se haya podido producir indefensión. Al acto de la vista compareció el demandado, si bien no se permitió su intervención por no estar representado por Procurador y asistido de Letrado a efectos alegatorios, aunque sí se le permitió presentar documentos, ya que en otro caso no se entiende a alcanzar la motivación sobre el descubierto en el pago. Se aduce que se tuvo conocimiento por la parte ahora apelante de la existencia del juicio el día previo a su celebración, pero ello está desprovisto de todo soporte probatorio" (F. J. 1º).

cursos-, tendentes todos ellos a atacar la fuerza de cosa juzgada que les caracteriza, que son:

- i. La acción de rescisión a instancia del demandado rebelde (arts. 501-508), también conocido por “recurso de audiencia al rebelde”.
- ii. La acción de revisión (arts. 509-516), ejercitable por el demandado rebelde y en particular por el motivo de *maquinación fraudulenta* (art. 510.4º).
- iii. El (mal) llamado *incidente excepcional de nulidad de actuaciones* (art. 228).

Característica común a todos los anteriores supuestos es la de que el perjudicado habrá de personarse en las actuaciones conforme a las reglas generales de postulación, con lo que, a salvo las excepciones que establecen los artículos 23.1 y 32.1, deberá hacerlo mediante la representación de procurador y la asistencia técnica de un abogado. Sobre este aspecto es de significar que, a diferencia de lo que sucede en sede de ejecución forzosa, no se prevé expresamente la posibilidad de anular los actos de comunicación tras la *simple comparecencia* del perjudicado ante el órgano judicial. En aquel proceso, como caso único prevé la LEC que el ejecutado pueda hacer valer la nulidad de la traba sobre bienes inembargables no solo *mediante los recursos ordinarios*, sino también *por simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiese personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el tribunal sobre la nulidad denunciada* (art. 609p2). Ahora bien, no está tan claro que fuera conveniente que se arbitrara una norma parecida que fuese de aplicación general. Frente al supuesto de la inembargabilidad, que es fácilmente objetivable, la complejidad de los actos de comunicación, las deficiencias que venimos estudiando en el presente trabajo y los múltiples factores y diferentes sujetos que intervienen impiden que con la simple manifestación del afectado³⁵² se pueda dar una respuesta adecuada sin perjudicar por ello al sistema de recursos, que es el medio ordinario para combatir actuaciones desfavorables, salvo que el legislador estableciese casos concretos en los que ante situaciones claras e innegables de ‘mala praxis’ procesal se arbitrara una especie de ‘cuasi-automatismo’ que neutralizara los efectos de la misma.

Por último, ya fuera de la jurisdicción y agotada esta, restaría acudir al *recurso de amparo* ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

³⁵² A juicio de REVILLA PÉREZ, no obstante, “debiera bastar la mera comunicación al tribunal para que éste, previo análisis de la comunicación practicada, se pronunciara en cuanto a su adecuación a la legalidad –al menos en los casos de postulación voluntaria–” (“Las comunicaciones...”, op. cit., pág. 282).

5.2.1.- Medios prioritarios y excluyentes: los recursos

El ámbito natural para defenderse de una actuación procesal es el marcado por el art. 448.1: *Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente las partes podrán interponer los recursos previstos en la Ley*. En coherencia con ello, el art. 227.1 establece la preeminencia de este mismo cauce: *La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate*³⁵³.

Además de los requisitos generales de postulación, legitimación, gravamen y preclusión, el propio art. 227.1 está ya anunciado que la nulidad requiere la existencia de defectos de forma tan graves que trasciendan la mera irregularidad y que, bien *impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin*, bien *determinen efectiva indefensión*, aunque en el caso de los actos de comunicación el objetivo de esos requisitos es precisamente evitar lo segundo³⁵⁴. Al mismo tiempo, esa indefensión ha de estar “determinada” por esos defectos, por lo que no será considerada como tal a estos efectos aquella que sea imputable la conducta de la propia parte afectada.

Dicho esto, la parte afectada por actos de comunicación contrarios a la ley dispone de diferentes recursos que podrá interponer según el tipo de resolución de que se trate y el órgano al que se impute el vicio, siendo preciso distinguir entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios, según se exijan o no la concurrencia de motivos tasados por la ley para poder ser admitidos a trámite.

a) Recursos ordinarios

Este primer grupo está integrado por los recursos de reposición, revisión, apelación y queja. Los comentamos seguidamente:

³⁵³ Redacción casi idéntica en el art. 240.1 LOPJ, salvo por el inciso final: *La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, “o por los demás medios que establezcan las leyes procesales”*.

³⁵⁴ Señala MARTÍN DE LA LEONA que, “entre los muchos defectos formales capaces de provocar la nulidad del acto de comunicación, pueden citarse: la inobservancia de las disposiciones relativas a la persona que ha de recibir la cédula (MICHEL); el cambio de apellidos llevado a cabo por cualquier causa en la notificación, ya que en este caso la comunicación pudo ir a parar a manos de quien ninguna relación tiene con el proceso y, paralelamente, dejar en total desconocimiento a su destinatario acerca del contenido de la comunicación (SAP Pontevedra, 23 octubre 1975), provocando la consiguiente indefensión; la falta absoluta de certeza acerca de la fecha o de la persona a la que se ha hecho la notificación, etc.”; el autor añade el importante detalle de que “resulta sin embargo irrelevante a los efectos apuntados, bien que el defecto hubiese sido causado por error o por cualquier otra causa atribuible al órgano judicial (STC 114/1986), o bien porque éste hubiese sido provocado por la actividad de la parte contraria, como ocurre cuando el emplazamiento resulta infructuoso por haberse proporcionado un domicilio falso del demandado” (“Artículo 227” [comentarios], *Proceso Civil Práctico*, op. cit., pág. 435).

a') Recurso de reposición: Regulado en los arts. 451 a 454 bis, cabe, por un lado, contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos, salvo que expresamente se prevea el recurso directo de revisión (art. 451.1); y por otro, contra las providencias y autos no definitivos. Es el caso el recurso de reposición que interpone el demandado, al tiempo de personarse, frente a la diligencia de ordenación de declaración declarándole rebelde tras haber sido emplazado (aparentemente) para contestar a la demanda.

b') Recurso de revisión: Introducido 'ex novo' por la Ley 13/2009 merced a un nuevo art. 454 bis para las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia, se da contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación, amén de otros decretos en que así se prevea expresamente (v. gr., decreto de medidas ejecutivas concretas, art. 551.5). Particularmente nos interesa el que se puede interponer frente al decreto que pone fin al proceso monitorio, alegando el deudor tras la notificación de este que no se le ha requerido de pago en legal forma (816.1).

c') Recurso de apelación: El recurso de apelación es el medio de impugnación de casuística más elevada. Por lo general, el proceso se ha sustanciado en todo momento sin la presencia de la parte demandada, declarada en rebeldía, y una vez se le consigue notificar la sentencia, la misma se persona e interpone recurso de apelación al amparo del art. 223.3 en relación con el art. 166, ambos de la LEC, interesado se revoque dicha resolución y se declare la nulidad de las actuaciones con retroacción al momento en que se acuerda el emplazamiento para contestar a la demanda o la citación a juicio.

Regulado en los arts. 455 a 467, con el recurso de apelación *podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia* (art. 459) pero con dos ineludibles exigencias:

- Que dicha infracción haya ocasionado indefensión en el recurrente, de ahí que tenga que *alegar*³⁵⁵, *en su caso, la indefensión sufrida*.
- Que el recurrente acredite *que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad para ello*, lo que ha de ponerse en conexión con el art. 166.2 que, recordemos, exige que el afectado realice esa denuncia *en su primer acto de comparecencia ante el tribunal*. En el juicio ordinario, el momento para efectuar esa denuncia lo sitúa la jurisprudencia menor en la audiencia previa del juicio ordinario (**SAP Albacete, Secc. 2ª, 24.09.2009**³⁵⁶); si se trata de juicio verbal bajo el régimen

³⁵⁵ El precepto utiliza el verbo "alegar", pero la mera alegación no es suficiente, sino que debe acreditarse. La denuncia no prosperará si no "se especifica clara y terminantemente en qué ha consistido la indefensión sufrida" (**AAP A Coruña, Secc. 5ª, 25.06.2010**, F. D. 2º, F.D. 1º; Roj: AAP C 544/2010).

³⁵⁶ ROJ: SAP AB 764/2009, la cual cita, a su vez, la **SAP Ávila (Secc. 1ª) 19.02.2009**: "Así la AP de Ávila en Sentencia dictada el 19 de Febrero de 2009, señala en un supuesto similar que: [...] «al comienzo de la Audiencia Previa, la demandada en la instancia pudo pedir la nulidad de actuaciones que ahora postula, pues el fin inicial de ese momento procesal es, entre otros, examinar las

anterior a la Ley 42/2015, dicha nulidad debía hacerse valer, si la parte hubiese tenido la oportunidad procesal para ello (v. gr., porque ha sido citada dos días antes), en el propio acto de la vista de juicio (**SAP Vizcaya, Secc. 4ª, 29.09.2011**³⁵⁷); y si se tiene conocimiento de la nulidad tras la sentencia, el medio es justamente el recurso de apelación y la invocación del art. 459 LEC (**SAP Valencia, Secc. 11ª, 07.12.2010**³⁵⁸).

d') Recurso de queja: A él dedica la LEC sus arts. 494 y 495 para corregir la eventual denegación de la tramitación de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. Se trata de un recurso que se interpone directamente ante el tribunal 'ad quem' y en nuestra materia podría tener lugar cuando el tribunal de instancia fundamenta su denegación en la extemporaneidad de la interposición de aquellos recursos y el recurrente demuestra que aquel ha efectuado un cómputo indebido de los plazos tras la notificación de la resolución recurrida, por ejemplo por no haber tenido en cuenta que la parte se

cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución del proceso» (F. D. 2º de la resolución abulense, Roj: SAP AV 5/2009).

Vid. **SAP Madrid (Secc. 21ª) 17.06.2014** (Roj: SAP M 10277/2014), acerca de un caso de nulidad no denunciada en la primera comparecencia ex art 166 LEC: "Dejando al margen que no consta que tuviera su domicilio en Marruecos ni al ser emplazado ni en otra fecha distinta, y que en ningún momento notificó cambio de domicilio alguno a la parte actora, para que haya lugar a la nulidad suplicada por él mismo es preciso que se haya denunciado "la nulidad" "en su primer acto de comparecencia", lo que la parte no hizo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166LEC y artículo 459 LEC no procede estimar su petición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 LEC en el recurso de apelación podrá alegarse la infracción de normas o garantías, exigiendo a la parte no solo que concrete qué norma es la infringida y la indefensión sufrida, sino una exigencia previa que es "acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiera tenido oportunidad procesal para ello", y esto debió hacerlo en la instancia, en su primer acto de comparecencia, que no fue la Audiencia previa, en la que tampoco lo solicitó; lo que la parte solicitó al personarse antes de la Audiencia previa fue la suspensión de la misma, y en ella lo que anunció fue que iba a instar la nulidad, lo que evidencia que no dio cumplimiento a lo exigido por la norma. Por lo que no cabe acceder a su petición de nulidad" (F. J. 4º).

³⁵⁷ Algo que no hizo la parte demandada-apelante en el caso de la **SAP Vizcaya (Secc. 4ª) 29.09.2011** (Roj: SAP BI 2272/2011): "[...]se ha interpuesto recurso de apelación por la demandada Hobby Magazine SL alegando infracción de las normas y garantías del procedimiento causante de indefensión, a tenor de lo dispuesto en el art. 459 LECn, al no darse traslado a la parte apelante de toda una serie de trámites y comunicaciones procesales, [...]" (F.D 1º); "[...] se rechaza el mismo porque no basta sólo como se pretende con la cita de las normas consideradas infringidas como se hace e invocar la indefensión pretendida, sino también la acreditación de haber denunciado oportunamente la infracción si hubiese tenido oportunidad para ello, y es claro que la apelante la tuvo en el acto del juicio verbal, sin que en el acta conste la más mínima solicitud de nulidad de actuaciones o protesta al respecto [...]" (F. D. 2º).

³⁵⁸ Roj: SAP V 6224/2010: "Señala el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en el recurso de apelación podrá alegarse infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, exigiendo, en este caso, la cita de las normas que se consideren infringidas, la alegación de la indefensión sufrida, y la acreditación de que denunció oportunamente la infracción si hubiera tenido oportunidad para ello. Entendiendo que se cumplen en este caso tales requisitos y, en concreto, como momento oportuno para denunciar las 'infra'cciones que se aducen, el escrito de apelación frente a la sentencia dictada, al ser en ese momento cuando comparece la parte demandada, aduciendo, precisamente, las razones en que apoya el mismo, para no haberlo hecho en el juicio señalado" (F. J. 2º).

encuentra representada por procurador y que, por ello, ha debido diferenciar entre el momento de la recepción y el momento de la realización o notificación (art. 151.2).

b) *Recursos extraordinarios*

Innecesario hablar aquí del recurso de casación por versar sobre la infracción de normas sustantivas (art. 477.1), el antiguo “recurso de casación por quebrantamiento de forma”, desde el año 2000 rebautizado como ***recurso extraordinario por infracción procesal*** (arts. 468-476) es el único de esta categoría válido para conocer de las nulidades. Se formula *contra sentencias y autos dictados por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia* (art. 463) y solo puede fundarse en los siguientes cuatro *motivos* tasados que establece el art. 469.1, siendo el tercero de ellos el que más y mejor encuadre tiene respecto a las comunicaciones defectuosas:

- 1º. *Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional*: Con base en este motivo podría denunciarse, p. ej., el indebido conocimiento por los tribunales de un litigio sometido a arbitraje, o el incumpliendo las normas de reparto. Pese a la omisión de la competencia territorial, también cabe conforme al art. 67 alegar su infracción en este ordinal siempre que se trate de normas imperativas. Este primer motivo no es tan importante para nosotros porque su aplicación a nuestro campo es más teórica que práctica, pero no por ello puede descartarse. Piénsese, por ejemplo, en el emplazamiento dirigido a un demandado por un juzgado manifiestamente incompetente, caso en que la eficacia de dicha comunicación decaería de forma indirecta tras la estimación de una eventual declinatoria.
- 2º. *Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia*: hipótesis también minoritaria, sería denunciable aquí, entre otras infracciones, la falta de motivación o congruencia de la sentencia, como sucedería si el juez o tribunal habla en todo momento de que se ha citado a un demandado determinado y termina condenando a otra persona.
- 3º. *Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinase la nulidad conforme a la ley o hubiera podido producir indefensión*: Este es el motivo clave. Si los anteriores dos motivos se referían a los vicios cometidos inicio y al final de proceso, este se refiere a los producidos en la tramitación del mismo, exigiéndose, bien que sean de tal entidad que la ley determine la nulidad del acto por afectar a los propios principios, garantías o presupuestos del proceso, o bien que hayan causado indefensión en el recurrente, que, además, ha debido denunciarla previamente. Así, cabe hablar de nulidad, p. ej., cuando el proceso se ha seguido sin abogado, siendo este preceptivo, o cuando se ha celebrado una vista sin la de-

bida convocatoria a la partes o efectuando ésta incorrectamente.

- 4º. *Vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE*: motivo que abre un elenco de posibilidades al hablarse genéricamente de la vulneración de las garantías procesales consagradas por dicho precepto constitucional. Precisamente por su generalidad puede ocurrir que algunos de las causas que se aleguen a su amparo puedan encajar también de forma más específica en los anteriores motivos (p. ej. el derecho al juez predeterminado por la ley puede subsumirse en el motivo n.º 1 si no se respetaran las normas de reparto). En estos casos, entiende la doctrina, que el recurso debe fundamentarse en ambos motivos (MONTERO).

La procedencia del recurso extraordinario por infracción procesal depende de estos tres presupuestos:

- 1º. Que se trate de resolución contra la que quepa el mismo, es decir, sentencias o autos definitivos de las Audiencias Provinciales (art. 468).
- 2º. Que se motive conforme a al menos uno de los supuestos tasados (art. 469.1).
- 3º. Que *se haya denunciado* oportunamente la infracción procesal o la vulneración del art. 24 CE *en la instancia* (1ª o 2ª) donde haya tenido lugar o, de tratarse de *defecto subsanable*, se haya pedido su *subsanción* (art. 469.2).

5.2.2.- Rescisión y revisión de sentencias firmes por el demandado rebelde

Uno de los principios general del Derecho es el de seguridad jurídica y uno de sus reflejos más claros es aquel otro derivado de la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Pero, como casi siempre, estos principios cuentan con excepciones y, aun firmes, aquellas pueden ser atacadas y dejadas sin efecto, aunque para ello el ordenamiento impone que concurren motivos de peso, como puede ser el de haber estado el demandado en todo momento ajeno al proceso judicial seguido en su contra sin su conocimiento y sin que ello le sea imputable por su conducta negligente, o incluso conociendo la existencia del pleito pero habiendo estado imposibilitado para comparecer en él y defenderse. Para paliar esta injusticia por atentar de forma tan manifiesta al art. 24 CE nuestro ordenamiento contempla dos “remedios”: la “rescisión de sentencia firme” y la “revisión de sentencia firme”. En ambos casos el efecto es “rescindente”, que provoca la anulación de la resolución pero sin que se entre a resolver, al mismo tiempo, en el fondo del asunto. Esto se realiza a través de un nuevo juicio (juicio “rescisorio”) en el que, ahora sí, se podrá oír al demandado.

a) *La acción de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde*

Se trata, siguiendo a MARTÍN DE LA LEONA, de “remediar el más grave defecto que al demandado puede dársele en el proceso, que no es otro que la falta de conocimiento de la existencia de un proceso incoado contra él, siendo precisamente la indefensión que indudablemente provoca esta circunstancia, una de las más importantes razones que justifican la pervivencia de este medio de combatir sentencias firmes”³⁵⁹. No obstante las palabras de este autor, también cabe la rescisión aun en el caso de que el demandado haya conocido el pleito.

La regulación se contiene en los artículos 501 a 508³⁶⁰ y el proceso se sustancia si se cumplen, en lo que esencial, los siguientes requisitos:

1.º Que el objeto de la rescisión sea una **sentencia que haya adquirido firmeza**. El art. 501³⁶¹ solo permite *la rescisión de la sentencia firme*, por lo que quedan fuera los autos y los decretos. En consecuencia no podrá rescindirse, por ejemplo, un decreto de fin de monitorio si el deudor alega que, pese a ser notificado el previo requerimiento de pago a un familiar ex art. 161.3, se encontraba de viaje fuera de España y no pudo recibir la comunicación.

2.º Que la sentencia tenga **fuerza de cosa juzgada**, condición que es expresamente reseñada por el art. 503³⁶² pese a que resulte un tanto superflua dada la razón de ser y finalidad este medio de impugnación.

3.º **Que el demandado haya permanecido constantemente en rebeldía** (art. 501p1): Es importante subrayar el adverbio *constantemente*, pues si en algún momento anterior al dictado de la sentencia que luego deviene firme el demandado pudiera haber comparecido en el proceso, tendría que haberlo hecho y haber ejercitado los recursos ordinarios o incluso haber planteado el incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

4.º **Que la rebeldía haya sido involuntaria**, impidiendo al demandado comparecer en todo momento debido a:

³⁵⁹ MARTÍN DE LA LEONA: “Artículo 227”, op. cit., pág. 460.

³⁶⁰ Integrantes, junto a los artículos 496 a 500, del Título V del Libro II de la LEC: “De la rebeldía y de la rescisión de sentencias firmes y nueva audiencia al demandado rebelde”.

³⁶¹ **Art. 501:** “Rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde. Casos en que procede”. *Los demandados que hayan permanecido constantemente en rebeldía podrán pretender, del tribunal que la hubiere dictado, la rescisión de la sentencia firme en los casos siguientes:*

1.º *De fuerza mayor ininterrumpida, que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.*

2.º *De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161, pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable.*

3.º *De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos.*

³⁶² **Art. 503:** “Exclusión de la rescisión de sentencias sin efectos de cosa juzgada”. *No procederá la rescisión de las sentencias firmes que, por disposición legal, carezcan de efectos de cosa juzgada.*

- a. *Fuerza mayor ininterrumpida, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma* (art. 501.1º).
- b. *Desconocimiento de la demanda y del pleito, bien porque:*
 - Hubiese sido emplazado o citado a través de tercero subsidiario del art. 161.3, pero la cédula *no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable* (art. 501.2º).
 - Hubiese sido emplazado o citado *por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos* (art. 501.3º).

3.º Que se solicite **dentro de plazo**: La pretensión de rescisión debe interponerse en el plazo de 20 días, si la notificación de la sentencia fue personal, o en el de cuatro meses si lo fue por edictos (art. 502.1). No obstante, dichos plazos, que son de estricta caducidad, pueden *prolongarse* hasta los dieciséis meses si el rebelde prueba que subsiste la fuerza mayor que le ha impedido comparecer (art. 502.2). Más allá de ese plazo, al demandado aun le quedará la posibilidad de acudir al incidente excepcional de nulidad de actuaciones, siempre que lo solicite dentro de su propio plazo de cinco años de caducidad (art. 228.2)³⁶³.

b) *Revisión de sentencias firmes por “maquinación fraudulenta”*

El mismo poder anulatorio de la cosa juzgada tiene la solicitud o demanda (la LEC se cuida de no utilizar el nombre de “recurso”) de revisión de sentencias firmes, regulada en los artículos 509 a 516³⁶⁴, estableciendo el art. 510 con carácter tasado los *motivos* por los que *habrá lugar a la revisión de una sentencia firme*, siendo el que a nosotros interesa el que aparece en cuarto lugar: *Si se hubiese ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o “maquinación fraudulenta”*.

La “maquinación” más elemental es la que protagoniza la parte actora cuando señala en su demanda como domicilio del demandado un lugar a sabiendas de que el mismo ya no reside allí. Se trata de un *fraude* que en la **STS 26.04.1996** se explicaba como sigue:

“Es reiterada doctrina de esta Sala la de que entraña maquinación fraudulenta (número 4º del artículo 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) toda actividad de la parte actora encaminada a dificultar, disimular u ocultar al demandado el planteamiento del litigio, obstaculizando mediante ardides su defensa, y constituyendo la forma más frecuentemente empleada la designación de un domicilio que no es el actual y la afirmación inexacta de desconocerse otro, provocando, con ello, un emplazamiento edictal [...]” (F. D. 2º)³⁶⁵.

³⁶³ MARTÍN DE LA LEONA, “Artículo 227”, op. cit., pág. 461.

³⁶⁴ Título VI (y último) del Libro II de la LEC: “De la revisión de sentencias firmes”.

³⁶⁵ Roj: STS 2453/1996: “Dentro de las coordenadas de la referida doctrina jurisprudencial se halla comprendida la conducta procesal de Dª Flora cuando, al promover el proceso de separación matrimonial anteriormente referido (autos número 501/91 del Juzgado de Primera Instancia núme-

Por influencia del principio de seguridad jurídica, la virtualidad de la revisión está sometida a caducidad, apreciable por ello de oficio, debiendo ser interpuesta en un plazo máximo *de cinco años desde la fecha publicación de la sentencia que se pretende impugnar* (art. 512.1); a su vez, dentro de dicho marco temporal, habrá de solicitarse *siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad* (art. 512.2). Si el demandado condenado en rebeldía descubre el fraude, o pudiese haberlo conocido con una mínima diligencia, pasado esos plazos, verá rechazada su solicitud (art. 512.1 ‘in fine’), al igual que sucederá, aunque no lo refleje el precepto, si pudo haber denunciado antes la nulidad (art. 166.2)³⁶⁶.

5.2.3.- La declaración autónoma de nulidad de actuaciones

De nuevo por su naturaleza de actos procesales, a los actos de comunicación se les aplica el régimen jurídico de la “nulidad de actuaciones” previsto en el art. 225³⁶⁷ y siguientes de la LEC. En particular, de los siete *casos* tasados en que *los actos procesales serán nulos de pleno derecho*, cuatro son potencialmente aplica-

ro Dos de Reus) contra su esposo D. Pedro Jesús, designó como domicilio de éste el de Cambrils [...], cuando aparece probado que ella conocía que, desde 1990, no era aquél su domicilio y le constaba que lo tenía en Madrid, lo que, además, podría haber comprobado mediante el empleo de una mínima diligencia, al tener su referido esposo la profesión de Abogado en ejercicio [...]" (F. D. 2º).

³⁶⁶ Fue el caso de la **STS 13.02.2014** (Roj: STS 436/2014), que desestimó la demanda de revisión ante una supuesta maquinación fraudulenta e interpuesta mucho después de transcurridos los tres meses: “[...] desde mucho tiempo antes pudo aquel litigante tener pleno conocimiento de todas las actuaciones del proceso de origen e incluso proponer incidente de nulidad de actuaciones, como exige el ATS 21-2-12 (asunto 66/11), con carácter previo a la vía siempre excepcional de la revisión” (F. D. 4º).

³⁶⁷ **Art. 225:** “Nulidad de pleno derecho”. *Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:*

1.º *Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.*

2.º *Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.*

3.º *Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.*

4.º *Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como obligatoria.*

5.º *Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Secretario judicial.*

6.º *Cuando se resolvieran mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.*

7.º *En los demás casos en que esta ley así lo establezca.*

Ídem **art. 238 LOPJ:** *Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:*

1.º *Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.*

2.º *Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.*

3.º *Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.*

4.º *Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.*

5.º *Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.*

6.º *En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan.*

bles a aquellos (1º, 2º, 3º y 7º), destacando por ser el mayoritariamente invocado el tercero, esto es, *cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión*.

A nuestro parecer, la auténtica nulidad absoluta, blindada frente a condicionantes o excepciones, que se produce en los actos de comunicación es la del art. 225.2º, *cuando se realicen bajo violencia o intimidación*, supuesto afortunadamente excepcionalísimo en este ámbito. Baste pensar en un demandado coaccionado por el funcionario o el procurador de la contraparte para que se preste a firmar la diligencia de emplazamiento para contestar a la demanda de juicio ordinario. La redacción del art. 226 apunta en forma imperativa a excluir la necesidad de denuncia del agraviado, disponiendo en su apartado 2 que *se declararán nulos –por los tribunales y sin más requisitos– los actos de las partes o de personas que intervengan en el proceso si se acredita que se produjeron bajo intimidación o violencia*. Problema distinto es el de la acreditación del tan grave suceso, pues el funcionario goza de capacidad de certificación (art. 478.a LOPJ), igual que ahora el procurador a partir de la Ley 42/2015.

En el resto de supuestos la nulidad es relativa y tolera la convalidación. Así, si el acto de comunicación lo practica un funcionario incompetente, hipótesis que plantea JULVE GUERRERO, pero el objeto del mismo llega a conocimiento del destinatario, el fin último de la actuación se habrá cumplido y por tanto el acto será considerado válido³⁶⁸. Lo mismo sucederá aunque se prescinda de las formas esenciales si no producen indefensión.

La nulidad de actuaciones, además de poder ser apreciada a través de los recursos, como acabamos de estudiar, cabe también ser abordada por la vía que representan los artículos 227 y 228, el primero, excepcional, previsto para el caso de que no haya recaído resolución que pongan fin al proceso y el segundo, más excepcional todavía, para cuando aquella ya se ha dictado y ha alcanzado firmeza. Solo en el primer caso cabe que el tribunal pueda de oficio, además de a instancia de parte, declarar la nulidad de sus propias actuaciones, aunque esta previsión legal no está exenta de problemas y, sobre todo, de condicionantes.

a) ***Posibilidad de la declaración de oficio durante la sustanciación del proceso***

Bajo la rúbrica de “Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales” el art. 227, después de establecer en su apartado 1º que la vía de los recursos es la vía general para anular actuaciones, relativiza lo anterior en su apartado 2º: *Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular*.

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio

³⁶⁸ JULVE GUERRERO: “Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 367.

*una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal*³⁶⁹.

Como se puede apreciar, ni la LOPJ ni la LEC hacen depender de la voluntad del perjudicado que se llegue o no a declarar la nulidad de las actuaciones procesales. No dicen “a instancia de parte se declararán nulos”, sino, tajantemente, que “*serán*” nulos de pleno derecho (art 238 LOPJ y arts. 166.1 y 225.1º LEC), indicando que el defecto es innato en el acto y ajeno a cualquier valoración posterior. Pese a esta regla, los tribunales son muy reticentes a tomar la iniciativa en hablar de nulidad de actuaciones, algo “tabú” por el demérito que la misma supone para el gremio judicial. De hecho, usando en muchas ocasiones un eufemismo con la que se pretende enmascararla, prefieren la expresión “dejar sin efecto” tal o cual resolución.

El problema se centra en la compleja redacción del art. 227 y en los requisitos que contiene. El apartado 1º dice, acabamos de señalarlo, que la nulidad se hará valer por medio de los recursos *en todo caso*; el primer párrafo del 2º permite, sin embargo, la declaración de aquella *de oficio*, pero con el doble factor de que no hubiere recaído resolución poniendo fin al proceso y que no proceda la subsanación; y el segundo párrafo veta decretar de oficio, *con ocasión de un recurso*, la nulidad *que no haya sido solicitada*. Ante estas aparentes contradicciones o, al menos, difícil coordinación interna que presenta el precepto, no es de extrañar que podamos encontrar jurisprudencia menor también contradictoria:

a') *No cabe de oficio*: La **SAP Badajoz (Secc. 3ª) 29.07.2012**, en un recurso planteado por la demandada rebelde, se quedó en la superficie y tuvo claro que:

“[...] si lo que se pretende es la nulidad de lo actuado en la instancia, es de observar que no cabría acceder a ello en la medida que no ha sido expresamente solicitado por la recurrente, lo que impide a este Tribunal pronunciarse al respecto, conforme a lo previsto en el art. 227.2, in fine, LEC” (F. D. 1º).

b') *Sí cabe de oficio*: Todo lo contrario que la **SAP Madrid (Secc. 13ª) 17.09.2014**³⁷⁰, que no solo entendió que se puede, y se debe, actuar de oficio por

³⁶⁹ Ídem **art. 240.2 LOPJ**: *Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.*

En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

³⁷⁰ **Roj: SAP M 12941/2014**. Esta sentencia es muy interesante porque la Audiencia Provincial, lejos de ceñirse al objeto del recurso (interpuesto por la actora tras la desestimación de la demanda), asume una auténtica función tuitiva de la parte demandada: “[...] se aprecia que el domicilio social de Solon es “[...] Freiburg (Alemania), como asimismo se reseña en el encabezamiento del escrito de demanda, en el que, sin embargo, se añade ” y domicilio a efectos de notificaciones en las dependen-

habilitación el art. 24 CE, art. 240 LOPJ y 227 LEC, sino que, además, haciendo una interpretación más profunda, dijo:

“[...] es cierto que en los párrafos segundos de los apartados 2 de los precitados artículos se establece que «en ningún caso podrá el Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso...»: más ello no puede interpretarse de otro que tal limitación solo es aplicable cuando el recurso lo interpone la propia parte que ha sufrido las consecuencias de las actuaciones procesales viciadas, en cuanto su falta de denuncia comporta la conformidad con lo resuelto pese a tal defecto procesal, pero no cuando la que sufre el gravamen procesal no puede utilizar el remedio del recurso para ponerle remedio, precisamente por desconocer la existencia del procedimiento. Sería abusivo posponer ya en la fase de cumplimiento o ejecución de la sentencia el inicio de un incidente de nulidad de actuaciones cuando la existencia de la infracción es conocida por el órgano judicial, a quien incumbe velar por la legalidad del procedimiento, según ha quedado expuesto, a través del recurso interpuesto por otra parte si la que soporta la indefensión no ha gozado de la posibilidad de hacerlo” (F. J. 4º).

El sustrato de lo anterior ya estaba presente en la **STS 11.10.1994**³⁷¹:

“[...] no son las partes implicadas en el proceso las que hayan de cuidar del cumplimiento escrupuloso de las normas legales sobre comunicación de los actos procesales para que no se produzca indefensión, sino el propio órgano judicial encargado de la tramitación del proceso, el cual no puede escudarse en lo que al respecto le manifiesten las partes y limitarse a ser un mero ejecutor de sus deseos. Aquí está ausente el principio dispositivo y de aportación de parte, porque aquellas normas son de derecho imperativo, más todavía, de orden público, en cuanto su incumplimiento afecta al art. 24 de la Constitución” (F. D. 3º).

cias de sus abogados Rödl & [...] Madrid”, sin que tal designación tenga su causa en las cláusulas o estipulaciones del referido contrato o en otro documento autentico suscrito al efecto por D. Rubén, como representante de Solon. Esta situación exige de este Tribunal un pronunciamiento previo al examen del fondo del litigio, a fin de determinar si se ha incidido en irregularidades procesales graves susceptibles de causar indefensión a la parte demandada, que ha permanecido, tanto en la anterior instancia, como en esta, en estado de rebeldía procesal (F. J. 1º). [...] En este caso, en que la sociedad demandada tiene su domicilio en Alemania, el contrato se firmó en Freiburg, no se designó en el mismo un lugar distinto al del domicilio de Solon para recibir notificaciones judiciales, no consta en modo alguno que delegara facultades de representación a tales efectos en una persona física determinada y perfectamente identificada, así como la carencia de personalidad jurídica de Rödl&Partner; este Tribunal carece de los más elementales indicios que le permitan adquirir la convicción de que la mercantil Solon ha tenido conocimiento de la existencia de este procedimiento y que, por ello, haya podido ejercitar su derecho a comparecer o no en él, de forma que su decretada rebeldía procesal pudiera considerarse voluntaria. Sin que, finalmente, pueda presumirse que el despacho de abogados citado dispusiera de facultades de representación por el mero hecho de que haya realizado labores de asesoramiento de Solon o gestionado sus intereses, respondiendo a un acto unilateral de la demandante Asolber la designación de las “dependencias” de Rödl&Partner Abogados a efectos de “notificaciones”, ni siquiera para su emplazamiento. Por todo lo expuesto decretamos la nulidad de todo lo actuado [...] (F. J. 5º).

³⁷¹ Roj: STS 6435/1994; sentencia repetida en la base de datos del CENDOJ como Roj: STS 18231/1994.

Y en esa sentencia se apoya, a su vez, la ya meritada **SAP Alicante (Secc. 5ª)** **29.04.2014**:

“El artículo 166.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone la nulidad de los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la ley, y que puedan causar indefensión, nulidad que puede incluso ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso por ser las normas sobre actos de comunicación de derecho imperativo, o más todavía, de orden público, en cuanto su incumplimiento afecta al artículo 24 de la Constitución (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Octubre de 1994)” (F. J. 1º).

Sea como fuere, de oficio o no, la declaración de nulidad regulada en el art. 227.2 requiere:

- Que se declare *antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso*. Pese a que no lo diga el precepto, es común el entendimiento de que el momento preclusivo no está realmente en el momento en que se dicta, sino aquel en que gana firmeza, detalle que sí se preocupa de explicitar el art. 228.1 al regular el incidente excepcional de nulidad de actuaciones.
- Que *no proceda la subsanación*.
- Que se acuerde la *previa audiencia de las partes*. Conforme al parecer que ya hemos mostrado en este trabajo, se ha de entender que se refiere a las partes personadas. Sería absurdo tener que oír a un demandado ausente en el proceso tras un emplazamiento erróneo o no realizado para que se pronuncie sobre la nulidad de unas actuaciones que no conoce.

b) *El incidente excepcional de nulidad de actuaciones*

Dictada ya resolución final firme y con un carácter fuertemente restrictivo, haciendo gala de ello su propio nombre, cabe plantear por la parte afectada el llamado por el art. 228 *incidente excepcional de nulidad de actuaciones* (ídem art. 241 LOPJ³⁷²), que, como precisa DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, “no es una verdadera cues-

³⁷² **Art. 241 LOPJ**: 1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.

ción incidental”, “sino que nos encontramos ante una acción impugnatoria autónoma de la cosa juzgada por motivos tasados”³⁷³. Efectivamente, se trata de un supuesto muy especial cuya regulación actual fue introducido por la LOPJ (asumida luego por la LEC 2000) tras la reforma de su art. 240 por LO 5/1997³⁷⁴ y que, como se reconocía en la Exposición de Motivos de esta última, existía una “inde-seable situación” que resultaba “apremiante superar” por cuanto “no existe cauce para declarar la nulidad radical de actuaciones por vicio procesal una vez que «hubiere recaído sentencia definitiva»” (aptdo. 1). Aquello suponía que los tribunales quedaban inoperantes frente a la nulidad una vez que el proceso había concluido y no quedaba más camino que el de acudir en amparo al Tribunal Constitucional, “aun a riesgo de convertir este recurso en un remedio procesal ordinario” (ANDRÉS CIURANA³⁷⁵), con el colapso de dicho órgano que aquello suponía. Por ello, se explicaba en la modificación de 1997, “la Ley opta por establecer un sencillo incidente para tratar exclusivamente los vicios formales que generen indefensión y nulidad y que no sea posible denunciar por vía de recursos ni antes de dictar sentencia o resolución irrecurrible” (idem).

Según el art. 228, las características más destacadas de este incidente son las siguientes:

1. Que haya recaído sentencia o resolución firme. Puede parecer obvio, pero antes de la misma lo que cabe es la vía de los recursos (art. 227.1) o la de poner de manifestó el vicio al tribunal para que este declare la nulidad de la actuación a la que afecte (art. 227.2). Por eso se exige que la nulidad *no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso* (aptdo. 1), bien por imposibilidad de la parte, bien porque el defecto se halle en la propia resolución, *y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario* (apt-

2. *Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que se estimen pertinentes.*

Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el juzgado o tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de 90 a 600 euros.

Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno.

³⁷³ DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, YOLANDA: “IV. El incidente de nulidad de actuaciones” (Capítulo Quinto), *Los recursos en el proceso laboral* (VV.AA.; Coord.: CAVAS MARTÍNEZ, FAUSTINO), Laborum, Murcia, 2010, pág. 228.

³⁷⁴ LO 5/1997, de 04.12, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 05.12.1997).

³⁷⁵ ANDRÉS CIURANA, BALDOMERO: “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 20 de enero de 1998. Una aproximación práctica a la reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, *Revista General de Derecho*, n.º 649-650, octubre-noviembre de 1998, Valencia, pág. 12790.

do. 1), condición que, por el carácter subsidiario y excepcional del incidente, es pacífico que se extienda para poder acudir al amparo del TC a los medios que no son propiamente recursos como la rescisión o revisión³⁷⁶, cuando, claro está, la indefensión se pueda tutelar por esas vías.

2. Requiere petición de parte. Este cauce excepcional no está diseñado para ser incoado de oficio, sino que la declaración de nulidad de actuaciones ha de ser interesado por *quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo* (aptdo. 1).

3. Se ha de fundar *en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución*³⁷⁷ (aptdo. 1) y se ha de *acreditar el vicio o defecto* (aptdo. 2)

4. Está sometido a un doble plazo de caducidad: *El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.*

5. La competencia funcional para su conocimiento se atribuye al *mismo Tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza* (aptdo. 1, párr. 2º).

6. Basta una providencia, *sucintamente motivada* e irrecurrible, para que el Tribunal pueda inadmitir a trámite *cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones* (aptdo. 1, párr. 3º), otra prueba más del carácter notablemente restrictivo de esta figura.

7. De admitirse a trámite, no tendrá efecto suspensivo, salvo que así se acuerde de forma expresa, y se dará traslado a las demás partes por cinco días para alegaciones (aptdo. 2, párr. 2º).

8. Tampoco cabrá recurso contra la resolución (auto 'ex' art. 206.1.2º) que lo resuelva (aptdo. 2, párr. 3º). Si se estimara la nulidad, *se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y seguirá el procedimiento legalmente establecido*. Si no, *se condenará en costas al solicitante y, en caso de que el Tribunal entienda que se promovió con temeridad le impondrá, además, una multa de noventa a seiscientos euros* (aptdo. 2, párr. 2º).

5.2.4.- Alternativas tras el agotamiento de la jurisdicción ordinaria

Agotada la jurisdicción ordinaria, cabe acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, órgano que tiene competencia para conocer de dicho recur-

³⁷⁶ YÉLAMOS BAYARRI, ESTELA: "¿Ha aclarado la LEC 2000 cuáles son las vías excepcionales de que dispone el justiciable para atacar la nulidad de una notificación y en qué casos optar por una u otra?", *Justicia 2007, Revista de derecho procesal*, números 3-4, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 53.

³⁷⁷ **Art. 53.2 CE:** *Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.*

so por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca, según proclama el art. 161.1.b) CE 1978. La ley aludida fue poco después promulgada: la LO 2/1979³⁷⁸ (en adelante, “LOTC”) y de ella extraemos los siguientes requisitos esenciales, todos cumulativos, para poder interponer este recurso ante el *intérprete supremo de la Constitución* (art. 1 LOTC):

A.- Violación de derecho amparable.- Ha de tratarse de *violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional* (art. 44.1 LOTC), es decir, *las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo* (art. 53.2 CE). Entre esos derechos se encuentran, entre otros, el de la tutela judicial efectiva y el de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías consagrados en el art. 24 CE.

B.- Imputación al órgano judicial.- Esas violaciones tienen que tener *su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial* (art. 44.1 LOTC) y sea *imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial* (art. 44.1.b LOTC).

C.- Denuncia formal en el proceso.- La parte afectada ha de haber *denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello* (art. 44.1.c LOTC).

D.- Agotamiento de la vía judicial.- Asimismo, habrá de acreditar haber *agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial* (art. 44.1.a LOTC). La naturaleza subsidiaria del recurso de amparo exige el cumplimiento de este requisito³⁷⁹, que además, se interpreta de en el sentido de que el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones ha de ser también interpuesto y agotado.

G.- Especial transcendencia constitucional.- Como nuevo filtro para la admisión del recurso de amparo y reducir así su ingente número, la LO 6/2007³⁸⁰ introdujo la obligación de justificar en la demanda la *especial transcendencia constitucional* del contenido del recurso (art. 49.1³⁸¹), la cual *se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos*

³⁷⁸ LO 2/1979, de 03.10, del Tribunal Constitucional (BOE de 05.10.1979).

³⁷⁹ Vid. ATC 323/2004.

³⁸⁰ LO 6/2007, de 24.05, de reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (BOE de 25.05.2007).

³⁸¹ **Art. 49.1 LOTC:** *El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial transcendencia constitucional del recurso.*

fundamentales (art. 50.1.b LOTC³⁸²). No hacerlo tiene la consideración para el TC de defecto insubsanable y avoca a su inadmisión ‘a limine’ (por *providencia*, que deberá ser motivada; art. 50.3 LOTC), pero bastando la mayoría de la Sección encargada de decidir sobre la admisión del recurso, art. 50.2 LOTC).

F.- Cumplimiento de los requisitos procesales generales.- Tiempo: Que se interponga en el plazo de *30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial* (art. 44.2 LOTC) por persona legitimada; Legitimación: *Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal* (art. 46.1.b LOTC); Postulación: preceptiva.

Como última alternativa habría que citar la de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano con sede en Estrasburgo (Francia) para velar por el cumplimiento de Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. La indefensión provocada por la vulneración de las normas sobre actos de comunicación puede tener encaje en el Convenio, en concreto en sus artículos 6 (Derecho a un proceso equitativo)³⁸³ y 13 (Derecho a un recurso efectivo)³⁸⁴.

³⁸² **Art. 50.1 LOTC:** *El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:*

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.
b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

³⁸³ **Art. 6.1 CEDH:** “Derecho a un proceso equitativo.” *1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. [...].*

³⁸⁴ **Art. 13 CEDH:** “Derecho a un recurso efectivo.” *Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales.*

II

La comunicación mediante remisión postal

1.- EL SISTEMA DE REMISIÓN POSTAL

1.1.- ANTECEDENTES Y NORMATIVA SECTORIAL

El empleo del correo postal, del telegrama y, desde la Ley 42/2015, del correo electrónico o de cualquier otro medio electrónico, aparece en el art. 152.3 como la segunda de las cuatro *formas* que el mismo relaciona de las que puede hacer uso el órgano judicial para llevar a cabo los actos de comunicación, siendo la primera la realizada a través de procurador ya personado en el proceso, la tercera la practicada mediante entrega personal al destinatario o a determinados terceros receptores y la cuarta la que se efectúa por medios telemáticos al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y otros Letrados de las diferentes Administraciones públicas, aunque, como ya vimos en el capítulo anterior, en realidad todas ellas se reducen a dos: remisión y entrega. En concreto, el art. 152.3.2^a dispone que aquellos actos *se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:*

[...] 2.º Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado³⁸⁵.

³⁸⁵ Cfr. art. 59.1 Ley 30/1992: *Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente* (art. 59.1).

Con carácter previo es preciso aclarar que la citada Ley 42/2015 introduce el correo electrónico, que por sus diferentes características respecto del correo y telegrama postal, aunque no deje de ser también un sistema de remisión, estudiaremos en el capítulo siguiente.

Ese primer precepto que introduce el sistema de remisión en la LEC se caracteriza por su laconismo, pues no dice qué es lo que se comunica (*lo que haya de...*) ni a quién ni cuándo procede aplicarlo, atisbando únicamente un aspecto concreto del cómo, que es el de la necesidad de dejar constancia de la recepción, como luego desarrollará el art. 160 y con las excepciones que estudiaremos en este capítulo. Sin embargo, la destacada abstracción de aquella disposición hay que entenderla por su pretensión meramente introductoria y por su vocación de aplicación general, no solo para las comunicaciones con las *partes aún no personadas o no representadas por Procurador* (art. 155.1), sino también con otras personas que no ostentan la condición de tales, como son testigos, peritos y otros terceros que deban intervenir en el proceso (art. 159), además de con otros órganos jurisdiccionales (art. 175.2), organismos públicos y privados y otras autoridades no judiciales (art. 149.6º), si bien con las matizaciones que expondremos en su momento.

Al regular esta modalidad la ley habla de comunicación *por remisión*, diferenciándola de la comunicación a través de funcionario o procurador ex art. 161, refiriéndose entonces a la comunicación *por medio de entrega*, expresiones que resultan un tanto ambiguas, pues en uno u otro caso la finalidad es entregar un determinado documento de carácter judicial a alguna parte o a determinada persona que, aun no siendo litigante, tiene alguna vinculación con el asunto.

El empleo del correo u otros medios de análogas características se presenta de forma coherente con la previsión general contenida en el art. 271 LOPJ para la práctica de *notificaciones*, las cuales *podrán practicarse por medio del correo, del telégrafo o de cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determine las leyes procesales*³⁸⁶. Advuértase cómo la ley orgánica habla de *notificaciones* como actos de comunicación en sentido amplio, debiendo entenderse que dentro de tal concepto se contem-

Apréciase, no obstante, una sutil diferencia: en el ámbito administrativo solo se exige la “constancia”, como ocurre con la LOPJ (art. 271), mientras que la LEC, a pesar de ello, añade el adjetivo “fehaciente”, lo que la hace única si la comparamos con el resto de leyes procesales. En sede laboral la LJS (Ley 36/2011), que ordena que se emplee el correo certificado con acuse de recibo para las comunicaciones fuera de la oficina judicial, establece una serie de requisitos al respecto, pero entre ellos no se encuentra expresamente, por más que el mismo se entienda implícito, el de la fehaciencia (art. 56). En la jurisdicción penal la obsoleta LECrim (RD de 14.09.1882) no refiere dicho requisito. Y en el ámbito contencioso-administrativo nada prevé la LJCA (Ley 29/1998) sobre los actos de comunicación, por lo que de conformidad con lo dispuesto en su disposición final primera y en el art. 4 de la LEC, será esta la que habrá de aplicarse supletoriamente.

³⁸⁶ Nótese la anécdota, sin mayor trascendencia, de la alusión en 1985 al instrumento (telégrafo), mientras que en 2000 se hace referencia al medio (telegrama).

Como bien apunta CUBILLO LÓPEZ, esas *circunstancias esenciales* “se concretan en la NLEC en la recepción, su fecha y el contenido de lo comunicado” (*La comunicación procesal...*, op. cit., pág. 163); así se contemplan en el art. 160.1.

plan las otras clases de actos de comunicación (cfr. art. 149 LEC).

A falta de procurador, el correo postal sigue siendo el medio de comunicación por excelencia del órgano judicial con las partes y, todavía, el instrumento más esencial con el que se relaciona con otros sujetos, organismos y autoridades, a pesar de encontrarnos ya en plena “era digital” y sin perjuicio de lo que la Ley 42/2015 ha dejado previsto para el próximo 01.01.2016 (vid., infra, capítulo siguiente). Sin embargo, a diferencia de lo que pudiera pensarse, el uso del correo como medio de comunicación procesal es un hecho relativamente moderno y su implantación en el procedimiento civil se ha producido de forma gradual. En la LEC de 1881, y hasta 1978, las “notificaciones” habían de practicarse en todo caso en persona y por funcionario judicial, ya fuere este *el Escribano, Secretario u Oficial de Sala autorizado para ello* (art. 262), cuya intervención se exigía para entenderse con las partes procesales, o un *alguacil*, cuando se tratase de *la citación de los testigos y peritos y demás personas que no sean parte en el juicio* (art. 273). No será hasta la Ley 33/1978, cuando se dé un primer paso y, como alternativa de aquel funcionario, se habilite la posibilidad de citar por correo a esas personas no partes, si bien únicamente *cuando el Juez lo estime conveniente*³⁸⁷.

Aún habrá que esperar unos años más, a la reforma operada por Ley

³⁸⁷ Ley 33/1978, de 18.07, *por la que se da nueva redacción a los artículos 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal* (BOE de 20.07.1978). La norma, carente de Exposición de Motivos, solo contaba con dos artículos. El primero, por el que modificaba el párrafo 3º del art. 273 de la LEC de 1881, dispuso así: *Cuando el Juez lo estime conveniente podrán hacerse estas citaciones por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose a ellos el acuse de recibo. En este supuesto las citaciones se entenderán practicadas en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo.* Podrá advertirse por tanto que la LEC 2000 copia prácticamente aquella redacción en el actual art. 160.1 en lo que a requisitos técnicos se refiere y forma de proceder del Letrado de la Administración de Justicia.

A colación de este momento concreto de la historia procesal española, podemos citar la Consulta de Fiscalía General del Estado n.º 3/1994, de 29.11, *sobre las notificaciones por correo al Ministerio Fiscal*, donde se dice que “[a] partir de 1978 se ha venido introduciendo progresivamente en nuestro ordenamiento procesal la posibilidad de notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo en consonancia con la mayoría de las legislaciones europeas y trasvasando al ámbito procesal la vía postal utilizada tempranamente en el procedimiento administrativo. La Ley 33/1978, de 17 de julio, dio nueva redacción al artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal admitiendo esa fórmula que posteriormente, y en aras siempre de propiciar la deseable agilidad procesal, se extendió al procedimiento laboral (art. 32 del hoy derogado texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio, en virtud de la delegación conferida por el Estatuto de los Trabajadores), y al procedimiento civil (Ley 34/84, de 6 de agosto, que dio nueva redacción al art. 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Finalmente, con carácter generalizado para todo el ámbito procesal, se acogió el sistema por el artículo 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” (Aptdo. IV).

Nótese cómo la Consulta solo se refiere a la LECrim al hablar de la Ley 33/1978, a pesar de que, como acabamos de ver, la misma también abordó la reforma de la LEC. Por ello resulta incorrecto que afirme que la “fórmula” del correo se extendiera “posteriormente” al procedimiento civil por Ley 34/1984; lo que esta última sí que hizo fue establecerlo como sistema ordinario de comunicación “fuera de la sede del Juzgado o Tribunal” (art. 261p1).

34/1984³⁸⁸, para salir de aquel reducido contexto de las citaciones ‘extra partes’ y asistir al cambio sustancial por el que se implanta el correo certificado con acuse de recibo como *forma ordinaria* de comunicación para las *notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal* (art. 261)³⁸⁹. No obstante, se impone la comunicación personal por funcionario judicial en determinadas excepciones y, de nuevo, con la fórmula abierta de poder proceder de tal modo cuando *así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares concurrentes* (art. 261p4)³⁹⁰.

Finalmente³⁹¹, la LEC 1/2000 mantiene los rasgos esenciales de la reforma de 1984, con la destacable salvedad de que reduce aquel margen de discrecionalidad del Juez –que la Ley 13/2009 trasladará al Letrado de la Administración de Justicia– al concreto supuesto de las comunicaciones con quienes no sean partes del art. 159, *cuando las circunstancias del caso lo aconsejen*, reforzando así la pretensión del legislador de establecer un sistema que determine de forma tasada la procedencia de la forma de comunicación que, desde entonces, se llamará *de remisión*.

Desafortunadamente, el legislador del 2000 no aprovechó la oportunidad de ofrecer con la nueva ley procesal una regulación completa de las comunicaciones

³⁸⁸ Ley 34/1984, de 06.08, *de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil* (BOE de 07.08.1984).

³⁸⁹ Art. 261p1 LEC 1881: “Las notificaciones, citaciones y emplazamiento que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal se harán por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo”.

³⁹⁰ Art. 261p4 LEC 1881: “No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquellos otros casos en que lo disponga la Ley, o así lo acuerde el juzgador, por así aconsejarlo las circunstancias particulares que concurren”.

La nueva redacción del art. 261 dada por Ley 34/1984 no hacía distinción de destinatarios de las comunicaciones y se aplicaba a las que se practicaran “fuera del Juzgado o Tribunal”; ello hacía innecesario que permaneciera el art. 273 como precepto dedicado a las citaciones con testigos, peritos y otras personas no partes, pese a lo cual también fue modificado para invertir la preferencia legal a favor del correo como medio ordinario y disponiendo como segunda vía que “cuando el Juez lo estime conveniente podrá acordar que se practiquen por medio de un agente judicial” (art. 273p3).

Sobre el uso en general del correo en el ámbito judicial la **STC 184/1989**, de 06.11 (BOE de 04.12.1989), entendió: “La notificación por correo certificado está expresamente autorizada por los arts. 261 de la L.E.C. y 271 de la L.O.P.J., cuya utilización por el órgano judicial es irreprochable desde el punto de vista constitucional, siempre que se realice con las garantías suficientes para asegurar su efectividad (SSTC 36/1987, 39/1987, 171/1987 y 142/1989, entre otras) [...]”. (F. J. 3).

³⁹¹ Después de la Ley 34/1984 y antes de la Ley 1/2000, la LEC 1881 fue objeto de una última modificación en materia de actos de comunicación judicial de la mano de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, aunque sin afectar a lo concerniente al uso del correo. Con ella se suprimió el requisito de firma por dos testigos en caso de negativa del destinatario a firmar la notificación (art. 263) practicada por el “Escribano, Secretario u oficial de Sala autorizado para ello” (art. 262); por otra parte, también se estableció que las citaciones y emplazamientos se hicieran al Procurador o, cuando la Ley lo autorizara, al Abogado, si las partes estuviesen representadas por los mismos (art. 271p2).

procesales por correo. La LEC omite buena parte de las cuestiones que se suscitan al estudiar, y sobre todo aplicar, esta modalidad, empezando por quién la práctica, cómo ha de proceder y cuáles son sus facultades y obligaciones. Tampoco realiza un reenvío expreso a la legislación sectorial, pero a ella es preciso acudir para poder completar el régimen normativo en juego.

1.1.1.- La liberalización del sector postal

Desde antaño el servicio postal ha sido una de las caras más visibles para el ciudadano de la existencia del Estado, entendido este como aquel ente conformado por una estructura compleja que ofrece a la comunidad una serie de servicios públicos para la prosecución del bien común. En nuestra memoria colectiva estará siempre presente aquel afable cartero que conocía la vida y hacienda de todos los vecinos del pueblo y que, aunque estos cambiaran de domicilio, se preocupaba por hacerles llegar su correspondencia, todo ello en el marco de una relación individualizada y cuasi-familiar. Pero hoy día es muy posible que aquel cartero no provenga ya de la Administración pública, ni el pueblo, convertido en una congestionada ciudad, sea ya tal. El devenir de los tiempos nos ha situado en un escenario de servicios públicos privatizados y de una atención aséptica que se resiste a identificar la palabra “usuario” con la de “persona”.

En efecto, la actividad postal en España se encuentra notablemente influenciada por la normativa emanada de la Unión Europea en el marco del desarrollo del mercado interior, que desde la pasada década de los años 90 ha venido impulsando la progresiva liberalización³⁹² de un sector tradicionalmente monopolizado por los Estados³⁹³, que en el caso de España, comenta MUÑOZ MACHADO, “es una característica moderna que se alcanza a conformar a finales del siglo XVIII y se perfecciona bien entrado el siglo XX”³⁹⁴. La norma principal en la materia, en la actualidad constituida por la Ley 43/2010, de 30.12, *del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal*, nació de la obligación de transponer

³⁹² Sobre la materia, vid., entre otros, GARRIDO PÉREZ, A.: “La liberalización de los servicios postales en España”, *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 2000, Ref. D-269, Tomo 8 (21084/2001), La Ley, Madrid; PULIDO BEGINES, J. L.: “La liberalización del sector postal en España”, *Régimen jurídico del sector postal. Comentario a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal* (Dir. PETIT LAVALL, M. V.), Tirant lo blanch, Valencia, 2012, págs. 24 a 80 (versión digital ref. TOL2.383.727).

³⁹³ En el estudio *Principales desarrollos en el Sector Postal (2004-2006)* (2006), auspiciado por la Comisión Europea y elaborado por la consultora WIK-Consult, se explica que “el monopolio postal se originó en los siglos XVI y XVII como una forma de permitir al monarca supervisar la correspondencia de los ciudadanos, especialmente la correspondencia con los extranjeros. Después de que las oficinas postales ampliaran la entrega a prácticamente todas las direcciones de la nación a finales del siglo XIX y principios del XX, se impuso una nueva justificación para el monopolio postal: que era económicamente necesario para que la administración postal pudiera ofrecer el servicio universal. No obstante, a comienzos del siglo 21, los gobiernos europeos están cada vez más convencidos de que el monopolio postal, o “zona reservada” como se llama ahora, no es necesario para sostener el servicio universal y genera más costes que beneficios para el público” (pág. 55).

³⁹⁴ MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO: *Servicio público y mercado. II: Las telecomunicaciones*, Civitas, enero 1998, Madrid, pág. 13.

antes del 31.12.2010 la Directiva 2008/6/CE, del Parlamento y del Consejo, de 20.02, por la que se modificaba la Directiva 97/67/CE, de 15.12, *relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio*³⁹⁵. La pretensión de Bruselas era que a partir del 1 de enero de 2011 existiese un verdadero mercado postal europeo en régimen de libre concurrencia, aunque en el caso de España todavía no se ha hecho del todo realidad, pues a pesar de que la propia Ley 43/2010 dice tener por objeto *asegurar la libre competencia en el sector* (art. 1.1)³⁹⁶, es ella misma la que todavía otorga a Correos y Telégrafos, la tradicional entidad pública dedicada al servicio postal³⁹⁷, la condición de *operador designado por el Estado*

³⁹⁵ DOUE de 21.01.1998. Esta directiva fue traspuesta al ordenamiento español, a su vez, por la Ley 24/1998, de 13.07, *del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales*, derogada posteriormente por la citada Ley 43/2010. La reforma impulsada por el legislador comunitario resulta ambiciosa y no exenta de problemas, al pretender sustituir por completo un régimen monopolístico y estatal por otro de libre concurrencia entre sujetos privados. La Comisión Nacional de Competencia española (CNC) –hoy, tras la Ley 3/2013, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)– así lo apuntaba en su Informe *El nuevo marco de regulación del sector postal tradicional en España* (2011): “El diseño del marco regulador es especialmente complejo, por dos razones: · La presencia de una empresa pública, Correos, que es el principal operador (95% de cuota de mercado en valor) y ha disfrutado de un monopolio legal en buena parte del mercado, además de ser propietario de la mayor red postal, que cubre todo el territorio nacional. · La necesidad de mantener un servicio postal universal (SPU) que garantice la prestación de servicios postales básicos a precios asequibles en todo el territorio nacional” (pág. 7; disponible ‘online’ en la dirección <http://www.cnmc.es>, sección “Informes y Estudios Sectoriales”, año 2011).

Vid., en el caso concreto de España, la Exposición de Motivos de la Ordenanza Postal de 1960 (Decreto 1113/1960), que hace un conciso pero interesante recorrido histórico (Epígrafe “II. Proceso histórico”).

Al hablar de los servicios postales, DOMÍNGUEZ ESQUIVEL, J. AMADOR, explica que “la necesidad de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a dichos servicios, claves para la cohesión social, en términos de igualdad de trato, universalidad, precio asequible, continuidad y calidad, es lo que ha configurado una parte, aunque esencial, de la actividad postal como servicio público (Servicio Postal Universal), cuya prestación en España está encomendada a Correos y Telégrafos, hoy Sociedad Anónima Estatal” (*Procesos Operativos de Correos. Temario*. Volumen I [Oposiciones Personal Laboral Fijo], Editorial Mad, Sevilla, 2005, pág. 16).

³⁹⁶ Los aptdos. 1 y 2 del art. 1 de la Ley 43/2010 establecen: 1.- *El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios postales con el fin de garantizar la prestación del servicio postal universal, de satisfacer las necesidades de comunicación postal dentro de España y de España con el extranjero, y de asegurar la libre competencia en el sector en condiciones adecuadas de calidad, eficacia, eficiencia y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales y sus trabajadores.*

2.- *Todos los usuarios remitentes o destinatarios de envíos postales tienen derecho a un servicio postal universal de calidad y a precios asequibles, conforme a la normativa europea y nacional de aplicación.*

³⁹⁷ Con la voz “entidad pública” hemos querido englobar las diversas configuraciones jurídicas que ha experimentado la comúnmente conocida como Correos en los últimos 50 años. Hasta 1991 tuvo naturaleza netamente administrativa al estar incorporada plenamente en el organigrama de la Administración General de Estado. En los años 60 el “Servicio de Correos” pertenecía al Ministerio de la Gobernación (art. 158 de la Ordenanza Postal de 1960). Años más tarde, la Ley 31/1990, de 27.12, *de Presupuestos Generales del Estado para 1991*, crearía el Organismo Autónomo “Correos y Telégrafos”, que quedaría adscrito al entonces existente Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones, quedando el personal laboral de la Dirección General y Correos y Telégrafos integrado en dicho organismo (art. 99). Tal condición tendrá hasta la Ley 6/1997, 14.04, *de Organización y Funciona-*

para prestar el servicio postal universal por un período de 15 años a partir de la entrada en vigor de la presente ley (Disp. Adic. Primera)³⁹⁸.

1.1.2.- El Servicio Postal Universal y la presunción de veracidad y fehaciencia

Para la mejor comprensión de la anterior previsión legal hay que tener en cuenta que existen aquí dos grandes ámbitos de actividad:

1. El referido al así denominado servicio postal “universal”³⁹⁹, que comprende el envío de cartas y tarjetas postales hasta dos kilogramos, así como paquetes postales hasta veinte kilogramos (art. 21.1 Ley 43/2010)⁴⁰⁰. Estamos ante el grueso de la actividad y por ello ha estado tradicionalmente considerada como “actividad reservada” a la entidad pública nacional encargada de prestarlo como una obligación de servicio público y, al mismo tiempo, como una atribución exclusiva y excluyente frente a operadores privados.
2. El referido al resto de servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal, como los de publicidad, mensajería comercial o el transporte de paquetes pesados⁴⁰¹.

En este contexto y a los efectos que a este estudio interesan, la Ley 43/2010 atribuye en exclusiva a la actuación del operador postal universal –Correos y Telégrafos S.A. hasta el año 2025– la **presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificación**

miento de la Administración General del Estado, que dispuso que el mismo tuviese la condición de Entidad Pública Empresarial (Disp. Ad. 11ª). Por fin, la Ley 14/2000, de 29.12, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ordenó al Consejo de Ministro la constitución de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima» (art. 58), algo que cumplió en su reunión de 22.06.2001.

³⁹⁸ Como fundamento de tal decisión la Ley argumenta en su Exposición de Motivos que Correos es “la única entidad que está en condiciones de prestar este servicio con la calidad y extensión requeridas” (Aptdo. II).

³⁹⁹ La propia Ley 43/2010 ofrece un concepto de tal servicio: *Se entiende por servicio postal universal el conjunto de servicios postales de calidad determinada en la ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios* (art. 20).

⁴⁰⁰ Art. 21.1 Ley 43/2010: *Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario de: a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte de hasta dos kilogramos de peso. b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso. El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certificado y valor declarado, accesorios de los envíos contemplados en este apartado.*

Para la prestación del servicio postal universal (SPU) se requiere una autorización administrativa “singular” (arts. 42 y ss.).

⁴⁰¹ Para desarrollar esta actividad no es preciso recabar una autorización de la Administración, bastando la presentación de una “declaración responsable” ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), anteriormente Comisión Nacional del Sector Postal, y el abono de determinadas tasas (arts. 40 y 41).

nes de órganos administrativos y judiciales (art. 22.4p1⁴⁰²). Tal presunción ha estado tradicionalmente implícita en la actuación de Correos, prestadora de una actividad considerada como servicio público y realizada por medio de funcionarios específicos, hasta tal punto de hablarse de la “Administración postal”, integrada, como una más, en la Administración General del Estado⁴⁰³. Ello tenía como consecuencia que sus actos participaban de la naturaleza de los actos administrativos y gozaban de la “presunción de legalidad” (STS -C-Advo.- 12.12.1997⁴⁰⁴), habiéndose llegado incluso a considerar a Correos como una “fedataria administrativa”⁴⁰⁵, tanto en la recepción de escritos dirigidos por los ciudadanos a la Administración (art. 38.4.c Ley 30/1992), como en la entrega con efectos de notificación de esta última a los primeros. Por ende, partiendo de esta concepción, el empleado postal estaría realizando como agente notificador un acto administrativo ‘sui generis’ cuya expresión se materializaría en un impreso normalizado como es el acuse de recibo.

No obstante, la obligada privatización del sector impuesta por Europa y la correlativa y progresiva desnaturalización pública de Correos para adoptar forma jurídica mercantil y regirse por el Derecho privado, así como la paulatina sustitu-

⁴⁰² Reproducimos por su importancia el contenido íntegro de la disposición: 4. *La actuación del operador designado [para el servicio postal universal] gozará de la presunción de veracidad y fehacencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

Las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

⁴⁰³ La Ordenanza Postal de 1960 (aprobada por Decreto 1113/1960, de 19.05), vigente hasta el año 2000, establecía que “el Correo es un servicio público inherente a la soberanía del Estado” (art. 1), regido a través de la “Administración postal, como Rama específica de la Administración General del Estado” (art. 3); ambas disposiciones serían reiteradas literalmente en el Reglamento de los Servicios de Correos de 1964 (Decreto 1653/1964, de 14.05), que desarrollaba la ordenanza (arts. 1 y 4).

⁴⁰⁴ Roj: STS 8087/1997; “[...] gozando en principio, los actos de la Administración Postal de la presunción de legalidad” (F. J. 8).

Cfr. art. 57.1 Ley 30/1992: *Los actos de las Administraciones Públicas “se presumirán válidos” y producirán efectos desde la fecha que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.*

⁴⁰⁵ VAQUER CABALLERÍA, MARCOS: “Las entidades de Derecho privado: sociedades mercantiles y fundaciones”, *La Administración Pública española* [Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (Director); María Calvo Charro (Coordinadora)], Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2002, pág. 564. Manifiesta el autor respecto de Correos que “a la sociedad mercantil también se le atribuye, por ejemplo, «el derecho» (sic) a entregar notificaciones de órganos administrativos y judiciales, *con constancia fehaciente* de su recepción», esto es, la prerrogativa de expedir documentos públicos administrativos que, como tales, hacen fe pública administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4.c) LRJPAC, siendo así que, según el artículo 46.4 de la misma Ley, sólo «tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos *por los órganos de las Administraciones públicas*» (ídem).

ción del personal funcionario por personal laboral⁴⁰⁶, influiría ostensiblemente en el valor probatorio de sus manifestaciones⁴⁰⁷. La solución adoptada fue la de transferir por ley determinadas prerrogativas genuinamente administrativas al ente privado que habría de seguir prestando el servicio público postal, concediéndole determinados “derechos especiales”, entre ellos el derecho a que se presuman fehacientes las notificaciones que realice. Así se hizo en la Ley 24/1998, de 13.07, *del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales*, que otorgó al operador al que se encomendaba la prestación del servicio postal universal, designando expresamente para ello a Correos⁴⁰⁸, el derecho “especial” de *entregar notificaciones de órganos administrativos y judiciales, “con constancia fehaciente en su recepción”, sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992 [...] (art. 19.c).*

⁴⁰⁶ La transformación en sociedad mercantil de Correos en 2001 en cumplimiento de la Ley 14/2000 supuso el punto de inflexión en el status jurídico de los empleados de la entidad. Los funcionarios conservarían sus puestos en su condición de empleados públicos de la Administración del Estado y sus derechos adquiridos, pero las nuevas contrataciones serían en régimen de personal laboral. Fue aquella misma ley la que operó el cambio: “los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicación creados en la Ley 75/1978, de 26.12, *de Correos y Telecomunicación*, continuarán adscritos al Ministerio de Fomento, a través de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», con el carácter de Cuerpos y Escalas a extinguir” (art. 58, aptdo. Siete, punto 2). A partir de entonces, es decir, “a partir de la fecha del inicio de la actividad de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», el personal que la sociedad necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de derecho laboral” (art. 58, aptdo. Diecisiete). Vid. RD 370/2004, de 05.03, *por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima* (BOE de 08.03.2004).

Con motivo de su transformación en sociedad mercantil se cuestionó la legalidad de atribuir a una entidad privada funciones administrativas, lo que en **STS (C-Advo.) 17.02.2004** (Roj: STS 1033/2004) fue rechazado con el argumento de que “la atribución de competencias para la recepción de solicitudes y práctica de notificaciones viene determinada también en el indicado precepto legal [el art. 58 de la Ley 14/2000] que el acuerdo reproduce por lo que mal puede éste haber incurrido en ilegalidad, máxime cuando no existe inconveniente en que estos servicios se presten en gestión indirecta por entes privados” (F. J. 2º ‘in fine’).

⁴⁰⁷ La cuestión tiene especial incidencia en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, como pone de manifiesto el Sindic (figura análoga del Defensor del Pueblo en Cataluña) en su *Estudio sobre las notificaciones en el procedimiento sancionador en materia de tráfico* (2012): “En el caso de la notificación no hay una carga añadida de probar lo que se alega como sí que sucede con la prueba del hecho infractor, en que la administración debe destruir la presunción de inocencia del denunciado. Cuando se trata de imputar una infracción, la falta de elementos de prueba suficientes comporta que se tenga por no acreditada la comisión de la infracción y se tenga que finalizar el procedimiento sin sanción. Por contra, en el caso de la notificación, no hay una “presunción de notificación incorrecta” que quepa destruir, pero, en sentido inverso, tampoco parece que deba operar la presunción de validez que para la actuación administrativa establece el artículo 57 de la Ley 30/1992, ya que la notificación no la practica la misma administración sino el operador encargado del servicio universal postal” (pág. 10).

⁴⁰⁸ “Disposición adicional primera. Operador habilitado para la prestación del servicio postal universal. Se atribuye la obligación de prestar el servicio postal universal, en los términos, condiciones y con las prestaciones establecidas en el Título III de esta Ley, a la Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. A estos efectos quedan reservados a dicha entidad los servicios que se establecen en el artículo 18 y se le asignan, asimismo, los derechos especiales y exclusivos que se recogen en el artículo 19”.

Posteriormente, la vigente Ley 43/2010 deroga la regulación de 1998 y, aunque en su espíritu liberalizador despoja al operador del servicio postal universal de la exclusividad en el derecho a practicar notificaciones administrativas y judiciales, sigue reconociéndole la presunción de veracidad y fehaciencia (art. 22.4), nombrando, de nuevo, a Correos (ya sociedad anónima) como el operador del servicio postal universal, esta vez con fecha de caducidad señalada para 15 años después de la entrada en vigor de la ley (Disp. Adic. Primera).

Sea de un modo u otro, la presunción de veracidad ‘*iuris tantum*’ de la actuación de los empleados de Correos, antes porque eran funcionarios públicos integrados en un órgano del Estado y después porque la operadora postal disfrutaba y disfruta ‘*ope legis*’ de aquella prerrogativa, ha sido observado sin reparo por parte de los tribunales, quienes han erigido a los distintos documentos a través de los cuales aquella se ha manifestado (acuses de recibo, avisos de llegada, albaranes de servicio, certificaciones, etc.), en relevantes pruebas escritas de las circunstancias concurrentes al tiempo de efectuar la comunicación.

Esas circunstancias pueden venir referidas a:

- **Al hecho mismo de la entrega:** En los supuestos en que se produce la entrega de la comunicación postal, el documento donde se consigna dicho trámite (tarjeta, acuse de recibo) hace prueba de la recepción, ya al destinatario, ya las personas legalmente autorizadas (**STC 184/1989**, de 06.07)⁴⁰⁹.
- **A la fecha de entrega:** La fecha que conste en el acuse de recibo fija el ‘*dies a quo*’ a efectos del cómputo de plazos procesales, determinando el carácter extemporáneo o no de los recursos (SSTC 9/1992)⁴¹⁰. Aplicando expresamente el art. 22.4 y la Disp. Adic. 1ª de la Ley 43/2010, la **STSJ Cataluña (C-Advo.) (Secc. 3ª) de 22.05.2014**⁴¹¹, acató la actuación de

⁴⁰⁹ Ya citada en este trabajo: “En dicha tarjeta aparece reseñado que el empleado de correos, cuya firma y número de identificación constan, entregó el día 27 de febrero de 1987 el envío destinado a la hoy recurrente [...]. Es evidente, pues, que apareciendo debidamente acreditada la recepción de la certificación por la persona interesada (esto es, la destinataria), los órganos judiciales han observado en este caso la diligencia debida al estimar suficientemente acreditada la realidad de la recepción” (F. J. 3).

Vid., igualmente, **SAP Madrid (Secc. 20ª) 18.06.2001** (JUR\2001\279370): “En cuanto a la notificación correspondiente al ejercicio 1.990 debe considerarse acreditada por el documento nº 5.3, acuse de recibo firmado por el portero de la finca, siendo así que la intervención del funcionario de correos en el acuse de recibo acredita su práctica, y correspondería a la parte actora probar que no había recibido la notificación, lo que en modo alguno ha logrado” (F. J. 1º ‘*in fine*’).

⁴¹⁰ **STC 9/1992**, de 16.01, en la que sin éxito se denunció en amparo la extemporaneidad de un recurso de casación, consideró que, “en cuanto al inicio del plazo, es la fecha del día 12 de noviembre de 1987 la que se constata como de recepción de la notificación en el correspondiente acuse de recibo de la comunicación realizada por correo. [...]. Frente a ello, la afirmación de los actores sobre su recepción el siguiente día 13 de noviembre carece de acreditación alguna” (F. J. 4º). En el mismo sentido, vid. **STS (C-Advo.) 17.02.2004**, F. J. 2º (Roj: STS 1005/2004).

⁴¹¹ Roj: STSJ CAT 5516/2014. Ídem, **SSTSJ Cataluña (C-Advo.) (Secc. 1ª) 13.05.2014**, F. J. 2º (Roj: STSJ CAT 5084/2014); 14.01.2013, F. J. 1º (Roj: STSJ CAT 163/2013).

Correos y consideró que “la fecha de notificación de la resolución que puso fin a la vía administrativa goza de presunción de veracidad” (F. J. 2º).

- **Al hecho de la no entrega:** También hace prueba plena la falta de entrega del correo, el telegrama o el burofax documentada por el operador postal por diversas circunstancias, entre ellas la de no haber atendido el destinatario el “aviso de llegada” (vid. Anexo n.º 6) que el empleado le habrá debido dejar en su domicilio al encontrarse aquel “ausente” al tiempo del “reparto”⁴¹². Transcurrido el plazo de espera correspondiente, aquellas comunicaciones son devueltas por la oficina postal al órgano remitente por “no retirado” y, por tanto, por “caducado en lista” o “sobrante”. Esta circunstancia no es desconocida para los tribunales: el recurrente pretende la declaración de nulidad de actuaciones alegando no haber tenido conocimiento de tal notificación o cual requerimiento remitido por una Administración, organismo, entidad o juzgado determinado, y que no es cierto que se le hubiese dejado en su domicilio aviso alguno de llegada. Pero la presunción a favor de Correos hace recaer en el destinatario-recurrente la “prueba diabólica” de un hecho omisivo como es la ausencia de tales avisos, con lo que, salvo que existan defectos formales de relieve, los pronunciamientos judiciales terminan desestimando las pretensiones⁴¹³.

⁴¹² La **SAP La Rioja (Secc. 1ª) 06.02.2012** (Roj: SAP LO 90/2012) estimó la existencia de mala fe en el demandado que no atendió los avisos de llegada de los requerimientos de pago extrajudiciales que le hizo el demandante (pese a que el art. 395.1p2 exige un requerimiento *fehaciente y justificado de pago*); planteado el juicio, aquel se allanó y no fue condenado en costas, algo que revocaría la Audiencia al entender que “[...] pese a que los dos burofax remitidos conste *“no entregado, dejado aviso”* (f.-9-13), ello no implica una acreditación de la falta de conocimiento sino que por el contrario prueban la voluntad renuente a recoger la documentación que desde Correos les estaba llegando y no puede justificarse en ello una pretendida buena fe que justifique la no imposición de costas cuando con su conducta ha obligado al actor a tener que recurrir a la vía judicial para satisfacer sus legítimas expectativas” (F. J. 1º ‘in fine’).

⁴¹³ Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el ámbito laboral cuando el trabajador, de baja por incapacidad temporal, es requerido por la Mutua correspondiente o por la propia Seguridad Social para acudir a reconocimiento médico a efectos del seguimiento de dicha situación; aquel no acude, la entidad suspende la prestación económica por incomparecencia y se plantea el litigio al argumentar el primero que no recibió citación alguna y alegar la segunda que sí se le envió un burofax, que se le dejó un aviso de llegada y que, hubiera habido o no un segundo intento de entrega, no lo atendió. Para ilustrar la respuesta judicial habitual podemos acudir a la **STSJ Cataluña (Social) (Secc. 1ª) 14.01.2013** (Roj: STSJ CAT 163/2013), antes citada, que dispuso que “a la vista de las alegaciones de la recurrente conviene recordar que el artículo 22.4º de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, de servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, dispone que «La actuación del operador designado gozará de la presunción de veracidad y fehaciencia [...]». En consecuencia, no habiendo acreditado en modo alguno la recurrente la falta de recepción del aviso dejado por el servicio oficial, y en aplicación de tales previsiones, unido a la falta de diligencia de la interesada en atender a tales avisos, debe confirmarse íntegramente la decisión de instancia, previa desestimación del recurso” (F. J. 2º). En el mismo sentido, **STSJ Cataluña (Social) (Secc. 1ª) 20.06.2012** (Roj: STSJ CAT 6938/2012), F. J. 1º ‘in fine’.

1.1.3.- La intervención de operadores privados

La ley postal deja abierta la posibilidad de que las empresas privadas puedan practicar notificaciones por correo, mientras que las leyes procesales, al no pronunciarse sobre quién ha de practicarlas, tampoco lo prohíben expresamente. El problema reside en que si aquellas entidades no son las prestadoras del servicio postal universal no gozarán en su actuación de la presunción de veracidad y fehaciencia que proclama el párrafo 1º del art. 22.4 de la Ley 43/2010. A ellas será de aplicación el párrafo 2º, a cuyo tenor *las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto “de acuerdo con las normas de derecho común” y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre [...]*. Ello se traduce en que las notificaciones no tendrán valor probatorio fehaciente, ni tendrán prevalencia sobre las declaraciones de la persona notificada. La parte procesal a la que beneficie la actuación del operador privado no disfrutará en un hipotético escenario judicial de una posición más ventajosa respecto a la parte a la que perjudique y los documentos de su ramo de prueba emitidos por aquella no tendrán más fuerza probatoria que los documentos y resto de pruebas que pueda proponer la contraparte.

Sobre este asunto la autoridad reguladora del mercado español ha entendido que “no resulta admisible en el nuevo entorno liberalizado mantener la presunción de veracidad y fehaciencia exclusivamente a favor del OPT [operador postal tradicional], Correos. Esta situación debe modificarse y abrir la posibilidad de que otros agentes accedan a la presunción o eliminarla”⁴¹⁴.

En definitiva, una cosa es que a Correos se le presuman fehacientes sus notificaciones y otra que por carecer de tal presunción el resto de operadores no puedan practicar aquellas; lo que sucede es que tendrán que garantizar la acreditación de tal fehaciencia por cualquier medio probatorio admitido en Derecho, cumpliendo así con el aspecto esencial exigido, en nuestro caso particular por el art. 160.1 de la LEC.

⁴¹⁴ Comisión Nacional de la Competencia: *El nuevo marco regulador...*, op. cit., pág. 58. En su informe, la Comisión argumenta que “si bien esta presunción no implica necesariamente la existencia de una reserva de actividad a Correos en relación con esta importante parte del mercado postal tradicional, sí que sitúa en desventaja a otros operadores postales, que se exponen a una mayor probabilidad de reclamación judicial en sus entregas, y no pueden acceder a aquellas licitaciones públicas en las que la presunción de veracidad y fehaciencia forme parte de las condiciones de participación” (pág. 56); y que “una solución a esta situación es eliminar la presunción a favor de Correos, volviendo a situar a todas las empresas en igualdad de condiciones. El peligro de esta opción es que podría conducir a la judicialización de la validez de la notificación. Alternativamente, la presunción de veracidad y fehaciencia en las comunicaciones de notificaciones de órganos administrativos y judiciales podría ser extendida a todos aquellos operadores debidamente autorizados para operar en el ámbito del SPU [Servicio Postal Universal] que obtengan la confianza de las AA.PP en procesos de licitación pública” (pág. 57).

1.1.4.- El Reglamento de prestación de los servicios postales

El Real Decreto 1829/1999, de 03.12, *por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales*⁴¹⁵, es el texto reglamentario de referencia para la actividad postal, si bien es importante destacar que se encuentra afectado por la **nulidad parcial declarada por STS (C-Advo.) 08.06.2004**⁴¹⁶ en todo lo relativo a la admisión y entrega de *notificaciones* que sean de *órganos judiciales*, dejando a salvo las *notificaciones de órganos administrativos* (Secc. 2ª, arts. 39 a 44). El motivo de la nulidad residió en el grave error de que la norma fue promulgada por el Ministerio de Fomento sin el previo informe que de forma preceptiva debía y debe realizar el CGPJ a todos los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente a normas procesales (art. 108.1.e LOPJ), como es el caso⁴¹⁷.

⁴¹⁵ BOE de 31.12.1999. El título completo es *Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales*. La norma fue posteriormente modificada por RD 503/2007, de 20.04, afectando a los arts. 37, 45 y 47 (BOE de 09.05.2007).

La promulgación de la Ley 34/2010 no ha afectado a la vigencia del Reglamento de 1999, sin perjuicio de que conforme a la disposición derogatoria única de la ley hayan quedado derogadas, además de su predecesora (la Ley 24/1998), *cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley*.

⁴¹⁶ Roj: STS 3953/2004.

⁴¹⁷ Para el TS “no hay duda de que se trata de una regulación que entra en el contenido del artículo 108.1.e), como se desprende de la propia Ley Orgánica [...]” (F. J. 2º); y añade: “Así lo puso de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial, que en el Pleno de 9 de febrero de 2000 acordó que su Presidente se dirigiera al Ministro de Fomento haciéndole observar la falta del referido informe, y poniéndole de manifiesto las discrepancias existentes entre la normativa del Real Decreto 1829/1999, y las indicadas normas procesales. En él se indicaba que: «Respecto de la práctica de las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, el artículo 261 es especialmente detallado en lo que respecta a las consecuencias de la no recepción del citado acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal en un plazo de los 15 días siguientes a su remisión. La regulación reglamentaria que es objeto de este informe, por el contrario, contempla la posibilidad de que la notificación permanezca en una “lista de notificaciones”, en dependencias postales, durante el mes siguiente a la no práctica de la notificación antes de ser devuelta al Juzgado o Tribunal.

Otro tanto ocurre respecto de las notificaciones y citaciones por cédula de los artículos 266 y siguientes de la Ley cuya cumplimentación en términos de la nueva regulación reglamentaria no se compagina con lo dispuesto en la Ley al introducir ex novo modalidades distintas de notificación en el caso de dos intentos de entrega y supuesto de único intento de entrega. Y ello sin perjuicio de unificar, de forma inadecuada, al hacerse en sede reglamentaria, el régimen sustantivo de las notificaciones y las citaciones, respecto de las cuales no se guarda prevención diferenciada alguna.

Finalmente, ha de indicarse que los problemas jurídicos y prácticos que se derivan de la entrada en vigor de esta nueva regulación, que trascenderán no sólo a la práctica diaria de esos actos de notificación sino al desarrollo regular de los procedimientos y a la propia organización de los Juzgados y Tribunales, no son sólo propio del Orden jurisdiccional civil sino que se extienden a los demás Órdenes jurisdiccionales en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil es derecho supletorio, caso de los Órdenes jurisdiccionales Penal, Contencioso-Administrativo y Social.

Otro tanto ocurrirá respecto de la aplicación de la Ley 7/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil cuyo sistema de práctica de los actos de comunicación judicial (artículos 149 y siguientes) y

Ello no quiere decir que a nuestros juzgados y tribunales se les haya vetado la posibilidad de comunicarse a través del correo, pero sí que todo aquello que remitan deberá regirse, además de por las respectivas leyes procesales, por las *normas generales* que para la *entrega de los envíos postales* establece el reglamento, especialmente en su art. 32, que permanecen en vigor. Inaplicables, pues, las especialidades que están presentes en la citada Sección 2ª, no se debe utilizar en el exterior de los sobres la expresión “notificación”⁴¹⁸ (art. 40), ni es posible exigir que el empleado postal acuda una segunda vez al domicilio si el destinatario está ausente y no hay tercero autorizado en el mismo (sistema de dos intentos de entrega del art. 42 frente al de uno solo del art. 32.4). Una particularidad sí que ha quedado indemne y que para la materia que estamos estudiando es importante: la del *carácter fehaciente* de las notificaciones realizada por el operador del servicio postal universal que proclama el art. 39⁴¹⁹ y que ya hemos estudiado en el epígrafe anterior. Pese a que este es el precepto que inicia la parte afectada de nulidad en lo que a notificaciones “judiciales” se refiere, cabe entender que tal cualidad persiste, pues nace de la Ley postal y no del reglamento que la desarrolla, además no haber sido objeto de reparo alguno a nivel jurisprudencial ni tampoco doctrinal.

De todos modos la nulidad parcial de los preceptos indicados ha tenido en cierto modo un efecto positivo en cuanto que soluciona la descoordinación e incompatibilidades que ya denunciaba el CPGJ entre el Reglamento y la LEC 1881 y que, aun con una nueva regulación, ya auguraba para la LEC 2000. Entre ellas se encuentra la previsión de dejar la notificación “en lista” a disposición del destinatario “durante el plazo de un mes” una vez que se ha intentado dos veces sin éxito la entrega (art. 42.3 del Reglamento), algo que resulta inconciliable con los plazos previstos en la LEC⁴²⁰ y con la pretensión de la misma de acabar con las dilaciones de los procesos civiles.

muy especialmente su artículo 161 es incompatible con parte de la regulación reglamentaria examinada» (F. J. 2º).

⁴¹⁸ Aunque, de poder emplearse, ya sabemos que habría de ser entendido en su más amplio concepto y sin perjuicio de las clases de actos de comunicación que con arreglo al art. 149 existen en la LEC.

⁴¹⁹ Art. 39 RD 1829/1999: *La entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales realizada por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal tendrá como efecto la constancia fehaciente de su recepción, sin perjuicio de que los demás operadores realicen este tipo de notificaciones en el ámbito no reservado, cuyos efectos se regirán por las normas de derecho privado.*

⁴²⁰ Por ejemplo los señalados para el juicio verbal, cuya vista se ha de celebrar como máximo veinte días después al siguiente a la citación (art. 440.1). Si el Juzgado tenía que prever que la “notificación” (citación en sentido propio) podía llegar a tardar más de un mes en ser devuelta sin saber hasta entonces si se había recibido o no por el destinatario, ¿cómo podía respetar aquel plazo marcado por la ley procesal?

1.2.- REQUISITOS FORMALES

1.2.1.- La constancia de la comunicación

Estudiado el cuerpo normativo sectorial que regula las comunicaciones postales y situados gracias a ello en el contexto adecuado, nos centramos ya en las previsiones específicas que contiene la ley procesal civil respecto de los requisitos formales de los actos de comunicación judicial practicados por el sistema de *remisión por correo, telegrama u otros medios semejantes*. Respecto al mismo, el art. 152.3.2ª LEC habla alternativamente del *correo* –especificándose en el art. 160.1 que ha de ser certificado y con acuse de recibo–, del *telegrama* –ídem– y de *cualquier otro medio electrónico* (antes de la Ley 42/2015 decía “técnico”) para remitir lo que haya de comunicarse, pero teniendo todos ellos como común denominador la exigencia legal de que permitan *dejar en los autos constancia fehaciente* de la comunicación realizada, en particular de las siguientes circunstancias:

a) *De la recepción y de su fecha*

La primera de las exigencias para que el medio de remisión empleado sea legalmente eficaz es la de que proporcione la prueba de la recepción, esto es, *de haberse recibido la notificación*, aunque debería decir “la comunicación”⁴²¹. En ese sentido, el primer apartado del art. 160, en desarrollo del art. 152.3.2ª, emplea el verbo haber en forma reflexiva (haberse), por lo que se aprecia una marcada impersonalidad que parece pretender que el lector entienda que lo importante es que se sepa que la comunicación ha llegado a su destino (físico), más que a quién se ha entregado, a quién o cómo se ha efectuado la entrega, o incluso si el destinatario ha tenido o no conocimiento efectivo de la comunicación.

Para conseguir el cometido de la constancia en autos de aquella comunicación, el art. 160.1 acude a documentos escritos no judiciales y producidos por personas que no son funcionarias ni pertenecen al ámbito judicial, al disponer que el Letrado de la Administración de Justicia *unirá* a los autos:

[a’] *...el acuse de recibo...*

Si nos atenemos a la reglamentación del servicio postal, solo mediante los llamados *servicios de envíos certificados*⁴²² *se facilitan al remitente, en su caso a peti-*

⁴²¹ Decimos “comunicación” y no “notificación”, como erróneamente dice el precepto, por mucho que se pueda interpretar en sentido genérico o impropio, como lo hace el ya citado art. 271 LOPJ.

⁴²² Art. 14.1.b RD 1829/1999: *Son servicios de envíos certificados los que, previo pago de una cantidad predeterminada a tanto alzado, establecen una garantía fija contra los riesgos de pérdida, sustracción o deterioro, y que facilitan al remitente, en su caso a petición de éste, una prueba del depósito del envío postal o de su entrega al destinatario.*

Por contraposición a los anteriores, el comúnmente llamado correo “ordinario” se clasifica por el Reglamento dentro de los “servicios de envíos generales”, que son *aquellos para los que el operador postal correspondiente no otorga más garantías al envío que las ofrecidas con carácter general que, en todo caso, deberán ser, como mínimo, las contempladas en este Reglamento para todos los envíos postales. Tales envíos son confiados al operador, sin que medie recibo justificativo individualizado de cada uno de dichos envíos que permita identificar la dirección postal del remitente y del destinatario o, en su*

ción de éste, una prueba del depósito del envío postal o de su entrega al destinatario (art. 14.1.b RD 1829/1999). Cuando del correo postal se trata, esto se materializa en la tradicional cartulina o impreso de color rosa⁴²³, denominado técnicamente “Aviso de recibo - Certificado” y en la que el “empleado/a” del operador postal “declara que el envío reseñado ha sido debidamente...”, bien “entregado”, bien “rehusado”, y haciendo constar, por un lado, el nombre y apellidos del receptor, ya sea el propio destinatario o persona autorizada, su DNI (entiéndase también el pasaporte, permiso de conducir, tarjeta de residencia o cualquier otro documento de identificación personal), la fecha y la firma de aquel; y por otro, la identificación del empleado que realiza la entrega, quien “da fe del resultado”⁴²⁴, su firma, fecha y hora, y ya se trate de una “entrega domiciliaria” o en “oficina”.

Se dota así de eficacia procesal a la actuación de un “agente externo, que se presenta como una organización revestida de la garantía propia del servicio público” (LÓPEZ MERINO⁴²⁵), otorgándosele capacidad de certificación de la actuación realizada, tanto en lo relativo al acto material de la entrega o recepción, como a su fecha, lo que indudablemente tiene una importante repercusión en tanto que determina el ‘dies a quo’ para el cómputo de los plazos procesales correspondientes (art. 133.1). Aun así, echamos en falta en la LEC un inciso existente en el art. 166p4 LECrim., que deja claro que en el proceso penal *las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo*; tal previsión la insertaríamos literalmente como un nuevo párrafo 2º del art. 160.

De hecho, en dichos impresos se indica que el empleado postal “da fe”, lo cual habrá de ser entendido en sentido impropio y como expresión de la “fehaciencia”⁴²⁶ de que se presume al operador postal universal, habida cuenta de que la fe pública judicial está exclusivamente atribuida a los Letrados de la Administración de Justicia (art. 453.1 LOPJ). Y esta fuerza vinculante de lo declarado por este trabajador viene otorgada por la ya antes estudiada presunción de veracidad y fehaciencia de que goza aquel operador, siempre que este sea el designado para la prestación del servicio postal universal (art. 22.4 de la Ley 43/2010), incluso cuando el empleado no tenga por qué ser ya funcionario público⁴²⁷.

caso, documento comprensivo de varios envíos numerados en el que consten los citados datos (art. 14.1.a).

⁴²³ Rosa en los envíos nacionales, marrón en los internacionales.

⁴²⁴ Si la entrega es “domiciliaria”, se prevén hasta siete “resultados” posibles: “1. Entregado a Domicilio; 2. Dirección Incorrecta; 3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón; 4. Desconocido/a; 5. Fallecido/a; 6. Rehusado; 7. No se hace cargo”. Por el contrario, si la entrega se efectúa en la propia oficina postal, sólo está previsto el resultado de “8. Entregado” o el de “9. No retirado” (modelo “35 PLUS – 1E”).

⁴²⁵ LÓPEZ MERINO, *La notificación...*, op. cit. pág. 143.

⁴²⁶ La definición que la RAE ofrece de la voz “fehaciente” es: “1. Adj. Que hace fe, fidedigno” (DRAE, ed. 23ª, 2014).

⁴²⁷ En su informe del año 2011 la Comisión Nacional de la Competencia considera que “la nueva Ley postal otorga en exclusiva al operador designado para la prestación del SPU la presunción de veracidad y fehaciencia de las notificaciones de órganos administrativos y judiciales por medios

En atención a lo anterior no debería pasar desapercibido que el hecho de que el Letrado de la Administración de Justicia se haya de limitar a *unir* el acuse de recibo en los autos revela que la fe pública judicial no alcanza al hecho mismo de la recepción. Él puede y debe dar fe, como veremos, de qué es lo que se ha remitido, a quién, cuándo y cómo, pero no de que lo remitido haya sido efectivamente recibido ni a quién ha sido entregado. Para ello a la ley le basta el acuse de recibo postal⁴²⁸ cumplimentado entre el empleado de correos, convertido en fedatario 'ad hoc' del trámite realizado al pertenecer a una organización cuya actuación se presume veraz y fehaciente, y el propio receptor; el Letrado de la Administración de Justicia queda en este trámite en particular absolutamente al margen, habida cuenta que su papel se reduce a su mínima expresión al no ir más allá de la simple unión del impreso que atestigua la entrega. No obstante, FURQUET MONASTERIO sostiene que es "necesario que la recepción resulte acreditada a través del acuse de recibo, habiendo de constar en las actuaciones que efectivamente se ha entregado a quien debía recibirla"⁴²⁹. Pero la LEC no exige que se haga constar expresamente este extremo, ni en la práctica se entiende necesario que tenga que dictarse una diligencia de constancia al respecto por el Letrado de la Administración de Justicia⁴³⁰; simplemente, tras aquella unión material ordenada por el art. 160.1, habrá que estar al caso concreto en función del objeto de la comunicación para determinar, a la vista del nombre que aparece en la cartulina, si la comunicación ha sido válida o no. Así, en el caso del emplazamiento al demandado "X" para contestar a la demanda de juicio ordinario, si en el acuse se ha consignado el nombre

físicos y telemáticos, otorgando a Correos ventajas que trascienden incluso el sector postal tradicional. La Ley postal otorga además esa presunción al operador designado, y por lo tanto es aplicable a todos sus funcionarios de reparto, tanto si son funcionarios como si no", añadiendo que "la presunción tiene un origen histórico. En el pasado, todos los empleados de Correos tenían la condición de funcionarios. Hoy no es así, ya que sólo el 43% de sus empleados goza de esta condición, según la Memoria de Correos 2009" (*El nuevo marco de regulación...*, op. cit., pág. 56).

El porcentaje aludido baja al 41%, de un total de 61.819 empleados de la Sociedad Estatal, en la *Memoria del sector postal español 2010* (2012) de la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) (pág. 34). Y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su *Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas* de enero de 2014, recoge el número de empleados que todavía son funcionarios y que por eso figuran en el Registro Central de Personal, fijando el mismo en 19.847 de un total de 47.183 empleados (pág. 28).

Por su parte, el *Informe Anual del Grupo Correos 2013* refleja que en la empresa matriz del grupo – la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A., – "de los 53.264 efectivos medios, el 36% era [en 2013] personal funcionario y el 64% empleados con contrato laboral" (pág. 43).

⁴²⁸ CUBILLO LÓPEZ se muestra favorable a que la ley considere que el acuse de recibo es suficiente acreditación de la recepción: "Se estima que la comunicación así realizada ofrece suficientes garantías para que se entienda hecha con perfección: por un lado, quizá por el carácter funcional [hoy en extinción en favor del personal laboral de Correos] del sujeto que ejecuta materialmente el acto de entrega, y por otro, porque, según el llamado principio de normalidad, si hay un acuse de recibo firmado por la persona a quién iba dirigido el acto, lo habitual será que se haya producido la recepción que se esperaba" (*La comunicación procesal...*, op. cit., pág. 74, nota 81).

⁴²⁹ FURQUET MONASTERIO: *Las comunicaciones procesales*, op. cit. pág. 160.

⁴³⁰ En juzgados muy formalistas (y descargados de trabajo) se dicta diligencia de ordenación por la que se acuerda la unión material al expediente del acuse y quedar a la espera del transcurso del plazo legal.

y documento de identidad de “X”, transcurre el plazo legal de veinte días y el mismo no comparece, el Letrado de la Administración de Justicia podrá declararle en rebeldía, pero si quien figura es “Y” tendrá que esperar a comprobar que “X” haga acto de presencia, pues de lo contrario, lejos de tomar aquella decisión, debería reiterar el emplazamiento en cumplimiento de los arts. 155.4p2 y 158 por no estar acreditado, al menos formalmente, el conocimiento de la comunicación y tener la misma por finalidad la personación en juicio de aquella parte⁴³¹.

[b'] ...o el medio a través del cual quede constancia de la recepción...

Además del acuse de recibo, genuino de las cartas certificadas, existen otros documentos impresos que sirven para acreditar la recepción de la comunicación, dependiendo del instrumento empleado. Así, en el caso del burofax se puede solicitar, con franqueo, que el operador postal facilite al remitente un “aviso de servicio”, comunicación en la que de forma escueta se le informa del resultado del envío⁴³². Si se trata del telegrama también se prevé que se emplee con la modalidad con acuse de recibo. Este inciso que analizamos parece también aplicable al fax, en particular al recibo o “reporte OK” que imprime dicho dispositivo como prueba (mínima) de que el envío ha sido correctamente realizado al número marcado y que ha quedado, al menos, almacenado en la memoria del terminal de destino.

[c'] ...o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido este a la comunicación.

Situación, no muy habitual, prevista para cuando es el procurador de la parte quien solicita diligenciar el envío y recepción del correo.

b) Del contenido de lo remitido

Como puede observarse, el art. 160.1 no solamente exige que estemos ante un medio de comunicación que permita dejar constancia de la recepción, incluida su fecha, sino también *de su contenido*. Y si bien sabemos que el empleo del correo o del telegrama, incluso certificado y con acuse o aviso de recibo, permite por sí mismo dejar constancia de cuándo y de quién ha recibido un determinado envío (previamente individualizado con un código alfanumérico), ninguno de los dos cumple con el tercer aspecto, al no ser *medios* que por sí solos permitan dejar constancia del contenido, esto es, de qué es lo que se ha remitido. El servicio postal puede hacer constar que se ha enviado un determinado sobre, que el mismo se ha remitido a una dirección y a destinatario concretos y que ha sido entregado a

⁴³¹ Con el régimen anterior a la Ley 42/2015 del juicio verbal y su contestación oral en la propia vista, el planteamiento hubiese sido el mismo. Si en el acuse se hubiese consignado el nombre y documento de identidad de “X”, llegado el día señalado el Juez o Magistrado hubiera podido considerar que la convocatoria había sido realizada en legal forma y hubiera podido celebrar el juicio, aún incomparecido aquel; por el contrario, constando “Y” y no “X”, su incomparecencia hubiera debido comportar la suspensión del acto.

⁴³² En caso de resultado positivo, el texto del aviso de servicio tendrá el siguiente tenor: “Ref. [la referencia facilitada por el remitente]. Su burofax [número] [fecha y hora de expedición] con acuse de recibo para [destinatario] [domicilio] entregado debidamente el [fecha] a las [hora] horas a [receptor] con DNI número [número]”.

una persona individualizada, pero no de lo que dicho sobre contiene. Solo con el burofax o el telegrama bajo la modalidad o servicio adicional denominado “copia certificada” se podrá contar con una reproducción exacta y autenticada del contenido remitido, colmando así tal exigencia. Estos últimos instrumentos entrarían en la definición de *otros medios semejantes* al correo, aunque por lo que al burofax se refiere, dado su carácter electrónico, también pudiera estar comprendido entre los medios que previa el art. 162.

Por eso resulta criticable la redacción del art. 160.1, pues no son aquellos medios los que ‘per se’ permiten dejar constancia del contenido de lo comunicado, sino que es el Letrado de la Administración de Justicia⁴³³ quien es el que da fe en los autos del hecho de la remisión *y del contenido de lo remitido*⁴³⁴. El modo de hacerlo será a través de una diligencia por la que aquel hará constar que tal día (entendemos innecesario indicar la hora) se ha remitido por correo certificado y con acuse de recibo a una determinada persona una cédula o copia de resolución concretas, acompañadas, en su caso, de la documentación pertinente (copia de la demanda, documental, anexos, etc.); y aunque esto es lo correcto, el colapso crónico de muchos juzgados hace que muchas veces se deje simplemente unido a los autos una copia de aquella cédula con el sello de “es copia”, quedando a la espera de recibir el acuse de recibo, en el que se habrá dejado escrito alguna pequeña indicación de referencia⁴³⁵, para unirlo a continuación de aquella copia o de la resolución a notificar. El no dar fe de la remisión, empero, puede ser sancionado, en unión de otras circunstancias relevantes, con la nulidad de actuaciones⁴³⁶.

1.2.2.- La excepción del artículo 155.4 LEC

Toda la sistemática que acabamos de estudiar, con su epicentro en la reiterada y obligada constancia fehaciente de la recepción de lo comunicado, queda desvirtuada en un párrafo que no está en el precepto dedicado a regular cómo practicar la remisión de las comunicaciones por correo y análogos, el art. 160, sino en el art.

⁴³³ Así lo apuntó MARES ROGER en “Los actos de comunicación judicial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (perspectivas de práctica forense) (II)”, *Diario La Ley* n.º 5283, 5 de abril de 2001, La Ley, Madrid, pág. 2].

⁴³⁴ **Art. 160.1:** [...] *el Secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador cuando así lo solicite, de haber procedido éste a la comunicación.*

⁴³⁵ Por ejemplo, “Cit. ddo. VRB 1001/13, 10-06”, es decir, citación al demandado en el juicio verbal n.º 1001 del año 2013 para el día diez de junio.

⁴³⁶ No obstante, tal y como señala FURQUET MONASTERIO, “ello no significa que la omisión por parte del secretario de dar fe del contenido del sobre produzca por sí mismo indefensión, si aparece que el acuse de recibo fue firmado por la demandada de donde se deduce que tuvo conocimiento de la demanda. Así se recoge en la STSJ Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social), 11 mayo 1994 (A. 1828)” (*Las comunicaciones procesales*, op. cit. pág. 156, nota al pie 513). Por otro lado, la **SAP Málaga (Secc. 6ª) 10.03.2000** (AC\2000\964) admitió que, a falta de dación de fe del Secretario judicial al respecto, “es cierto que, en algunos casos, valorando en conjunto la prueba pueda llegarse a la certeza del contenido de la notificación a través de otros medios probatorios, incluidas las presunciones” (F. J. 2º).

155, que solo establece cuándo procede tal sistema de remisión (aptdo. 1) y que dedica su contenido principal a otra cuestión como es la del domicilio de los litigantes (aptdos. 2 a 5). Nos referimos al apartado 4 de aquel artículo, donde se inserta la disposición que dice así:

Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158.

Así pues, sin prolegómenos ni avisos, abandonamos el principio de la recepción o conocimiento formal y ahora es suficiente la simple emisión de la comunicación si la misma ha sido remitida a esos domicilios “oficiales” como el padrón municipal que relaciona el art. 155.3. Una disposición tan disonante, aunque para nosotros muy necesaria y no suficientemente explotada en la práctica, merece algunas observaciones:

1.- Para empezar, vista su influencia sobre otros preceptos que inciden en la materia, debería contar con su propia rúbrica, y dado que contradice frontalmente lo dicho por el art. 160, hubiera sido de agradecer que en este se hubiese hecho una llamada a aquel a modo de excepción del tipo “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 155”.

2.- La aplicación sobre el terreno del precepto presenta serios inconvenientes. Uno de ellos concierne al cómputo de los plazos en materia de recursos. Como afirma BERNAL LÓPEZ, “parece un poco arriesgado dar por válida la comunicación de la que sólo tenemos certeza que se *ha enviado*, puesto que la gran mayoría de las resoluciones judiciales son susceptibles de recurso. Ello significa que de no tener constancia de la recepción (mediante el oportuno acuse de recibo) no podremos computar el plazo para la firmeza de la misma y, además, podremos encontrarnos con nulidad de actuaciones por haber devenido firme una resolución sin que [el] receptor hubiera tenido noticia de ella (y no esté acreditado en autos su recibo)”⁴³⁷.

3.- Lo anterior se anuda al hecho de que la disposición no explica cuándo y qué momento se ha de entender correctamente efectuada la remisión, ni cómo se puede acreditar tal corrección. Quizá esté pensando en que la carta ha sido devuelta por “ausente reparto”, por lo que, obviamente, no consta su recepción por el destinatario, pero sí revela que el domicilio utilizado es el correcto. De ser así la comunicación surtiría efectos *en cuanto se acredite* tal extremo, para lo cual habría que esperar a que el sobre postal fuese devuelto a la oficina judicial.

⁴³⁷ BERNAL LÓPEZ: “Actos de comunicación, auxilio judicial,...”, op. cit., pág. 737.

4.- No da solución a la hipótesis de que el correo se devuelve por “dirección incorrecta”, pero la misma consta en autos haber sido hábil en otras comunicaciones judiciales, incluso extrajudiciales, anteriores y con el factor añadido de que se ha remitido a uno de los domicilios del art. 155.3. No sería la primera vez que la correspondencia llega a su destino en una primera ocasión, no porque estén consignados correctamente los datos del destinatario, sino porque el empleado de correos conoce a la persona o porque es más diligente, y luego, en una remisión posterior, sea devuelta por dirección incorrecta por cambio de personal en las áreas de reparto. ¿Qué hacer entonces? ¿Reiterar el trámite por correo? ¿Acordarlo por la vía del art. 161? ¿Aferrarse a que fue correcto en un momento anterior y dar por cumplido el trámite? Entendemos que la respuesta vendrá determinada por el objeto de la comunicación ex art. 158. Precisamente, la “decidida” opción del legislador que inspira esta norma tan peculiar se devalúa en el párrafo 2 del mismo apartado 4, pasando de un planteamiento muy atrevido a otro muy prudente y conservador, puesto que exceptúa su aplicación a las comunicaciones que tengan por objeto la personación en juicio o la intervención personal de las partes, casos en que habrá que acudir al sistema de entrega del art. 161.

Con tan importante restricción, los casos en que se podrá aplicar el art. 155.4 son limitados, pues limitado es también el punto de partida: la de comunicaciones diferentes de las del art. 158 y, además, a *las partes no estuviesen representadas por procurador*, expresión esta última que, a su vez, también plantea dudas. Podría entenderse que no lo están porque no sea preceptivo ex art. 23.2 y 31.2, pero que estén correctamente personadas en las actuaciones. De ser así, trámites como el traslado al demandado del escrito de desistimiento del actor (art. 20.2), el de la tasación de costas (art. 244.1), o el de la notificación a cualquiera de las partes del decreto que pone fin al proceso monitorio (art. 816.2), por citar algunos ejemplos, podrían ser válidamente comunicados y tenerse por efectuados conforme al art. 155.4. Pero también que no estén representadas y, aun siendo preceptiva la intervención de procurador y de abogado, sea menester darles traslado o comunicarles alguna resolución, aunque no esté claro en la ley que, no estando personadas en debida forma, deba acordarse tal trámite. Pensamos, v. gr., en el decreto de fin de la ejecución por la satisfacción del ejecutante del art. 570. A menos que se interprete ciegamente el art. 150.1, no creemos que sea obligatorio acordar su notificación al ejecutado no personado; si aún así se acuerda, debería aplicarse la singularidad de dicho art. 155.4.

1.3.- MODO DE HACER LA ENTREGA

1.3.1.- Lugar de entrega. Remisiones simultáneas

La regulación sobre la comunicación por remisión por correo no presenta especialidades que se refieran al lugar de entrega. La dirección donde dirigir el mismo o el telegrama se rige por las normas generales (arts. 155.2 y ss.), que, recordemos, establecen una serie de domicilios “legales” a efectos de comunicación

procesal, tal y como ya hemos estudiado en la parte general de este trabajo (vid., supra, Capítulo I)⁴³⁸.

No obstante, como novedad respecto a la LEC de 1881, la ley procesal de 2000 dispone en el art. 160.2 que, *a instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del artículo 155*. Con ello parece estar pensando en la hipótesis del demandante que conoce más de un domicilio oficial u oficioso donde poder localizar al demandado, dándole la oportunidad de pedir que solicite en su demanda la citación o el emplazamiento del demandado en todos ellos al mismo tiempo. Sin embargo, en la práctica no es habitual que se invoque este precepto, pues genera más inconvenientes que ventajas. Al actor le crea la carga de tener que aportar (y así se lo habría de exigir el tribunal) tantos juegos de copia de su demanda como lugares señale con los que poder efectuar la remisión simultánea, siendo además a su costa por tratarse de una medida de carácter potestativo⁴³⁹; por otro lado, desde el punto de vista de los plazos procesales, en caso de que el demandado sea localizado en más de un lugar podrá suscitarse la cuestión del ‘dies a quo’ y de qué hacer ante dos o más citaciones o emplazamientos realizados con el mismo objeto, ocasionando con ello cierta inseguridad jurídica, aunque la doctrina coincide en afirmar que en caso de notificación por correo a varios domicilios la comunicación se tendrá por hecha en el primero de ellos en que resulte “fructuosa”⁴⁴⁰. Por todo lo anterior, lo normal es que, de conocerse por el actor más de un domicilio, los señale con carácter subsidiario a efectos de que, fracasada la comunicación en el primero de ellos se intente en los siguientes.

1.3.2.- Receptores posibles

Nada dice la LEC acerca de las personas que pueden recoger las comunicaciones realizadas mediante correo y similares. Solo habla del *destinatario*, pero no

⁴³⁸ Por su parte, el Reglamento postal se limita a decir que *todos los envíos postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal deberán ser entregados en el domicilio que conste en la dirección postal* (art. 33).

⁴³⁹ Por ello no entendemos por qué dice BERNAL LÓPEZ que “no cabe duda de que significará un gran adelanto poder realizar esta *remisión simultánea*, aunque el sistema de costas que se establezca podrá complicarse si el Secretario judicial ha de calcular los costes de cada una de las remisiones simultáneas” (“Actos de comunicación...”, op. cit. pág. 736).

⁴⁴⁰ Comentando este problema, BERNAL LÓPEZ sostiene que “parece que la tendencia doctrinal es unánime en este sentido al decantarse por el criterio de computar el plazo a partir de la primera comunicación, pues de ella ha nacido el conocimiento de la resolución, siendo las siguientes carentes de valor a efectos de cómputo” (“Actos de comunicación, auxilio judicial...”, op. cit. pág. 737); MONTERO AROCA y FLORS MATÍES, que “el día en que se tendrá por hecha la notificación será aquel en que conste la primera de las varias posibles recepciones (*Tratado de Juicio Verbal*, op. cit., pág. 618); y BOLÓS FARIÑAS e IGLESIAS MEJUTO que “el cómputo debe iniciarse desde el primer de ellos” (*Practicum...*, op. cit., pág. III-133, nota al pie n.º 12); estos últimos autores aportan la “interesante” sugerencia de “advertir al destinatario de forma expresa que el plazo comenzará a contar desde la primera notificación” (ídem). Vid., también, BANACLOCHE PALAO, JULIO; DE HOYOS SANCHO, MONTSERRAT; GONZÁLEZ GARCÍA, JESÚS; ROMERO PRADAS, M.ª ISABEL; y SÁNCHEZ BARRIOS, INMACULADA, todos en *Ley de Enjuiciamiento Civil: Respuestas a 100 cuestiones polémicas* (Coord: JIMÉNEZ CONDE, FERNANDO), Sepin, Madrid, 2002, págs. 125-130 (“Cuestión 11: Notificación por correo a varios lugares”).

previene –como sí hace para las comunicaciones mediante entrega (art. 161.3)– la circunstancia perfectamente posible de que el mismo no sea hallado por el empleado del servicio postal al personarse en el domicilio indicado por el órgano judicial. ¿A quién se podrá entregar, pues, la carta o el telegrama? La solución arbitrada en el propio reglamento postal de 1999 para las notificaciones de órganos administrativos (y judiciales) es la de la flexibilidad, ampliando al máximo el espectro posible de receptores, de modo que, además del propio interesado, *podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad* (art. 41.2⁴⁴¹). La norma calca así lo dispuesto en la Ley 30/1992 para las notificaciones administrativas (art. 59.2p2⁴⁴²), a la que expresamente se remite (art. 41.1⁴⁴³). Y lo mismo cabe decir de las notificaciones y requerimientos notariales, donde el art. 202p3 del Reglamento Notarial establece que, *de no hallarse presente el requerido, podrá hacerse cargo de la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su identidad*.

Hemos de recordar, no obstante, que el art. 41.2 del Reglamento postal, al estar dentro de su Sección 2ª (arts. 39 a 44), es (en teoría) aplicable únicamente a las “notificaciones de órganos administrativos” y no a los judiciales dada la nulidad parcial declarada en 2004 por el Tribunal Supremo, lo que obligaría a considerarlo inexistente y a aplicar las normas generales previstas en el art. 32 aplicable a la entrega de los “envíos postales”. Lo extraño es que su aplicación resulta más restrictiva que lo especialmente previsto para las notificaciones, pues no basta cual-

⁴⁴¹ **Art. 41.2 RD 1829/1999:** *Cuando se practique la notificación en el domicilio del interesado y no se halle presente éste en el momento de entregarse dicha notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.*

Para las notificaciones en materia tributaria la previsión es la misma, según establece la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17.12) en su art. 111: “Personas legitimadas para recibir las notificaciones: 1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante. 2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

⁴⁴² **Art. 59.2 Ley 30/1992:** *En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.*

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. E idem art. 42.1 de la Ley 39/2015.

⁴⁴³ **Art. 41.1 RD 1829/1999:** *Los requisitos de la entrega de notificaciones, en cuanto a plazo y forma, deberán adaptarse a las exigencias de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de aquélla sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.*

quier persona que se encuentre en el lugar, sino que, además, han de ser *personas mayores de edad presentes en su domicilio que sean familiares suyos o mantenga con él una relación de dependencia o convivencia* (aptdo. 1p2), pasaje que se asemeja al art. 161.3 de la LEC. Pero en la práctica de la jurisdicción civil el precepto que sí es el que parece no existir es precisamente este y no el art. 41.2, quizá porque el propio Reglamento no aclara cómo ha de acreditarse esa vinculación de aquellas personas con el destinatario –lo que lo que en cierto modo se deduce tácitamente de su mera presencia en su domicilio–, ni tampoco exige al empleado postal, y de hecho no lo hace, que así lo verifique.

Hecha la anterior aclaración, donde la norma es más laxa en cuanto a los receptores posibles es en el proceso laboral, cuya Ley reguladora de Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10.10) dispone que las “comunicaciones fuera de la oficina judicial” *se harán, cualquiera que sea su destinatario, por correo certificado con acuse de recibo* (art. 56.1), el cual *será firmado por el empleado de Correos y el receptor*, y que *en el caso de que éste no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su relación con el destinatario* (art. 56.3).

Ese último inciso convierte al precepto del proceso laboral en el único de nuestras leyes procesales que sí exige expresamente que en las comunicaciones por correo se haga constar la vinculación del tercero receptor con el destinatario⁴⁴⁴. La LEC, que tácitamente se remite en bloque a la regulación postal y cuenta con la garantía del art. 158, nada dice al respecto, lo que no hay que confundir con lo dispuesto para las comunicaciones mediante entrega, ámbito en el que no solo es preceptiva consignar la vinculación de uno con el otro, sino que además ha de ser una de las relaciones específicamente indicadas en el art. 161.3.

Con la normativa descrita la cuestión ha trascendido al Tribunal Constitucional y ha sido planteada de forma recurrente ante él y ante la jurisdicción ordinaria con fundamento en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, alegando haber sufrido indefensión por no haber tenido conocimiento de resoluciones que han sido entregadas a terceras personas distintas del recurrente y de las que se ha negado tener vinculación alguna. Este asunto ha tenido especial incidencia en el ámbito contencioso-administrativo, donde se ha puesto de manifiesto la diferencia entre hacer constar la “identidad” del tercero que recoge la notificación y hacer constar la “condición” de ese tercero. La Ley 30/1992 exige únicamente en su art. 59.2p2 lo primero: si el interesado no se halla presente en el

⁴⁴⁴ La singularidad de la ley procesal laboral también se aprecia en su mayor atención a la hora de regular aspectos concretos de la comunicación por correo certificado con acuse de recibo, disponiendo, también de forma inédita, que en *el exterior del sobre deberán constar las advertencias contenidas en el apartado 3 del artículo 57 dirigidas al receptor para el caso de que no fuera el interesado*. Dicho apartado dice: *Se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepción o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen*.

momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y *haga constar su identidad*.

1.3.3.- Actuaciones en el momento de la entrega

La norma postal ofrece una serie de pautas llegado el momento de la entrega material de la comunicación o envío postal. Los supuestos más destacados se regulan del siguiente modo:

a.- Destinatario presente: Conforme al art. 32.1p3 del Reglamento, *el destinatario o la persona autorizada que se haga cargo del envío postal tendrá que identificar su personalidad, ante el empleado del operador postal que efectúe la entrega, mediante la exhibición del documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción o tarjeta de residencia, salvo notorio conocimiento del mismo*⁴⁴⁵.

b.- Destinatario ausente: Se podrá entregar el envío en el domicilio del interesado a persona autorizada, entendiéndose autorizadas, *de no constar expresa prohibición, las personas mayores de edad presentes en su domicilio que sean familiares suyos o mantenga con él una relación de dependencia o convivencia* (art. 32.1p2). En caso de que no encontrar a nadie en el domicilio, o los terceros presentes no estar legalmente autorizados, el empleado postal deberá dejar en el casillero correspondiente un “aviso de llegada”⁴⁴⁶ del “envío” al destinatario, siendo destacable aquí que el mismo no podrá tener la consideración de “notificación” judicial [STS (C-Advo.) 08.06.2004 (Secc. 3ª)], sino que estaremos ante una comu-

⁴⁴⁵ La redacción es prácticamente la misma que la que presentaba su predecesor art. 247.2 del Reglamento de los Servicios de Correos de 1964 (RD 1653/1964, de 14.05), derogado por aquel, resultando reprobable, entonces y ahora, la actuación de aquel empleado postal que se limite a pedir al receptor que consigne su nombre, su documento de identidad y la fecha de entrega, todo ello sin exigirle la exhibición de documento acreditativo alguno.

Similar es también el texto del art. 41.3 del Reglamento vigente, específicamente pensado para las notificaciones administrativas [y judiciales]: *Deberá constar la fecha, identidad, número del documento nacional de identidad o del documento que lo sustituya y firma del interesado o persona que pueda hacerse cargo de la notificación en los términos previstos en el párrafo anterior, en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, aviso de recibo que acompañe dicha notificación, aviso en el que el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación*.

Algún autor ya había comentado la oportunidad de acoger en la LEC este sistema de advertencias y obligaciones presente en la jurisdicción social (BERNAL LÓPEZ: “Actos de comunicación, auxilio judicial...”, op. cit. pág. 736).

⁴⁴⁶ La omisión del aviso de llegada postal ha motivado la declaración de nulidad de lo actuado, como ocurrió en la **STSJ Castilla-La Mancha (C-Advo.) (Secc. 2ª) 15.07.2013** (Roj: STSJ CLM 2189/2013): “En el caso de autos no se han observado estas formalidades según vemos en la fotocopia del acuse de recibo obrante en el expediente, pues si se han realizado dos intentos de notificación los días 4 y 8 de marzo de 2004, con constancia de hora, no aparece incorporado al expediente certificación en la que se acredite el cumplimiento de dichos requisitos en particular los referentes al aviso de recibo, con lo que se desconoce si el destinatario tuvo posibilidad real de conocer que se le habían dirigido dos certificaciones y que las mismas estaban a su disposición en la oficina de correos” (F. J. 2º). Ello también resulta aplicable a las comunicaciones mediante entrega del art. 161, en las que, pese a no existir disposición legal al efecto, se ha exigido que el funcionario (o procurador, en su caso) deje algún tipo de aviso o nota de recogida al destinatario ausente [**SAP Valencia (Secc. 6ª) 18.01.2013**, F. J. 2º (Roj: SAP V 396/2013)].

nicación procesal que será considerada como “carta”, la cual, a su vez, podrá ser “ordinaria” o con el valor añadido de “certificado”. La tipología del producto de que se trate determina el plazo quedará la oficina postal a disposición del interesado antes de ser devuelto al remitente, siendo en el caso de las “cartas” el de 15 días naturales⁴⁴⁷.

Si el aviso de llegada no es finalmente atendido por el destinatario, el sobre original conteniendo el objeto de la comunicación, junto, en su caso, al acuse de recibo, serán devueltos como “no retirado” o “caducado” al órgano judicial, que deberá unirlos a las actuaciones. Sobre este particular hay que tener en cuenta que la redacción del art. 160.1 LEC parece dar entender que la unión del acuse de recibo a los autos solo procederá cuando la comunicación haya sido positiva, siendo el mismo el medio a través del cual quede constancia de la recepción (de ahí la expresión *en su caso*). Sin embargo, aunque nada diga el precepto, también será necesaria la unión de todo lo enviado cuando haya sido devuelto por las anteriores circunstancias, porque todo ello habrá de constar en autos para poder determinar la consecuencia procesal que corresponda⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Vid. Modelo “M-4” de Correos. Conforme al art. 33.4 del Reglamento postal, *los plazos de permanencia en dicha oficina se determinarán por el operador al que se haya encomendado la prestación del servicio postal universal*.

El plazo parece una reminiscencia del art. 261p2 de la LEC 1881, que establecía que “de no recibirse el acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal dentro de los quince días siguientes a su remisión, o haber resultado negativa la comunicación, se practicará de nuevo en la forma ordinaria [...]”. La LEC 2000 prescinde de ese párrafo y con él de dicho plazo de espera, pero sin ofrecer a cambio una solución al supuesto de no recibirse aquel acuse de recibo. El doble de tiempo (30 días) pueden permanecer en la oficina postal el telegrama y el burofax, lo que resulta un contrasentido si se piensa que en la práctica judicial solo se suelen emplear para comunicaciones urgentes. Por otro lado, los 15 días señalados contrastan con los 7 de las notificaciones administrativas, aunque dicha brevedad puede justificarse en que ese aviso de llegada solo se puede dejar *una vez realizados los dos intentos sin éxito*, debiendo además depositarse *en lista* la notificación durante el plazo de un mes (art. 42.3 del Reglamento).

⁴⁴⁸ Frente a la simple unión que comentamos, la regulación del procedimiento administrativo es más completa y garantista, donde la misma situación es prevista por el art. 59.2p2 de la Ley 30/1992 como sigue: “[...] Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, *se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación*, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes”.

La **STS (C-Advo.) 12.12.1997** (Roj: STS 8087/1997), en un caso en el que la Administración acudió a la comunicación edictal pese a que se había omitido el preceptivo aviso de llegada al contribuyente después de haberse intentado en dos ocasiones la entrega, interpreta de forma muy rigurosa aquel precepto y glosa cómo ha de quedar reflejada en el expediente administrativo la ausencia del destinatario: “Caducado el plazo para la entrega (artículos 279 a 283 del Reglamento del Servicio de Correos de 14 mayo 1964), sin que el destinatario o persona autorizada por él haya pasado a recoger la carta certificada, y devuelta ésta, la Administración Tributaria de que se trate debe pedir e incorporar al expediente administrativo certificado del Servicio de Correos del Distrito Postal competente, en el que se certifique: 1.º) La identidad de la carta certificada, con aviso de recibo, que se ha devuelto. 2.º) Identidad y dirección del destinatario. 3.º) Días y hora en que se intentó, sin resultado, la entrega en dos repartos consecutivos, indicando las causas concretas que han impedido la entrega. 4.º) Día y hora en que se entregó el Aviso de Llegada. 5.º) Noticia, en su caso, de que el destinatario o persona autorizada por él no se ha personado en la Oficina postal a recoger la carta. 6.º) Noticia de que ha transcurrido el plazo de recogida, por lo que ha caducado la obligación de entregar

c.- Entrega a porteros, encargados o gerentes: Si se trata de envíos postales ordinarios, *podrán entregarse a los porteros, encargados o gerentes de los respectivos complejos o de los edificios, siempre que no medie oposición expresa de los destinatarios de los mismos*; si estamos ante envíos postales certificados, *deberá mediar autorización expresa de los destinatarios para que puedan ser entregados por el empleado del operador postal a las personas anteriormente mencionadas* (art. 38p6).

d.- Rehúse del envío: *El destinatario o la persona autorizada podrá rehusar el envío postal en el momento de la entrega en los siguientes supuestos: a) Antes de abrirlo si se trata de carta o paquete postal. b) Antes de leerlo o examinarlo interiormente si se trata de otra clase de envíos. Se exceptúan los envíos contra reembolso, cuando el remitente lo autorice de forma expresa en la cubierta del mismo* (art. 32.1p4)

Las consecuencias procesales del rechazo del envío postal, una vez que este ha sido devuelto a la oficina judicial, dependerá de la finalidad de la comunicación:

a') Si es para la personación en juicio o para la realización o intervención personal de las partes, habrá que aplicar el mismo régimen previsto en el art. 158 para el supuesto de no constancia de la recepción y acudir a la comunicación mediante entrega. Ciertamente constará en el acuse de recibo que el destinatario ha rehusado el envío, pero no por ello podrá aplicársele por analogía lo dispuesto en el art. 161.2 y entenderse producida la comunicación, pues el empleado del operador postal no le habrá hecho saber que la copia de la resolución o de la cédula quedará a su disposición en la Oficina judicial con el efecto procesal indicado, que para la ley supone una garantía y al mismo tiempo la justificación para tener por cumplido el trámite siempre que se haya realizado por el sistema de entrega.

b') Si se trata de cualesquiera otros trámites (v. gr., traslado de una tasación de costas), la solución la encontraremos en el art. 155.4 y bastará la correcta remisión para que la comunicación surta plenos efectos.

e.- Entrega en oficina: Según el art. 36p2, *se entregará en oficina todo envío que, por ausencia u otra causa justificada, no haya podido entregarse al destinatario o a la persona autorizada en su domicilio, comunicando su existencia mediante aviso de llegada depositado en el casillero domiciliario, sin perjuicio de lo establecido en la sección 2.ª del presente capítulo. Y conforme al art. 32.4, los plazos de permanencia en dicha oficina se determinarán por el operador al que se ha encomendado la pres-*

la carta y se devuelve ésta al remitente. Esta es la manera de que bajo firma del funcionario competente, y con los requisitos formales de rigor, se certifiquen y prueben los hechos reseñados" (F. J. 7º). Es de notar que el alto Tribunal alude al Reglamento de Correos de 1964, al estar vigente al tiempo en que se originaron los hechos, contemplando aquella normativa el sistema del doble intento y posterior aviso de llegada, igual que el posterior y vigente Reglamento de 1999, por lo que la profusión de detalles que exige el Alto Tribunal sigue aplicables en la actualidad.

tación del servicio postal universal. Importante reseñar aquí es que estas previsiones con un solo intento de entrega son las que se deben aplicar en la práctica para las comunicaciones judiciales por correo, y no las del sistema de notificaciones con dos intentos que regula el art. 42⁴⁴⁹ y que, una vez más, hemos de advertir están excluidas en el ámbito judicial.

1.3.4.- Confusión jurisprudencial entre la comunicación postal domiciliaria y la comunicación mediante entrega personal

Del estudio de la jurisprudencia menor observamos cierta confusión entre la comunicación del art. 155/160 (correo) y la del art. 158/161 (mediante entrega personal o domiciliaria), a lo que contribuye, sin duda, la imprecisa redacción del art. 161.3. Si el mandato de este precepto no se sitúa en el contexto general de los actos de comunicación y no se advierte la distinción legal entre comunicación por *remisión* y comunicación mediante *entrega* ya aludidos, se podrá caer muy fácilmente en el error de entender que cualquier comunicación domiciliaria, aunque se realice por correo, requiere extrapolar las formalidades del art. 161 al art. 155, de forma que habrán de cumplirse los requisitos establecidos en cuanto al domicilio, los terceros y la advertencia de la obligación de su entrega al destinatario. Y

⁴⁴⁹ **Art. 42 RD 1829/1999:** “Supuestos de notificaciones con dos intentos de entrega”. 1.- *Si intentada la notificación en el domicilio del interesado, nadie pudiera hacerse cargo de la misma, se hará constar este extremo en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.*

2.- *Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo intento.*

3.- *Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso tendrá carácter ordinario.*

4.- *Si estando en el domicilio la persona que pueda recibir la notificación, se niega a aceptarla y a manifestar por escrito dicha circunstancia con su firma, identificación y fecha en la documentación del empleado del operador postal, se entenderá que no quiere hacerse cargo de la misma, haciéndose constar este extremo en la expresada documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.*

5.- *Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo intento. A partir de este momento, dicha notificación tendrá el mismo tratamiento que las que hubieren sido rehusadas o rechazadas. 6.- En todos los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación en el aviso de recibo que, en su caso, acompañe a la notificación y en el aviso de llegada si el mismo procede.*

esto conducirá, a su vez, a un segundo error, el de exigir que en el acuse de recibo postal se indique la relación del receptor con el destinatario, un dato que ya hemos vistos que, a diferencia del ámbito laboral, no se prevé consignar en la jurisdicción civil.

De la errónea exigencia de que los terceros receptores de una comunicación judicial por correo solo pueden ser los designados por el art. 161.3 es ejemplo la **SAP La Coruña (Secc. 5ª) 28.02.2012**⁴⁵⁰, que conoció del caso en que, citado el demandado por carta certificada, observó que “en el documento de entrega figura el nombre de una persona que nada tiene que ver con el demandado ni con su familia, y que no se encuentra inmersa dentro del grupo de personas a que se refiere el art. 161.3 de la LEC” (F. J. 1).

Y de la inexistente obligación de hacer constar la relación del receptor con el destinatario no parece que se estuviese al tanto en la **SAP Pontevedra (Secc. 1ª) 28.02.2013**⁴⁵¹, que adujo tajantemente que “el acto de comunicación con las partes aún no personadas debe realizarse mediante entrega, por remisión *al domicilio* de los litigantes, debiendo acreditarse que el destinatario ha recibido la comunicación, dejando constancia al documentar la entrega del nombre de la persona a quien se haga, o de la persona que la pueda recoger en su nombre, haciendo constar, además de su nombre, la relación de dicha persona con el destinatario” (F.J. 2º); en la **SAP Valencia (Secc. 9ª) 08.05.2013**⁴⁵², en la que el emplazamiento del demandado se efectuó por correo certificado con acuse de recibo a persona distinta de aquel, entendiendo la Sala que “tan esencial acto de comunicación” no se efectuó “con el rigor fijado en la Ley Procesal” por cuanto “no consta diligencia de entrega de documentación al receptor tal como exige el artículo 161.1”, “la persona que es receptora por el servicio de correos no se dispone su relación con el destinatario, que debe necesariamente constar en la diligencia de entrega”, y “porque no consta tampoco advertencia alguna al receptor en los términos establecidos en el artículo 161.3” (F.J. 2º); o en la **SAP Ávila (Secc. 1ª) 19.02.2009**, donde se consideró que, “en cuanto al emplazamiento realizado en la persona de doña Guillerma, se debió consignar en la tarjeta de correos la relación de dicha persona con el destinatario (Impermeabilizaciones Ávila, S.L) tal y como previene el art. 161-3 párrafo último de la LEC” (F. D. 2º)⁴⁵³.

Aun podríamos citar un tercer grupo de resoluciones que es posible identificar y que se caracteriza por no haber comprendido la mecánica de la LEC en cuanto al régimen subsidiario de la comunicación mediante entrega respecto de la comunicación por correo, exigiendo directamente la aplicación de primer sistema (por cierto, algo que propondremos ‘de lege ferenda’ más tarde). Así, para el **AAP Bar-**

⁴⁵⁰ Roj: SAP C 768/2012.

⁴⁵¹ Roj: SAP PO 547/2013.

⁴⁵² Roj: SAP V 2323/2013.

⁴⁵³ Roj: SAP AV 5/2009.

celona (Secc. 1ª) 18.07.2008⁴⁵⁴, “cuando se trate de una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de la parte en determinadas actuaciones, es preciso que, de conformidad con lo señalado en el artículo 161-3 citado, se efectúe la entrega a empleado o familiar que se encuentre en el lugar, o al conserje de la finca [...]” (F. J. 2º). Incluso dentro de este mismo grupo cabe citar otras resoluciones que incurren en un auténtico ‘totum revolutum’, mezclando y confundiendo ambos sistemas de comunicación, como ocurrió en la **SAP Madrid (Secc. 18ª) 26.04.2010**⁴⁵⁵: “el auto de admisión a trámite de la demanda y el consiguiente emplazamiento del demandado son actos de comunicación (artículo 149.1º y 2º LEC), que han de llevarse a cabo mediante “Entrega al destinatario de [...]”, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 152.3ª LEC, entrega que se efectuará en el domicilio del demandado, según lo dispuesto en el artículo 155.1 del mismo texto legal” (F. D. 1º); en la **SAP Palma de Mallorca (Secc. 4ª) 15.06.2010**⁴⁵⁶, según la cual “cuando las partes no actúen representadas por Procurador, o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, las notificaciones han de ser de forma personal y conforme al artículo 155, en relación al 158 y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es más, se hará constar el nombre de la persona que recibe la notificación y la relación de dicha persona con el destinatario” (F. D. 1º); o en la **SAP Barcelona (Secc. 4ª) 15.03.2013**⁴⁵⁷, que dio por bueno, sin más, el emplazamiento por correo firmado por la madre de la interesada, “sin que se haya probado que ésta no se la hubiere entregado” (F. D. 2º).

Pese a lo declarado por algunas Audiencias⁴⁵⁸, entendemos que la aplicación del art. 161.3 conectado al art. 155.1 no solamente es equivocada, sino también

⁴⁵⁴ Roj: AAP B 4349/2008. En dicha sentencia, la Audiencia Barcelona abunda en el mismo error al continuar argumentando que “la diligencia se practicó por medio de carta certificada con acuse de recibo y no por agente judicial que pudiera hacer los apercibimiento reseñados y además, el receptor de la carta y persona que suscribió el acuse de recibo, no declara ser familiar o empleado ni se ha acreditado que lo fuera realmente” (F. J. 2). En realidad, la Sala no iba mal encaminada en cuanto al fondo del asunto –sí, desde luego, en la argumentación jurídica–, por cuanto, tratándose de un requerimiento de pago en proceso monitorio debió haberse efectuado de primera hora mediante el sistema de entrega.

Vid., además, **SAP Burgos (Secc. 3ª) 20.04.2012** (Roj: SAP BU 436/2012): “El artículo 155.2. de la LEC dispone que [...]. Y el artículo 161.3º dispone que: “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere [...]” (F. J. 2º).

⁴⁵⁵ Roj: SAP M 5457/2010.

⁴⁵⁶ Roj: SAP IB 1457/2010.

⁴⁵⁷ Roj: SAP B 4451/2013: “[E]n este caso hay constancia de que se entregó en el domicilio de la demandada el correo certificado con el emplazamiento y copias de la demanda, habría que entender que está bien hecha, al ser recibido por su madre, sin que se haya probado que ésta no se la hubiere entregado. En realidad el 158 no dice que la entrega de correos deba ser personal, por lo que yendo a su domicilio y siendo recibida por su madre, habría que entender que es correcta, en el sobre de correos se supone que va toda la documentación, o por lo menos de eso da fe el secretario” (F. J. 2º).

⁴⁵⁸ También es posible encontrar un buen número de sentencias que sí interpretan y aplican correctamente, a nuestro entender, la ley, corrigiendo la inaplicación por el juzgado de instancia del art. 158, al que preceptivamente remite el art. 155.4p2, cuando, tratándose de personación o intervención personal, no consta la recepción por el destinatario y por ello debe acordarse de oficio la

innecesaria. Equivocada porque si en la tarjeta o acuse de recibo de correos se hace constar el nombre de otra persona, aunque se indique su relación con el destinatario no por ello quedará acreditada su recepción por este ni se podrá decir que ese tercero fue o debió ser advertido de su obligación de hacer llegar a manos de aquel el sobre entregado. El empleado del servicio postal no está obligado a consignar la relación que une al receptor con el destinatario ni puede cumplir una función, la de advertir al primero de la obligación que contrae para con el segundo, que solo está atribuida al funcionario judicial o, en su caso, al procurador, y en los casos en que se acuda a la comunicación por medio de entrega (art. 161.1p2). Y decimos también que innecesaria porque al órgano judicial debería bastarle para aplicar sin más el art. 158 y, por ende, reiterar el trámite vía art. 161 tan pronto como advierta que el acuse de recibo no viene firmado por el destinatario.

2.- CASOS EN QUE PROCEDE

2.1.- PREVISIONES LEGALES

El art. 160.1, que lleva por rúbrica “remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes”, comienza diciendo *cuando proceda la remisión por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante...*, pero no especifica en qué supuestos tiene ello lugar, por lo que solo un escrutinio general de la LEC no dará la respuesta y nos permitirá concluir que esa remisión procederá en los siguientes casos:

A.- Comunicaciones judiciales en general a las partes cuando no actúen representadas por Procurador, incluidas el primer emplazamiento y la citación a la parte demandada (art. 155.1). A tenor de la LEC, y excepción hecha de los casos en que las partes estén ya personadas en el proceso con procurador (arts. 152.3.1ª y 153), el modo inicial o *forma* ordinaria que ha de tener el órgano judicial para darles a conocer sus decisiones es la de la *remisión*, según ordena el art. 155.1, que desde la Ley 42/2015 habría que entender en sentido general, incluida la remisión telemática. Respecto al correo postal o telegrama (art. 152.3.2ª), se trata de la primera opción que contempla el legislador para comunicarse con las partes y así aparece explicitado en la Exposición de Motivos de la LEC 1/2000:

Cuando no es preceptiva la representación por Procurador o éste aún no se ha personado, la comunicación se intenta en primer lugar mediante correo certificado con acuse de recibo al lugar designado como domicilio o, si el tribunal lo considera más conveniente para el éxito de la comunicación, a varios lugares. Sólo si este medio fracasa se intenta la comunicación mediante entrega por el tribunal de lo que haya de

comunicación mediante entrega. Vid., entre otras, **SAP Guadalajara (Secc. 1ª) 19.03.2013** (Roj: SAP GU 137/2013); **SAP Madrid (Secc. 21ª) 26.02.2013** (Roj: SAP M 3890/2013, F. J. 3ª); **SAP La Coruña (Secc. 5) 28.02.2012** (Roj: SAP C 768/2012, F. J. 1ª); **SAP S. C. de Tenerife (Secc. 1ª) 09.06.2008** (Roj: SAP TF 1477/2008, F. J. 2ª); **AAP S. C. de Tenerife (Secc. 4ª) 16.01.2008** (Roj: AAP TF 19/2008, F. J. 2ª) e ídem **05.12.2007** (Roj: AAP TF 5193/2007, F. J. 2ª).

comunicarse, bien al destinatario, bien a otras personas expresamente previstas, si no se hallase al destinatario (Aptdo. IX, párr. 8º).

Efectivamente, dispone el art. 155.1 que *cuando las partes no actúen representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes*. Salvo que se trate, precisamente, del primer emplazamiento o citación, bastará acreditar la correcta remisión de la comunicación para que surta plenos efectos, *aunque no conste su recepción por el destinatario*, si bien se exigirá como requisito que la comunicación se hubiera efectuado en alguno de los domicilios señalados en el art. 155.3.

En cuanto al modo de practicar esa remisión postal, no habrá que olvidar que el art. 152.3.2º ya ha dejado dispuesto que la misma se efectuará *mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia fehaciente de la recepción*, aspecto sobre el que insiste el art. 160.1, si bien precisando el doble requisito adicional de que tendrá que ser correo o telegrama *certificado* y, además, *con acuse de recibo*.

Quedan exceptuados de lo anterior aquellos supuestos en que es preceptivo acudir directamente a la comunicación mediante entrega del art. 161, bien porque la LEC así lo disponga expresamente, bien porque ello se deduzca de la naturaleza o circunstancias de la comunicación, como veremos en el capítulo IV.

B.- Comunicaciones a terceros intervinientes en el proceso (art. 159). Establece el art. 159.1 que *las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 160*, es decir, por correo, telegrama u otros medios semejantes, aunque con la facultad discrecional del Letrado de la Administración de Justicia de poder acordar la comunicación mediante entrega y sin perjuicio de que también puedan ser diligenciadas por procurador.

Si entendemos “intervinientes” en sentido impropio, el uso del correo y similares será también el medio ordinario de remitir las comunicaciones que, en su caso, habrá que efectuar a los terceros titulares de cargas o derechos, tanto anteriores y preferentes (art. 657) como posteriores (art. 659), a aquel en que se funde el proceso de ejecución ordinaria, por cuanto establece el art. 660.1p1 que *aquellas se practicarán en el domicilio que conste en el Registro, por correo o telégrafo con acuse de recibo, o por otro medio fehaciente*, si bien con la singularidad de que estos trámites no se realizan por el propio Juzgado, sino por el Procurador (art. 657.1, párr. 2º) y por el Registrador de la Propiedad (art. 659.1), respectivamente,

así como que desde la Ley 42/2015⁴⁵⁹ puede también remitirse a una dirección electrónica señalada por aquellos titulares.

Por último en este apartado, si el Tribunal entiende que existen personas *que puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al proceso*, se les *notificará la pendencia* del mismo (art. 150.2), lo que, a falta de disposición al efecto, se hace normalmente por correo certificado con acuse de recibo.

C.- Emplazamientos para comparecer en la sede del tribunal para “ser notificado o requerido” (art. 160.3). A tenor de este “peculiar sistema de comunicación con las partes”⁴⁶⁰ de “remisión para la entrega”⁴⁶¹, *cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido judicial donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado 1 cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado, requerido o de dársele traslado de algún escrito*⁴⁶².

La LEC mantiene este anacronismo, que además consagra como derecho positivo para dotarla de eficacia procesal, fruto de “una práctica forense que se había fraguado al margen de legalidad”⁴⁶³. La doctrina la considera como fórmula de comunicación “híbrida”, por cuanto comporta el empleo de ambos sistemas, de remisión y de entrega, el primero para llamar al interesado al Juzgado y el segundo para hacerle la comunicación ex art. 161.1.

En teoría esta alternativa solo cabe cuando *no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones*, y por eso se le otorga el efecto de tener por hecha la comunicación si el emplazado no comparece sin causa justificada, pero ello no ha impedido que en el foro se haya empleado también para aquellas finalidades, sin perjuicio de que luego, si la persona no ha acudido, no se le haya dado aquella eficacia y se haya acudido a la entrega personal en domicilio.

Como dice GASCÓN INCHAUSTI, “se busca con ello, sobre todo, ahorrar costos en aquellos procesos en que las partes no se están sirviendo de procurador, fomen-

⁴⁵⁹ Esa misma ley es la que ha derogado el tradicional sistema de remisión postal de los oficios y despachos en general, contemplándose alternativamente el empleo de los medios electrónicos, informáticos y similares del art. 162, ahora convertido en obligatorio.

⁴⁶⁰ GASCÓN INCHAUSTI, FERNANDO: “Artículo 160”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*. Tomo I: Artículo 1 a 280, VV.AA. Atelier, Barcelona, 2001, pág. 677.

⁴⁶¹ CUBILLO LÓPEZ, *La regulación...*, op. cit., pág. 129.

⁴⁶² El precepto presenta un segundo párrafo donde regula el contenido de la cédula, lo cual resulta un tanto redundante con lo ya dispuesto en el art. 152.4, aunque esta reiteración no es exactamente igual: *La cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.*

⁴⁶³ GASCÓN INCHAUSTI, ídem.

tando además una recepción personal de las comunicaciones”⁴⁶⁴. Pero, no todo es cuestión de costes económicos, sino también de costes procesales, dado que resulta absurdo remitir una comunicación, que ya de por sí implica un coste, a una persona con el único objeto de que la misma comparezca en la Oficina judicial o Servicio Común de que se trate, cuando el objeto de la comunicación puede remitirse o entregarse directamente en su domicilio⁴⁶⁵. En este sentido, aun cuando se condiciona su aplicación a que el destinatario tuviere su domicilio *en el partido* donde radique el tribunal, debería restringirse todavía más y decir “en el municipio”, pues existen circunscripciones judiciales que abarcan muchas localidades no siempre cercanas, acarreado con ello desplazamientos que pueden llegar a ser costosos; la fórmula a emplear por tanto debería ser la de acudir al auxilio judicial si el interesado no vive en el mismo término municipal que el órgano judicial, realizando entonces el trámite en la sede del órgano exhortado o, de haberlo, en su SCAC o análogo⁴⁶⁶.

En cualquier caso, y aunque se trata por fortuna de una práctica que no es generalizada en nuestro país⁴⁶⁷, la misma debería quedar completamente erradicada por ser contraria al principio de no imponer cargas innecesarias a los justiciables⁴⁶⁸ y estar en franca contradicción con lo pomposamente proclamado por la

⁴⁶⁴ GASCÓN INCHAUSTI, ídem.

⁴⁶⁵ Piénsese en el supuesto de tener que dar traslado a una parte no personada con procurador de una tasación de costas y, en lugar de remitírsela por correo o, subsidiariamente, mediante entrega, se le envía un telegrama para que acuda al juzgado a efectuar dicho trámite y, peor todavía, como se ha advertido en la práctica, con infracción del contenido exigido por el art. 160.3, párr. 2º, con una cláusula-modelo del tipo “para practicar diligencias de su interés” o “citación para ser citado”. Y aun más lamentable sería que desde la propia oficina judicial se interesara al SCAC que vía art. 161 se le entregara a dicho interesado una cédula de citación para un día y hora determinados con un exiguo contenido como ese y para tal finalidad.

⁴⁶⁶ En el mismo sentido, MARES ROGER, “Los actos de comunicación judicial..., (y II)”, op. cit., pág. 2.

⁴⁶⁷ A esta práctica se refiere, en pretérito, SERRANO PATIÑO al comentar el art. 160.3: “[...] con esta norma se ha pretendido poner freno a una práctica habitual de juzgados y tribunales (no prevista en disposición alguna), y que consistía en remitir un telegrama al interesado para que compareciese en día y hora determinados ante el tribunal que le citaba *“para un asunto de su interés”*. En concreto, se citaba a una persona para a continuación practicar con ella cualquier tipo de notificación, emplazamiento, requerimiento o citación. De este modo se trasladaba al justiciable una obligación propia del órgano judicial, a saber, la realización de los actos de comunicación” (“Breve análisis de los Actos de Comunicación Judicial en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero”, *Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid* n.º 22, sep. 2005, www.madrid.org). MARES ROGER también lamenta de la LEC 2000 la previsión que recoge este precepto, “toda vez que desentierra una práctica forense que creíamos olvidada. Nos referimos a aquel artificio sutil e ingenioso de citar para después notificar, citar, emplazar o requerir, con lo que se trasladaba al justiciable una obligación del órgano judicial, como es la realización de los actos de comunicación” (“Los actos de comunicación... (II)”, op. cit., pág. 4].

⁴⁶⁸ FURQUET MONASTERIO no duda en afirmar que “mediante semejante previsión se perpetúa una corruptela que traslada a la parte una obligación que corresponde realizar al órgano judicial” (*Las comunicaciones procesales*, op. cit., pág. 89); o CANCIO FERNÁNDEZ, que “no es más que la positivación de una deleznable práctica forense, consistente lisa y llanamente en «citar para notificar», con lo que eso conlleva en cuanto a duplicidad de acciones y gasto, para la Administración de Justicia y para el justiciable” (“Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 66).

Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, según la cual el ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible. La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley (apartado o “derecho” n.º 11).

D.- Otros actos de comunicación. Además de los anteriores supuestos, la LEC se refiere también al uso del correo en dos casos puntuales:

1º) Devolución de *actuaciones de auxilio judicial ya practicadas* por el órgano exhortado, *si no se pudieren enviar telemáticamente* (art. 175.2). Solo en ese supuesto *se remitirán por correo certificado* o se entregarán al litigante o procurador.

2º) Notificación al demandado de la declaración de rebeldía (art. 497.1): *La resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no o fuere, mediante edictos. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso*⁴⁶⁹.

Existen todavía más supuestos en los que la comunicación se habrá de hacer por correo con acuse de recibo o medio similar, aun cuando la ley guarde silencio sobre este particular. Nos referimos a la *notificación* de determinadas resoluciones que hay que dar a conocer a las partes, siendo lo normal que ésta sea la demandada en autos. Podemos señalar, sin ánimo exhaustivo –y sin entrar en las disquisiciones que se suscitan en el foro acerca de la necesidad de la comunicación si la parte no está (voluntariamente) personada o de si es suficiente la mera remisión por correo–, la notificación de la diligencia de ordenación por la que se traslada la tasación de costas (art. 244.1) y/o la propuesta de liquidación de inter-

⁴⁶⁹ También en este caso debería ser suficiente con acreditar la correcta remisión, aunque no conste que el demandado haya tenido conocimiento de que ha sido declarado en rebeldía. Vid., en ese sentido, la **SAP Barcelona (Secc. 13ª) 14.03.2005** (Roj: SAP B 2243/2005): “[...] la carta remitida por el Juzgado mediante correo certificado que fue “devuelto por caducado. No retirado” -fol 101 de las actuaciones- surte plenos efectos de notificación de conformidad con lo preceptuado en el precepto transcrito, sin que sea preciso acudir a las disposiciones contenidas en los arts. 158 y 161 LEC, que el recurrente cita como infringidos, por cuanto la comunicación remitida no tiene por objeto ni la personación en juicio ni la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales (téngase en cuenta lo preceptuado en el art. 497, igualmente transcrito)” (F. J. 3º). Sin embargo, la postura contraria parece desprenderse de la **STS 10.03.2010** (Roj: STS 1737/2010): “[...] la notificación de la providencia por la que se declara en rebeldía al demandado intentada como indica el artículo 497 LEC por correo certificado, tampoco resulta acreditativa de su recibo por el demandado, ya que sólo consta en las actuaciones la devolución al Juzgado por el Servicio de correos del sobre y acuse de recibo con la nota de «caducado», de la que no puede deducirse la negativa del demandado a su recepción, pues no consta si el servicio de correos dejó aviso en el domicilio del demandado y, en su caso, de qué forma se hizo, si se puso en su conocimiento que el envío estaba a su disposición, dónde y por cuanto tiempo, antes de proceder a su devolución al Juzgado remitente. Siendo irrelevante que dicha providencia se publicara por edicto colocado en el tablón de anuncios del juzgado, ya que esta forma se reserva por el indicado precepto para los casos en que no es conocido el domicilio del afectado, lo que no acontece en el presente” (F. J. 5º).

eses (art. 713.2); la notificación de la mejora de embargo (art. 612); la notificación del decreto fijando la cantidad debida en el procedimiento de jura de cuentas de procurador (art. 34.2) o de abogado (art. 35.2); o la notificación del decreto poniendo fin al proceso monitorio por falta de oposición o pago (art. 816.1⁴⁷⁰). Todas estas notificaciones deberían surtir plenos efectos con la mera acreditación de su correcta remisión en los términos previstos en el art. 155.4.

2.2.- IDONEIDAD DEL USO DEL CORREO PARA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O CITACIÓN A LA PARTE DEMANDADA

2.2.1.- La discutible opción del legislador

El problema del sistema de remisión postal, extrapolable al de remisión telemática, es el de su escasa interacción con el destinatario, lo que en determinadas situaciones no resulta recomendable. Si pensamos en el demandado, el mismo va a tener conocimiento por primera vez de la existencia de un proceso judicial que le concierne únicamente a través de una fría e impersonal “carta” o sobre postal, sin ningún interlocutor al que se le pueda plantear la más elemental cuestión y, lo más importante, sin ninguna persona –funcionario o procurador– que en representación del órgano judicial le traslade unas mínimas prevenciones legales al respecto, aunque las mismas vengan ya escritas, en un lenguaje jurídico cuando menos ajeno al profano, en la correspondiente cédula o copia de la resolución de que se trate. Precisamente ahí está el gran potencial del sistema de entrega anunciado por el art. 152.3.3º y su principal rasgo diferenciador.

Acabamos de ver la expresa mención de la LEC al *primer emplazamiento o citación al demandado* como actos de comunicación que habrán de ser realizados mediante *remisión*, en principio por correo o medios similares (art. 155.1). Sin embargo, pese a ser la primera elección del legislador para realizar estos trámites, no seremos los primeros ni los últimos en plantearnos si ello es correcto⁴⁷¹, habiendo incluso quien ha postulado su rechazo, como GIMENO SENDRA, quien se muestra contundente en tal sentido: “el primer acto de comunicación de la existencia del proceso al demandado ha de efectuarse mediante emplazamiento personal, sin que pueda el órgano sustituirlo por otros medios de comunicación (correo certificado, telegrama, teléfono, emplazamiento edictal,...), que, en todo caso, han de ser siempre supletorios”⁴⁷². Por su parte, MONTERO AROCA y FLORS MATÍES, asumen al estudiar el juicio verbal, en su precedente regulación, que “en la práctica, muy acertadamente, cuando se trata del primer acto de comunicación que se hace al demandado, que es la citación para la vista se está acudiendo de modo directo a la citación por medio de entrega en su domicilio, sin intentar antes la citación por

⁴⁷⁰ No creemos que sea obligatoria la notificación personal conforme al art. 497.2 en el ámbito del proceso monitorio, donde al deudor (que no demandado) no se le declara en rebeldía procesal.

⁴⁷¹ A responder a ello dedica MAGRO SERVET, VICENTE, su artículo “Ejecución de actos de comunicación por correo, telegrama u otros medios semejantes incluidos los tecnológicos: hacia la creación de la figura de los notificadores de la administración en general”, *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2011, La Ley, Madrid, págs. 48-67.

⁴⁷² GIMENO SENDRA, VICENTE: *Introducción al Derecho procesal*, 5ª ed., Colex, Madrid, 2007, pág. 329.

correo con acuse de recibo”⁴⁷³. Y desde otro punto de vista, MARES ROGER, hablando de los actos de comunicación en general, entiende que “no creemos que sea posible mantener el carácter subsidiario de la modalidad de entrega personal al destinatario, por la sencilla razón de que la propia dinámica de algunos procedimientos lo va a impedir”; se refiere el autor a otra razón distinta de la aquí planteamos, también importante y relativa a los exigüos plazos y márgenes de tiempo que exige la LEC para celebrar determinadas vistas y comparecencias⁴⁷⁴. Partiendo de la misma premisa, COLOM PERPIÑA aboga por que “dado que en muchos casos la existencia de los Servicios Comunes de Actos de Comunicación (SAC) permite obtener una notificación más rápida y efectiva, podría replantearse la exigencia legal de establecer como medio prioritario de la notificación el de la remisión postal”⁴⁷⁵.

Otros autores, por el contrario, no muestran reparos al uso del correo en consonancia con la literalidad de la LEC, tales como ORTELLS RAMOS, que lo incardina en el primero de los “tres procedimientos para comunicar el emplazamiento y la citación” y que “deben ser aplicados si el prioritario no ha dado resultado”, es decir, “comunicación por remisión”, mediante “entrega directa” y por edictos⁴⁷⁶; o BERNAL LÓPEZ, para quien, aún reconociendo que estamos ante “los actos de comunicación más *delicados*, como son el emplazamiento y el requerimiento, no existe obstáculo alguno para que el primero se practique por remisión [...], siempre y cuando se reciba constancia de su recepción”⁴⁷⁷.

Los tribunales han entendido también que el primer emplazamiento o citación efectuados por correo certificado será válido siempre que se cumpla con el tenor legal y la aplicación combinada de los arts. 155.1, 160.1 y 158. Así lo explica la **SAP Las Palmas (Secc. 3ª) 04.07.2005**, de la que reproducimos, por su claridad, el siguiente pasaje:

“Alega la recurrente que en la notificación no se dio el necesario rigor procesal para el emplazamiento, ya que la notificación debía haber sido personal y que el artículo 161 de la LEC no recoge la notificación por medio de correo, siendo dichas formas imperativas, y no electivas por parte del juzgador. [...] Como hemos podido obser-

⁴⁷³ MONTERO AROCA y FLORS MATÍES: *Tratado de Juicio Verbal*, op. cit., pág. 612.

⁴⁷⁴ Y pone como ejemplo las de los arts. 771.2 y 773.3 (medidas provisionales previas y coetáneas), 777.3 (ratificación de la separación o divorcio consensuales) y 440.1 (juicio verbal) [“Los actos de comunicación... (II)”, op. cit. pág. 2].

⁴⁷⁵ COLOM PERPIÑA: “Las notificaciones en los procesos judiciales...”, op. cit., pág. 29.

⁴⁷⁶ ORTELLS RAMOS, MANUEL (Dir.): *Derecho Procesal Civil*, Thomson-Aranzadi, 8ª ed., Cizur Menor, 2008, págs. 309-10.

⁴⁷⁷ BERNAL LÓPEZ: “Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 739. Vid., ídem, MONTSERRAT MOLINA, PEDRO EUGENIO: “Particularidades de los actos de comunicación en la LEC, tras las reformas de la LO 1/2009 y Ley 13/2009”, *Práctica de Tribunales* n.º 70, abril 2010, La Ley, Madrid, pág. 28 (trabajo reproducido en *Diario La Ley*, n.º 7394, 4 de mayo de 2010, La Ley, Madrid); ESCRIBANO MORA, FERNANDO (Coord.): *El proceso civil II*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, epígrafe 420: “Actos de comunicación judicial: remisión de las actuaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes” (TOL 62.543); MAGRO SERVET (Coord.), *Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 4ª ed., La Ley, Madrid, 2010, pregunta n.º 339, pág. 201.

var, la nueva LEC permite expresamente que, bajo la dirección del secretario judicial, en las primeras notificaciones de las partes no representadas aún por procurador, la notificación se realice por remisión de la notificación a su domicilio, según el artículo 155.1º. Dicha remisión puede hacerse, perfectamente, y no sólo no está prohibido, sino que se recoge expresamente su posibilidad en la norma procesal, en su artículo 152.2º, por correo certificado” (F. J. 2º)⁴⁷⁸.

Lo cierto es que el emplazamiento para contestar a la demanda del juicio ordinario, o hasta hace muy poco tiempo la primera citación a la vista del juicio verbal, no son simples trámites, no solo porque a través de ellos toma la parte demandada conocimiento por primera vez de la existencia del proceso judicial iniciado frente a ella, sino también porque de los mismos se derivan importantes consecuencias procesales como la declaración de rebeldía, de tal modo que por su especial trascendencia debería emplearse directamente la vía de la comunicación mediante entrega prevista en el art. 161 sin intentar previamente la misma por correo, aun siendo conscientes de que ello comportaría la movilización de más recursos humanos.

Así se pone de manifiesto por el Tribunal Constitucional, valiéndonos, por todas, del ejemplo de la **STC 67/2003**, de 09.04, donde podemos leer que:

“[...] en relación con el emplazamiento o citación a juicio, hemos repetido en numerosas ocasiones que este primer acto de comunicación procesal cobra una gran importancia, ya que, al poner en conocimiento del demandado la existencia del proceso dirigido contra él, le facilita el ejercicio de su derecho de defensa, por lo que, desde la perspectiva del art. 24.1 CE, se trata de un requisito esencial para la validez del procedimiento, que exige de los órganos judiciales una especial diligencia para apurar las medidas necesarias para garantizar la efectividad real de este inicial acto

⁴⁷⁸ Roj: SAP GC 2138/2005. Y sigue diciendo: “Tanto es así, que el artículo 160 LEC establece las condiciones con las que se ha de proceder a la notificación por correo certificado; [...] El artículo 161, que pretende la recurrente que sea el aplicable al presente caso, tras tratar la forma de notificación por medio del correo, establece cuáles son los requisitos para las notificaciones personales, pero no establece cuándo se ha de notificar una actuación judicial de una manera o de otra. El citado artículo que establece cuándo se han de notificar las actuaciones judiciales de una manera u otra es el 155.1º el que nos indica expresamente que si las partes todavía, en el proceso, no tienen procurador designado, precisamente por tratarse del primer emplazamiento, la notificación está perfectamente realizada si se hace por medio del correo, una de las diferentes formas amparadas por el artículo 152. Por todo ello, la notificación del auto de admisión de la demanda y del emplazamiento para su contestación realizada por correo certificado, con constancia en autos del documento en el que se acredita su recepción, por qué persona, con qué contenido, y qué día, es perfectamente ajustada a derecho, sin que produzca ninguna quiebra procesal. Por ello es de hacer notar que ninguna parte podrá pretender de los órganos judiciales que todas las primeras notificaciones deban hacerse en el domicilio del demandado por el secretario en persona, lo que estaría fuera de toda lógica [...]. Por otro lado, además de tener la notificación por correo perfecto amparo legal, también es constante la Jurisprudencia del TS que establece la validez de la notificación de las resoluciones judiciales por correo certificado, como la STS 306/04 de 6 de abril (RJ 2004\1700), o la STS 13/05 de 25 de enero (RJ 2005\1161) que específicamente admite la plena validez de la notificación por correo certificado [...]” (F. J. 2º).

También admiten la validez del correo, p. ej.: **SAP Zamora (Secc. 1ª) 28.09.2011** (Roj: SAP ZA 418/2011; F. J. II); **SAP Sevilla (Secc. 5ª) 12.09.2007** (Roj: SAP SE 3956/2007; F. J. 2º).

de comunicación procesal (SSTC 7/2000, de 17 de enero, FJ 2; 145/2000, de 29 de mayo, FJ 2, por todas)” (F. D. 2º)⁴⁷⁹.

Más allá de las anteriores consideraciones, en la práctica judicial la situación es variopinta y el empleo del correo puede obedecer, no tanto al exceso de celo en la aplicación escrupulosa de la LEC, como a la pretensión de descargar a los, en general, saturados Servicios Comunes encargados de los actos de comunicación y de ejecución, allí donde existan, pudiendo incluso ocurrir que los mismos devuelvan de plano las diligencias que se les encomiendan por parte de los diversos órganos judiciales a los que asisten si no se les acredita haberse intentado previamente la comunicación por correo y con resultado negativo⁴⁸⁰. Por el contrario, el fenómeno se invierte allí donde dichos Servicios están suficientemente dotados o disfrutan de menor demanda, casos en los que se tiende a encomendarles la totalidad de los actos de comunicación sin atención alguna al art. 155 y concordantes de la LEC y, si acaso hubiera reparo, merced a una interpretación exacerbada del art. 163.

2.2.2.- Viabilidad de prescindir de oficio y desde el principio de sistema de remisión para el primer emplazamiento o citación

Acabamos de estudiar que la comunicación *por medio de entrega* en estos casos se configura con carácter subsidiario y, aun con las excesivas remisiones existentes y la cierta confusión que pueda en un principio padecerse, no es posible sostener que la LEC no otorgue preferencia al correo y similares, pese a la importancia de los trámites a practicar.

⁴⁷⁹ En el mismo sentido, SSTC 268/2000, de 13.11, y 242/1991, de 16.12. De las Audiencias vid., p. ej.: **SAP Valencia (Secc. 9ª) 08.05.2013** (Roj: SAP V 2323/2013): “[...] estamos ante el acto de comunicación más trascendente del proceso cual es poner en conocimiento del demandado la existencia de un procedimiento contra él y darle la oportunidad de defenderse” (F. J. 2º); **SAP Ourense (Secc. 1ª) 18.06.2010** (Roj: SAP OU 536/2010): “Singular importancia reviste el acto de comunicación cuando se trata de la primera llamada para personarse en las actuaciones por ser el instrumento que facilita el derecho de defensa, posibilitando el personamiento, la formulación de contestación y en su caso, de reconvencción y evitando una posible declaración de rebeldía con la consiguiente preclusión del plazo para oponerse” (F. J. 1º); **SAP Málaga (Secc. 6ª) 22.04.2010** (Roj: SAP MA 790/2010): “El emplazamiento es una actuación que pertenece a las formas esenciales del juicio, pues, como dicen Las Partidas, es raíz y comienzo del pleito, por lo que el llamamiento que se hace a los litigantes para que comparezcan en juicio a defenderse o a hacer uso de su derecho se ha de realizar de acuerdo con las prescripciones legales, ya que de su observancia depende a su vez la real efectividad de audiencia y contradicción básicos en el proceso, derecho de defensa éste incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que reconoce el artículo 24 de la Constitución Española” (F. J. 2º). Ídem **SAP Málaga (Secc. 6ª) 09.02.2011**, F. J. 2º (Roj: SAP MA 431/2011).

⁴⁸⁰ Sobre este particular véanse la Instrucción 2/2008 de la Secretaría de Gobierno del TSJ de Cataluña “para la unificación de prácticas en la realización de los actos de comunicación en la jurisdicción civil”, que determina como primer paso intentar la comunicación por correo (punto C.1.2.1), y, en coherencia con aquella, la Circular 1/2009 de la Secretaría Coordinadora Provincial de Barcelona, “sobre la forma en que actuarán los Servicios Comunes Procesales Generales en la práctica de los actos de comunicación civiles que les sean encomendados”, que exige como norma general que todas las solicitudes de actos de comunicación mediante entrega ex art. 161 “tendrán que venir acompañadas del documento que acredite que el acto se ha intentado por correo [...] y no conste la recepción por el interesado” (Aptdo. 4.a).

Ahora bien, a la vista de lo expuesto y de nuestro ya denso cuerpo de doctrina constitucional, no nos parece descabellada la posibilidad de que el órgano jurisdiccional –el Letrado de la Administración de Justicia para ser más precisos– acuerde desde el mismo instante de la incoación del procedimiento que se acuda, directamente y sin más trámites, a la comunicación mediante entrega del art. 161, como de hecho sucede en muchos partidos judiciales que cuentan con Servicios Comunes de Actos de Comunicación y con personal suficiente. Es más, el estudio de la jurisprudencia revela que en ninguna resolución se aprecia reparo alguno al hecho de que por parte del juzgado de instancia se haya acudido directamente a la comunicación por aquella vía, circunstancia que se hace constar sin más en el relato de los hechos, sin mención, comentario u observación alguna al respecto, como si se tratara de un detalle absolutamente irrelevante que solo a los académicos importa y preocupándose, única y exclusivamente, de si dicha comunicación ha llegado, o podido llegar, su destinatario⁴⁸¹.

Se trata de una posibilidad que debería entenderse, en puridad, como una obligación ante el énfasis que desde sus comienzos ha puesto el Tribunal Constitucional al emplazamiento de los demandados en aplicación del art. 24 CE, debiendo el mismo “ser realizado por el órgano judicial con todo cuidado, cumpliendo las normas procesales que regulan dicha actuación a fin de asegurar la efectividad real de la comunicación” (STC 191/2003, de 27.10, F. D. 3º, por citar una). Además, su cobertura legal entendemos se encuentra contenida, casi de soslayo, en el art. 159.2, que ofrece al Letrado de la Administración de Justicia la facultad de *ordenar que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el art. 161 no solo cuando conste en autos el fracaso de la comunicación* (por correo), sino también –el legislador emplea la conjunción disyuntiva “o”– *cuando las circunstancias del caso lo aconsejen*. Y aunque se pueda decir que el art. 159 regula según dispone su rúbrica las “comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio”⁴⁸², resulta absurdo pensar que la ley permita ese margen de discrecionalidad al Letrado de la Administración de Justicia en su calidad de director de los actos de comunicación (art. 152.1) cuando se trata de comunicaciones a personas diferentes de las propias partes procesales y, sin embargo, no pueda el mismo acudir a la comunicación con las partes –auténticos protagonistas de la litis– ex art. 161 *atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan*. En última instancia cabría apelar a la interpretación teleoló-

⁴⁸¹ Casos de citación o emplazamiento “directo” a juicio por el art. 161, hay muchísimos, ya sea por los funcionarios de los propios órganos judiciales o de los SCACE, por el procurador, o por exhorto: entre ellos, vid.: **SAP Madrid (Secc. 21ª) 10.03.2015** (Roj: SAP M 5529/2015): “El domicilio del apelante, Sr Mariano, indicado en la demanda era [...] de Fuenlabrada y en él se acordó - Decreto de 21 de septiembre de 2010, folio 101- que fuera emplazado, remitiendo exhorto a los Juzgados de Primera Instancia de Fuenlabrada [...]” (F. D. 3º).

⁴⁸² CERRADA MORENO menciona dicho artículo en un sentido general y sin constreñirlo a los sujetos que refiere dicha rúbrica: “También se acudirá a la entrega personal cuando las circunstancias del caso lo aconsejen [...]” (*Actos de comunicación...*, op. cit. pág. 76).

gica de las normas (art. 3.1 CC⁴⁸³), así como recordar que tal facultad ya se encontraba presente en el art. 261 de la LEC 1881 a modo de cláusula de cierre, al permitir las comunicaciones mediante entrega cuando “así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran”⁴⁸⁴.

Este razonamiento lo mantenemos aunque exista la salvaguarda de los artículos 158 y 161, así como las nuevas modalidades de remisión telemática o informática, pues de lo que se trata es de acelerar los procedimientos sin merma de garantías, especialmente en su iniciación, y sin estar a las resultas de un modo de actuación (el correo) que puede significar un tiempo perdido si por no llegar a acreditarse que el destinatario haya tenido conocimiento de la comunicación haya que reiterar el mismo trámite *mediante entrega*. En definitiva, se trataría de volver al sistema de la LEC de 1881⁴⁸⁵, donde se exceptuaban de la remisión postal los actos de comunicación “de mayor trascendencia: aquellos de los que depende la *personación* de la parte y los *requerimientos*” (CUBILLO LÓPEZ⁴⁸⁶).

Al margen de todo lo anterior y haciendo un ejercicio de abstracción para poder tomar una decisión imparcial y con conocimiento de causa, podemos apuntar las ventajas y desventajas que tiene, ‘a priori’, la remisión por correo frente a la comunicación mediante entrega en el siguiente cuadro:

LA REMISIÓN POR CORREO FRENTE A LA ENTREGA PERSONAL	
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Se evitan comunicaciones “a gusto del consumidor”</i>: Van en sobre cerrado, con lo que se sortean las artimañas procesales. Si el interesado quiere saber qué contiene, le guste o no, tendrá que firmar previamente a su entrega. Solo recientemente (Ley 42/2015) se ha adoptado expresa y legalmente esta medida para la comunicación mediante entrega. ▪ <i>No hay problemas con la Ley Protección de Datos</i>: Esta es otra ventaja derivada del sobre cerrado. ▪ <i>La relación de receptores es mayor</i>: La normativa postal contempla un espectro mucho más amplio de personas tácitamente autorizadas y por, ende, de potenciales receptores. ▪ <i>Es transfronterizo</i>: El correo no conoce las demarcaciones ni los partidos judiciales, por lo que puede llegar a cualquier lugar sin que el juzgado tenga que acudir al auxilio judicial. ▪ <i>Descarga al órgano judicial</i>: Ventaja y desventaja a un tiempo, según se mire, la tarea material de la comunicación se encomienda a un agente externo, precisándose por ello de menos funcionarios judiciales (y, en su caso, de procuradores). ▪ <i>Es más adecuado para comunicaciones masivas</i>: El sistema altamente mecanizado y especializado del servicio postal permite dar respuesta a comunicaciones judiciales que hayan de practicarse de forma simultánea a un gran número de personas.

⁴⁸³ **Art. 3.1 CC**: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

⁴⁸⁴ Art. 261, párr. 4.º LEC 1881.

⁴⁸⁵ El art. 261p4 LEC 1881 decía que “los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes –se refería a la entrega por funcionario judicial– cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones [...]”.

⁴⁸⁶ CUBILLO LÓPEZ: *La comunicación procesal...*, op. cit., pág. 31; idea reiterada en *La regulación de las actuaciones procesales*, op. cit. pág. 114.

DESVENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>No se hace constar qué se entrega:</i> Aunque el Letrado de la Administración de Justicia pueda dar fe de qué es lo que se ha remitido, solo si emplea la vía del art. 161 la propia diligencia de comunicación permitirá consignar los “documentos entregados”, por lo que la firma del actuario (si se le une la del destinatario, mejor) hará prueba tanto de la realidad del envío como de su contenido. ▪ <i>Es unidireccional:</i> El correo no recicla de oficio las comunicaciones que resultan infructuosas en un determinado domicilio, pero que pudieran ser positivas, ya en otro momento o día, ya en otro lugar según la información que puedan facilitar los propios vecinos en el mismo acto (art. 161.4, párr. 2º). Si la dirección es incorrecta o el destinatario es desconocido, el envío postal se devuelve sin más a su procedencia. Solo si es conocido se le dejará un aviso para que aquel o un tercero expresamente autorizado acuda a la oficina de Correos para su recogida. ▪ <i>No es válido si concurren plazos fatales:</i> El servicio de Correos, más allá de determinados estándares de calidad y rapidez en plazos de entrega, de los “plazos medios de expedición” establecidos reglamentariamente o de compromisos contractuales, no tiene obligación legal de entregar una determinada comunicación en un plazo perentorio que venga expresamente marcado por el órgano judicial para un asunto o trámite en particular. ▪ <i>No se hace constar la relación del receptor con el destinatario:</i> Ni la LEC ni la normativa sectorial exigen indicar la relación del receptor con el destinatario. ▪ <i>Puede resultar un trámite inútil:</i> Aunque la ley establece como primera opción el uso del correo, ello tiene sus inconvenientes. En los supuestos del art. 158, aunque nos llegue el acuse de recibo entregado, no valdrá si viene firmado por personas distintas, no constando por tanto la recepción por el destinatario, a menos que el mismo comparezca posteriormente y no alegue indefensión. Habrá, pues que reiterar el trámite a través del SCACE, SCPJ, por el propio órgano allí donde no existan tales Servicios Comunes, o por el procurador. ▪ <i>No es del todo eficaz para los requerimientos:</i> Pueden precisar ser practicados vía art. 161. ▪ <i>No es gratuito:</i> Hasta 1994 existían las franquicias postales, pero con la liberalización del sector el uso de los servicios postales por parte de las Administraciones públicas ha dejado de ser un servicio público gratuito y requiere que cada una de ellas formalice el correspondiente contrato con alguno de los operadores existentes (no necesariamente con el operador postal universal –Correos–).
-------------	--

2.3.- LA LIMITACIÓN LEGAL DEL USO DE SISTEMA DE REMISIÓN: LA CLÁUSULA DEL SALVAGUARDA DEL ART. 158 LEC

La preferencia del legislador por el uso del correo y medios similares, incluidos hoy día también los medios electrónicos o telemáticos, frente a la práctica de las comunicaciones por los propios funcionarios de la Administración de Justicia o por procuradores tiene una importante cortapisa impuesta en la propia LEC: si con dichos medios no se puede acreditar que el destinatario ha recibido determinadas comunicaciones, consideradas esenciales para el correcto devenir del proceso y el respeto a las garantías procesales, como ocurre por ejemplo con aquellas de las que depende la propia personación en el litigio, será necesario reiterar el trámite acudiendo al sistema de comunicación mediante *entrega* por parte de un funcionario judicial, o del procurador que así lo solicite, que se desarrolla en el art. 161.

Esa línea divisoria que debe respetarse por el operador jurídico se contempla por primera vez en el art. 155.4p2º, que establece que *si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el*

*interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158*⁴⁸⁷. Y la llamada a ese precepto no nos dice en realidad nada nuevo que no haya dicho ya aquel, habida cuenta que bajo la rúbrica de “Comunicación mediante entrega” repite otra vez que *cuando, en los casos del apartado 1 del artículo 155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161*. Un ejemplo perfecto, pues, de la deficiente técnica legislativa que padece esta parte de la LEC. Si el primero de los preceptos remitiera directamente al art. 161, el art. 158 podría haberse reservado para otros menesteres y aun así seguiríamos teniendo que acudir a varios preceptos a la vez para saber cuándo hay que acudir a la comunicación mediante entrega y cómo hacerla. De todas estas cuestiones versará el capítulo IV.

⁴⁸⁷ Este párrafo, y por reiteración el art. 158, es heredero directo del antiguo art. 261, párr. 4º LEC 1881, que exceptuaba el uso de la comunicación por correo con una redacción muy parecida: “No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquier de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquellos otros casos que lo disponga la ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran”.

III

La comunicación mediante remisión electrónica, informática o telemática

1.- HACIA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2.0

1.1.- CAMBIO DE FILOSOFÍA HACIA EL “PAPEL CERO”

Vivimos en una época de grandes y vertiginosos cambios. La ya acuñada expresión de “Sociedad de la información” es fruto del desarrollo de las denominadas “TIC”, tecnologías de la información y de la comunicación, que han provocado que en las sociedades que nos autodenominamos “avanzadas” la telefonía móvil, Internet y las redes sociales hayan pasado de ser un mero divertimento a casi una necesidad primaria, para muchas personas hasta cotas ciertamente preocupantes. Hablamos de una transformación que alcanza a lo cotidiano, de un acercamiento “telemático”, y al mismo tiempo con un peligroso distanciamiento físico, en la forma de relacionarse las personas a nivel particular, pero también en sus relaciones con la Administración pública, con carácter oficial y constituyendo, transformando o extinguiendo relaciones jurídicas con la misma fuerza que de forma presencial. Precursora de esta nueva “e-Administración” ha sido la Administración General del Estado⁴⁸⁸, donde solo mediante sistemas informáticos se puede

⁴⁸⁸ En 1986 la reciente adhesión de España a las Comunidades Europeas hizo que se dictara el RD-Ley 1/1986, de 14.03, *de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales*, del que destaca un incipiente artículo 4º, teóricamente aún en vigor, a cuyo tenor: *Salvo el escrito de iniciación del procedimiento administrativo, las comunicaciones entre los particulares y la Administración, y ésta y los mismos, podrán realizarse por vía telegráfica, télex o cualquier otra de la que quede constan-*

gestionar eficazmente los expedientes de decenas de miles de “administrados”, contribuyentes, trabajadores y cotizantes.

De esta revolución tecnológica y social la Administración de Justicia no puede quedarse al margen, porque la agilización de los procesos judiciales, y muy especialmente de los actos de comunicación, supone una aplicación directa del derecho constitucional a un proceso público *sin dilaciones indebidas* del art. 24.2 CE⁴⁸⁹. Como bien manifiestan DELGADO GARCÍA y OLIVER CUELLO, “donde mayores logros se han alcanzado en este campo en la Administración de Justicia es en el de la utilización interna de las TIC: informatización interna (ordenadores, conexión a Internet, bases de datos...), gestión interna de los procedimientos, intranets... De ahí que donde queda un largo camino por recorrer todavía sea en el campo de las relaciones telemáticas entre Administración de Justicia y los operadores jurídicos, pero especialmente con los ciudadanos”⁴⁹⁰.

No es nuestro propósito el estudio en profundidad del proceso global de implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, algo que excedería con creces de nuestra materia, pero sí que es necesario situar en su debido contexto, dentro del gran reto de la modernización tecnológica de la Justicia, a los actos de comunicación por medios electrónicos y telemáticos. La nueva cultura del “papel cero” en las Administraciones públicas y, entre ellas, la de Justicia, lleva consigo una multitud de cambios metodológicos y de mentalidad en los diversos operadores jurídicos que interactúan con ella. Donde con mayor intensidad se ha de percibir es en la relación entre los órganos judiciales (y fiscales) y los profesionales del ámbito de la Justicia, y entre ellos particularmente los procuradores. Se trata de una relación bidireccional, de los primeros con los segundos en los actos de comunicación, esencialmente notificaciones, y de estos con aquellos con la presentación de escritos y documentos, que a partir del próximo 1 de enero de 2016 habrá de ser, en una y otra dirección y ya sin más períodos de paulatina progresión, totalmente en formato digital.

Además, el legislador ha querido con la recentísima Ley 42/2015, de 05.10, de *reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, que determinados ciudadanos, por pre-

cia por escrito, siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad, en especial en las notificaciones, y se adapten, en su caso, a los requisitos que se exijan en los procedimientos administrativos especiales.

⁴⁸⁹ En igual sentido, REGO BLANCO, M.^a DOLORES: “Capítulo VIII. Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales”, *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio* (Coord.: GAMERO CASADO, EDUARDO, y VALERO TORRIJOS, JULIÁN) Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 336.

Cfr. **art. 435.3 LOPJ**: *La Oficina judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.*

⁴⁹⁰ DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA y OLIVER CUELLO, RAFAEL: *Las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*, IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), Bilbao, 2006, pág. 11-12.

sumirse su aptitud y acceso a las nuevas tecnologías, deban también, junto a los profesionales de la Justicia, relacionarse con ella por medios telemáticos, lo que incluye la recepción con plena eficacia procesal de los actos de comunicación. Esto será un año más tarde que respecto a aquellos, a partir del 1 de enero de 2017, momento en el que, ya se esté obligado, ya se interese potestativamente, será posible que dichos actos se realicen en la “dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático”, según anuncia en su Preámbulo la novedosa reforma legal.

Lógicamente, con las personas que no estén representados con procurador u otros profesionales los actos de comunicación en papel habrán de seguir teniendo cabida en una “Justicia digital”, y lo mismo cabe decir del primer emplazamiento o comunicación que desde los órganos judiciales haya de realizarse a quienes estén llamados a ser parte en un proceso judicial. Mientras no sea obligatoria la “dirección electrónica única” (“DEU”), ya establecida con carácter facultativo por la Administración General del Estado⁴⁹¹ para todos los ciudadanos que quieran ser notificados por correo electrónico, o del “DEO” o “Domicilio Electrónico Obligatorio”, término sugerido por MAGRO SERVET⁴⁹², el primer emplazamiento, por ejemplo, a quien haya de ser parte en un proceso judicial habrá de seguir practicándose en un número mayoritario de casos por remisión por correo postal o mediante entrega por funcionario o procurador, como hasta ahora, sin perjuicio de que también puedan intentarse la comunicación través de sistemas de correo electrónico y mensajería basada en firma electrónica avanzada o reconocida.

En definitiva, como sostiene DE ROSA TORNER, “la Nueva Oficina Judicial solamente funcionará realmente, con toda sus potencialidades si en la Administración de Justicia se implanta el *expediente electrónico*, en el que todas las actuaciones se realicen en formato digital, con una limitación de los documentos en papel para supuestos extraordinarios y en el que los órganos judiciales se puedan comunicar telemáticamente entre sí, así como con los abogados y con los Procuradores e, incluso, con los propios ciudadanos”⁴⁹³.

⁴⁹¹ Introducida por el RD 209/2003, de 21.02, *por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de los medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos* (BOE de 28.02.2003).

⁴⁹² Vid. MAGRO SERVET, VICENTE: “El domicilio electrónico como garantía de la agilización de los actos de comunicación entre la Administración pública y los ciudadanos”, *Diario La Ley*, n.º 8131, 22.07.2013, Madrid, págs. 9-15.

⁴⁹³ DE ROSA TORNER, FERNANDO: “La modernización de la Justicia y la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías (RdNT)*, n.º 28, enero-abril 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pág. 114.

1.2.- EVOLUCIÓN POLÍTICO-LEGISLATIVA

Los hitos básicos⁴⁹⁴ que nos han llevado a la situación actual en lo que afecta a los actos de comunicación judicial, que se han producido en el marco del propio proceso de modernización de las oficinas judiciales, son los siguientes:

a.- Bajo la vigencia de la LEC de 1881⁴⁹⁵, la LOPJ introduce al tiempo de su promulgación en 1985 una escueta referencia a la posibilidad de utilizar “en el proceso”, sin más detalles, “*cualesquiera*” medios técnicos de documentación y reproducción, siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad” (art. 230⁴⁹⁶). Asimismo, para la materia concreta de las *notificaciones*, su art. 271 permite que se practiquen, además de por correo y telégrafo, por *cualquier “medio técnico” que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales*⁴⁹⁷, previsión un tanto imprecisa pero suficiente para dar soporte legal a instrumentos ya presentes en los años setenta y ochenta como el “Telex Judicial”⁴⁹⁸, el telefax⁴⁹⁹, el “teletex”, o el “datófono”, o el propio fax⁵⁰⁰.

⁴⁹⁴ Un somero repaso de alguno de estos *antecedentes* se contienen en el Preámbulo de la Ley 18/2011 (apartado II), importante texto normativo que analizaremos en este capítulo.

⁴⁹⁵ En la LEC 1881 no aparecían palabras semejantes a “electrónico”, “telemático”, o “técnico”, ni siquiera “mecánico”, aunque, como sostiene CUBILLO LÓPEZ, los medios técnicos “podían entenderse incluidos dentro del inciso «*otro medio idóneo de comunicación*», a que se refería el artículo 261 III de esa ley” (*La comunicación procesal...*, op. cit., pág. 177, nota al pie n.º 284).

⁴⁹⁶ Art. 230 LOPJ original: “Podrán utilizarse en el proceso cualesquiera medios técnicos de documentación y reproducción, siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad. La Ley regulará los requisitos y formas de su utilización”.

⁴⁹⁷ Texto inalterado hasta la fecha.

⁴⁹⁸ Vid. Orden de 09.04.1970 del Ministerio de Justicia, *por la que se dictan las normas provisionales para la utilización del sistema del «Telex Judicial»* (BOE de 24.04.1970), así como posterior Orden posterior de 07.01.1973, *por la que se modifican los anexos 1º y 2º de las normas para utilización del «Telex Judicial»* (BOE de 14.02.1973).

⁴⁹⁹ Del “servicio de telefax” hablaba en 1987 con gran optimismo CARRASCOSA LÓPEZ, VALENTÍN: “nos permitirá transmitir las comunicaciones y despachos entre oficinas judiciales en tan sólo unos segundos, por lo que un exhorto llegaría a su destino en 15 ó 20 segundos de su impresión. En breves palabras podríamos decir que es la realización de una fotocopia a distancia, e igualmente por este procedimiento se podrían notificar las resoluciones de los Profesionales, si estuviesen dotados de equipos para ello, con lo que el espinoso y laborioso trabajo de notificaciones, citaciones, requerimiento[s] y emplazamientos a los profesionales quedaría resuelto, sin necesidad de desplazamiento de los funcionarios y en tan sólo unos segundos de dictarse la resolución” (“Nuevas Tecnologías en la Oficina judicial”, *Revista Universitaria de Derecho Procesal*, 1988, n.º 1, UNED, Madrid, págs. 158-159).

⁵⁰⁰ Según explica FURQUET MONASTERIO, “el fax no es un invento nuevo, sino que su origen se remonta hasta 150 años atrás”, refiriendo que “en 1843 se concedió la primera patente para la transmisión de fotografías a través de las líneas telegráficas al relojero e inventor escocés Alexander Bain, antes incluso de que Alexander Graham Bell cursara la primera patente para el teléfono”. “No obstante, los aparatos modernos tal y como ahora los conocemos no aparecieron hasta mucho más tarde, en la década de los 70 siendo la de los 80 cuando se disparó su popularidad” (*Las comunicaciones...*, op. cit., pág. 171 y nota al pie n.º 577). JAUME BENNASAR, ANDRÉS, aporta también el dato de que el fax (o telefax, “forma abreviada de la palabra «telefax», con la que en principio era denominado”), “sustituyó progresivamente al denominado «telex» que se configuraba como una vía de remisión de in-

b.- No obstante, la doctrina señala mayoritariamente a 1994 como el año⁵⁰¹ donde se produce un primer gran paso hacia las “nuevas tecnologías” Con el importante referente de la Ley 30/1992 respecto del procedimiento administrativo⁵⁰², la **LO 16/1994**, de 08.11⁵⁰³, de reforma de la LOPJ, amplía ostensiblemente el contenido del citado art. 230⁵⁰⁴ para introducir en los Juzgados y Tribunales los

formación que debía ser incorporada a través de un teclado y que se imprimía en destino mediante unas hojas continuas especiales, pero con la limitación de que no podían ser enviados documentos independientes por este sistema. En cambio el fax permite la transmisión directa, a través del mismo canal de telefonía, de todo tipo de documentos que son recibidos por su receptor en el mismo formato e imprimidos en papel común” (*La validez del documento electrónico y su eficacia procesal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, pág. 171 y nota al pie n.º 261).

⁵⁰¹ También lo refiere la Ley 18/2011 en su Exposición de Motivos (II, párr. 2º).

⁵⁰² Art. 45.1 Ley 30/1992 LRJAP-PAC: “Incorporación de medios técnicos.” *Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes* (texto originario de este primer párrafo aún vigente hasta el próximo 2 de octubre de 2016, fecha en que entrará en vigor la Ley 39/2015, de 01.10).

DELGADO GARCÍA y OLIVER CUELLO han destacado la importancia de la Ley 30/1992, “pues regula, por primera vez en una ley de procedimiento, la utilización de la informática tanto en la tramitación, archivo y desarrollo del expediente, como en los medios de comunicación, de las partes con el órgano que debe resolver” (*Las tecnologías de la información...*, op. cit. pág. 31).

⁵⁰³ LO 16/1994, de 08.11, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 09.11.1994; c-e, 29.11).

⁵⁰⁴ **Art. 230 LOPJ** reformado por LO 16/1994, que es el texto hoy vigente: 1. *Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.*

2. *Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.*

3. *Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.*

4. *Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.*

5. *Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.*

Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.

Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial.

Acerca del precepto, la Exposición de Motivos de la 16/1994 explicaba lo siguiente: “Constituye una necesaria novedad de la reforma que se acomete, el tratamiento de la utilización de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la administración de justicia. La nueva redac-

medios *electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones* (aptdo. 1), así como para, novedad no menos importante, que las personas puedan *relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos indicados* (aptdo. 4); además, se reconoce la *validez y eficacia* de los documentos emitidos por aquellos medios si cumplen los requisitos que se establecen (aptdo. 2). Claro que la reforma, tanto desde el punto de vista de los órganos judiciales, como de los ciudadanos, sigue hablando en clave de posibilidad (*podrán*), teniendo que aguardar muchos años todavía para hacerse realidad.

c.- No mucho más tarde, en 1997, el CGPJ analiza en su **Libro Blanco de la Justicia** las causas que motivaban la dilación de los procesos que ocasionaban los actos de comunicación y acierta a señalar como una de ellas “la organización de las secretarías” (pág. 191), de la que vaticinaba que:

“[...] las previsiones que una futura Ley de Enjuiciamiento Civil puede hacer respecto de las comunicaciones por medios informáticos, por poner sólo un ejemplo, quedarán en letra vacía si no se afronta de forma urgente la provisión de medios a los órganos judiciales. [...] De nada serviría introducir la modificación legal si no se acomete, aunque sea con plazos al plazo posible de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la informatización integral de la Administración de Justicia, la conexión en red de los todos los órganos judiciales y la dotación a todos los órganos judiciales de los medios precisos [...]”⁵⁰⁵.

d.- La esperada **Ley 1/2000**, de Enjuiciamiento Civil, toma nota del famoso *Libro Blanco* y ya en su Exposición de Motivos, en su conocido tono autocomplaciente, anuncia:

“La Ley, atenta al presente y previsoramente del futuro, abre la puerta a la presentación de escritos y documentos y a los actos de notificación por medios electrónicos, telemáticos y otros semejantes, pero sin imponer a los justiciables y a los ciudadanos que dispongan de esos medios y sin dejar de regular las exigencias de esta comunicación. Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios, será preciso que los instrumentos utilizados entrañen la garantía de que la comunicación y lo comunicado son con seguridad atribuibles a quien aparezca como autor de una y otro. Y ha de estar asimismo garantizada la recepción íntegra y las demás circunstancias legalmente relevantes.

ción del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que otorga validez a los documentos emitidos, establece mecanismos que, por un lado, garantizan tanto la identificación del órgano, cuanto la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos y, por otro, aseguran la homogeneidad de los sistemas mediante la intervención reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial para el aseguramiento de la compatibilidad de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos y el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal” (Aptdo. X).

Vid., en desarrollo del aptdo. 5, párr. 2º, la Instrucción 2/2003, de 26.02, del CGPJ, *por el que se aprueba el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informático al servicio de la Administración de Justicia*, así como el Reglamento 1/2005, de 15.09, también del CGPJ, *de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales* (arts. 86-102).

⁵⁰⁵ Págs. 191-192.

[...] En cuanto a los procuradores y abogados e incluso a no pocos justiciables, lo razonable es suponer que irán disponiendo de medios de comunicación distintos de los tradicionales, que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, en la medida de sus propias posibilidades y de los medios de que estén dotados los tribunales.

Para el auxilio judicial, en cuyo régimen, entre otros perfeccionamientos, se precisa el que corresponde prestar a los Juzgados de Paz, la Ley cuenta con el sistema informático judicial” (Epígrafe IX).

Esa presentación se concreta normativamente, entre otros, en dedicar uno de sus preceptos, a los *actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares* (art. 162), si bien *cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios dispusieren* de esos medios, y con carácter potestativo (*podrá efectuarse por aquellos*) (aptdo. 1).

e.- No pareciendo suficiente con la recién promulgada LEC 2000, escasos cinco meses después los dos principales partidos políticos del país, PP y PSOE, suscriben el 28.05.2001 el **Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia**, cuyo punto n.º 14 dedican a las “Nuevas Tecnologías”, a cuyo efecto:

“Se elaborará un Plan Estratégico de las Nuevas Tecnologías que se implantará de manera integral. Este Plan contribuirá a modernizar las técnicas de funcionamiento de las Oficinas Judiciales, agilizar los procedimientos y abaratar los costes en las comunicaciones y notificaciones. La informatización de la Administración de Justicia se llevará a cabo en estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas”.

f.- Fruto del *Pacto* es en 2002 la **Carta de Derechos de los Ciudadanos**, ya citada en este trabajo, que en desarrollo del principio que denomina de “transparencia, información y atención”, establece en su punto número 21 que:

“El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales”.

g.- El bienio 2002-2003 asistirá a la promulgación de la Ley 34/2002, de 11.07, *de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico* (LSSI) y de la Ley 59/2003, de 19.12, *de Firma Electrónica* (LFE). Se implantaban con ellas definitivamente los cimientos de las relaciones jurídicas en Internet, auspiciadas por iniciativa de la Unión Europea y la Directiva 1999/93/CE, de 13.12.1999 (ya transpuesta por RD 14/1999), *por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica*, que será derogada el 01.01.2016 por el Reglamento (UE) 910/2014, de 23.07, *relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior*.

h.- En 2005 el CGPJ aprueba en su Pleno de 28 de septiembre la utilización por parte de los órganos judiciales de un sistema informático que estaba desarrollando el Ministerio de Justicia, llamado “**Lexnet**”, que llevaba un par de años en período de prueba y que permitía la realización de actos de comunicación y la presentación de escritos por vía telemática, aunque no será hasta 2007 cuando se

desarrolle reglamentariamente su implantación mediante RD 84/2007, de 26.01⁵⁰⁶, que luego estudiaremos en profundidad. Ese mismo año se promulga la Ley 41/2007, que introduce novedades en la materia, modificando, entre otros, el art. 162 LEC⁵⁰⁷.

i.- La **Ley 11/2007**, de 22.06, *de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos*, establece con rango de ley el derecho de los ciudadanos *a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos* (art. 6.1), pero, dadas las peculiaridades y características propias de la Administración de Justicia, será preciso elaborar un texto específico, y así llegamos a la **Ley 18/2011**, de 05.07, *reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación* (en adelante, “LUTICAJ”). Se trata de una ley transversal que, según su Preámbulo, tiene tres objetivos principales:

“primero, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones;...

...segundo, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia;...

...tercero, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales” (aptdo. I).

Desarrollando lo que en 1994 se había incorporado al art. 230.5 de la LOPJ y partiendo de la considerando de que la Ley 11/2007 “no es plenamente aplicable a la Administración de Justicia y [que] es necesaria una regulación específica” (Preámbulo, III), establece en su art. 33.1 que *los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por*

⁵⁰⁶ Haciendo uso de la habilitación general de desarrollo reglamentario de la LOPJ otorgada por su Disp. Ad. 1ª, aptdo. 2: *El Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley Orgánica, salvo cuando la competencia para ello corresponda al Consejo General del Poder Judicial a tenor de lo que dispone el artículo 110. Cuando afecten a condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes de los Jueces y Magistrados estarán sujetos a los mismos límites y condiciones establecidos para el Consejo General del Poder Judicial.*

⁵⁰⁷ Con esta Ley el legislador utilizó la recurrente fórmula de aprovechar la tramitación parlamentaria de una determinada ley para introducir reformas en otra, aunque poca o ninguna relación tengan entre sí. En el caso de la Ley 41/2007, la modificación de los preceptos de la LEC relativos a los actos de comunicación vino por la aprobación en el Senado de la enmienda n.º 90, de “adicción”, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) al Proyecto de ley y apoyándose en la siguiente “motivación”: “La implantación en la Administración de Justicia del sistema telemático denominado Lexnet requiere realizar las reformas procesales necesarias para garantizar la plena eficacia procesal tanto de la presentación de demandas y otros escritos y documentos como de la realización de notificaciones, citaciones y comunicaciones por medios telemáticos” [BOCG, Senado, n.º 130 (d) Serie II, 06.11.2007, pág. 71]. La propuesta resultaría plasmada en la que terminó siendo la Disposición final sexta de la ley.

*medios electrónicos*⁵⁰⁸, aunque esto se recoge, literalmente, de la misma Ley 11/2007 y de su art. 27.1⁵⁰⁹. En su art. 33.5, sin embargo, adopta el criterio contrario para los *profesionales de la justicia*, quienes, en lugar de poder elegir, *deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando estén disponibles*, mientras que en su art. 33.6 ordena que *las oficinas judiciales utilizarán en todo caso medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones y organismos públicos, salvo imposibilidad legal o material*.

No obstante, la ley 18/2011, que entró en vigor el 7 de julio de 2011 y es consciente de los retos que comporta, establece un plazo de cinco años (Disp. Ad. 2⁹⁵¹⁰), que se cumplirán el 7 de julio de 2016, para que se dote a las oficinas judiciales de los medios necesarios para la *tramitación electrónica de los procedimientos*.

j.-Finalmente, la **Ley 42/2015**, de 05.10, *de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, reconoce que “no se ha logrado una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos, por lo que “constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar

⁵⁰⁸ **Art. 33 LUTICAJ**: “Comunicaciones electrónicas”. 1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que una norma con rango de ley establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico.

2. Las comunicaciones a través de medios electrónicos se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario de las mismas.

3. Las Administraciones competentes en materia de justicia publicarán, en el correspondiente «Diario Oficial» y en la propia sede judicial electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con las oficinas judiciales.

4. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en las leyes procesales.

5. Los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén disponibles.

6. Las oficinas judiciales utilizarán en todo caso medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones y organismos públicos, salvo imposibilidad legal o material.

⁵⁰⁹ **Art. 27.1 Ley 11/2007 (LAECSP)**: Los ciudadanos podrán elegir momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos.

⁵¹⁰ **Disp. Ad. 2ª LUTICAJ**: “Adaptación a los sistemas de administración electrónica”. Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.

Preámbulo, IV, último párrafo: “Por último, en las disposiciones adicionales se establecen los plazos a los que se deben ajustar las distintas Administraciones con competencias en materia de justicia para el íntegro establecimiento en las oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos necesarios para la efectiva implantación de las tecnologías de la información y comunicación”.

mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al papel” (Preámbulo, I, párr. 3º). De cómo lo ha dispuesto versa el siguiente epígrafe.

1.3.- DE LA VOLUNTARIEDAD A LA OBLIGATORIEDAD

1.3.1.- Situación hasta la Ley 42/2015

El tránsito de la mera posibilidad de utilizar los medios informáticos y telemáticos en las relaciones entre los órganos judiciales y los profesionales al establecimiento de una obligación legal ha sido gradual. A la dotación de medios informáticos de unos y de otros para la gestión interna de sus procedimientos y asuntos en lo que podríamos denominar primera época o fase, ha seguido una segunda cuyo objeto ha sido el de que los actos de comunicación judicial se puedan realizar por vía telemática, mientras que la tercera de las fases ha sido la de hacer realidad la comunicación inversa, es decir, la de hacer posible que los profesionales presenten sus escritos y demandas por esa misma vía. La cuarta y última de estas etapas es aquella en la que actualmente nos encontramos: alcanzar el uso generalizado de las nuevas tecnologías por parte de todas las Administraciones y de todos los ciudadanos, sin distinción.

Por razón de la materia de nuestro estudio hemos de centrarnos en la segunda de esas fases. Hasta la reciente Ley 42/2015, la implementación de la práctica de los actos de comunicación por medios telemáticos se ha realizado como una alternativa más junto a los medios tradicionales y en todo momento supeditada a su disponibilidad técnica y material por parte de los interlocutores del ámbito de la Administración de Justicia. Alcanzado este objetivo, el siguiente paso ha sido la incentivación y priorización de esos medios, en el que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han tenido un papel protagonista, mediante la suscripción de convenios y protocolos entre las partes implicadas, comprometiéndose los órganos de representación de los distintos colectivos a instar a sus miembros a la utilización de los sistemas previamente habilitados.

Con la promulgación del Real Decreto 84/2007, de implementación del sistema Lexnet, ese compromiso por las nuevas tecnologías se intensifica y pasa a convertirse en una obligación para dos de los principales interlocutores del ámbito judicial. De un lado, los Secretarios judiciales, actuales Letrados de la Administración de Justicia, y los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que desempeñan sus funciones en la Oficina judicial, para quienes la *utilización del sistema Lexnet será obligatoria, eso sí, en aquellas Oficinas judiciales que dispongan del sistema* (art. 4.1p1); de otro, los Colegios de Procuradores, para los que también será obligatorio en *aquellos que cuenten con los medios técnicos necesarios* (art. 4.1p2)⁵¹¹. Junto a este régimen especial, el texto reglamentario, ya en un segundo nivel por no ser tan masiva su utilización, contempla *la incorporación al sistema Lexnet del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, así como la de*

⁵¹¹ Vid. Acuerdo marco de colaboración de 18 de noviembre de 2013 entre el Consejo General de Procuradores de España y el Ministerio de Justicia.

otros potenciales usuarios en la medida en que se alcancen acuerdos con los Colegios Profesionales⁵¹² y órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como otras Administraciones e instituciones relacionadas con la Administración de Justicia (D. T. única).

1.3.2.- La Ley 42/2015: Previsiones de Derecho transitorio

La Ley 42/2015 precisa la hoja de ruta ya marcada por la Ley 18/2011, debiendo distinguir:

A.- Los “profesionales de la justicia” y los órganos y oficinas judiciales y fiscales: Así nombrados tanto por la Ley 18/2011 –que considera como tales a *abogados, procuradores, graduados sociales y demás profesionales que actúan en el ámbito de la justicia* (Preámbulo, IV, párr. 3º)– como por la LEC, en la primera se había dejado previsto que los mismos *deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén disponibles* (art. 33.5), mientras en la segunda, la Ley 42/2015, contando con esa disponibilidad técnica va a ser una realidad, fija el día **01.01.2016** como la fecha a partir de cual *estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos* –por parte de aquellos profesionales– y la *realización de actos de comunicación procesal* –por los órganos y oficiales judiciales y fiscales– (Disp. Ad. 1ª.⁵¹³).

No obstante, dentro de este grupo hay que destacar al **Ministerio Fiscal**, el más beneficiado de todos gracias al régimen transitorio “super privilegio” ya comentado de no considerarse realizados los actos de comunicación con él sino hasta transcurridos *diez naturales* después de la fecha de recepción de los mismos (Disp. Trans. 4º.1, en relación con el art. 151.2 LEC). Esta anómala situación se prolongará hasta el **01.01.2018**.

⁵¹² Vid. *Acuerdo marco de colaboración de 18 de noviembre de 2013 entre el Consejo General de Graduados Sociales y el Ministerio de Justicia*, así como *Acuerdo marco de colaboración en materia tecnológica entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española*, de 09.06.2014. De este último transcribimos a su cláusula primera: “Compromisos de las partes. Las partes se comprometen a mejorar la interoperabilidad en sus relaciones, especialmente a través del uso prioritario del sistema Lexnet para el intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos.

El Consejo General de la Abogacía Española se compromete a instar a sus Colegios Profesionales a que la presentación de escritos y la recepción de notificaciones se realicen a través del mencionado sistema, con el certificado digital ACA, de conformidad con el artículo 6.3 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de información y la comunicación en la Administración de Justicia”.

⁵¹³ **Disp. Ad. 1ª Ley 42/2015:** “Utilización de medios telemáticos”. 1. *A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. [...].*

B.- Las partes o interesados sin procurador: La Ley 18/2011 se refiere a ellos como *ciudadanos* (art. 33.1) y la Ley 42/2015 como *interesados que no sean profesionales de la justicia y no estén representados por procurador* (D.T. 4º.2), aunque en el Preámbulo de esta segunda norma también habla de aquellos⁵¹⁴. Dentro de este primer grupo hay que hacer una sub-clasificación:

b.1.- Obligatorio para determinadas personas y entidades: Por su condición, cualificación o por su actuación en el tráfico económico-jurídico, factores de los que se deduce que son personas familiarizadas o habituales, o pudieran estarlo, al uso de las nuevas tecnologías y con el acceso a ellas, se establece la obligación, a partir del **1 de enero de 2017**, *a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia*, es decir, a usar medios telemáticos tanto para la presentación de escritos como para la recepción de actos de comunicación (arts. 152.2 y 273 LEC, en relación con la D. T. 4ª de la Ley 42/2015):

- a) *Las personas jurídicas.*
- b) *Las entidades sin personalidad jurídica.*
- c) *Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.*
- d) *Los notarios y registradores.*
- e) *Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.*
- f) *Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.*

El sustento legal de esta obligación se encuentra en el art. 33.1 de la Ley 18/2011, que la propia Ley 42/2015 modifica, para decir, primero, que *los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos*, previsión genérica ya presente en aquella ley, pero estableciendo a continuación, en un nuevo párrafo 2º, que, *asimismo, se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, de-*

⁵¹⁴ “Con la finalidad de que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia también en relación con los *ciudadanos*, se establece [...]” (Preámbulo, II, párr. 3º).

*dicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos*⁵¹⁵.

b.2.- Opcional para el resto de personas físicas: Con los sujetos no incluidos en la anterior relación que no estén representados por procurador y como dice el Preámbulo de la Ley 42/2015, “los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático, aunque ello será posible a partir del **1 de enero de 2017**” (II, párr. 3º). Este anuncio lo concreta luego con la reforma que hace del art. 152, en cuyo apartado 1, párrafo 4º de la LEC, en el que añade como nuevos lugares o modos por los que *se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación*, bien la *dirección electrónica habilitada al efecto*⁵¹⁶, bien la *comparecencia electrónica* o bien *los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario*; y con la del art. 273.2, disponiendo que estas personas *podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no*, aclarando enseguida que *el medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento*. No obstante, hasta el antes dicho 1 de enero de 2017 estas personas *no podrán optar ni ser obligados a la presentación o recepción de escritos y documentos o actos de comunicación por medios telemáticos en los términos del artículo 273. Transitoriamente y hasta esa fecha se seguirán haciendo dichos actos por los otros medios regulados en la ley* (D. T. 4ª, punto 3).

Con carácter complementario la Ley 42/2015 introduce también en el art. 152.2p3 la posibilidad de avisar previamente al destinatario de la existencia de una comunicación judicial a él dirigida mediante el “envío de avisos de notificación” (Preámbulo, ídem). Para ello, el mismo *podrá identificar un dispositivo electrónico* –no sabemos a qué se refiere exactamente con “dispositivo”–, *servicio de mensajería simple* –es decir, por mensaje tipo SMS al teléfono móvil– *o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones*⁵¹⁷. Tal como está

⁵¹⁵ La reforma la realiza la D. F. tercera, punto Tres de la Ley 42/2015, invirtiendo el sentido de la redacción anterior, donde lo que una norma con rango de ley podía obligar era a la utilización un medio “no electrónico”. Art. 33.1 Ley 18/2011 en su redacción originaria: “Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que una norma con rango de ley establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico”.

⁵¹⁶ El Proyecto de Ley (fechado el 27.02.2015) solo hablaba de la dirección habilitada “única”, de nueva creación, luego descartada en la redacción final. Tampoco incluía la previsión de la comparecencia electrónica y la mención residual de los otros medios telemáticos: “Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio o en la dirección electrónica habilitada única del destinatario”.

⁵¹⁷ El empleo del correo electrónico y los envíos de “SMS” ya está contemplado como uno de los servicios del Punto Neutro Judicial y, en fechas muy recientes, como uno de los nuevos servicios la

redactado este último inciso (que, además, solo se refiere a las notificaciones), hay que leer la disposición dos veces para interpretarla correctamente, en el sentido de que aquellos medios los identifican estas personas no representadas con procurador únicamente como un modo de ser avisados de la existencia de un acto de comunicación procesal, independientemente a la forma en que posteriormente sea practicado⁵¹⁸.

1.3.3.- Reformas realizadas en el artículo 162 de la LEC

El precepto de cabecera en la LEC en esta materia, el art. 162, ha sido reformado hasta la fecha en tres ocasiones desde el año 2000, en concreto por las Leyes 41/2007, 13/2009 y 42/2015, que han ido adaptando a nuestra ley procesal civil los cambios y evolución en la implantación de las nuevas tecnologías que estamos estudiando.

Mostramos los cambios realizados en el siguiente cuadro comparativo:

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN EL ARTÍCULO 162 LEC			
Redacción original 1/2000: “Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares”.	Redacción por Ley 41/2007[•]: “Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares”.	Redacción por Ley 13/2009[◇]: “Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares”.	Redacción por Ley 42/2015[@]: “Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares”.
1. Cuando los juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación <u>dispusieren de medios</u> electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de	1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación <u>dispusieren de medios</u> electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de	1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación <u>dispusieren de medios</u> electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de	1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío

sede judicial electrónica, previa suscripción, para la “recepción de avisos (email o SMS) de aquellos señalamientos asociados a procedimientos en los que actúen como intervinientes y aviso de que se la ha publicado un documento en área privada” (Circular 3/2015, de 28.10, del Secretario General de la Administrativa de Justicia, *relativa a las nuevas funcionalidades de la Sede Judicial Electrónica de los órganos judiciales de territorio dependiente del Ministerio de Justicia y el Portal de la Administración*). A fecha 30.10.2015 solo está disponible en las sedes de Badajoz, Mérida, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Melilla, Murcia, Soria y Valladolid (todas del “ámbito Ministerio”). Por su parte, la referencia a la publicación de “un documento en área privada” también se prevé como nuevo servicio, debiendo entenderse que no se realiza con carácter de acto de comunicación, sino a título meramente informativo.

Los avisos y alertas por “SMS” ya se han venido utilizando en otros territorios con competencias transferidas, como en Andalucía, que en 2014 inició su implantación, empezando por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

⁵¹⁸ El mismo párrafo comenzaba en el Proyecto de Ley así: “Adicionalmente, el destinatario podrá identificar [...]”; que haya desaparecido el adverbio es algo que no comprendemos, cuando el mismo venía a hacer más clara la nueva previsión legal.

<p>escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación <u>podrán efectuarse</u> por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda.</p> <p>Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.</p> <p>Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.</p>	<p>escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación <u>podrán efectuarse</u> por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.</p> <p>Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.</p> <p>Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.</p> <p>Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios</p>	<p>escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.</p> <p>Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.</p> <p>Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.</p> <p>En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios</p>	<p>y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación <u>se efectuarán</u> por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.</p> <p>Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.</p> <p>Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su utilización.</p> <p>2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por</p>
--	--	--	--

	<p>técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido intentada sin efecto y se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161.</p> <p>No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste</p>	<p>técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.</p> <p>Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.</p> <p>No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la</p>	<p>dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.</p> <p>Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.</p>
--	--	---	--

<p>2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquéllos habrán de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos o en la forma prevista en los artículos anteriores, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señale para cada caso.</p>	<p>en el resguardo acreditativo de su recepción.</p> <p>2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo soliciten, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.</p>	<p>fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.</p> <p>2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo soliciten, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.</p>	<p>No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.</p> <p>3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo soliciten, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.</p>
---	---	--	---

[•] **Ley 41/2007:** *Disposición final sexta.* [...] *Primero.*– [...] *4.º El artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:* [...].

[◊] **Ley 13/2009:** *Artículo decimoquinto.* [...] *Ochenta y ocho. Se modifica el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 162, que queda dividido en dos párrafos, con la siguiente redacción:* [...].

[@] **Ley 42/2015:** *Artículo único.* [...] *Veintidós. Se modifica el artículo 162, que queda redactado del siguiente modo:* [...].

De la comparación de estas tres reformas se desprende un paulatino acercamiento de la LEC hacia la obligatoriedad con rango de ley en el uso de los medios telemáticos. En su versión inicial el precepto se presentaba en la línea del art. 230 LOPJ y se limitaba a contemplar como mera posibilidad su uso, condicionado en cualquier caso a la dotación de esos medios por parte de los operadores jurídicos.

En 2007, partiendo de la hipótesis de su utilización, adopta una postura prudente por la que, si el destinatario no personado con procurador no accede telemáticamente al contenido de la comunicación en el plazo de tres días, se considerará frustrada la misma y se acudirá a la entrega presencial de la misma por el art. 161. Por el contrario, si aquel sí cuenta con representación procesal, las comunicaciones a los Colegios de Procuradores siguen con el régimen especial del art. 151.2, que convenientemente se adapta para que, se utilicen medios telemáticos o no, se tengan por realizadas al día siguiente de la recepción.

En 2009, mostrando un impulso por la vía telemática, cambia el criterio anterior respecto de las partes sin procurador para tener, en cualquier caso, por efectuada la comunicación cuando conste su correcta remisión telemática, aunque no se llegue a acceder a su contenido.

Por último, en 2015, instaurada a través de la disposición adicional primera de la Ley 42/2015 la definitiva obligación por parte de las oficinas judiciales y fiscales, profesionales y otros sujetos determinados de la utilización de los medios telemáticos, el reformado precepto se sitúa en otro nivel, aquel en el que ya no se plantea de si hay disponibilidad técnica o no, sino de si hay opción legal o no a su utilización.

1.4.- LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, TELEMÁTICOS, INFOTELECOMUNICACIONES O DE OTRA CLASE SEMEJANTE

El art. 162.1 emplea el plural para referirse a los *medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante*, sin emplear el adjetivo *informático*, que sí cita en el título: *medios electrónicos, informáticos y similares*. A continuación, dedica el resto del párrafo a determinar legalmente los requisitos de esos medios, todos ellos de carácter técnico. No obstante, para poder extraer las cuestiones clásicas de quién, cómo y cuándo hay que utilizar los medios telemáticos para los actos de comunicación, el precepto ha de ser puesto en conjun-

ción con la Ley 18/2011, especialmente con su art. 33.2⁵¹⁹, así como con la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, y con la LOPJ (art. 230).

1.4.1.- Requisitos técnicos

1º) Aptitud

Más presupuesto que requisito, estos medios han de ser medios electrónicos, informáticos o telemáticos que *permitan el envío y la recepción de escritos y documentos*, expresión genérica e impropia que emplea la LEC para referirse tanto a los actos de comunicación (envío de “documentos” en sentido excesivamente lato), cuya obligación de *enviarlos* corresponde a las *oficinas judiciales* y de *recibirlos a las partes o los destinatarios*, como a la presentación propiamente dicha de escritos y peticiones por estos dos últimos.

La LUTICAJ ofrece una definición de “medio electrónico” como *mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras* (Anexo).

2º) Disponibilidad

Han de estar disponibles tanto para el órgano judicial como para las partes y profesionales (art. 230 LOPJ y art. 33 aptdos. 5 y 6 LUTICAJ). La LEC ha dejado tras la Ley 42/2015 de prever esta contingencia en su art. 162.1, pasando de preverlo como posibilidad (“cuando... dispusieren”) a una obligación (*se efectuarán por aquellos*)⁵²⁰. Por ello, el art. 33.5 LUTICAJ ha quedado en entredicho al disponer que *los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos “cuando técnicamente estén disponibles”*⁵²¹, debiendo entenderse que prima la ‘lex nova’.

Dentro de este primer requisito, en realidad pre-requisito, podríamos incluir aquel otro exigido por el art. 230.5 LOPJ de la **compatibilidad**, también contemplado en la LUTICAJ bajo el sinónimo de la *interoperabilidad* (art. 1.2)⁵²². Natural-

⁵¹⁹ **Art. 33.2 LUTICAJ:** *Las comunicaciones a través de medios electrónicos se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario de las mismas.*

⁵²⁰ Por este motivo, no comprendemos por qué permanece el deber de *comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados*, dato indiferente desde el momento en que, o se está obligado a ello, o se opta, por quien legalmente pueda, a su utilización (párr. 2º del aptdo. 1).

⁵²¹ Con una redacción un tanto oscura, se define “disponibilidad” por la LUTICAJ como *propiedad o característica de los activos consistentes en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren* (Anexo).

⁵²² La ley la define como *la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos*. Y, a su vez, distingue entre, entre: “interoperabilidad organizativa”: *Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente*

mente, si el sistema que emplea el emisor del acto o escrito es no compatible con el del destinatario, no habrá comunicación ni diálogo posibles entre uno y otro.

3º) Autenticidad

Esos medios han de garantizar la *autenticidad de la comunicación y de su contenido*, es decir, la irrefutable identificación del autor del mensaje y, además, del hecho mismo de que se efectúa una determinada y unívoca comunicación. La LUTICAJ subraya el componente subjetivo de este requisito, pues se ha de identificar con la *autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario de las mismas* (art. 33.2). El sustantivo “autenticación” es también definido por esta ley, entendiéndolo como la *acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos y de la integridad y autoría de estos últimos* (Anexo). Asimismo, define “autenticidad” como la *propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos* (ídem).

La manera en que se garantiza la autenticidad de la comunicación es mediante la utilización obligatoria de la denominada **firma electrónica reconocida**, de cuya regulación se encarga otra norma, la Ley 59/2003, de 19.12, *de firma electrónica*⁵²³ (en adelante, “LFE”). Con este sistema, los documentos son firmados digitalmente como expresión de su incontrovertible autoría y con la misma fuerza y eficacia legal que la firma manuscrita en un documento en formato papel⁵²⁴. En este punto debemos detenernos, al menos en lo esencial, en la noción que establece la LFE de “firma electrónica” y las distinciones que al respecto de la misma realiza:

- Firma electrónica, que *es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante* (art. 3.1). Se trata de una definición genérica que no concreta las garantías que luego va a exigir para que esa firma sea válida a todos los efectos. Con esta mera aproximación al concepto, y como refiere FURQUET MONASTERIO, “técnicas tan simples como el uso de una firma manuscrita previamente escaneada

acordados relativos a los servicios que prestan; “Interoperabilidad semántico-jurídica”: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información, en el ámbito o de carácter judicial, intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación; e interoperabilidad técnica”: Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.

Vid., al respecto, RD 396/2013, de 07.06, por el que se regula el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).

⁵²³ BOE de 20.12.2003. **Art. 1.1 LFE:** *Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación.*

⁵²⁴ **Art. 3.4 LFE:** *La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.*

incluida al final de un mensaje o la utilización de un código o un número de identificación personal constituirían una firma electrónica”⁵²⁵.

- Firma electrónica **avanzada**, que es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control (art. 3.2). Frente a la anterior firma electrónica “simple”, con el adjetivo “avanzada” la ley da un paso más en las garantías de la comunicación, pues, como se desprende de la propia definición legal, siguiendo aquí a, “el receptor puede estar razonablemente seguro de que el emisor es quien dice ser y que remitió el documento electrónico con el mismo contenido con que ha sido recibido por él” (GAMERO CASADO⁵²⁶); es decir, “el destinatario puede estar seguro de que la firma ha sido creada con la correspondiente clave privada del emisor, pero no puede tener la misma certeza acerca de si el emisor es quien realmente dice ser” (FURQUET MONASTERIO⁵²⁷).
- Firma electrónica **reconocida**, que se considera como aquella *firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma* (art. 3.3). Con ella se alcanza el máximo nivel y la identificación inequívoca del usuario, que es el exigido por la LFE para desterrar cualquier género de desconfianza⁵²⁸ de las transacciones telemáticas y por ello parte del convencimiento de que “no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación” (EE.MM., III). La Ley se está refiriendo, en primer lugar, a la necesidad de que terceras personas o “terceros de confianza” llamados por la LFE *prestadores de servicios de*

⁵²⁵ Las comunicaciones procesales, op. cit., pág. 190-191. “Estos sistemas –afirma la autora– son relativamente fáciles de manipular o falsificar, proporcionan escasa seguridad a efectos de determinar la autenticidad de un documento en el sentido antes reseñado de coincidencia entre el autor aparente y el real, y tienen una aportación nula respecto a la integridad del contenido” (pág. 191).

⁵²⁶ GAMERO CASADO, EDUARDO: *Notificaciones telemáticas*, Bosch, Barcelona, enero 2005, pág. 126-127.

⁵²⁷ Las comunicaciones procesales, op. cit., pág. 193.

⁵²⁸ “El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas. No obstante, los datos más recientes señalan que aún existe desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la información, en particular, la Administración y el comercio electrónicos” (EE.MM., II).

*certificación*⁵²⁹, sin llegar a tener la cualidad de fedatarios públicos, avalen (“reconozcan”) la firma electrónica de su titular mediante la expedición “de certificados electrónicos⁵³⁰, que son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer en el ámbito telemático como firmante” (EE.MM., II). En el ámbito de la Administración de Justicia la prestadora de servicios de certificación es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)⁵³¹, pero su presencia no es excluyente de la intervención de otros prestadores reconocidos⁵³². En segundo lugar, a que la firma electrónica ha debido ser creada con un dispositivo que durante el proceso de generación cumpla con determinadas garantías técnicas de secreto, seguridad, protección frente a terceros e inalterabilidad de los datos o documentos sobre los que se encripta la firma⁵³³.

⁵²⁹ Según el **art. 2.2 LFE**, se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.

⁵³⁰ **Art. 6 LFE**: “Concepto de certificado electrónico y de firmante”. 1. Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

2. El firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

⁵³¹ Esta facultad fue reconocida en 2009 mediante la modificación del art. 81 de la Ley 66/1997 por Ley 55/2009: [...] Siete. Se faculta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a la prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad regulados en este artículo cuando fueren solicitados tanto por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sus normas de desarrollo, como por las partes y demás intervinientes en el proceso, de acuerdo con las reglas generales de postulación, en relación con los actos de comunicación procesal que, de acuerdo con las leyes procesales, puedan practicarse a través de técnicas y medios electrónicos, telemáticos e informáticos.

⁵³² Estos prestadores, también llamados “autoridades de certificación” no tienen por qué ser necesariamente entidades públicas o corporaciones del Derecho público, como ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía), ACCV (Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana), CATCERT (Agencia Catalana de Certificació), CAMERFIRMA (Cámaras de Comercio), ANCERT (Agencia Notarial de Certificación); también pueden serlo entidades privadas, tales como ANF-AC (Asociación Nacional de Fabricantes-Autoridad de Certificación), IZENPE (Izenpe S.A., Empresa de Certificación y Servicios) o EAD TRUST (European Agency of Digital Trust).

⁵³³ **Art. 24 LFE**: “Dispositivos de creación de firma electrónica”. 1. Los datos de creación de firma son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica. 2. Un dispositivo de creación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma. 3. Un dispositivo seguro de creación de firma es un dispositivo de creación de firma que ofrece, al menos, las siguientes garantías: a) Que los datos utilizados para la generación de firma pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto; b) Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma o de la propia firma y de que la firma está protegida contra la falsificación con la tecnología existente en cada momento; c) Que los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por terceros; d) Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que deba firmarse ni impide que éste se muestre al firmante antes del proceso de firma.

Dentro de este requisito podemos incluir uno adicional que también proporciona la firma electrónica: el llamado **no repudio**, en virtud del cual ni el emisor podrá negar la autoría del mensaje y el hecho mismo de haberlo enviado, ni el receptor negar que lo ha recibido y que ha accedió al contenido del mismo.

4º) Integridad

La LEC se refiere con este requisito a que la comunicación se remita y se reciba completa, en su totalidad, e inalterada, aspecto este último al que también se refiere la LUTICAJ, de forma más precisa y más técnica, cuando reclama la capacidad del medio telemático de preservar inalterable el mensaje durante todo el proceso y define este factor como la *propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada*. El empleo de la firma electrónica reconocida garantiza el cumplimiento de este requisito.

5º) Constancia fehaciente

Derivada de la anterior, en los autos (o expediente judicial electrónico) ha de dejarse constancia de que esos actos se han remitido y recibido de forma fehaciente y en un *momento* (LEC) o *fechas* (LUTICAJ) determinado. La LUTICAJ no incluye el término “fehaciente” en el art. 33.2, pero se remite a lo dispuesto en la *legislación procesal*, pese a lo cual exige en el art. 34.1 la acreditación de dos datos específicos que, por lo que a la ley procesal civil concierne, no se contemplan como requisito esencial en cualquier caso. La LEC habla, por un lado, de que quede constancia *de la transmisión y recepción*, incluido *sus fechas*; la LUTICAJ, por otro, requiere que *el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido*. Se trata de dos momentos diferentes en el tiempo –puesta a disposición y acceso– que la ley procesal no siempre exige, pues, de nuevo aquí, rige el principio de recepción y no el del conocimiento de los actos de comunicación, por lo que los mismos se tienen en principio por practicados con la mera puesta a disposición del destinatario, que en la LEC equivale a realización del acto (arts. 133.1), independientemente de que el mismo acceda o no a su contenido⁵³⁴ y siendo cuestión diferente la determinación de los efectos jurídicos de esa recepción y del inicio del cómputo de los eventuales plazos procesales que pudieran existir, que corresponde fijar a las leyes procesales y no a la LUTICAJ. Así, en el caso de la LEC, se establecen dos ficciones jurídicas:

- a) Si el destinatario es el Colegio de Procuradores, la recepción (aspecto técnico) no equivale a realización (aspecto jurídico) del acto, sino que esta se considera producida al día siguiente, desplegando efectos la comunica-

⁵³⁴ A diferencia de lo que ocurre con las comunicaciones administrativas electrónicas, en las que es el acceso al acto (visualización o descarga) y no la puesta a disposición del acto la realización del acto el que determina el momento de práctica de la notificación. Vid. **art. 28.2 Ley 11/2007 LAESCP**: *El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales*.

ción e iniciándose por dicha razón el cómputo de los plazos un día después, es decir, al segundo día de la recepción.

- b) Si se trata del resto de destinatarios que señala el art. 151.2 y de aquellos otros sin representación procesal, pasados tres días⁵³⁵ desde la recepción (el art. 162.2p1 dice incorrectamente *remisión*) sin que los mismos accedan a su contenido, impidiendo por tanto que el sistema informático pueda acreditar técnicamente un acceso que no se ha producido, se tendrá por realizado el acto ficticiamente y con el carácter de ‘iuris tantum’, desplegando sus efectos jurídicos y comenzando, en su caso, los correspondientes plazos, al cuarto día.

A nivel técnico, la constancia fehaciente *del momento en que se hicieron*, del día, hora, minuto y segundo en que se produce la comunicación telemática se realiza mediante el denominado “fechado o sellado de tiempo”, traducción de la expresión inglesa ‘time stamping’, distinguiendo la LUTICAJ entre el “sellado de tiempo”, que es la *acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos*, y el “sello de tiempo”, que define como *la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento* (Anexo en ambos casos).

Por último, si no pudieran realizarse la comunicación de forma electrónica o telemática, se practicará de forma convencional en papel *mediante entrega de copia de la resolución* (art. 162.2p2) y la diligencia o *documento acreditativo de la práctica del acto de comunicación* deberá ser digitalizado para su incorporación al expediente judicial electrónico (art. 34.2 LUTICAJ⁵³⁶). En este supuesto, el requisito de la constancia fehaciente no será producto de un proceso informático o telemático, sino de la actuación documentada en formato papel de un funcionario o procurador que luego ha de ser escaneada y convertida al formato digital.

6º) Confidencialidad

Paradójicamente, la LEC no exige en su art. 162 el cumplimiento de un requisito que ha ido cobrando una creciente importancia en la era digital y que es el de la confidencialidad, al que sí se refiere, además de la LOPJ en su art. 230.3, la

⁵³⁵ Cfr. **art. 28.3 Ley 11/2007**: *Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.*

⁵³⁶ **Art. 34.2 LUTICAJ**: *En caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, el destinatario del acto de comunicación tendrá derecho a obtener copia de la documentación recibida en formato electrónico.*

LUTICA], cuando en su art. 1.2 obliga a que las *tecnologías de la información* que habrán de utilizarse en la Administración de Justicia deberán asegurar, entre otros factores, la *confidencialidad*⁵³⁷ de los *datos, informaciones y servicios* que gestione. También lo hace en el art. 33.4 al disponer que *los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en las leyes procesales*.

1.4.2.- Instrumentos

Examinados los requisitos técnicos que han de reunir los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, pasamos a estudiar a continuación los instrumentos tecnológicos, aparatos o programas y sistemas informáticos existentes en la actualidad a disposición de las oficinas judiciales y profesionales de la Justicia, apreciando en cada caso si cumplen o no con aquellas exigencias legales.

a) *El fax*

En una primera aproximación podríamos identificar el fax entre los medios que prevé genéricamente el art. 162 en su apartado primero entre los *medios electrónicos*. No en vano, se trata de un aparato que a través de sus componentes electrónicos hace un “facsímile”⁵³⁸, es decir, una reprografía de un documento, que guarda en su memoria interna y que, haciendo uso de la línea telefónica y de un número de teléfono asignado al emisor previamente programado para enviar y recibir datos, lo transmite a otro terminal con la misma tecnología y con el número teléfono del destinatario para, en cuestión de segundos, imprimir una reproducción de aquel documento. Estas características parecen también ajustarse a la definición que de *medio electrónico* ofrece la LUTICA] en su anexo como *mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras*⁵³⁹.

⁵³⁷ *Confidencialidad*, según el Anexo de la Ley, es la *propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados*.

⁵³⁸ Diccionario RAE 23^a ed. (2014): “facsímile (Del lat. *fac* 'haz', 2.^a pers. de sing. del imper. de *facere* 'hacer', y *simile* 'semejante'). 1. m. Perfecta imitación o reproducción de una firma, de un escrito, de un dibujo, de un impreso, etc.; 2. m. fax”.

⁵³⁹ La descripción es exactamente la misma que ofrece la Ley 11/2007 en su propio Anexo de definiciones (apartado “p”), aunque, si no copiada, sí que parece inspirada en la que ya había proporcionado el RD 263/1996, de 16.02, *por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado* (BOE de 29.02.1996): “Art. 3. “Definiciones: [...] A los efectos del presente Real Decreto, se entiende por: [...] b) Medio: mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la información que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones”. Dicho texto normativo fue derogado por el actual RD 1671/2009, de 06.11, *por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos* (BOE de 18.11.2009).

Sin embargo, el problema principal de este medio es el de que los requisitos, entre otros, de la acreditación fehaciente e íntegra de la recepción exigidos legalmente no es infalible ni concluyente. Por eso hay autores, como REGO BLANCO⁵⁴⁰, que no lo consideran un medio adecuado para practicar comunicaciones electrónicas ‘stricto sensu’. El dispositivo puede imprimir automáticamente el denominado ‘report’, reporte de actividad o prueba de la correcta transmisión de la comunicación, pero ello no permite afirmar de forma indubitada que la persona destinataria lo haya recibido. El documento se ha podido haber quedado guardado en la memoria del aparato por falta de papel, atasco o cualquier otro problema; puede haber un corte del suministro de electricidad y haberse perdido los datos que se encontraban almacenados; etc.; incluso puede haber recogido el folio impreso un tercero, afectando con ello al requisito también exigido de la confidencialidad; todo mientras que al emisor le va a seguir constando de todos modos un ‘ok’ de la remisión. Por esos motivos la deficiencia que, ‘per se’, padece el fax solo puede suplida con el concurso del propio receptor, que ha de acusar expresamente recibo del envío en prueba de la conformidad de la comunicación o, en su defecto, desprenderse por hechos o acciones posteriores, como la interposición de un recurso a una resolución notificada por dicho medio, que necesariamente ha tenido conocimiento de la misma. Precisamente la fehaciencia de la recepción acreditada por estos hechos concluyentes, externos y ajenos al medio empleado, es la que ha permitido que la jurisprudencia haya validado el uso del fax como un medio eficaz, material y procesalmente, de practicar un acto de comunicación judicial. Así, el **ATS 30.10.2001**⁵⁴¹ desestimó el recurso de queja formalizado por un parte a la que la Audiencia había declarado extemporánea la preparación de un recurso de apelación frente a una sentencia que había sido notificada a la recurrente al fax de su letrado previamente facilitado por la misma y que había sido utilizado con normalidad en las notificaciones anteriores:

“[...] la Sentencia de apelación se notifica, el 9 de Marzo de 2001, por fax a ambas partes, según acreditan los justificantes de dicha remisión unidos a autos; que el fax remitido a la ahora recurrente fue debidamente recibido por el Letrado cuyo domicilio había quedado indicado para oír notificaciones, como la propia recurrente manifiesta y lo prueba, además, el hecho de que días después el Letrado receptor enviara dicha sentencia, también por fax, a la Letrada D^a. Carmen Herranz, lo que también reconoce y consta por la aportación, por la propia recurrente, de la fotocopia del justificante de dicho fax. Este último fax es enviado el día 16 de Marzo de 2001, es decir, seis días hábiles después de notificada la Sentencia de apelación, días en los que el recurrente no hizo manifestación alguna sobre la infracción del artículo 162 LEC que ahora se invoca, ni de ningún otro precepto legal. Debe también dejarse constancia de que todas las notificaciones que obran en el rollo de apelación se han efectuado por comunicación facsímil a los abogados de ambas partes contendientes, cuyos domicilios se habían designado a tal efecto, sin que en ningún

⁵⁴⁰ “Capítulo VIII. Las comunicaciones...”, op. cit., pág. 352. La autora cita, a su vez, a DELGADO y CUELLO, DE HOYOS y CHÁVES.

⁵⁴¹ Roj: ATS 1377/2001.

momento alguno se haya denunciado irregularidad alguna causante de indefensión, aparte de la que por la presente resolución se examina” (F. D. 2ª).

Los mismos argumentos fueron esgrimidos, en unión de otros, por el **TC** en su sentencia **28/2010**, de 04.10⁵⁴², para desestimar el recurso de amparo. El Tribunal Superior de Justicia había declarado extemporánea la personación de la recurrente por entender que había sido correctamente emplazada por fax por el tribunal inferior, declarando desierto el recurso, hecho que aquella negaba⁵⁴³.

“En el presente caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entrando en el examen de fondo de la petición anulatoria formulada por la Abogacía del Estado, procedió a su rechazo tras valorar que fue el propio Abogado del Estado quien en su primer escrito procesal suministró el número de fax al que debían ser remitidas las comunicaciones procesales, que éstas se habían efectuado siempre sin incidencia alguna y que no se había cumplido la carga de alegar las deficiencias impeditivas de la recepción ni, menos aún, se habían acreditado (F. J. 4º).

Lo relevante (y sorprendente) de la resolución es que parece aplicar por analogía el régimen de la carga de la prueba que se aplica a las comunicaciones mediante entrega a través de terceros receptores, de modo que es el destinatario quien ha de demostrar que las mismas no le fueron entregadas por aquellos. En el caso analizado, da a entender que era la Abogacía del Estado recurrente la que tenía que haber acreditado la falta de recepción efectiva de la comunicación, aunque para el tribunal la misma estuviese acreditada mediante el “reporte de actividad” del fax, con lo que, como afirmó CHÁVES GARCÍA al comentar la sentencia, “se produce así un desplazamiento de la carga probatoria de la recepción, o de la ausencia de recepción hacia el destinatario”⁵⁴⁴.

Las anteriores deficiencias y problemas jurídicos que plantea no han impedido que el uso del fax siga siendo cotidiano hoy en día en la práctica judicial, aun con carácter secundario en el ámbito civil⁵⁴⁵ frente al uso masivo de Lexnet con los

⁵⁴² BOE de 29.10.2010.

⁵⁴³ “[...] el Abogado del Estado sostiene que pese a obrar en las actuaciones el resguardo o reporte de la remisión del fax por la Secretaría de la Audiencia Provincial, sin embargo tal resguardo no implica una fehaciente constancia de su recepción, pues son diversas las circunstancias que pueden haber impedido que la comunicación se completara, tales como una bajada de tensión, la acumulación en la memoria del aparato receptor o un simple bloqueo tecnológico, por lo que el plazo de personación no debió iniciarse hasta que la parte se dio por emplazada” (F. J. 4º).

⁵⁴⁴ CHÁVES GARCÍA, JOSÉ RAMÓN: “El Tribunal Constitucional respalda las notificaciones por fax”, ‘Blog’ del autor (alias “Sevach”) en www.contencioso.es” (<http://contencioso.es/2010/11/13/el-tribunal-constitucional-respalda-las-notificaciones-por-fax/>) (fecha consulta 15.03.2014). Coincide en esa apreciación REGO BLANCO, “Capítulo VIII. Las comunicaciones...”, op. cit., pág. 355, nota al pie n.º 56.

⁵⁴⁵ En el ámbito de la instrucción penal el uso del fax tiene gran predicamento, sobre todo en las comunicaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, al no ser preceptiva la intervención de procurador sino hasta la apertura de la fase de juicio oral, es habitual notificar las resoluciones que se dictan a los letrados de las partes, considerándose, en principio, suficiente, al menos para las resoluciones de mero trámite, la unión a los autos del “OK” acreditativo de su correcta remisión.

Como singularidad, el Tribunal Supremo permite de ordinario la recepción de escritos vía fax. Vid. Acuerdo de 07.11.2011, de la Sala de Gobierno, en *relación con el establecimiento de un único número*

procuradores y del correo postal (sin perjuicio de las comunicaciones mediante entrega ex art. 161) con las partes no representadas por aquellos y con otros intervinientes en el proceso. En la medida en que los autos aún habrán de coexistir los autos tradicionales en papel con el expediente judicial electrónico a la espera de la Administración con “cero papeles” sea de verdad a una realidad plena, el fax se sigue prefiriendo frente al correo electrónico corporativo, pues es el que proporciona de una forma más rápida y cómoda (basta unir el reporte) una mínima prueba de la remisión y recepción.

No obstante, en la LEC, aparte de ser uno más de los datos que del demandado puede facilitar el demandante (art. 155.2), la utilización expresa de este medio únicamente se ordena en el art. 629.1, con el fin de anticipar los mandamientos de anotación de embargo⁵⁴⁶. El hecho de que el fax no sea un instrumento técnico que acredite por sí mismo la recepción del envío, se suple en este caso con la previsión, conforme a la solución que hemos apuntando, de que el Registrador, *por igual medio, el mismo día o el siguiente hábil, confirmará la recepción y comunicará su decisión de practicar o no el asiento de presentación* (art. 418.4 ‘in fine’ RH). La remisión habrá de ordenarse por el Letrado de la Administración de Justicia el mismo día de su expedición⁵⁴⁷, previendo el precepto que, además del fax, se pueda emplear también *cualquiera de las formas previstas en el artículo 162 de esta Ley*. No obstante, tras la Ley 42/2015 y la reforma que ha realizado del art. 167.1 para hacer obligatoria la remisión de los mandamientos y oficios por aquellos medios, desde el próximo del 01.01.2016 no será ya posible la entrega en mano al procurador o parte del mandamiento original para su posterior presentación en el

de fax para la recepción de escritos dirigidos a este Tribunal por particulares y profesionales (BOE de 16.11.2011).

⁵⁴⁶ **Art. 629.1:** “Anotación preventiva de embargo”. 1. *Cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el Secretario judicial encargado de la ejecución, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad o anotación de equivalente eficacia en el registro que corresponda. El mismo día de su expedición el Secretario judicial remitirá al Registro de la Propiedad el mandamiento por fax, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 162 de esta ley. El Registrador extenderá el correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista por la legislación hipotecaria.* De ese modo el interesado gana rango registral, pues si presenta el documento original dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, los efectos registrales de la anotación comenzarán a computarse retroactivamente desde la fecha consignada en el asiento de presentación (recepción) del fax (art. 418.4 RH).

⁵⁴⁷ Obsérvese que la legislación hipotecaria, a la que el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite de cara a completar la eficacia de dicha remisión por fax, permite que el envío se realice no solo *el día de su firma*, como dice la LEC empleando “expedición” como sinónimo de “firma”, sino también *en el siguiente hábil* (art. 418.5 RH). Sea en un día o en otro, en la práctica los Registradores de la Propiedad deniegan la práctica del asiento de presentación en el Libro Diario si reciben el fax en un momento posterior, medida perjudicial para la parte ejecutante que no está prevista en la norma, además de que al tratarse de un plazo dirigido al tribunal y no a las partes es un por definición un plazo impropio y sin carácter preclusivo. En este sentido, CACHÓN CADENAS: “La ejecución forzosa. Algunos problemas prácticos”, *La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000* –Coord.: GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS–, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 362.

Registro de la Propiedad y abono del impuesto y arancel correspondientes. La vía obligatoria será, como acto de comunicación que es, la remisión del propio mandamiento por el *sistema telemático* que exista en la Administración de Justicia (Disp. Ad. 1ª), con lo que el uso del fax, al menos para estos trámites, habrá llegado al fin de sus días.

Dentro de este apartado hacemos mención también del *burofax*, una modalidad de fax dotada de servicios adicionales que son prestados por un tercero que, además de proporcionar el equipamiento para el envío y recepción del documento, puede entregar al emisor un acuse de recibo del la remisión y, además, certificar el contenido de lo enviado a efectos probatorios. Esta vía de comunicación, de gran aceptación en el tráfico jurídico ha sido tradicionalmente prestada por la entidad Correos, al venir revestida legalmente de presunción de veracidad y de fehaciencia en su actuación y pese a la liberalización del sector.

b) *El correo electrónico*

El correo electrónico, traducción de la palabra inglesa ‘electronic mail’ o ‘e-mail’, es un sistema que utiliza la red de Internet para enviar y recibir mensajes en formato digital a través de programas informáticos, portales o servicios específicos proporcionados por diferentes empresas privadas y organismos públicos, que otorgan al usuario una cuenta o dirección de correo personal y reservado, accesible mediante contraseña. Los mensajes que envía y recibe quedan alojados en el servidor del proveedor (‘host’) y pueden ser consultados y gestionados en cualquier momento. Entre sus opciones se encuentra la de informar automáticamente al emisor si el destinatario ha abierto el mensaje, pero eso no demuestra que lo haya leído, ni que, en efecto, se trate de la persona interesada. Ahí comienzan los problemas jurídicos del correo electrónico a efectos de su valor probatorio, a los que hay que añadir los riesgos en la suplantación de identidad del autor del mensaje y la manipulación de su contenido.

Para superar los anteriores inconvenientes se ha llegado a proponer la certificación del *correo electrónico* (correo electrónico certificado), bien mediante depósito notarial⁵⁴⁸, bien a través de prestadores de servicios de certificación y del

⁵⁴⁸ Según propuesta de ÁLVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS, MANUEL, para aquellos procuradores que ejecutaran los actos de comunicación judicial ex art. 152.2º: “Es un medio idóneo para notificar a empresas, dado que su correo electrónico consta públicamente en sus comunicaciones o página de Internet. A estos efectos, en la demanda se señalará el correo electrónico en el que practicarse la comunicación acompañando los documentos que justifiquen que dicha dirección de correo corresponde al destinatario. Se hará mediante una empresa de correo certificado con depósito notarial, que dará prueba indubitada a través de un notario de su envío y contenido. Una copia del mismo quedará depositada durante un año en una notaría, pudiendo solicitarse testimonio del mismo. Algunas empresas que facilitan este servicio son certimail.es y confirmsign.com. Deberá adjuntarse un modelo de diligencia de citación, emplazamiento o requerimiento, firmado por procurador (los modelos ya analizados), donde se le aperciba además del contenido del art. 162 LEC” (“Práctica de los actos de comunicación pro procuradores de los tribunales”, *ICPM, revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid*, n.º 14, tercer trimestre 2013, pág. 14).

uso de la firma electrónica, opción avalada por el **ATS 21.03.2013**⁵⁴⁹, que declaró válido el requerimiento de pago efectuado por un procurador a su representado-deudor a través del correo electrónico de este último:

“La situación fáctica parte de los múltiples intentos de localizar a la persona a que se refiere la jura de cuentas, intentos por la vía prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, ante su fracaso, el procurador de los tribunales obtuvo la efectiva notificación y requerimiento en forma telemática, con los certificados electrónicos acreditativos de la práctica de ello emitidos por un prestador de servicios de certificación (F. D. 2º).

“Como consecuencia de la aplicación de la normativa expuesta a la situación de hecho [se refiere al art. 162 LEC y a la LFE], aparece la seguridad de la práctica de la notificación y requerimiento, intentada anteriormente por los medios tradicionales. Por los medios electrónicos se ha practicado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil con la seguridad que contempla la citada ley de firma electrónica (F. D. 3º)⁵⁵⁰.

c) *El sistema Lexnet (remisión)*

Por su gran importancia y por ser el artífice de haber hecho realidad la realización de millones de notificaciones telemáticas a los profesionales de la Justicia, principalmente a los procuradores, a su estudio dedicamos el epígrafe siguiente.

2.- LA INTERRELACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL Y LAS PARTES: EL SISTEMA “LEXNET”

2.1.- REGULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Además de la dotación a los órganos judiciales de ordenadores y herramientas informáticas para la gestión interna de los procedimientos, también era necesario comunicarse telemáticamente, si no con todas las personas que demanden tutela judicial, sí al menos con los profesionales que las representan. Al mismo tiempo, lo deseable para una buena administración de justicia era que estos profesionales pudieran presentar sus demandas y escritos también de forma telemática. Así

⁵⁴⁹ Roj: ATS 2501/2013.

⁵⁵⁰ Del supuesto de hecho de esta escueto auto conocemos más detalles gracias al “comentario” que de la misma realizó MORENO MARTÍN-RICO, LUDOVICO, que refirió que el procurador se sirvió de un prestador de servicios de certificación electrónica: “El precitado Auto resuelve un recurso de reposición planteado por el procurador en un procedimiento de jura de cuentas, en el que tras intentarse por el tribunal la práctica del requerimiento a su cliente en los domicilios conocidos del mismo y facilitados por la averiguación a través del PNJ, solicita en virtud del art. 152.1, 2º LEC, se le habilite para encargarse personalmente de la práctica del acto de comunicación consistente en la notificación y requerimiento a su cliente. Dicha diligencia de notificación y requerimiento la practicó el procurador a través del correo electrónico facilitado por su propio cliente para recibir las comunicaciones en relación al procedimiento del cual trae causa la jura de cuentas y ello de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acreditando el acto de la notificación mediante tres certificados: un primer certificado del contenido de la comunicación, del destinatario y remitente, un segundo certificado de la remisión de la comunicación y un tercer certificado de la lectura y recepción de la comunicación por parte del destinatario” (*ICPM, revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid*, n.º 25, segundo trimestre 2013, pág. 32).

nace el sistema informático denominado “Lexnet” (“LexNet” o “LexNET”), desarrollado por el Ministerio de Justicia y regulado por el **Real Decreto 84/2007**, de 26.01, *sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos*⁵⁵¹.

Este sistema “está constituido por una arquitectura basada en correo electrónico securizado que proporciona máxima seguridad y fiabilidad en la comunicación mediante la utilización de firma electrónica reconocida. El sistema añade a las garantías de autenticidad, integridad y no repudio que proporciona la firma electrónica reconocida, en los términos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, mediante los mecanismos técnicos adecuados, la de confidencialidad en las comunicaciones y la de sellado de tiempo” (Preámbulo, II)⁵⁵². Con ello vemos con Lexnet se cumplen los requisitos técnicos legalmente exigidos que hemos estudiado anteriormente y, de hecho, se trata del *sistema de notificación*, en palabras del art. 34.1 LUTICAJ, empleado mayoritariamente en la actualidad en España.

Como el propio título del RD 84/2007 revela, Lexnet tiene dos grandes funcionalidades⁵⁵³:

⁵⁵¹ BOE de 13.02.2007. Esta norma reglamentaria, según explica su preámbulo o exposición de motivos, se dictó “en uso de la habilitación contenida en el apartado 2 de la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo 230, tras la redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, establece la posibilidad de que tanto los órganos judiciales como las personas que demanden ante ellos la tutela judicial de sus derechos e intereses utilicen en sus relaciones cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, compatibles entre sí, siempre que estas se produzcan en condiciones de seguridad, autenticidad, integridad, constancia fehaciente de su realización y del momento en que se efectúen, con garantías de confidencialidad de los datos de carácter personal, así como con respeto de las garantías y requisitos previstos en las leyes de procedimiento” (II, párr. 1º).

⁵⁵² En parecidos términos se expresa el **art. 2** del Real Decreto, dedicado a la “Definición y características del sistema”: *El sistema Lexnet para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, es un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de firma electrónica reconocida, en los términos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, satisface, por un lado, las características de autenticación, integridad y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados las de confidencialidad y sellado de tiempo, conforme lo establecido en el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y, por otro, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes procesales, prestando las funcionalidades indicadas en el anexo V de este real decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.*

⁵⁵³ Las detalla en su anexo V: “Funcionalidades del sistema Lexnet”. *El sistema Lexnet prestará las siguientes funcionalidades:*

- a) *La presentación, transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión a la Oficina Judicial encargada de su tramitación.*
- b) *La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado el traslado y que éste se ha efectuado a los restantes Procuradores personados, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.*
- c) *La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.*

- 1º. **La presentación telemática de escritos y documentos**, incluido, cuando proceda conforme al art. 276 LEC, el traslado de copias y documentos.
- 2º. **La realización telemática de actos de comunicación procesal**, función que compete, lógicamente, a los Juzgados y Tribunales. Esta segunda faceta es la que ha tenido un más rápido desarrollo, pudiendo afirmarse que a partir del año 2008/2009 se ha ido asentando paulatinamente en la actividad judicial la nota de cotidianeidad en la notificación –en sentido lato– telemática de las resoluciones procesales a los procuradores a través de Lexnet.

Es de resaltar que, según una memoria presentada en abril de 2015 por el Ministerio de Justicia (Subdirección General de Nuevas Tecnologías) como candidatura a los “Premios TIC Administración Judicial Electrónica 2015”, de la Fundación Socinfo⁵⁵⁴, desde el 10.03.2004 y hasta el día 21.04.2015 los órganos judiciales que utilizan el sistema Lexnet han practicado más de 174 millones de notificaciones (174.627.659), más de 46 millones solo en 2014 (46.293.742).

Después de algunas experiencias piloto en el año 2003⁵⁵⁵ y antes incluso de ser desarrollado reglamentariamente por el citado RD 84/2007⁵⁵⁶, el sistema in-

d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la correcta remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.

e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones telemáticas a que se refieren las letras a), b), c) y d) de este anexo, realizadas a través del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema, y proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año.

⁵⁵⁴ Fundación Sociedad de la Información (www.socinfo.es). El Ministerio presentó como candidatura el “Proceso de implantación de la presentación telemática de escritos a través del Sistema de Gestión de Comunicaciones telemáticas Lexnet (Memoria)”, resultando finalmente premiado (Revista *Sociedad de la Información*, 6 mayo 2015, págs. 48-61). El documento puede encontrarse en <http://socinfo.es/contenido/seminarios/0512justicia11/JusticiaLexnet.pdf> (fecha consulta 19.10.2015).

⁵⁵⁵ Según explica GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, FAUSTINO, el proyecto Lexnet “[s]e implantó como experiencia piloto en 2003, en el marco de comunicaciones entre Tribunal Supremo y en las sedes de los Juzgados de León y Palma de Mallorca” (*La Administración de Justicia digitalizada. Una necesidad inaplazable*, Ediciones Experiencia, Barcelona, julio 2008, pág. 117).

⁵⁵⁶ El sistema Lexnet fue aprobado por el CGPJ en Pleno de 28.09.2005, en el que criticaba la utilización de los protocolos y convenios hasta entonces suscritos y reclamaba una regulación con carácter legal (Acuerdo “Cuarenta y cuatro.- Aprobar el sistema Lexnet (Servicio de presentación telemática de escritos y notificaciones), desarrollado por el Ministerio de Justicia, realizando, al propio tiempo, las siguientes observaciones: [...] 1.4. Hasta el momento, las pruebas piloto efectuadas se han basado en el establecimiento de “protocolos particulares” suscritos con los correspondientes Colegios de Abogados y Procuradores. Tal proceder se estima inadecuado en una futura implantación generalizada del sistema LexNet al considerar que un “convenio” o “protocolo” no es la forma adecuada de regular cuestiones de transcendencia procesal como las que nos ocupa, además de contravenir el principio de legalidad procesal consagrado en el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que un mero protocolo pueda en esta materia suplir o sustituir a la Ley”).

formático Lexnet (o “LexNet”) comenzó a implementarse en 2004 en las oficinas judiciales del ámbito de actuación del Ministerio de Justicia (territorio no transferido o “territorio Ministerio”), habiéndose producido su extensión y utilización en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas mediante la celebración con el Ministerio de Justicia de *convenios de cooperación tecnológica* (art. 1.3⁵⁵⁷), en el marco de los cuales el que el primero cede a las segundas la utilización de esta herramienta⁵⁵⁸. Este proceso ha culminado en noviembre de 2012 con la implantación de Lexnet en todo el territorio nacional, con excepción de tres Comunidades Autónomas, que tienen un sistema de notificaciones telemáticas propio y que son Cantabria (*Portal del Profesional*⁵⁵⁹), Navarra (*PSP-Portal de Servicios para Profesionales*) y País Vasco (*JustiziaSIP*).

2.2.- FUNCIONAMIENTO

2.2.1.- Tiempo hábil. Cómputo de plazos

El Real Decreto dispone que *el sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año*, pero deja bien claro que, *en ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales* (art. 6.1). En el caso de la LEC, la previsión se traduce en que el art. 130.3p2 (de 08:00 a 22:00 horas) tendría que ser de plena aplicación a los actos de comunicación telemáticos, con lo que, en teoría, sería procesalmente válido enviar una notificación a las 21:00 horas, por ejemplo. Del mismo modo, un procurador podría presentar telemáticamente un escrito a esa hora y el órgano judicial lo tendría que tener por presentado el primer día y hora hábil siguiente (art. 135.5) y habría tenido que proveerlo, sin discriminación alguna, como uno presentado en formato papel.

⁵⁵⁷ **Art. 1.3 RD 84/2007:** *La implantación del sistema Lexnet se producirá en las Oficinas Judiciales correspondientes al ámbito de competencia del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia podrá suscribir convenios de cooperación tecnológica con las comunidades autónomas que hayan recibido los trasposos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, para la implantación del sistema telemático denominado Lexnet en sus ámbitos territoriales correspondientes.*

⁵⁵⁸ Estos Convenios “para la cesión de los derechos de uso del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos, documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos del Ministerio de Justicia”, han sido publicados por las siguientes resoluciones de la Secretaría de Estado de Justicia (por orden cronológico): *Comunidad Valenciana* (Res. de 03.11.2005, BOE de 21.11); *Cataluña* (Res. de 02.06.2006, BOE de 26.06); *Galicia* (Res. de 10.01.2007, BOE de 02.02); *Andalucía* (Res. de 31.03.2009, BOE de 02.05); *Aragón* (Res. de 14.12.2009, BOE de 28.12); *Asturias* (Res. de 02.08.2010, BOE de 27.08); *Madrid* (Res. de 26.05.2011, BOE de 06.06); *Canarias* (Res. de 09.12.2011, BOE de 23.12); *La Rioja* (Res. de 15.01.2013, BOE de 25.01).

⁵⁵⁹ Vid. *Protocolo de funcionamiento para el envío y recepción de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia en Cantabria*, de 24.02.2012.

Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia autor del texto reglamentario dictó poco más de un año después, con fecha 20.05.2008, un **Protocolo marco de actuación para la implantación del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet** en el que estableció una “operativa funcional para la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos”. De entre las reglas que figuran en dicho texto destacan dos, ambas relativas a los actos de comunicación realizados a los procuradores:

- [...] 2. *Los actos de comunicación telemáticos se remitirán desde las oficinas judiciales al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores entre las 09:00 horas y las 15:00 horas de todos los días hábiles procesales*”.
- 3. [...] *Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por vía telemática, el correspondiente Procurador dado de alta en el sistema y personado en autos no acceda a su contenido en el día siguiente, el Administrador del Colegio de Procuradores, debidamente habilitado al efecto, accederá a su contenido telemático, lo trasladará al Procurador respectivo en formato papel y se entenderá como recepcionado formalmente y por realizado el acto de comunicación a todos los efectos legales*.

El primer punto, determinado una franja horaria en que las oficinas judiciales podrían remitir los actos de comunicación a los Colegios, de nueve a quince horas, supone una abierta contravención del citado art. 130.3p2, que no establece tal limitación, ni tampoco distinción alguna en función del modo en que se practican los actos de comunicación⁵⁶⁰. Pero, más grave aún ha sido que durante los últimos años la modificación unilateral en la aplicación del art. 151.2 se ha realizado mediante instrucciones, convenios y otros protocolos de carácter administrativo y de ámbito autonómico, incluso provincial, amparándose en que se han dictado en desarrollo del propio sistema Lexnet y que han limitado todavía más el margen temporal dispuesto por el propio Protocolo Marco o lo han modulado de forma en absoluto prevista en ley. Así, se han llegado a establecer cláusulas en las que se ha dispuesto que “las notificaciones enviadas por los juzgados hasta las 12 de la mañana se entenderán notificadas al procurador al siguiente día hábil y los plazos

⁵⁶⁰ En contra, PELAYO TORRENT, RAMÓN, quien, sorprendentemente para nosotros, entendió respecto del horario de 9 a 15 horas que es la “única «novedad» que introduce el Protocolo y que, por su puesto en nada altera lo dispuesto legalmente” (“¿Pueden vulnerar los “protocolos de funcionamiento” del sistema Lexnet lo dispuesto, respecto al cómputo de plazos procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Revista Aranzadi Doctrinal* (RAD) n.º 2, mayo 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pág. 140).

Y ello a pesar de que el propio Protocolo afirmaba que se dictaba con pleno respeto a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las leyes procesales, así como en el Real Decreto 84/2007 citado.

Esta restricción también se llegó a imponer en algunos territorios con anterioridad al uso de medios telemáticos. En Cataluña, se dictó el *Protocolo-marco relativo al servicio común de recepción de actos de comunicación/notificaciones, organizado a través del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya*”, suscrito con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de su Secretaría de Gobierno el 13.04.2008. En su “pacto” tercero se estableció que “los actos de comunicación se entregarán por los órganos jurisdiccionales en el Servicio de Recepción de Notificaciones (SRN) desde las 9 hasta las 11 horas, de lunes a viernes”.

procesales se computarán desde el siguiente día hábil a la notificación”, como se hizo en el *protocolo de implantación* de Lexnet en Almería. En Palma de Mallorca, la *Instrucción de Servicio 2/2010* del Secretario Coordinador Provincial dispuso que “los órganos judiciales se limitarán a realizar un único envío diario por Lexnet, de lunes a viernes, entre las 8 y las 14 horas. Las notificaciones –incluidas las de los Juzgados de Instrucción– que se hagan fuera de estos horarios se entenderán a todos los efectos realizadas a las 8 horas del día hábil siguiente” (Punto Quinto). O en Málaga, donde el *Protocolo de funcionamiento del sistema telemático para la realización de actos de comunicación procesal y presentación de escritos*, suscrito el 13.01.2011 entre el Presidente de la Audiencia Provincial, la Secretaria Coordinadora Provincial, el Decano del Colegio de Procuradores de la provincia y el Magistrado-Juez Decano de Málaga, se estableció que las notificaciones enviadas por los juzgados a través de Lexnet “con posterioridad a las 12 horas, en vísperas de festivos, así como las vísperas de los días 1 de agosto y los días 24 y 31 de diciembre, se entienden recibidas al día siguiente hábil” (Aptdo. IV)⁵⁶¹. El art. 151.2 es, sin embargo, bien claro: los actos de comunicación “se tendrán por realizados (= notificados) al día siguiente a la fecha de recepción”.

Esta doble ilegalidad se ha mantenido hasta que, ocho años después, la Ley 42/2015 le ha dado carta de naturaleza mediante la adición del siguiente inciso final a ese precepto: *Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido el día siguiente hábil*. Se ha adoptado con ello la solución que ya existía en el art. 135.5 (ahora 135.1) para la presentación de escritos presentados en tiempo inhábil⁵⁶², aunque le ha faltado la mención a la *hora hábil*, que habrá que dar por sobreentendida.

El segundo de los puntos citados del *Protocolo marco* alude directamente con su contenido al art. 151.2 y, en parte, al art. 162.1p4, pero, en lugar de contradecirlos, los ha completado. Si el procurador no accede al contenido del acto de comunicación correctamente remitido al Colegio de Procuradores al día siguiente de su remisión, será el Administrador de este el que lo haga y se lo trasladará a aquel en formato papel, con el importante dato de que no por ello se habrá ganado un día más, sino que el acto se seguirá teniendo realizado el día posterior a la remisión. La Ley 42/2015 ha modificado ambos preceptos de la ley procesal sin abordar esta particularidad, por lo que habrá que entender que el Protocolo sigue siendo de aplicación al respecto.

2.2.2.- Simulación práctica

⁵⁶¹ Hay ejemplos con el criterio contrario, incluso con exceso de celo, como el de Córdoba, cuyo *Protocolo* homónimo al de Málaga, de 29.07.2013, dispuso que los Juzgados remitieran los actos de comunicación “de lunes a viernes, a lo largo de todo el día, sin limitación horaria” (Aptdo. IV), de lo que se deduce que aplicó analógicamente a los actos de comunicación lo dispuesto en el art. 135.5 para la presentación de escritos.

⁵⁶² Art. 135.1p3 ‘in fine’: *En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente*.

Vamos a realizar de forma resumida una simulación práctica de una notificación realizada por Lexnet de una diligencia de ordenación, por ejemplo, un lunes día 1 de junio al Procurador de la parte actora en un procedimiento cualquiera. Para ello, distinguiremos los puntos de vista o perspectiva del sujeto emisor, el órgano judicial, y del sujeto receptor, el servicio del Colegio de Procuradores respectivo:

a) *Perspectiva desde el órgano judicial*

- 08:30 horas: La resolución, que ha sido confeccionada por el Gestor o Tramitador el día anterior mediante el programa o sistema de gestión procesal⁵⁶³ habilitado en la sede judicial según cada territorio (Minerva, Adriano, etc.), es firmada por el Letrado de la Administración de Justicia.

- 08:31 horas: El mismo Gestor o Tramitador utiliza ese mismo programa, en el que previamente están registrados los datos de procedimiento, partes y profesionales intervinientes, para crear un “acontecimiento”, en este caso una “notificación”, con la que envía internamente la resolución a los servidores de Lexnet.

- 08:32 horas: Dado que desde las 08:00 horas es tiempo hábil para practicar actos de comunicación (art. 130.3p2), el mismo funcionario accede a la dirección web de Lexnet⁵⁶⁴ con su firma electrónica reconocida contenida en su tarjeta criptográfica y, una vez “autenticado”, se dirige a la carpeta “Bandeja de entrada”, subcarpeta “Pendiente de tramitar”, donde deberá encontrar los datos predeterminados por la aplicación relativos a “destinatario”, “número” y “tipo de procedimiento”, “descripción” y “documento principal” (más, en su caso, “documentos anexos”). Acto seguido, lo selecciona y pulsa en “enviar”. Son las 08:34 horas. Dependiendo de lo congestionado que se encuentren los servidores en ese momento, la operación puede pasar de unos segundos a varios minutos. Completada la misma, desde la misma página web el funcionario puede obtener un “Acuse” (también lo puede obtener desde del SGP), donde figura como “Fecha-hora envío” “01/06/2015 08:35”. En circunstancias normales, desde ese mismo momento está a efectos procesales recepcionada por el Colegio de Procuradores (del territorio donde esté ubicado el órgano judicial remitente) e independientemente de que acceda o no al portal de Lexnet.

b) *Perspectiva desde el Colegio de Procuradores*

- 09:00 horas: El Colegio, también con tarjeta criptográfica, accede al mismo sistema Lexnet –con algunas adaptaciones y diferentes funcionalidades dado su “rol” de “Administrador”– y “recoge” las notificaciones remitidas hasta el mismo

⁵⁶³ Los sistemas de gestión informática procesal (conocidos genéricamente en el argot técnico como “SGP”) y denominaciones implantados en cada territorio son los siguientes: territorio “Ministerio”: *Minerva*; Andalucía: *Adriano*; Canarias: *Atlante II*; Cantabria: *Vereda*; Cataluña: *e-Justicia.Cat/Temis 2*; Comunidad Valenciana: *Cicerone*; Madrid: *IusMadrid/Libra*; Navarra: *Avantius*; País Vasco: *JustiziaBAT*.

⁵⁶⁴ <https://lexnet.justicia.es>. La última versión de la aplicación es la 4.0.

instante anterior por cada uno de los órganos judiciales del territorio correspondiente. A partir de ahí, la notificación a cada Procurador se puede producir de forma directa, si el Colegio utiliza esta opción de reenvío interno y automático que la propia aplicación realiza al buzón de cada profesional, llamada “reparto directo”, o indirecta, en la que el Colegio ha de seleccionar expresamente todas las notificaciones recibidas y proceder al denominado “reparto manual”. A partir de ahí el Colegio podrá visualizar en todo momento si las notificaciones ya repartidas han sido recogidas por sus destinatarios o no, sin perjuicio de lo cual la recepción de la comunicación estará a efectos procesales ya realizada y se tendrá al procurador por notificado al día siguiente, en nuestro ejemplo el martes día 2 de junio. Si en la diligencia de ordenación se hubiera otorgado a su patrocinado algún plazo, o quisiera recurrir dicha resolución, el día número uno del plazo sería el miércoles 3 de junio (art. 151.2). Esta supervisión colegial es de especial trascendencia. Verificará que el procurador finalmente acceda a su propia bandeja de entrada para recoger y, de no hacerlo al día siguiente de recepción (en nuestro ejemplo el día 1 de junio) deberá asumirlas como propias (carpeta “asumidas por Colegio”), sin perjuicio de su deber de ponerse en contacto con el procurador y de la derivación de las responsabilidades que, en su caso, procedan.

Sobre el carácter “automático” de la notificación a los Colegios de Procuradores, siendo indiferente a efectos procesales que el Procurador acceda al buzón de Lexnet y tenga conocimiento de las resoluciones recepcionadas, es ilustrativa la **STS (C-Advo.) 09.06.2014**⁵⁶⁵. Frente al argumento de la parte recurrente, que afirmó “que el auto de caducidad sólo se debe considerar notificado cuando su Procurador recibió personalmente la comunicación procesal en su propio “buzón virtual”, fuera cual fuera la fecha en que se recibió en el Colegio de Procuradores” (F. D. 1º), la respuesta del Alto Tribunal fue clara:

“[...] el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la notificación del auto de caducidad de fecha 13 de abril de 2011 por el sistema lexnet, a través de servicio común de notificaciones, organizado por el Colegio de Procuradores de Madrid, fue enviado por la Secretaría de esta Sala y recibido en destino el día 3 de mayo de 2011 a las 15,14 horas.

Consecuentemente, sin necesidad de que hubiera de justificarse la recepción personal por el Procurador citado de dicha notificación, la misma debe entenderse válida y eficazmente practicada al día siguiente de la fecha indicada, sin que quepa entender infringidos los artículos 151 y 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las consideraciones realizadas conducen a la desestimación del recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 15 de marzo de 2013, sin necesidad de que se practique la diligencia de prueba solicitada por la parte recurrente con el fin de que se liblara oficio al Colegio de Procuradores de Madrid para que este aportara el ‘su-

⁵⁶⁵ Roj: STS 2272/2014. Vid. comentario a dicha resolución por MARTÍNEZ DE SANTOS, ALBERTO: “El Tribunal Supremo y Lexnet: una aclaración innecesaria sobre el cómputo de plazos”, Blog del autor *No atendemos después de la dos* en:

<http://justiciayprehistoria.blogspot.com.es/2014/06/eltribunalsupremoylexnetuna.html> (fecha consulta 19.10.2015).

puesto resguardo de recepción que confirme que éste remitió a Manuel Lanchares Perlado el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 ', que interesaba mediante otrosí en su escrito de recurso, pues, como dijimos, su existencia resulta irrelevante a los efectos de tener por practicada válida y eficazmente la notificación examinada." (F. D. 3º).

2.2.3.- Usuarios del sistema. Funcionarios judiciales competentes

El Decreto Lexnet señala en su art. 4.1 que *la utilización del sistema Lexnet será obligatoria para los Secretarios judiciales y para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como usuarios en el anexo II de este real decreto, destinados en aquellas Oficinas Judiciales que dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios.*

También será obligatorio el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios.

En el Anexo aludido se contiene la siguiente "relación de usuarios":

1. *Funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.*
2. *Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.*
3. *Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.*
4. *Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.*
5. *Abogacía del Estado.*
6. *Ministerio Fiscal.*
7. *Procuradores de los Tribunales.*
8. *Abogados.*
9. *Graduados Sociales.*
10. *Administrador del Colegio de Procuradores.*
11. *Órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como otras Administraciones e instituciones que habitualmente se relacionen con la Administración de Justicia.*

Desde la misma denominación de "usuario" se puede advertir que la norma reglamentaria está redactada con un importante rasgo técnico con el que, por los que afecta a los actos de comunicación, amplía el abanico potencial de sujetos activos con competencia para su realización en claro contraste con lo que determinan la LOPJ y la LEC. Como ya hemos estudiado 'supra' (Capítulo I), los "Funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales", hoy Letrados de la Administración de Justicia, carecen desde la Ley 13/2009 de la competencia para practicar los actos de comunicación. No obstante, en la medida en que los mismos se realizan bajo su dirección y son los responsables de la adecuada organización del servicio (art. 152.1), resulta lógico que estén incluidos en la relación de personas que pueden utilizar el sistema Lexnet y que deban ser ellos los que,

en última instancia, realicen con su propia firma electrónica las comunicaciones telemáticas.

Se trata de una mera prevención que es más teórica que práctica, dado que lo normal será que sean los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia quienes realicen esta tarea. Pero que digamos normal no quiere decir que a nuestro entender sea lo correcto legalmente. El Real Decreto prevé también como usuarios en los números 2, 3 y 4 del Anexo II a los Funcionarios de los Cuerpos de Gestión, de Tramitación Procesal y a los de Auxilio Judicial y, sin embargo, los únicos que conforme al art. 478.a) LOPJ y art. 152.1.º LEC tienen actualmente la competencia para ejecutar los actos de comunicación son estos últimos, sin distinción sobre si son comunicaciones convencionales o telemáticas. Paradójicamente, el 'usus fori' es el de que cuando las mismas son telemáticas los que las efectúan materialmente son los Gestores y los Tramitadores, bien cada funcionario individualmente respecto de los procedimientos que tiene asignados según la sección o negociado del que sea responsable, bien por turno rotatorio entre los funcionarios de esos dos Cuerpos existentes en la Oficina judicial. Con ello se están vulnerando aquellos dos preceptos al convertirse estos funcionarios en ejecutores de los actos de comunicación. Esta afirmación la mantenemos a pesar de que varias sentencias no lo hayan entendido así. Así, la **STSJ (C-Advo.) Galicia 24.04.2013** (Secc. 1ª, Sede A Coruña)⁵⁶⁶, en un caso en un funcionario del Cuerpo de Gestión procesal al negarse a utilizar el sistema Lexnet, entre otras razones, por entender que no corresponderle esa competencia. El tribunal desestimó el recurso y se basó, en síntesis, en la expresa mención a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia que hace el RD 84/2007, entre ellos, por tanto, los Gestores, y que tal atribución reglamentaria no es contraria a la ley al tener encaje en los 476.1.k) LOPJ⁵⁶⁷:

⁵⁶⁶ Roj: STSJ GAL 3684/2013. El mismo criterio fue empleado por el mismo tribunal para desestimar otro recurso posterior prácticamente igual [STSJ (C-Advo.) Galicia 09.04.2014, Secc. 1ª, Sede A Coruña; Roj: STSJ GAL 5209/2014]], salvo que en esa ocasión fue una Tramitadora procesal la actora-apelante y que los argumentos jurídicos esgrimidos por dicha funcionaria condenada fueron un tanto diferentes. El planteamiento partía de la idea de que "sería la Secretaria Judicial quien tiene la obligación de asumir la remisión de las notificaciones al correspondiente buzón de Lexnet y que, es competencia de los gestores y tramitadores, la remisión o envío que se efectúa desde el sistema de gestión procesal denominado MINERVA al buzón del órgano jurisdiccional. En apoyo de su pretensión cita los artículos 160 y 162 LEC, así como, el artículo 478, letra a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para concluir que la práctica de los actos de comunicación corresponde a los funciones del Cuerpo de Auxilio y que, con exclusividad, los Secretarios Judiciales y los funcionarios del Cuerpo de Auxilio están habilitados para "dar fe" o "certificar", de modo que la funciones de los gestores y tramitadores finalizaría en el momento en que se genera la notificación mediante su remisión desde el sistema operativo de gestión procesal MINERVA a Lexnet, por lo que la habilitación discutida, al ampararse en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, vulnera el principio de jerarquía normativa [...]" (F. D. 2º). Esta argumentación no fue objeto siquiera de mención en la sentencia, que se limitó a transcribir lo ya fallado un año antes.

⁵⁶⁷ **Art. 476.1.k) LOPJ:** *Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.*

“[...] el funcionario que utiliza Lexnet, como vía telemática en la realización de los actos de comunicación, interviene, tan solo, en las fases de emisión y remisión del mensaje, asumiendo en su verificación, labores de índole mecánica; es decir, ni interviene en la fase de entrega, ni debe documentar el acto de dación y recepción del mensaje, pues lo que hace es identificarse y encriptar el acto a comunicar con su firma electrónica.

Por tanto, ni asume las funciones de autoría de un documento electrónico, ni su firma electrónica le atribuye dicha autoría. En consecuencia, no cabe afirmar que la actividad que despliega le atribuya la condición de agente notificador en el sentido de tener intervención en el acto de entrega de una resolución judicial, con capacidad de certificación, que es el sentido que el artículo 152 LEC previene respecto de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Por tanto, equiparada su intervención a la de un usuario de una aplicación informática de telecomunicación, que con su firma electrónica acredita su condición de usuario autorizado, no cabe apreciar que asuma funciones que no le son propias en cuanto características de los agentes notificadores” (F. D. 3º).

La interpretación que realiza el tribunal gallego bajo nuestro punto de vista desacertada, por cuanto confunde la autoría del documento que se notifica con la autoría de quien practica la notificación, es decir, no atiende a la necesaria distinción entre “agente emisor” o autor del mensaje y “agente transmisor o notificador” de la que nos ocupamos en el Capítulo de nuestro trabajo. Desde luego que el Gestor “ni asume las funciones de autoría de un documento electrónico ni su firma electrónica le atribuye dicha autoría”, pero lo mismo ocurre con una notificación en papel practicada por el funcionario de Auxilio judicial, cuya entrega no le convierte en autor del documento (que sigue correspondiendo al Letrado de la Administración de Justicia o, en caso de resolución judicial, al Juez o Tribunal), pero sí le convierte en sujeto activo y autor del acto en sí de comunicación. Por otro lado, el aserto de la falta de intervención del Gestor en el acto de entrega con capacidad de certificación que refiere la sentencia hay que situarlo en el debido contexto de las comunicaciones informáticas, en que dicha capacidad está en la propia naturaleza y características de la firma electrónica de la que es titular el funcionario. No parece correcto desdeñar su función calificándola como la de un mero “usuario de una aplicación informática” que tan únicamente asume “labores de índole mecánica”, pues el órgano judicial se está comunicando con los procuradores oficialmente a través de un envío telemático cuyo autor interno no es otro que dicho funcionario.

Consecuencia lógica de nuestro anterior planteamiento es que los Gestores y los Tramitadores no deberían tener encomendadas las notificaciones por Lexnet, debiendo asumir dicha tarea los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial como

Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde: [...] k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

función genuina y legal de sus funciones. Ni la LOPJ ni la LEC dicen en ningún momento que los actos de comunicación que han de ejecutar sean únicamente los domiciliarios o “de calle”, pudiendo por ello practicarlos también en la propia oficina judicial (tanto telemáticos como presenciales) y teniendo en cuenta además que dichos funcionarios también tienen la condición de usuarios del sistema Lex-net conforme acabamos de ver.

IV

La comunicación mediante entrega en persona por funcionario o procurador *

1.- PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

1.1.- REMISIÓN *VERSUS* ENTREGA

En los capítulos anteriores hemos estudiado la limitación que impone la Ley a modo de frontera al uso del sistema de remisión. Si se trata de la personación de la parte en el proceso o de intervención personal en determinadas actuaciones procesales y no consta que la comunicación haya llegado a conocimiento del interesado, el modo de proceder ya no es aquel, sino el ordenado por el art. 161, que es el que cambia el planteamiento anterior con una sincrética expresión: la “comunicación por medio de copia de la resolución o de cédula”. Así se titula el precepto, quizá el más conflictivo de los que regulan los actos de comunicación en la jurisdicción civil y, pese a ello, el de redacción más imperfecta, empezando ya por su rúbrica, modificada junto al cuerpo del precepto por la Ley 42/2015, que ha eliminado una de las palabras claves de este sistema, la “entrega”⁵⁶⁸, la cual sí aparecía en la redacción anterior, dada por Ley 1/2000: “Comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o cédula”. Con o sin dicho término, creemos que,

* Una versión adaptada de este capítulo se encuentra publicada en forma de artículo en el Boletín del Ministerio de Justicia, n.º 2164, de marzo de 2014 (Sección “Estudios Doctrinales”) bajo el título “Comunicaciones judiciales civiles mediante entrega por funcionario o procurador. Problemas prácticos que plantea el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

⁵⁶⁸ La omisión ya se advierte en el Proyecto de Ley, de 27.02.2015, posiblemente por un desliz del Ministerio de Justicia.

a la vista del contenido del precepto, mejor hubiera debido tener como título el de “comunicación directa” o “comunicación personal a través de funcionario judicial o procurador”.

Además de la rúbrica, el primer apartado no corre mejor suerte:

1. La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución.

La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.

En primer lugar, desde un punto de vista subjetivo, no nos dice quién realiza esa entrega. Es necesario no haberse olvidado de que nueve artículos antes se ha empleado por primera vez dicho término *entrega* para distinguirlo de *remisión* (art. 152.3.2ª y 3ª), y que esa entrega, en tanto ejecución material de un acto de comunicación, se ha de practicar por un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial (art. 152.1.1.º LEC y art. 478.a LOPJ) o por un procurador (art. 152.1.2º LEC y art. 543.2 LOPJ). Además, tal y como se presenta, parece en un primer momento que la comunicación ha de ser personal en sentido estricto (dice *al destinatario*), para acto seguido y de una forma un tanto rebuscada hablar de *la persona que deba ser notificada,...*, como si la misma no fuese el propio destinatario, y resultando que hasta que no llegamos al apartado 3 no se nos aclara que también se considerará válidamente efectuada la entrega cuando se efectúe a las terceras personas y en las circunstancias que el mismo refiere. Estamos seguros que no habría costado tanto decir algo parecido a *entrega al destinatario* “o tercero afín a él por funcionario judicial o procurador”⁵⁶⁹.

En segundo lugar, desde el punto de vista objetivo o material, parece como si a través de la modalidad de remisión se entregara otra cosa, cuando es lo mismo. El funcionario o el procurador va a entregar una copia de la resolución o una cédula, mientras que por el sistema de remisión, si es por correo postal, el sobre va a contener también una cosa u otra, y si es telemático una versión digital de las mismas.

1.2.- LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN PERSONAL

Si hay una palabra que produce tantas cuestiones en la práctica forense al aplicar el art. 161 y que se emplea muchas veces de forma imprecisa, esa es, sin duda, “personal”. Al mismo tiempo, cualquier interesado que aborde el estudio de los actos de comunicación y consulte la jurisprudencia va a encontrar una idea constante, repetida, copiada y transcrita de unos tribunales a otros hasta la saciedad. Se trata de una especie de mantra fácil de encontrar que si lo reducimos a su

⁵⁶⁹ Ello iría en la línea de lo ya dicho por la propia LEC en su Exposición de Motivos al hablar de “la comunicación mediante entrega de lo que haya de comunicarse, bien al destinatario, bien a otras personas expresamente previstas, si no se hallase al destinatario” (Aptdo. IX, párr. 8 ‘in fine’).

mínima expresión dirá: “Hemos afirmado en numerosas ocasiones que el deber de emplazar *personalmente* cabe derivarlo directamente del art. 24 CE” (**STC 268/2000**, de 13.11, F. J. 4º)⁵⁷⁰. Pero, ¿qué significado jurídico correcto tiene que una comunicación tenga que hacerse “personalmente”? Para responder a tal cuestión tenemos que abordar en su conjunto el sistema de comunicaciones diseñado por la LEC y distinguir dos puntos de vista:

a.- **Desde el punto de vista del sujeto activo** de la comunicación, la misma será personal si lo es en persona o “en mano”⁵⁷¹, por parte de otra persona con competencia legal para entregar una determinada comunicación judicial. Esta es precisamente la idea que pensamos tuvo el legislador en mente al redactar el art. 161, cuando al poner el acento en el final de la comunicación, la *entrega*, y no al principio, la *remisión*, quiso dar protagonismo no tanto al destinatario como al profesional, funcionario o procurador, que ha de efectuar la comunicación de persona a persona. Por esto quizá resulte más gráfico hablar de comunicación “a distancia”, para referirnos al uso del correo, postal o electrónico, frente a “la forma establecida en el artículo 161, es decir, por entrega directa por parte del personal del juzgado” (**SAP Barcelona, Secc. 4ª, 15.03.2013**)⁵⁷²; y no solo directamente con el propio destinatario, sino también indirectamente a través de un tercero.

b.- **Desde el punto de vista del sujeto pasivo** de la comunicación, la misma será personal si lo es a la persona del propio destinatario, siendo ahora indiferente que dicha comunicación haya sido mediante entrega por funcionario judicial o procurador o mediante remisión postal o de cualquier otro modo; y figura en el acuse de recibo la firma e identidad de aquél, razón por la cual disociar el uso del correo con la necesidad de comunicación personal es equivocada⁵⁷³. Así pues, desde esta segunda perspectiva la comunicación no será personal si se ha entregado a terceras personas (art. 161.3), interpretación restrictiva de la que es posible encontrar defensores en la doctrina.

Ahora bien, desde ninguna de esas concepciones se puede defender que cuando se hable de comunicación personal la misma tenga que entenderse como co-

⁵⁷⁰ BOE de 14.12.2000. Vid. también la **SAP La Coruña (Secc. 4ª) 14.03.2013** (Roj: SAP C 610/2013): “[...], siempre que ello sea posible debe verificarse el emplazamiento personal de quienes hayan de comparecer en juicio como partes, a fin de que puedan defender sus derechos [...]” (F. J. 2º).

⁵⁷¹ O “en propia mano”, como dijo ORTÍZ DE ZÚÑIGA, MANUEL (*Práctica general forense*, 7ª ed, Imprenta de José Rodríguez, 1874, pág. 399); o “en persona propia o en propias manos”, según CHIOVENDA (*Principios...*, op. cit., pág. 91).

⁵⁷² Roj: SAP B 4451/2013, F. D. 2.

⁵⁷³ Vid. **AAP Cádiz (Secc. 5ª) 17.01.2012** (Roj: AAP CA 422/2012), que consideró personalmente notificada la sentencia al demandado “por acuse de recibo” (entendemos que se refirió al acuse de recibo postal).

Asimismo, MONTÓN REDONDO, ALBERTO: “[...] esta comunicación ha de ser siempre personal (bien directamente, bien mediante su remisión con acuse de recibo)” (“El respeto a derechos y garantías constitucionales en la regulación de los actos procesales por la LEC/2000”, *La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000* –Coord.: GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS–, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 51).

municación “personalísima”, como en un principio pudiera parecer. De hecho, la LEC no dice en ningún momento expresamente que un acto de comunicación determinado se haya de practicar con ese sentido restrictivo, ni mucho menos ofrece una definición legal de “personal”. Sólo habla del objeto o finalidad de aquel acto, de la *personación en juicio o la realización o intervención personal* en determinadas actuaciones, tanto de las partes (art. 155.4p2; art. 158) como de cualquier otro *destinatario* (art. 160.3), pero sin que con ello tenga que interpretarse en el sentido de que han de ser realizadas con carácter personalísimo. En casi todas ellas cabrá la intervención de procurador en su nombre, si es preciso con poder especial⁵⁷⁴.

En este punto es significativo recordar cómo el art. 497.2 dispone que a la hora de notificar la sentencia o resolución final al demandado rebelde la misma *se notificará al demandado personalmente*, pero acto seguido matiza y aclara el mandato al continuar diciendo *en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley*. Es decir, la LEC se cuida de no hacer caer al operador jurídico en el error de entender la comunicación como personal ‘stricto sensu’, y lo mismo sucede en el art. 158, que nos remite directamente a la forma establecida en el citado art. 161. Ni uno ni otro precepto mencionan en su título la expresión “comunicación personal”, tratando así de ser lo suficientemente genéricos como para hacer procesalmente eficaz la comunicación, tanto de forma directa con el propio interesado, como indirectamente a través de un tercero determinado. Por eso, cuando la LEC dice *entrega al destinatario* (arts. 152.3.3ª y 161.1), o cuando se refiere al hecho de haber notificado la sentencia *personalmente* a efectos del plazo de caducidad de la acción de rescisión⁵⁷⁵ (art. 502.1.1º), la misma no puede considerarse personalísima, pues si

⁵⁷⁴ Entendemos que no existe en la LEC ninguna actuación que no pueda ser verificada a través de Procurador, salvo cuando se trate de la prueba de interrogatorio de parte (art. 301 y ss.) en cualquier proceso, así como cuando estemos en asuntos de Familia, dada la presencia de personas que han de recibir una especial protección y de los intereses públicos o sociales en juego. Así sucede en los procesos contenciosos referidos a la guarda, custodia y alimentos de los hijos menores o incapacitados, en los que para la adopción de medidas provisionales, previas (art. 771.2 ‘in fine’) o coetáneas (art. 773.3), y definitivas (774.1), o para la modificación de las mismas (art. 775), la presencia de los progenitores o tutores, cuidadores, etc., es rigurosamente preceptiva. En cambio, no creemos que el trámite de ratificación por los cónyuges de la solicitud de separación o divorcio consensual del art. 777 tenga carácter personalísimo, aunque en el foro sea mayoritario el pensamiento contrario. Somos de la opinión de que debe permitírseles que puedan otorgar poder especial ‘apud-acta’ ante el Letrado de la Administración de Justicia Judicial, o ante Notario o Cónsul, en el que autoricen al procurador con carácter expreso para ratificarse en la petición de separación o divorcio, así como para la ratificación de la propuesta de convenio regulador, si bien con la exigencia añadida de que tanto el escrito donde se contenga dicha petición como el convenio habrán de insertarse o protocolizarse íntegramente en la propia acta de apoderamiento. Por todos estos motivos el mandato del art. 25.3, relativo a que *[n]o podrán realizarse mediante procurador los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse personalmente por los litigantes*, está muy limitado en su aplicación efectiva.

⁵⁷⁵ Vid. la **SAP Madrid (Secc. 14ª) 22.07.2008** (Roj: SAP M 12291/2008), que entendió que el auto cuya rescisión pretendía la mercantil demandada rebelde se notificó “personalmente en los términos del art. 161 [...], y no mediante edictos, [...] mediante cédula que entregó don Oscar, ocupante del local...” (F. J. 4º). Apréciase al respecto la relación lógica entre los arts. 501.2º (citación o emplazamiento por cédula a tenor del art.161) y 502.1.1º (plazo de caducidad de veinte días en caso

se practica con un tercero en los términos del art. 161.3 la comunicación también deberá entenderse realizada a estos efectos de forma personal 'lato sensu' y tendrá la misma validez que si se hubiese realizado con el propio interesado. Para evitar confusiones preferiríamos emplear la expresión "comunicación conforme al art. 161 LEC", en lugar "comunicación personal", evitando así que el funcionario o procurador inexperto pueda entender que la misma tiene que hacerse única y exclusivamente teniendo a aquél presente.

En conclusión, se trata de buscar el "emplazamiento directo"⁵⁷⁶ con la persona del destinatario, bien por correo u otro sistema de remisión, o de forma directa por funcionario o procurador, pero dejando como una vía intermedia, también plausible, la comunicación indirecta a través de terceros o comunicación por "persona intermedia"⁵⁷⁷.

2.- CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE ENTREGA

Efectuadas las consideraciones de los apartados anteriores, nos disponemos a continuación a tratar de determinar cuándo procede acudir a la comunicación en la forma establecida en el art. 161, no solo en relación con las partes, sino también con otras personas que, sin serlo, podrán tener una determinada intervención en el proceso. En cuanto a las partes propiamente dichas, hemos de partir del art. 158, precepto que nos hace saber las siguientes premisas básicas:

- 1.^a Que estemos *en los casos del apartado 1 del artículo 155*, que se refiere, por un lado, a actos de comunicación con partes que *no actúen representadas por procurador*, es decir, que están ya personadas pero sin que sea preceptiva la intervención de dicho profesional, lo que sucederá en los muy concretos supuestos que prevé el art. 23.2; y por otro, a los actos de comunicación consistentes en el *primer emplazamiento* o en la *citación al demandado*, quien, lógicamente, no estará aún personado en los autos, salvo que comparezca espontáneamente al tener conocimiento por otros medios de la existencia del litigio. Tanto en un caso como en otro, si las partes llegaran a designar procurador, el sistema cambiaría y las comunicaciones se harían a través de este (arts. 152.3.1^a y 153).
- 2.^a Que *no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación...*, lo que debe entenderse como que, habiéndose empleado la forma de comunicación mediante remisión y, si se ha practicado por correo, telegrama o medio similar, el interesado no haya firmado el acuse de recibo

de notificación de la sentencia practicada personalmente), así como, paralelamente, entre los arts. 501.3^o y 502.1.2^o (por edictos en ambos casos).

⁵⁷⁶ **STC 242/1991**, de 16.12: "Ciertamente, como señala el Fiscal, el deber de emplazamiento directo tiene su origen en la Constitución y no en la Ley" (F. J. 4).

⁵⁷⁷ **STC 275/1993**, de 20.09: "[...] el órgano judicial ha omitido el plus de diligencia que la doctrina constitucional exige en el supuesto de la práctica de un acto de comunicación por persona intermedia" (F. J. 2)

del envío postal certificado⁵⁷⁸ y luego no se haya personado en las actuaciones; o bien, si ha sido por correo electrónico u otro medio telemático, el sistema informático no pueda acreditar el acceso del destinatario a su contenido o, al menos, como dice el art. 162.1, no pueda obtenerse *el resguardo acreditativo de su recepción*.

- 3.^a Que esa comunicación *tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales*. Determinar la concurrencia del tercero de los requisitos expuestos supone todo un reto. Mención aparte de la personación en juicio, el precepto no se molesta en decir cuáles son esas *determinadas actuaciones procesales* en las que se exige *la realización o intervención personal de las partes*. Nada dice tampoco el art. 28.4 cuando exceptúa de la representación pasiva del procurador *los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona*. Solo un escrutinio en profundidad de la LEC nos dará la respuesta y podremos concluir que la tercera modalidad de comunicación prevista en el art. 152.3.3^a y concordantes procede en los siguientes supuestos, que agruparemos en los tres siguientes apartados, según deducimos tácitamente del propio desarrollo de la ley no sin echar en falta más claridad al respecto.

2.1.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA INICIAL

El uso directo o inmediato de la comunicación mediante entrega a aquella parte no representada por procurador, con llamada expresa de LEC al art. 161 y sin esperar a que resulte procesalmente ineficaz el sistema de remisión, únicamente se contempla en tres trámites puntuales, que son los siguientes:

1.- Requerimiento en el juicio verbal de desahucio por falta de pago (arts. 250.1.1^º y 440.3). En el caso del juicio verbal de desahucio por falta de pago de rentas y cantidades debidas (art. 250.1.1^º) la comunicación al demandado habrá de hacerse directamente mediante entrega, sin supeditarla al previo fracaso de la comunicación por remisión. Así lo establece el artículo 440.3, apartado 3, que, tras su reforma por Ley 37/2011, exige que la primera comunicación con este se reali-

⁵⁷⁸ Disentimos así respetuosamente de la opinión de CUBILLO LÓPEZ: “En estos casos, consideramos que un acuse de recibo firmado por alguien de *dentro del propio domicilio* del interesado puede suponer suficiente acreditación de que el destinatario ha recibido la comunicación” (“Actuaciones procesales en general”, *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil: propuesta de mejora*, CGPJ, 2004, págs. 36-37). No solo se trata de suponer esa acreditación, sino de que a ese tercero, cuando se ha convertido en receptor, se le ha hecho saber expresamente su obligación de entrega al destinatario y de que no es un tercero cualquiera, sino de un especialmente vinculado con aquel.

El planteamiento de dicho autor se recoge, empero, en la **SAP Barcelona (Secc. 4^a) 15.03.2013** (Roj: SAP B 4451/2013), que también dio por bueno, sin más, el emplazamiento por correo firmado por la madre de la interesada: “[E]n este caso hay constancia de que se entregó en el domicilio de la demandada el correo certificado con el emplazamiento y copias de la demanda, habría que entender que está bien hecha, al ser recibido por su madre, sin que se haya probado que ésta no se la hubiere entregado [...]” (F. J. 2^º).

ce preceptiva y directamente conforme al art. 161. Como ya estudiaremos en profundidad en otro capítulo, esto se debe a que en nuestro Ordenamiento se ha instaurado tras la reforma operada por dicha ley de 2011 una auténtica “monitorización del desahucio”, aunque limitada a los supuestos de falta de pago, que se ha traducido en la inversión del principio de contradicción y, con ello, en la consideración de la vista del juicio verbal como un acontecimiento que solo se producirá en caso de oposición en legal forma por parte del arrendatario. Por eso el art. 440.3p4, exige que la primera comunicación con este se realice preceptiva y directamente conforme al art. 161, porque ya no se le va a citar sin más a juicio, sino que se le va a practicar simultáneamente un triple acto de comunicación consistente en una notificación –la del Decreto de admisión a trámite de la demanda acompañado por una copia de la misma–, un requerimiento –con sus, a su vez, tres alternativas (pagar, desalojar, oponerse)– y una citación eventual a vista siempre que medie oposición en forma⁵⁷⁹.

2.- Requerimiento de pago en el juicio monitorio (art. 815.1): El precepto es el segundo y último en toda la LEC junto al art. 440.3 que dice expresamente que el requerimiento se haga mediante el sistema entrega, disponiendo que *se notificará* [sic]⁵⁸⁰ *en la forma prevista en el artículo 161*, estableciendo además, como prevención específica para el deudor, la de que habrá de practicarse *con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente*. Que la ley exija aplicar aquel precepto tiene su razón de ser en la necesidad de garantizar que el deudor conozca el severo castigo procesal que se le aflige si guarda silencio y no adopta una postura activa respecto a la reclamación efectuada: la omisión de la fase de cognición ordinaria y el acceso del acreedor a la ejecución forzosa.

3.- Notificación al rebelde de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso (art. 497.2): Si el demandado rebelde tiene domicilio conocido el legislador dispone expresamente que la misma se efectúe *personalmente, en la forma prevista en el artículo 161*. La claridad con que se manifiesta, precisando que esa forma personal sea conforme a dicho precepto, impide que la notificación por correo con acuse de recibo pueda entenderse hábil, aun cuando dicho acuse venga firmado por el propio destinatario y se colme con ello esa exigencia del art. 155.4p2 de acreditar que el mismo *ha recibido la comunicación*. Esto supone un plus de exigencia del legislador que no se concilia con su propia apuesta por el uso del correo como primera opción para los actos de comunicación con partes no representadas por procurador (art. 155.1), además de no estar ante ninguno de los supuestos (emplazamiento, citación, intervención personal) en los que por mandato del art. 158 la comunicación mediante entrega es preceptiva. Con todo,

⁵⁷⁹ No obstante, el propio precepto deja expresamente abierta la posibilidad de acudir, *sin más trámites*, a la comunicación radicalmente opuesta como es la edictal si la misma se intenta, aun con resultado negativo, en el domicilio arrendaticio (art. 164 ‘in fine’).

⁵⁸⁰ Obviamente, el requerimiento no se notifica, como erróneamente dice el precepto, debiendo entenderse en su lugar que *se practicará*, tal y como correctamente dispone el art. 440.3p4. 4º.

aplaudimos esta regla específica del art. 497.2, pues la sentencia o resolución final puede desencadenar una vez firme importantes consecuencias procesales (efecto de cosa juzgada, eventual inicio de la fase ejecutiva, tasación de costas, liquidación de intereses, etc.) que justifican un mayor esfuerzo en que el juzgado tenga constancia fehaciente y detallada de que aquella resolución ha llegado al conocimiento de la parte.

2.2.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA SUBSIDIARIA

Pese a la importante finalidad y trascendencia procesal de los siguientes actos de comunicación, el sistema del art. 161 aparece en la LEC con carácter subsidiario al de los arts. 160 (correo postal) y art. 162 (medios telemáticos), de modo que solamente si estos fracasan cabrá acudir a aquel:

2.2.1.- Personación en juicio

Si no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido la comunicación efectuada por el sistema de remisión, tendremos que considerarla ineficaz si con ella se persigue:

a.- El emplazamiento al demandado para contestar a las demandas de juicio ordinarios (arts. 404.1 y 438.1). La ley se limita a decir que el Letrado de la Administración de Justicia *dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días*, diez días en el caso del juicio verbal, pero resulta obvio que para contestar a las mismas hay que personarse en el órgano jurisdiccional y cumplir con las normas generales sobre postulación procesal (arts. 23 y 31). En consecuencia, resulta aquí de aplicación el mandato del art. 158.

b.- La citación a la vista de juicio verbal por razón de la cuantía inferior 2.000 euros, una vez contestada la demanda (arts. 23.2.1º y 440.1). En este caso, la citación mediante entrega de la oportuna cédula será a las dos partes, pues puede ocurrir que si la cuantía del asunto es inferior a 2.000 euros ambas puedan estar exceptuadas de tener que comparecer con procurador y abogado y no estén personadas con la asistencia y representación de estos profesionales. Queda exceptuado el caso concreto del juicio verbal de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas (art. 250.1.1º), en que la primera comunicación judicial con el demandado habrá de practicarse directamente mediante entrega (art. 440.3p4).

c.- La citación al demandado a vista de medidas cautelares (art. 734.1).

d.- El emplazamiento al demandado para contestar a la demanda en procesos contenciosos conocidos comúnmente como “de Familia”. Nos referimos a aquellos juicios verbales especiales del Título I del Libro IV, que tienen contestación a la demanda por escrito y versan sobre capacidad de las personas, filiación, matrimonio y menores (arts. 748 y 753.1).

e.- La citación a los cónyuges a comparecencia de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio (art. 771.2). Para resolver sobre estas medidas *el Secretario judicial citará a los cónyuges y, si hubiere hijos*

menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia. A la misma deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador, al igual que el cónyuge demandante. Pese al título del precepto, en la práctica forense el mismo trámite se aplica a los procesos que versen exclusivamente sobre guardia y custodia y/o sobre alimentos respecto a los hijos menores, sean matrimoniales o no (cfr. arts. 748.4º y 770).

2.2.2.- Otras comunicaciones relativas a la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones

Además de los actos de comunicación consistentes en el *primer emplazamiento* o en la *citación al demandado* (art. 155.1), existen otras comunicaciones en las que si al órgano judicial no le consta por ningún medio que el destinatario haya recibido la misma por el sistema de remisión, habrá que acordar de nuevo el trámite, pero esta vez *por medio de entrega*, y ya se trate de partes o de los profesionales que las asisten y representan:

a) Con carácter general

Con tal carácter se establece cuando dicha remisión se intenta practicar por medios informáticos o telemáticos y dichos destinatarios no puedan acceder al contenido de la comunicación por causas técnicas, llamando aquí la atención que el legislador haya optado por el sistema de entrega del art. 161, en lugar de por el sistema de remisión postal del art. 160, cuando este parece preferente a aquel. A tal efecto, dispone el art. 162.2p2 que:

Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción. [...].

b) Con carácter particular

No referimos a los siguientes trámites procesales, en los que la ley prevé expresamente que se practiquen determinados actos de comunicación con las partes:

a') Citación a las partes para la práctica de pruebas fuera del juicio (art. 291). Dispone el precepto que *las partes serán citadas con antelación suficiente, que será de al menos cuarenta y ocho horas, para la práctica de todas las pruebas que hayan de practicarse fuera del juicio vista*, convocatoria que habrá de practicarse mediante entrega (art. 161) si fracasa por remisión (art. 158).

b') Notificación de la existencia del proceso al demandado rebelde citado o emplazado por edictos (art. 498). El precepto establece que *al mismo se le comunicará la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la*

comunicación. Esa comunicación puede significar la *comparecencia posterior*, como dice el art. 499.

c') Citación para la ratificación de la petición de separación o divorcio presentada por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro (art. 777.3). En estos casos lo habitual será que la convocatoria para ratificarse se haga a través del procurador que se ha personado en nombre del cónyuge que ha formalizado la petición y que éste último avise al otro. Pero si ese otro no acude, no por ello se le podrá tener por no comparecido a los perniciosos efectos que prescribe el precepto, salvo que, y aquí viene la razón de su inclusión en este punto, el juzgado le haya citado expresamente siguiendo el juego de los arts. 155.1 y 158.

d') Citación a los cónyuges para la formación de inventario de la comunidad conyugal (art. 809.1), así como a la liquidación del régimen económico matrimonial (art. 810.3). Estos trámites se realizan *mandando citar a los cónyuges* a una comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia⁵⁸¹, expresión que suscita discrepancias en la práctica forense en lo que al carácter personalísimo de la intervención se refiere. Creemos que si acuden en su nombre y representación sus respectivos procuradores no se les podrá tener por no comparecidos. Si solo estuviese uno de los cónyuges representado con procurador, el otro – habitualmente el demandado– tendrá que ser citado según los artículo 155.1 y 158.

2.2.3.- Supuestos dudosos o controvertidos

Junto a los anteriores supuestos habría que determinar si procede también la inclusión en este epígrafe de otros que resultan dudosos o controvertidos:

a.- **Práctica de requerimientos en general** (art. 152.5). Aunque la ley no lo disponga expresamente con carácter general y solo lo exija particularmente en los dos supuestos antes vistos de los arts. 440.3 y 815.1, la intrínseca naturaleza coercitiva del acto de comunicación consistente en un requerimiento⁵⁸² hace que el medio adecuado para compeler a su cumplimiento⁵⁸³ sea mediante la formulación

⁵⁸¹ En dicho acto el Letrado de la Administración de Justicia tratará formar, con los cónyuges y sin controversia, el inventario y/o, en su caso, la liquidación. Si la hubiera, para la formación de inventario entraría en escena el Juez o Magistrado en una vista que habría de sustanciarse por los trámites del juicio verbal (art. 808.2), mientras que si se trata directamente de la liquidación se seguirían por remisión los trámites de la división de la herencia (810.5).

⁵⁸² La LEC 1881, por el contrario, sí que disponía expresamente en su art. 261, párr. 4.º, esta vía para la práctica de requerimientos.

⁵⁸³ El Proyecto de Ley de 1998 incluía expresamente el apercibimiento de imposición de multas: "Artículo 149 [...] 4.º Requerimientos, para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad, bajo apercibimiento, en su caso, de multa no inferior a 30.000 pesetas ni superior a la quinta parte de la cuantía o valor de la demanda o a 250.000 pesetas, si la cuantía fuese indeterminada". Posteriormente se aceptó la enmienda presentada por el Grupo Socialista al respecto, que entendía que "este artículo no es el lugar adecuado para la previsión de sanciones, por otra parte exacerbadas, sino para indicar el contenido de la comunicación que justifique su existencia como especie propia" (Enmienda n.º 236, cit., pág. 236), y aquel añadido quedó suprimido del texto final tras su paso por el Senado, que, a su vez, consideró "que no es necesario especificar aquí las multas

de apercibimientos legales de forma oral y expresa, algo que solo un funcionario judicial o un procurador puede realizar a través del sistema de entrega. Asimismo, resulta conveniente conocer las manifestaciones que pueda realizar el requerido en el mismo momento de la intimación, de ahí que sea la única modalidad de acto de comunicación en que con carácter general se admite su respuesta (art. 152.5), que queda consignada en un diligencia que ha de ser cumplimentada por uno de aquellos profesionales. Con ello quedaría descartado el sistema de remisión, como algunos autores han propugnado⁵⁸⁴. Creemos, sin embargo, que, sin llegar a tal extremo, podría contemplarse la comunicación por entrega con carácter subsidiario a la de remisión para el caso de que el mismo fracase por la desatención de la persona o entidad que hayan de ser requeridos y, en todo caso, dejar a criterio del Letrado de la Administración de Justicia la decisión de ordenar la utilización de uno u otro sistema en atención al distinto objeto y finalidad del requerimiento y de los efectos que en el proceso pueda tener su incumplimiento⁵⁸⁵.

b.- Convocatoria a las partes a la audiencia previa del juicio ordinario (art. 414.2). Para que las partes tengan capacidad de postulación en el juicio ordinario han de estar personadas con procurador y abogado conforme a la regla general (art. 23.2 y 32.2). Pero eso no es óbice para que el legislador haya exigido que las mismas concurren personalmente a la audiencia previa prevista en el art. 414.2 *al efecto del intento de arreglo o transacción*, salvo que el procurador ya se encuentre apoderado con carácter especial *para renunciar, allanarse o transigir*. La complicación vendrá *[s]i no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder*, pues entonces *se les tendrá por no comparecidos a la audiencia*. ¿Quiere decir esto que si los procuradores no tienen poder especial, el juzgado habrá debido entregarles previamente cédula de citación ‘ad hoc’ para sus patrocinados al tiempo de convocarles para aquel acto? La respuesta creemos que debe ser negativa, porque la

posibles, puesto que este artículo está dedicado únicamente a definir los actos de comunicación del tribunal” (BOCG Serie A, n.º 147-16, 16.12.1999, pág. 1329).

⁵⁸⁴ Así, BERNAL LÓPEZ: “En cuanto al requerimiento, nos parece de todo punto imposible practicarlo por remisión, dado que es consustancial al mismo el poder dar *respuesta*, por lo que deberá practicarse siempre de forma personal, ya sea directamente, o por *llamamiento* (art. 160.3) a la sede del tribunal” (“Actos de comunicación...”, op. cit., pág. 739); ídem, LACALLE SERER, ELENA, y SANMARTÍN ESCRICHE, FERNANDO, cuando hablan del caso específico del requerimiento de pago en la ejecución forzosa: “A pesar de que hay autores que consideran que cabría verificar el requerimiento de pago por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante (art. 160.1), entendemos una posibilidad incoherente tanto con el espíritu del legislador como en la redacción legislativa. [...] dado que se admite respuesta del ejecutado, este acto de comunicación deberá realizarse personalmente, sin que quepa el modo dispuesto en el art. 160.1, y sólo cuando el ejecutado no es localizado, cabrá por edictos” (*La ejecución civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 276-277).

⁵⁸⁵ No tiene la misma entidad, v. gr., un requerimiento de pago al deudor en el proceso monitorio, que un requerimiento al ejecutado para que presente los títulos de propiedad de que disponga de los bienes embargados (art. 663). El primero es esencial para el propio proceso y por ese motivo se practica ex art. 161; el segundo no lo es y permitiría intentar primero su práctica por el sistema de remisión.

representación pasiva del procurador debe aplicarse aquí con todo su rigor, o al menos así sucede en la práctica que conocemos.

c.- Notificación al ejecutado del auto autorizando y despachando la ejecución, así como del decreto de medidas ejecutivas concretas (art. 553). Pese a que el precepto no dice en ningún momento que la notificación tenga que hacerse de forma personal, entendida ésta por la vía del art. 161, se ha defendido tal necesidad⁵⁸⁶; la duda reside en que dicho acto de comunicación se ha de realizar, no para citar o emplazar a ejecutado, pero sí *para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución*, con lo que parece estar invocándose indirectamente el art. 158. En la ‘praxis’ la notificación se realiza mediante entrega por funcionario judicial o procurador en los términos del art. 161 cuando va acompañada del requerimiento de manifestación de bienes o derechos del art. 589, o ha de procederse por la Comisión judicial al embargo ex art. 624, sobre todo cuando se trata de ejecuciones de títulos extrajudiciales, en las que por lo general es preciso efectuar el previo requerimiento de pago del art. 581 para poder proceder a la traba. En otro caso se hace por correo certificado con acuse de recibo y en caso negativo, según el criterio del órgano judicial, se aplica el art. 155.4 o se reitera por el art. 161.

d.- Convocatoria a Junta de herederos. En el caso de que el objeto de la misma sea la de designar contador y peritos (art. 783.3), el precepto dice que a los interesados que no estuviesen ya personados con procurador *se les citará personalmente, si su residencia fuere conocida*, lo que parece también extrapolable por analogía a cuando la convocatoria sea para la formación de inventario del caudal relicto (arts. 793.3 y 794). Aunque en páginas anteriores ya nos hemos referido a la relatividad con que hay que interpretar el adverbio “personalmente”, debiendo ser equiparado a comunicación mediante entrega vía art. 161, no creemos por la sistemática que estamos analizando que el legislador haya pretendido que esta citación tenga que practicarse directamente por aquella modalidad, pues cuando lo ha querido, así lo ha dispuesto explícitamente; tampoco ello se deduce de la naturaleza del trámite a realizar, en este caso una citación que, como con todas aquellas que impliquen la personación de las partes en autos, debe realizarse como dice primero el art. 155.1. Así pues, habría que acudir primero al sistema de remisión y solo cuando no conste la recepción por el propio interesado, a la entrega por funcionario o procurador (forma subsidiaria). Cuestión distinta será que el intérprete aplique a rajatabla el precepto y defienda lo contrario.

⁵⁸⁶ Aunque no se fundamenta explícitamente, así se desprende de los “Acuerdos de unificación de criterios de la Junta de Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia” de abril de 2009, en cuyo punto n.º 4 se adoptó el acuerdo consistente en entender que “la ley no obliga a notificar personalmente las resoluciones que en el proceso de ejecución acuerden el embargo de bienes, aprueben costas o liquiden intereses”, estableciendo en el apartado 4.3 que “la tesis que se sostiene obliga únicamente a notificar *personalmente* el auto despachando ejecución de tal modo que la falta de personación del ejecutado permitiría el empleo de la vía edictal” (la cursiva es nuestra) (*Práctica de Tribunales* n.º 61, La Ley, Madrid, 2009, pág. 60).

e.- Requerimiento en casos de sustracción internacional de menores (art. 778 quinquies). Admitida a trámite la demanda de restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia, el nuevo art. 778 quinquies.2, introducido por Ley 15/2015⁵⁸⁷, ordena que *en la misma resolución en la que sea admitida la demanda, el Secretario judicial requerirá a la persona a quien se impute la sustracción o retención ilícita del menor para que, en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, comparezca con el menor y manifieste si accede a su restitución o retorno, o se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable* (párr. 2º), así como que *el requerimiento se practicará con los apercibimientos legales y con entrega al requerido del texto del correspondiente convenio o norma internacional aplicable* (párr. 3º). La disposición no alude al art. 161, pero la urgencia del procedimiento, el carácter expeditivo del requerimiento y su objeto, todo ello presidido por el principio de la superior tutela del menor, no debería ofrecer dudas sobre la necesidad de practicar el mismo por funcionario o procurador.

2.3.- UTILIZACIÓN DE ESTE MEDIO DE FORMA FACULTATIVA

Existen en la LEC otros supuestos en que el uso inmediato de la comunicación mediante entrega no se establece ni de forma preceptiva ni tampoco de forma subsidiaria. Nos referimos a las *comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él*⁵⁸⁸. Respecto a todas ellas, si bien en un primer momento el art. 159.1 dice expresamente que *se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 160*, es decir, mediante remisión por correo, telegrama o medio semejante, el art. 159.2 matiza lo anterior al ofrecer al Letrado de la Administración de Justicia la facultad de *ordenar que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161*, no sólo *cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión*, sino también –la ley emplea la conjunción “o”– *cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan*, y de ahí su carácter facultativo y alternativo al correo. Como ya dijimos páginas atrás, resulta reproable que esta potestad del Letrado de la Administración de Justicia no esté también prevista a la hora de realizar comunicaciones con las propias partes.

⁵⁸⁷ Ley 15/2015, de 02.07, de la *Jurisdicción Voluntaria* (BOE de de 03.07).

⁵⁸⁸ GONZÁLEZ GRANDA sí considerada, por el contrario, que este procedimiento “procede, de forma subsidiaria, respecto de la comunicación mediante correo” (“Tomo I. Sujetos y actuaciones...”, op. cit., pág. 270).

3.- LA ENTREGA DIRECTA AL PROPIO DESTINATARIO

3.1.- LUGAR DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA

El art. 161.1 prevé dos lugares muy diferentes y, al mismo tiempo, dos circunstancias muy distintas. Veamos: *La entrega al destinatario de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará...*

[a] **...en la sede del tribunal...** Es pacífico en este contexto que por “tribunal” hay que considerar, además del órgano colegiado como tal y del juzgado como órgano unipersonal, también la sede del Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación del art. 163 o análogo, aunque por coherencia con la nueva nomenclatura iniciada por la LO 19/2003 y luego consagrada por la LO 1/2009 y la Ley 13/2009 debería decir “Oficina judicial”. Aclarado esto, el inconveniente está en que el precepto da a entender que solamente el propio destinatario puede ser notificado en esa sede u oficina⁵⁸⁹, lo cual no sucede en la práctica. Son incontables las diligencias de comunicación que se practican con resultado positivo a otras personas distintas del destinatario en las propias sedes judiciales o en sus Servicios Comunes merced a los avisos que, cuando no hay otra posibilidad, se dejan en los domicilios de los interesados, y que estos, por no poder (o no querer) por el horario matinal de la oficina, encomiendan a alguien cercano o allegado para que “recoja la carta del juzgado”. Con todo, hay que asumir que en estos casos no concurre el binomio “tercero específico + domicilio legal del destinatario” que exige de forma inseparable el art. 161.3, lo que supone que estemos, si no ante actuaciones nulas (tendrían que provocar indefensión), sí al menos irregularidades (cfr. art. 166.1).

La circunstancia de que el interesado se encuentre en la sede judicial puede obedecer a múltiples causas. Entre ellas, lo acabamos de indicar, que, intentada sin éxito la comunicación mediante entrega domiciliaria, se le haya dejado un “aviso judicial”; o también al hecho de que el órgano haya optado por hacer uso de la variante “híbrida” prevista en el art. 160.3 de emplazar al destinatario a que acuda a la sede tribunal, ya estudiada.

[b] **...o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.** La ley llama ahora la atención sobre el lugar (el domicilio) y no sobre la persona (el interesado), confirmando así la ficción legal de comunicación con plenos efectos a los terceros que luego señalará el apartado tercero del precepto y que ya había anunciado en el art. 152.1p4 al disponer que los actos de comunicación *se tendrán por válidamente realizados*, no solo cuando *quede cons-*

⁵⁸⁹ Así lo entendió la **SAP Burgos (Secc. 1ª) 31.03.2004 (Roj: SAP BU 423/2004)**: “En la sede del Tribunal o servicio común de notificaciones solo cabe entregar la copia de la comunicación o cédula al destinatario [...]” (F. J. 2º); “[E]n el caso de autos se procede a entregar la cédula de citación a juicio para el demandado a un tercero, que se presenta a recoger la comunicación en la Sede del Servicio de Comunicaciones. Esta irregularidad ciertamente carecería de relevancia de constar la recepción de la comunicación por su destinatario tal y como exige a sensu contrario el artículo 155 nº 4, párrafo 2º, o si se hubiera dado el interesado por enterado [...]” (F. J. 3º).

tancia suficiente de haber sido practicados en la persona, sino también en el domicilio.

Llegados a ese lugar, pueden darse las siguientes hipótesis⁵⁹⁰:

1ª.- Que se encuentre allí al destinatario y, a su vez:

- a) Acepte la comunicación (art. 161.1): Este es el supuesto ideal y por eso el más deseado: la entrega se documentará en una diligencia, que será “de comunicación”⁵⁹¹.
- b) Rehúse la comunicación (art. 161.2): Se trata de una eventualidad prevista por la ley, pero que plantea distorsiones en la práctica judicial, mercediendo por ello un epígrafe independiente de nuestro estudio, donde desglosaremos el precepto.

2ª.- Que solo se encuentre allí un tercero y, a su vez:

- a) Admita la recepción y su posterior entrega (art. 161.3): De ser así la LEC constriñe la validez de la comunicación a la concurrencia simultánea de los factores que el apartado señala.
- b) Se niegue a la recepción: Problema no previsto en la ley y no por ello menos recurrente en la práctica diaria. Lo estudiaremos junto al supuesto anterior en un epígrafe más tarde.

3ª.- Que no se encuentre a nadie allí y, de nuevo a su vez:

- a) Se averigüe, no obstante, el paradero del destinatario por las personas a las que se pueda consultar durante el transcurso de la diligencia y se intente en el nuevo lugar la comunicación (art. 161.4p1).
- b) No se encuentre a nadie y no se averigüe el paradero del destinatario y se procederá a la averiguación domiciliaria que prevé el art. 156 (art. 161.4p2)

3.2.- CONTENIDO DE LA DILIGENCIA

A diferencia de la cédula (arts. 152.4 y 160.3p2), la LEC no detalla el contenido de la diligencia con la que se documenta el acto de comunicación, limitándose a disponer que *la entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar* (art. 161.1p2). Solo en el supuesto de entrega a tercero sí que se preocupa de decir, aunque de forma incompleta, que *en la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o cédula y la relación de dicha perso-*

⁵⁹⁰ Vid. **SAP Pontevedra (Secc. 1ª) 28.01.2013**, F. J. 2º (Roj: SAP PO 547/2013).

⁵⁹¹ Cfr. arts. 456.2 LOPJ y 206.2.3ª LEC.

na con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada (art. 161.3p3).

Aún así, si integramos ambos párrafos con la disposición contenida en el art. 152.3.2ª, relativa al sistema de remisión, pero de aplicación general, que exige *dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado*, y siguiendo los modelos judiciales al uso, podemos determinar el contenido que ha de contener la diligencia de comunicación, ya sea directamente con el propio destinatario, ya a través de tercero:

- **Encabezamiento y título:** Deberá indicarse la denominación del órgano judicial o servicio común emisor de la diligencia junto con el escudo de España, más, en su caso, el de la CC.AA. con competencias asumidas, y la leyenda “Administración de Justicia” en el ángulo superior izquierdo. En el caso de procuradores se sustituirá por la del Colegio al que pertenezca dicho profesional. Centrado y destacado, la denominación de “Diligencia de comunicación”.
- **Datos del procedimiento:** Lo habitual es que si es el SCAC es el que interviene, consigne un número de referencia interno, el Juzgado de origen y el procedimiento.
- **Lugar de la práctica, día, mes, año y hora:** Habrá que especificarse si el trámite se efectúa en la sede del órgano o en el domicilio del destinatario. No obstante, suele ser práctica común que el actuario judicial emplee la frase al uso “Yo, funcionario del SCAC, me constituyo en el domicilio de D./D.ª... sito en...”, y, pese a que aquel haya comparecido en la propia sede, se diga que el mismo tiene allí su domicilio, aunque esto no sea muy correcto. En cuanto al dato de la hora, la misma habrá de reflejarse para dejar constancia de que la comunicación se ha practicado en horas hábiles⁵⁹².
- **Datos del actuario:** Ante el silencio de la ley habrá que entender que quienes practiquen la diligencia, ya el funcionario, ya el procurador, habrán de identificarse de forma suficiente como para poder individualizar, llegado el caso, la responsabilidad que por su intervención prevé el art. 168. En el caso del funcionario, si no se consigna el nombre⁵⁹³ –quizá para tratar de despersonalizar el trámite y enfatizar el órgano público al que representa– sí al menos habrá que indicarse algún tipo o número o clave individual que le distinga dentro de la oficina judicial, equipo de trabajo o servicio⁵⁹⁴. Si se

⁵⁹² Art. 130.3, párr. 2º: *Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.*

⁵⁹³ Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, *el ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atiende* (punto n.º 13).

⁵⁹⁴ La **STS 10.03.2010** (Roj: STS 1737/2010) declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento debido, entre otras irregularidades causantes de indefensión, a la falta de identificación del funcionario: “[...] tan sólo consta que ha sido hecha a través del Servicio común de notificaciones y embargos de los Juzgados de Sevilla y no se ha identificado el mismo por cualquier medio suficiente para

trata del procurador, dado su rol de profesional no judicial, creemos obligatorio que conste su nombre completo, Colegio al que pertenece y, si no su DNI, sí su número de colegiado.

- **Datos de la persona que recibe la comunicación y relación con el interesado:** Este dato es fundamental, pues debe ser una de las personas que señala el art. 161.3. Habrá de hacerse constar el nombre y apellidos del receptor, su DNI o documento equivalente⁵⁹⁵ y un dato muy determinante que no se puede obtener si se emplea el sistema de remisión: la relación que une a dicha persona con el destinatario.
- **Finalidad de la comunicación:** Deberá escribirse con el mayor detalle qué es lo que se está comunicando, coincidiendo con las clases de actos de comunicación del art. 149. Así, por ejemplo, si se trata de citación, el órgano ante el que habrá de comparecer, el día y la hora, en qué calidad ha de intervenir y el objeto de la misma. Según proceda, habrá de aclararse si, además de la copia de la resolución o de la cédula, se le entregan documentos acompañados conforme al art. 273 y concordantes.
- **Prevenciones o advertencias legales:** Dos son las advertencias legales que prevé la LEC a realizar por el funcionario o procurador: a) cuando estén con el destinatario y este se niegue a la recepción, le harán saber que la copia de la resolución o cédula (y documentación que se acompañe) quedará la Oficina judicial a su disposición, surtiendo efecto de todos modos la comunicación (art. 161.2); b) cuando se entiendan con un tercero, se le deberá advertir que está obligado a entregar la comunicación, que se le entrega en sobre cerrado, a su destinatario, así como *de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario* (art. 161.3).

Más allá de las anteriores prevenciones, la LEC no exige que el funcionario o el procurador tengan que instruir expresamente al destinatario de los efectos procesales de la comunicación realizada. Cuando se trate de citación o emplazamiento (y nos gustaría añadir requerimiento), siendo por ello obligatorio el uso de la cédula, la *prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca* deberá venir ya indicada en dicho instrumento (art. 152.4), incluso con reiteración en muchas ocasiones de las que ya vienen contenidas en la propia resolución que se traslada (v. gr., el decreto de incoación de juicio verbal de desahucio). No obstante, si se trata de notificación, ya estudiamos en su momento la diferencia existente entre el art. 248.4 LOPJ, que ordena la instrucción de recursos que se realizará *al notificarse la resolución*, y el art 208.4 LEC, que exige que la misma ha de formar ya parte de la

ello (nombre, número de tarjeta profesional, o, en su caso, sección o equipo del servicio), tampoco ha estampado firma legible" (F.5º).

⁵⁹⁵ La **SAP Barcelona (Secc. 1ª) 13.02.2012** (Roj: SAP B 618/2012) no lo entendió necesario: "[...] manifestó llamarse Esperanza y ser hermana del demandado, y si bien es cierto que no exhibió documentación acreditativa de su identidad, tal hecho no afecta a la validez de la citación, pues el artículo 161-3 de la LEC no exige una identificación fehaciente [...]" (F. J. 2º).

estructura interna de la propia resolución. El uso del verbo en forma reflexiva del precepto orgánico deja la puerta abierta a rescatar la vieja fórmula de notificar también mediante cédula, donde podrán venir esas indicaciones, y no por simple entrega de copia, salvo que esa misma copia sea fiel reflejo de una resolución en la que ya se hayan consignado aquellos particulares. Dicho esto, y aun habiendo visto que no es obligatorio, el buen profesional interviniente informará al receptor, aunque sea de forma somera, y especialmente en un lenguaje comprensible para el ciudadano lego en Derecho, de qué es lo que se está entregando y cuáles son los efectos procesales que dicha entrega conllevan⁵⁹⁶.

- **Firmas del funcionario o procurador:** La firma, como expresión de la responsabilidad y autoría material de la diligencia, es también importante y se exige por el art. 161.1p2.
- **Firma de la persona con la que se practica comunicación:** En principio la firma del receptor, también preceptiva, es símbolo de haber recibido la comunicación y de haber quedado enterado⁵⁹⁷. Pero si el mismo no se prestara a ello, no por ello quedará invalidada la diligencia, sino que habrá de hacerse constar tal circunstancia por el funcionario o por el procurador, que ostentan capacidad de certificación.

3.3.- LA NEGATIVA A LA RECEPCIÓN POR EL DESTINATARIO

El art. 161.2 intenta de dar solución a la eventualidad, muchas veces hecha realidad, de que el propio interesado rehúse la comunicación:

Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o procurador que asuma su práctica le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, pro-

⁵⁹⁶ Sobre este particular merece la pena tomar buena nota de la actuaciones a seguir por los Procuradores que muestra FUENTES TOMÁS, PILAR, en un estudio realizado a principios de 2011 sobre la ejecución en la práctica por dichos profesionales de los actos de comunicación, igualmente aplicables a los funcionarios judiciales: Tras “1) Preguntar por el destinatario y acreditarse” (y no al revés) y “2) acreditar la identidad y condición del receptor”, debe “3) Explicar al receptor de la comunicación cuál es el contenido de la notificación, su objeto y las prevenciones legales que contenga. Es importante hacer comprender al destinatario de la comunicación el objeto del mismo y desarrollar una labor de pedagogía que no lleve al rechazo y que sirva para cumplir nuestro objetivo con éxito pero también para realizar una importante labor social. Comunicarse con sinceridad, claridad y teniendo en cuenta que no todas las personas tienen el mismo nivel cultural. Por ello, es mejor explicar las cosas con palabras llanas, sencillas y, si es posible, dando algún ejemplo que facilite la comprensión” (“Praxis en la puesta en práctica del art. 152.1.2 LEC para optimizar los actos de comunicación”, *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2011, La Ley, Madrid, págs. 25-26).

⁵⁹⁷ La antes citada **STS 10.03.2010** también constató irregularidades en cuanto a la firma: “Al pie de la diligencia de emplazamiento consta una rúbrica y un escueto trazo, ninguno de ellos legible. No es posible afirmar que el trazo sea una rúbrica o el inicio de una rúbrica y menos aún identificar cuál de ellos corresponde al funcionario actuante y cuál al portero con el que se entendió la diligencia” (F. J. 5º).

duciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

El texto expuesto es el vigente tras la Ley 13/2009 (aunque la Ley 42/2015 ha eliminado la partícula *en todo caso* entre *funcionario y procurador*), que con gran acierto eliminó la obligación por parte del actuario de *amonestar* al destinatario que se negara a recibir la comunicación o a firmar la diligencia de entrega⁵⁹⁸. Gracias a esa reforma hemos pasado hoy día a algo más sensato como es tener que, simplemente, informar a dicho destinatario que la misma queda a su disposición en la Oficina judicial y que, acuda allí o no, se le tendrá de todos modos por notificado, citado, emplazado o requerido. Con esta mejora se consigue que el funcionario o procurador transmitan cierto distanciamiento, que no desinterés, con el trámite a realizar, evitando así cualquier recelo de tener un interés personal en el asunto más allá del que le exige su deber profesional. Este deber empieza en poner todo su empeño en localizar a la persona, pero ha de acabar cuando se le pone a su inmediata disposición aquello que ha de serle comunicado; que lo acepte o no, al profesional le ha de resultar absolutamente indiferente.

4.- LA COMUNICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA A TRAVÉS DE TERCEROS

4.1.- REQUISITOS INESCINDIBLES EXIGIDOS

No siendo posible la comunicación directa con el propio interesado, nuestra ley procesal civil ofrece a través del art. 161.3 la alternativa de poder practicarla a través de terceras personas, si bien exigiendo para ello la concurrencia cumulativa de determinados requisitos. En esencia, estos se refieren al lugar donde llevar a efecto el trámite y a la cualidad de esos receptores subsidiarios, quienes por razón de parentesco o afinidad, convivencia o dependencia, se encuentran vinculados al destinatario o al entorno donde presumiblemente desarrolla su vida cotidiana. De ser así, el legislador confía razonablemente en que llegará a su conocimiento la comunicación proveniente del órgano judicial.

La jurisprudencia no solamente ha venido a avalar esta posibilidad⁵⁹⁹, sino también a dar contenido y desarrollo –no siempre con acierto– a un art. 161.3

⁵⁹⁸ La redacción del art. 161.2 anterior a la Ley 13/2009 decía: “Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el Secretario Judicial o funcionario designado le amonestará de la obligación que impone el apartado anterior. Si insistiere en su negativa, el funcionario actuante le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia. Aquello venía, como bien dice CERRADA MORENO, “a dificultar la tarea de estos profesionales, conduciendo en muchas ocasiones a enfrentamientos innecesarios” (*Actos de comunicación procesal...*, op. cit. pág. 76). Así pues, que esta mención a la amonestación haya desaparecido hemos de considerarla como una mejora técnica, porque, en efecto, era “absurda” (MONTSERRAT MOLINA: “Particularidades de los actos de comunicación...”, op. cit. pág. 35).

⁵⁹⁹ V. gr., **STC 21/2006**, de 30.01: “Ello no supone, sin embargo, que no sean constitucionalmente válidas las formas de comunicación procesal realizadas con personas distintas de los destinatarios

impreciso que no cubre todas las eventualidades que se puedan suscitar, motivo por el que constituye fuente inagotable de una gran casuística condensada en los tres siguientes párrafos que lo componen:

*Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, **podrá efectuarse la entrega**, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndolo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario.*

*Si la comunicación se dirigiere al **lugar de trabajo no ocasional** del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella, con las mismas advertencias del párrafo anterior.*

***En la diligencia** se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.*

Transcrito el precepto podemos identificar las siguientes circunstancias para que el acto de comunicación se entienda válidamente efectuado a pesar de no haberse entendido directamente con el interesado:

1ª.- Que la comunicación se realice en alguno de los domicilios señalados. Si seguimos la norma al pie de la letra, no valdrá cualquier lugar donde pueda ser hallado el destinatario, sino sólo y exclusivamente si *fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio* (párr. 1º)...

- ...según el padrón municipal...
- ...o a efectos fiscales...
- ...o según registro oficial...
- ...o publicaciones de colegios profesionales...
- ...o fuere la vivienda local arrendado al demandado...
- ...[+ o] lugar de trabajo no ocasional... (párr. 2º).

Como se podrá cotejar, se trata de los mismos domicilios que ya relaciona el art. 155.3. ¿Estamos ante un sistema de ‘*numerus clausus*’? No lo vemos así⁶⁰⁰. Si

del acto o resolución judicial, pues así lo exige el aseguramiento del desarrollo normal del proceso y la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte” (F. J. 3).

⁶⁰⁰ Hacemos así nuestra la opinión de ARIZA COLMENAREJO, quien considera el art. 161.3 como un ‘*numerus apertus*’: “No parece que puedan darse más posibilidades de encontrar y considerar domi-

el legislador condiciona la eficacia de la comunicación indirecta a través de terceros a la existencia de un determinado vínculo con el destinatario, no hay razón para constreñir los lugares en que uno y otro puedan ser localizados⁶⁰¹. Además, ha pasado por alto que el funcionario o procurador que practique el trámite no sabrá si se ha constituido o no en uno de esos domicilios, salvo que hubiera estado pensando al redactar la norma que el órgano judicial habrá debido informarle previamente de ese dato⁶⁰².

2ª.- Que el tercero sea una de las personas expresamente designadas por el precepto. Todas ellas tienen en común ser afines al destinatario o, dicho con otras palabras, estar dentro de su círculo de convivencia o entorno personal –con exclusión de los vecinos⁶⁰³– o profesional. La relación no es, por tanto, casual, y

cilio un lugar en el que encontrar al destinatario, pero debemos entender el precepto como un *numerus apertus*, para lo cual serviría también cualquier lugar donde ocasionalmente se le pueda localizar (“El acto de comunicación entre las funciones de los procuradores”, op. cit., pág. 18, nota al pie, edición digital).

⁶⁰¹ De hecho, esa relación de lugares parece que no fue tenida en consideración en la **SAP Madrid (Secc. 18ª) 15.01.2013** (Roj: SAP M 592/2013): “[...] por la parte actora se indicó un domicilio, en el que se podía encontrar a la persona a emplazar, precisamente donde se habían remitido los documentos nº 6 y 10 de la demanda, lo que supone que se realizó en un lugar en el que podía ser localizado” (F. J. 1º).

Lo mismo ocurrió en la **SAP Lugo (Secc. 1ª) 14.12.2009** (Roj: SAP LU 1000/2009), que puso el énfasis en que el emplazamiento para contestar a la demanda fue recogido por el marido de la apelante: “[...] en el concreto caso que nos ocupa, a excepción del lugar, ya que no lo es ni en el domicilio ni el lugar de trabajo no ocasional se cumple con todos los que impone el art. 161.3 de la LEC. Así, se identifica perfectamente a la persona con la que se entiende la diligencia -el marido- advirtiéndole de la obligación que tiene de hacer llegar al destinatario la documentación entregada, tal que, a fin de no caer en un excesivo rigorismo formal y toda vez que no estimamos a la vista de las circunstancias del caso, alegaciones efectuadas y prueba de que disponemos que el recurrente haya cuestionado fundadamente la recepción del acto de comunicación, pues, aunque afirma la existencia de una separación de hecho desde el año 1985 (folio 299, en su declaración como imputada), el transito del régimen de gananciales al de separación es muy posterior, en el año 2002 y no consta su separación legal o divorcio, y al ser la nulidad de actuaciones procesales un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal que constituye una de las metas a cubrir por la justicia, pudiendo por ello afirmarse que no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso [...]” (F. J. 4º).

⁶⁰² ROIG VALDIVIESO detectó el “problema” de que “se ha debido conocer el domicilio como consecuencia de averiguaciones practicadas conforme el artículo 156, pues en otro caso las partes proporcionan los domicilios sin justificar si están o no en el padrón o algún registro (art. 155.2), entonces no se da el supuesto en que cabe entregarle el acto a otra persona” (“Las actuaciones judiciales...”, op. cit., pág. 96). CANCIO FERNÁNDEZ también puso de manifiesto esta imposibilidad de que el funcionario actuante sepa si el domicilio es “el verdadero” conforme a los datos oficiales (“Los actos de comunicación...”, op. cit., pág. 68).

⁶⁰³ Tras la LEC 2000 no es posible entenderse (afortunadamente) con los vecinos, como ocurría con la LEC 1881. Su art. 268 permitía la entrega “al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, el vecino más próximo que fuere habido”. Vid., entre otros pronunciamientos, **AAP Cádiz (Secc. 2ª), 02.02.2009**, F. J. 2º (Roj: AAP CA 43/2009).

La supresión del vecino fue una decisión que ya aparecía tomada por el Ministerio de Justicia en el Anteproyecto de LEC, aunque el CGPJ consideró en el trámite de informe que parecía “aconsejable”

obedece al “alto grado de probabilidad de que, en razón de los vínculos del demandado con el lugar donde se ha practicado la diligencia y con la persona que ha recibido la documentación, aquél recibirá en tiempo la cédula en términos que pueda válidamente defenderse”⁶⁰⁴.

En concreto, estas personas son:

- *Cualquier empleado.* Ese trabajador puede ser tanto de una persona jurídica como de una persona física, en cuyo domicilio puede hallarse, por ejemplo, prestando servicios un empleado o empleada de hogar⁶⁰⁵; esto ha suscitado problemas sobre todo relacionados con el alcance de la subordinación del trabajador con su empleador (el primero dice tener del segundo ordenes terminantes “de no recoger nada”) y, especialmente en el ámbito doméstico, con el idioma (la empleada no comprende o manifiesta no comprender el castellano). La mención a la edad de 14 años no debe entenderse referida a esta primera persona de las que señala el precepto, pues para poder tener tal condición hay que tener un mínimo de 16 años, según establece la legislación laboral⁶⁰⁶.
- *Familiar mayor de 14 años.* Aquí ha entendido el legislador que una persona de dicha edad tiene ya el suficiente grado de madurez como para comprender que, sea lo que fuere aquello que ha recogido, habrá de entregarlo

mantener la posibilidad de hacer la entrega “al vecino más próximo que fuere habido” (Informe de 11.05.1998), mientras que, haciendo lo propio, el Consejo de Estado mantuvo lo contrario: “El criterio inspirador al respecto no debe ser otro que incluir en esa relación a las personas que tengan un vínculo claro con el destinatario de las comunicaciones y, por extensión, con su domicilio. El Consejo de Estado estima que ese vínculo se da en el caso de los familiares y empleados del destinatario, así como en el del conserje o empleado de la finca. Por el contrario, esa relación resulta excesivamente amplia e indefinida y no resulta convincente en el caso del «amigo» que se incluye igualmente en el citado artículo 160, número 3, del Anteproyecto. Por las mismas razones, tampoco parece suficientemente preciso el «vecino más próximo que fuere habido» previsto por el artículo 268 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no se comparte la sugerencia del Consejo General del Poder Judicial de incluirlo en el referido artículo 160, número 3”.

En esa tesitura CUBILLO LÓPEZ sugirió como solución intermedia la de que se mantuviera la figura del vecino, “pero siempre que éste aceptase *libremente* el encargo”, apuntando incluso que no le parecía descabellado una interpretación sistemática del art. 161 conforme a la cual se pudieran “permitir notificaciones al vecino del destinatario que reciba con disposición favorable ese cometido” (*La regulación de las actuaciones del juicio*, op. cit., pág. 118).

⁶⁰⁴ AAP Zaragoza (Secc. 4ª) 11.10.2007, F. J. 7º (Roj: AAP Z 1004/2007); y sigue diciendo: “En definitiva si se quiere sintetizar la normativa procesal sobre el emplazamiento había que concluir que esta tiene que entenderse personalmente con el demandado, que debe practicarse inicialmente en su domicilio, único supuesto en el que se excusa la entrega de la documentación a la propia persona del demandado, pudiéndose hacer a determinadas personas que han de tener un vínculo de parentesco, de convivencia, de dependencia o de proximidad, que haga altamente verosímil que se le entregará al demandado” (F. J. 7).

⁶⁰⁵ La SAP Madrid (Secc. 20ª) 22.01.2013 (Roj: SAP M 634/2013) entendió válidamente efectuar el emplazamiento “a quien manifestó ser empleada de hogar del domicilio” (F. J. 4º).

⁶⁰⁶ Art. 6.1 del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg. 2/2015, de 23.10): *Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años* (idem art. 6.1 del anterior RDLeg. 1/1995).

a su pariente destinatario⁶⁰⁷. También habrá que considerar al familiar de forma amplia, tanto por consanguinidad como por afinidad⁶⁰⁸. El hecho de existir una relación de parentesco hace innecesario, a nuestro juicio, el requisito de la convivencia.

- *Persona con la que conviva*⁶⁰⁹, mayor de 14 años. Dicha convivencia hace que deba excluirse la posibilidad de entenderse con un “amigo” sin más, exigiéndose la presencia, al menos, de un compañero de piso⁶¹⁰. La amistad podrá ser condición necesaria pero no suficiente para sustentar un mínimo grado de vinculación con el destinatario que permita confiar ‘a priori’ en que la comunicación le va a ser trasladada por aquél⁶¹¹. Por otra

⁶⁰⁷ No obstante, la **SAP Madrid (Secc. 10ª) 17.09.2009** (Roj: SAP M 9867/2009), en un caso en que el que la comunicación se hizo con persona menor de 14 años, no acordó la nulidad de actuaciones interesada al entender que no se había dado el requisito de la indefensión: “[...] aun cuando al acto de comunicación parece haberse llevado a cabo con persona menor de 14 años, lo que supone una infracción del artículo 161-3 de la Ley Procesal Civil, la nulidad del acto procesal se subordina en el artículo 225-3 a que se haya podido producir indefensión, con lo que la mera irregularidad procesal per se es insuficiente para acarrear la nulidad del acto procesal” (F. J. 1º).

⁶⁰⁸ Por ejemplo, a la pareja sentimental del demandado: **SAP Baleares (Secc. 5ª) 13.07.2004** (Roj: SAP IB 1088/2004): “El hecho de que conociera la existencia de la sentencia a través de su compañera sentimental, lleva a la consideración de considerar increíble que no pudiese haber conocido el emplazamiento mediante dicha persona sin que exista prueba en autos justificativa de un motivo por el cual la receptora de la notificación tuviere interés en ocultarla al demandado, más cuando la Sra C. ocupa precisamente el domicilio arrendado, suponemos que con consentimiento del demandado arrendatario de la vivienda. El emplazamiento efectuado se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 169 de la LEC, y se efectuó en la persona de que dijo ser su compañera sentimental ocupante del piso arrendado, equiparable a un familiar mayor de catorce años” (F. D. 2º); o al “hijo de la pareja sentimental que reside con el [interesado] en ese domicilio”: **SAP Madrid (Secc. 21ª) 04.05.2010** (Roj: SAP M 6940/2010): “Debiendo entenderse que, el hijo de su compañera sentimental que reside con él en ese domicilio, es su familiar, a los efectos del apartado 3 del artículo 161, quien ya había cumplido los 14 años, teniendo 14 años y 10 meses, por lo que era mayor de catorce años. Sin que el dato de ser de nacionalidad portuguesa invalide la citación para el juicio que se hizo cumpliendo los requisitos legales” (F. J. 1º).

⁶⁰⁹ Tercero receptor incorporado por Ley 13/2009.

⁶¹⁰ **SAP Valencia (Secc. 9ª) 28.05.2012**, F. J. 2º (Roj: SAP V 1731/2012).

⁶¹¹ De la falta de validez del emplazamiento efectuado en la persona de un amigo da buena cuenta la **SAP La Rioja (Secc. 1ª) 16.02.2004** F. J. 2º (Roj: SAP LO 71/2004): “[D]e la lectura de la diligencia de emplazamiento que obra al folio 88 de las actuaciones, se comprueba que la entrega de la cédula, resolución y demanda no se efectuó a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino a un “amigo” de quien no consta la condición de empleado o familiar, y que fue realizada en una vivienda que no resultaba ser el domicilio según el padrón municipal de habitantes, pues a estos efectos la demandada aparecía inscrita en el domicilio sito en la CALLE000, NUM008, NUM005 (al folio 187), con lo que no se ha dado cumplimiento a las previsiones legales sobre el emplazamiento y no consta su recepción de otro modo” (F. J. 2º).

De la tesis contraria es, no obstante, la **SAP Valencia (Secc. 11ª) 10.10.2005** (SAP V 5388/2005), para la que “el criterio dominante es el del «domicilio del destinatario», por ello no puede olvidarse que, en el caso de autos, aquella se realizó a una persona que se encontraba en dicho lugar, extremo este que determina calificar la vinculación con esa persona como superior al mero conocimiento, pues no se está en el domicilio de otro sino en virtud de una estrecha relación personal, (cuasi familiar) o laboral, y por tanto con consentimiento del destinatario” (F. J. 2º).

Apréciase que en el Anteproyecto de la LEC (1997) sí se contemplaba la figura del amigo entre los

parte, el requisito de la convivencia, aquí sí exigible, debería excluir la posibilidad de comunicación con un arrendatario⁶¹², salvo el caso no muy habitual de que éste lo sea de una habitación y el arrendador-destinatario siga residiendo en el mismo domicilio.

- *El conserje de la finca, si lo tuviere.* Quizá con una actualización a los tiempos actuales sería mejor decir “Conserje de la finca o Comunidad de Propietarios”.
- + (en el lugar de trabajo no ocasional) *persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella* (párr. 2º). Este segundo párrafo del art. 161.3 introduce una gran distorsión en el planteamiento establecido por el párrafo primero, pues de forma abrupta las exigencias se relajan a su mínima expresión y ahora basta que la entrega se efectúe en la persona de un simple “conocido”, ni siquiera un compañero de trabajo o persona de su entorno laboral, o, con menos rigor aún, en la ventanilla de registro o de recepción de escritos del lugar de trabajo, por muy habitual (no ocasional) que sea (piénsese en una multinacional con cientos de empleados). La garantía que en teoría proporciona el propio domicilio del interesado, supuestamente el reducto de su intimidad, para que sea verosímil pensar en

receptores subsidiarios: Artículo 160.3p1: “Si el destinatario no se encontrare en su domicilio, podrá efectuarse la entrega a cualquier familiar, empleado *o amigo*, mayor de catorce años que se encuentren en dicho domicilio, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de la misma, o a darle aviso, si sabe su paradero”. Esta idea tuvo poco recorrido y se suprimió en el Proyecto de Ley (1998) presentado en el Congreso.

⁶¹² La **SAP Madrid (Secc. 10ª) 20.07.2006** (Roj: SAP M 11111/2006) entendió justo lo contrario: [...] las diligencias de citación para el acto del juicio y comunicación de las copias de la demanda se entendieron [...] con quien dijo ser «inquilino» y ocupar la misma vivienda designada en la demanda como domicilio de las demandadas, a más de haberse notificado personalmente a una de ellas la sentencia dictada. El receptor aparece debidamente identificado y firmó las diligencias llevadas a efecto” (F. J. 5).

En igual sentido, **SAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª) 17.01.2012** (Roj: SAP TF 298/2012): “Solicita, en primer término, que se declare la nulidad de actuaciones, por incumplimiento de lo previsto en los artículos 155, 158 y 161 LEC, alegando que no tuvo conocimiento de que se había presentado demanda contra ella, hasta fechas posteriores a la celebración del juicio, acudiendo al Juzgado de La Orotava, donde le informaron que se habían presentado en su domicilio y le habían entregado la documentación a una persona a la que tenía alquilada una habitación y que dicha persona nunca le entregó la demanda formulada en su contra.

El examen de las actuaciones y en concreto de la diligencia de citación de fecha 17 de marzo de 2011, pone de manifiesto que recibió la citación la persona que, como aduce la apelada, se identifica con nombre, apellido y DNI, manifestado además ser compañero de piso de la apelante.

El artículo 161.3 párrafo tercero establece que: [...]. Dicha diligencia cumple los requisitos exigidos por el precepto transcrito, siendo en consecuencia válida y eficaz, por lo que no procede declarar la nulidad de actuaciones solicitada por la apelante, que se limita a manifestar que la persona que recibió la notificación era su inquilino y no le entregó la notificación, pero omite como tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento en fechas posteriores a la celebración del juicio, o dar explicación concreta, que permita presumir el incumplimiento del receptor de la cédula, de su obligación de entregarla a la persona que es su arrendadora y habita en la misma vivienda” (F. D. 2º).

que, más pronto que tarde, será informado de lo acontecido, ya no es necesaria cuando estemos en su entorno laboral, lo cual nos parece insostenible⁶¹³.

Pese a lo dicho, este ambivalente criterio que caracteriza al art. 161.3 da pie a plantearnos la conveniencia de que se pudiera abrir el espectro de terceras personas con las que poder practicar la comunicación, de modo que pudiera hacerse cargo *cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad*, como dice el art. 58.2 de la Ley 30/1992 para las notificaciones administrativas, idea que se repite en el art. 111.1 de la Ley General Tributaria⁶¹⁴ o el art. 41.2 del Reglamento Postal en relación con las comunicaciones postales. Lo mismo cabe decir de las notificaciones y requerimientos notariales, donde el art. 202p3, del Reglamento Notarial dispone que, *de no hallarse presente el requerido, podrá hacerse cargo de la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su identidad*. Aún así, habría que introducir la salvedad de que fuere manifiesto que la presencia de esa “cualquier persona” en dicho lugar fuese meramente circunstancial (caso, v. gr., de un profesional efectuando una reparación o servicio).

3ª.- Que el tercero se encuentre en ese lugar. Excepción hecha, lógicamente, del conserje de la finca, lo que no quita que deba hallarse en la finca donde radique ese domicilio del destinatario.

4ª.- Que no se encontrare allí al destinatario. Aunque pudiera resultar una obviedad, si el destinatario es hallado en el domicilio o su regreso se prevé inminente, habrá de entenderse con él la diligencia y no con los terceros con los que se entienda al actuario.

5ª.- Que se advierta expresamente al receptor de la obligación que contrae. Esto es, la de *entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o darle aviso, si sabe su paradero*, debiendo además dejarse consignado de algún modo que entiende y asume dicha obligación. Este requisito es primordial. Si el funcionario o procurador no se preocupan en dejar meridianamente claro a ese tercero ese deber que se ha irrogado desde el mismo instante en que se ha convertido en receptor de la comunicación (a continuación explicaremos este “pequeño” matiz) y en obtener de él su compromiso de llevarlo a cabo, de nada valdrá todo lo demás. Y aun cuando recabemos dicha promesa de entrega de la

⁶¹³ CUBILLO LÓPEZ estima, empero, que “los problemas de efectividad se reducen, ya que no es difícil que haya alguna «persona que manifestare conocer a aquél» o, incluso, que exista «dependencia encargada de recibir documentos u objetos»” (*La regulación...*, op. cit., pág. 119).

⁶¹⁴ **Art. 111.1 LGT** (Ley 58/2013): “Personas legitimadas para recibir las notificaciones”. 1. *Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.*

comunicación, no querrá decir ello que se pueda presumir de forma irrefutable haber llegado la misma a conocimiento del destinatario, de modo que habrá de permitirse la prueba en contrario, sin perjuicio de la responsabilidad, cuanto menos extracontractual, en que el tercero, convertido ya con todas sus consecuencias en verdadero receptor, haya podido incurrir⁶¹⁵.

6ª.- Que concurren el resto de formalidades legales generales. Nos referimos a las exigencias relativas a la persona que practica la comunicación (funcionario o procurador), de forma (por cédula o copia y con entrega de los documentos correspondientes) y de tiempo (en horas hábiles), ya vistas.

7ª.- Que el tercero pueda hacer entrega de la comunicación al destinatario. La “excesiva imprecisión”⁶¹⁶ del precepto se aprecia también ante la falta de respuesta ante la posibilidad de que los receptores subsidiarios manifiesten ante el funcionario o procurador la imposibilidad de entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de la misma.

8ª.- Que el tercero se preste a ser receptor. Situamos deliberadamente para el último lugar la más importante de las circunstancias y, sin embargo, la más ignorada, pues cabría plantear si realmente hay recepción si no hay consentimiento de ese tercero. La cuestión tiene en la práctica dos posturas totalmente enfrentadas que merecen ser estudiadas en el siguiente apartado propio.

4.2.- LA PROBLEMÁTICA EXPRESIÓN “PODRÁ” DEL ARTÍCULO 161.3 LEC

No son pocos los análisis y comentarios en nuestra literatura jurídica que han analizado los requisitos y la validez procesal de los actos de comunicación practicados con personas distintas del destinatario. Todos ellos han concluido, ya lo hemos estudiado, que ello es perfectamente ajustado a Derecho cuando no ha sido posible entenderse directamente con aquél. Pero muy pocos de los textos doctrinales y jurisprudenciales consultados se detienen en lo que constituye el presupuesto del acto de comunicación realizado a través de un tercero: la voluntariedad

⁶¹⁵ Vid., p. ej., el caso conocido por la **SAP Barcelona (Secc. 19ª) 13.03.2013** (Roj: SAP B 3694/2013), que aplicando la llamada “doctrina del daño por pérdida de oportunidades”, desestimó el recurso de apelación interpuesto por una persona física, condenada en primera instancia por responsabilidad extracontractual conforme al art. 1902 CC, debido a que incumplió la obligación que le imponía el artículo 161.3 LEC respecto al emplazamiento a la mercantil demandada.

También, la **SAP Madrid (Secc. 8ª) 13.02.2012** (Roj: SAP M 1232/2012): “[...] la citación dirigida a él, fue entregada a la persona de su madre Doña Leonor, para concluir que la citación es correcta; en consecuencia, sus propias manifestaciones dejan sin contenido el alegato, pues por una parte confirma la legalidad de la notificación y citación producida, al amparo del artículo 161.3 de la LEC, y por otra, que no puede acreditar esa falta de traslado respecto de la madre al hijo demandado, ahora apelante, lo que evidentemente hace innecesaria mejor consideración al respecto, con expresa reserva de las acciones que puedan competir al apelante en relación con la falta de diligencia de su familiar en la entrega de la misma, que es cuestión distinta y motivo que no puede sustentar la indefensión alegada” (F. J. 3).

⁶¹⁶ Así lo puso de manifiesto CACHÓN CADENAS, cuando la LEC estaba todavía en fase de proyecto (1998) y el entonces art. 160.3 se presentaba con la misma redacción finalmente aprobada (“Jurisdicción, partes y actos procesales”, op. cit. pág. 383-384).

misma a la recepción⁶¹⁷. Se da por hecho que dicha persona se ha prestado a convertirse en el mismo momento de la práctica del acto de comunicación en “receptor”, más allá de “mero tercero”. También el art. 161.3 da por supuesta esta cualidad, pues también habla de advertir, no a ese tercero, sino ya *al receptor*. Lo que subyace es la idea de que estamos ante una proyección concreta de esa obligación genérica de colaborar con la Administración de Justicia elevada a rango constitucional con el art. 118 CE⁶¹⁸.

Sin embargo, tal y como está redactado actualmente el precepto, sin modificaciones en este aspecto desde su promulgación original en el año 2000⁶¹⁹, la falta de colaboración por parte de ese tercero no acarreará responsabilidad alguna, y ello por la simple razón de que el legislador civil no la ha previsto. El aptdo. 3º del art. 161 solo pretende dotar de la misma validez procesal a una comunicación que por naturaleza ha de ser dirigida a su destinatario y no a intermediarios ni terceros totalmente extraños al litigio, pero que por la propia dinámica del sistema y para no abocarlo al colapso se hace necesario darles esa intervención puntual. Por eso elige el verbo “poder”, pero no como sinónimo de “deber”, sino de “permitir” o de “caber”⁶²⁰, es decir, que es procesalmente “posible”, de forma exactamente igual a como lo hace con el art. 135.5 en cuanto a la presentación de escritos sometidos a plazo, que *podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo*; o en el art. 160.3, conforme al cual *podrá remitirse... cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede*; o, incluso, en el art. 16.1, que faculta (no obliga) a los causahabientes del litigante fallecido a sucederle en el proceso, del tal modo que *podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste*⁶²¹.

⁶¹⁷ Así, ROIG VALDIVIESO se limitaba a dejar planteada la incógnita: “[...] Problemas: 1. No se sabe qué apercibimiento habrá que realizarle, para el caso de que no le entregue el acto al destinatario. 2. ¿Y si se niega a recoger el acto de comunicación?” (“Las actuaciones judiciales...”, op. cit. pág. 96).

⁶¹⁸ **Art. 118 CE:** *Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.*

PRIETO-CASTRO encuentra el carácter obligatorio de la recepción en ese precepto constitucional: “Pueden y están obligados a recibir la notificación, en cumplimiento de un deber de auxilio a la Justicia (art. 118 Const.), el pariente más cercano o empleado..., [...] haciéndose, a cualquiera que sea, la *advertencia* del deber que tiene de hacer llegar la notificación [...]” [art. 268 LEC 1881], *Tratado de Derecho Procesal Civil...*, op. cit., pág. 819.

⁶¹⁹ Incluso antes, pues ya estaba presente, dentro del entonces art. 160, en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados, manteniéndose el apartado 3º inalterado hasta su aprobación definitiva. Vid. BOCG Serie A, n.º 147-1 de 13.11.1998, pág. 51.

⁶²⁰ El problema que tiene el verbo “caber” es que al conjugarlo en la tercera persona del futuro simple nos sale “cabrá”, que puede resultar un tanto malsonante.

⁶²¹ También podemos citar el ejemplo de la vista del recurso de apelación, que *podrá acordarse... siempre que así lo haya solicitado alguna de las partes o el Tribunal lo considere necesario* (art. 464.2). Para IBARRA SÁNCHEZ “la interpretación del precepto no deja lugar a dudas da la expresión «podrá», lo que implica que aun solicitando ambas partes la vista, la celebración de la misma es potestativa del tribunal sin que esta petición obligue al órgano judicial” (*Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio*, op. cit., pág. 544, con cita en nota, a su vez, de DIEZ NÚÑEZ, JOSÉ JAVIER, en el mismo sentido).

Advertir esta diferencia entre “podrá” y “deberá” es por tanto vital, pues cambia radicalmente el planteamiento: con el primero la acción del sujeto es meramente facultativa; con el segundo, preceptiva. Así las cosas, el error puede ser mayúsculo si no se interpreta adecuadamente que la previsión *podrá efectuarse la entrega a...* significa únicamente que no será nulo entenderse con persona distinta del destinatario. Nada más. De ningún modo habilita por sí misma para obligar, y no pensemos en coaccionar, a ese tercero que no quiere o no debe hacerse cargo de dicha entrega y convertirse automáticamente con ello en receptor de la comunicación. Esto se ha pretendido en la práctica por parte de algunos juzgados que, arrastrados por la miope idea de que sí se puede exigir tal comportamiento a dicho tercero, han insistido de forma obstinada en reiterar el trámite con el mismo en casos en los que se les ha devuelto la diligencia de comunicación informándose que algunas de las personas del art. 161.3 han rehusado la entrega.

Bien es cierto que en sede parlamentaria también se partió de esta idea, según se desprende de los diferentes proyectos de ley que se convirtieron en leyes que modificaron el art. 161.3⁶²², y que el precepto homólogo de la anterior LEC 1881, el art. 268, decía en su párrafo 1 que “dicha cédula *será entregada* al pariente más cercano...”.

No obstante, mucho tendría que cambiar la redacción del art. 161.3 para dar cobertura a una pretensión de tal calibre. Para empezar, habría de contener una llamada al deber de colaboración de los ciudadanos, como lo hace el art. 591.1⁶²³; luego, la expresa previsión de una consecuencia a su incumplimiento, la cual, si tiene carácter sancionador, tendría que sujetarse, cuando menos, a los principios de responsabilidad y de proporcionalidad; finalmente, el efecto que la negativa a la recepción supondría para el verdadero sujeto pasivo de la comunicación, el destinatario, y pronunciarse de forma concluyente si la misma se tendría o no por efectuada. Esa empresa sería, no obstante, muy fácil de acometer, puesto que lo único que habría que hacer es acudir al proceso laboral.

Desde el punto de vista estrictamente teórico, buena parte de las anteriores disquisiciones no se suscitan en la jurisdicción social gracias a una notablemente mejor técnica legislativa, no solo en la actual Ley 36/2011, de 10.10, *de la Jurisdic-*

⁶²² Así, al tramitar el proyecto de ley llegó a ser la Ley 23/2003, que añadió el inciso “o vivienda o local arrendado al demandado” en el precepto, el diputado Sr. Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), expuso: “Junto a estas novedades que les vengo señalando, hay otras no menos importantes: por ejemplo, la posibilidad de que el demandante, en el momento de presentar la demanda, pueda señalar como domicilio en el que deba notificarse al demandado el de la vivienda o local arrendado y que las notificaciones practicadas o intentadas en ese domicilio surtan efecto, tal y como señala la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, que el familiar o empleado que se encuentre en ese domicilio —así como el portero de la finca— *deba recoger* la notificación y trasladarla al demandado, o, en su caso, cursarle aviso de que se ha recibido la notificación correspondiente. Esto evitará algunas tácticas dilatorias del procedimiento” (Diario de Sesiones del Congreso de 26.06.2003, nº 264, pág. 13719) (la cursiva es nuestra).

⁶²³ **Art. 591.** “Deber de colaboración”: 1. *Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución [...].*

ción Social, sino en la anterior Ley de Procedimiento Laboral de 1995 (RDLeg. 2/1995). El actual art. 57 LJS⁶²⁴, que sería el equivalente al art. 161.3, cumple con casi todos los requisitos anteriores:

- a) Dota de eficacia legal, como en el proceso civil, a las comunicaciones domiciliarias con terceros y dispone en su apartado 1 que la copia de la resolución o de la cédula *se entregará*, con lo que con el empleo del verbo en imperativo se está ordenando de forma unívoca al funcionario o procurador un único proceder: la entrega. Lo que no prevé son los problemas de aplicación práctica que ello trae consigo.
- b) En el apartado 3º se deja bien claro que el receptor *ha de cumplir el deber público que se le encomienda* y, si acaso queda alguna duda, que ese deber es una *obligación* que no es otra que la de *entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero*.
- c) Establece una *advertencia* para el caso de contravención, concretada en la imposición de una sanción pecuniaria o multa *de veinte a doscientos euros*, pero no sólo si *no hace la entrega a la mayor brevedad*, sino incluso *si se niega a la recepción*. La disposición se completa con la obligación *de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado*, así como con que el receptor *tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen*.
- d) Sin embargo, no establece una consecuencia procesal para el destinatario para el caso de que el tercero se niegue a la recepción. Afortunadamente, no dispone que se tendrá por efectuada la comunicación como si de aquella misma persona se tratase⁶²⁵.

⁶²⁴ **Art. 57 LJS:** “Reglas subsidiarias para las comunicaciones”: 1. *Si los actos de comunicación no pudieran efectuarse en la forma indicada, se practicarán mediante entrega de la copia de la resolución o de cédula al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de catorce años, que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempeñe funciones de portería o conserjería de la finca.*

2. *Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado o interesada, se podrá entregar la copia de la resolución o la cédula a cualquiera de las personas antes mencionadas, así como a quien por su relación con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicación.*

3. *Se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepción o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen.*

4. *En todo caso, la comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o cédula se realizará conforme a lo establecido en los artículos 152 y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

⁶²⁵ En la legislación notarial este efecto sí está previsto: el art. 202 RN, tras regular la diligencia que se practique con terceros y acto seguido de establecer que *si ésta se negare a manifestar su identidad o su relación con el destinatario o a hacerse cargo de la cédula, se hará igualmente constar* (párr. 8º), tiene la siguiente cláusula de cierre: *La notificación o el requerimiento quedarán igualmente*

Con esas características el art. 57 LJS supone técnicamente una mejora significativa en la regulación de las comunicaciones judiciales *mediante entrega* que estamos estudiando, despejando de raíz la mayor parte de los problemas interpretativos como el que se suscita con su homólogo art. 161.3.

Pese a todo lo anterior, no defenderemos desde aquí la transposición del precepto laboral a la LEC en sustitución de su art. 161.3, sino simplemente completar este último con una simple acotación entre *podrá efectuarse la entrega y cualquier empleado* que diga “si el receptor se prestara a ello”, aclarando así el sentido del verbo “poder”. La práctica ‘in situ’ demuestra que obligar a los terceros crea enfrentamientos absolutamente innecesarios. Si la ley no obliga al propio destinatario de la comunicación, auténtico interesado en la misma⁶²⁶, a que se haga cargo de la misma y teniendo en cuenta que ya ni siquiera se le advierte ni se le amonesta conforme al antiguo art. 161.2, resulta excesivo imponer por la fuerza dicha obligación a quienes nada tienen que ver con el proceso judicial, razón por la cual tampoco se les puede reprochar que estén obrando con mala fe procesal, puesto que no son partes u otros intervinientes ex art. 247⁶²⁷.

No hay que olvidar tampoco que los funcionarios no van uniformados –lo que complica transmitir la imagen de agentes de la autoridad–, menos todavía, huelga decirlo, los procuradores, y que hay que comprender la desconfianza natural que puede suscitarse en quienes ven perturbada la intimidad de su domicilio por quienes, a veces a horas intempestivas⁶²⁸, dicen pero rara vez acreditan ser empleados públicos, y ello por la sencilla razón de que, como lamentablemente ocurre, la Administración competente no les ha provisto o tarda demasiado tiempo en hacerlo de las *credenciales necesarias* de que habla el art. 478 LOPJ. El problema se puede acrecentar cuando son los procuradores los que practican el acto de comunicación, sobre todo cuando se informa a los destinatarios que son la representación procesal de quienes, precisamente, les han demandado, por mucho que tengan ya capacidad de certificación y que actúen en calidad de cooperadores del órgano judicial. Solo mediante el concurso entre el buen hacer y diplomacia del actuario y la predisposición de la persona con la que se entienda la diligencia podrá llegar a realizarse con éxito –o “con resultado positivo”, como se dice en la jerga forense⁶²⁹– el acto de comunicación de que se trate.

cumplimentados y se tendrán por hechos en cualquiera de las formas expresadas en este artículo (párr. 9º).

⁶²⁶ Estamos en el ámbito civil, donde por definición se ventilan únicamente intereses privados, por lo que la función tuitiva del Estado no es tan intensa.

⁶²⁷ Así lo pone de manifiesto ORTIZ CRUZ (“La notificación personal...”, op. cit., pág. 2).

⁶²⁸ Por mucho que el art. 130.3p2 establezca como horas hábiles para la práctica de los actos de comunicación las comprendidas entre las 08:00 y las 22:00 horas, las costumbres sociales hacen que llamar a la puerta del domicilio de una persona a las 08:00 de la mañana o a las 21:59 horas de la noche, por ejemplo, pueda llegar a resultar, cuanto menos, comprometido.

⁶²⁹ *Positivas* son aquellas diligencias en las que dan cumplimiento a lo acordado por el órgano ordenante (arts. 11 y 12.b del Reglamento 2/2010, del Pleno del CGPJ, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales).

Ante esta tesitura la solución práctica que proponemos es mucho más sencilla y sensata: bastará dejar el aviso a ese tercero y, ahí sí, comprometerle con el art. 118 CE a su pronta entrega al destinatario, porque es la mínima colaboración exigible. La misma táctica habrá que adoptar cuando el problema se refiera a la negativa a la mera identificación de la persona⁶³⁰, tanto si es ese tercero como si es el propio interesado, a quien, puesto que no se sabe si es él o no, no se le podrá aplicar el art. 161.2. Como última posibilidad también cabrá dejar el aviso en el buzón o debajo de la puerta del domicilio como en los casos en que no hay nadie en el mismo. A partir de ahí, que la comunicación llegue o no a conocimiento del destinatario dependerá en buena medida del interés que preste a dicho aviso.

Esto se ha pretendido en la práctica por parte de algunos juzgados que, arrastrados por la miope idea de que sí se puede exigir tal comportamiento a dicho tercero, han insistido de forma obstinada en reiterar el trámite con el mismo en casos en los que, por ejemplo, se les ha devuelto la diligencia de comunicación informándose que el compañero de piso del destinatario ha rehusado la entrega⁶³¹.

Con las notificaciones administrativas, desde luego, no se obliga a nadie. Se acude al domicilio y si nadie se hace cargo, se intentará en una segunda y última ocasión la notificación. *La expresión podrá efectuarse la entrega* del art. 161.3 LEC tiene su equivalente en la *de podrá hacerse cargo* del art. 59.2 de la Ley 30/1992 – igual en el art. 42.1 de la Ley 39/2015-, expresión con la que la doctrina administrativista reconoce una recepción de carácter voluntario. Así, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y CASTILLO VÁZQUEZ no dudan en afirmar que “la utilización de este

⁶³⁰ MAGRO SERVET cree necesaria una respuesta totalmente opuesta y radical: “El funcionario judicial, en el ejercicio de sus funciones, puede exigir la identificación, haciéndole saber a la persona de que se trate, pudiendo incurrir, de no hacerlo, en delito de desobediencia. Hará constar en la diligencia, sin perjuicio de dar cuenta al Juzgado de Guardia, bien directamente o mediante la remisión” (*Guía práctica...*, op. cit. pregunta n.º 371, pág. 210).

⁶³¹ Esta errónea aplicación del precepto la encontramos también en la ya citada Circular 1/2009 del Secretario Coordinador Provincial de Mallorca, sobre Funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma: “En los casos en que el interesado, familiar mayor de 14 años o empleado se negasen a recoger la documentación, se extenderá una DILIGENCIA POSITIVA, haciéndose constar por el funcionario actuante que le ha hecho saber que aún así se producen los efectos de la comunicación y que la copia de la resolución o la cédula se hayan a su disposición en la secretaría del Juzgado remisor” (Apartado “D”). Curiosamente, no se menciona en la Circular ni el *conserje de la finca*, ni la circunstancia de la relación de convivencia con el destinatario del *familiar o persona receptora* de la que habla el art. 161.3, amén de no referirse expresamente a dicho precepto.

También en el Protocolo de normas marco de Andalucía de 2007 (*supra*, nota n.º 3): “Cuando el destinatario sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir copia de la resolución o cédula o no quiera firmar la diligencia de entrega, se le apercibirá conforme a lo establecido por el párrafo 2 del precitado artículo haciéndole entrega de nota que se adjunta en los “ANEXOS”, en el que consten los datos del procedimiento de que dimana la comunicación. Si dicha negativa la llevará a cabo alguna de las personas a que se refiere el párrafo 3 del indicado artículo se le hará igualmente entrega de dicha nota haciéndole saber la obligación de colaboración requerida por jueces y Tribunales que impone el art. 118 de la Constitución y 591 de la ley indicada anteriormente” (págs. 35-36).

término indica la carencia de obligatoriedad en la recepción de la notificación por persona distinta del destinatario”⁶³².

4.3.- NEGATIVA DEL TERCERO A LA RECEPCIÓN: LA INDEBIDA EXTENSIÓN DE EFECTOS DEL ARTÍCULO 161.2 AL ARTÍCULO 161.3 LEC

Trataremos a continuación de exponer la otra gran irregularidad que, a nuestro entender, puede advertirse en la práctica y en la jurisprudencia al aplicar el art. 161, que se refiere a la indebida extensión de efectos de su aptdo. 2 a su aptdo. 3. Páginas atrás hemos visto que si es el propio destinatario el que rehúsa la comunicación, la misma se tendrá a todos los efectos por efectuada, pues así lo dispone taxativamente el art. 161.2⁶³³. El problema reside en que se incurre con mucha frecuencia en un error grave: extender dicha consecuencia al art. 161.3. No solamente sucede que el apartado 2º del art. 161 está previsto para cuando *el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio*, mientras que el apartado 3º lo es para cuando *no se encontrare allí dicho interesado*, sino que, como se puede apreciar de la lectura conjunta de ambos apartados, el único supuesto en que se puede *hacer saber* (ya no advertir, ni menos amonestar) que la cédula o la copia de la resolución queda a su disposición en la Oficina judicial, entendiéndose positivo el trámite aunque rehúse, es cuando esa persona es la propia destinataria (aptdo. 2), pero no cuando es un tercero (aptdo. 3), situación en la que el legislador civil no ha previsto ninguna consecuencia⁶³⁴, tal y como hemos expuesto en el epígrafe anterior y como ESCRIBANO MORA, ya había apuntado en el mismo año en que entró en vigor la actual LEC⁶³⁵.

⁶³² FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y CASTILLO VÁZQUEZ: *Manual de las Notificaciones Administrativas*, op. cit., pág. 271. Los autores apoyan su tesis en la STSJ (C-Advo.) Murcia 10.11.1999.

⁶³³ ¿Por efectuado incluso cuando el destinatario se parapete tras la puerta de su domicilio sin querer abrirla? A juicio de la **SAP Alicante (Secc. 5ª) 28.02.2013** (Roj: SAP A 449/2013), sí: “[...] la demandada se negó a abrir la puerta de su domicilio, dejándosele cédula con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del citado art. 161. Con tales circunstancias el motivo debe desestimarse pues la única culpable de no haber recibido la notificación y emplazamiento es la demandada, que debe asumir la responsabilidad de su negativo proceder” (F. J. 2).

⁶³⁴ Resulta interesante traer a propósito de este punto el **ATS 13.03.2012** (Roj: ATS 2875/2012), en el que el Alto Tribunal no entra en consideración alguna respecto a la negativa a la recepción por parte del conserje de un requerimiento de pago en una jura de cuenta de procurador. El acto de comunicación, sencillamente, no lo tiene por realizado: “La última diligencia intentada en el domicilio que ha sido facilitado como de la demandada tampoco puede producir los efectos de un requerimiento, dado que no llegó a hacerse, al manifestar el conserje que tiene instrucciones de la familia para no recoger notificaciones. El artículo 161.3 LEC permite hacer el acto de comunicación a través del conserje, pero en este caso no llegó a efectuarse, dado que el conserje no lo recogió” (F. J. 1º).

⁶³⁵ El autor ya advirtió que “la LEC no regula el supuesto de que cualquiera de los anteriores se niegue a recibir la comunicación, pues la advertencia de las consecuencias de tal negativa está reservada exclusivamente en el apartado 1, es decir, a que la diligencia se entienda con el destinatario. Salvo que se entienda, y es problemático, que lo previsto en el apartado 2 es aplicable a los supuestos del apartado 3, la única solución será repetir la diligencia o realizarla en otro lugar” (ESCRIBANO MORA –Coord.–: *El proceso civil*, Vol. II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, epígrafe 421 –versión digital ref. TOL 62.544–).

A pesar de esta clara distinción, hay Audiencias que no lo han entendido así, otorgando los mismos efectos a la negativa del tercero a recibir la comunicación que a la negativa del propio destinatario, lo cual consideramos absolutamente improcedente⁶³⁶. Como argumentos para ello se han aducido la validez de “aplicar por analogía la consecuencia del artículo 161.2 al actuar de un tercero, [...] pues, en otro caso, se estimularía la perversión procesal que impediría la práctica de la notificación al demandado a través de las personas que prevé el tantas veces citado artículo 161”⁶³⁷; o el hecho relevante de que “la diligencia de emplazamiento se practicó en el domicilio donde según información oficial el demandado tiene su domicilio”⁶³⁸.

Sin embargo, la reacción correcta del funcionario o del procurador que se enfrenta con ese tercero que se niega a recibir la comunicación debería ser, como hemos sugerido en el punto anterior, la de tratar que comprenda la importancia de hacer llegar la comunicación al destinatario, con diplomacia y mucha “mano izquierda”, pero sin llegar a la intimidación. Si persiste en su rechazo, entonces le habrá de entregar un aviso de comparecencia comprometiéndole a su posterior entrega a aquel, pero de ningún modo podrá tenerse por efectuada la comunicación ex art. 161.2.

En el mismo sentido, BERNAL LÓPEZ se inclina por entender que “no debemos aplicar por analogía una consecuencia legal que produce graves consecuencias jurídicas, por causa ajena a destinatario de la comunicación” (“Actos de comunicación, auxilio judicial...”, op. cit., pág. 738).

⁶³⁶ Esta errónea interpretación del precepto la encontramos también en la Circular 1/2009 del Secretario Coordinador Provincial de Mallorca, sobre Funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma: “En los casos en que el interesado, familiar mayor de 14 años o empleado se negasen a recoger la documentación, se extenderá una DILIGENCIA POSITIVA, haciéndose constar por el funcionario actuante que le ha hecho saber que aún así se producen los efectos de la comunicación y que la copia de la resolución o la cédula se hayan a su disposición en la secretaría del Juzgado remitidor” (Apartado “D”). Algo parecido sucede también en el Protocolo sobre normas marco de actuación en la organización de los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por la Secretaría de Gobierno del TSJ de Andalucía por Acuerdo de 18.12.2007: “Cuando el destinatario sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir copia de la resolución o cédula o no quiera firmar la diligencia de entrega, se le apercibirá conforme a lo establecido por el párrafo 2 del precitado artículo haciéndole entrega de nota que se adjunta en los “ANEXOS”, en el que consten los datos del procedimiento de que dimana la comunicación. Si dicha negativa la llevará a cabo alguna de las personas a que se refiere el párrafo 3 del indicado artículo se le hará igualmente entrega de dicha nota haciéndole saber la obligación de colaboración requerida por jueces y Tribunales que impone el art. 118 de la Constitución y 591 de la ley indicada anteriormente” (págs. 35-36).

⁶³⁷ **SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 22.02.2013**, F. J. 2º (Roj: SAP GC 679/2013).

⁶³⁸ **SAP Valencia (Secc. 7ª) 11.12.2012**, F. J. 1º (Roj: SAP V 5619/2012). Vid. también **SAP Cáceres (Secc. 1ª) 03.02.2012**, F. J. 2º (Roj: AAP CC 118/2012) y **SAP Baleares (Secc. 5ª) 17.07.2002**, F. J. 2º (Roj: SAP IB 2043/2002).

5.- DESTINATARIO AUSENTE: EL ARTÍCULO 161.4 LEC

El art. 161 establece en su apartado cuarto las prevenciones siguientes:

*En el caso de que **no se halle a nadie** en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el secretario judicial, funcionario o procurador, procurará averiguar si vive allí su destinatario.*

***Si ya no residiese o trabajase** en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación, procediéndose a la realización del acto de comunicación en el domicilio facilitado.*

***Si no pudiera conocerse** por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 156.*

Lo primero que se advierte de la lectura de este apartado es, otra vez, la falta de depuración a la hora de llevar a cabo las reformas legales, porque el legislador sigue mencionando al *secretario judicial* junto al funcionario y al procurador, pese a que desde la Ley 13/2009 no tiene ya competencia para la ejecución de los actos de comunicación. Hecha la anterior matización y entrando ya en lo sustancial del apartado, se observa que el mismo prevé el también recurrente supuesto de que, personados en el domicilio del interesado, nadie responda a las llamadas. De ser así, el funcionario o procurador habrá de realizar una mínima labor de investigación (*procurará*) para saber si aquél vive allí, debiendo preguntar a los vecinos más cercanos o al conserje si lo hubiere, consultando en los buzones⁶³⁹ (si es que, existiendo, tienen alguna indicación), comprobando las señas en la documentación a entregar, etc. Pero, ¿qué hay que hacer si se confirma que, en efecto, vive allí? ¿Hay que regresar otro día? ¿Y si tampoco está entonces, será necesaria una tercera visita? ¿Cabe dejar la comunicación debajo de la puerta y ya está? ¿Se le puede dejar una nota o aviso? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta porque el primer párrafo del apartado 4º acaba justo ahí.

Para tratar de colmar esta laguna legal tan manifiesta existe la práctica generalizada de reiterar, al menos una vez, la visita al domicilio para intentar nuevamente la comunicación y de, como mínimo, dejar una “nota informativa de recogida” o un “aviso judicial” en el mismo, soluciones ambas que por ser garantistas y buscar la efectividad de aquellas comunicaciones, cuentan con el beneplácito de los tribunales y pueden verse reconocidas en algunas disposiciones reglamentarias⁶⁴⁰.

⁶³⁹ O *casilleros domiciliarios*, según la terminología empleada por la normativa sectorial (art. 34.1 RD 1829/1999).

⁶⁴⁰ Así se constata en el ya citado Protocolo andaluz de 2007: “*Si confirmada la residencia no resultara previsible que el destinatario regresara al domicilio a tiempo de practicar la comunicación se le citará para ante el Servicio Común y para el siguiente día hábil, utilizando para ello el modelo que se adjunta en los “ANEXOS”, a fin de llevar a cabo dicha comunicación en la sede del Servicio. En el caso de que la persona destinataria no compareciere, se volverá a incluir en el listado de pendientes. [...] Cuando intentada la práctica de una diligencia en dos ocasiones no fuera hallado el destinatario ni ninguna otra persona en su domicilio habitual o local en que desarrolle labor profesional, y aquella tuviera por*

Las soluciones adoptadas varían según los territorios, empezando por un único aviso, siguiendo con dos avisos (Andalucía, Asturias⁶⁴¹) y aun tres (Palma de Mallorca⁶⁴²). Incluso el CGPJ otorgó en cierto modo carta de naturaleza a este modo de proceder con su Instrucción 2/2001, *sobre Protocolo de Servicio para la coordinación, conexión e interrelación entre los Juzgados y Tribunales y los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución*, que ya comentamos en el Capítulo I y que disponía que “constatado el domicilio interesado, podrán devolverse al órgano judicial las diligencias intentadas sin efecto en dos ocasiones” (punto 2.4, párr. 4º). Es de lamentar que esa Instrucción haya sido derogada por el vigente y más genérico Reglamento 2/2010, *sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los Servicios Comunes*, que nada dice en su lugar al respecto.

El problema reside, por tanto, en que no tenemos una regulación con rango de ley sobre este sistema de las reiteraciones de los intentos de entrega domiciliaria y de los avisos judiciales⁶⁴³, no teniendo apoyo en ningún precepto de la LEC ni en la LOPJ ni en ningún otro texto legal del ámbito procesal civil. Habrá que acudir entonces al sentido común y, como dice CUBILLO LÓPEZ, “distinguir las *ausencias temporales* de las definitivas”⁶⁴⁴. Si de las averiguaciones que hay que hacer en el domicilio resulta que el destinatario sí vive allí, parece incuestionable que habrá que intentarse nuevamente la comunicación al menos una vez más. Sería bueno

objeto la comparecencia del destinatario señalada para fecha inminente se le hará llegar la correspondiente citación dejándola por debajo de la puerta de la vivienda, en el buzón postal del interesado o en aquel lugar en que previsiblemente éste pueda tener noticia lo antes posible. Y ello en base a lo dispuesto en el art. 155.4 LECivil” (pág. 37).

⁶⁴¹ Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Gobierno del TSJ de Asturias, *por la que se aprueba el Protocolo de actuación para los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Asturias*: “No obstante, si intentada la práctica de la diligencia en el domicilio del destinatario no fuera hallado, confirmado que es el domicilio habitual, se le citará para ante el Servicio Común a fin de realizar la comunicación en la sede del servicio. Así mismo, el Servicio Común procederá a devolver al órgano judicial remitente, las diligencias intentadas sin efecto en dos ocasiones, en el domicilio interesado” (Aptdo. “VII”).

⁶⁴² En Palma de Mallorca se va más allá y se exige que se intente el acto de comunicación hasta en tres ocasiones, “dos veces en horario de mañana y una en horario de tarde” (Aptdo. “E”, de la Circular 1/2009 del Secretario Coordinador Provincial de Mallorca, sobre Funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma).

⁶⁴³ Y, sin embargo, sí que se exige por los tribunales en aplicación de la doctrina constitucional. Vid. **SAP Valencia (Secc. 6ª) 18.01.2013** (Roj: SAP V 396/2013), que censuró su omisión al SCAC: “[...] no se localizó a la demandada en ninguno de los intentos de citación, ni se entregó la cédula a vecino [sic] o familiar alguno ni se le dejó aviso. Si consta en cambio que para intentar notificar la sentencia se dejó aviso al constar en los buzones (folio 135) y compareció ante el servicio de notificaciones (folio 136) donde se le notificó la sentencia” (F. J. 2º).

⁶⁴⁴ CUBILLO LÓPEZ: *La regulación...*, op. cit., pág. 120. El propio autor cita al respecto dos sentencias del Tribunal Supremo: “Por ejemplo, en las SSTs de 14 junio 1995 [...] y 6 julio 1996 [...]. En esta última, se declara: «Son posiciones distintas la de domicilio totalmente desconocido y la de ausencia temporal del mismo, al persistir la domiciliación, lo que obligaba al actor del pleito a insistir e interesar su efectivo emplazamiento y no tomar el camino más cómodo para sus intereses, como fue el de acudir de inmediato a la publicación de edictos pues con tal proceder observó conducta de fraude procesal (...)»” (nota al pie n.º 159); planteamiento reiterado en “Actuaciones procesales en general”, op. cit. nota n.º 19.

en este aspecto importar y adaptar la solución arbitrada en el ámbito de las notificaciones administrativas conforme a lo dispuesto en Ley 30/1992, que sigue estableciendo su sucesora la Ley 39/3015. Aunque en la misma tampoco aparecen expresamente los avisos, el art. 59.2p2 de la primera y el 42.2 de la segunda sí establecen que, *si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes*. Además, la nueva ley de 2015 ha mejorado el precepto añadiendo seguidamente que *en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación*. No obstante, la previsión de dichas normas no se aplica con tal precisión en las comunicaciones judiciales civiles, ya que no siempre se da por agotado, como decimos, el intento con la segunda visita al domicilio⁶⁴⁵, ni, menos todavía, se regresa en los tres días señalados, quedando supeditado en su lugar a la agenda y necesidades del servicio de cada órgano o SCAC, o, en su caso, de la agenda del procurador.

Otro resorte para justificar la validez de los avisos judiciales puede encontrarse en la propia LEC forzando la interpretación del art. 160.3, pues si este precepto permite (a nuestro pesar) hacer un llamamiento al interesado por correo certificado para que acuda a la sede del órgano judicial, evitándose así que éste último tenga que “molestarse” en acudir a su domicilio, con mayor razón se le podrá dejar un aviso judicial o aviso de comparecencia si, personados allí, no es encontrado.

En suma, dado que es un instrumento básico que a diario se emplea por doquier, sería deseable que el legislador incorporara al Derecho positivo esta situación de hecho y aprovechara para regularla con más detalle, determinando si hay que reiterar la comunicación domiciliaria y, de ser así, cuántas veces y qué horario, así como si hay que dejar nota o aviso, el formato y contenido del mismo, en especial las prevenciones legales que procedan –en el foro se incumplen deliberadamente las menciones del art. 160.3, párr. 2º para “no dar pistas” al interesado⁶⁴⁶– o el lugar y tiempo donde dejarlo expuesto.

⁶⁴⁵ **SAP Málaga (Secc. 6ª) 09.02.2011** (Roj: SAP MA 431/2011): “[...] la actuación del servicio común de comunicaciones judiciales operó diligentemente acudiendo hasta en tres ocasiones a emplazar a la Sra. Elvira en el domicilio designado en demanda” (F. J. 2ª).

⁶⁴⁶ Lo único que se hace es dejar a la persona un aviso “a fin de que hasta el próximo día XX comparezca en este Servicio Común, en la dirección arriba indicada, a fin de practicar diligencias de su interés”, o, como mucho, “a fin de entregarle la/s diligencia/s relativas al asunto referenciado”. Se incumple por tanto de forma flagrante el párr. 2º del art. 160, al exigir éste que *la cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado*.

En cuanto al segundo párrafo del art. 161.4, que plantea el supuesto de que el destinatario ya no viva o trabaje en el domicilio *al que se acude*, pero sí se informa de uno diferente, el *actual*, por *las personas consultadas*, establece que tal extremo *se consignará en la diligencia negativa de comunicación, procediéndose a la realización del acto de comunicación en el domicilio facilitado*. Este último inciso de acudir al nuevo domicilio facilitado ha sido incorporado por la Ley 42/2015, evitando así que la previsión se quedara a medias como sucedía con la redacción precedente, en que la misma finalizaba abruptamente en “...de comunicación” y no ordenaba como ahora al funcionario o procurador que “reciclara”⁶⁴⁷ la diligencia de comunicación y acudiera al nuevo lugar⁶⁴⁸, tal y como por lo que general se ha venido haciendo en la práctica.

Acabamos este capítulo como lo hace el tercer y último párrafo del art. 161.4, planteando la también última de las situaciones posibles ante una comunicación domiciliaria: no está el destinatario; no hay tercero; ninguna otra persona cercana le conoce o sabe donde puede ser localizado. La norma nos remite entonces a las “averiguaciones del tribunal sobre el domicilio” del art. 156. Si tras dichas indagaciones tampoco fuese posible localizar al interesado, el último recurso será el de la (a veces injustamente denostada) comunicación edictal del art. 164, objeto de estudio en el siguiente capítulo.

⁶⁴⁷ Como dice el ya mencionado Protocolo de normas marco de Andalucía de 2007: “Diligencias recicladas: Son aquellas que, tras un intento fallido, deben volver a intentarse en otro domicilio, o en otro turno horario” (pág. 31), aunque la definición está copiada de la derogada Instrucción 2/2001 del CGPJ (Punto “3”).

⁶⁴⁸ Antes de reformarse el precepto, CUBILLO LÓPEZ lo daba ya por sentado: “habrá de repetirse el acto de comunicación en el mismo lugar” (*La regulación...*, op. cit. pág. 120).

V

La comunicación edictal

1.- LA VÍA EDICTAL COMO FORMA SUBSIDIARIA DE COMUNICACIÓN PROCESAL

1.1.- EL EDICTO COMO ÚLTIMO RECURSO: EXIGENCIAS JURISPRUDENCIALES

Al comienzo del presente trabajo hemos empleado la expresión “2+1” para destacar el marcado carácter excepcional de la tercera (la quinta si seguimos los ordinales del art. 152.3) de las modalidades de realización de los actos de comunicación, la edictal (nuestra “+1”), a la que, siguiendo las palabras de la Exposición de Motivos de la LEC, sólo hay que acudir *como último y extremo recurso* (Aptdo. IX, párr. 7). La razón no es otra que la de estar ante comunicaciones de una eficacia material casi inexistente, que constituyen “ficciones jurídicas con un significado más simbólico que real” (STC 65/1999, de 26.04⁶⁴⁹, F. J. 2) y con las que “la recepción por el interesado no puede ser demostrada” (STC 196/1989, de 27.11⁶⁵⁰, F. J. 2). La ficción se produce porque “se da sobreentendido que el destinatario tendrá conocimiento de la misma” (GUTIÉRREZ CARBONELL⁶⁵¹), y ello pese a que, en realidad, se es plenamente consciente de que va a ser “improbable que la

⁶⁴⁹ BOE de 27.04.1999; con cita de las SSTC 97/1992 y 193/1993, “entre otras”.

⁶⁵⁰ BOE de 05.01.1990.

⁶⁵¹ “Artículo 164”, op. cit. pág. 540.

parte pueda llegar a tener un conocimiento real del contenido de la resolución que se comunica” (CASADO ROMÁN⁶⁵²).

La trascendencia constitucional de su empleo por la implicación que tiene en el derecho a la tutela judicial efectiva y la proscripción de la indefensión que proclama el art. 24 CE han hecho que sean ya incontables los pronunciamientos judiciales que han exigido su aplicación restrictiva, sobre todo desde que el Tribunal Constitucional comenzara su andadura en 1981 y haya venido delimitando a lo largo de todos estos años los contornos de este precepto tantísimas veces invocado. Se trata, pues, de un tema apreciado por los tratadistas, quizá el que más dentro del no siempre valorado campo de los actos de comunicación, y ya estudiado con gran profusión.

En un esfuerzo de síntesis de la abundantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional –en muchas ocasiones producto de una evidente “retroalimentación”– y de los tribunales ordinarios, podemos esquematizar los motivos por los que procede esta vía de comunicación, necesaria⁶⁵³, pero excepcional, siempre con una premisa esencial: que **no sea posible conocer el domicilio o paradero del destinatario**, por lo general el demandado, pero también terceros afectados por el proceso (singularmente, terceros hipotecarios). Así lo enfatizó la **STC 40/2005**, de 28.02⁶⁵⁴:

“[H]emos dicho, ya desde la STC 9/1981, de 31 de marzo, que el mandato implícito al legislador y al intérprete para promover el derecho de defensa, contenido en el art. 24.1 CE, comporta la exigencia, en lo posible, del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio; y 36/1987, de 25 de marzo, entre otras)” (F. J. 2), reiterado en SSTC 293/2005⁶⁵⁵ (desahucio; F. J. 2º) o 245/2006 (hipotecario; F. J. 2º).

Ello comporta:

A) **La inviabilidad de las otras formas de comunicación**, es decir, la que realizada a través de su representación procesal (porque no la tenga), por remisión (correo) y por entrega personal (funcionario o procurador), que tratan de asegurar un mayor grado de recepción por el interesado. El TC habla en la **STC 78/2003**, de 28.04⁶⁵⁶, entre otras, del...

“[...] agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, de forma que cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio o de cualquier otro dato que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado

⁶⁵² CASADO ROMÁN, JAVIER: La notificación edictal en el juicio monitorio”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia* n.º 2003, 15 de diciembre de 2005, Madrid, pág. 15.

⁶⁵³ Necesaria para la tutela judicial efectiva de la parte actora, que con frecuencia se olvida.

⁶⁵⁴ BOE de 05.04.2005.

⁶⁵⁵ BOE de 21.12.2005.

⁶⁵⁶ BOE de 17.05.2003.

debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos” (F. J. 7).

Por el anterior motivo, el actor ha de proporcionar al órgano judicial de cuantos datos disponga o pueda llegar a disponer del domicilio, residencia o, simplemente, el paradero del demandado, a fin de que este pueda tener la oportunidad de conocer el proceso judicial y defenderse; de modo que, “por más que se haya acordado la notificación a través de edictos, si la actora aporta un nuevo domicilio con ciertas garantías de éxito, habrá de intentarse una nueva citación personal” (**AAP Almería, Secc. 1ª, 28.01.2014**⁶⁵⁷).

Incluso si el órgano judicial se encuentra con que las señas facilitadas del demandado son imprecisas, pero el actor puede determinarlas acompañando personalmente al funcionario o procurador, el mismo ha de mostrar su disponibilidad en tal sentido y aquel acordar la reiteración del trámite en tales condiciones a fin de evitar la citación edictal. Por no haberse hecho así, se estimó el recurso de amparo en la **STC 197/2013**, de 02.12.⁶⁵⁸, sobre un juicio verbal de desahucio por precario sustanciado en ausencia de los inquilinos demandados:

“[...] la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como consecuencia del indebido recurso a la notificación edictal se desprende con claridad del relato de hechos de esta Sentencia. Nunca se practicó el emplazamiento de los recurrentes en forma personal, dado que la vivienda, situada en un entorno rural de difícil localización, no fue encontrada hasta el momento de ejecución de la Sentencia, una vez precluidas todas las posibilidades procedimentales de alegación y prueba. A este resultado contribuyó de forma decisiva la pasividad del Juzgado ante el que se tramitaba el procedimiento, el cual ante la dificultad en la práctica de la diligencia no agotó los medios «normales a su alcance» para la localización de los demandados: ignoró el ofrecimiento de los actores –que sí conocían la ubicación del inmueble– de acompañar al funcionario de la oficina judicial que efectuase el emplazamiento y no llevó a cabo ninguna otra gestión para asegurar la recepción de la notificación ni en el domicilio que se hizo constar en la demanda, ni en otro en el que el emplazamiento fuera posible, respecto de lo que el Juzgado no emprendió ninguna averiguación” (F. J. 4º).

Asimismo, no basta con que la falta de localización del demandado se deba a una mera ausencia temporal o circunstancial del domicilio donde se intenta practicar la comunicación, sino de un traslado a otro lugar o a una errónea idea de que vivía o podía ser localizado en el anterior. Por eso, “el emplazamiento edictal a quien tenía domicilio conocido pero se encontraba fuera temporalmente, resulta inadmisibles a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva” (**STC 34/1999**, de 22.03, F. J. 3⁶⁵⁹). Descendiendo a la jurisprudencia menor, de las “ausencias” se ocupó la **SAP Madrid (Secc. 11ª) 21.04.2014**⁶⁶⁰:

⁶⁵⁷ Roj: AAP AL 3/2014, F. J. 4º.

⁶⁵⁸ BOE de 08.01.2014; ídem SSTC 7/2003 (F. J. 2º) y 44/2003 (F. J. 3º).

⁶⁵⁹ BOE de 27.04.1999.

⁶⁶⁰ ROJ: SAP M 5282/2014.

“En el presente caso estuvo incorrectamente acordada la diligencia de emplazamiento del demandado por edictos, pues en las dos diligencias practicadas no consta que sea desconocido en el domicilio señalado por el demandante sino solamente que “está ausente” del mismo, citándole para que comparezca un día determinado. [...] en este caso el demandado tiene un domicilio conocido en el que no se encuentra solo puntualmente cuando el servicio común acude a emplazarle, lo que hubiera conllevado la necesidad de practicar nuevas diligencias para su logro. [...] Procede por todo ello acceder a la declaración de la nulidad de actuaciones” (F. D. 4º).

B) La constancia formal en las actuaciones de haberlas intentado: Así lo ha exigido, de forma mecánica, las SSTC 157/1987, 171/1987, 155/1988, 234/1988, 16/1989, 141/1989, 196/1989, 203/1990, 9/1991, 242/1991, 216/1992, 70/1994, 103/1994, 108/1994, 121/1996, 186/1997, 65/1999, entre otras:

“Es también doctrina de este Tribunal que la citación edictal requiere, [...], no sólo el agotamiento previo de las otras modalidades que aseguren en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, así como la constancia formal de haberse intentado practicar [...] (SSTC 157/1987.234/1988 Y 1611989)” (**STC 242/1991**, de 16.12⁶⁶¹, F. J. 3, ‘in fine’).

C) El agotamiento de las medidas de averiguación: Si el actor no es fuente útil de esa información, al órgano judicial le compete hacer uso de sus propios medios para tratar de localizar a la parte demandada y cumplir con aquel fin, todo ello en el marco de lo que reiteradamente el Tribunal Constitucional ha referido como el “agotamiento de las medidas de averiguación”. Las indagaciones se han de realizar con diligencia y facilitando todos los datos de que se disponga; no fue así en la **STC 61/2010**, de 18.10⁶⁶², pues el órgano de instancia...

“[...] realizó tal indagación incorrectamente, porque nunca facilitó a los Registros a los que acudió, ni a las Fuerzas de Seguridad, los suficientes datos de identificación de la requerida, limitándose a hacerles llegar su nombre y apellidos. Se constata, además, que algunos de los datos de identificación obraban en la causa (los nombres del padre y de la madre) y otros (el número del D.N.I., de manifiesta utilidad para el Servicio de Averiguación Patrimonial, o el lugar de nacimiento), podían haber sido hallados por medios normales al alcance del Juzgado, como requerirlos de los hermanos promotores del expediente (el lugar de nacimiento) o de la Policía (en concreto, el número de D.N.I., a la vista de los ya mencionados datos conocidos de la requerida).

Esta irregular ejecución por el órgano judicial de las gestiones para la averiguación del paradero de la requerida, sin facilitar todos los datos referidos a ella que constaban en las actuaciones a quienes podían informar de otros domicilios, ni procurar la identificación de éstos a través de aquellos otros cauces, sin necesidad de efectuar una desmedida labor investigadora, hace que deban reputarse inútiles al fin perseguido y que no permitan sustentar de modo consistente el desconocimiento del domicilio o paradero de la recurrente ni, en definitiva, puedan llevar a una razonable convicción sobre la inutilidad de otros medios de comunicación distintos a

⁶⁶¹ BOE de 15.01.1992.

⁶⁶² BOE de 18.11.2010.

la notificación edictal, no pudiendo por consiguiente estimarse justificado constitucionalmente el recurso a ésta” (F. J. 3).

La anterior doctrina ha de aplicarse también, según el TC, a la ejecución hipotecaria, pese a establecerse convencionalmente un determinado domicilio por las partes: **STC 131/2014**, de 21.07⁶⁶³ (que reitera la STC 122/2013):

“El órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, el órgano judicial debe intentarlo antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2; y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2). Incluso, cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, habría de realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real (por todas, STC 19/2004, de 23 de febrero, FJ 4; y 126/2006, de 24 de abril, FJ 4), siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación (SSTC 126/1999, de 28 de junio, FJ 4; 82/2000, de 27 de marzo, FJ 6; y 113/2001, de 7 de mayo, FJ 5, entre otras). Esta misma doctrina la ha aplicado este Tribunal en el procedimiento de ejecución hipotecaria” (F. J. 2º).

D) El dictado de resolución teniendo a la parte en ignorado paradero: Es preciso que se dicte formalmente una resolución procesal que, también con carácter formal, declare concurrente el sustento fáctico de la ilocalización del interesado; además, ese...

“[...] acuerdo o resolución judicial que considera a la parte en ignorado paradero debe fundarse en circunstancias cuyo examen lleve razonablemente a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de citación (por todas SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 65/2000, de 13 de marzo, FJ 3)” (**STC 268/2000**, F. J. 4⁶⁶⁴); ídem SSTC 39/1987, 157/1987, 155/1988, 234/1988, 16/1989, 219/1999 y 65/2000.

1.2.- PREVISIONES LEGALES

1.2.1.- El ambivalente e incompleto artículo 164 de la LEC

La concordancia de la LEC con los postulados jurisprudenciales que acabamos de ver no es del todo fiel ni mucho menos coherente. Desde su propia redacción originaria y aun constituyendo un gran avance respecto al sistema anterior, la Ley 1/2000 y sus sucesivas reformas han sido el reflejo en muy concretos casos de una cierta resistencia velada del legislador frente al Tribunal Constitucional, pro-

⁶⁶³ BOE de 16.08.2014.

⁶⁶⁴ BOE de 14.12.2000.

mulgando leyes que tratan de agilizar determinados procesos y remover las deficiencias que la experiencia jurídica ha ido revelando –ejecución hipotecaria y juicio de desahucio, principalmente–, pero que, al mismo tiempo, y a juicio del TC, han supuesto la instauración de algunas disposiciones ‘contra constitutionem’ que, no mucho tiempo después, van a obligar a la ulterior “reforma de la reforma” con la que se termina claudicando ante aquel órgano constitucional y se eleva a Derecho positivo la aplicación e interpretación ‘secundum constitutionem’ de las normas procesales que previamente el mismo ha impuesto a través de sus resoluciones de amparo. El último ejemplo de estos avances y retrocesos, según la posición desde que se observen, es la reciente Ley 19/2015 y la nueva modificación del art. 686.

De esa tensión dialéctica es fruto el art. 164, aparentemente el precepto de aplicación general que determina, también en apariencia, los casos en los que procede la *comunicación edictal*. Ya en su primer párrafo, aquejado de una redacción compleja con tres frases que no dejan claro si son subordinadas o alternativas, se presenta al mismo tiempo la postura conservadora de acudir a los edictos únicamente ‘in extremis’ (incisos primero y segundo) y otra intermedia (inciso tercero) de poder acordarlos casi de forma inmediata si un registro público como es el RCRC refleja que al demandado ya se le ha intentando localizar en otro proceso y ha sido declarado *rebelde civil* (sic); la postura radical de acudir, (casi) *sin más trámites*, al tablón de anuncios de la oficina judicial la encontramos en el párrafo cuarto, toda una declaración de fuerza introducida por la Ley 19/2009 para agilizar los procesos de desahucio.

En particular, los supuestos contemplados por este precepto son los siguientes:

a.- **Cuando las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio del demandado resulten infructuosas.** Este primer punto corresponde con el comienzo del precepto: *cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo 156, no pudiese conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación*. La previsión parece situarnos muy poco después de admitido a trámite el proceso judicial, en el que, tras haber manifestado el actor que no puede designar un domicilio o residencia del demandado, el órgano judicial se encuentra con el mismo problema después de haber realizado las averiguaciones a su alcance (art. 156.1) y no haber podido recabar ningún resultado o no ser útiles los datos obtenidos.

b.- **Cuando la comunicación domiciliar resulte también infructuosa.** El segundo inciso (*o cuando no pudiese hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos*) apunta al supuesto de que sí se conoce por el actor o se obtiene por el órgano judicial al menos una dirección potencialmente hábil del destinatario, pero que cuando el funcionario o el procurador acude al lugar resulta que aquel está ausente y, además, según se deduce del precepto, no hay ningún tercero receptor ex art. 161.3⁶⁶⁵; leído así este inciso, aisladamente, su complicada redacción haría de este supuesto el segundo de los previstos en que queda ya abier-

⁶⁶⁵ O este tercero se niega a la recepción, posibilidad que hemos defendido en el capítulo anterior.

ta la comunicación edictal, pero hay que interpretarlo conjuntamente con el primer inciso y con la necesidad de la previa investigación judicial del domicilio. Asimismo, no es suficiente con que no se le haya podido *hallar*, sino que se ha de constatar que la ausencia no sea pasajera o momentánea o que ya no reside allí⁶⁶⁶, lo que solo se puede saber reiterando el trámite o por información de terceros, bien de los propios del art. 161.3, bien de los vecinos o por otras circunstancias concurrentes (presencia casual del empleado del servicio postal, una nota informativa, un cartel de se vende, etc.). También podría existir otro motivo, que es el de que el destinatario resida en el domicilio pero adopte una “actitud obstruccionista” (FERNÁNDEZ-GALLARDO⁶⁶⁷) en una fraudulenta intención de confundir al órgano judicial y de hacerle creer que está buscando en el lugar equivocado.

c.- Cuando los datos del demandado ya figuren en el Registro Central de Rebeldes Civiles. La tercera acotación es la de *o cuando así se acuerden el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157*, aludiendo a la posibilidad de que el Letrado de la Administración de Justicia decida acudir a dicho registro público para averiguar el domicilio del demandado y compruebe que los datos de que dispone son los mismos que ya aparecen en él. De ser así, *podrá acordar directamente a la comunicación edictal del demandado*, pero, de nuevo, entendemos que habría que conectarlo con el inicio del art. 164 y situar la consulta al RCRC en el marco de las medidas de averiguación de que dispone la oficina judicial, sin que baste que otro órgano, o incluso el mismo órgano en otro proceso, ya haya realizado las mismas indagaciones en una ocasión anterior.

d.- Cuando, en los procesos de desahucio, el domicilio arrendaticio resulte inhábil. En 2009 se añadió un párrafo cuarto con el siguiente tenor: *En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiese hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que este no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial.* Constituye el gran exponente donde el mandato de legislador de agilizar al máximo la tutela de los arrendadores se hace más patente, de ahí la popular denominación de desahucio ‘express’. Las repercusiones son importantes y por ello será objeto de un estudio

⁶⁶⁶ Se trata de un “desconocimiento sobrevenido del mismo”, como apunta FURQUET MONASTERIO, con cita de de GUASP y de PRIETO CASTRO (*Las comunicaciones procesales*, op. cit., pág. 200 y nota al pie n.º 647).

⁶⁶⁷ El autor explica muy bien: “Este supuesto lo encontramos frecuentemente cuando se recibe una diligencia negativa haciendo constar que el nombre del demandado figura en los buzones, que los vecinos o la Policía Local manifiestan que reside en dicho domicilio, pero el mismo ni abre la puerta en ningún momento al funcionario encargado de la comunicación pese a personarse en distintos días y horarios, ni se persona ante la Oficina judicial pese a los avisos que al efecto le son dejados en su buzón” (“La averiguación del domicilio del demandado...”, op. cit., pág. 14).

más detenido en el próximo Capítulo al acometer las singularidades de este juicio verbal.

1.2.2.- Otros supuestos en la LEC

Ya hemos advertido que el art. 164 no agota todos los supuestos en los que cabe la comunicación por edictos y con carácter subsidiario. En otras disposiciones de la LEC también se dispone esta medida:

a.- **Notificaciones al rebelde procesal** (art. 497.1p1): Como ya hemos estudiado, la declaración de rebeldía al demandado sin domicilio conocido se notificará mediante edictos (art. 497.1p1), lo mismo que la eventual sentencia o resolución final posterior (art. 497.2).

b.- **Comunicaciones a los acreedores posteriores.** Estudiaremos en el capítulo siguiente que a los titulares de derechos posteriormente inscritos al derecho del ejecutante se les *comunicará la existencia de la ejecución*, en su domicilio por correo postal o similar, si consta en el Registro, telemáticamente a la dirección electrónica que de forma potestativa y complementaria hayan hecho constar, o, en último caso, *mediante edicto, que se insertará en el «Boletín Oficial del Estado»* (arts. 659 y 660.1). La particularidad está en que es el Registro de la Propiedad quien ha de practicar estas comunicaciones y no la Oficina judicial.

1.3.- LA AVERIGUACIÓN DOMICILIARIA DEL DEMANDADO Y EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS DISPONIBLES

1.3.1.- La carga procesal del demandante

Con la LEC de 1881, si el demandante desconocía el domicilio del demandado, “ninguna obligación le era obligado hacer al tribunal, quien procedería inmediatamente a emplazarle por edictos” (RODRÍGUEZ MERINO⁶⁶⁸). La LEC 2000 trata de paliar dicha situación y, ya lo vimos en el Capítulo I, el art. 156 impone al actor la carga de designar el domicilio del demandado (apdo. 1), tanto más cuando el mismo consta en archivos o registros públicos a los que pueda tener acceso (apdo. 2). El avance de una regulación a otra, sin embargo, fue un poco tibio, pues solo exige al actor la mera manifestación del desconocimiento del domicilio, pero sin que tenga que justificarlo, como sí ocurría en el proyecto de LEC de 1998⁶⁶⁹ o,

⁶⁶⁸ “Artículo 156”, op. cit., pág. 1032. “Incluso en el caso –continúa el autor– de que se designase un domicilio en un primer momento, y no hubiera sido hallado («o por haber mudado de habitación se ignore su paradero», decía el artículo 269 de la LEC 1881), ninguna otra averiguación debía hacer por su propia iniciativa el tribunal, siendo citado por edictos” (ídem).

Sobre este problema, comenta SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO JOSÉ, que “el T.S., por su parte, con inicio en la S. de 31 de enero de 1968, ya vino matizando la validez del emplazamiento edictal, para evitar así la finalidad fraudulenta con la que se utilizaba a fin de obstaculizar la defensa de la contraparte en el proceso seguido contra ella; con la incidencia de los principios constitucionales, la referida doctrina jurisprudencial alcanza mayor rigor, poniendo el acento en la efectiva indefensión” (“La actividad del órgano judicial ante la interpretación de los principios constitucionales del proceso civil”, *Revista jurídica de Catalunya*, 1995, n.º 3, págs. 147).

⁶⁶⁹ Art. 156.1 PLEC 1998: “Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio. En los casos en que el demandante *justificare* que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a

al menos manifestarlo de forma motivada. De hecho, el descarte de esa propuesta inicial suscitó opiniones a favor⁶⁷⁰ y, sobre todo, en contra⁶⁷¹ de dicho cambio.

En la práctica, no obstante, es muy poco frecuente que el accionante no indique en su demanda o petición un domicilio o señas donde localizar a la contraparte conforme a los datos de que ya disponga provenientes de la relación de fondo que sustente el pleito. Siguiendo a CASERO ALONSO respecto al “grado de diligencia exigible al actor”, “exigirá calibrar, adecuadamente, el alcance de las relaciones que entre ellos existan y que se deduzcan de la demanda y demás escritos del proceso”⁶⁷², a lo que añadiríamos los medios al alcance del demandante de tal información.

1.3.2.- La responsabilidad y la “diligencia debida” del demandado

Tanto o más que del interés del actor, el buen fin de los actos de comunicación depende también de la diligencia y preocupación de la parte demandada de mantener su domicilio (razonablemente) actualizado en los diferentes registros públicos. En no pocas ocasiones los órganos judiciales son demasiado “timoratos” en esta materia y se convierten en abanderados de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en una lectura parcial del mismo que sacrifica al actor de buena fe en pos de un demandado que muchas veces no la conoce o, simplemente, actúa de forma negligente desatendiendo los asuntos que le conciernen. Como mantuvo la **STS (C-Advo.) 22.03.2002**⁶⁷³, en el recurso de una mercantil frente a una providencia

efectos de su personación, el tribunal utilizará los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado tercero del artículo 155.

Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad”.

⁶⁷⁰ CACHÓN CADENAS: “[...] la norma mencionada no concreta el alcance de esa justificación [...]. Posiblemente habría sido más sencillo exigir sólo que el demandante manifieste desconocer el domicilio o residencia del demandado, sin que dicha manifestación resulte contradicha por el contenido de los escritos presentados por el propio demandante” (“Jurisdicción, partes y actos procesales”,..., op. cit., pág. 383).

⁶⁷¹ CUBILLO LÓPEZ: “A mi juicio, no sólo debe manifestarlo, sino que ha de justificar de algún modo que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado a efectos de su personación, tal y como exigía el art. 157.1 ALEC” (*La regulación de las actuaciones del juicio*, pág. 103, nota al pie n.º 139); RODRÍGUEZ MERINO: “[...] en los casos en que el demandante no conociere el domicilio del demandado, tiene la carga de averiguar el que conste en archivos o registros públicos, siempre que tuviere acceso a los mismos. Esta última frase es importante ya que habrá registros públicos donde puede ser difícil el acceso a determinados datos de personas físicas, y en estos supuestos, el demandante, a nuestro juicio, deberá indicar en su escrito alegatorio inicial que ha intentando acceder a determinados registros y archivos públicos, sin que le hubiesen sido proporcionado datos sobre el demandado, o si se hubiese permitido el acceso, que en el registro o archivo no consta el domicilio del demandado ni otras circunstancias que pudieran servir para su localización” (“Artículo 156”, op. cit., pág. 1032); GONZÁLEZ GRANDA: “Parece claro que una justificación cumplida de la imposibilidad de designar un domicilio real a que alude el artículo 156.1 sólo puede hacerse acreditando que se han llevado a cabo esfuerzos para encontrarlo” (“Tomo I. Sujetos y actuaciones...”, op. cit., pág. 271).

⁶⁷² CASERO ALONSO: “Principios constitucionales...”, op. cit., pág. 559.

⁶⁷³ Roj: STS 2120/2002.

de apremio de la Diputación de Barcelona que hubo de ser notificada en el BOP tras resultar negativos los envíos realizados por correo al domicilio social:

“Los interesados están obligados por diligencia debida, a que el domicilio que declaran como propio, cumpla efectivamente sus fines, uno de los cuales es recibir notificaciones administrativas, de manera que cuando tal fin fracasa, y no por culpa de la Administración actuante, ni del Servicio de Correos, el artículo 80, apartado 5, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958, arbitra la publicación edictal” (F. D. 4º).

Por su parte, el TC ha entendido que para que la indefensión del demandado posea relevancia constitucional “es siempre preciso que la situación en la cual el presunto indefenso se encuentra no se haya debido a una actitud voluntariamente aceptada por él o imputable a su propio desinterés, pasividad, malicia o falta de la necesaria diligencia (SSTC 48/1984, de 4 de abril; 68/1986, de 27 de mayo; 58/1988, de 6 de abril; 166/1989, de 16 de octubre; 50/1991, de 11 de marzo; 167/1992, de 26 de octubre; 103/1993, de 22 de marzo; 334/1993, de 15 de noviembre; y 91/2000, de 30 de marzo), (todas citadas por la **STC 87/2003**, de 19.05⁶⁷⁴, F. J. 5).

Empleando otras palabras, la **STC 55/2003**, de 24.03⁶⁷⁵, cuyo pronunciamiento justificó la comunicación edictal, reiteró que no hay vulneración a la tutela judicial efectiva...

[...] cuando la omisión o frustración de los actos de comunicación procesal tienen su causa en la falta de diligencia del afectado en la defensa de sus derechos e intereses, bien porque se han colocado al margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja de esa marginación, bien cuando resulte probado que poseía un conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado (SSTC 80/1996, de 20 de mayo, FJ 2; 81/1996, de 20 de mayo, FJ 3; 121/1996, de 8 de julio, FJ 2; 29/1997, FJ 2; 49/1997, de 11 de marzo, FJ 2; 86/1997, de 22 de abril, FJ 1; 99/1997, de 20 de mayo, FJ 4; 118/1997, de 23 de junio, FJ 2; 165/1998, de 14 de julio, FJ 3; 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 7/2000, de 17 de enero, FJ 2; 12/2000, de 17 de enero, FJ 3; y 65/2000, de 13 de marzo, FJ 3)” (F. J. 2).

Y aplicando esa tesis a casos concretos, la **STC 199/2002**, de 28.10⁶⁷⁶, denegó el amparo ante la “conducta descuidada” de una arrendataria que había sido desahuciada en rebeldía y que se había ausentado una larga temporada del domicilio sin dejar señas. La resolución, aunque considera una irregularidad el hecho de que se omitiera la mención del “estado y ocupación de la persona que recibe la cédula”, como exigía el art. 268 LEC 1881, pues se hizo constar únicamente que la cédula se entregó a quien dijo ser “vecino puerta” y llamarse “Juan Torres”, sin más datos y tampoco sin su firma, entendió que lo determinante fue que...

⁶⁷⁴ BOE de 10.06.2003.

⁶⁷⁵ BOE de 16.04.2003. Ídem, STC 191/2003, de 27.10, F. J. 3 (BOE de 26.11.2003).

⁶⁷⁶ BOE de 20.11.2002.

“[...] la ausencia de la ahora recurrente de la vivienda que constituía su domicilio, por un período tan prolongado de tiempo como era de julio a octubre, sin dejar aviso o instrucciones a los vecinos de dónde podía ser localizada o hallada en caso de que recibiera alguna citación o notificación relacionada con la vivienda arrendada, lo que era previsible había cuenta de las malas relaciones entre la arrendataria y la arrendadora, supone una conducta descuidada de la recurrente que fue la determinante de la indefensión que dice haber sufrido en el juicio de desahucio y que sólo a su falta de diligencia en la gestión de los asuntos propios cabe imputar” (F. J. 4).

Similar fue lo sucedido en la **STC 48/1990**, de 20.03⁶⁷⁷: se tuvo por desistido al demandante en un juicio laboral al que no compareció tras habersele intentando citar por correo certificado con acuse de recibo y habersele dejado en las dos ocasiones aviso del Servicio de Correos en el domicilio que hizo constar en su demanda:

“[...] la conducta negligente del demandante resulta también de no haber dado cuenta a la Magistratura, de su ausencia temporal del domicilio por él señalado en Madrid para recibir las notificaciones; o bien, de no haber dejado en dicho domicilio persona alguna que pudiera hacerse cargo de la correspondencia oficial que recibiera con motivo de la demanda que había dejado presentada en la Magistratura de Trabajo. Su posición de demandante no le permitía desentenderse del procedimiento por él iniciado, sino que le obligaba a prestar, en su propio interés, la mínima diligencia y colaboración para no entorpecer la tramitación del procedimiento” (F. J. 3.b)⁶⁷⁸.

Citaremos, por último, la **STC 22/1992**, de 14.02⁶⁷⁹, que denegó el amparo ante una indefensión que imputó al propio recurrente, a quien la Audiencia intentó requerir personalmente para que designara nuevo procurador tras la renuncia del anterior y luego hubo de hacerlo por edictos,...

“[...] porque el solicitante de amparo no vivía en el domicilio que constaba en autos y no pudo ser encontrado en él, sin que las personas que intervinieron en la diligencia judicial conociesen otro domicilio [...]; habida cuenta del desconocimiento del domicilio, el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 269 y 270 de la LEC, esto es, la publicación por edictos” (Antecedentes, aptdo. 6).

En dicha resolución el TC no echa en falta que el órgano judicial no hubiese acordado a continuación la averiguación judicial del domicilio previa a la comunicación edictal, si bien hay que tener en cuenta que...

⁶⁷⁷ BOE de 09.04.1990.

⁶⁷⁸ La misma resolución refiere que para determinar si ha habido irregularidad procesal generadora de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, “[...] han que tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la finalidad e importancia del requisito omitido o irregularmente incumplido, y la conducta procesal observada de quien alega tal vulneración. Así, por ejemplo, la STC 56/1985 declara que «la falta de emplazamiento personal es una infracción que sólo deviene lesión constitucional cuando, pese a haber mantenido el ciudadano una actitud diligente, se ve colocado en situación de indefensión. Pero cuando tal diligencia no existe, la lesión tampoco»” (F. J. 2º).

⁶⁷⁹ BOE de 17.03.1992.

[...] el actor afirma que conservaba el domicilio de autos, aunque pasaba fuera de él largas y continuas temporadas por su enfermedad, a la par que no acredita ni indica cualquier otro domicilio. El actor habla, por tanto, en una hipótesis no demostrada y no puede ahora beneficiarse en amparo de su propia falta de diligencia, al no comunicar a sus vecinos o al portero el lugar en el que realmente se encontraba ni ponerlo en conocimiento del Tribunal” (ídem, Antecedentes, aptdo. 6).

Además, “el recurrente no niega haber recibido en su día directamente la renuncia del Procurador”, y en cuanto al domicilio “no se niega que aquél fuera el domicilio real ni se menciona otro” (F. J. 3).

Concluye diciendo que:

“este Tribunal ha dicho ya en STC 151/1988, fundamento jurídico 2º) que el deber que la Constitución impone a Jueces y Tribunales de promover la defensa no les obliga, en los casos en que resulte compleja la identificación, a llevar a cabo indagaciones ajenas a su función; sobre todo cuando es manifiesto el nulo interés mostrado por el solicitante de amparo en que los órganos judiciales o sus propios familiares y los vecinos de la finca conocieran su residencia o paradero, con el fin de poder ser oportunamente notificado” (ídem).

Exigibilidad en la LEC.- En 1997 el CGPJ sostuvo en su Libro Blanco de la Justicia que “parece conveniente recoger expresamente en la ley que son los demandados los que deben asumir las consecuencias desfavorables que deriven de la falta de coincidencia entre su domicilio real con el que figura en registros, archivos y oficinas públicas. De esta forma el incumplimiento por parte de las personas físicas o jurídicas de su obligación de hacer constar en los registros oportunos las modificaciones del domicilio, *tendrá consecuencias negativas para el incumplidor y no para el demandante*”⁶⁸⁰. Esta sugerencia la reiteraría al año siguiente en el Informe al ALEC, a la postre Ley 1/2000, añadiendo que ambas partes debían asumir la “carga procesal de tener por válidos los actos de comunicación que se realicen en el último domicilio designado”⁶⁸¹.

Así hubiera tenido que ser, mas el único rastro que de este carga o deber que apareció en el articulado de la nueva LEC al promulgarse fue que el mismo que se encuentra hoy presente en el art. 155.5, que solamente se atreve a ordenar que *cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la Oficina judicial*. Al no establecer ninguna consecuencia a su incumplimiento, este mandato nace ya debilitado, sin que haya un

⁶⁸⁰ *Libro Blanco de la Justicia*, op. cit., pág. 190 (la cursiva es nuestra); palabras asumidas por FERNÁNDEZ-GALLARDO (“La averiguación del domicilio...”, op. cit., pág. 10). En la misma línea, pero más resolutivo, y citando también el Libro Blanco, CUBILLO LÓPEZ escribió que “si se trata de un domicilio respecto del cual el propio *demandado* ha manifestado su consentimiento –expreso o tácito– a efectos de notificaciones, puede darse paso razonablemente a la comunicación por edictos, sin necesidad siquiera de realizar más indagaciones; por ejemplo, cuando la comunicación se ha haya intentando en un domicilio *registral* [SSTS de 10 noviembre 1997, *La Ley*, 1997, 11288; de 25 octubre 1997, *La Ley*, 1997, 11280; y de 8 julio 1994, *La Ley*, 1994-3, 719 (16269-R), entre otras]. En este último caso, el demandado tenía el deber de estar localizable en ese lugar, o bien de comunicar al tribunal su cambio de domicilio” (*La regulación de las actuaciones...*, op. cit. pág. 122).

⁶⁸¹ *Estudios, informes...*, op. cit. pág. 180.

motivo aparente para que el legislador no haya adoptado en el proceso civil una posición más firme como la que exhibe en el proceso laboral, donde el **art. 53.2 LJS** es contundente al advertir que el domicilio y datos de localización que las partes o interesados habrán de señalar en su primer escrito o comparecencia, *surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.*

La extrapolación de dicha medida a la ley procesal civil ya se sugirió, sin éxito en 2012 cuando en el seno del CGPJ se constituyó un “Grupo de trabajo sobre medidas de agilización y reforma procesal de los procesos civiles”, que estuvo coordinado por ALMENAR BELENGUER y que dio como fruto el trabajo *Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles*⁶⁸² y cuya propuesta número cuatro, dedicada al problema de los “cambios de domicilio durante el proceso”, sugería una adición al primer párrafo del art. 155.5, de modo que el mismo dijese que “Cuando las partes cambien su domicilio durante la sustanciación del proceso lo comunicarán inmediatamente a la Oficina judicial, *surtiendo hasta tanto plenos efectos las notificaciones o emplazamientos realizados al domicilio que consta en las actuaciones*”. La reforma no hacía alusión alguna al precedente de la ley laboral y justificaba la reforma con el argumento de “evitar realizar averiguaciones respecto de quien ya ha comparecido o ha recibido notificaciones en un domicilio determinado y *no se ha molestado en comunicar el cambio*”⁶⁸³.

1.3.3.- Extensión y límites de la investigación judicial

Con los antecedentes que acabamos de exponer en los dos epígrafes anteriores, abordamos en este epígrafe otra cuestión controvertida, causante de no pocas dilaciones indebidas en la tramitación de los procesos judiciales civiles. A tenor del artículo 156.1, *en los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el art. 155.3. Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.*

Ahora bien, y aquí viene el problema, el propio precepto matiza lo anterior y desactiva en buena medida esos *medios oportunos*, pues en el apartado 2º dispone de forma tajante que *en ningún caso se considerará imposible la designación de*

⁶⁸² ALMENAR BELENGUER, MANUEL (Coord.). Junto a dicho magistrado constituyeron el grupo los Sres. Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luís Viguer Soler. El trabajo fue objeto de “dación de cuenta” en el Pleno del CGPJ del 24.10.2012, pero no fue aprobado, limitándose dicho órgano a acordar que “ha sido informado de la existencia de un trabajo sobre la agilización de los procesos civiles, sin que se haya debatido ni asumido su contenido” (Acuerdo n.º 24).

⁶⁸³ *Propuestas...*, pág. 23.

domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso.

¿Cómo debería traducirse lo anterior en la práctica? Para responder a esta pregunta habría que diferenciar entre personas físicas y personas jurídicas. Dentro de estas últimas, a su vez, debemos distinguir entre dichos entes como tales y las personas naturales que los administran o representan:

a) *Personas físicas*

En el caso de las personas naturales el demandante no tiene posibilidad de acceder por sí solo al padrón municipal, pues el mismo tiene carácter *confidencial*⁶⁸⁴. Si no tiene más recursos⁶⁸⁵ estará, pues, legitimado para interesar del órgano judicial que efectúe una consulta domiciliaria al censo del Instituto Nacional de Estadística (domicilio padronal) y de las bases de datos de la Agencia Tributaria (domicilio fiscal), Seguridad Social (domicilio a efectos de cotizaciones y prestaciones) y Cuerpo Nacional de Policía (DNI), todas ellas accesibles hoy día de forma centralizada a través del “Punto Neutro Judicial”. También podrá consultarse el Registro Central de Rebeldes Civiles por si (cosa rara) *el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos* (art. 157.2), como luego estudiaremos.

b) *Personas jurídicas: la prevalencia del domicilio social*

Tratándose de sociedades mercantiles y otros sujetos cuyos actos han de inscribirse en el Registro Mercantil, nuestro planteamiento cambia ostensiblemente, hasta el punto de que el juzgado debería rechazar la típica petición de parte de que averigüe el domicilio social de la entidad demandada, pues el mismo consta en un registro público⁶⁸⁶ al que aquella puede acceder sin necesidad de recabar el

⁶⁸⁴ Art. 53.2 **RD 1690/1986**, de 11.07, *por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales: Los datos del padrón municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten [...]*.

También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico [...].

Fuera de estos supuestos, los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y en la Ley 30/1992.

Entiéndase que la referencia a la Ley 5/1992 lo es hoy día a la LO 15/1999, que la derogó.

⁶⁸⁵ Estamos pensando no solo en la guía telefónica, en progresivo desuso, sino en los cada día más potentes (y preocupantes) buscadores de Internet, tipo “Google”, auténticos Grandes Hermanos de nuestra actividad social y profesional.

⁶⁸⁶ **Art. 23.1 CCom.:** *El Registro Mercantil es público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por los Registradores o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro.*

Art. 12 RRM: “Publicidad formal”: *1. El Registro Mercantil es público y corresponde al Registrador Mercantil el tratamiento profesional del contenido de los asientos registrales, de modo que se haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o televaciado.*

2. La publicidad se realizará mediante certificación o por medio de nota informativa de todos o alguno de los datos contenidos en el asiento respectivo, en la forma que determine el Registrador.

auxilio judicial y “preocuparse” en aportar una certificación o, al menos, una nota simple comprensiva de aquel extremo. Esta sugerencia que hacemos no es gratuita ni busca que los funcionarios judiciales trabajen menos, sino que obedece a nuestra reivindicación del significado de ese Registro público, en palabras de ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, como “instrumento técnico de la publicidad legal” y como “institución esencialmente dirigida a los terceros”⁶⁸⁷, al tiempo que apelamos al mayor celo que entendemos deben tener los administradores de esas sociedades, en tanto que ficciones jurídicas, a la hora de cumplir con sus obligaciones legales. Y entre dichas obligaciones, la de comunicar a aquel Registro cualquier cambio de domicilio social, que es el que habrá de ser ese “*su*” domicilio del que habla el art. 51.1 LEC al determinar el fuero general de las personas jurídicas donde pueden ser demandadas, sin perjuicio de que a efectos procesales la LEC haya habilitado otros fueros distintos, como el del lugar del nacimiento o efectos de la situación jurídica cuando en el mismo tuviese establecimiento abierto al público o representante autorizado⁶⁸⁸.

El domicilio es un aspecto de capital importancia, por supuesto para las personas físicas⁶⁸⁹ pero especialmente para las jurídicas⁶⁹⁰, pues “el tráfico jurídico requiere de la certidumbre acerca de la localización de las actividades de las sociedades” (PAZ-ÁRES⁶⁹¹). Tanto es así que figura como uno de los *datos esenciales* exigidos, no solo para la *primera inscripción* de las sociedades y demás entidades (art. 387.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil⁶⁹²) –debiendo además cons-

3. Los Registradores Mercantiles calificarán, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos.

⁶⁸⁷ ROJO FERNÁNDEZ-RÍO: “Lección 4. El Registro Mercantil”, *Lecciones de Derecho Mercantil* (obra colectiva coordinada por MENÉNDEZ), 3ª ed., Thomson-Civitas (Aranzadi), Cizur Menor, Navarra, 2005, pág. 92.

⁶⁸⁸ **Art. 51.1:** *Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.*

⁶⁸⁹ Cfr. **art. 40p1 CC:** *Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

⁶⁹⁰ Cfr. **art. 41 CC:** *Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.*

⁶⁹¹ PAZ-ÁRES, CÁNDIDO: “Lección 10. Las sociedades mercantiles”, *Lecciones de Derecho Mercantil* (obra colectiva coordinada por MENÉNDEZ, AURELIO), 3ª ed., Thomson-Civitas (Aranzadi), Cizur Menor, Navarra, 2005, pág. 245. Para este autor “la sede de las sociedades es el lugar elegido contractualmente por las partes para localizar sus actividad jurídica, y a él anuda el ordenamiento múltiples funciones [por ej., lugar de cumplimiento de las obligaciones (art. 1.171.II CC), el lugar de reunión de la asamblea o de otros órganos sociales (art. 109 LSA), etc.]. El domicilio ha de consignarse en el contrato de sociedad y referenciarse en toda su documentación (art. 24 C. de C.)” (pág. 245 ídem).

⁶⁹² **Art. 387.1 RRM:** *Los datos esenciales relativos a la primera inscripción de las sociedades o entidades que se comunicarán al Registrador Mercantil Central por los Registros Mercantiles, serán los*

tar obligatoriamente en los Estatutos de las sociedades de capital⁶⁹³-, sino también para la debida publicidad de *actos posteriores* (art. 388.1.2⁶⁹⁴). Por su parte, la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010, de 02.07) viene a establecer una distinción entre domicilio “registral” y domicilio “real” y advierte claramente que *en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el artículo anterior*⁶⁹⁵, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos (art. 10). Con ello podríamos decir que el legislador impone una especie de penalización a las sociedades que no se cuiden de evitar esa discordancia, pues en caso de ser demandadas en el domicilio que conste en el Registro no podrán alegar que ya no estaban domiciliadas allí o que su actividad económica ha pasado a desarrollarse en otro lugar.

De la relevancia de los datos obrantes en el Registro Mercantil se ha hecho eco el Tribunal Supremo, haciendo valer, en perjuicio de la sociedad demandada, el domicilio social que se haya publicado, como ocurrió en la **STS 04.10.1999**⁶⁹⁶:

siguientes: [...] 2.º La calle y número o lugar de situación, la localidad y el municipio del domicilio social. [...].

⁶⁹³ **Art. 23 LSC**: “Estatutos sociales”. En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar: [...] c) El domicilio social.

En similares términos, el **art. 120.1 RRM**, dispone bajo el título “Domicilio social” que [e]n los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que habrá de radicar en el lugar del territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva administración y dirección o su principal establecimiento o explotación.

⁶⁹⁴ **Art. 388.1 RRM**: Los datos esenciales relativos a los actos posteriores a la primera inscripción de sociedades o entidades inscritas que se comunicarán al Registrador Mercantil Central por los Registros Mercantiles, serán los siguientes: [...] 2.º En los cambios de domicilio, la calle y número o lugar de situación, localidad y municipio del nuevo domicilio. [...].

⁶⁹⁵ **Art. 9.1 LSC**: Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.

⁶⁹⁶ **Roj: STS 6067/1999. La STS 15.06.2000** (Roj: STS 4907/2000) resulta también clarificadora: “El Código Civil en su artículo 41 atiende para fijar el domicilio de las personas jurídicas, en primer lugar, a la Ley que las ha creado o reconocido, así como a los estatutos o reglas de fundación y a falta de estos datos, el domicilio viene asignado al lugar en que se halle establecida su representación legal o donde se ejerzan las principales funciones. A efectos de emplazamiento en los juicios civiles de las sociedades mercantiles, se atenderá al domicilio que esté señalado en la escritura de la sociedad o en los estatutos por los que se rija y tratándose, como ocurre en este caso, de sociedad anónima, conforme a los artículos 5 y 6 y 9 c) de la Ley de 22 de diciembre de 1.989, el domicilio de las mismas viene determinado necesariamente en los estatutos, causando inscripción registral, a tenor de los artículos 114-4, 115 y 120, así como el 163 (en caso de producirse cambio domiciliario) del Reglamento del Registro Mercantil de 19 de Julio de 1.996. Correspondía por tanto a la sociedad demandante de revisión haber acreditado el domicilio registral que señala, calle AVENIDA000 NUM000, o el nuevo en la AVENIDA001 NUM001, ambos en Madrid, lo que ha omitido, reputándose actuación probatoria necesaria, de conformidad con la doctrina jurisprudencial de esta Sala (Sentencias de 22-Septiembre-1991, 9-Julio-1993 y 5-Junio-1996), pues el domicilio social que figure en el Registro Mercantil es lo que interesa a efectos de estimar el recurso de revisión promovido y facilitaría en sentido positivo la consulta previa de la demandante en el juicio de cognición conforme a doctrina constitucional (Sentencias 51/94, 174/94, 227/94 y 20-Mayo-1997), por lo que debe pechar con las consecuencias de tal omisión probatoria” (F. J. 2º).

“Debe, por ello, reiterarse la doctrina de esta Sala que recoge, entre otras la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1998: «con carácter previo y alcance general debe sentarse que el "domicilio social" de las sociedades anónimas, no sólo constituye la sede oficial de la entidad, que garantiza a la misma la recepción y práctica de cuantas comunicaciones y notificaciones hayan de trasladársele para su conocimiento, con plenitud de efectos, sino también, la ubicación que por su naturaleza formal (cfr. artículo 9 de la Ley de Sociedades Anónimas apartado e) y necesidad de inscripción registral, asegura a los terceros, que, con ella, se relacionan, la certeza de aquel conocimiento, como elemento indispensable de la seguridad del tráfico mercantil. No cabe, pues, que las sociedades anónimas tengan un domicilio "de hecho" con trascendencia jurídica. Esta es la significación para el caso, del concepto de "domicilio legal" al que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil [...]»" (F. J. 2º).

Por si se suscitara alguna duda a efectos de la tutela judicial efectiva, también el Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto y, al menos en la **STC 38/2006**, de 13.02⁶⁹⁷, ha mostrado un planteamiento menos proteccionista de lo habitual:

“A la vista, pues, de que los dos intentos de citación se habían practicado regularmente en el domicilio social y de que no constaba ningún otro lugar en el que poder efectuar un nuevo intento, no era exigible al órgano judicial otra conducta que la de proceder al emplazamiento edictal, conforme al art. 269 LEC de 1881, aplicable *ratione temporis*. Siendo la recurrente una sociedad mercantil comprobó el órgano judicial que el lugar en el que se intentó el emplazamiento era el domicilio social que figuraba en el Registro Mercantil, en el que resulta necesario intentar el emplazamiento, según hemos declarado en anteriores ocasiones (STC 100/1997, de 20 de mayo, por ejemplo). [...] Lejos, pues, de poder imputarse al órgano judicial incum-

Lo mismo decimos de la **STS 05.06.1996** (Roj: STS 3436/1996): “[...] no puede ser acogido este recurso de revisión al no existir una conducta dolosa de la Comunidad de Propietarios recurrida tendente a impedir la defensa de PROMOTORA DIRECCION002; no puede ser calificado como tal el hecho de interesar, repetidamente, el emplazamiento de la demandada en el domicilio que como social figuraba en el Registro Mercantil que es el que a estos efectos interesa y en el que deben ser emplazadas las personas jurídicas de acuerdo con el art. 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 41 del Código Civil. La posible indefensión de DIRECCION002, por falta de ese emplazamiento personal, sólo a ella es imputable, no habiéndose acreditado en autos nada que contradiga el contenido de las dos fallidas diligencias de emplazamiento, en cuanto a la inactividad y falta de presencia de la sociedad en aquel domicilio, a cuyo contenido ha de estarse en tanto no se declare su falsedad por vía penal; de igual manera no se ha probado que la actividad social se desenvolviese en otro lugar distinto, que en modo alguno tuvo acceso al registro Mercantil, y que de existir, su falta de conocimiento no sería imputable a la Comunidad de Propietarios, como tampoco consta que haya accedido al Registro Mercantil el domicilio que, en el encabezamiento de la demanda de revisión, se dice ser el social actual de DIRECCION002” (F. J. 2º).

Vid. también **STS 08.07.1994** (Roj: STS 5226/1994): “Las personas jurídicas constituidas en entidades mercantiles, tienen la obligación de hacer figurar en la escritura de constitución su domicilio social, circunstancia que encuentra su adecuada publicidad a virtud de la constancia en la inscripción correspondiente del Registro Mercantil; este domicilio será el único legal a tener en cuenta, (artículos 66 de la L.E.C. y 11 e) de la Ley de Sociedades Anónimas de 17-7-51) y si la entidad decidiera cambiarlo, deberá efectuar la rectificación correspondiente en el Registro Mercantil, siendo de su única responsabilidad las consecuencias que su desidia origine” (F. J. 2º).

⁶⁹⁷ BOE de 16.03.2006.

plimiento alguno de su deber de intentar que el demandado conozca la existencia del proceso incoado contra él, se observa que fue la demandante de amparo la que no atendió debidamente la carga, que le incumbía, de disponer en el lugar que libremente había designado como domicilio social de la organización o los medios precisos para poder ser destinataria de actos de comunicación, máxime cuando se trataba de una persona jurídica, que no deja de ser un ente creado por el Derecho, del que sólo figuradamente puede decirse que puede ser hallado en un lugar, lo que determina un especial deber de diligencia para velar por que su domicilio social no responda a una simple designación ficticia, sino que coincida con el mismo centro administrativo y funcional de la sociedad, como quiere el legislador (art. 6.1 de la Ley de sociedades anónimas; art. 41 del Código civil), para, sin duda, facilitar su localización" (F. J. 4).

También podemos encontrar casos en la jurisprudencia menor que otorgan un factor determinante al domicilio social que figure en el Registro Mercantil. Resultan muy ilustrativas las siguientes:

- **SAP Burgos (Secc. 2ª) 19.06.2013**⁶⁹⁸: "En el caso específico de las *sociedades mercantiles* la jurisprudencia viene atribuyendo una relevancia especial al dato de haber reflejado en el Registro Mercantil el nuevo domicilio (SSTC 160/1995, de 6 de noviembre, FJ 4, 100/1997, de 20 de mayo, FJ 3, 41/2000, de 14 de febrero, FJ 3, 220/2002, de 25 de noviembre, FJ 4, 7/2003, de 26 de enero, FJ 3, 162/2004, de 4 de octubre, FJ 5, 38/2006, de 13 de febrero, FJ 4, y 43/2006, de 13 de febrero, FJ 3), pues "siendo la demandada una sociedad mercantil, correspondía a la actora interesar su emplazamiento y a la propia oficina judicial llevarlo a cabo en el domicilio social que figurase en el Registro Mercantil, tal como ha declarado este Tribunal en supuestos similares al presente" –STC 100/1997, de 20 de mayo, FJ 3" (F. J. 1º).
- **SAP Cádiz (Secc. 7ª) 07.03.2013**⁶⁹⁹: "A partir de todo ello⁷⁰⁰ procede rechazar la nulidad solicitada, principalmente por cuanto que una entidad inscrita en

⁶⁹⁸ Roj: SAP BU 556/2013.

⁶⁹⁹ Roj: SAP CA 398/2013.

⁷⁰⁰ Dado su indudable interés práctico, creemos interesante transcribir a qué se refiere la Audiencia con "a partir de todo ello", es decir, con lo que se explica en el párrafo anterior del fundamento jurídico indicado: "[...] no cabe hablar de "maquinación fraudulenta" por parte de la demandante, en el sentido de la STS antes aludida, sobre todo cuando, como es el caso, pidió expresamente Construcciones López y Vázquez S.L., tras resultar infructuoso el intento de emplazamiento en el domicilio social y mediante escrito presentado el 29 de abril de 2011, que "de conformidad con lo estipulado en los arts. 590 y 591 del LEC... se consulta la base de datos de la Oficina de Consulta Registral y Averiguación Patrimonial [...]. Dicha petición, consideramos, perseguía, en definitiva, que se averiguase el domicilio de la demandada, por más que sea cierto que no eran aplicables los preceptos ya mencionados, sino el antes mencionado artículo 156 LEC y que, desde luego, buena parte de lo literalmente interesado no tiene demasiado sentido cuando se demanda a una persona jurídica, siendo tal vez por todo ello por lo que se dictó, ante el mencionado escrito, Diligencia de Ordenación de fecha 5 de mayo de 2011, en la que se requería a la actora, "toda vez que el procedimiento es un Ordinario -no un Juicio de Ejecución-" para que "aporte la Certificación del Registro Mercantil con el domicilio de la empresa demandada", lo que efectivamente hizo la ahora apelada, determinándose en virtud de Diligencia de 17 de mayo de 2011 que, "siendo el mismo domicilio el que consta en el Registro Mercantil que el aportado en la demanda" había de procederse

el Registro Mercantil, desde luego con indicación de su domicilio social, ha de procurar recibir lo que a éste se le mande, a salvo que cambie de domicilio y no puede seguir manteniendo -insistimos, aún hoy- como domicilio social un lugar en el que el portero del edificio dijo no era conocida, debiendo asumir, caso de incumplir tales obligaciones, los efectos que se deriven de su falta de diligencia" (F. J. 6º).

- **SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 28.02.2013**⁷⁰¹: "El motivo del recurso de apelación del demandado para impetrar la nulidad de las actuaciones es el de que el emplazamiento, con entrega de cédula y copias del auto de admisión a trámite de la demanda, que a la entidad demandada que se hizo, lo fue en su "teórico" domicilio social cuando a la parte actora le constaba que realmente la actividad económica que únicamente desarrollaba la entidad mercantil demandada a través de su administrador Damaso, era la de explotación de un barco de pesca deportiva, que se encontraba atracado en el mismo puerto deportivo de Puerto Rico [...] El motivo ha de ser desestimado toda vez que la notificación a la entidad mercantil demandada se efectuó correctísimamente en el domicilio social que publicaba el Registro mercantil y que era el mismo domicilio que se consignó en el contrato del que derivaba la deuda reclamada y que era el mismo que facilitó la TGSS.; [...] es más es ya sólo que la notificación fuera completamente regular sino que además fue efectiva pues en el NUM002 de la CALLE000, nº NUM000, NUM001 de Las Palmas de Gran Canaria, fue identificado, como receptor para avisar y entregarla al destinatario, quien dijo ser asesor don Gregorio [...]" (F. D. 1º).
- **SAP Cádiz (Secc. 8ª) 14.11.2011**⁷⁰²: "[...] entendemos que por una parte la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento al demandado se ha debido a su propia negligencia en cuanto que no ha modificado el domicilio de la sociedad que consta inscrito en el registro como era su obligación y por otra parte que el emplazamiento realizado a la esposa como apoderada de la sociedad e incluso al señalar era el domicilio del apelante teniendo y asumiendo la obligación de hacer llegar el emplazamiento al apelante, resulta válido como forma de cumplir con los requisitos legales sobre emplazamiento y por tanto no hay vulneración de garantías procesales ni se le ha causado indefensión" (F. J. 3º).

c) *La ampliación de la búsqueda a los administradores societarios*

Por todo lo anterior, abogamos 'de lege ferenda' por no tener obligatoriamente que intentar la comunicación, salvo a instancia de parte, en el domicilio de los administradores o representantes legales de las sociedades (art. 155.3p3) y, desde luego, por no tener que investigar el paradero de los mismos conforme al art. 156. Si las personas jurídicas gozan de personalidad jurídica para lo bueno - personalidad jurídica plena, limitación de responsabilidad ex art. 1911 CC, anteposición del velo, autonomía e independencia, mejor fiscalidad, etc.-, también deben tenerla para lo malo. Son dos sujetos absolutamente diferenciados y, del mismo

a "practicar el emplazamiento de la demandada mediante la publicación de Edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado" (F. J. 5º).

⁷⁰¹ Roj: SAP GC 698/2013.

⁷⁰² Roj: SAP CA 1609/2011.

modo que si se tratara de una persona física estaría meridianamente claro que sería excesivo hacer una averiguación domiciliaria de los familiares de esta, así debería ser también para las personas jurídicas.

En el caso que conoció en revisión la **STS 25.10.1997**⁷⁰³ no se hizo el emplazamiento en el domicilio del administrador y no se entendió vulnerado el derecho a la defensa:

“[...] el Sr. Jaime [el actor] actuó conforme a las prescripciones legales al señalar, en el juicio declarativo 76/94, como domicilio de "DIRECCION000, S.A." el figurado en la escritura de la sociedad, y procesalmente fueron, asimismo, correctas las diligencias de emplazamientos llevadas a cabo en dicho domicilio social y la realizada por vía de edictos [...] Lo acabado de exponer, impide, desde luego, tachar de "maquinación fraudulenta" la actuación del actor en aquel declarativo, Sr. Jaime, en cuanto que la misma se ajustó, en todo momento, a las disposiciones legales y no admite equiparación con la conducta tendente a ocultar o dificultar a la contraparte la iniciación del proceso; cosa distinta sería que cupiera, a lo sumo, imputar al actor la omisión de participar al Juzgado el domicilio del despacho personal del Sr. Consejero-Delegado de la sociedad para facilitar su emplazamiento, ante el resultado negativo del practicado, es de repetirlo, con arreglo a la ley, pero semejante comportamiento excedería del que se exige al buen padre de familia en el artículo 1.104 del Código Civil, y, en ningún caso, esa omisión sería encuadrable en la "maquinación" que el ordinal 4º del artículo 1.796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil previene para que pueda prosperar un recurso de revisión" (F. J. 5º).

En definitiva, esta posición que defendemos, si bien podría ser tildada de un tanto severa, no hace sino llevar a la práctica el espíritu de la LEC 2000, que, al menos en su Exposición de Motivos, muestra su preocupación por la [in]eficacia de los actos de comunicación y los retrasos que provocan, pretendiendo que *los litigantes y sus representantes asuman un papel más activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo, eliminando «tiempos muertos» que retrasan la tramitación* (Aptdo. IX, párr. 4º); y es más, continúa diciendo que *la preocupación por la eficacia de los actos de comunicación, factor de indebida tardanza en la resolución de no pocos litigios, lleva a la Ley a optar decididamente por otorgar relevancia*⁷⁰⁴ *a los domicilios que consten en el*

⁷⁰³ Roj: STS 6354/1997.

⁷⁰⁴ Somos unos férreos defensores de esa "relevancia" aun siendo conscientes de la dificultad de determinar qué se entiende por *indiferencia o descuido de las personas respecto de esos domicilios*. Entre la dejadez absoluta en tener actualizado, al menos, el domicilio padronal y el encomiable comportamiento del más cívico de los ciudadanos que acude puntualísimamente al Ayuntamiento al día siguiente de mudarse a otro lugar, hay un espacio de circunstancias difícil de determinar. Algunas las apunta CERRADO MORENO, quien se plantea "situaciones como las de las personas que, estando empadronadas en España residen durante temporadas en el extranjero o más sencillo aún, las personas mayores que necesitan cuidados y pasan una temporada con cada uno de sus hijos, permaneciendo empadronadas en el lugar donde tenía su vivienda" (*Actos de comunicación...*, op. cit., pág. 56, nota al pie n.º 61). Y aún podríamos añadir más supuestos: el del destinatario que por motivos laborales se traslada dos meses a otro punto del país; el del trabajador que decide disfrutar su mes completo de vacaciones fuera de casa; el de esa otra persona que ese mismo mes permanece hospitali-

padrón o en entidades o Registros públicos, al entender que un comportamiento cívica y socialmente aceptable no se compadece con la indiferencia o el descuido de las personas respecto de esos domicilios (Aptdo. IX, párr. 6º).

Obviamente, a salvo en los supuestos en que la propia LEC ordena la publicación edictal “cuasi-directa”, si de los propios autos (documentos inter-partes, diligencias de comunicación reportando otras señas, etc.) se desprende la existencia de otro domicilio, o si es, insistimos, a instancia de la propia parte actora⁷⁰⁵, habrá que intentarlo allí⁷⁰⁶.

Sentada nuestra posición, justo es decir que encontramos también ejemplos de sentencias a nuestro juicio excesivamente proteccionistas con las mercantiles. Así, del propio Tribunal Supremo en sentencia de **16.06.2005**⁷⁰⁷:

“[...] antes de proceder a la publicación de los edictos, quedaba al Juzgado la posibilidad de atender tal acto de comunicación en el domicilio de don Jesús Manuel, representante de la sociedad, que le fue participado por la parte actora, y al no hacerlo, ha incumplido las exigencias establecidas por el Legislador para garantizar el real conocimiento del pleito por la litigante pasiva y asegurarle, por consiguiente, la noticia del proceso pendiente y su derecho a intervenir en el mismo” (F. D. 2º ‘in fine’).

Entre las Audiencias, la **SAP Vizcaya (Secc. 3ª) 20.06.2013**⁷⁰⁸ dijo:

“[...] este Tribunal estima que en este caso el juzgado ha realizado una investigación escasa e insuficiente; [...] no hay impedimento alguno, ni dificultad añadida a proceder por parte de los juzgados a enviar oficio al Registro Mercantil interesando información sobre el domicilio del administrador de la empresa demandada; y ello en aras a dar cumplimiento efectivo al derecho de tutela, más en el momento actual de crisis económica en la que no es extraño la desaparición de empresas y/o falta de localización de las mismas en el domicilio social” (F. D. 3º).

zada por un accidente o enfermedad; etc. Con todo, estos casos puntuales no pueden condicionar el espíritu y finalidad de una norma dirigida al conjunto de la sociedad.

⁷⁰⁵ **STS 16.06.2005** (Roj: STS 3927/2005): “[...] antes de proceder a la publicación de los edictos, quedaba al Juzgado la posibilidad de atender tal acto de comunicación en el domicilio de don J. M., representante de la sociedad, que le fue participado por la parte actora, y al no hacerlo, ha incumplido las exigencias establecidas por el Legislador para garantizar el real conocimiento del pleito por la litigante pasiva y asegurarle, por consiguiente, la noticia del proceso pendiente y su derecho a intervenir en el mismo” (F. J. 2º).

⁷⁰⁶ **STC 117/2005**, de 09.05 (BOE de 08.06.2005): “este Tribunal tiene declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio o de cualquier otro dato que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos” (F. J. 3º); **SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 29.01.2010** (Roj: SAP GC 142/2010): “Así, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio o de cualquier otro dato que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esa forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos [...]” (F. J. 2º).

⁷⁰⁷ Roj: STS 3927/2005.

⁷⁰⁸ Roj: SAP BI 2156/2013.

O el AAP Sevilla (Secc. 6ª) 18.12.2012⁷⁰⁹, en relación con un juicio cambiario:

“[...] pudiendo el legislador haber contemplado alguna especialidad para el cambiario como lo hizo para el monitorio, ha de aplicarse el régimen general del art. 161 y 156 de la ley adjetiva. Sucede, empero, que de lo actuado no parece que precisamente se haya dado cumplimiento a éste último precepto, por lo que ha de ser estimado el recurso y atendible la petición del recurrente pero siempre después del agotamiento de las posibilidades de averiguación de domicilio en todas las formas que contempla el precepto indicado, incluido la persona de quien figure como administrador” (F. J. 2º).

Acogiendo esta posibilidad avalada por la jurisprudencia, la Ley 19/2009 añadió al art. 155.3 el actual tercer párrafo, que viene a decir que *si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial*. Con dicha reforma se ha ganado un argumento por quienes entienden que el agotamiento de las diligencias de averiguación del domicilio de la parte demandada persona jurídica ha de alcanzar a sus administradores o representantes legales.

1.3.4.- Los medios a disposición de órgano judicial

Bajo el epígrafe “Averiguación del tribunal sobre el domicilio” el art. 156 establece la intervención del órgano judicial en orden a la averiguación de las *circunstancias* del domicilio o residencia del demandado, supeditándola a dos condiciones:

- a) Que *el demandante manifestare que le es imposible* designar dicho lugar, remitiéndonos a lo ya dicho en párrafos anteriores respecto a esa simple “manifestación”, si bien nos interesa destacar ahora que con dicho requisito la actuación judicial es “subsidiaria a la efectuada por el actor”⁷¹⁰.
- b) Que esa designación sea *a efectos de su personación*, es decir, para esa importante tarea que tanto concierne al órgano judicial de que el demandado llegue a tener conocimiento del pleito y de darle la oportunidad, si quiere aprovecharla, de personarse y ejercitar su derecho a la defensa. Alcanzada esta finalidad, la norma da entender, ‘a sensu contrario’, que no cabrá posteriormente solicitar averiguación judicial del domicilio de una parte que se marche a otro lugar y, contraviniendo el art. 155.5, no lo comunique.

Concurriendo ambos factores, es competencia del Letrado de la Administración de Justicia la utilización de los *medios oportunos*, pero, como ha coincidido la ju-

⁷⁰⁹ Roj: AAP SE 3059/2012.

⁷¹⁰ CUBILLO LÓPEZ: *La regulación...*, op. cit. pág. 103.

risprudencia del TC, sin que sobre los Tribunales pueda “pesar la carga de llevar a cabo largas y arduas pesquisas ajenas a su función” (STC 165/1998, de 14.07⁷¹¹), ni que “pueda exigirse al Juez o Tribunal correspondiente el despliegue de una desmedida labor investigadora, que llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa de los restantes personados en el proceso (SSTC 133/1986, 196/1989, 65/1994, 97/1991, 192/1997, 143/1998, 65/1999 y 72/1999; AATC 220/1998 y 377/1990)” (STC 219/1999, de 29.11⁷¹², F. J. 2º).

Descartada, pues, una obligación detectivesca del órgano judicial de dar a toda costa con el demandado, los medios de que actualmente dispone para llevar a cabo una averiguación razonablemente acorde con su función y con la necesaria ponderación de los intereses en juego en el proceso civil, son los siguientes:

a) *El Punto Neutro Judicial*

El Punto Neutro Judicial (PNJ) es hoy día el principal instrumento con el que cuenta los órganos judiciales para estos cometidos. Se trata de un servicio creado por el CGPJ de información centralizada, intercambio de datos y conexión entre los distintos órganos judiciales prestado a través de un portal de Internet de acceso prácticamente restringido (intranet⁷¹³) y cuya constitución fue autorizada por el Pleno de aquel órgano en su sesión de 20.02.2002 en el marco de su impulso del uso de las “TICs” a través del *Plan de Modernización de la Justicia*, también aprobado por el mismo con fecha 12.11.2008. A los efectos que aquí nos interesan, entre sus diferentes servicios se encuentran lo que el Consejo denomina “Consultas HAL (Herramienta de Averiguación y Localización)” que reúne los servicios de consultas patrimoniales y domiciliarias más demandados bajo un interfaz común⁷¹⁴, cuya información se obtiene directa y telemáticamente fruto de la cesión de los datos formalizada en Convenios de Colaboración suscritos por el propio CGPJ con diferentes organismos e instituciones públicas como la Agencia Estatal Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Asimismo, a

⁷¹¹ BOE de 18.08.1998, con cita de la STC 133/1986 y del ATC 1.296/1987.

⁷¹² BOE de 28.12.1999. Ídem, SSTC 34/1991, 165.1998, 268/2000, 18/2002 o 55/2003.

⁷¹³ La dirección web principal es <http://www.pnj.cgpj.es>, aunque pueden existir otras direcciones “URL” en función de la Comunidad Autónoma a cuyos órganos judiciales se presente el servicio.

⁷¹⁴ Informe Punto Neutro Judicial de enero de 2012, pág. 8 (Web CGPJ).

La revista *e-Justicia*, editada por el propio CGPJ publicó en 2008 un número especial dedicado a esta herramienta imprescindible en la actualidad y usada de forma cotidiana. En aquella publicación se explicaba que “el Punto Neutro Judicial nació con las siguientes pretensiones:

1. Facilitar la comunicación entre los propios Órganos judiciales, dentro del marco del Test de Compatibilidad.
2. Facilitar la relación de los Órganos judiciales con el Centro de Documentación Judicial.
3. Facilitar a los Órganos judiciales el acceso a servicios y registros que pudieran prestar el Ministerio de Justicia y otros organismos.
4. Facilitar la relación entre los Órganos judiciales y el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones.

En este momento se prestan veintisiete servicios en el PNJ” (pág. 6).

Para más información, puede consultarse en la web del CPGJ el documento: “Plataforma de Servicios del PNJ – Documentación. Publicación 11.0.0”, de mayo de 2015.

través del PNJ se puede enlazar con el Registro Central de Rebeldes Civiles, gestionado por el Ministerio de Justicia.

En particular, el órgano judicial puede recabar los siguientes datos para identificar el domicilio y otras circunstancias relevantes a los efectos del art. 156.1, además de otras ajenas a esta finalidad (datos patrimoniales, embargos, etc.):

- *AEAT* (Agencia Tributaria): Identificación de contribuyentes (NIF, NIE o CIF y nombre completo), que suele ser muy útil, al ser la única fuente de las que ofrece el PNJ en la que con frecuencia figura un número de teléfono fijo o móvil del destinatario; su domicilio fiscal; y en su caso, su fallecimiento.
- *DGT* (Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior): Consulta de conductores y de vehículos, figurando, en su caso, el domicilio del primero y el “Domicilio del Vehículo”.
- *Catastro* (Dirección General del Catastro, Mº de Hacienda y Administraciones Públicas): Permite conocer nombre, apellidos y número de identificación del titular de un bien catastrado y la descripción y localización de los inmuebles asociados a su titular catastral.
- *INE* (Instituto Nacional de Estadística): nombre, apellidos, CIF y domicilio dado en vigor en el Padrón de cada municipio. Esta base de datos es la única, junto a la de la Seguridad Social, permite consultar los datos de una persona aunque no se conozca su NIF, NIE o CIF., lo cual resulta necesario sobre todo cuando la persona a buscar es extranjera.
- *SEPE* (Servicio Público de Empleo Estatal): Nombre, apellidos y dirección de beneficiario de la prestación; también, en su caso, si ha fallecido. Es posible que obre un domicilio, facilitado al tiempo de solicitar aquella, diferente, del que conste a efectos laborales.
- *Policía* (DNI): Se obtiene aquí los datos con que cuenta la Dirección General de la Policía del Documento Nacional de Identidad e Número de Identificación de Extranjero. Si el consultado se ha nacionalizado español, la consulta a través de su NIE indicará esta circunstancia.
- *TGSS* (Tesorería General de la Seguridad Social): Los datos se obtienen a través de una aplicación independiente (y arcaica, denominada ‘Cex-SIL), provenientes de las bases de datos tanto de la propia Tesorería, como del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM); no obstante, una versión reducida de los mismos también se pueden obtener desde la propia plataforma del PNJ. Entre esos datos, el nombre completo del afiliado, domicilio (no necesariamente el laboral), domicilio de la actividad
- *CORPME* (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España). Permite la consulta de los índices del Registro de la Propiedad

y los datos del inscrito en el Registro Mercantil Central (accesible directamente por el RMC). En teoría (no así en la práctica) solo está pensado para los órganos judiciales de la jurisdicción penal, restricción coherente con el art. 156.2, pudiendo la propia parte acceder por sí sola (previo pago) a aquellos datos sin necesidad de interpelación judicial.

- *SIP* (Sistema de Información Penitenciaria, Ministerio del Interior): Si el destinatario de la comunicación estuviese en prisión, podrían conocerse los datos centro penitenciario correspondiente.
- *RCRC* (Registro Central de Rebeldes Civiles): El acceso se realiza a través del SIRAJ, es decir, de Sistema Integrado de Registros de la Administración de Justicia, gestionado por el Ministerio de Justicia, con el que el PNJ enlaza.

En la actualidad, a través de la llamada “Consulta integral domiciliaria” se pueden obtener en un solo documento los datos personales y de domicilio que obren en las bases de datos de la AEAT, Catastro, INE (Domicilio Padronal), DGT, SEPE (Prestaciones), Policía (DNI), TGSS (Domicilio), más, en su caso, Instituciones Penitenciarias y Registro Civil (defunción).

b) *El Registro Central de Rebeldes Civiles*

Sin ningún antecedente legislativo-procesal, la LEC 2000 introdujo a través del art. 157 un registro que tuvo a bien en denominar *Registro Central de Rebeldes Civiles*, decisión muy criticable⁷¹⁵ porque “no se refiere a las personas que sean objeto de declaración de rebeldía en los términos previstos por los artículos 496 y siguientes de la mencionada Ley”, como hubo de aclarar el RD 231/2002, de

⁷¹⁵ Y criticada, incluso por el propio CGPJ. Así se constata en el Informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ al entonces Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Rebeldes Civiles” (futuro RD 231/2002), que fue aprobado por el Pleno del CGPJ en reunión de 21.03.2001 y en el que la citada objetaba, con gran acierto, que “[...] la denominación del Registro como de *rebeldes civiles* puede ocasionar en su ulterior funcionamiento inconvenientes de importancia. Es cierto que la denominación técnica de quien no comparece al llamamiento judicial en un proceso era y es la de «rebeldé», en sentido civil [...]. Pero esa denominación técnica tiene un sentido distinto de la que sugiere la regulación reglamentaria ahora en fase de proyecto, que se limita a la situación de personas cuyo domicilio se desconoce. Rebeldía es la situación procesal del demandado que no comparece en las actuaciones y ello puede ser debido a distintos motivos, no es simplemente la de quien se ausenta de su domicilio y por ello no puede ser localizado. [...]. En segundo lugar, la expresión elegida tiene, en sentido vulgar, otras connotaciones muy distintas, que pueden ser sumamente peyorativas para las personas físicas o jurídicas aludidas, tanto en su imagen personal, como en su crédito mercantil y en el tráfico jurídico. A ello se añade que la expresión «rebeldé» aplicada al proceso penal, ha dado históricamente origen al Registro Central de Penados y Rebeldes, cuya llevanza corresponde asimismo al Ministerio de Justicia, lo que puede contribuir a ofrecer esa imagen negativa” [*Estudios, informes y dictámenes (2001)* (Tomo I), CGPJ, Madrid, 2002, págs. 288-89, Apto. III.2 y 3].

En la misma línea crítica, BOLÓS FARIÑAS e IGLESIAS MEJUTO propusieron como más correcta la denominación de “Registro Central de Partes en paradero desconocido” (*Practicum...*, op. cit. pág. III-146).

01.03, *por el que se regula el Registro Central de Rebeldes Civiles*⁷¹⁶, luego derogado por el vigente RD 95/2009, de 06.02, *por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia*⁷¹⁷. De hecho, los datos se inscriben antes de que el demandado sea declarado rebelde, declaración para la que hace falta un previo acto formal de citación o emplazamiento, y no todo rebelde es inscrito, sino solo aquel cuyas averiguaciones para su localización hubieren resultado infructuosas.

El loable propósito del RCRC era, y es, el que quedó explicitado en el preámbulo del citado RD 231/2002:

“[...] evitar que los Tribunales reiteren innecesariamente las diligencias para averiguar el domicilio desconocido de una persona demandada en el proceso. La creación del Registro Central de Rebeldes Civiles agiliza significativamente los trámites del proceso, en cuanto evita que se repitan por el mismo Tribunal en otro proceso, o por otros órganos judiciales, las mismas averiguaciones en relación con un mismo demandado cuyo domicilio se desconoce. La constancia en un Registro centralizado de las pesquisas judiciales indagatorias sin resultado positivo permite al Juez acudir directamente a la comunicación a través de edictos, con la economía en tiempo y actividad procesal que ello representa”.

La audacia del pasaje transcrito aplicada en la práctica conlleva que este registro tan peculiar sea un instrumento un tanto “peligroso”. Muchos de quienes trabajamos en la Administración de Justicia vemos con recelo su existencia, pues puede ocurrir que los datos que del demandado obren en el mismo no estén actualizados y no estén cancelados, ni de oficio, ni a instancia del interesado (suponiendo que conozca su existencia). Además, su consulta a efectos de averiguar el domicilio del demandado no es obligatoria (*el Secretario judicial... podrá dirigirse al Registro...*; art. 157.2)⁷¹⁸. Ante tales circunstancias, podemos asegurar por nuestra experiencia que su empleo en la práctica no está asimilado como algo habitual como lo es el Punto Neutro Judicial.

c) *Otros recursos*

Si a través de las fuentes de información antes citadas el órgano judicial no obtiene un domicilio útil donde comunicarse con el demandado, se verá probablemente abocado al empleo de los edictos, pues se hace difícil pensar en otras opciones alternativas. Es cierto que junto a los *medios oportunos* el art. 156.1 cita los

⁷¹⁶ BOE de 16.03.2002.

⁷¹⁷ BOE de 08.02.2009. El RCRC queda integrado en este *sistema de registros administrativos*, junto al *Registro Central de Penados*, el *Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica*, el *Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes*, y el *Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores* (art. 1.2).

⁷¹⁸ Criterio sostenido, ‘obiter dicta’, en el **AAP Cádiz (Secc. 8ª) 11.02.2009** (Roj: AAP CA 382/2009): “[...] si bien la L.E.C. prevé la posibilidad de consultar al Registro Central de Rebeldes Civiles ello no significa que necesariamente se haya de agotar dicha vía cuando resulta que de las gestiones practicadas resulta imposible conocer el domicilio, no siendo procedente que el juez a quo haya de esperar a que la parte solicite dicha diligencia” (F. D. 2ª); argumento reiterado poco después por la misma Audiencia y Sección en auto de 26.05.2009 (Roj: AAP CA 1896/2009).

Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155, pero raro es que, tratándose el destinatario de persona o entidad *que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente*, que el actor no conozca ya el domicilio del mismo. Quizá una nuevo examen de las actuaciones y de los documentos acompañados por el mismo pudieran dar su fruto; quizá también, aunque parezca muy poco “oficial”, todavía podría consultar en Internet (páginas especializadas⁷¹⁹; buscadores “web”; etc.), pese a que el demandante también tenga acceso y hubiera podido hacerlo antes.

Por último, traemos a colación la procedencia de recabar la intervención de la policía local para la averiguación del domicilio del demandado, pudiendo encontrarse posturas favorables a ello (RODRÍGUEZ MERINO⁷²⁰; GONZÁLEZ GRANDA⁷²¹); otras que cuestionan que tal medida sea factible en la jurisdicción civil (CACHÓN CADENAS⁷²²); y otras que la rechazan de forma más o menos concluyente (GUTIÉRREZ CARBONELL⁷²³; CUBILLO LÓPEZ⁷²⁴). Nuestra posición es, sin dudar, la de estos últimos y como fundamento nos adherimos a los *Acuerdos de unificación de criterios de la Junta de Secretarios Judiciales de Primera Instancia de Valencia*, de marzo de 2009, cuyo Acuerdo n.º 1, punto 2, tiene el siguiente contenido:

“Los órganos jurisdiccionales civiles no pueden utilizar a la Policía con el fin de averiguar el domicilio de los demandados, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla tal extremo, y estamos ante un empleo anormal de un servicio público de forma gratuita para unos exclusivos fines privados (artículo 156.1 LEC). Esto es,

⁷¹⁹ Entre ellas podemos citar, por su utilidad para el caso de sociedades mercantiles, el portal www.infocif.es.

⁷²⁰ RODRÍGUEZ MERINO: “[...] habla el art. 156.1 de los medios oportunos, donde puede incluirse la posibilidad de que se indague el paradero del demandado incluso con la ayuda de la policía local” (“Artículo 156”, op. cit. pág. 1034).

⁷²¹ GONZÁLEZ GRANDA: “Lo más lógico sería oficiar a la policía judicial [sic], a tal fin, como señala, en el ámbito penal, el artículo 178 LECr.” (“Tomo I. Sujetos y actuaciones...”, op. cit., pág. 271).

⁷²² CACHÓN CADENAS: “A partir del tenor literal del art. 156.1, no queda claro si el tribunal podrá recabar la colaboración policial para efectuar las actuaciones encaminadas a averiguar el domicilio o el lugar de residencia del demandado” (“Jurisdicción, partes y actos procesales”, op. cit., pág. 383).

⁷²³ GUTIÉRREZ CARBONELL: “En el procedimiento penal, si las notificaciones domiciliarias, por correo o personales, resultan infructuosas, por ser desconocido el paradero, debe decretarse la búsqueda policial antes de acordar la notificación por edictos [*]. Esto no ocurre en el proceso civil, en el que, sin pesquisa policial, se pasa directamente a la notificación por edictos. La diferencia entre los intereses de ambos tipos de procedimientos justifica el distinto tratamiento” (“Artículo 164”, *Proceso civil práctico*, Tomo II, op. cit., pág. 542).

[*] **Art. 178 LECrim.**: *Si el que haya de ser notificado, citado o emplazado no tuviere domicilio conocido, el Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso el Secretario judicial se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación.*

⁷²⁴ CUBILLO LÓPEZ: “[E]n mi opinión, es dudoso que tenga cabida en el proceso civil –por exceder del principio dispositivo– la propuesta de «oficiar a la policía judicial, a tal fin, como señala, para el ámbito del proceso penal, el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal»” (*La regulación de las actuaciones en juicio*, op. cit., pág. 104; El entrecomillado lo atribuye el autor en nota al pie n.º 140 a SAMANES ARA: “Los actos procesales de comunicación y la declaración de rebeldía en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Tribunales de Justicia*, n.º 2-1999, La Ley, Madrid, pág. 95).

se trata de una petición contraria a nuestro ordenamiento jurídico, y que implica un empleo indebido de los recursos del Estado”⁷²⁵.

Poco más podemos añadir. La falta de previsión legal al respecto de una Policía Judicial “civil” que no existe como tal, la vigencia del principio dispositivo en esta jurisdicción y la disponibilidad en la actualidad de poderosas herramientas informáticas en los órganos judiciales para el acceso sin intermediarios a las bases de datos que antes hemos visto, respaldan este planteamiento.

2.- LA COMUNICACIÓN EDICTAL DIRECTA O CUASI DIRECTA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

2.1.- EXCEPCIONES LEGALES AL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA COMUNICACIÓN EDICTAL

Como ya hemos apuntado anteriormente, la LEC alberga cuatro momentos en los que se aparta de la ortodoxa consideración residual de la comunicación por edictos y prevé que se empleen los mismos prácticamente acto seguido que resulte infructuoso el primer intento de emplazamiento o citación con la parte demandada, e incluso un quinto en que se acude directamente al edicto:

1º.- Juicio verbal de desahucio (excepto precario) (arts. 164p4): El párrafo 4º del art. 164 actúa de forma coordinada con el párrafo 3º del art. 155 a fin de que se pueda ordenar la comunicación con el demandado en el tablón de anuncios de la oficina judicial si no se le pueda practicar el *requerimiento* (desahucio por falta de pago) o la *citación* a juicio, tras la Ley 42/2015 emplazamiento para contestar a la demanda (desahucio por expiración del plazo) en el domicilio arrendaticio, esto es, en el pactado al efecto en el contrato o, en su defecto, en la propia vivienda o local arrendado. Dado que trataremos de este tema ‘in extenso’ en el capítulo siguiente, al mismo nos remitimos.

2º.- Proceso monitorio en reclamación de cuotas de Comunidad de Propietarios (Art. 815.2): Misma intención, mismos requisitos: el requerimiento de pago se habrá de practicar en el domicilio que hubiera podido designar a la Comunidad el deudor moroso ex art. 9.1.h) LPH y, a falta del mismo, en el piso o local. Caso de no resultar efectiva la comunicación, se le *notificará* (sic) *conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley*. En el capítulo siguiente abordamos también con más detalle este reenvío, no exento de polémica, que se hace en bloque a ese precepto.

3º.- Demandado ya inscrito en el Registro Central de Rebeldes Civiles. Si el art. 157.2, al que remite el art. 164p1, brinda al Letrado de la Administración de Justicia una posibilidad (*podrá acordar*) y un modo expeditivo de hacerlo (*directamente*), será más que plausible y defendible que bastará que ya figuren los mismos datos domiciliarios del demandado en aquel Registro para que pueda

⁷²⁵ Texto publicado en www.actajudicial.com y en *Práctica de Tribunales* n.º 61, 2009, La Ley, Madrid.

acordar la comunicación edictal. Así se desprende ‘lege data’, pero ya sabemos que esa no es la interpretación considerada correcta pese a que lo que la ley ha hecho es confiar ciegamente en las actuaciones que con la misma finalidad hubiesen sido ya realizadas en otro momento o lugar (cfr. art. 157.1).

4º.- Convocatoria a Junta de herederos. En el procedimiento para la división judicial de la herencia prevé la LEC la convocatoria a junta herederos para la designación de contador y peritos (arts. 783). A los interesados que no estuviesen personados y fuese conocida, se les citará personalmente, pero *si no lo fuere, se les llamará por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 164*. Entendemos que esta estipulación ha de aplicarse por analogía a la Junta para la formación de inventario (arts. 793.3 y 794).

5º.- Notificación de la subasta al ejecutado no personado. La Ley 19/2015 ha incorporado un supuesto que destaca sobre los demás porque no comporta la localización del destinatario. Nos referimos a la notificación al ejecutado no personado de la convocatoria de subasta, que habrá de realizarse directamente a través del BOE, sirviendo a tal efecto el anuncio oficial.

Esa misma ley nos ha ahorrado mencionar un sexto supuesto a nuestra relación, al modificar el art. 686.3 y exigir ahora en el requerimiento de pago dentro de la ejecución hipotecaria que la Oficina judicial realice *las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor* antes de proceder a *ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164*.

2.2.- LA VÍA EDICTAL COMO MEDIO DE PUBLICACIÓN

Los actos de comunicación judicial suelen tener unos sujetos destinatarios determinados o susceptibles de determinación, nominativamente o, al menos, como grupo cohesionado, de tal modo que cuando el órgano judicial notifica, emplaza, cita o requiere lo hace sabiendo a quién se dirige y a qué domicilio hay que dirigir el acto. Pero cuando los anteriores parámetros no existen, entonces entramos en el terreno de la publicación propiamente dicha, donde la misma es tan difusa como desconocidos son sus potenciales interesados. En palabras sencillas pero efectivas de GARCÍA CALVENTE, “si el acto se refiere a una pluralidad indeterminada de personas, se publica. En cambio, si su destinatario es una sola persona o varias personas determinadas, se notifica”⁷²⁶. Esta afirmación requiere, no obstante, matizar que cuando no es posible la comunicación personal con personas que sí son conocidas o sí están determinadas, caso del desconocimiento del domicilio, habrá también una publicación, en concreto una “publicación individualizada”, en la que, como afirma LÓPEZ MERINO, la misma “es un medio de notificar”⁷²⁷. Desde otro

⁷²⁶ GARCÍA CALVENTE, YOLANDA: *Las notificaciones en el derecho tributario*, Edersa, 2006 (ed. digital VLEX, ref. 302408).

Un buen ejemplo nos lo ha proporcionado la reciente reforma del art. 645 por la Ley 19/2015: la convocatoria de subasta *se anunciará* en el BOE, pero al ejecutado no personado el anuncio servirá *de notificación*.

⁷²⁷ *La notificación...*, op. cit., pág. 89.

punto de vista, el autor distingue entre notificación y publicación considerando que la primera “es siempre una comunicación personal, en el sentido de que hay una persona física que se hace cargo del mensaje, la cual no existe en la segunda, que puede por ello calificarse de impersonal⁷²⁸”.

Podría decirse que la anterior distinción entre notificación y publicación cabe en la regulación que hace la LEC de los actos de comunicación. Unas veces emplea el verbo “publicar” o su sustantivo y en otras sinónimos como “anunciar” (v. gr., en el art. 645.1 para la subasta). Además, en su modo de describir qué son las notificaciones, lo hace de forma abstracta para así dar cabida a la publicidad. Tienen *por objeto* –nos dice– *dar noticia de una resolución o actuación* (at. 149.1^º), pero no dice a quién. Si consideráramos que hablamos de figuras antagónicas, hubiera tenido que añadir un nuevo inciso al elenco de *clases* de actos de comunicación, lo que no es el caso porque con la publicación lo que el emisor hace es ampliar el espectro del objeto de la notificación. Así pues, podríamos hablar de la publicidad como sinónimo de notificación colectiva.

2.2.1.- Notificaciones-publicaciones colectivas

Se prevén las siguientes:

a.- **Publicación de determinadas sentencias:** Por el interés que para la sociedad en general tienen, en materia de acciones colectivas de cesación se establece en el art. 221.2 tras su reforma por Ley 39/2002 que, *en las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.*

Por otra parte, la sentencia que se dicte en el recurso de interés de ley, si fuere estimatoria *se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, a partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento jurídico, vinculando en tal concepto a todos los Jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil diferentes al Tribunal Supremo* (art. 493).

Estas previsiones constituyen la aplicación concreta de lo que con carácter general prevé el art. 212⁷²⁹, que ordena, por un lado, que las sentencias y demás

⁷²⁸ Ídem, pág. 101.

⁷²⁹ **Art. 212.** “Publicación y archivo de las sentencias”. 1. *Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas por quienes las hubieran dictado, serán publicadas y depositadas en la Oficina judicial, ordenándose por el Secretario judicial su notificación y archivo, dándoseles publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución y las leyes.*

2. *Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela,*

resoluciones definitivas sean *publicadas*, cuestión distinta de la que ahora nos ocupa porque se refiere a la lectura de dichas resoluciones en audiencia pública, obligación más formal y teórica que práctica pese a derivarse del art. 120.3 CE⁷³⁰; y por otro, que se les de *publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución y las leyes*, entre las que ha de incluirse la propia LEC, tanto por los dos casos anteriormente expuestos, como cuando *cualquier interesado solicite el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas* (art. 212.2).

b.- Anuncio de la subasta judicial de bienes. Como lugar principal y obligatorio de publicación, *la convocatoria de la subasta se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado»*; complementariamente, *y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia* (art. 645.1).

2.2.2.- Emplazamientos colectivos

En determinados preceptos la LEC no emplea el término “emplazamiento”, ni “emplaza” a los interesados, si no que les *llama* o les *insta a comparecer*. Pero ello no quiere decir que no estemos ante verdaderos actos de comunicación de emplazamiento, en su sentido técnico, *para personarse y para actuar dentro de un plazo* (art. 149.2º); y en un caso concreto, el del art. 783.3, el emplazamiento-llamamiento se utiliza en sentido amplio, porque lo que se acuerda realmente es una citación (art. 149.3º) a una comparecencia.

Hablamos de los siguientes supuestos:

a.- Llamamiento a consumidores y usuarios afectados. En el ámbito de los litigios de consumo la publicidad de los procesos judiciales es significativamente importante, dado el fenómeno global de la contratación en masa y los exponenciales efectos perjudiciales que puede tener sobre un gran número de personas un producto defectuoso o un servicio irregular. Confluyen aquí intereses supraindividuales que requieren normas procesales específicas que los protejan, como las que otorgan legitimación activa a las asociaciones o entidades legalmente constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios⁷³¹, sean o no asociados o miembros de aquellas (art. 11.1). La legitimación individual, no obstante, queda intacta, de suerte que la LEC promueve la participación de los propios consumidores y usuarios individualmente aunque ya estén litigando por ellos aquellas entidades o estén ya constituido en juicio como grupo otros afectados (‘class actions’). Para ello se establece el mecanismo de dar la mayor difusión posible a la demanda, publicando el Letrado de la Administración de

a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes. [...].

⁷³⁰ **Art. 120.3 CE:** *Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.*

Como ponen de manifiesto GUASP y ARAGONESES, “el requisito tiene escasa razón de ser hoy, dada la difusión del conocimiento del lenguaje escrito”, considerando dichos autores “incomprensible” que se recoja en el art. 120 CE, “pese a lo cual excepcionalmente se cumple en casos de especial relevancia” (*Derecho procesal civil...*, op. cit., pág. 525).

⁷³¹ Sobre esta materia, vid. DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA: *La tutela jurisdiccional civil de los intereses de consumidores y usuarios*, Edisofer, Madrid, 2005.

Justicia su admisión *en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses* (art. 15.1p1) y con la que *se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual* (ídem).

b.- Posesión de bienes hereditarios: A fin de tutelar el eventual derecho de los desconocidos herederos o legatarios de bienes frente a quienes con la misma condición pretendan la posesión de aquellos bienes que *no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario*, el art. 441.1 dispone la *publicación del auto por el que deniegue u otorgue la posesión solicitada, instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante*. Ese auto, que hemos de suponer que acuerda otorgar el derecho posesorio de forma provisional, *será publicado por edictos, que se insertarán..., a costa del demandante*, en los tres siguientes lugares:

1.- *En un lugar visible de la sede del Tribunal*. Esta previsión resulta extraña por cuanto no concreta en lugar, que no debe ser otro que el tablón de anuncios de la Oficina judicial, que, a su vez, con la promulgación de la Ley 42/2015 habrá de entenderse sustituido por el tablón de anuncios “virtual” de la sede judicial electrónica. No obstante, hubiéramos apostado por dejar vigente la previsión de ley del siglo XIX, que ordenaba la fijación del edicto, no en el órgano judicial, sino, “en los sitios acostumbrados del pueblo en que residiere el Juzgado”⁷³², medida en principio más eficaz para el efectivo conocimiento de los habitantes del mismo.

2.- *En el Boletín Oficial de la provincia*. A diferencia de lo que ocurre con el art. 497.2 y la publicación de la sentencia o resolución final al demandado rebelde en paradero desconocido, que permite al actor elegir entre el Boletín Oficial del Estado y el de la Comunidad Autónoma, aquí se descartan ambos y se opta por el de la provincia, copiando sin más la norma derogada de la ley precedente (art. 1640 LEC 1881) pese a que hubiera sido deseable darle una publicidad teóricamente de mayor difusión como habría tenido de hacerlo en el primero de aquellos boletines.

3.- *Y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma*. También presente con anterioridad, aunque ahora no se habla en plural y se requiere que sea en un medio de los de mayor difusión en la provincia, se trata de una exigencia única en toda la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. En ningún otro procedimiento en que se prevea la comunicación por edictos se establece con carácter obligatorio acudir a la prensa escrita, lo que resulta cuestionable a tenor de lo dispuesto por el art. 236 LOPJ. Con dichos edictos lo que se pretende es realizar un llamamiento general y público *instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el*

⁷³² Art. 1640 LEC 1881: “Dada la posesión, el Juez dispondrá que el auto en que se haya mandado dar se publique por edictos, que se fijarán en los sitios acostumbrados del pueblo en que residiese el Juzgado, y se insertarán en los periódicos de él, si los hubiere, y en el «Boletín Oficial» de la provincia”.

*plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante*⁷³³. En caso de que *nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión*; por el contrario, *en caso de que se presentaren reclamantes* –entendemos que cumpliendo con los requisitos de postulación ordinarios–, y solo en ese caso, se celebrará *la vista de juicio verbal, previo traslado de los escritos al demandante y citación al mismo y a todos los comparecientes* (art. 441.1p2).

c.- **Llamamiento a los interesados a Junta de herederos.** De nuevo damos cabida aquí a esta Junta, ahora desde el punto de vista de la publicación de un acto de comunicación como es la citación, a la que son “llamados” los interesados en la herencia cuya residencia no fuere conocida (art. 783.3).

Concluimos este epígrafe con otro supuesto de emplazamiento colectivo que, de forma excepcional, fue utilizado por la Ley 1/2013, de 14.05, *de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social*⁷³⁴. La norma modificó la LEC para introducir como nueva causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y estableció un plazo preclusivo de un mes para que todos aquellos procesos de ejecución que ya estuvieren en curso *para formular un incidente extraordinario de oposición* (Disp. Ad. 4ª, aptdo. 2) basado en aquella causa. Lo censurable de la nueva reforma estuvo en que la publicación en el BOE de la ley sirvió de *comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo* (aptdo. 4) del plazo citado, *no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto* (ídem), pese a que los destinatarios naturales de esa comunicación estaban perfectamente identificados en cada uno de los procesos judiciales en marcha. Dada la trascendencia de esa posibilidad *extraordinaria*, tendría que haberse dispuesto que por el respectivo órgano judicial se acordará el emplazamiento a las partes ejecutadas para formular, en su caso, oposición o, cuando menos, la notificación de la existencia de dicha reforma. De hecho, la disposición transitoria ya ha sido declarada contraria a la Directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13/CEE) por la **STJUE de 29.10.2015** (Asunto C-8/14), ante una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 4 de Martorell⁷³⁵. Entre otras “consideraciones”, el tribunal de Luxemburgo ha entendido que:

⁷³³ Cfr. art. 1641 LEC 1881: “Pasados cuarenta días desde la fecha en que se hubiere insertado el auto en el «Boletín Oficial» de la provincia sin que nadie se haya presentado a reclamar, se amparará en la posesión al que la hubiere obtenido, y no se admitirá reclamación contra ella. Quedará sólo al que se crea perjudicado la acción de propiedad, durante cuyo juicio deberá conservarse en la posesión al que la haya adquirido”.

⁷³⁴ BOE de 15.05.2013.

⁷³⁵ La medida ya había sido objeto de crítica, por ejemplo, por el Colegio de Abogados de Barcelona (*Mon Jurídico*, n.º 278, mayo 2013, pág. 7). En igual sentido, entre la doctrina, vid. SANTOS MARTÍNEZ: “Atendiendo a la propia finalidad de la norma -*perfeccionar y reforzar el marco de protección de los deudores* (Exposición de Motivos)- probablemente habría sido más oportuno prever que fuera el Secretario judicial que conociera de la ejecución hipotecaria quien pusiera en conocimiento de la ejecutada la posibilidad de interponer dicha oposición extraordinaria y que a partir de la notificación del Juzgado comenzara a computar el plazo de un mes” (“El régimen de oposición a la ejecución

“Por consiguiente, debe señalarse que la disposición transitoria controvertida, en la medida en que prevé que el plazo preclusivo comienza a correr en el presente caso sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes de entrar en vigor esa Ley, no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa en cuestión” (Consideración n.º 39).

3.- ACUERDO Y EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EDICTAL

3.1.- RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL

De existir el supuesto de hecho que aboca al órgano judicial a emplear la comunicación por edictos, siendo el supuesto estándar el del desconocimiento del domicilio del demandado, determina el art. 164 que *el Letrado de la Administración de Justicia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial...* Que el precepto hable de consignación nos hace pensar en si es suficiente la diligencia de ordenación con la que se adopta tal medida en la práctica, a falta de una disposición expresa al respecto. El decreto parece el tipo de resolución que se adecua a esta situación en la que resulta *preciso o conveniente razonar lo resuelto* (art. 206.2.2º), pues el Letrado de la Administración de Justicia no se limita aquí a *dar a los autos el curso que la Ley establezca* (art. 206.2.1º), sino que está determinando el devenir procesal de un demandado que van a quedar citado o emplazado formal pero no materialmente, de ahí que deba quedar explicitada en la resolución de forma suficiente la ‘ratio’ de la comunicación edictal.

Abundando en este planteamiento, quizá hubiera sido conveniente que el legislador no hubiera traspasado sin más al Letrado de la Administración de Justicia una competencia que antes de la Ley 13/2009 correspondía al Juez o Magistrado y la adoptaba por providencia. No en vano, en la redacción también anterior a dicha Ley del art. 206.2-1º había que dictar esta clase de resolución cuando la misma se refería “a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos procesales de las partes, siempre que en tales casos no se exija expresamente la forma de auto”. La afectación de los derechos procesales de la parte demandada es, como resulta obvio, clara.

Por otro lado, del uso de la forma imperativa del verbo mandar que aparece en el precepto se deduce que la comunicación edictal hay que acordarla de oficio cuando todas las circunstancias estudiadas, pese a que en la práctica los órganos judiciales son siempre reticentes y raro es que lo hagan sin que medie petición

hipotecaria tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo”, *Práctica de Tribunales* n.º 103, julio-Agosto 2013, La Ley -Ed. digital ref. LA LEY 3553/2013-).

por escrito de la parte actora⁷³⁶.

3.2.- LUGARES DE PUBLICACIÓN

El objeto de la comunicación edictal es la *copia de la resolución o de la cédula* (art. 164p1), cuya publicidad se materializa, como los siguientes lugares que la ley señala:

- a) *En el tablón de anuncios de la oficina judicial* (art. 164p1).
- b) *En el «Boletín Oficial» de la provincia, en el de la Comunidad Autónoma, en el «Boletín Oficial del Estado»...*
- c) *...o en un diario de difusión nacional o provincial* (art. 164p2).

3.2.1.- El tablón de anuncios: Del papel a la sede judicial electrónica

Lugar principal por antonomasia de publicación edictal de los órganos judiciales es el tablón de anuncios. Tratándose de un instrumento tan destacado, lo normal hubiera sido la regulación por disposición legal o, al menos, reglamentaria, de aspectos tan esenciales como dónde ha de ubicarse, sus dimensiones y resto de características (abiertos o no, con o sin cristal; etc.) y, no menos importante, el tiempo en que han de quedar expuestos los diversos edictos que hayan de fijarse en el mismo.

Nada de lo anterior ha sido regulado, ni lo será, ahora que con Ley 42/2015, ajustándose a lo ya dispuesto por la Ley 18/2011, los tabloneros de anuncios tradicionales habrán de ir quedándose paulatinamente vacíos de edictos en formato papel a favor de los novedosos edictos “digitales”. A tal efecto la recentísima reforma ha insertado un nuevo inciso al párrafo 1º del art. 164 para añadir que la copia de la resolución o la cédula se fijará en el tablón de anuncios de la oficina judicial *de conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*, reenvío que conduce al art. 35 de dicha Ley, que establece:

La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios será sustituida por su publicación en la sede o subsede judicial electrónica.

Y a su art. 11.1, que, en concordancia con lo anterior, dispone que entre los *contenidos y servicios de las sedes judiciales electrónicas* tendrá que estar:

[...] f) Publicación electrónica, cuando proceda, de resoluciones y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos.

Como se puede observar, no se emplea ya la palabra “tablón”, que solo en sentido figurado tendría sentido en el mundo virtual de Internet.

⁷³⁶ Vid. **AAP León (Secc. 1ª) 30.04.2008** (Roj: AAP LE 303/2008): “[...] una vez que la parte ha manifestado que ignora el domicilio de la demandada y que no puede facilitar otro, el tribunal ha de obrar de oficio cuando se agota de manera infructuosa la investigación desarrollada, acordando el requerimiento por medio de edictos” (F. J. 2º).

3.2.2.- Los boletines oficiales

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 164 la publicación en los boletines oficiales solo se realizará *a instancia de parte, y a su costa*, previsión que únicamente es correcta cuando la conectamos con el párrafo 1º y, a su vez, con el art. 156, de lo que se deduce que así será cuando la comunicación tenga por objeto la personación de la parte demandada. Fuera de ese contexto, que no aclara el precepto, la frase es falaz completamente, al recogerse en la propia LEC supuestos en los que la publicación en boletín es obligatoria y, derivada de ese carácter, repercutible en costas, previniendo al efecto el art. 241.1.2º que se considerarán como tales la parte de los gastos del proceso que se refieran a la *inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso*⁷³⁷.

Los **preceptivos** son:

- La publicación en el BOP del auto de art. 441.1 sobre tutela sumaria de la posesión de bienes hereditarios.
- La publicación en el BOE de la sentencia estimatoria en los recursos en interés de ley (art. 493).
- La notificación en el BOE o Boletín de la CCAA (o Ciudad Autónoma) de la sentencia al demandado rebelde en ignorado paradero (art. 497, salvo las excepciones que regula).
- El anuncio en el BOE de la subasta de bienes, tanto muebles como inmuebles (art. 645.1).
- La comunicación en el BOE, a practicar por el Registrador de la Propiedad, a los titulares de derechos a que se refieren los arts. 657 y 659 (art. 660).

Los **potestativos**:

- El que acabamos de citar de la citación o emplazamiento al demandado (art. 164p2).
- El anuncio de la subasta de bienes, tanto muebles como inmuebles, en *medios públicos* diferentes del BOE, salvo que lo acuerde por el Letrado de la Administración de Justicia (art. 645.1p2).

En cuanto su materialización, la sustitución del papel ha alcanzado a los edictos a publicar en los distintos boletines oficiales existentes. También aquí la Administración de Justicia ha ido un paso por detrás de la Administración en general, ámbito desde el que se ha impulsado toda esta revolución digital, y tanto del BOE como de los Boletines o Diarios de las distintas Comunidades, Ciudades Autóno-

⁷³⁷ Sobre el inciso *de forma obligada*, coincidimos con HERRERO PEREZAGUA en que “parece remitir a una exigencia legal o acuerdo judicial en este sentido” (*La representación...*, op. cit., pág. 137-138).

mas y provincias se han modificado sus regulaciones para la desaparición de sus ediciones impresas.

Respecto al Boletín Oficial del Estado, el mismo está teniendo en los últimos años un renovado protagonismo con la idea de convertirse en el gran punto de información pública y de publicación legal de todas las Administraciones, incluidas las locales. Así, la Ley 15/2014, de 16.09, *de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa*⁷³⁸, implanta el llamado *Tablón Edictal Único*⁷³⁹, con el que el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y seguridad jurídica que supone el «Boletín Oficial del Estado», puede tener conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, independientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan” (EE.MM., IV). Con ese tablón centralizado, en el procedimiento administrativo los edictos en los Boletines Oficiales autonómicos y provinciales, así como el tablón de los Ayuntamientos, han pasado a tener carácter meramente facultativo desde el pasado 1 de junio de 2015 (art. 39.5 de la todavía en vigor Ley 30/1992 y Disp. Trans. 3ª Ley 15/2014).

Medida semejante no se ha adoptado (todavía) para la parcela procesal civil, por lo que habrá que seguir acudiendo, además de al boletín de ámbito nacional, a los Boletines territoriales previstos en la LEC. Todas las Comunidades Autónomas (así como las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla) y las provincias cuentan con sus respectivos boletines. Citamos a título ilustrativo la denominación y direcciones web de las primeras⁷⁴⁰:

CC.AA. / CIUDAD AUTÓNOMA	ACRÓNIMO	WEB
Boletín oficial de la Junta de ANDALUCÍA	BOJA	http://www.juntadeandalucia.es/boja
Boletín Oficial de ARAGÓN	BOA	http://www.boa.aragon.es/
Boletín Oficial del PRINCIPADO DE ASTURIAS	BOPA	http://www.asturias.es/bopa
Boletín Oficial de las ILLES BALEARS	BOIB	http://www.caib.es/boib/
Boletín Oficial de ISLAS CANARIAS	BOC	http://www.gobiernodecanarias.org/boc
Boletín Oficial de CANTABRIA	BOC	http://boc.cantabria.es/boces/
Diario Oficial de CASTILLA-LA MANCHA	DOCM	http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/su-mario.do
Boletín Oficial de CASTILLA-LEÓN	BOCYL	http://bocyl.jcyl.es/
Diari Oficial de la GENERALITAT DE CATALUNYA	DOGC	http://www.gencat.net/dogc/
Diario Oficial de EXTREMADURA	DOE	http://doe.gobex.es/

⁷³⁸ BOE de 17.09.2014.

⁷³⁹ El acrónimo es “SITE” (Sistema Integrado del Tablón Edictal del “Boletín Oficial del Estado”); vid. Resolución de 01.06.2015, de la Agencia Estatal Boletín Oficial Del Estado, *por la que se establecen los requisitos y especificaciones técnicas del sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación regulado en la disposición adicional primera del real decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Estado”* (www.boe.es).

⁷⁴⁰ Fuente: BOE (fecha consulta 28.09.2015).

Boletín Oficial de LA RIOJA	BOR	http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881
Boletín Oficial de la Comunidad de MADRID	BOCM	http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
Boletín Oficial de la Región de MURCIA	BORM	http://www.carm.es/borm
Boletín Oficial de NAVARRA	BON	http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Boletín Oficial de País VASCO	BOPV	https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
Diari Oficial de la COMUNIDAD VALENCIANA	DOCV	http://www.docv.gva.es/portal/
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de CEUTA	BOCCE	http://www.ceuta.es/bocce/
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de MELILLA	BOME	http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=bome.jsp&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=15

Lo que la LEC no dice es en cuál de ellos hay que interesar publicación, que pudiera ser en el de lugar en que se entienda que el destinatario desarrolla su actividad o ha tenido su última residencia conocida, y no simplemente el del territorio donde tenga su sede el órgano judicial, que es lo que ocurrió en el caso de la ya citada **STC 65/1999**, de 26.04, otorgando al amparo a un mercantil domiciliada en Barcelona citada a juicio laboral por edictos por un Juzgado de Santa Cruz de Tenerife en el BOP de la provincia de esta ciudad. El alto Tribunal acogió en aquella resolución íntegramente el criterio del Fiscal:

“A su juicio, la falta de citación personal del demandado en el proceso judicial ha tenido por causa la actuación del Juzgado que, ante una primera citación presentada en el domicilio señalado en la demanda, devuelta con la frase «se ausentó», ordenó la citación por edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia. Y es aquí donde surge el defecto procesal de trascendencia constitucional, porque la citación por edictos se insertó en el «Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife» y no en el de Barcelona, que es el lugar donde se encontraba el domicilio social de la empresa demandada. Al no hacerlo así, el Juzgado no completó en la debida forma el iter procesal previsto en los arts. 53 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral y muy especialmente el art. 59 de dicha Ley, y por ende infringió el art. 24.1 C.E. Por ello, al haber impedido el órgano judicial intervenir al recurrente en el proceso y asumir su defensa, le colocó en situación de indefensión, lesionando su derecho a la tutela judicial” (Antecedentes, 6)⁷⁴¹.

⁷⁴¹ Ya citada, ‘supra’. Las palabras del TC en su fundamentación fueron las mismas: “[...] la empresa fue considerada en paradero desconocido y se procedió a su emplazamiento por edictos, que además no fueron insertados, como correspondía, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» (art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral), sino en el «Boletín Oficial» de la provincia de la sede del Juzgado el art. 24.1 C.E” (F. J. 3). No obstante, el art. 59 LPL decía solo “cédula en el «Boletín Oficial» correspondiente”, sin aclarar qué había que entender por “correspondiente”.

Tampoco regula la LEC, como apreció en su día el CGPJ, “el plazo en el que los boletines oficiales han de proceder a publicar el edicto correspondiente”⁷⁴². Quizá lo más conservador sería volver al sistema de la LEC de 1881, que ordenaba hacerlo en ambos lugares⁷⁴³.

3.2.3.- Otros

Junto al tablón de anuncios y los diferentes boletines oficiales, la LEC aún habla de los diarios o periódicos, publicación que puede resultar útil y conveniente a efectos de lograr la mayor difusión posible. Los cita en el art. 164p2, refiriéndose a aquellos uno de los que sean de *difusión nacional o provincial*, y en el art. 645.1p1 bajo la expresión de *medios privados*. También en el art. 441.1 (*de mayor circulación en la misma*), con la particularidad de que ordena acudir a dicho medio obligatoriamente (*será publicado*), lo que contradice lo dicho por la propia LEC en el aludido art. 164p2 y por el art. 236 LOPJ, que dispone:

1. La publicidad de los edictos se entenderá cumplida mediante la inserción, según proceda, en los Boletines Oficiales que señalen las leyes procesales.

Cuando expresamente así se prevea, tal publicidad y comunicaciones podrán sustituirse, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos.

2. La publicación en cualquier otro medio se podrá acordar a petición y a costa de la parte que lo solicite.

⁷⁴² Informe de 1998 al ALEC (*Estudios, informes,...*, op. cit., pág. 186).

⁷⁴³ Art. 725 LEC 1881: “Cuando no sea conocido el domicilio del demandado se hará la citación por medio de edictos que se fijarán en el lugar del juicio y en el de su última residencia, pudiendo el Juez ampliar en este caso el término de la comparecencia, sin que pueda exceder de veinte días.

También se publicarán los edictos en los periódicos oficiales, cuando el Juez lo estime necesario”.

VI

Especificidades de los actos de comunicación en diferentes ámbitos procesales

1.- COMUNICACIONES EN LA EJECUCIÓN ORDINARIA

1.1.- PROYECCIÓN SUBJETIVA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA

El proceso de ejecución constituye uno de los grandes pilares en los que descansa el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Sin él las sentencias y demás resoluciones judiciales quedarían huérfanas, a falta de su cumplimiento voluntario, de una efectividad real que pueda colmar las expectativas de quienes depositan su confianza en los Juzgados y Tribunales de Justicia para ver reconocidos sus legítimos derechos frente a quienes los perturban o no los satisfacen en su debida forma. A regular esta actividad ejecutiva de los órganos jurisdiccionales civiles para hacer realidad el mandato constitucional de hacer *ejecutar lo juzgado* del art. 117.3 CE, reiterado en el art. 2.1 LOPJ, dedica la Ley de Enjuiciamiento Civil la mayor parte del tercero de sus cuatro libros (arts. 517 a 720 del “Libro III”), constituyendo uno de los ámbitos donde más particularidades se dan en materia de actos de comunicación, por cuanto, además de estar involucradas las propias partes, ejecutante y ejecutada, también pueden verse afectadas por el devenir del proceso ejecutivo otros sujetos, como pueden ser, entre otros, los herederos y sucesores de las partes; el cónyuge no deudor de la parte ejecutada; el avalista o fiador; el titular registral; el tercer poseedor; los acreedores o titulares de derechos anteriores; los acreedores o titulares de derechos posteriores; los arrendatarios y terceros ocupantes de bienes inmuebles; otros sujetos por su vinculación con el bien embargado; etc.

Todas esas personas podrán de tener noticia, con mayor o menor repercusión procesal, de la existencia de la ejecución, unas veces con carácter meramente informativo y otras con trascendentes consecuencias en sus derechos y en las expectativas de las partes para la consecución de los suyos propios.

1.2.- ACTOS DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE EJECUTADA

1.2.1.- Notificaciones

A la hora de abordar el estudio de los actos de comunicación que han de realizarse al ejecutado hay que partir de la base de que el proceso de ejecución civil es susceptible de ser desarrollado, casi en toda su extensión, sin la presencia de aquel cuyo patrimonio –e incluso, con matices, sobre su persona– ejerce el Estado su poder de coerción. En la medida en que la prestación ha quedado incumplida y se ha impetrado por la parte ejecutante su cumplimiento, el órgano jurisdiccional desplaza la voluntad renuente de la parte ejecutada⁷⁴⁴ y despliega el haz de facultades que el ordenamiento jurídico le ha otorgado para conseguir la ejecución “forzada”, como decía CARNELUTTI⁷⁴⁵, de lo resuelto. Para ello, los más de doscientos artículos dedicados por la LEC a esta materia constituyen en cierto modo una especie de “hoja de ruta” que permite al juzgado o tribunal desarrollar el proceso de ejecución prácticamente de forma autónoma junto a la parte ejecutante.

El rol procesal de la parte ejecutada es, por tanto, secundario, hasta el punto de que en el procedimiento ejecutivo ni se le emplaza ni se le cita para que esté presente y pueda ser oído en la multitud de trámites y decisiones que se toman a lo largo del procedimiento. En general, tan solo en casos muy puntuales la LEC prevé, simplemente, que se le notifiquen determinadas y muy escasas resoluciones, así como que se le realicen determinados requerimientos encaminados a una sola finalidad: la *completa satisfacción del acreedor ejecutante* (art. 570). Esta “posición de sometimiento” (BONET NAVARRO⁷⁴⁶) no empece, sin embargo, para que pueda “formular alegaciones y peticiones de carácter defensivo”⁷⁴⁷, ni que estén soslayados de plano los principios de contradicción y de audiencia, pues para ellos se prevén los incidentes de oposición a la ejecución y las impugnaciones de actuaciones ejecutivas concretas, además de la mayor capacidad de control de oficio de

⁷⁴⁴ Como ya dijera hace ya más de un siglo CHIOVENDA, “el concepto de ejecución *forzosa* comprende la adopción de *medidas de coacción* tendentes a obrar en el ánimo del obligado para inducirlo a cumplir la ley (ejecución *indirecta o psicológica*) y o la adopción de *medidas de subrogación*, que son actividades de terceros dirigidas a conseguir el bien que debía ser prestado por el obligado, independientemente de su prestación (ejecución *directa*)” (*Principios...*, op. cit., pág. 297).

⁷⁴⁵ El maestro italiano transmitía con esa expresión de forma sutil un matiz más físico del término que “forzosa”, incidiendo más en el aspecto volitivo de la acción, pues “la ejecución forzada se resuelve, como lo dice la palabra misma, en el uso de la fuerza para hacer que las cosas marchen como quiere la ley” (CARNELUTTI, FRANCESCO: *Cómo se hace un proceso*, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, de la 2ª edición italiana Temis, Santa Fe de Bogotá (Colombia), 1994, págs. 135 y 138).

⁷⁴⁶ BONET NAVARRO, JOSÉ: “Comentarios al artículo 517”, *Proceso Civil Práctico*, Tomo VI (Artículos 517 a 570), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 11.

⁷⁴⁷ BONET NAVARRO, ídem.

los títulos otorgado por las últimas reformas al órgano judicial cuando los mismos son extrajudiciales.

Empezando por la primera de las clases de actos de comunicación, las notificaciones (art. 149.1º), la LEC prevé las siguientes:

a) *Notificación del despacho de ejecución*

La primera consecuencia del especial ‘status’ procesal que ostenta el ejecutado es la de que la decisión sobre el despacho de ejecución se produce siguiendo el principio ‘inaudita parte debitoris’. El art. 553, cuya rúbrica es, precisamente, el de “Notificación”, dispone que *el auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente⁷⁴⁸ al ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.*

Este precepto encierra en muy poco espacio varias cuestiones⁷⁴⁹. En primer lugar, no dice a qué *procurador que le represente* se está refiriendo. Entendemos que el legislador está pensando en que ha existido una previa fase declarativa a la ejecutiva, con lo que nos sitúa ante un título procesal, y que en aquella ha actuado un procurador, lo cual no sucede siempre. En la práctica no son infrecuentes los casos de procuradores que tratan de considerarse apartados del asunto una vez que se ha despachado ejecución con el pretexto de que se trata de otro procedimiento distinto y que no han sido apoderados para ello por sus patrocinados, pretensión que cabe rechazar acudiendo al art. 28.1, que extiende la representación pasiva del procurador *hasta que quede ejecutada la sentencia*, a lo que nada afecta el hecho de que a efectos estadísticos se incoe un nuevo procedimiento con un nuevo número. No opina igual MONTERO AROCA, en consideración, “no ya la naturaleza del proceso autónomo de la ejecución, cuanto que el haber sido procurador de una persona en un proceso de declaración no tiene que suponer la necesidad de seguir siéndolo en el posterior proceso de ejecución”⁷⁵⁰. Pero, insistiendo en nuestro argumento contrario, cabe también señalar que el artículo dice, tras su reforma por

⁷⁴⁸ Para el **AAP Madrid (Secc. 14) 18.07.2012** (Roj: AAP M 12319/2012), la “falta de notificación «simultánea» del decreto del secretario dando efectividad a las medidas concretas solicitadas y de la copia de la demanda ejecutiva con el auto que dicta, facultaría al ejecutado, en su caso, para denunciar la infracción mediante el escrito a que se refiere el artículo 562.1, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento civil y recabar, como medio de reparar la infracción, la notificación del decreto del secretario y el traslado de la copia de la demanda, más no para articular un motivo de oposición no previsto en los preceptos antes referidos” (F. D. 4º).

⁷⁴⁹ Además de la ya comentada en el Capítulo IV acerca de si la notificación al ejecutado sin procurador ha de practicarse mediante entrega personal o basta el sistema de remisión.

⁷⁵⁰ *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, 2ª ed., Tirant, Valencia, 2013, Cap. 5º, epígrafe 11 (versión digital TOL 3.969.052). Para el autor, “la excepción la representa el supuesto de que el demandado en el proceso de declaración hubiera gozado del beneficio de justicia gratuita, pues el procurador y el abogado nombrados inicialmente para la declaración mantienen sus funciones también en la ejecución” (idem).

Ley 13/2009, que la notificación se realizará al ejecutado o al procurador, y no “y”, como advierte ACHÓN BRUÑÉN⁷⁵¹, quedando así excluida la naturaleza personalísima de la comunicación⁷⁵² y la plena aplicación de la representación pasiva de aquel.

Por otro lado, destaca especialmente la expresión final *entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones*. ¿Quiere decir, a ‘sensu contrario’, que si no se personara el ejecutado no habría que notificarle resolución alguna ni oírle en ningún momento durante el desarrollo de la ejecución? Si la respuesta es afirmativa quedará claro que cuando la ley habla de notificar, dar traslado u oír a las partes del proceso de ejecución se está refiriendo a las “partes personadas” –en coherencia con la interpretación que nosotros hacemos del art. 150.1–, y no habrá ya debate sobre si es necesario o no poner en conocimiento de la parte ejecutada no personada trámites ejecutivos tan relevantes como los de la posibilidad de que presente a un tercero para mejorar postura en la subasta (arts. 650.4 y 670.4). Tan solo habría que dirigirse a él, llegado el caso, para notificarle aquello que expresa y puntualmente dispone la LEC, y esto se refiere únicamente a los pocos acontecimientos procesales siguientes:

1. El anuncio de la subasta, tanto mobiliaria como inmobiliaria, pero con el importante cambio legal de hacerlo por edictos y directamente a través del BOE (art. 645), como luego veremos.
2. La devolución del sobrante, si existiere (art. 672.1⁷⁵³).
3. A título incidental, la admisión a trámite de las tercerías, tanto de dominio (art. 600⁷⁵⁴) como de mejor derecho (art. 617.3⁷⁵⁵), aunque el ejecutado no tenga que ser parte necesariamente.

⁷⁵¹ *Tratado práctico de ejecución forzosa*, Sepin, Madrid, 2012, pág. 361. En parecidos términos, MARTÍNEZ SANTOS: “la notificación al procurador excluye la que se realice a la parte”: *Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución Civil*, La Ley, Madrid, 2010, pág. 51.

⁷⁵² Vid. “Despacho de ejecución: ¿notificación personal o al procurador del declarativo?, del “Departamento Jurídico de Sepin”, *SepinNET revista Enjuiciamiento civil*, n.º 68, noviembre 2006, Sepin, Madrid. En dicha publicación su “Director Técnico” (MIGUEL GUERRA PÉREZ, MIGUEL) decía que “en el Criterio de SEPIN de este mes, nos pronunciamos a favor de la validez de la notificación al procurador que actuó en la instancia, pero ponemos de relieve, en el cuadro de jurisprudencia que se acompaña, que algunas Audiencias están exigiendo la notificación personal bajo sanción de nulidad” (pág. 1).

⁷⁵³ **Art. 672.1:** *Por el Secretario judicial se dará al precio del remate el destino previsto en el apartado 1 del artículo 654, pero el remanente, si lo hubiere, se retendrá para el pago de quienes tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante. Si satisfechos estos acreedores, aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor.*

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal.

⁷⁵⁴ **Art. 600:** “Legitimación pasiva. Litisconsorcio voluntario. Intervención del ejecutado no demandado”. *La demanda de tercería se interpondrá frente al acreedor ejecutante y también frente al ejecutado cuando el bien al que se refiera haya sido por él designado.*

Lo dicho puede resultar sorprendente en comparación con la práctica judicial, en la que casi de forma mecánica se notifica o da traslado al ejecutado de numerosas decisiones pese a que el mismo no se haya personado en las actuaciones. Nos referimos, por ejemplo, a la notificación del decreto de aprobación del remate o el de adjudicación, pasando por el decreto de mejora de embargo, o a la diligencia de ordenación de traslado de la tasación de costas y de la propuesta de liquidación de intereses presentada por el acreedor, así como el posterior decreto, en su caso, aprobándolas. Todas ellas se le hacen llegar normalmente por correo certificado con acuse recibo y del transcurso del plazo para una eventual impugnación –por alguien al que se informa pero no se le oye– dependerá que aquellas adquieran o no firmeza. Aunque esté claro que si el ejecutado quisiera mostrar su disconformidad con alguna de estas resoluciones deberá adoptar una actitud activa y personarse en legal forma (excepción hecha de la denuncia por embargo sobre bienes inembargables ex art. 609⁷⁵⁶), no creemos que en la mente del legislador haya tenido cabida la figura de una parte ejecutada a la que, permaneciendo en actitud pasiva, se le tengan que notificar *las ulteriores actuaciones*.

La última cuestión es que el art. 553 omite mención alguna al lugar donde hay que practicar la notificación cuando estemos ante el supuesto de que el ejecutado no esté representado por procurador. Si la ejecución dimana de un título ejecutivo procesal, no parece que exista problema en entender que habrá que estar al domicilio que obre en las actuaciones previas del proceso declarativo o pseudo-declarativo (monitorio); si es título no procesal, será habitual que entre las cláusulas que pacten las partes esté aquella relativa a las comunicaciones que tengan que realizarse entre ellas, por lo que, en principio, habrá que estar al propio título ejecutivo (v. gr., póliza de préstamo), al que sí remite el art. 582 a la hora de practicar el requerimiento de pago que, salvo previa reclamación notarial, establece de forma preceptiva el art. 581.

Llegado el caso, la doctrina mayoritaria se pronuncia en sentido afirmativo sobre la posibilidad de notificar el despacho de ejecución por edictos, pero con el mismo “con carácter supletorio y excepcional”⁷⁵⁷ que hace que ningún cambio se

Aunque no se haya dirigido la demanda de tercera frente al ejecutado, podrá éste intervenir en el procedimiento con los mismos derechos procesales que las partes de la tercera, a cuyo fin se le notificará en todo caso la admisión a trámite de la demanda para que pueda tener la intervención que a su derecho convenga.

⁷⁵⁵ **Art. 617.3:** *Aún cuando no fuere demandado, se notificará en todo caso al ejecutado la admisión a trámite de la demanda, a fin de que pueda realizar la intervención que a su derecho convenga.*

⁷⁵⁶ **Art. 609:** “Efectos de la traba sobre bienes inembargables.” *El embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho.*

El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada.

⁷⁵⁷ Vid. VV.AA.: “Encuesta jurídica: ¿Es posible notificar el auto despachando ejecución por edictos?”, *Sepin Proceso Civil* n.º 1, abril 2009 (SP/DOCT/389), Sepin, Madrid; SALÓM ESCRIVÁ, JUAN-SALVADOR: “La oposición por defectos procesales a la ejecución de títulos extrajudiciales; motivos, sustanciación y efectos”, *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio*

produzca en sede de ejecución ordinaria sobre el carácter subsidiario de la comunicación edictal⁷⁵⁸.

b) *La previa notificación del saldo deudor*

En caso de ejecución dineraria por *saldo de operaciones* (v. gr., derivado de un contrato de crédito en cuenta corriente) o de ejecución de préstamos con *intereses variables*, y como consecuencia de la necesaria liquidez de la cantidad exigible (art. 575.1), la LEC exige que el deudor haya aceptado en el contrato que la cantidad exigible será la que unilateralmente liquide el acreedor en los términos que en el propio título habrán debido convenir (art. 572.2). Además, para poder despachar ejecución la ley obliga al acreedor a efectuar dos tareas pre-procesales a modo de garantía: primera, la de obtener el *documento fehaciente* –entendido de forma unánime “fehaciente” como sinónimo de público o notarial, recibiendo comúnmente el nombre de “acta de liquidación de deuda” o “acta de fijación del saldo”– por el que acredite que la liquidación que presente se ha hecho, efectivamente, *en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo* (art. 573.1.2º); segunda, la de notificar previamente la *cantidad exigible al deudor y al fiador* (art. 573.1.3º). Ambos documentos habrán de acompañarse a la demanda (arts. 550.1.4º y 573.1), en la cual, si se trata de un préstamo o crédito con interés variable o con distinta moneda, tendrá también que *expresar las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que pide el despacho de ejecución* (art. 574.1).

Si la notificación del saldo no se ha efectuado, la consecuencia ha de ser la denegación del despacho de la ejecución. En cambio, si se ha realizado pero no se aporta el *documento* que así lo acredite, cabe plantearse si se trata de un defecto subsanable o no. Los principios ‘pro actione’ y ‘favor creditoris’ apoyarían la respuesta afirmativa, pero las opiniones son, aquí también, dispares. Siendo lo normal que sí se aporte el documento, la controversia se suscita en torno al grado de efectividad que en dicha comunicación se ha de exigir al acreedor que pretenda instar la ejecución, tanto ordinaria como hipotecaria. En infinidad de ocasiones los juzgados se encuentran con demandas ejecutivas en la que aquel aporta un burofax del servicio de postal, ya sea Correos o cada día con mayor frecuencia de otros operadores privados, señalándolo como el documento a que se refiere el art. 573.1.3º, entendiéndolo que con el mismo da cumplimiento a la notificación exigida

(Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, pág. 228.

⁷⁵⁸ Vid. **STC 29/1997**, de 24.02 (BOE de 01.04.1997): A petición de la ejecutante se acordó la comunicación edictal después de resultar negativo el requerimiento de pago y citación de remate en el domicilio señalado en la póliza de crédito, “donde resultó desconocida [la recurrente en amparo] por tener su residencia habitual en la misma calle, pero en diferente edificio [...]”. Sin embargo hubiera bastado con una atenta lectura de la documentación acompañada a la demanda para advertir que la demandada era localizable sin esfuerzo, pues en las hojas complementarias de la póliza (folio 6) figura que doña Alfonsa García García trabajaba en el «Bar Bini», situado en la calle Santany, núm. 11 de Palma de Mallorca”. [...] se actuó con ligereza, volatilizandando así el derecho del litigante a obtener una tutela judicial efectiva y no meramente virtual” (F. J. 3º).

por dicho precepto e independientemente de si se ha entregado al deudor, si se le ha dejado “aviso” o, en el peor de los casos, si no ha sido entregado por ser el destinatario desconocido o porque la dirección es incorrecta.

Para resolver la cuestión hay que tener en cuenta el detalle de que el precepto no regula las formalidades de la notificación. A diferencia del apartado 2º, que habla del documento *fehaciente* de liquidación de la deuda, el apartado 3º omite el adjetivo y no exige que se haya notificado “fehacientemente” la cantidad exigible, sino simplemente que se aporte *el documento que acredite haberse notificado*. Para MONTERO AROCA, “este documento no tiene que ser fehaciente, es decir, no tiene que ser público, aunque pueda serlo”⁷⁵⁹. En puridad, la fehaciencia no debería referirse al documento por el que se instrumente la práctica del acto de comunicación (o sea, la notificación) cuyo objeto es dar a conocer la *cantidad exigible* que conste en el acta notarial, sino al hecho de que haya llegado a conocimiento del deudor y, en su caso, del fiador, para lo cual podrá servir de prueba la expresión de sus firmas en un documento que, en efecto, no tiene por qué ser notarial, como ocurre con el acuse de recibo de la carta certificada o del burofax. Si entendemos que estamos ante una mera formalidad, el requisito estará cumplido con la remisión al domicilio pactado, siendo indiferente su resultado. Pero si acudimos a la razón de ser de aquella comunicación –entre otras, dar a conocer las intenciones del acreedor de cara a la inminente reclamación judicial de la deuda⁷⁶⁰– será necesario un plus de efectividad. A eso contribuye la propia redacción del precepto, que habla de *haberse notificado* y no de haberse “intentado” la notificación. Por tanto, habría que concluir que si los avisos postales no son atendidos por el deudor, tendría que reiterarse la remisión postal o incluso acudir a la vía notarial. Dicho de otro modo, no creemos necesario que la notificación tenga que verificarse directamente de forma personal y por notario (a diferencia de la acreditación de la correcta liquidación del saldo ex aptdo. 2º o del requerimiento de pago extrajudicial ex arts. 581.2 y 686.2), pero sí que se intente la comunicación real y efectiva con la parte que habrá de ser la ejecutada en el proceso judicial posterior.

De ese parecer fue el **AAP Madrid (Secc. 10) 27.06.2012**⁷⁶¹, que aplicó a rajatabla el art. 573.1.3º y confirmó la denegación del despacho de ejecución acordada por el juzgado ante la falta de recepción por los deudores de la notificación del saldo:

“Ello conlleva la necesidad no de agotar el aspecto formal el requerimiento o el intento de este, sino la realidad y función que este tiene como objeto y no es otro que lo que la propia ley manifiesta de la necesidad de haber notificado al deudor y fia-

⁷⁵⁹ MONTERO AROCA: *Las ejecuciones hipotecarias en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, op. cit. pág. 550.

⁷⁶⁰ Para MARTÍNEZ SANTOS, ALBERTO, la notificación del saldo “no tiene más objeto que el de advertir al deudor hipotecario de que ante el incumplimiento del contrato y de acuerdo con las propias previsiones de su contenido, el acreedor ha optado por dar por vencido anticipadamente el crédito y proceder a la realización del inmueble que garantiza la deuda” (*Sobre la ejecución hipotecaria ¿Puede evitarse la ruina del ejecutado?*, Ed. Foro Jurídico, Valencia, 2013, pág. 138).

⁷⁶¹ Roj: AAP M 8697/2012.

dor si lo hubiere la cantidad exigida, circunstancia ésta que **no se** agota con un envío y una no recepción ya sea por un aviso sin contraprestación efectiva y recogida o una no localización y declaración de desconocimiento de todo lo respectivo a este, existiendo numerosas vías al efecto para cumplimentar esta notificación que no se agota con lo manifestado con anterioridad en un **plano absolutamente formal pero no ni legal, ni efectivo**, de lo que debe constituir un requerimiento que es un acto de envío y recepción con pleno y absoluto conocimiento del contenido de lo que se envía, y que con lo manifestado por el recurrente no se cumplen las presentes actuaciones” (F. J.º 3º).

No obstante, la tendencia mayoritaria en la jurisprudencia menor es la que incide sobre el comportamiento omisivo y poco diligente del deudor que no atiende los avisos postales que se le dejan a instancias del acreedor en el domicilio. Lo resumen muy bien el **AAP Jaén 14.03.2011** (Secc. 2)⁷⁶²:

“Esta notificación, por su propia finalidad, tiene carácter recepticio, lo que supone la necesidad de que llegue a conocimiento del deudor. No estamos ante un mero trámite formal, sino ante el presupuesto indispensable para que el deudor pueda elegir entre las diversas posibilidades a su alcance y ejercitar su derecho de defensa. Cuestión distinta es que, al no concretar la Ley una determinada forma o medio de comunicación, sea admisible cualesquiera que permita dejar constancia de su realización y de la recepción por el deudor del documento con el contenido que se señala.

Ahora bien, como mantienen de forma unánime las Audiencias Provinciales, la naturaleza recepticia de este acto de comunicación no puede interpretarse como un obstáculo que prive de fuerza ejecutiva al título y obligue al acreedor a acudir al juicio declarativo que corresponda en aquellos casos en que, habiendo desplegado toda la diligencia exigible, la falta de recepción del documento obedezca a la conducta del deudor, ya sea por una **deliberada renuencia a recibir la notificación**, ya a una actuación que, aunque no encaminada a este objetivo, determine el mismo resultado por negligencia, como pudiera ser el cambio de domicilio no comunicado al acreedor, bastando por ello con que el Juzgador tenga el racional convencimiento de que el demandado supo, como aquí sucede, de la existencia de la notificación” (F. J. 1º).

Más explícito es el **AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª) 14.07.2011**⁷⁶³, que consideró suficiente el aviso dejado en el buzón del ejecutado:

“[...] la comunicación efectuada por la entidad bancaria cumplió los requisitos que para la comunicación de la cantidad exigible por liquidación del saldo se exigen por el art. 575,1, 3º de la LEC, habiéndose dejado aviso en el buzón del requerido [que no fue recogido (F. J. 1º)] en el domicilio pactado, como el propio ejecutado acepta” (F. J. 2º).

E interesante es la aportación del **AAP Madrid (Secc. 14) 20.01.2010**⁷⁶⁴, que en otro caso de supuesta falta de notificación del saldo deudor aplicó la que denomina:

⁷⁶² Roj: AAP J 113/2011.

⁷⁶³ Roj: AAP GC 1717/2011.

“[...] **doctrina de la autorresponsabilidad**, en virtud de la cual es equivalente a la notificación positiva el intento de notificación en un domicilio designado a efectos de notificaciones, cuando la recepción no se haya producido por causas ajenas a la voluntad de la parte que remite la misiva y sí imputables a la pasividad del destinatario, en este caso, por la no comunicación del nuevo o sucesivos nuevos domicilios” (F. J. 2º).

En la misma línea se sitúan el **AAP Almería (Secc. 1ª) 02.03.2011**⁷⁶⁵, el **AAP Álava (Secc. 1ª) 21.09.2010**⁷⁶⁶ o el **AAP Tarragona (Secc. 3ª) 30.07.2009**⁷⁶⁷ estos dos últimos autos relativos a ejecuciones hipotecarias, pero igualmente aplicables a la ordinaria en lo que a la notificación del saldo deudor se refiere.

c) *Notificación del señalamiento de subasta (remisión)*

Dada su extensión e importancia, dedicaremos a la subasta de bienes un epígrafe propio (infra, aptdo. 1.8).

⁷⁶⁴ Roj: AAP M 976/2010.

⁷⁶⁵ Roj: AAP AL 96/2011: “Ciertamente que la referida notificación no consta que llegara al destinatario, pero no es menos cierto que ello fue debido a causa imputable al propio deudor que, o se ausentó del domicilio designado en la escritura pública de hipoteca a efectos de notificaciones sin poner en conocimiento del ejecutante dicha circunstancia o dejó de recoger el acuse de recibo del telegrama que le fue remitido, teniendo en cuenta que en el telegrama se indica expresamente “con acuse de recibo” lo que refuerza la tesis de que se dejó nota a la recurrente para que fuera a retirar la comunicación de correos. En definitiva, el acreedor cumplió con a carga que la Ley le impone dirigiendo la comunicación al domicilio designado en la póliza, acreditando además que la información llegó a su destino como se acredita con la documental aportada, en la que consta que si bien el telegrama no fue entrega a su destinatario, se dejó aviso para que pasasen por la Oficina de Telégrafos a recogerlo, por tanto, tuvo la posibilidad de conocer la deuda y las consecuencias futuras de su impago caso de no abonarla, sin que pueda serle exigible al acreedor que acredite a toda costa que la notificación fue recibida personalmente por el deudor, pues si este, como ocurre en el presente caso, no acude a la oficina de correos a recoger el telegrama, ello es una cuestión no oponible al acreedor ya que en caso contrario, quedará en manos del obligado evitar la ejecución” (F. J. 2º).

⁷⁶⁶ Auto n.º 109/2010, Roj: AAP VI 83/2010: “No hay, por lo tanto, ni falta de subsanación de la notificación ni ésta ha dejado de realizarse, aunque no haya llegado a su destinatario. Este indicó cuál era el lugar donde debía ser notificado. Si lo abandona, tiene la facultad de modificar dicho domicilio. Por lo tanto es su obligación, pues lo convino con la otra parte, facilitar la recepción de las comunicaciones que procedan en tal lugar, o indicar dónde pueden realizarse si va a cambiarse” (F. J. 1º).

⁷⁶⁷ Rec. 289/09, Roj: AAP T 906/2009: “Los cambios de domicilio a que hace referencia el apartado anterior se harán constar en acta notarial y, en el Registro correspondiente, por nota al margen de la inscripción de la hipoteca”, dado que en el presente caso la documental aportada con el escrito de demanda permite afirmar que la ahora apelante dirigió sendos telegramas al domicilio común que de los aquí demandados figuraba en la escritura de hipoteca (documentos nº 1, 5 y 7), sin que conste cambio de domicilio respecto al expresamente pactado, debe entenderse aun cuando según el servicio de correos no fueron entregados, dejando el correspondiente aviso, pues consta “SIN ENTREGAR, NO RECLAMADO” (documentos nº 4 y 6), que la actora efectivamente ha desarrollado la diligencia que le era exigible en su intento de notificar a los deudores y, en definitiva, concluirse que como quiera que si la notificación del saldo deudor no se ha practicado no puede ser imputado a la entidad ejecutante” (F. J.º 1).

1.2.2.- Requerimientos

a) *Requerimiento de pago*

Este acto de comunicación se prevé en caso de ejecución dineraria no fundada en resoluciones procesales o arbitrales (art. 581), ya que, si lo son, *no será necesario* (art. 580). El monto a satisfacer por el ejecutado, siempre que lo haga en el acto mismo del requerimiento, será el de *la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda* (art. 581.1); si no lo hiciese, la LEC ordena el embargo de bienes por aquellas sumas y, además, por la cantidad presupuestada provisionalmente para intereses y costas, esto es, *la cantidad por la que se haya despachado ejecución y las costas de éstas* (art. 581.1 'in fine').

En la medida en que, inmediatamente que se hace el requerimiento hay que proceder al embargo de bienes *si no pagase en el acto*, estamos ante una actuación procesal de carácter compuesto o complejo (acto de comunicación + acto de ejecución) que precisa la intervención de la Comisión Judicial. Por esta razón no tiene sentido que el requerimiento lo realice en solitario el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial (o, en su caso, el procurador que así lo pidiera), pues si hay que adoptar la medida ejecutiva de embargo, tendrá que hacerlo en unidad de acto junto al funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y constituirse ambos en Comisión..

En cuanto al lugar donde habrá que practicar el requerimiento de pago, si bien en principio el requerimiento de pago *se efectuará en el domicilio que figure en el título ejecutivo*, también cabe que el ejecutante solicite hacerlo, *además, en cualquier lugar, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado* (art. 582). Por su laxitud, sería de alabar que el legislador hiciese de este caso específico el supuesto de aplicación general, sin que tuviera que mediar tampoco petición de parte.

b) *Requerimiento de manifestación de bienes*

Establece el art. 589.1 que, *salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionada-mente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.*

Se trata de otro acto de comunicación importante a practicar con el ejecutado, aunque hay que decir que ya no resulta tan esencial para el buen fin de la ejecución. El avance de los medios informáticos ha hecho que hoy día los juzgados puedan obtener por sí la información patrimonial de aquel mediante el acceso telemático a los datos que obren en poder de organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Catastro o la Dirección General de Tráfico. Incluso ya no es necesario que el ejecutado infor-

me de sus cuentas bancarias, ya que puede ordenarse, también de forma telemática, la retención genérica e ingreso automático de los saldos existentes todas las cuentas que tenga abiertas a su nombre.

Aun así, requerir al ejecutado para que manifieste bienes y derechos sigue siendo de utilidad, pues puede proporcionar información complementaria a la existente con carácter oficial o público, como la existencia de bienes inmuebles no inscritos propiedad del ejecutado pero no inscritos en el Registro de la Propiedad (aunque de esto el Catastro, siempre que esté catastrado el bien, ya habrá podría arrojar algún indicio), o bienes muebles como joyas y otros objetos de valor que por permanecer en una esfera más íntima del mismo no hayan trascendido al conocimiento público.

La conveniencia de este requerimiento también se justifica por el componente psicológico que conlleva. El ejecutado podría sentirse compelido de forma más intensa a cumplir con la prestación debida si se le requiere directa y personalmente por un funcionario judicial (o, no sabemos si en menor medida, por procurador), tanto más si se le apercibe de las multas coercitivas que puede imponerle el Letrado de la Administración de Justicia (art. 589.2⁷⁶⁸), pudiendo incluso llegar a incurrir en un delito de desobediencia grave (art. 589.3, en relación con el art. 556 del Código Penal⁷⁶⁹).

La LEC no establece un plazo para cumplir con el requerimiento ni el modo de hacerlo, siendo habitual que se le otorgue un plazo de diez días y permitiéndosele que lo verifique bien por escrito dirigido al órgano judicial, bien por comparecencia personal ante el mismo sin necesidad de personación. Cabe igualmente la posibilidad de que la respuesta la dé el ejecutado en el mismo acto de practicar el requerimiento y que la misma quede consignada en la diligencia como se hace con cualquier otro tipo de requerimiento y prevé el art. 152.5, aunque el carácter breve o *sucinto* con que está pensado este trámite no compagina del todo con la profusión de datos que pretende recabar el art. 589.1. Por desgracia, en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos años, la respuesta a consignar es bien sencilla: “no tiene bienes”.

⁷⁶⁸ **Art. 589.2:** *El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.*

Art. 589.3: *El Secretario judicial podrá también, mediante decreto, imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que se refiere el apartado anterior. [...].*

⁷⁶⁹ **Art. 556 CP:** *Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550 [*], resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.*

**Art. 550 CP: Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.*

Por último, si el ejecutado está personado autos con procurador, entendemos que cabe practicar el requerimiento a través del mismo por así permitirlo el art. 153⁷⁷⁰, incluso hasta el punto de poder llegar a imponer multas coercitivas y sin perjuicio de la derivación de responsabilidad a dicho profesional si se acredita que el mismo no trasladó a su poderdante el requerimiento judicial. No sucederá lo mismo, sin embargo, si hay que llegar al extremo de deducir testimonio por la desobediencia del ejecutado (el precepto dice con error palmario *cuando menos* por desobediencia grave). En este caso, por las exigencias propias de la jurisdicción penal y del principio de intervención mínima, el elemento subjetivo del tipo de desobediencia grave solo debe apreciarse una vez el ejecutado haya sido requerido de forma personalísima, se le hayan impuesto multas coercitivas y haya mostrado su resistencia expresa o tácita a cumplir con el mandato.

c) **Requerimiento de aportación de títulos de propiedad**

De conformidad con lo previstos en el art. 663.2, el Letrado de la Administración de Justicia podrá, de oficio o a instancia de parte, *requerir al ejecutado para que en el plazo de diez días presente los títulos de propiedad de que disponga, si el bien está inscrito en el Registro*. Se trata de un requerimiento en claro declive en la actualidad pues, aparte del factor psicológico que pueda ejercer para el ejecutado verse despojado simbólicamente del bien embargado, representado en esos títulos o escrituras, la titularidad ya constará normalmente en la certificación de cargas, no siendo tampoco necesarios para la eventual transmisión judicial del dominio. Lo extraño es que, como entiende PEDRÁZ PENALVA⁷⁷¹, o ACHÓN BRUÑEN⁷⁷², cuando realmente cobra sentido conseguir el título de propiedad es en el caso de que el bien no esté inscrito en el Registro, es decir, la situación inversa a la que prevé la disposición.

1.2.3.- Citaciones y emplazamientos

Estas dos clases de actos de comunicación solo están previstos en la ejecución forzosa respecto del ejecutado en caso de que se interponga una tercería, tanto de dominio como de mejor derecho, por lo que tienen carácter incidental.

En la tercería de dominio la intervención de la parte ejecutada dependerá de si el bien objeto de la misma *ha sido por él designado* (art. 600p1). En caso afirmativo, habrá de ser demandado junto al acreedor ejecutante y el incidente se sustanciará por los trámites del juicio verbal (art. 599) con la particularidad de que se resolverá, no por sentencia, sino por auto (art 603). En caso negativo, al ejecutado *se le notificará en todo caso la admisión a trámite de la demanda* (art. 600p3). Resaltamos el inciso *en todo caso*, que es el que parece dar a entender que dicho acto

⁷⁷⁰ En el mismo sentido afirmativo, TORIBIOS FUENTES, FERNANDO: *Averiguación de bienes en la ejecución civil. Manual para la práctica de la investigación patrimonial del deudor*, La Ley, Madrid, 2013, pág. 464.

⁷⁷¹ PEDRÁZ PENALVA: "Comentario al art. 663", *Proceso Civil Práctico*, Tomo VIII (Artículos 634 a 747), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 216.

⁷⁷² ACHÓN BRUÑEN: *Tratado práctico...*, op. cit., pregunta n.º 735, pág.709.

de comunicación habrá de practicarse con aquella parte aunque no esté persona en el proceso.

En cuanto a la tercería de mejor derecho el régimen es similar. Empleando el cauce del juicio verbal híbrido ya generalizado por Ley 42/2015 y que antes solo se seguía en los procedimientos de Familia del Libro IV (verbal con contestación a la demanda por escrito), el ejecutado habrá de ser emplazado para contestar a la demanda de tercería de mejor derecho *cuando el crédito cuya preferencia alegue el tercerista no conste en un título ejecutivo* (art. 617.2); en caso de que sí constara, *se notificará en todo caso al ejecutado la admisión a trámite de la demanda* (art. 617.3).

1.3.- NOTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CÓNYUGE NO DEUDOR

En el supuesto de embargo de bienes gananciales en proceso de ejecución contra uno de los cónyuges, el art. 541.2 obliga a notificar dicha medida ejecutiva al cónyuge no deudor, *dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución para que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución*, amparándose en las mismas causas que corresponden al cónyuge ejecutado y, *además, en que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución* (ídem). La exigencia de practicar esta notificación estaba presente ya desde 1981 en el art. 1373 del Código Civil⁷⁷³ y su omisión puede ser sancionada con la nulidad de actuaciones, excepto cuando el cónyuge no deudor hubiera tenido conocimiento “extraprocesalmente de la existencia del embargo ganancial”, según afirmó la **STC 56/2001**, de 26.02⁷⁷⁴.

Echamos en falta que a dicho cónyuge no se le tenga que dar traslado del decreto de medidas ejecutivas concretas del art. 553.3, sobre todo cuando sea justo en dicha resolución donde se adopte tal medida tras despacharse ejecución. Dicha omisión parece, no obstante, un simple descuido del legislador, quien al elaborar la Ley 13/2009 y modificar aquel segundo precepto no adaptó el primero a la

⁷⁷³ **Art. 1373p1 CC** (tras su reforma por Ley 11/1981, de 13.05): *Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge, y este podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquella.*

⁷⁷⁴ BOE de 30.03.2001. En particular, el tribunal dijo: “El examen de las actuaciones pone de manifiesto, no obstante, que la recurrente conoció extraprocesalmente la existencia del embargo del bien ganancial. [...] la escritura de capitulaciones matrimoniales, otorgada el 30 de marzo de 1995, por la que se adjudicó la vivienda familiar a la esposa, no pudo ser inscrita en el Registro de la Propiedad por la existencia de la anotación del embargo preventivo en su día acordado. Esta afirmación revela que la recurrente tuvo conocimiento del embargo del piso ganancial acordado en el juicio de menor cuantía del que trae causa el amparo y, en consecuencia, tuvo oportunidad de hacer uso de la facultad que le reconoce el art. 1373 del Código Civil o, en su caso, y habida cuenta de que todavía no se había producido la subasta (ni siquiera se había dictado entonces la Sentencia), haber adoptado las medidas que hubiera considerado más conveniente para liberar el inmueble de la traba. Por ello, pese a la falta de notificación del embargo, la recurrente no sufrió indefensión material pues tuvo noticia extraprocesal de la existencia del mismo” (F. J. 4).

nueva regulación por la que se delimitaban en dos resoluciones separadas (auto y decreto) las competencias del Letrado de la Administración de Justicia y del Juez o Magistrado a la hora de despachar ejecución.

Por otro lado, en caso de que se pretenda anotar registralmente el embargo como medida de garantía (art. 629), hay que tener en cuenta que el art. 144.1 RH obliga a hacer constar –entendemos que en el correspondiente mandamiento– *que la demanda ha sido dirigida contra los dos cónyuges o que estando demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado al otro el embargo*; además, será obligatorio incluir los datos identificativos concretos de dicho cónyuge, según exigió la **RDGRN 05.10.2001**⁷⁷⁵.

1.4.- COMUNICACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

En el proceso de ejecución es imprescindible la colaboración de los Registradores de la Propiedad. Sin ellos no se podrían llevar a cabo las actuaciones establecidas en la ley tendentes a garantizar la efectividad del derecho del ejecutante y a dar al proceso la publicidad frente a terceros que en determinados supuestos establece la ley, sin olvidar que, llegado el caso, será necesaria su intervención para alcanzar la eficacia completa en la constitución, modificación o extinción de situaciones jurídicas (cfr. art. 5.1 LEC).

Los actos de comunicación del órgano judicial con los Registradores que prevé la ley son los *mandamientos*, tipificados como *clase de actos de comunicación* por el art. 149.5º, y que, recordemos, sirven *para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia*. De entre los diferentes mandamientos que en sede de ejecución forzosa se remiten al Registro de la Propiedad destacan notablemente el de anotación de embargo (art. 629), el de certificación de dominio y cargas (arts. 656 y 688) y el de cancelación (art. 674p2).

a) ***Mandamiento de anotación preventiva de embargo***. Acordado el embargo de bienes –ya por el Letrado de la Administración de Justicia, ya por la Comisión judicial (art. 587.1)–, sea de inmuebles o de *otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral*, como los vehículos a motor, la LEC prevé como garantía la anotación del mismo en el Registro de la Propiedad o *anotación de equivalente eficacia en el registro que corresponda* (siguiendo el ejemplo, el Registro de Bienes Muebles). Con esta anotación se destruye la buena fe del tercero hipotecario y, en caso de transmisión de los bienes, el mismo no podrá oponerse a la even-

⁷⁷⁵ BOE de 11.12.2001. A colación de la anotación de embargo trabado por la Seguridad Social sobre una finca de carácter ganancial la Dirección General estimó que “el art. 144.1 RH no persigue la defensa de los derechos del cónyuge del deudor cualquiera que sea este el momento del embargo, sino los derechos del que figure como tal en el Registro de la Propiedad, no siendo, por tanto, suficiente la fórmula genérica de que se ha notificado al cónyuge del deudor sin señalar quién sea este, ya que el cónyuge notificado puede ser distinto del titular registral” (F. J. 2).

tual cancelación de su dominio tras la realización o adjudicación judicial de aquellos.

Las características específicas de esta clase de mandamiento se establecen en el artículo 629 y en las normas hipotecarias que lo completan:

- Requiere instancia de parte, en concreto de la parte ejecutante, debiendo entenderse esto como norma especial frente a la general del art. 587.1⁷⁷⁶, que ordena al Letrado de la Administración de Justicia a adoptar de forma inmediata dichas *medidas de garantía o publicidad* tras decretarse la traba por él mismo o después de reseñarse la descripción del bien en el acta de la diligencia de embargo.
- Ha de anticiparse *por fax, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 162 de esta Ley*. Es lo que dice el art. 629, pero hay que ponerlo en relación con la Ley 42/2015, como ya comentamos en su momento, y tener presente que, aunque no lo haya reformado, a partir del 01.01.2016 esa comunicación habrá de realizarse obligatoriamente por medios telemáticos.
- Se ha de remitir al Registro *el mismo día de su expedición*, lo que quiere decir que no tiene por qué hacerse, por recomendable que sea, el mismo día en que se acuerda la traba⁷⁷⁷.
- La recepción del fax o equivalente determina el rango registral de la anotación siempre que se presente *el documento original en la forma prevista por la legislación hipotecaria* y en el plazo de diez días hábiles (art. 248.4p2 LH⁷⁷⁸).
- Se trata de una anotación que se practica al margen de la correspondiente inscripción de dominio del bien trabado, señalándose la misma con letras y *guardándose un orden rigurosamente alfabético* (art. 43 RH).
- La anotación, como cualquier otra anotación preventiva, está sujeta al plazo de caducidad de cuatro años de haberse practicado (art. 86 LH), pero es susceptible de ser prorrogada por sucesivos períodos por el mismo plazo, *siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea*

⁷⁷⁶ Atajando de raíz una controversia doctrinal sobre si la anotación de embargo tenía o no naturaleza constitutiva, el art. 587.1 excluye tal consideración al fijar el *momento del embargo* en aquel en que *se decreta por el Secretario judicial o se reseña la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba*.

⁷⁷⁷ Si la traba ha sido acordada por la Comisión judicial, el Letrado de la Administración de Justicia no podrá dictar resolución acordando la anotación registral del mismo mientras no reciba cumplimentada la diligencia de embargo correspondiente.

⁷⁷⁸ **Art. 248.4 LH:** *Los documentos presentados por telefax, cuando la Ley o el Reglamento admitan este medio de presentación, se asentarán en el Diario de conformidad con la regla general, a excepción de los que se reciban fuera de las horas de oficina que se asentarán en el día hábil siguiente.*

El asiento de presentación caducará si, en el plazo de diez días hábiles siguientes, no se presenta en el Registro el título original o su copia autorizada.

presentado antes de que caduque el asiento (art. 86 LH⁷⁷⁹), lo que en la práctica se acuerda por diligencia de ordenación.

- Deberá indicarse en el mandamiento de anotación del embargo, *la causa que haya dado lugar a ello, y el importe de la obligación que los hubiere originado* (art. 72 LH; cfr. art. 613.3 LEC).
- Si el bien no estuviere inscrito o inmatriculado a favor del ejecutado, podrá pedirse anotación preventiva de suspensión de aquella anotación de embargo (art. 629.2 y art. 205 RH).

b) **Mandamiento de certificación de dominio y cargas.** Hito básico en el procedimiento de apremio de bienes inmuebles (o de muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar) a través de la modalidad de subasta judicial es la obtención de la certificación registral por la que el órgano judicial conozca la titularidad registral del bien trabado en la ejecución y de las cargas que pesen sobre el mismo. A tal fin el artículo 656.1, bajo la rúbrica “Certificación de dominio y cargas”, describe el contenido del mandamiento y, a su vez, de la propia certificación, que el Letrado de la Administración de Justicia deberá librar al Registrador, a fin de que este haga constar en dicho documento los siguientes extremos:

1.º La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado.

2.º Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embargado, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.

Como forma de publicidad de cara a terceros, el art. 656.2 exige del Registrador que *haga constar por nota marginal la expedición de la certificación a que se refiere el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera*. La fecha de ese asiento determinará el diferente tratamiento que van a recibir los titulares de derechos o créditos que los inscriban con posterioridad a la anotación, tal y como veremos al estudiar el art. 659.

c) **Mandamiento de cancelación de cargas.** Producida la enajenación judicial del bien objeto de embargo a través de los diferentes procedimientos que al efecto prevé la LEC (entrega directa; convenio de realización; enajenación por persona o entidad especializada; subasta judicial), el adjudicatario podrá recabar del Letrado de la Administración de Justicia la expedición del testimonio del título de transmisión con el que se producirá la tradición simbólica exigida por el art.

⁷⁷⁹ **Art. 86 LH:** *Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos.*

La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado.

609 CC y le permita inscribir su dominio. Tras la Ley 13/2009 ese título es el testimonio *comprendido de la resolución [decreto] de aprobación del remate, de la adjudicación al acreedor o de la transmisión por convenio de realización o por persona o entidad especializada* (art. 673 con la Ley 19/2015, antes art. 674.1)⁷⁸⁰.

Lo que la ley no dice es que para que el testimonio sea título *bastante* para inscribir el dominio, por así exigirlo las normas hipotecarias, deberá ir necesariamente acompañado del llamado mandamiento “de cancelación de cargas” que se regula a caballo entre el art. 674 de la propia LEC y los arts. 132 y 133 LH. En efecto, también a instancia del adjudicatario el Letrado de la Administración de Justicia expedirá mandamiento *de cancelación de la anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o la adjudicación*, así como, si existieren, *de todas las inscripciones y anotaciones posteriores* (art. 674p2). Uno (el testimonio) y otro (el mandamiento) podrán constar en un solo documento si su contenido se ajusta a lo exigido por aquellos dos preceptos de la Ley Hipotecaria (art. 133 LH). Como novedad de la Ley 19/2015, *a instancia de parte, el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se remitirán electrónicamente al Registro o Registros de la Propiedad correspondientes* (art. 674p4). La mención a la petición de parte no es en relación con el medio, que habrá de ser en todo caso telemático, sino a la inscripción del dominio, que queda a su voluntad.

1.5.- COMUNICACIONES CON EL TERCER POSEEDOR

El art. 662⁷⁸¹ trata de ofrecer a una respuesta legal al supuesto de que el bien embargado haya sido transmitido a un tercero una vez anotada la traba y sin que el mismo se haya subrogado en la titularidad de la deuda. Conocido tradicionalmente con la engañosa definición de “tercer poseedor”⁷⁸², que carece de una defi-

⁷⁸⁰ Creemos que no hace falta aclarar que este testimonio no constituye un acto de comunicación, ni que el Letrado de la Administración de Justicia “manda” al Registrador que inscriba el dominio a favor del adjudicatario. Será este último quien, gracias a ese documento público, interese aquella inscripción, previo abono del impuesto (por lo general, ITP) y aranceles registrales correspondientes.

⁷⁸¹ **Art. 662:** “Tercer poseedor”. 1. *Si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercer poseedor, este, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Oficina judicial, lo que se acordará por el Secretario judicial sin paralizar el curso del procedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores.*

2. *Se considerará, asimismo, tercer poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado anterior, hubiere adquirido solamente el usufructo o dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo.*

3. *En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o a la adjudicación al acreedor, el tercer poseedor podrá liberar el bien satisfaciendo lo que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien, y siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 613 de esta Ley.*

⁷⁸² Vid. **SAP Cádiz (Secc. 1ª) 22.04.2000 (Roj: SAP CA 1479/2000)**: “Ciertamente existe una polémica doctrinal en orden a la [sic] expresión tercer poseedor utilizada por dicho precepto, ya que el Código Civil [sic] ni la legislación hipotecaria contiene un precepto referente al concepto de tercer poseedor, al que sin embargo sí se refieren en diferentes preceptos en relación con el bien gravado

nición legal, se trata en realidad de un auténtico propietario sobre quien, por haber adquirido un bien gravado, se cierne el peligro de ver cancelada su inscripción de dominio por la realización del mismo, y de ahí que tenga el legítimo interés de participar en el proceso ejecutivo. La LEC, haciendo suya la antigua redacción del art. 134 LH, extiende la consideración de tercer poseedor a quien *hubiere adquirido solamente el usufructo o el dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo* (art. 662.2). Tratándose, pues, de derechos reales, no podrán tener aquella consideración los arrendatarios, por lo que la obligación que también se establece de notificar a los mismos la existencia del procedimiento no derivará de este precepto, sino del 661.2 en su condición de ocupantes “de derecho”, por contraposición a los meros ocupantes *de hecho*, a los que asimismo se refiere.

A diferencia de lo que ocurre con el tercer poseedor de bienes hipotecados (art. 689), aquí no estipula la LEC que se le tenga que notificar la existencia de la ejecución, entendiendo que la anotación de embargo brinda publicidad suficiente para él y para cualquier otro acerca de la sujeción del bien que ha adquirido a un proceso judicial ejecutivo concreto. Esto no quita que, si le conviene, *podrá pedir que se le exhiban los autos en la Oficinal judicial... entendiéndose con él las actuaciones ulteriores* (art. 662.1). Se trata de una previsión que necesita una interpretación correctora, por cuanto su redacción da entender que por el solo hecho de que el tercer poseedor pida que se le muestren los autos se le habrá de tener en consideración para los trámites posteriores, lo que resulta absurdo. Si el tercero, ejerciendo el derecho mínimo de toda persona con interés legítimo a *examinar y conocer* (art. 141) unas actuaciones judiciales determinadas, quiere que se entiendan con él las actuaciones posteriores, tendrá que personarse conforme a las reglas generales y, solo entonces, le será aplicable esa otra norma, de aplicación a cualquier tipo de proceso, que ordena notificar las resoluciones procesales *a todos los que sean parte en el proceso* (art. 150.1).

En cualquier caso, lo que la ley pretende del tercer poseedor no solo es prevenirle del futuro inmediato del bien que está en su poder, sino también de la posibilidad que tiene de liberarlo de la traba *satisfaciendo lo que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los límites de responsabilidad a que esté sujeto el bien* (art. 662.3), según consten en la anotación registral de su embargo (art. 613.3).

1.6.- COMUNICACIONES CON LOS ACREEDORES

1.6.1.- Titulares de créditos anteriores

El art. 657.1 prevé la situación de que figuren anotados o inscritos créditos o derechos anteriores al que se ejecuta en el procedimiento de ejecución concreto. En la medida en que subsistirán tras la realización del bien y, por tanto, seguirán siendo una carga que tendrá que soportar por subrogación el adquirente (art.

con una hipoteca (artículos 126, 112 o 134.1 de la Ley Hipotecaria), aludiendo a una relación de poder o posesión de este tercero con el bien hipotecado” (F. D. 2º).

669.2), habrá que determinarse su importe y deducirlo del valor de venta en subasta del bien en cuestión (art. 666). Para tal finalidad dicho precepto encomienda al Letrado de la Administración de Justicia para que, de oficio⁷⁸³ y a través del procurador del ejecutante, se dirija *a los titulares que sean anteriores que sean preferentes al que sirvió para el despacho de la ejecución y al ejecutado para que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y actual cuantía*.

La mención al procurador es criticable en la medida en que no siempre el ejecutante tendrá por qué estar representado en el proceso por aquel profesional conforme dispone el art. 539.1. Junto a ello hay que mencionar que, según el art. 660.1p1, el procurador deberá dirigirse a los acreedores anteriores *por correo o telégrafo con acuse de recibo, o por otro medio fehaciente*, lo que no parece coherente con la finalidad de alcanzar una mayor celeridad y eficacia que se busca al atribuir aquella gestión a dicho profesional; si no fuere así, no está del todo justificado externalizar una tarea que podría seguir haciendo directamente el propio órgano judicial.

Tampoco es correcto, en puridad, que se haga mención a los oficios, salvo que se entiendan como sinónimo impropio de “despachos”, pues los destinatarios, es decir, los acreedores anteriores, pueden ser personas privadas y a ellas habría de remitirse en todo caso requerimientos (art. 149.4^a)⁷⁸⁴; estos, por cierto, sí que son citados correctamente en el apartado 3 del art. 657 (“Trascurridos diez días *desde el requerimiento...*”), tanto en la forma como en el contenido. Por otro lado, cuando se trata de cargas anteriores cuya anotación se ha producido por mandamiento judicial (v. gr. una anotación de embargo), en la práctica se ha observado el error de enviar aquellos “oficios”, no al titular del crédito, sino al juzgado o tribunal que ha ordenado dicha anotación; a nuestro entender, solo el primero es quien puede y debe informar con mayor exactitud de la vigencia de su crédito, resultando además un poco extraño que, de no ser así, se prevea la intervención del procurador para entregar a otro juzgado un oficio que puede remitirle directamente el primero, y además telemáticamente, todo ello sin olvidar que lo que habría de cursar no es un oficio, sino un exhorto. Más tarde comentaremos que la misma incorrección comete el Registrador de la Propiedad cuando se trata de cargas posteriores.

1.6.2.- Titulares de créditos posteriores

a) *Situaciones*

El régimen establecido cambia cuando se trata de titulares de derechos inscritos o anotados posteriormente al derecho que sustenta la ejecución, distinguiéndose, a su vez, dos situaciones:

⁷⁸³ A diferencia de la redacción anterior a la Ley 13/2009, en que era a instancia de parte, lo que había suscitado la crítica de la doctrina.

⁷⁸⁴ Lo mismo puede decirse en relación con las órdenes de retención del salario, que en la práctica se realizan mediante oficio, cuando son auténticos requerimientos.

1. Titulares con derecho inscrito antes de la expedición de la certificación de dominio y cargas: En este caso, ya no será el Letrado de la Administración de Justicia, sino *el registrador* (de la propiedad) el encargado de *comunicar* –advuértase que no emplea el verbo “notificar”– *la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el Registro* (art. 659.1). En realidad, como algún autor ha apuntado, esta comunicación es innecesaria y solo se practica “a mayor abundamiento” (RAMÓN CHORNET⁷⁸⁵), puesto que la existencia de la ejecución ya está siendo advertida ‘erga omnes’ mediante la anotación previamente realizada del embargo, de cuyo conocimiento no se podrán sustraer cuando dichos titulares inscriben o anotan sus derechos.

La participación de una autoridad no judicial como es el Registrador de la Propiedad en este trámite del procedimiento de apremio fue introducida por Ley 10/1992, de 30.04, que dio nueva redacción, ente otros, al art. 1490 de la LEC de 1881⁷⁸⁶ (antecedente del actual art. 659) y no es-

⁷⁸⁵ RAMÓN CHORNET: “La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva LEC 2000”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31-2000), CGPJ, pág. 469.

⁷⁸⁶ **Art. 1490 LEC 1881:** “El registrador de la propiedad comunicará a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que consten en asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta, el estado de la ejecución para que puedan intervenir en el avalúo o subasta de los bienes, si les convinieren. La comunicación se practicará en el domicilio que conste en el Registro por correo o telégrafo. En la certificación a que se refiere el artículo anterior se expresará haberse practicado esta comunicación”.

La ley, cuyo título era de *Medidas Urgentes de Reforma Procesal*, explicaba en su Exposición de Motivos que “carece de sentido atribuyendo a los órganos judiciales la realización de tareas no jurisdiccionales; tal cosa no repercute más que en disfunciones para la Administración de Justicia que se debe primordialmente al desarrollo de su función propiamente jurisdiccional y para los interesados, que ven cómo un asunto que podría tramitarse fácil y económicamente en otra sede, ha de esperar, para una resolución, el orden de tramitación propio de los órganos jurisdiccionales. En esta línea y de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la eliminación de tareas no propiamente jurisdiccionales del ámbito de actuación de los Tribunales de Justicia, se regula una modalidad de la obtención de la declaración de herederos mediante acta de notoriedad, tramitada ante Notario y se extraen del ámbito judicial determinadas operaciones de legalización de libros” (Aptdo. 3); aunque, como se ve, no aludía expresamente a la nueva tarea que se atribuía los Registradores de la propiedad, aquellas palabras revelaban el trasfondo de la decisión.

A su vez, la reforma operada por la Ley 10/1992 fue desarrollada por RD 1368/1992, de 13 de noviembre, “por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario y del Reglamento Notarial” (BOE de 18.12.1992). En su preámbulo, el texto reglamentario explicaba respecto del art. 1490 que “para la efectividad de esta norma resulta necesaria la constancia en el Registro del domicilio de los titulares de tales derechos. Esta medida es un útil refuerzo para la defensa de los intereses de los titulares de derechos reales o de garantías registrales que acceden al Registro con posterioridad a una hipoteca o a una anotación de embargo constituidas sobre el mismo bien. Aunque aquellos han podido conocer fácilmente por el Registro que sus derechos o garantías pueden verse afectados por la correspondiente ejecución de la hipoteca anterior o por el proceso de ejecución a que el embargo ya anotado se refiera -y es, pues, ante todo, carga de esos titulares estar alerta

tuvo exenta de crítica por la doctrina. Autores como ALFINT MASSOT calificaron la reforma como “excesivamente atrevida, ya que sitúa aspectos fundamentales del procedimiento, como son las notificaciones a realizar a titulares de derechos a extinguir por mor de la venta ejecutiva, fuera del ámbito jurisdiccional «strictu sensu»”⁷⁸⁷.

2. Titulares con derecho inscrito después de la expedición de la certificación de dominio y cargas: A estos *no se les realizará comunicación alguna* (art. 659.2), al entenderse que la anotación marginal de haberse expedido la certificación dota de suficiente publicidad, no ya a la mera anotación de embargo, sino del estadio en que ya se encuentra el proceso ejecutivo.

b) *Finalidad de la comunicación*

La necesidad de poner en conocimiento de los titulares de derechos posteriores *la existencia de la ejecución* viene dada por el hecho de que se podrán ver directamente afectados por el devenir del proceso (cfr. art. 150.2), en especial si se termina enajenando el bien objeto de embargo y, por mandato de los arts. 674p2 LEC, se cancelan *todas las inscripciones y anotaciones posteriores* al derecho del ejecutante. Para ser más exactos, lo que se les ha de comunicar no es la existencia de la ejecución –puesto que ya la conocen a mérito de la anotación de embargo anterior–, sino que el proceso ha entrado ya en la fase de apremio, aumentando seriamente para ellos la indeseada posibilidad de que le realización del bien purgue sus derechos.

La LEC otorga a estos titulares posteriores al derecho del ejecutante una serie de facultades que si queremos conocer hay que acudir al apartado 2 del art. 659, referido a los titulares de derechos que por haber sido inscritos después de la expedición de la certificación de cargas el Registrador no les realizará comunicación alguna. A unos y a otros, aunque el apartado 1 nada diga al respecto:

- 1.^a *Se les dará intervención en el avalúo*, algo que concreta el art. 639.4: *Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 659 –los que se hubieren personado, entendemos– podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración.*
- 2.^a También se les dará intervención *en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten*. Cabe mencionar a estos efectos la circunstancia de que exista sobrante tras la realización del bien y proceda su reparto incidental entre ellos (arts. 672 y 692.1).

para intervenir oportunamente en las actuaciones de ejecución-, se ha estimado útil imponer al Registrador la comunicación del estado de dicha ejecución” (párr. 2).

⁷⁸⁷ ALFINT MASSOT, JOSÉ MARÍA: “Registro de la Propiedad y vía de apremio”, *Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 29/1996), CGPJ, Madrid, 1997, pág. 331.

- 3.^a Se les satisfará el importe de lo reclamado, si bien únicamente *dentro del límite de responsabilidad que resulte del Registro*, produciéndose entonces la sucesión por subrogación en los derechos del ejecutante (art. 659.3).

c) *Forma de practicar la comunicación*

La LEC dedica expresamente su art. 660⁷⁸⁸ a establecer cómo ha de comunicar el Registrador de la Propiedad a los acreedores anteriores y posteriores la existencia de la ejecución, ordenando a tal fin que *las comunicaciones a que se refieren los artículos 657 y 659 se practicarán en el domicilio que conste en el Registro, por correo o telégrafo con acuse de recibo, o por otro medio fehaciente* (art. 660.1p1)⁷⁸⁹.

⁷⁸⁸ **Art. 660:** “Forma de practicarse las comunicaciones.” 1. *Las comunicaciones a que se refieren los artículos 657 y 659 se practicarán en el domicilio que conste en el Registro, por correo con acuse de recibo o por otro medio fehaciente.*

A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, cualquier titular registral de un derecho real, carga o gravamen que recaiga sobre un bien podrá hacer constar en el Registro un domicilio en territorio nacional en el que desee ser notificado en caso de ejecución. Esta circunstancia se hará constar por nota al margen de la inscripción del derecho real, carga o gravamen del que sea titular. También podrá hacerse constar una dirección electrónica a efectos de notificaciones. Habiéndose señalado una dirección electrónica se entenderá que se consiente este procedimiento para recibir notificaciones, sin perjuicio de que estas puedan realizarse en forma acumulativa y no alternativa a las personales. En este caso, el cómputo de los plazos se realizará a partir del día siguiente de la primera de las notificaciones positivas que se hubiese realizado conforme a las normas procesales o a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El establecimiento o cambio de domicilio o dirección electrónica podrá comunicarse al Registro en cualquiera de las formas y con los efectos referidos en el apartado 2 del artículo 683 de esta Ley.

La certificación a la que se refiere el artículo 656, ya sea remitida directamente por el Registrador o aportada por el Procurador del ejecutante, deberá expresar la realización de dichas comunicaciones.

En el caso de que el domicilio no constare en el Registro o que la comunicación fuese devuelta por cualquier motivo, el Registrador practicará nueva comunicación mediante edicto, que se insertará en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. *La ausencia de las comunicaciones del Registro o los defectos de forma de que éstas pudieran adolecer no serán obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble en la ejecución.*

⁷⁸⁹ La norma es similar al art. 353.1 RH, dedicado a las “certificaciones de cargas”, precepto que, tristemente, se sigue refiriendo todavía a la LEC de 1881 y a sus artículos 1489 y 1490, debiendo entenderse que se refiere a los arts. 656 y 659 de la vigente: *A continuación de la certificación que se expida en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el Registrador expresará, que ha expedido las comunicaciones prescritas en el artículo 1490 de dicha Ley y la forma en que los ha hecho.*

Estas comunicaciones se dirigirán por correo certificado o por telégrafo al domicilio en España que del respectivo titular del dominio o derecho conste en el Registro. En el supuesto de hipoteca en garantía de obligaciones, la comunicación se hará al Sindicato de obligacionista, si constare su domicilio.

De no constar el domicilio en el Registro o no poder efectuarse la comunicación conforme al párrafo anterior el Registrador la publicará durante quince días hábiles en el tablón de anuncios del propio Registro; si la oficina del Registro no radicara en el mismo término municipal que la finca, los edictos se remitirán al Ayuntamiento, para su publicación en el tablón de anuncios.

El Registrador no habrá de hacer comunicaciones a los titulares de derechos de los que solamente conste el asiento de presentación, pero, si llegan a inscribirse o a anotarse, habrá de consignar en la nota de despacho el estado de la ejecución según resulte del Registro.

No obstante, la Ley 19/2015 ha incorporado la posibilidad de que esos acreedores puedan hacer constar, además de un domicilio “físico” en *territorio nacional en el que desee ser notificado en caso de ejecución*, una *dirección electrónica*, que lo será a efectos de notificaciones y en forma *cumulativa y no alternativa a las personales* (art. 660.1p2), lo que aumentará las posibilidades de un conocimiento efectivo de la comunicación.

En relación con el domicilio *que conste en el Registro*, sucede en la práctica que cuando se trata de una anotación de embargo judicial, el Registrador no remite la comunicación a la parte ejecutante a cuya instancia se ha mandado practicar dicha anotación, sino que lo hace al juzgado o tribunal que lo ha ordenado. Aunque esto no deja de tener su utilidad práctica, lo cierto es que quien ha de informar de la existencia del procedimiento no es el órgano, sino el titular o acreedor posterior del crédito o derecho anotado.

El modo en que el juzgado o tribunal conoce que el Registrador cumple con la obligación que le impone el art. 659 es a través de la propia certificación de dominio y cargas, pues en ella aquel *deberá expresar la realización de dichas comunicaciones* (art. 660.1p3). Cuatro puntualizaciones al respecto:

- Ni la LH ni el RH precisan qué se ha de expresar exactamente, pudiendo encontrarnos en la práctica con indicaciones como las que, a título de ejemplo, siguen literalmente:

“OTRO SÍ TAMBIÉN CERTIFICO, que han sido practicadas las comunicaciones prevenidas en el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por correo certificado con acuse de recibo, a [personas físicas/jurídicas], como titulares de derechos posteriores al del procedimiento que se ejecuta y que es objeto de la presente certificación.

[...] Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente [...] en Calviá a veintidós de septiembre de dos mil catorce”.

Más ilustrativa es la siguiente:

“Con esta fecha se ha enviado la notificación al acreedor posterior, según establece el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Marbella, a nueve de Mayo de dos mil siete”.

Apréciase el detalle, a cuenta de lo que diremos después, de que en una se dice que “han sido *practicadas*” y en la otra que “se ha *enviado*”.

- Esta mención puede bastar para la ejecución general u ordinaria, pero no para la hipotecaria, pues es necesario determinar el ‘dies a quo’ del cómputo de veinte días que como mínimo establece el art. 691.1 para poder acordar la subasta del bien y que se refiere al requerimiento de pago y a las notificaciones al tercer poseedor y acreedores posteriores

El Registrador no habrá de dar cuenta de ninguna incidencia relativa a las comunicaciones. Archivará copia de la certificación de cargas y de las comunicaciones que provoque y unirá a ellas los documentos que con las mismas se relacionen.

del art. 689. Por eso sería conveniente introducir en el artículo 660.1p2, justo después de *la realización*, el inciso “y fecha” de aquellas comunicaciones⁷⁹⁰. Hasta entonces, en defecto de indicación por el Registrador de cuándo ha remitido la comunicación por correo correspondiente, la solución más inmediata, aunque imperfecta, podría ser la de tomar como referencia el día en que expide la certificación de cargas, aunque también se ha ofrecido otras opciones, como las de GUZMÁN FLUJA, quien, además de proponer también aquella reforma legal, entiende oportuno que los procuradores acudan al Registro a obtener la información, o que se expida mandamiento al Registro para que informe al Juzgado sobre el estado de las comunicaciones⁷⁹¹. Ambas opciones, empero, supondrían nuevas cargas y gastos para las partes que no parecen procedentes. DE LA RÚA NAVARRO, por su parte, tras analizar las posibles soluciones, entiende que la “más acertada en la práctica” es la de “enviar al Juzgado la certificación expresando haberse remitido la comunicación del precepto [tal como literalmente dice el precepto], y posteriormente remitir un oficio informando al mismo de la recepción de los acuses de recibo o del transcurso de los 15 días y de las fechas en que quedaron efectuadas las comunicaciones. El problema está en que, al menos por nuestra experiencia, tal oficio nunca se recibe⁷⁹².

- Si el registrador no hiciese mención en su certificación a estas comunicación, no vemos obstáculo en que el órgano judicial le remita oficio interesando que subsane el defecto mediante la expedición sin coste de una certificación complementaria de la anterior en la que consigne si se trataba simplemente de la omisión de aquella mención o que ha procedido a su práctica, pero que sin que ni en un caso ni en el otro su

⁷⁹⁰ Además, y como apunte menor, podría aprovecharse para invertir la posición de los párrafos 3 y 4, pues el actual párrafo 4 parece la continuación lógica del apartado 1, y el 3 se refiere a ambos.

⁷⁹¹ GUZMÁN FLUJA, VICENTE CARLOS: “Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil”, *La ejecución civil*, Estudios de derecho judicial n.º 54/2004, edición digital, código ED0405319, epígrafe IV.

⁷⁹² DE LA RÚA NAVARRO, ALICIA M.ª: “La ejecución hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, págs. 534. En parecidos términos, CARBONELL LLORENS, CRISTINA: “Podría proponerse que en la certificación se expresara el haberse remitido la comunicación, sino también dar cuenta de su resultado, posteriormente, cuando se reciba el acuse de recibo o pasen los 15 días desde la fijación del edicto, pues sólo entonces puede darse por cumplido este trámite” (“La ejecución hipotecaria: Presupuestos y desarrollo del procedimiento hasta la práctica de los correspondientes asientos registrales”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Estudios de Derecho Judicial n.º 31/2000, CGPJ, Madrid, pág. 314].

incumplimiento pueda impedir ni viciar de nulidad la continuación del proceso judicial (art. 660.2)⁷⁹³.

- El precepto habla de *realización*, pero cabría entender, a diferencia de MARTÍNEZ DE SANTOS, que se refiere a la mera “remisión” de la comunicación⁷⁹⁴, Enviada la comunicación y de forma análoga a como establece el sistema de la correcta remisión del art. 155.4, su papel en este trámite respecto al Juzgado habrá concluido y podrá completar el contenido de la certificación de cargas sin que posteriormente, como dispone el art. 353.1 RH, tenga que *dar cuenta de ninguna incidencia relativa a las comunicaciones* (v. gr., la devolución del correo y la inserción del edicto). El mismo, concluye dicho artículo, *archivará copia de la certificación de cargas y de las comunicaciones que provoque y unirá a ellas los documentos que con las mismas se relacionen*.

Seguidamente, la LEC prevé los supuestos relativos a *que el domicilio no constare en el Registro y a que la comunicación fuese devuelta al Registro por cualquier motivo*. A pesar de ser diferentes, dispone para ambos que *el Registrador practicará nueva comunicación mediante edicto*, que hasta la Ley 19/2015 se insertaba “en el tablón de anuncios del Registro, que se publicará durante un plazo de quince días”, y ahora es *en el «Boletín Oficial del Estado»* (art. 660.1p4). Entendemos excesivo el inciso *por cualquier motivo*, que abre la vía de la comunicación edictal con demasiada facilidad. Piénsese en un error del propio Registro en la consignación en el sobre postal del domicilio o de la identidad del destinatario, lo que haría de todo punto injustificado que se acudiera seguidamente a la comunicación edictal para insertar una comunicación de la que todos conocemos, incluso en el BOE, su prácticamente nula eficacia material.

d) Omisión y defectos en las comunicaciones del Registro de la Propiedad a los titulares posteriores

Por último, el art. 660 contiene un segundo apartado de importante repercusión en el ámbito del Derecho registral. Establece que *la ausencia de las comunicaciones del Registro o los defectos de forma de que éstas pudieran adolecer no serán obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble en la ejecución*. Por *ausencia de las comunicaciones* no debemos entender que el Registrador no haya cumplido su cometido ex art. 659.1, sino que las mismas no haya alcanza-

⁷⁹³ VILLAMOR MONTORO, PEDRO ROQUE, propone en su lugar “la devolución al portador de la certificación de cargas para que la misma se complemente con la indicación de que se han realizado aquellas”, pero con ello se está imponiendo injustamente a la parte una carga (y unos gastos) provocada por el incorrecto proceder del registrador (“Publicidad registral y el procedimiento de apremio sobre inmuebles”, *Derecho Hipotecario* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 38/1994), CGPJ, Madrid, 1995, pág. 933).

⁷⁹⁴ El autor afirma que el art. 660.1 LEC “asegura a los acreedores posteriores que van a tener constancia de la ejecución mediante las comunicaciones del Registrador, ya que en la certificación «deberá expresar la realización de dichas comunicaciones», sin que baste la indicación sobre la remisión de la comunicación” (*Cuestiones prácticas...*, op. cit. pág. 355).

do la finalidad perseguida de poner sobre aviso al acreedor posterior de la existencia de un proceso judicial que, a la postre, podrá dar como resultado la cancelación de su derecho en el Registro.

La fuerza de este precepto en detrimento de dichos acreedores posteriores se intento eliminar, sin éxito, en la tramitación parlamentaria de la LEC 2000, proponiéndose la redacción totalmente inversa⁷⁹⁵, es decir, la de que aquellas ausencias o defectos conllevarían “nulidad de lo actuado, impidiendo la inscripción en el Registro del derecho de quien adquiera el bien en la ejecución”, postura de la que también ha encontrado apoyo en parte de la doctrina⁷⁹⁶. Que la enmienda no prosperara lo consideramos un acierto, pues hubiera generado inseguridad jurídica para las partes y, sobre todo, para los potenciales licitadores con el consiguiente efecto disuasorio, y de todos modos, como antes apuntamos, solo hubiera supuesto un plus de advertencia a unos acreedores que ya han debido ser conscientes del riesgo que se encuentra latente en el Registro ante la existencia de la carga anterior⁷⁹⁷.

Como veremos en el apartado de la ejecución hipotecaria, la DGRN ha entendido que este segundo apartado del art. 660 no resulta de aplicación en dicho ámbito.

1.7.- COMUNICACIONES A ARRENDATARIOS Y OCUPANTES DE HECHO

Asunto de primer orden en la ejecución judicial es el llamado por la propia Exposición de Motivos de la LEC como *el problema de los ocupantes* (Aptdo. XVII), que trata de solucionar mediante la incorporación en el proceso de ejecución de un incidente declarativo por el que garantice el principio de audiencia de dichas personas. Aunque no son partes procesales propiamente dichas, también a los *arrendatarios y ocupantes de hecho, distintas del ejecutado*, hay que ofrecerles las mismas garantías que a aquellas, tanto más si se trata de determinar, aunque sea con carácter sumario, si son considerados o no *ocupantes de mero hecho o sin título suficiente* a efectos de ser desalojados. Al respecto, prevé el art. 661.1 que el conocimiento por el órgano judicial de la *existencia e identidad* de dichas personas pueda provenir *por la manifestación de bienes del ejecutado* –recuérdese el último inciso del art. 589.1–, *por indicación del ejecutante* –en cualquier momento tan pronto cuando lo advierta– o *de cualquier otro modo* –esto último muy frecuente, principalmente coincidiendo con la práctica de los actos de notificación y requerimiento por parte del personal del Cuerpo de Auxilio judicial (del propio juzgado

⁷⁹⁵ Enmienda n.º 560 formulada por el Grupo Socialista al proyecto de ley de 1998, quien entendió que “la notificación de la advertencia del apremio a los titulares de derechos no preferentes está estrictamente ligada al derecho de defensa de sus legítimos intereses, por tanto, la ausencia de comunicaciones o su incorrecta práctica deben comportar la nulidad de lo actuado, impidiendo también la inscripción registral de la venta, salvo que el titular de la carga no preferente manifieste que no le ha causado indefensión alguna” (BOCG Serie A. Núm. 147-9, 26.03.1999, pág. 357).

⁷⁹⁶ Así, PEDRAZ PENALVA, ERNESTO: “Comentario al art. 660”, *Proceso Civil Práctico*, Tomo VIII (Artículos 634 a 747), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 195.

⁷⁹⁷ Vid., ídem, VEGAS TORRES, “La realización forzosa (I)”, op. cit., pág. 234.

o del Servicio Común correspondiente allí donde exista) o del procurador que así lo hubiere solicitado—. Lo que no comprendemos es por qué la ley no solo habla de la existencia de dichas personas, sino también de su *identidad*, cuando será frecuente que este último dato no se conozca y no por ello habrá de entenderse inaplicable el precepto. ACHÓN BRUÑÉN, entendiendo lo contrario, cree que “si no se conoce su nombre y apellidos, no va a ser posible dirigir a los mismos notificación alguna”⁷⁹⁸, pero en la práctica la solución que se adopta es la de dirigir la comunicación mediante entrega y de forma genérica “a los ocupantes o arrendatarios del piso X del inmueble Y de la calle Z”, siendo entonces cuando se puede conseguir (no siempre) su identidad en la diligencia correspondiente.

También con cierta incorrección prescribe el art. 661.1 que *se les notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación*, pero en la medida de que no se trata de simple notificación, sino que va acompañada de un requerimiento de gran importancia, ambos actos de comunicación habrán de practicarse simultáneamente por medio de entrega, y así lo habría de acordar el Letrado de la Administración de Justicia ex art. 159.2 *atendiendo a las circunstancias* e independientemente de que, desde la Ley 19/2015, se prevea expresamente que la notificación pueda ser practicada por el procurador de la parte ejecutante por propia iniciativa o por decisión de aquel.

La falta de presentación de aquellos títulos en el plazo concedido y sus consecuencias no está prevista en la LEC. Desde luego, habría que descartar el conferir carácter preclusivo a dicho plazo, al no establecerse por la ley tal limitación en materia de prueba (ACHÓN BRUÑÉN), e impedir a los ocupantes la exhibición de los títulos en la eventual vista incidental del art. 661.2 que pudiera instar la parte ejecutante⁷⁹⁹ o el futuro tercer adquirente de no ser aquella (art. 675.3). En cualquier caso, se presenten o no, la mera constatación de que el inmueble esté ocupado obligará a la celebración, antes o después, de dicha vista si se quiere que en el propio proceso de ejecución se resuelva la situación posesoria. La ley difiere a la comparecencia ante el Juez los efectos jurídicos de aquellos documentos y por ello el hecho de que se presenten antes no es imprescindible y solo resultaría útil para advertir en el anuncio de la subasta de la situación posesoria “aparente” del inmueble, pendiente, en su caso, de su determinación definitiva a los efectos del proceso.

En cuanto a la forma de citación a dicha vista, los ocupantes y/o arrendatarios deberán ser convocados ‘ab initio’ por correo según el art. 160.1 o, alternatively, según lo considere el Secretario, mediante entrega conforme al art. 161, aunque, aquí especialmente, apostaríamos ‘lege ferenda’ por imponer la obligato-

⁷⁹⁸ ACHÓN BRUÑÉN: *Tratado práctico...*, op. cit., pregunta 841, pág. 786.

⁷⁹⁹ Según el art. 661.2 el ejecutante es el único que promover la celebración de la vista del art. 675.3, pero debería otorgarse también legitimación activa a cualquier otra persona interesada en la adquisición del inmueble y que por ello quisiera ver despejada la incógnita acerca de la situación posesoria del mismo.

riedad de este último, por descontado cuando no consten los datos identificativos de esas personas.

1.8.- COMUNICACIONES RELATIVAS A LA SUBASTA

1.8.1.- Notificación al ejecutado no personado

a) *Situación anterior a la Ley 19/2015*

La Ley 19/2015 ha supuesto un cambio radical, con todo el significado que dicho adjetivo tiene, en el régimen de comunicación al ejecutado no personado en el ejecución de la convocatoria de subasta, que desde siempre ha suscitado múltiples problemas en la práctica. La enjundia de los mismos, unida a la vigencia transitoria del régimen anterior para aquellas ejecuciones ya iniciadas en las que no se haya publicado la convocatoria de subasta⁸⁰⁰, régimen transitorio que establece la reforma para aquellas ejecuciones iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, acaecida el pasado 15.10.2015⁸⁰¹, justifican que dediquemos un apartado a estudiar la regulación preexistente.

La subasta de un bien inmueble, tanto en la ejecución ordinaria como en la hipotecaria, exigía que mediara un plazo de 20 días entre el anuncio de la misma y su celebración, así como que, en ambos casos, se notificara el señalamiento al ejecutado (arts. 667p2⁸⁰² y 691.2⁸⁰³). Pero en ninguna se regulaba cómo hacer esa notificación cuando este no se encontrara personado en autos, planteando también problemas el *domicilio* donde hacerlo.

Respecto al “cómo”, si el ejecutado estaba personado con procurador, entendíamos, como lo seguimos haciendo ahora, que bastaba la notificación de la diligencia de ordenación anunciando la subasta a través de dicho profesional por aplicación del art. 153. Así lo entendieron autores como MARTÍNEZ SANTOS⁸⁰⁴ o PEDRAZ

⁸⁰⁰ Disp. Trans. 1ª Ley 19/2015: “Procesos pendientes”. *Las subastas de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cuya publicación se haya acordado continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda.*

⁸⁰¹ Disp. Final 10ª Ley 19/2015: “Entrada en vigor.” *La presente Ley entrará en vigor el 15 de octubre de 2015, salvo el apartado diez del artículo segundo y el apartado 1 de la disposición derogatoria única, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».*

⁸⁰² Art. 667 (redacción por Ley 1/2000, vigente de 08.01.2001 a 14.10.2015): “Anuncio de la subasta. La subasta se anunciará con veinte días de antelación, cuando menos, al señalado para su celebración.

El señalamiento del lugar, día y hora para la subasta se notificará al ejecutado, con la misma antelación, en el domicilio que conste en el título ejecutivo”.

⁸⁰³ Art. 691.2 (redacción por Ley 1/2013, vigente de 15.05.2013 a 14.10.2015): “La subasta se anunciará, al menos, con veinte días de antelación. El señalamiento del lugar, día y hora para el remate se notificará al deudor, con la misma antelación, en el domicilio que conste en el Registro o, en su caso, en la forma en que se haya practicado el requerimiento conforme a lo previsto en el artículo 686 de esta Ley. [...]”.

⁸⁰⁴ MARTÍNEZ SANTOS: *Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio*. op. cit., pág. 361, con cita del AAP Zamora, 17.07.2002 (ROJ: AAP ZA 163/2002).

PENALVA⁸⁰⁵, si bien otros como PINEDA GUERRERO⁸⁰⁶ no lo creyeron suficiente y sostuvieron que también había que hacerlo a la propia parte ejecutada y en el domicilio indicado por el precepto. Para el **AAP Ávila (Secc. 1) 18.07.2003**⁸⁰⁷, no solo era posible notificar la subasta al procurador, sino que resultaba “más fehaciente que mediante la notificación que establece el art. 667 LEC” (F. J. 3º).

Si el ejecutado no estaba personado, la tendencia mayoritaria era practicar la notificación mediante entrega por funcionario o procurador, dada la importancia de su objeto. Nada obstaba, sin embargo, hacerlo por correo o telegrama⁸⁰⁸ certificado con acuse de recibo, surtiendo incluso plenos efectos con la correcta remisión (art. 155.4), por cuanto con la subasta no estábamos ante ninguna actuación procesal en la que tuviera que intervenir personalmente el ejecutado, al que, ni antes ni ahora, no se le citaba, sino que sencillamente se le comunicaba (“se le notificará”) la celebración de la subasta. Tal fue el parecer del **AAP Tarragona (Secc. 1ª) 24.09.2010**, en un supuesto en que al apelante se le notificó el anuncio de subasta por correo certificado con acuse de recibo, dejándosele aviso y que, por no haber sido retirado, fue devuelto como caducado; la Audiencia asumió la actuación del órgano ‘a quo’ y desestimó el recurso⁸⁰⁹. Aun así, del planteamiento contrario era ACHÓN BRUÑÉN, quien entendía que “si no constare la recepción se habrá de reiterar la comunicación por medio de entrega personal”⁸¹⁰. Asumiendo que se trataba de un tema que no es pacífico y por mucho que se pudiera argumentar que el trámite es de los más importantes del procedimiento ejecutivo, lo cierto es que el artículo 158 es claro al respecto y no hace depender las comunicaciones mediante entrega de la discrecionalidad del Letrado de la Administración de Justicia a la hora de valorar la mayor relevancia de una concreta actuación. Otra cosa es que, ‘lege ferenda’, fuese deseable que la notificación de la subasta se hiciera con el rigor propio de las comunicaciones mediante entrega y así se hubiese exigido expresamente en el art. 667.

⁸⁰⁵ PEDRAZ PENALVA: “Comentarios al artículo 667”, *Proceso Civil Práctico*, Tomo VIII, op. cit., pág. 237. Para el autor, “es evidente el diverso sentido de la notificación al procurador de la parte y de esta exigencia especial de notificación al ejecutado, en el domicilio que figure en el título, prevista para cuando no esté personado”.

⁸⁰⁶ PINEDA GUERRERO, M.ª ÁNGELES: “Régimen de comunicaciones de la existencia del proceso de ejecución y subasta de bienes inmuebles”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 1956-57, 15 de enero de 2004, Madrid, pág. 10.

⁸⁰⁷ Roj: AAP AV 31/2003: “Ante ello no puede la parte alegar que desconocía la subasta, pues el procurador era y sigue siendo el representante de la parte en el pleito. La disposición del art. 667 LEC no tiene por objeto, como pretende la parte, una garantía más para el ejecutado personado, sino que supone la creación de una presunción legal, por la que se considera correcta la notificación hecha al ejecutado no personado en el domicilio que figura en el título ejecutivo, sea o no hallado en el mismo” (F. D. 3º).

⁸⁰⁸ Ídem MARTÍNEZ SANTOS (*Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio*, op. cit., pág. 360).

⁸⁰⁹ Auto n.º 109/2010 (Roj: AAP T 806/2010). El tribunal consideró, como defendemos, que “esta comunicación no tiene por objeto la intervención personal ya que la subasta no requiere personación del ejecutado ni es un trámite que dependa de su presencia, sino que solo se le otorga la posibilidad de mejorar la postura; por lo que no le es aplicable la exigencia que alega el recurso de notificación personal conforme a los arts. 158 y 161 L.E.C.” (F. J. 2º).

⁸¹⁰ ACHÓN BRUÑÉN: *Tratado práctico...*, op. cit., pág. 721.

En cuanto al domicilio, la notificación de la subasta a la parte ejecutada daba lugar a no pocas suspensiones, precisamente por el lugar donde se había intentado la comunicación. El art. 667p2 determinaba uno en particular: “el domicilio que conste en el título ejecutivo”⁸¹¹, previsión que se acomoda a los títulos no procesales, pero no tanto con los títulos procesales. En una sentencia, por ejemplo, no tiene por qué constar necesariamente el domicilio del litigante ejecutado, a no ser que se mencione en los antecedentes de hecho, una eventualidad nada habitual. Hubiera sido necesario entonces reinterpretar la norma y pensar en el domicilio o en el último de ellos que hubiera obrado en las actuaciones judiciales, en análogas circunstancias a las ya estudiadas al abordar la notificación del despacho de ejecución al ejecutado.

Por otra parte, hubo autores, como BERNABÉU PÉREZ, que defendieron la necesidad de que la subasta fuese notificada en la finca que se sacara a subasta si el domicilio de la misma no coincidía con el del título, tal como establecía antiguamente el art. 131.7ª ‘in fine’ LH, paliando así los problemas que se podían suscitar en caso de que existieran arrendatarios o terceros ocupantes⁸¹²; algo que también apuntaba UCEDA OJEDA, lamentando que “se ha perdido una buena oportunidad de que la notificación relativa a la fecha de la subasta se hiciese en la finca sujeta al procedimiento de apremio, pues con tal medida se podría conocer si la finca se encuentra ocupada por personas distintas del ejecutado que quedarían advertidos de la existencia del procedimiento”⁸¹³.

Nosotros apostábamos por una solución integradora de ambas posibilidades, pues las dos ofrecían ventajas, de modo que podría haberse establecido que se notificara el señalamiento tanto en el domicilio que constara en el Registro o, en su caso, por edictos, y también, simultáneamente, en la finca objeto de subasta. En el mismo sentido opinaba GÓMEZ SALCEDO, si bien condicionaba la notificación en ambos lugares a que “ello no obst[e] la sumariedad del procedimiento”⁸¹⁴; sin embargo, considerábamos que, lejos de suponer un obstáculo a tal objetivo, si el señalamiento de subasta se realizaba de forma simultánea podría contribuir a

⁸¹¹ Vid. **AAP Barcelona (Secc. 11ª) 02.07.2008** (Roj: AAP B 4836/2008), que otorgó plenos efectos a domicilio pactado en la póliza de crédito, en el caso particular también para la subasta: “[...] la providencia de 15 de febrero dispuso la notificación en los términos prevenidos en el art. 667 y coherentemente se intentó en el domicilio que constaba en el título, [...] de Barcelona - al pie de la póliza de crédito que constituye el título ejecutivo se hace constar expresamente que se señala como domicilio del fiador, para todos los requerimientos y notificaciones, el mencionado - y resultó negativa la notificación, como venía sucediendo, al haberse ausentado de él el demandado sin señalar el nuevo, infringiendo así otra previsión de la misma póliza, la de la asunción de la obligación de poner en conocimiento del Banco acreedor todo cambio de domicilio [...]. De querer el apelante que las notificaciones le fueran efectuadas en el domicilio de Sitges, debería haberlo comunicado, elevándolo así a la categoría de domicilio formal a efectos del título y de la ejecución despachada en virtud del mismo. (F. J. 3º).

⁸¹² BERNABÉU PÉREZ: “La necesidad de notificar la subasta en la finca subastada”, *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2010, La Ley, Madrid, pág. 68.

⁸¹³ UCEDA OJEDA: “Artículo 667”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo III: Artículos 556 a 827, VV.AA., Atelier, Barcelona, 2001, pág. 3054.

⁸¹⁴ GÓMEZ SALCEDO: “Ejecución hipotecaria...”, op. cit., pág. 849.

evitar en el futuro la paralización del proceso ante eventuales ocupantes de cuya existencia no se hubiese tenido noticia con anterioridad.

b) *Situación actual tras la Ley 19/2015*

El legislador de 2015 unifica el trámite tanto para la subasta mobiliaria (para la que nada se decía anteriormente) como para la inmobiliaria (incluida la hipotecaria) y pretende atajar de raíz los anteriores problemas con una solución sorprendente: ordenar que *la convocatoria de la subasta se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado* (art. 645.1 y, por remisión a este, arts. 667.1⁸¹⁵ y 691.2⁸¹⁶). Las críticas a una medida tan osada no se han hecho esperar y así, ACHÓN BRUNÉN considera que la situación ha empeorado, por cuanto “aunque se conozca su paradero no se le notifica la subasta en el domicilio que consta en el Registro para actos de comunicación y menos todavía en la propia finca objeto de hipoteca”⁸¹⁷.

Dotar el anuncio en el BOE de la convocatoria subasta, que también constituye una novedad legal, el doble efecto de dar publicidad ‘erga omnes’ a una decisión adoptada por un órgano judicial y, simultáneamente, de poner la misma formalmente en conocimiento de una de las partes del proceso, traerá, sin duda, problemas, pese a que desde el punto de vista técnico no cabe reproche alguno y la medida lo único que hace es hacer valer el art. 553, tantas veces olvidado en la práctica, de *entender* las actuaciones con el ejecutado solamente si se persona en la ejecución. Sin embargo, el anuncio en boletín oficial no deja de ser un acto de comunicación edictal, con su consabido carácter subsidiario. El tiempo nos dirá si esto se traduce en recursos e incidentes de nulidad de actuaciones en los que se alegue indefensión por la parte ejecutada y si la reforma acaba en el Tribunal Constitucional, si bien ya es posible encontrar juzgados que están tratando de “amortiguar” la reforma interpretando que el nuevo decreto del art. 644 acordando la previa convocatoria de la subasta ha de ser en todo caso notificado al ejecutado para que así pueda devenir firme (art. 645.1), en análogos términos a como lo ha sido hasta ahora la diligencia de ordenación de señalamiento de aquella conforme a los artículos 667.2 y 691.2 anteriores a la Ley 19/2015.

1.8.2.- Publicidad de la subasta

a) *Publicidad obligatoria de la subasta electrónica*

La subasta judicial, institución tradicional en el proceso de ejecución forzosa, depende sensiblemente para su eficacia de la concurrencia del mayor número de postores que pueda hacer posible obtener la mejor y más pronta satisfacción del

⁸¹⁵ **Art. 667.1:** *La convocatoria de la subasta se anunciará y será objeto de publicidad conforme lo previsto en el artículo 645.*

⁸¹⁶ **Art. 691.2:** *La subasta se anunciará y dará publicidad en la forma determinada por los artículos 667 y 668.*

⁸¹⁷ ACHÓN BRUNÉN: Comentario crítico de las modificaciones introducidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria por la Ley 19/2015, de 13 de julio”, *Diario La Ley*, n.º 8619, 6 de octubre de 2015, La Ley, Madrid, pág. 2.

ejecutante. Para ello se hace necesario darle la mayor publicidad posible, factor que desde siempre ha constituido uno de los puntos débiles de este *procedimiento* de realización de los bienes embargados (art. 636.2). La solución del legislador ha sido aprovechar las nuevas tecnologías para sacar las subastas de cada uno de los órganos judiciales y llevarlas a Internet, tarea a la que han ido contribuyendo de forma progresiva las últimas reformas realizadas en la LEC. La Ley 13/2009 introdujo, no las subastas electrónicas o telemáticas, pero sí las *pujas electrónicas*, aunque como una mera posibilidad pendiente de desarrollo.

Será con la reforma de la LEC operada por Ley 1/2013 cuando se da un impulso ya serio en la cuestión introduciendo una nueva herramienta consistente en el *portal de subastas judiciales electrónicas* del Ministerio de Justicia y creando en el art. 668.3 de un nuevo apartado 2º por el que se deja ordenado que “asimismo la subasta se anunciará en el portal de subastas judiciales y electrónicas existentes y dependiente del Ministerio de Justicia. En la publicación del anuncio se hará expresa mención al portal y a la posibilidad de consulta más detallada de los datos”. La ley de 2013 habilitaba con ello el cauce para hacer realidad la posibilidad de realizar las antes citadas pujas electrónicas⁸¹⁸, pero se trataba de un potencial todavía está en ciernes. Desde entonces y hasta 2015 las subastas electrónicas solo han estado operativas en la Región de Murcia, donde se encuentra implantada la “Nueva Oficina Judicial” y en cuyo organigrama existe creada la Sección de Subastas Electrónicas, dentro del Servicio Común de Ejecución, cuyo acceso se realiza a través del mencionado Portal de Subastas Judiciales. En el resto de España dicho ‘sitio web’ solo ha hecho las veces de “tablón digital” por el que a título meramente informativo se ha informado de la celebración de las mismas en cada sede judicial.

La situación ha cambiado con Ley 19/2015, que también aquí ha introducido una reforma sustancial. No solo se generalizan las subastas electrónicas en todo el territorio nacional, sino que se prescinde de las subastas “presenciales”⁸¹⁹ de modo que *la subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal*

⁸¹⁸ De ello daba merecida cuenta en su Exposición de Motivos: “Además, es necesario destacar en este ámbito, la modificación de la regulación de las subastas judiciales, para permitir que bajo la dirección del Secretario judicial puedan efectuarse pujas electrónicas, siempre que se cuente con los medios técnicos para ello. De esta manera, la participación en las subastas judiciales podrá realizarse a través de internet, sin requerir la presencia física obligatoria de los intervinientes en una sala. Con ello además se evita la discriminación, puesto que hay más participación, se fomentan la transparencia y publicidad, se obtienen mejores precios y se evitan las prácticas de colusión, es decir el pacto entre dos personas para perjudicar a terceros” (Aptdo. IV).

⁸¹⁹ Para la Ley, según manifiesta en su Preámbulo, “[l]as ventajas de la subasta electrónica frente a la presencial son muy importantes porque ésta última adolece, hoy por hoy, de serios inconvenientes como la falta de publicidad, ya que las subastas se anuncian escasamente y su limitada difusión dificulta enormemente la concurrencia, lo que genera, a su vez, una escasa participación. También destaca la limitación de acceso de la subasta presencial, lo que complica la participación a los que concurran en persona o representados, en su caso, al obligarles a estar en un lugar, día y hora determinados. Se ha subrayado también la rigidez del procedimiento de la subasta presencial pues adolece de un rigor formalista hoy superado” (Aptdo. I).

de Subastas, bajo la responsabilidad del Secretario judicial (art. 644p2). Se trata en realidad de dos Portales, uno que se alberga en la sede electrónica del BOE⁸²⁰, donde *la convocatoria de la subasta se anunciará*, y otro en el *Portal de la Administración de Justicia*, que gestiona el Ministerio de Justicia, en el que, *igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta* (art. 645.1p1). El contenido de ambos se regula en el art. 646, al que hay que sumar el art. 668 cuando se trate de subasta de bienes inmuebles.

Por lo que al anuncio en el BOE se refiere, dispone el art. 645.1 que *contendrá exclusivamente...*

...la fecha del mismo,...

...la Oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento de ejecución,...

...su número de identificación...

...y clase,...

...así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas.

Por su parte, según el art. 645.2p1, *en el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto, que incluirá...*

...las condiciones generales...

...y particulares de la subasta...

...y de los bienes a subastar,...

...así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la misma,...

...y necesariamente el avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta que sirve de tipo para la misma. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información.

No obstante, por así disponerlo el párrafo 2 del art. 645.2, tanto en el edicto en el BOE como en el Portal de Subastas del Ministerio de Justicia, *se hará constar igualmente que...*

...se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o asume su inexistencia,...

...así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos en el artículo 650.

b) Publicidad opcional

El nuevo régimen legal sigue manteniendo la posibilidad dar publicidad adicional a la convocatoria de subasta y, como antes, *a instancia del ejecutante o del*

⁸²⁰ Vid. Circular 2/2015, de 09.10, del Secretario General de la Administrativa de Justicia, *relativa a la entrada en funcionamiento del Portal Electrónico de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado*.

ejecutado y si el Secretario judicial responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realiza (art. 645.1p2). La iniciativa correrá normalmente, aunque no es frecuente, a cargo de la propia parte ejecutante, que podrá interesar la inserción del anuncio de aquella en *medios públicos*, es decir, boletines y tablones oficiales, o *privados*, como la prensa, revistas del sector inmobiliario o, por qué no, a través Internet (portales inmobiliarios, blogs jurídicos, incluso redes sociales). No obstante, en este punto la nueva norma de 2015 supone un retroceso respecto al régimen anterior, en tanto que el ejecutante solo podrá repercutir en costas los gastos por la publicación obligatoria en el BOE (art. 645.2⁸²¹).

También el ejecutado podría promover la mayor publicidad de la subasta en busca de un mayor concurrencia de licitadores que puedan ofrecer mejor precio, interés que es compartido con los acreedores posteriores, a quienes la ley debería asimismo contemplar para solicitar tales medidas, como ha defendido VEGAS TORRES⁸²².

Por último, la nueva configuración de la subasta electrónica en el BOE no debería ser obstáculo para que seguir utilizando los edictos de convocatoria en formato papel en el tablón de anuncios de la oficina judicial, que, si bien ya sabemos que los edictos habrán de fijarse en la sede judicial electrónica, podrán servir para esa publicidad adicional que también puede acordar de oficio el Letrado de la Administración de Justicia.

1.9.- NOTIFICACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES A EFECTOS DE EJECUCIÓN

Finalizamos este epígrafe con otra previsión específica en la ejecución ordinaria, la relativa a la ejecución fundada en laudos o resoluciones arbitrales (art. 517.2.2º), respecto de la que el art. 550.1.1ºp2 dispone que, cuando el título sea un laudo, se acompañarán, además, el convenio arbitral y *los documentos acreditativos de la notificación de aquel a las partes*. Sobre el modo de practicar la notificación y el control judicial que sobre dicho acto de comunicación puede ejercerse de cara a acordar o denegar el despacho de ejecución, nada dice la LEC ni tampoco

⁸²¹ **Art. 645.2:** *Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", se hubieran generado al ejecutante.* Este desincentivo no tiene razón de ser porque la mayor publicidad se dará si el Secretario judicial responsable de la ejecución lo juzga conveniente, y resulte razonable, ponderación que es la que sirve de freno frente a eventuales abusos de quienes, a costa del ejecutado, quisieran publicitar la subasta con dispendio de medios y de dinero. En apoyo de esta crítica también podemos traer aquí el contenido del que ahora es el art. 643.3 (antes art. 646p2): *El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso, se utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del Portal de Subastas.*

⁸²² VEGAS TORRES, JAIME: *El reembolso*, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004, pág. 261.

efectúa una remisión a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23.12). En cualquier caso, a ella es necesario acudir para conocer el régimen de notificaciones y comunicaciones existente en materia arbitral, observando que, como punto de partida, se deja a las partes la total libertad de acordar el modo de comunicarse entre sí, incluso la determinación de los plazos y el cómputo de los mismos (art. 5 LArb.⁸²³). Esto se extiende también a los laudos, que habrán de ser notificados por los árbitros a las partes *en la forma y en el plazo que éstas hayan acordado* (art. 37.7 LArb.⁸²⁴).

Solo a falta de pacto expreso se deja previsto en siguiente régimen subsidiario de comunicaciones, siguiendo el siguiente orden de prelación:

- a. Comunicación en persona, análoga a la comunicación mediante entrega del art. 161 LEC, considerando, además, dos posibilidades:
 - La entrega en la persona misma del destinatario: El art. 5.a) comienza diciendo que toda notificación o comunicación se considerará recibida el día *en que haya sido entregada personalmente al destinatario*, sin especificar, y con ello dando a entender que es indiferente, el lugar.
 - La entrega a terceras personas, siempre que se encontraran en el momento de la entrega *en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección*, alternativa que el mismo art. 5.a) ofrece a la entrega no efectuada al propio destinatario.
- b. Comunicación electrónica o telemática, equivalente a la comunicación del art. 162 LEC.

⁸²³ **Art. 5 LArb.:** “Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.” *Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los actos de comunicación realizados dentro de un procedimiento judicial, se aplicarán las disposiciones siguientes:*

a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan sido designados por el interesado. En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.

b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de aquel, aunque la recepción se produzca con posterioridad. Los plazos establecidos por días se computarán por días naturales.

⁸²⁴ **Art. 37.7 LArb.:** “Plazo, forma, contenido y notificación del laudo.” [...] 7. *Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentro del mismo plazo establecido en el apartado 2.*

- c. Comunicación por correo certificado, similar a la comunicación por remisión del art. 160 LEC.
- d. Con carácter residual, la comunicación que podríamos denominar como “presunta o no recepticia”. Muy parecida al sistema de la correcta remisión del art. 155.4 LEC, si la parte emisora de la comunicación no conociera el domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección, la misma *se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario* (art. 5.a). Para ello, no obstante, exige la ley que se haya previamente realizado una *indagación razonable*, expresión un tanto sincrética para cuya comprensión pueden servir los “Criterios de Unificación” de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid alcanzados en Junta de 28.09.2006, donde se determinó que tal indagación “en todo caso deberá contemplar la indagación en los registros públicos de los que se pueda extraer algún dato que permita localizar el domicilio o residencia del interesado” (Criterio 10º, aptdo. “C”)⁸²⁵.

2.- COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

El procedimiento especial de ejecución hipotecaria, o procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, es, en realidad, el procedimiento de ejecución dineraria con determinadas *particularidades* que se encuentran, principalmente, en el Capítulo V del Título IV del Libro III de la LEC (arts. 681-698). Por esta razón el precepto que inaugura este “cauce procesal especial” (VEGAS TORRES⁸²⁶), deja claro que *la acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o*

⁸²⁵ El texto íntegro de dicho “Criterio” –de un total de quince para la aplicación de la LEC 2000 y adoptados al amparo del art. 264 LOPJ– dice: “Notificación del laudo por correo certificado y exigencias de la “indagación razonable”. A) Cabe la notificación del laudo en el “domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección” del interesado sin necesidad de que sea recogida por el propio interesado. B) La notificación del laudo ha de realizarse por medio que acredite la recepción en el domicilio del destinatario precisamente del laudo cuya ejecución se pretende, sea por la intervención de notario que acredite el contenido del envío, sea por utilizar buro-fax con acuse de recibo u otro medio que deje constancia del contenido de la comunicación y de su recepción. C) La indagación razonable sobre el domicilio debe ser evaluada en atención a las circunstancias de cada supuesto, pero en todo caso deberá contemplar la indagación en los registros públicos de los que se pueda extraer algún dato que permita localizar el domicilio o residencia del interesado. (Acuerdo adoptado por UNANIMIDAD).” (*Revista Sepin Enjuiciamiento Civil*, n.º 70, enero 2007, págs. 30-32).

⁸²⁶ VEGAS TORRES, JAIME: “La ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales* (con DE LA OLIVA y Díez-PICAZO GIMÉNEZ), 2ª ed., Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002, pág. 293.

hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título –el IV, de la ejecución dineraria–, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo (art. 681.1).

Por lo que a los actos de comunicación se refiere, buena parte de los preceptos que hemos citado en el epígrafe anterior son también aquí de aplicación, pero la proyección de la ejecución solo y exclusivamente sobre bien hipotecado y su previa valoración hacen innecesarios un buen número de esas comunicaciones judiciales. Ya no hace falta conocer el patrimonio del ejecutado, por lo que no hay que requerirle para que manifieste bienes o derechos susceptibles de embargo, ni para que aporte títulos, ni tampoco dirigirse a personas y entidades *colaboradoras* que puedan contribuir al más completo conocimiento del patrimonio de aquel. El extenso Capítulo III, relativo a la traba de bienes y a las medidas de garantía, se omite al completo porque el bien objeto de ejecución o realización ya está predeterminado. Y ya no hay que dirigirse a los acreedores anteriores a la hipoteca porque no hace falta purgar las cargas del bien hipotecado, cuyo tipo a efectos de subasta, con o sin ellas, será el mismo, razón por la cual tampoco habrá que comunicarse ni nombrar a perito tasador alguno que determine el valor de mercado de aquel.

También presentan connotaciones propias quienes han de ostentar la legitimación pasiva en el proceso de ejecución hipotecaria. Observado el Capítulo V con cierta perspectiva en general, parece que el legislador, o bien estaba pensando en todo momento al redactar la norma en un deudor que es también hipotecante (deudor hipotecante), o bien en una concepción excesivamente amplia de “deudor”, que más allá de precisión subjetivas se refiere, simplemente, al sujeto pasivo de la acción hipotecaria. Esta segunda hipótesis explicaría que el art. 686.2 prevea únicamente que se proceda a la notificación *al deudor* del despacho de la ejecución, dando por sentado que si existe un hipotecante no deudor o un tercer poseedor el órgano judicial va a acordar también respecto a ellos dicha comunicación.

Si se trata de un **deudor no hipotecante**, habrá de demandarse también al hipotecante no deudor. Así lo impone el art. 686.1, que no ofrece dudas al citar primero al deudor y luego, si existe, al segundo, sin ser ello óbice de que, siendo el objeto de la ejecución hipoteca la persecución del bien que garantiza el crédito, la auténtica parte afectada por la sustanciación del proceso será, no aquel, sino este.

Por otro lado, no cabe demandar únicamente al **tercer poseedor** sin hacerlo también frente al deudor (**SAP Madrid 12.12.2012**, Secc. 10⁸²⁷). El modo en que

⁸²⁷ **SAP Madrid 12.12.2012, Secc. 10^a** (Roj: AAP M 21648/2012): “[...] no cabe el ejercicio de la acción hipotecaria únicamente contra el tercer poseedor, dado que este por tal hecho no es deudor de la obligación garantizada, y la presencia del mismo en el procedimiento de ejecución hipotecaria resulta implícita pero clara en los preceptos referidos, mientras que por el contrario la presencia del tercer poseedor en el proceso es contingente, toda vez que depende de la propia existencia del tercer poseedor, de ahí que en ambos preceptos el legislador utiliza el término «en su caso»” (F. J. 5º).

esta figura del tercer poseedor es abordada en la ejecución hipotecaria es también diferente respecto a la ejecución ordinaria.

Y tampoco cabe utilizar la vía de la ejecución hipotecaria para reclamar al **fiador**. En la práctica forense se han observado juzgados que han despachado ejecución hipotecaria frente al fiador personal (no el fiador real, que es el hipotecante no deudor), lo que a nuestro juicio es contrario a la naturaleza del procedimiento y la finalidad del mismo establecido en el art. 681.1, que es la ejecución *directa* contra los bienes pignoralados e hipotecados, de ahí que solamente tengan legitimación pasiva el deudor, el hipotecante no deudor y el tercer poseedor (art. 685.1).

Descendiendo a un nivel más técnico, otra diferencia existente en la ejecución hipotecaria es la relativa a la **certificación de dominio y cargas** prevista en el art. 688⁸²⁸, que deberá contener, junto al extremo relativo a la titularidad del bien hipotecado y demás derechos reales, así como de las cargas inscritas que, en su caso, lo graven, es decir, las mismas circunstancias ya exigidas por el art. 656, la constancia de la carga específica de la hipoteca en que se funda la ejecución, fundamental dada su constitución registral, de tal modo que el Registrador habrá de expresar *que la hipoteca a favor de ejecutante se halla subsistente y sin cancelar, o en su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro* (art. 688.1).

Por insólito que pueda parecer, hasta hace muy poco tiempo entre esas menciones que exige el art. 688 no se encontraba la de informar de cuál era (si así se hubiese pactado) el domicilio vigente en el Registro a efectos de las notificaciones y requerimientos del art. 686.1, dato transcendental para la propia viabilidad del procedimiento, como más tarde estudiaremos con más detalle. Este problema no se ha suscitado cuando las certificaciones se expiden *literales*, es decir mediante fotocopias adveradas por el Registro de las hojas registrales, al poder el órgano judicial examinar de primera mano la vida registral completa de la finca y localizar la cláusula donde el deudor ha dejado señalado dicho domicilio. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando las certificaciones son expedidas *en relación*, como se supone que deben expedirse por defecto si no se especificare cuál de las dos cla-

⁸²⁸ **Art. 688:** “Certificación de dominio y cargas. Sobreseimiento de la ejecución en caso de inexistencia o cancelación de la hipoteca.” 1. *Cuando la ejecución se siga sobre bienes hipotecados, se reclamará del Registrador certificación en la que consten los extremos a que se refiere el apartado 1 del artículo 656, así como inserción literal de la inscripción de hipoteca que se haya de ejecutar, expresándose que la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 656.*

2. *El registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que se ha expedido la certificación de dominio y cargas, expresando su fecha y la existencia del procedimiento a que se refiere.*

En tanto no se cancele por mandamiento del Secretario judicial dicha nota marginal, el registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución.

3. *Si de la certificación resultare que la hipoteca en la que el ejecutante funda su reclamación no existe o ha sido cancelada, el Secretario judicial dictará decreto poniendo fin a la ejecución.*

ses se pide (arts. 232p1 LH⁸²⁹ y 336 RH⁸³⁰), pero que no siempre se cumple en la práctica⁸³¹. Salvo excepciones, hasta ahora el Registrador se ha limitado a informar únicamente de la titularidad del bien, la vigencia de la hipoteca y de las cargas sobre la finca, pero no del domicilio pactado al no solicitarse expresamente este dato. Por ello era necesario reformar con urgencia el art. 688.1 para corregir el defecto, como afortunadamente ha hecho la Ley 19/2015 al añadir el inciso *así como inserción literal de la inscripción de hipoteca que se haya de ejecutar*⁸³², de modo que el órgano judicial podrá conocer ya el contenido completo de la misma, lo que le valdrá no solo para saber cuál es el domicilio hipotecario inscrito, sino también para un mejor control de oficio del eventual carácter abusivo de otras cláusulas contractuales que hubieran pasado, a su vez, el filtro del Registrador al calificar el título (cfr. art. 552.p2).

En cualquier caso, toda esta problemática se superaría si, como proponemos en este estudio, se adelantara en el procedimiento hipotecario el momento en que esta certificación ha de estar a disposición judicial, exigiendo que tenga que ser acompañada con la demanda.

⁸²⁹ **Art. 232 LH:** *Las certificaciones se expedirán literales o en relación, según se mandaren dar o se pidieren.*

Las certificaciones literales comprenderán íntegramente los asientos a que se refieran.

Las certificaciones en relación expresarán todas las circunstancias que los mismos asientos contuvieren, necesarias para su validez; las cargas que a la sazón pesen sobre el inmueble o derecho inscrito, según la inscripción relacionada, y cualquier otro punto que el interesado señale o juzgue importante el Registrador.

⁸³⁰ **Art. 336 RH:** *En las solicitudes deberá expresarse si la certificación ha de ser literal o en relación y el tiempo a que haya de referirse. Si no se expresare la clase de certificación, se entenderá que ha de expedirse en relación. Cuando no se determinare el tiempo a que haya de referirse, se hará la correspondiente busca desde la fecha de la expedición hasta la del asiento de que deba certificarse y, en su defecto, hasta la del establecimiento o reconstitución, en su caso, del Registro.*

⁸³¹ Según el Registro de que se trate, este precepto no siempre se ha respetado y se han expido en forma literal, pese al silencio del órgano judicial sobre la clase de certificación solicitada.

⁸³² Como alternativa a la buena solución adoptada por el legislador, también se habría podido modificar el precepto en el sentido de exigir al Registrador que expresara, “asimismo”, el dato relativo al domicilio hipotecario con un inserto en el mandamiento de certificación de cargas en el que se hubiera añadido un párrafo que hubiera podido tener el siguiente tenor: “Además, a los efectos del art. 686.1 LEC y conforme al art. 232 LH, deberá expresar, de haber sido fijado, el domicilio que hayan podido establecer el deudor y, en su caso, el hipotecante no deudor, para la práctica de requerimientos y notificaciones”. En cualquier caso, con reforma legal o sin ella, la ausencia de esa mención expresa en el mandamiento no tendría que haber servido de excusa a los Registradores para no hacerlo, ya que, si bien es cierto que pueda ser discutible que el art. 232p3 LH así lo exija de forma concluyente, no lo es menos que saben que las certificación de cargas que se les han requerido lo han sido a efectos de la ejecución hipotecaria y que por ello ese *punto*, como dice la norma hipotecaria aludida, es de aquellos que debería juzg[ar] importante el Registrador.”

2.2.- EL PROBLEMA DEL DOMICILIO HIPOTECARIO

2.2.1.- La fijación del domicilio como presupuesto de la ejecución hipotecaria

Uno de los mayores problemas que existen en el procedimiento judicial hipotecario viene suscitado, con importantísimas repercusiones, por uno de los dos pilares que lo caracterizan. Como sabemos, requisito insalvable para poder acudir al mismo es el de que en la escritura de constitución de la garantía hipotecaria, además de determinarse un precio de tasación de finca o bien hipotecado a efectos de subasta (art. 682.2.1^º), *conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones* (art. 682.2.2^º⁸³³). Asimismo, para reforzar la protección del acreedor hipotecario y garantizar que el proceso se sustancie lo más rápidamente posible, el cambio de dicho domicilio está sometido a ciertas restricciones (art. 683).

El fundamento de este requisito ‘sine qua non’ de predeterminar el comúnmente llamado “domicilio hipotecario”, pese a que el mismo no afecta a la válida constitución de la propia hipoteca⁸³⁴, viene explicado con gran claridad por la **RDGRN 30.06.2014**⁸³⁵:

“La fijación del domicilio a efectos del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados tiene la doble finalidad de asegurar al acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del deudor, por un lado, y por

⁸³³ **Art. 682.2:** *Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:*

1.º *Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.*

2.º *Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones. También podrá fijarse, además, una dirección electrónica a los efectos de recibir las correspondientes notificaciones electrónicas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 660.*

En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.

⁸³⁴ Para la **RDGRN 30.06.2014**, la falta de fijación del domicilio, o su defectuosa designación, “no comporta, al no existir precepto alguno que así lo disponga, la ineficacia de la hipoteca ni constituye obstáculo para la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la obligada exclusión de los pactos relativos al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados y sobre ejecución extrajudicial” (F. D. 2º). Al respecto, una de las argumentaciones del Notario cuyo recurso dio pie a la resolución, según refiere la misma, fue la que de que “la Dirección General, reiteradamente desde 1911, entiende que la fijación de un domicilio se requiere únicamente para la aplicación de las particularidades procesales del procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados, por lo que no puede afectar a la validez y eficacia de la hipoteca y no impide su inscripción. (Resolución de 7 de febrero de 2001, resolución de 26 de enero de 2004), como acertadamente señala la registradora en su escrito de calificación.” (Hecho “III”).

Este criterio de que la falta del domicilio “en modo alguno afectan a la validez y eficacia de la hipoteca” se observa también en la **RDGRN 26.01.2004** (BOE de 08.03.2004; F. D. 2º).

⁸³⁵ BOE de 29.07.2014.

otro, garantizar al deudor el exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas. En cuanto a lo primero, se trata en definitiva de dotar de certeza a la actuación del acreedor y del juzgado y dar fuerza jurídica a las notificaciones y requerimientos que se dirijan al domicilio señalado. Y en cuanto a lo segundo, el régimen sobre las notificaciones personales del deudor en el domicilio señalado constituye un trámite esencial, que no puede ser suplido por ningún otro medio de comunicación, y cuya infracción determina no solo la nulidad del trámite, sino la de todo el procedimiento y, con él, la propia adjudicación (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1994 [RJ 1994, 7800], y 1 de junio de 1995), ya que está vinculado al respecto del principio constitucional de tutela judicial efectiva. Se garantiza con ello que el deudor pueda satisfacer el importe de lo adeudado con anterioridad a la ejecución, intervenir para oponerse a cualquier irregularidad del procedimiento, personarse en la subasta para pujar o para provocar la subida de la puja, y contribuir en definitiva a realizar mejor el crédito del acreedor, lo que aminorará la responsabilidad universal del artículo 1911 del Código Civil del deudor” (F. D. 2º)⁸³⁶.

De forma similar lo entendió la **STS 19.05.2008**⁸³⁷:

“La finalidad de tal requisito era doble, ya que, por un lado se buscaba la rapidez y simplificación del procedimiento y, por otro, tutelar la seguridad jurídica tanto del acreedor, que conocía así, cualquiera que fueren los deudores o terceros poseedores que adquiriesen la finca, el domicilio donde debería practicarse el requerimiento, como de los propios deudores y propietarios de la finca gravada, que de este modo sabrían el lugar donde notarial o judicialmente iban a realizarse los requerimientos y que, por ello, poniendo una mínima diligencia no iban a verse sorprendidos ante un requerimiento del que no tuvieran noticia” (F. J. 4º).

Según la RDGRN 30.06.2014 antes citada y “como ya ha señalado en otras ocasiones este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 7 de febrero y 9 de julio de 2001, y 14 de enero de 2008), la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos del citado procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–”⁸³⁸.

Pero, como se puede apreciar, la Dirección General no distingue entre la omisión del domicilio en la escritura y la designación deficiente o defectuosa del mismo, otorgando a ambos supuestos la misma consecuencia de vetar la ejecución directa de la hipoteca, lo que resulta, cuando menos, discutible. Si hablamos de falta de designación, la contravención del art. 682.2.1º es clara y la denegación del

⁸³⁶ La Dirección General insiste así en una idea ya expresada noventa años antes, cuando en su **Resolución de 15.12.1925**, al referirse al procedimiento sumario de los arts. 130 y ss. de la LH y la consignación en la escritura de un domicilio, entendía que el mismo establecía “con la doble finalidad de garantizar al deudor, que lo fija, el oportuno y exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas, al mismo tiempo que asegura al acreedor contra las dilaciones y entorpecimientos que por razón de los cambios de residencia o por mala fe del deudor sufrirían los trámites procesales”.

⁸³⁷ Roj: STS 2006/2008.

⁸³⁸ F.D. 2º. En el mismo sentido, MARTÍNEZ SANTOS, quien añade que tal “imposibilidad” “no quedará salvada por el hecho de que en la póliza que documenta la obligación garantizada se consigne un domicilio del deudor, ni por el hecho de que sí figure en la escritura el domicilio del hipotecante no deudor” (*Sobre la ejecución hipotecaria...*, op. cit., pág. 84).

despacho de ejecución parece ineludible ante un defecto que se considera insubsanable, aun tratándose de una “omisión involuntaria” de la entidad bancaria, como ocurrió en el **AAP Madrid (Sec. 14) 13.07.2011**⁸³⁹. Muy al contrario, si en la escritura hipotecaria los deudores incurren en error en la designación del domicilio y, no siendo conscientes de ello, no lo subsanan posteriormente, difícilmente podrá, primero el Registrador al inscribir y luego el Juez al presentarse la demanda, controlar de oficio tal circunstancia y denegar la ejecución. El domicilio corresponderá con mucha frecuencia con el de la finca hipotecada o, en menor medida, con el de la comparecencia ante el Notario al otorgar la escritura, correspondiendo en ambos casos con una dirección de la que solo ‘a posteriori’, al practicar el requerimiento de pago y/o la notificación del despacho de la ejecución, se podrá detectar si es defectuosa (por ejemplo, la calle es correcta, pero no el ordinal) o inexistente. Acaecida una de estas dos situaciones, el efecto no podrá ser el de decretar la nulidad de lo actuado, sino la comunicación edictal (STS 04.02.1992; art. 686.3) o, si acatamos la jurisprudencia más reciente impuesta por el Tribunal Constitucional, cristalizada además en la reforma realizada por Ley 19/2015 –como estudiaremos más tarde–, la averiguación del domicilio real de la parte ejecutada.

2.2.2.- Caracteres del domicilio hipotecario

Se han debatido con detalle en la doctrina y en la jurisprudencia los términos de la exigencia contenida en el art. 682.2.2º, heredero del antiguo art. 130 LH, que viene a plantear varias cuestiones:

▪ **Cuestión n.º 1: *Quién ha de fijar un domicilio.*** A pesar de que el art. 682.2.2º obliga solamente al *deudor* a que fije un domicilio para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones, la doctrina ya ha advertido la incongruencia que supone tal previsión⁸⁴⁰, primero, con el art. 685.1, que exige dirigir la demanda no solo frente al deudor, sino también, si no es él el hipotecante, frente al hipotecante no deudor (o, en su caso, al tercer poseedor); y, segundo, con el art. 683.1, que sí que se refiere al hipotecante no deudor junto al deudor como aquellos sujetos que *podrán cambiar el domicilio que hubieren designado*. Por ello, debiendo hacer una interpretación lo más laxa posible del concepto “deudor”, asimilándolo a “sujeto pasivo”, hay que entender que también el hipotecante no deudor debe consignar su domicilio en la escritura de constitución de hipoteca. Lo contrario supone desfigurar uno de los rasgos característicos de la ejecución especial hipotecaria, la fijación previa de un domicilio convencional, que en la teoría (ya veremos que no es así en la práctica) tratar de garantizar la celeridad del proceso y su propio conocimiento de las comunicaciones que le pueda dirigir el acreedor.

⁸³⁹ Roj: AAP M 11310/2011 (F. D. 2º).

⁸⁴⁰ FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO: “La averiguación del domicilio del demandado...”, op. cit., pág. 16; ACHÓN BRUÑÉN: *Tratado práctico...*, op. cit., pág. 865; ADÁN DOMÈNECH, FEDERIC: “La práctica forense de la ejecución hipotecaria. Respuestas a sus principales problemas de aplicación”, *Riedpa* n.º 3, 2008, pág. 15 (www.riedpa.com).

El deudor y el hipotecante no deudor han de tener plena libertad para designar aquel domicilio que, en teoría, será el que les convenga para que les sean efectuadas por el acreedor las comunicaciones de toda índole relacionadas con la hipoteca. Esa será la apariencia oficial en todos los contratos, pero, de hecho, lo habitual será que la indicación de tal lugar venga contenida en una más de las cláusulas de la escritura hipotecaria que redacta la parte acreedora y que se presenta como minuta al Notario.

Lo que sí ha sido destacado de forma unívoca por la doctrina es que el deudor no puede designar como domicilio el que lo sea del propio acreedor hipotecario⁸⁴¹. También existen resoluciones judiciales sobre el particular, como el **AAP Toledo (Sec. 1ª) 14.11.1992**⁸⁴², que reputó nulas las notificaciones dirigidas a los deudores y practicadas en la sede de la Caja de Ahorros, a la sazón el domicilio paccionado, entre otros motivos, en virtud de los arts. 6.4 CC, 260 y ss. LEC 1881 y del propio art. 130p1 LH, por la “inviabilidad práctica” de garantizar la efectividad de la comunicaciones ante “la paradójica situación de que sea la parte contraria del proceso judicial del que la notificación trae causa, quien deba trasladar la cédula al interesado (F. D. 5º).

▪ **Cuestión n.º 2: Qué se entiende por domicilio.** La segunda cuestión se refiere a la determinación del elemento objetivo de la norma:

[a'] **Delimitación conceptual. Límites físicos:** A excepción de lo que ocurre con la hipoteca sobre establecimientos mercantiles, en que *se tendrá necesariamente “por domicilio” el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca* (art. 682.2 ‘in fine’), no tenemos una definición legal de ese *domicilio* que ha de fijar el deudor para requerimientos y notificaciones, lo que invita a pensar que la plena libertad negocial del deudor para efectuar dicha designación se extiende también a su aspecto material. Hasta tal punto es así que ADÁN GARCÍA entiende que “incluso pueda fijarse un domicilio ficticio, dado que al ser una cuestión de hecho escapa a la calificación registral la determinación de su realidad. También puede designarse como domicilio un trastero, una plaza de garaje⁸⁴³ o un

⁸⁴¹ GUZMÁN FLUJA: “Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria...”, op. cit., epígrafe III. El autor, que cita en el mismo sentido a MONTERO AROCA, MONSERRAT VALERO, JURADO JURADO y a DOMÍNGUEZ LUELMO, entiende que “se trata de evitar que el acreedor pueda aprovechar determinadas situaciones de superioridad sobre el deudor para establecer el domicilio que más le pueda favorecer (sería el caso de las entidades bancarias crediticias que al hilo de las condiciones generales de la contratación podrían introducir cláusulas de fijación de domicilio de este estilo)”; ídem MARTÍNEZ SANTOS: *Sobre la ejecución hipotecaria...*, op. cit., pág. 82.

⁸⁴² AC\1992\1586.

⁸⁴³ No le pareció así al Notario promotor del recurso que dio lugar a la **RDGRN 30.06.2014**, antes citada: “No me puedo imaginar que se designe un aparcamiento para recibir notificaciones y requerimientos, dado que las notificaciones tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión y los requerimientos, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta, [artículo 202 del Reglamento Notarial [RCL 1945, 57]]. No parece para nada idóneo que se designe una plaza de garaje como domicilio, y evidentemente no es ésta la voluntad del deudor” (punto V de los Hechos); la Dirección General, que tuvo que pronunciarse porque el Registrador denegó la inscripción de la hipoteca por “no quedar claro cuál es el domicilio para la práctica de

solar pues es una cuestión que queda al arbitrio de los interesados quienes conocen la trascendencia de su determinación que puede llegar a producirles indefensión, aunque en estos casos será una indefensión buscada”⁸⁴⁴. Para ÁLVAREZ, en la misma sintonía, las plazas de garaje o parking son lugares susceptibles de ser designados a estos efectos, además de locales industriales, oficinas, comercios o almacenes, pues el deudor y el hipotecante no deudor tienen “libertad absoluta”, sin que ello pueda “ser considerado como un obstáculo o un defecto, a pesar de que pueda entenderse como algo inapropiado de hecho”⁸⁴⁵.

Nos detenemos en el ejemplo del solar o de la parcela, supuesto bastante recurrente en la práctica, sobre todo en ámbitos rurales o en zonas en proceso de urbanización, no siendo raro encontrar escrituras de hipoteca con designaciones de domicilio referidas a la finca hipotecada y con señas identificativas tales como “SECTOR UPR, POLÍGONO X, PARCELA 2...”. Esta indefinición hace perder desde el principio la finalidad perseguida: la rápida localización del deudor en el lugar que él mismo ha dejado designado. La supuesta libertad contractual del deudor en este punto y la también supuesta plena conciencia del mismo de las mayores dificultades en su localización que una designación de tal naturaleza podrían acarrear habrían de despejar cualquier duda sobre su admisibilidad. De hecho, la DGRN, dando a entender que se trata de una cuestión más procesal que registral, ha admitido como domicilio hipotecario un solar y sus consecuencias las ha derivado al eventual proceso de ejecución judicial⁸⁴⁶.

[b'] **Límites cuantitativos.** Al hilo de lo anterior, también se ha planteado si es posible consignar más de un lugar, por cuanto el art. 682.2.2º exige que en la escritura conste *un domicilio*, sin perjuicio de tras la Ley 19/2015 también es po-

notificaciones”, al designarse dos fincas, siendo una de ellas el aparcamiento y la otra una vivienda, terminó revocando la nota de calificación: “la interpretación más racional y lógica es la de que se quiere recibir las notificaciones en la vivienda y no en la plaza de garaje en caso de ejecución hipotecaria de cualquiera de los dos inmuebles” (F. D. 3).

⁸⁴⁴ ADÁN GARCÍA, M.ª EMILIA: “La ejecución directa de los bienes hipotecados. Un procedimiento de base registral”, *Derecho inmobiliario: problemática actual* (Manuales de Formación continua n.º 50), CGPJ, Madrid, 2009, págs. 819.

⁸⁴⁵ ÁLVAREZ ÁLVAREZ, HENAR: “El domicilio del deudor en la ejecución hipotecaria”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (RCDI) n.º 684, julio-agosto 2004 (ed. Digital V-Lex, ref. VLEX-328745), epígrafe I.b) ‘in fine’.

⁸⁴⁶ En el caso conocido por la **RDGRN 26.01.2004** (BOE de 08.03.2004), el Registrador suspendió la inscripción de la hipoteca al haberse señalado como domicilio un solar “donde no es posible efectuar el requerimiento en la forma prevista por el artículo 686 de la misma Ley (ya que no es factible pensar que en un solar se encuentre el deudor, hipotecante, familiar o alguna de las personas que señala el citado artículo)” (Hechos, punto II). Pero, descartado por el Centro directivo tal factor como invalidante de la propia hipoteca y entrando a conocer sobre la viabilidad del solar como domicilio, considero: “si se tiene en cuenta: la posible existencia sobre dicha finca de una edificación no inscrita; la competencia del Secretario Judicial para la dirección de los actos de comunicación [...]; y especialmente las estrictas previsiones que en sede de actos de comunicación se contienen en el artículo 155.4 párrafo segundo, en relación con el 158 y 161, todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá de concluirse que la fijación de domicilio ahora cuestionada debe ser reflejada en la inscripción, remitiendo cualesquiera dificultades para la efectividad de tales comunicaciones por razón del lugar señalado, al proceso que en su día pueda entablarse para la ejecución de la hipoteca” (F. D. 2º).

sible fijar *una dirección electrónica a los efectos de recibir correspondientes “notificaciones” electrónicas*, lo que se introduce con carácter meramente complementario y sin carácter sustitutivo ni alternativo respecto del domicilio físico, único hábil para los requerimientos.

La respuesta dada por la doctrina académica⁸⁴⁷, la emanada de la DGRN y por la jurisprudencia menor es que afirmativa, y los motivos para pretender la consignación registral de dos o más domicilios pueden ser variopintos: que en el negocio jurídico concurren un deudor no hipotecante y un hipotecante, debiéndoseles permitir que consignen cada uno su propio domicilio (RDGRN 05.09.1998⁸⁴⁸); que se trate de dos de deudores hipotecantes propietarios en proindiviso del mismo inmueble (RDGRN 07.02.2001⁸⁴⁹); o que estemos ante el domicilio del nudo propietario y del usufructuario (AAP Girona, Secc. 2ª, 03.07.1995, F. J.º único⁸⁵⁰).

[c'] **Límites territoriales.** Aunque lo habitual será que el domicilio coincida con el del propio bien inmueble hipotecado, en ningún precepto de la LEC o de la legislación hipotecaria ello se impone como obligatorio⁸⁵¹. Así pues, el inmueble

⁸⁴⁷ MONTERO AROCA: “nada obsta a la existencia de dos domicilios, uno para el deudor y otro para el hipotecante no deudor. La norma habla de «un domicilio», pero esta expresión no puede entenderse en el sentido de que solo puede designarse uno” (*Las ejecuciones hipotecarias...*, op. cit., pág. 314); el autor cita la STS 23.10.1992 (caso de dos propietarios pro indiviso que designaron dos domicilios), el AAP Girona 03.07.1995 (sendos domicilios de nudo propietario y de usufructuario de la finca hipotecada), así como la RDGRN 05.09.1998, donde, ante la negativa del Registrador a inscribir, expresamente se dijo que “la expresión «un domicilio» no parece que tenga el sentido de un solo domicilio, sino más bien la palabra «un» puede ser un artículo indeterminado; además la expresión de distintos domicilios para hipotecante y deudor para facilitar en su día el desarrollo del procedimiento”. En el mismo sentido, BARBANCHO TOVILLAS, “Artículo 682”, op. cit., pág. 3091; ACHÓN BRUNÉN: “que el mentado precepto se refiera a «domicilio» en singular no debe evitar que puedan señalarse varios domicilios [...]. No solo se considera posible designar varios domicilios cuando fueren varios los deudores o cuando existiere un deudor y un hipotecante no deudor, sino también cuando sea una misma persona con varias residencias a lo largo del año (residencia temporal veraniega y domicilio habitual) (*Tratado práctico...*, op. cit., pág. 865). En contra de esto último, MONTERO AROCA: “No es admisible que una misma persona designe dos domicilios, pues ello impondría al acreedor la carga de realizar dos requerimientos y notificaciones. Esta posibilidad es contraria a la finalidad de la norma” (*Tratado de ejecuciones hipotecarias*, op. cit., Cap. 4º, epígrafe 3º, III (TOL1.477.295). Coinciden en la consideración de que supondría una carga excesiva para el acreedor DÍAZ FRAILE, “confirmando la tesis de MONTSERRAT VALERO”, citados por ADÁN GARCÍA (“La ejecución directa...”, op. cit. pág. 818).

⁸⁴⁸ BOE de 02.10.1998.

⁸⁴⁹ BOE de 23.03.2001. En contra de la negativa del Registrador, la Dirección General consideró que “teniendo en este caso cada uno de los deudores su propio domicilio, no hay inconveniente para que señalen los dos domicilios para la realización de las notificaciones y requerimientos, en cuyo caso, llegado el momento de la ejecución, en ambos domicilios deberán practicarse aquellos” (F. D. 3).

⁸⁵⁰ AC\1995\1772.

⁸⁵¹ MAGRO SERVET da a entender lo contrario: “[...] del art. 683 LEC se desprende la exigencia de fijar un domicilio en el que llevar los actos de requerimiento, *que lo será el del propio bien inmueble inscrito* en el Registro de la propiedad sobre el que recae el préstamo hipotecario” (la cursiva es nuestra) (“Alcance de la exigencia del art. 686 LEC de llevar a cabo el requerimiento en el inmueble hipotecado. Posibilidades de llevarlo a cabo en otro domicilio si es real del deudor. STC 28/2010, de 27

podrá estar en Santander y el domicilio a efectos hipotecarios en Palma de Mallorca, por ejemplo. Nada impide tampoco que se pueda fijar en el extranjero⁸⁵², y ello con independencia de que el acreedor no llegue a aceptar tal circunstancia por los mayores problemas y costes que potencialmente se podrían derivar de tal deslocalización.

▪ **Cuestión n.º 3: Limitaciones en el cambio de domicilio hipotecario: el art. 683.** De forma específica se establecen en el art. 683⁸⁵³ una serie de reglas para poder cambiar el domicilio que haya de ser el eficaz para requerimientos y notificaciones. Es de destacar que las mismas solo se imponen al deudor y al hipotecante no deudor, consecuencia de que la obligación de fijar un domicilio en la escritura para aquellos efectos solo se exige al deudor (y al hipotecante no deudor), pero no al acreedor (art. 682.2.2º), lo que revela, de entrada, una desigualdad de partes.

En el caso de las hipotecas inmobiliarias, con carácter general *será necesaria la conformidad del acreedor*, si bien se prevén excepciones con las que *el deudor y el hipotecante no deudor podrán cambiar el domicilio sin el consentimiento* de aquel, que son las indicadas en el art. 683.1.1º:

- Tratándose de un solo bien inmueble o finca, cuando el cambio de domicilio se produzca *dentro de la misma población* designada en la escritura (criterio convencional).

de abril de 2010”, *Práctica de Tribunales* n.º 75, octubre 2010 (ed. digital, ref. La Ley 12199/2010), La Ley, Madrid, epígrafe 1.

⁸⁵² MONTERO AROCA, *Las ejecuciones hipotecarias...*, op. cit., pág. 312, nota al pie n.º 46.

⁸⁵³ **Art. 683:** “Cambio del domicilio señalado para requerimientos y notificaciones.” 1. *El deudor y el hipotecante no deudor podrán cambiar el domicilio que hubieren designado para la práctica de requerimientos y notificaciones, sujetándose a las reglas siguientes:*

1.ª *Cuando los bienes hipotecados sean inmuebles, no será necesario el consentimiento del acreedor, siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población que se hubiere designado en la escritura, o de cualquier otra que esté enclavada en el término en que radiquen las fincas y que sirva para determinar la competencia del Juzgado.*

Para cambiar ese domicilio a punto diferente de los expresados será necesaria la conformidad del acreedor.

2.ª *Cuando se trate de hipoteca mobiliaria, el domicilio no podrá ser cambiado sin consentimiento del acreedor.*

3.ª *En caso de hipoteca naval, bastará con poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio.*

En todo caso, será necesario acreditar la notificación fehaciente al acreedor.

2. Los cambios de domicilio a que hace referencia el apartado anterior se harán constar en el Registro por nota al margen de la inscripción de hipoteca, bien mediante instancia con firma legitimada o ratificada ante el Registrador, bien mediante instancia presentada telemáticamente en el Registro, garantizada con certificado reconocido de firma electrónica, o bien mediante acta notarial.

3. A efectos de requerimientos y notificaciones, el domicilio de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición. En todo caso será de aplicación la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 660.

- Tratándose de varias fincas, cuando el nuevo domicilio se fije en cualquiera de las poblaciones donde estén *enclavada[s]*, no afectando por ello a la competencia del Juzgado⁸⁵⁴ (criterio real).

Estos cambios han de obligatoriamente hacerse constar por el deudor e hipotecante no deudor en el Registro *por nota al margen de la inscripción de hipoteca* (art. 683.2), trámite que la reforma de 2015 viene a facilitar, quizá consciente de su escaso cumplimiento, permitiendo que, junto al acta notarial, pueda realizarse directamente *Propiedad, bien mediante instancia con firma legitimada o ratificada ante el Registrador, bien mediante instancia presentada telemáticamente en el Registro* (ídem).

A nuestro entender, si la competencia territorial del Juzgado viene determinada por la ubicación del bien inmueble hipotecado (art. 684.1.1^º) y ni la LEC y la LH exigen que las partes tengan que pactar como domicilio hipotecario un lugar situado dentro del partido en que dicho órgano ejerce su jurisdicción, no hay razón para constreñir la libertad de las mismas para su alteración posterior, tanto más cuando, como ya hemos estudiado, el domicilio que indique el deudor no tiene por qué ser el de su residencia o domicilio real. A lo sumo podría limitarse la plena libertad en la modificación del mismo, sin necesidad de contar con el consentimiento de la contraparte, a lugares situados en territorio nacional, y solo si de trasladarse al extranjero se tratara, entonces sí que habría de recabar el mismo por mor de la, en principio, mayor dilación y complicación en la tramitación del eventual proceso judicial, aunque en el ámbito de la Unión Europea esto resulta cada día menor.

2.2.3.- La ineficacia del domicilio hipotecario y la doctrina del Tribunal Constitucional: Hacia el desmantelamiento de la ejecución hipotecaria

a) *La posición excesivamente garantista del Tribunal Constitucional*

Afrontamos en este epígrafe uno de los temas más complejos de este trabajo, que ya de por sí daría para otra tesis doctoral monográfica. El procedimiento judicial hipotecario pivota en buena medida, como acabamos de ver, en torno al domicilio donde practicar con la parte ejecutada los actos de notificación y requerimiento, habiéndose desarrollado, ya desde 1909⁸⁵⁵, un conjunto de normas tendientes a hacer valer la eficacia de las comunicaciones allí realizadas. Sin embargo, estamos ante un excelente ejemplo de cómo el Derecho positivo está siendo incumplido en la práctica al amparo (nunca mejor dicho) de la doctrina del Tribunal Constitucional, que, sobre todo tras las últimas reformas operadas en la LEC antes del presente año 2015 –especialmente con la Ley 13/2009, aunque también con la Ley 19/2009–, le han llevado a reafirmarse expresamente en su interpretación

⁸⁵⁴ La dicción literal de la disposición es un tanto enrevesada: *...o de cualquier otra [población] que esté enclavada en el término en que radiquen las fincas y que sirva para determinar la competencia del juzgado.*

⁸⁵⁵ Ley de 21 de abril de 1909, con referente en la *Ley Hipotecaria para las Provincias de Ultramar*, de 14 de julio de 1893.

excesivamente garantista y proteccionista de la figura de la parte demandada o ejecutada en lo que a actos de comunicación se refiere. Esta situación no solo concierne a la ejecución hipotecaria (STC 122/2013, de 20.05, que enseguida abordaremos), sino que también se han visto afectados procedimientos que llevaban años reclamando mayor celeridad para que exista una verdadera tutela judicial, como es el caso del juicio verbal de desahucio (**STC 30/2014**, de 24.02). Incluso el resto de ejecuciones de títulos extrajudiciales diferentes del privilegiado del hipotecario también se están viendo comprometidas (**STC 126/2014**, de 24.07), todas ellas por la, en demasiadas ocasiones, tenaz localización del demandado o del ejecutado, sin importar o minusvalorando cuál haya su comportamiento o diligencia exigible como problema de fondo.

En lo que afecta a la ejecución hipotecaria, no hemos encontrado mejor explicación para resumir la situación que la que ofrece MARTÍNEZ SANTOS, en palabras publicadas en el año 2013 y de absoluta vigencia en la actualidad:

“[...] en las escasas sentencias del Tribunal Constitucional que se han ocupado de la ejecución hipotecaria desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, **se olvida de su naturaleza y características, y se la compara con cualquier otro proceso** ordinario para aplicar la doctrina de la indefensión de los actos de comunicación”⁸⁵⁶.

En efecto, al máximo intérprete de la Constitución española parece resultarle indiferente que estemos ante un proceso con connotaciones especiales, creado específicamente para dinamizar el mercado financiero y favorecer la circulación del crédito mediante la puesta a disposición de los acreedores de un procedimiento que les garantice una rápida tutela frente a los deudores⁸⁵⁷; que estos deudores lo son por propia voluntad en la satisfacción de sus propios intereses (adquisición de vivienda, financiación para la compra de otros bienes y servicios, etc.); y que en muchas ocasiones los casos la indefensión material que se ha invocado ha sido propiciada por ellos mismos, quienes, incumpliendo las prescripciones legales relativas al cambio de domicilio, ese que han debido fijar ‘motu proprio’ al constituir la hipoteca, han mudado otro lugar, no digamos ya sin contar con el consentimiento del acreedor, sino sencillamente sin avisarle de su nuevo paradero a efectos de hacer posible las comunicaciones entre unas partes unidas por un vínculo contractual que es de obligado cumplimiento (cfr. arts. 1254 y 1256 CC) y que no se extinguirá hasta la completa amortización del crédito concedido.

Por tanto, el nudo gordiano se centra en determinar si, habiendo resultado infructuosa la comunicación en el domicilio hipotecario, y surgidas dudas razona-

⁸⁵⁶ *Sobre la ejecución hipotecaria...*, op. cit., pág. 159 (el destacado es nuestro).

⁸⁵⁷ Nos sumamos al planteamiento de VEGAS TORRES cuando expone que “una alteración del régimen de protección del crédito hipotecario –prescindiendo, por ejemplo, de las especialidades en materia de ejecución– podría dificultar y encarecer la financiación de las empresas y de las familias (adviértase la importancia actual del crédito hipotecario en la adquisición de vivienda), con el consiguiente impacto negativo sobre la economía nacional y, en último término, sobre el bienestar de millones de ciudadanos” (“La ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, op. cit., pág. 295).

bles de que el mismo sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible al órgano judicial que agote las posibilidades de averiguación de su paradero o si, por el contrario, es correcto que acuda sin más trámite a los edictos porque de otro modo se cumpliría la 'lex specialis' del proceso hipotecario, tanto en su letra, como en su espíritu. A lo anterior responde el TC con su reiterada doctrina referida la comunicación edictal, de imperioso carácter subsidiario, de modo que obliga al órgano judicial, pese a aquella disposición legal, a esforzarse en conseguir la comunicación efectiva con las partes en el domicilio real de las mismas. Al no distinguir dicho tribunal la clase de proceso en la que no encontramos, hemos asistido con ello a una derogación 'de facto' de lo que el domicilio hipotecario viene representando en nuestra tradición jurídica y de la orden dispuesta por el art. 686.1 de requerir de pago *en el domicilio que resulte vigente en el Registro*. Tal fue lo que dejó dicho la **STC 245/2006**, de 24.07⁸⁵⁸:

"[...] una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario y que figura en el Registro sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible (al órgano jurisdiccional) que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el art. 24.1 CE, el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las actuaciones" (F. J. 2).

De igual modo, en la **STC 28/2010**, de 27.04⁸⁵⁹, vino a poner en tela de juicio la actuación del Juzgado de 1ª Instancia, pese a que entendió como "único domicilio válido" el inscrito en el Registro de la Propiedad por mandato del art. 686.1, que entonces no estaba todavía neutralizado por la actual reforma realizada por Ley 19/2015:

"En relación con el procedimiento de ejecución hipotecaria y con la previsión legal de que se practiquen los requerimientos y las notificaciones en el domicilio fijado en la escritura de constitución de la hipoteca y que resulte vigente en el Registro, este Tribunal tiene declarado en relación con lo que al respecto se disponía en los arts. 130 y 131 de la Ley hipotecaria (LH), en la redacción anterior a la dada por la disposición final novena LEC, doctrina perfectamente trasladable al actual art. 686 LEC, que ningún reproche puede dirigirse a aquella previsión legal y, en consecuencia, tampoco a la actuación judicial que lleve a efecto el requerimiento de pago «en el domicilio legalmente previsto *ex arts. 130 y 131.3 LH*, esto es, en el pactado por las partes para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones en la escritura de los préstamos hipotecarios y que figuraba en el Registro, sin que... se hubiese hecho uso de la facultad de cambiar el domicilio fijado a tales efectos (art. 130 LH)» (STC 116/2004, de 12 de julio, FJ 5).

Sin embargo, esta declaración, de la que se hace eco el órgano judicial en el Auto que desestimó en este caso el incidente de nulidad de actuaciones, es perfectamente compatible con la exigencia, puesta de manifiesto en la STC 245/2006, de 24 de julio, de que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real" (F. J. 4º).

⁸⁵⁸ BOE de 18.08.2006.

⁸⁵⁹ BOE de 27.05.2010.

O en la **STC 104/2008**, de 15.09⁸⁶⁰, en la que estimó el amparo solicitado al haberse notificado el auto despachando ejecución en la finca hipotecada, domicilio designado en la escritura que resultó negativo, dado que...

“...pese a que el domicilio real de los demandantes constaba en diversos documentos obrantes en autos, decidió, a instancias de la entidad ejecutante, notificar mediante edictos la celebración de la subasta” (F. J. 4º).

De todas ellas podemos concluir que el correcto proceder que, según el TC, ha de tener el órgano judicial tiene que ser el siguiente:

- 1º. Requerimiento de pago en el domicilio hipotecario ex art. 686.1 LEC, salvo que el propio acreedor ya designe otro en su demanda, entendido este como el real. Si en este resulta positiva la comunicación, la finalidad estará cumplida y no cabrá reproche pese a la contravención del domicilio legal.
- 2º. En caso infructuoso, intento en el domicilio que pudiera hallarse tras el examen de los autos o de la documentación aportada por las partes.
- 3º. Si no consta o vuelve a ser negativo, traslado al acreedor para que informe si conoce otro domicilio.
- 4º. Simultánea o posteriormente al punto anterior, averiguaciones de oficio ex art. 156 a través de los medios de que dispone el órgano.
- 5º. Solo como último extremo, comunicación edictal.

b) La Ley 13/2009 y la interpretación ‘secundum constitutionem’ del artículo 686.3 LEC

El principal valedor de aplicar la literalidad de la ley no es otro que el propio Poder legislativo. La exigencia de fijar un domicilio hipotecario a efectos de ejecución especial ha sido una constante que ha sobrevivido a las diversas reformas legales que ha experimentado la ejecución judicial hipotecaria. Con la promulgación de la Ley 1/2000 se trasvasó a ella el procedimiento judicial sumario de la Ley Hipotecaria, transmutándose y desmembrándose su denso art. 131 en los preceptos esenciales hoy día vigentes, entre ellos el art. 686.1, heredera de la regla Cuarta de aquel. A su vez, consciente de la controversia científica y jurisprudencial acerca del papel de la comunicación edictal en este proceso especial, la Ley 13/2009 intentó blindar la plena eficacia procesal del domicilio hipotecario añadiendo al art. 686 un nuevo apartado tercero que hasta la Ley 19/2015 decía:

“3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164 de esta ley.”

⁸⁶⁰ BOE de 10.10.2008.

Esta redacción es la que aparecía ya en el Anteproyecto de dicha ley (de 18.07.2008), sobre la que no se pronunció el CGPJ en su preceptivo Informe⁸⁶¹, siguió intacta en el proyecto de ley remitido al Congreso⁸⁶² y no fue motivo de objeción alguna por ningún grupo parlamentario según se desprende (por omisión) de los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado. Y pese a su indudable trascendencia, nada explicó la Ponencia encargada de redactar su Informe al proyecto y ni Congreso ni Senado consideraron necesario hacer mención alguna al respecto en el texto de la Exposición de Motivos.

Vemos así que, *intentado sin efecto el requerimiento* (de pago) en el domicilio vigente en el Registro de la Propiedad, la nueva disposición ordenaba taxativamente al juzgado que acudiese a los edictos del art. 164. Sin embargo, la disposición se va a convertir cuatro años después en papel mojado como consecuencia de la rotunda **STC 122/2013**, de 20.05⁸⁶³, que ha supuesto un duro golpe al proceso de ejecución hipotecaria y contribuye abiertamente a su desmantelamiento al quedar definitivamente diluido el segundo de los dos pilares que lo caracterizan – siendo el primero la previa tasación del inmueble, que también, por cierto, está amenazado–. La secuencia fáctica origen de la resolución sigue un patrón recurrente: ejecutado deudor hipotecario (en este caso una sociedad limitada) que no puede ser requerido de pago en el domicilio registral (naves abandonadas); traslado a la entidad ejecutante, que pide la publicación edictal al amparo del 686.3 “invocando su carácter de norma especial para los procedimientos hipotecarios”; órgano judicial que así lo acuerda, así como luego respecto a la subasta; personación posterior del ejecutado planteando incidente de nulidad de actuaciones por no haber sido emplazado en su domicilio “real”, que además aparecía en la documentación aportada a la demanda y sin que el juzgado hubiese agotado los medios de localización; desestimación del incidente y recurso de amparo. En este caso el Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó su estimación, aduciendo que, efectivamente, no se agotaron los medios de localización posibles y que, si bien la modificación de la LEC por la Ley 13/2009 “ofrece la posibilidad de acudir a los edictos en caso de diligencia negativa de requerimiento en el domicilio que conste en el Registro”, “debe interpretarse dicho precepto de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de actos de comunicación” (Antecedentes, punto 8). Es justo lo que hizo el Tribunal, que apreció...

“...la especial trascendencia constitucional de este recurso, siendo necesario que este Tribunal se pronuncie sobre este nuevo marco normativo del procedimiento

⁸⁶¹ Informe al “Anteproyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial”, aprobado por el Pleno del CPGJ en reunión de 29.10.2008. El nuevo párrafo que proponía el Gobierno no mereció más comentario por parte del Consejo en las 181 páginas de su informe que el de limitarse a constatar que la reforma incluía al art. 686.2 (en lugar de decir 686.3) en el “régimen de comunicación impersonal mediante edictos” (pág. 33).

⁸⁶² Art. 321 del “Proyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial”, BOCG de 19.12.2008, Serie A. Núm. 17-1, pág. 129.

⁸⁶³ BOE de 18.06.2013.

de ejecución hipotecaria, respecto del cual no hay doctrina del Tribunal Constitucional [apartado a) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio], apareciendo asimismo que el tenor literal del precepto aplicado por el órgano jurisdiccional (art. 686.3 LEC) presenta un riesgo de conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, según la interpretación uniforme de este Tribunal en materia de actos de comunicación y acceso al proceso” (F. J. 2 ‘in fine’).

Ese pronunciamiento fue el de que:

“4. [...] es indudable que el órgano judicial no agotó las posibilidades de localización del deudor, lo cual entraría en contradicción con la doctrina constitucional expuesta en el anterior fundamento. Sobre esta doctrina no puede interferir la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que añade un nuevo apartado 3 al art. 686 LEC, habida cuenta que todos los preceptos relativos a la notificación del despacho de la ejecución y del requerimiento de pago han de ser interpretados en coherencia con la jurisprudencia de este Tribunal.

5. Así, desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una interpretación *secundum constitutionem* del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado” (F. J. 4 y 5).

c) *Homogeneización con la Ley 19/2015*

Desde el pasado mes de octubre de 2015 ya no hace falta realizar ninguna interpretación ‘*secundum constitutionem*’ del art. 686.3, sino aplicarlo sin más (‘in claris, non fit interpretatio’). El legislador ha terminado por claudicar con la Ley 19/2015 ante las determinaciones del Tribunal Constitucional y lo ha reescrito, añadiendo una acotación que cambia todo el sentido del precepto: *y realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor*. De ese modo, solo cuando las mismas resulten infructuosas podrá el órgano judicial acudir a la comunicación edictal, con lo que en este punto ya no hay diferencias en el procedimiento de ejecución hipotecaria respecto al de ejecución ordinaria. La reforma es fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular⁸⁶⁴ presentada en el Congreso al Proyecto de ley⁸⁶⁵, que prosperó pese ha

⁸⁶⁴ Enmienda n.º 115 a los apartados 2 y 3 del art. 686 presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuya “justificación” no se merece el nombre, al limitarse a decir: “Mejora técnica” (BOCG Serie A, n.º 101-2, 26.05.2015, pág. 82).

⁸⁶⁵ “Proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil” (n.º de exp. 121/000101). El texto aprobado presenta grandes diferencias con el que se contenía en el Anteproyecto de Ley (“Anteproyecto de ley sobre reforma ley enjuiciamiento civil en materia de subastas”, 16.09.2013), inalterado en el Proyecto. En el mismo aborda la reforma del art. 686, pero con unas pretensiones más modestas y sin afectar al párrafo 3º. El contenido era el siguiente: “[...] Veintitrés. Se modifica el artículo 686, que pasa a quedar redactado de la siguiente manera: «1. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará reque-

haberse obviado con ella los informes preceptivos previos⁸⁶⁶ a una modificación de gran trascendencia procesal.

d) *Debate doctrinal*

Esta última modificación no ha restado interés al debate doctrinal ya existente en torno a la ejecución hipotecaria en general y al domicilio hipotecario en particular. Asumimos, ya de entrada, que hemos tomado la incómoda senda de la doctrina más inconformista, aquella que entiende que, en un buen número de ocasiones, bien aplicados los textos legales y, sobre todo, respetados con la debida diligencia, ninguna indefensión pueden provocar. Como aclaración previa, es preciso decir que la doctrina (también la jurisprudencia) se refiere al trámite concreto del requerimiento de pago, regulado en el art. 686 LEC, pero la cuestión resulta igualmente aplicable a todas las comunicaciones, extrajudiciales y judiciales, que hayan de realizarse al deudor hipotecario como consecuencia del impago de la deuda y la posterior reclamación judicial. La polémica, en síntesis, se centra en la frontal dialéctica entre dos domicilios: el domicilio hipotecario o registral y el domicilio real o efectivo. Esta dualidad explica la existencia de dos bloques antagónicos, uno garantista y antiformalista (tesis flexible) y otro legalista y formalista (tesis rígida):

[1] **Tesis flexible:** En el sector doctrinal que comulga con las tesis del Tribunal Constitucional destaca ACHÓN BRUÑÉN, para quien “los edictos no pueden ser la consecuencia inmediata de no hallar al deudor en el domicilio que conste en la escritura de hipoteca, por lo que sería conveniente que en el mentado precepto [se refiere al art 686] se hiciera constar expresamente la necesidad de agotar los medios de averiguación del paradero del ejecutado antes de iniciar la vía edictal

rir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro.

2. Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581.

A estos efectos, el requerimiento extrajudicial deberá haberse practicado en el domicilio que resulte vigente en el Registro, bien personalmente si se encontrare en él el deudor, el hipotecante no deudor o el tercer poseedor que haya de ser requerido, o bien al pariente más próximo, familiar o empleado mayores de dieciocho años con quien conviva el que hubiere de ser requerido y si no se encontrare a nadie en ella, al portero o al vecino más próximo que fuere habido y que lo acepte. No obstante, será válido el requerimiento entregado personalmente por el notario, cualquiera sea el lugar donde se realice.

3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164 de esta Ley.» (la cursiva es nuestra a fin de destacar las diferencias con el texto precedente de la Ley 13/2009).

⁸⁶⁶ Tal y como criticaron, con el texto ya en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), quienes presentaron, a su vez, sus propias enmiendas (vid. BOCG, Senado, n.º 550, 26.06.2015, págs. 219 y 260; enmiendas n.º 22 y 86).

de acuerdo con la doctrina del propio TC⁸⁶⁷. Es justo lo que ha dispuesto la última reforma.

También MONTERO AROCA, quien considera que “el recurso a los edictos, con todo, debe producirse cuando se han agotado todas las posibilidades de lograr el conocimiento de un domicilio en que realizar los requerimientos y notificaciones. La jurisprudencia viene admitiendo que se si el requerimiento se hizo en el domicilio efectivo, y no en el designado en la escritura, no puede decirse que exista defecto procesal alguno”⁸⁶⁸. Asimismo entiende que si el ejecutante conoce el verdadero domicilio del deudor, “entonces el acudir a los edictos colocará al ejecutando en situaciones de indefensión”⁸⁶⁹.

De igual parecer es NAVARRO SANCHÍS, al considerar que, “con carácter previo a acudir a la práctica del requerimiento por edictos (artículo 164 de la L.E.C.), se debe acudir a la posibilidad de que el tribunal realice averiguaciones sobre el domicilio del deudor [...], ya que en todo caso de lo que se trata es que el requerimiento de pago al deudor o cualquier otra notificación que se practique alcance la finalidad pretendida, que no es otra que el deudor tenga conocimiento fehaciente de la existencia del procedimiento”⁸⁷⁰.

Por su parte, FERNÁNDEZ-GALLARDO acata al TC y afirma respecto de la idea de interpretar literalmente el art. 686.3 que, “operar de esta manera lejos de dar agilidad a la tramitación del procedimiento hipotecario nos puede llevar a un proceso que termine con una declaración de nulidad de todo lo actuado, por cuanto aquel precepto contradice la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional”⁸⁷¹.

⁸⁶⁷ ACHÓN BRUÑÉN: “Soluciones para la mejora del procedimiento de ejecución hipotecaria”, *Diario La Ley*, suplemento especial al n.º 7966, 16.11.2012, Editorial La Ley, Madrid, pág. 5.

⁸⁶⁸ MONTERO AROCA: *Las ejecuciones hipotecarias...*, op. cit. pág. 319. El autor se apoya en la **STS 30.05.1947**, según la cual “si bien es cierto que en el caso de autos no se practicó el requerimiento en el domicilio figurado en el Registro, distinto del que realmente tenía el deudor, también lo es que este fue requerido en su verdadero domicilio con todas garantías [...], y así resulta indudable que se ha cumplido plenamente la finalidad del requerimiento en su doble aspecto de invitación al pago y anuncio o notificación del procedimiento judicial”.

⁸⁶⁹ Ídem, pág. 320. Cita en este caso el autor la SAP Madrid 02.10.1992: “Indefensión material causante de un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa [...], ya que en los propios recibos de amortización del préstamo constaba el domicilio del deudor y de él tenía conocimiento la entidad ejecutante”; la SAP Pontevedra 07.04.1998, la cual, por un lado, admite en general el uso de los edictos, pues “no se exige buscar a toda costa el domicilio real”, pero, en el caso particular, “el demandante conocía el domicilio del señor G. P. [...] porque se expresa en el expediente del préstamo”; y el AAP Toledo 20.04.1998, que desestimó la apelación formulada por la entidad bancaria por no haberse practicado el requerimiento en el domicilio pactado y sí “en el domicilio real de uno de los demandados y que coincidía con la finca hipotecada, dato del que se tenía constancia en el Juzgado por intervenir el mismo demandado en otro procedimiento”.

⁸⁷⁰ NAVARRO SANCHÍS, JUAN ANTONIO: “Especialidades de la ejecución hipotecaria”, *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º III-2002, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, pág. 253.

⁸⁷¹ FERNÁNDEZ-GALLARDO: “La averiguación del domicilio del demandado...”, op. cit., pág. 17.

ADÁN DOMÉNECH se decanta también por la tesis flexible, pues, si bien “como punto de partida, sostenemos que esta diligencia no sería exigible conforme a la Ley, y que supone una sobreprotección del deudor poco diligente”, acto seguido apunta al órgano judicial al afirmar que, “en aquellos casos en que el demandante desconozca cualquier domicilio apto para la notificación del demandado, deberá manifestarlo al órgano judicial, de acuerdo con las directrices del art. 156 LEC, recayendo a partir de este momento la responsabilidad de la práctica de los diferentes medios de localización del domicilio del deudor en el personal judicial, pues el mismo se convierte en garante del derecho fundamental del art. 24 CE”⁸⁷².

Podríamos aludir a más autores, como a BARBANCHO TOVILLAS⁸⁷³ o a CARBONELL LLORENS⁸⁷⁴. Todos ellos, haciéndose eco de las sentencias que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre la materia, se avienen a considerar correcta su doctrina.

[2] **Tesis rígida:** Un claro exponente sector de la doctrina que apuesta por el rigor legal es, por la rotundidad de sus planteamientos, MARTÍNEZ SANTOS, ya citado. Para este autor, “la reforma del año 2009 del apartado 3 del art. 686 no suscita ahora dudas”, y ante la pregunta de “¿Averiguamos o no el domicilio real del deudor?”, responde en sentido negativo, pues “en este punto la regla general es que el deudor se obliga a ser diligente en la designación del domicilio y corre los riesgos de su falta de diligencia”⁸⁷⁵. Para él, “la ley es muy clara sobre este punto: «domicilio que resulte vigente en el Registro» y además prevé cómo hacer los cambios del mismo para que surtan efecto y no coloquen a nadie en la situación de indefensión, que tanta preocupación causa en algunos sectores de la doctrina y de la jurisprudencia (art. 683 LEC)”⁸⁷⁶.

Por su parte, GÓMEZ SALCEDO afirma que “la existencia de un domicilio pactado o vigente en el Registro permite eludir las averiguaciones previstas en el art. 156 de la LEC cuando se ignore el domicilio real del ejecutado”⁸⁷⁷.

También cabe citar a FERRER GUTIÉRREZ y a su alusión a que el requerimiento “por supuesto se efectuará en el domicilio designado en la escritura, de tal suerte

⁸⁷² ADÁN DOMÉNECH: “La práctica forense de la ejecución hipotecaria...”, op. cit., Ídem págs. 18 y 19.

⁸⁷³ BARBANCHO TOVILLAS: “Artículo 681”, *Comentarios...*, op. cit. pág. 3086.

⁸⁷⁴ CARBONELL LLORENS: “La ejecución hipotecaria: Presupuestos y desarrollo del procedimiento hasta la práctica de los correspondientes asientos registrales”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31/2000) Escuela Judicial, CGPJ, Madrid, págs.307-308.

⁸⁷⁵ MARTÍNEZ SANTOS: *Sobre la ejecución hipotecaria...*, op. cit., pág. 158.

⁸⁷⁶ MARTÍNEZ SANTOS: Ídem, pág. 157.

⁸⁷⁷ GÓMEZ SALCEDO, AGUSTÍN: “Ejecución hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Problemas prácticos (Comunicación)”, *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44-2003), CGPJ, Madrid, 2004, pág. 847. Añade el autor que “se parte de que el ejecutado está conforme con que las comunicaciones derivadas del procedimiento de ejecución hipotecaria se realicen en el domicilio designado que aparece en el Registro porque siempre pudo cambiarlo de la forma determinada en el art. 683 LEC. El sistema lo introdujo la Ley Hipotecaria de 1909 y con él se trata de garantizar, en beneficio del acreedor hipotecario, la sumariidad de la ejecución, evitando trabas o dilaciones, cuando no situaciones de abuso, por la búsqueda del paradero del ejecutado” (Ídem).

que desde el momento que la Ley impone una clara obligación al deudor en orden a la manifestación de dicho domicilio, así como en orden a su posible modificación, no considero que si resultara negativo deba precederse a practicar ningún tipo de investigación o averiguación, ni publicar anuncios o edictos en los sitios públicos de costumbre, desde el momento que de un lado, ante las obligaciones que la Ley impone, el propio deudor con su conducta asume ese riesgo, y de otro lado, su derecho en definitiva quedaría salvaguardado por los diferentes anuncios y notificaciones que necesariamente han de realizarse a lo largo del procedimiento”⁸⁷⁸.

E idéntica postura es defendida por BERNABÉU PÉREZ al considerar que “partiendo de estas especialidades que prevé la Ley (1.- conformidad acreedor para cambio domicilio y 2.- consignación domicilio escritura pública), podríamos concluir que no es necesario proceder a la averiguación de domicilio cuando requerido el deudor en el domicilio facilitado por él no ha podido ser localizado, siendo suficiente practicar el requerimiento mediante edictos; [...] tampoco puede hablarse que la no averiguación de domicilio pueda producir indefensión a la parte, ya que si no es localizado en el domicilio por el designado en la escritura pública de constitución de la hipoteca, es porque ha procedido a cambiar el domicilio sin seguir los trámites previstos en el artículo 683, por lo que él mismo es el que se ha colocado en situación de indefensión”⁸⁷⁹.

Sugere y curiosa es la postura, que podríamos denominar “intermedia”, de BERNARDO SAN JOSÉ, ALICIA y SÁNCHEZ LÓPEZ, BÁRBARA, que diferencian entre los cambios de domicilio dentro y fuera de la misma población. En el primero supuesto, “es razonable acudir a la notificación edictal una vez practicado sin efecto el requerimiento de pago en el domicilio que resulte del Registro; en los otros dos supuestos señalados, que requieren la autorización del acreedor hipotecario, no está justificado que, por el sólo hecho de no haber actualizado los datos registrales de cambio de domicilio, se acuda subsidiariamente a la notificación edictal sin agotamiento de otros medios de notificación personal, dando así ocasión a numerosas situaciones de indefensión por desconocimiento del ejecutado del proceso de ejecución”⁸⁸⁰.

Acabamos con las “reflexiones” que realiza GÓMEZ FLUJA, partidario de dar validez procesal al domicilio real del ejecutado aunque no se practique en el pactado: “Insisto en que puede ser hora de preguntarse qué sentido tiene mantener la exigencia de un presupuesto procesal en los términos estrictos legales cuando en la práctica resulta innecesario atenderlo. Legalmente debería bastar con acudir al

⁸⁷⁸ FERRER GUTIÉRREZ, ANTONIO: *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada*, tomo II, Sepin, 2000, pág. 1.378.

⁸⁷⁹ BERNABÉU PÉREZ, ISAAC CARLOS: “Domicilio del deudor en la ejecución hipotecaria”, *Práctica de los Tribunales*, nº 38, mayo 2007, págs. 59 y 60.

⁸⁸⁰ BERNARDO SAN JOSÉ, ALICIA y SÁNCHEZ LÓPEZ, BÁRBARA: “Sección V. Reformas del Libro III de la LEC sobre proceso de ejecución y medidas cautelares, *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, pág. 358.

domicilio del deudor que consta en el registro, pero en la práctica resultará que puede acudir a cualquier otro que sea real. Quizá fuera conveniente que la Ley recogiera la práctica y no se enrocara en la exigencia teórica”⁸⁸¹. Esto no quiere decir que el autor no apueste por el rigor legal, ya que entiende a continuación que la restricción del art. 686 respecto a la obligatoriedad de tener que requerir en el domicilio del Registro “no es causal, sino que encaja plenamente con la norma establecida en el art. 682. [...] Estas son las reglas, muy claras y conocidas por el deudor. El deudor sabe que se le podrá requerir y notificar en el domicilio que voluntariamente ha dado y sabe que fijar el domicilio sirve para poder abrir un proceso de ejecución directa de garantía real contra él (lo mismo se aplica al hipotecante no deudor y al tercer adquirente)”. Incluso llega a decir que “hay que tomar con cautela la doctrina del TC en relación con el domicilio y las notificaciones, incluida la fijada específicamente para esta clase de procesos en orden a la notificación edictal. [...] está en las propias manos del futuro demandado el permanecer localizable, fijando un domicilio en el que hacer viable el requerimiento o notificación a los efectos de esta clase de procesos, y manteniéndolo actualizado. Está advertido y es plenamente consciente de las consecuencias: si se le requiere en el domicilio vigente registralmente no podrá alegar nunca indefensión, porque está fijado con la concurrencia de su voluntad y los cambios son también por su voluntad”⁸⁸². Concluye que “no es necesario ni exigible agotar los diversos pasos (domicilio registral, domicilio real conocido, averiguación del domicilio, notificación edictal), aunque pueda ser recomendable o tranquilizador si se quiere”⁸⁸³.

e) *Conclusiones y argumentos a favor de la tesis rígida*

Tras el estudio de los pros y los contras de las dos tendencias irreconciliables que acabamos de citar, hemos de ratificarnos en las manifestaciones con las que al inicio del epígrafe anunciábamos nuestro posicionamiento por la interpretación literal del apartado 1 del art. 686. A ello nos lleva el firme convencimiento de que en este caso su literalidad expresaba el espíritu de la ley. Especialmente digna de mencionar es la labor de síntesis que realiza ADÁN DOMÉNECH, quien, a pesar de mostrarse, como hemos visto, en pro de la postura flexible, aglutina en cinco los argumentos principales que permitirían defender la interpretación restrictiva y que suscribimos de principio a fin:

“A.- Por el propio propósito del deudor, que de forma voluntaria señala en la escritura de constitución de la hipoteca ese concreto domicilio, siendo consciente de que el mismo se convertirá en el domicilio apto para la recepción de las notificaciones relativas al proceso [...].

B.- Por la posibilidad real que ostenta el deudor, en base al art. 683 LEC, de modificar el domicilio inicialmente consignado en la escritura de constitución de la hipoteca, en caso de que el mismo no coincidiese con el real por cualquier circunstancia [...].

⁸⁸¹ GÓMEZ FLUJA: “Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria...”, op. cit., epígrafe V, aptdo. c).

⁸⁸² Ídem nota anterior, aptdo. d).

⁸⁸³ Ídem, aptdo. f).

C.- Por no causar un perjuicio al acreedor de buena fe, que ante el desconocimiento de la no coincidencia del domicilio registral y real, se vería abocado a un periplo en búsqueda del domicilio actual del deudor, dilatándose el derecho a su tutela judicial efectiva [...].

D.- De imponer al acreedor la carga de buscar el domicilio del deudor que no notifica el cambio, supondría “dejarse al arbitrio de los deudores hipotecarios el desarrollo del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuyo interés puede ser obstaculizar en lo posible el desarrollo del procedimiento” [...].

E.- Asimismo, si fuese preciso notificar la demanda en un domicilio diferente al registral, carece de sentido que se exija como un presupuesto de admisibilidad del proceso hipotecario la consignación de un domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones, pues se estaría dejando vacío de contenido el mismo por incumplimiento”⁸⁸⁴.

Aun podríamos aportar algunos argumentos adicionales y, tomando prestado el esquema del citado autor, lo continuaremos con los siguientes puntos:

(F.-) La previsión legal del domicilio hipotecario no es inconstitucional, ni como cláusula contractual ha sido declarada nula o abusiva: En los últimos tiempos, en especial a raíz del revulsivo que ha supuesto la STJCE 14.03.2013 (asunto C-415/11, *Aziz*), junto a las SSTJCE 26.04.2012 y 14.06.2012, el sistema hipotecario español, o quizá con mayor precisión, el sistema procesal español en materia de ejecución hipotecaria, ha sufrido un severo escrutinio y las críticas se han recrudecido. Paralelamente, los excesos de la Banca han desencadenado una cascada de pronunciamientos judiciales declarando la nulidad por abusivas de numerosas cláusulas que con el paso de los años se habían constituido en el ADN de los contratos de préstamos hipotecarios. No obstante, el aura de inconstitucionalidad con que se ha querido dotar a la ejecución directa no es nada nuevo. Ya desde los primeros comienzos de actividad del TC se plantearon diversos recursos de amparo ante la extraordinaria limitación del derecho de defensa que tenía la parte ejecutada, con unos motivos de oposición rigurosamente tasados que buscaban, ya lo hemos dicho, evitar que el proceso se dilatase y que el acreedor no consiguiera realizar el bien con la rapidez deseada tras el incumplimiento del deudor. La respuesta se dio de forma muy temprana con la **STC 41/1981**, de 18.12, que avaló la constitucionalidad de la ejecución hipotecaria y vino a “afirmar que quien constituye una hipoteca se somete voluntariamente a un procedimiento con elementos de cognición limitados” (F. J. 7). Así ha sido durante más de treinta años, hasta que Tribunal de Luxemburgo, convertido en el gran azote del sistema, ha refutado su constitucionalidad⁸⁸⁵.

Pues bien, la cláusula contractual de designación por el deudor de un domicilio

⁸⁸⁴ ADÁN DOMÉNECH: “La práctica forense de la ejecución hipotecaria...”, op. cit., págs. 16 y 17.

⁸⁸⁵ Para un estudio más extenso sobre las cláusulas abusivas y la facultad del juez de apreciarla de oficio en la ejecución hipotecaria, vid. RUÍZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL, y DE LUCCHI LÓPEZ TAPIA, YOLANDA: “El debido tratamiento de las ejecuciones hipotecarias a la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE”, *Diario La Ley* n.º 8139, 2 de septiembre de 2013, págs. 1-9.

a efectos de notificaciones y requerimientos no ha sido declarada nula por ningún tribunal ordinario ni la disposición de la LEC ha sido declarada ‘contra constitutionem’ por el TC. Tampoco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho nada al respecto, y ello a pesar de que se trata de una obligación que solo viene impuesta a una de las partes y que en plena época de fusiones y absorciones de entidades bancarias y Cajas de ahorros, con la consiguiente cesión o subrogación en masa de los créditos, debería extenderse a las dos.

(G.-) El domicilio lo conceptúa el propio deudor: Destacábamos en apartados anteriores la indefinición de la ley sobre el concepto de domicilio hipotecario, dejando en manos del deudor y del hipotecante no deudor la determinación del lugar que consideren como tal. A nuestro juicio, constituye una omisión consciente del legislador, porque confía en que aquellos van a hacer uso de esa libertad en beneficio y seguridad propios, y al mismo tiempo asumiendo responsablemente las consecuencias de la desatención del domicilio que designen.

(H.-) Garantiza la seguridad jurídica: La fijación del domicilio proporciona al negocio jurídico un componente de seguridad y de certeza que el acreedor necesita para prestar parte de su patrimonio a un deudor que no conoce y de quien dispondrá en todo momento de un lugar a donde poder dirigir sus comunicaciones sin la incertidumbre de desconocer si van a llegar o no a su conocimiento. Es por ello que no es gratuito ni ocioso que la determinación del domicilio, junto con la fijación del tipo de subasta, se constituya en presupuesto y elemento esencial de la ejecución hipotecaria.

(I.-) No se puede proteger al deudor negligente; menos al que actúa con mala fe: Lo paradójico es que se está fomentando el incumplimiento de las normas jurídicas, con el perverso efecto de que sale más beneficiado el deudor negligente que el que no lo es. El primero se aprovechará de la lentitud del sistema y podrá prolongar por mayor tiempo el disfrute, indirecto o indirecto, del bien hipotecado; por el contrario, el deudor que respete la ley será localizado y requerido de pago con mayor prontitud, asistirá a la enajenación forzosa de su propiedad en un intervalo de tiempo más corto y, lo que es peor todavía, podrá ver seriamente afectado el resto de su patrimonio con la continuación de la ejecución al amparo de un casi omnímodo artículo 1.911 CC y de su instrumento procesal constituido por el art. 579 LEC.

(J.-) El Ordenamiento no puede exigir al acreedor la buena fe procesal que dispensa por completo al deudor: Fuente inagotable de sabiduría jurídica, el Código Civil nos enseña en su art. 1258 CC que *los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también “a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe”, al uso y a la ley*. Esta disposición se traduce en su proyección en la ejecución hipotecaria en que si el acreedor conoce el domicilio real del ejecutado debe comunicarlo al juzgado como exigencia de la buena fe “procesal”. Es esta una afirmación que condiciona la entera ejecución, pues, viene a decirse, que sobre el domicilio registral se alza el domicilio real conocido por el acreedor y que, por encima de cualquier aplicación formalista

del Derecho, se impone el principio superior de la buena fe procesal. Así lo ha venido a entender el Tribunal Supremo, cuya doctrina viene a considerarlo...

“[...] «como un comportamiento honrado, justo y leal», que implica la honestidad y lealtad en los comportamientos de las partes en la relación jurídica (SSTS de 26 de octubre de 1995, 12 de julio de 2002, 25 de julio de 2000 y 30 de enero de 2003, entre otras muchas). Así la reciente Sentencia de esta Sala de 17 de febrero de 2006 propugna, como manifestación de tal buen fe, la «exigencia a la entidad ejecutante del deber de comunicar el inicio del procedimiento a quien ya conocía sobradamente el impago y la dimensión posible de la reclamación, pues no en vano recibía los extractos en su domicilio real» [...]. Resulta terminante para la desestimación del recurso [por la entidad bancaria] la circunstancia no impugnada y tenida en cuenta en la sentencia recurrida de que en la escritura de la compraventa con garantía hipotecaria de fecha 22 de junio de 1990 constaba la existencia del nuevo domicilio del demandante” (STS 02.02.2007, F. D. 3^ª886).

Así pues, la buena fe parece exigirse únicamente y se ha de predicar en la parte acreedora, y no una buena fe cualquiera, sino la más exquisita, lo que contrasta sobremedida cuando del deudor se trata. En la situación actual lo menos que se ha de exigir es que el mismo comunique al acreedor, también como exigencia de esa buena fe que no se duda en requerir severamente al acreedor, el cambio de domicilio por cualquier medio fehaciente, ya no necesariamente por conducto notarial. “De hecho, –como afirma GUZMÁN FLUJA– no actualizar el domicilio que consta en el Registro puede ser un indicio de mala fe con el que evitar el éxito de la ejecución directa alegando indefensión (al resultar infructuoso el requerimiento o la notificación en ese domicilio registral y, por tanto, desconocimiento del proceso pendiente que deberá declararse nulo)”⁸⁸⁷.

2.3.- LA NOTIFICACIÓN DEL SALDO DEUDOR EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Será habitual que la ejecución hipotecaria dimanase de un préstamo *en el que se hubiere pactado un interés variable*, como dice el art. 574.1.1^º, en cuyo caso, por remisión del art. 685.2⁸⁸⁸, habrá que entender aplicable el art. 573, al que, a su vez, llama el art. 574.2. De este modo, al igual que sucede en la ejecución común, en la demanda ejecutiva el acreedor-ejecutante tendrá que, primero, *acompañar el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo* (art. 573.1.2^º)⁸⁸⁹; segundo, *el documen-*

⁸⁸⁶ Id Cendoj: 28079110012007100087.

⁸⁸⁷ GUZMÁN FLUJA: “Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria...”, op. cit., epígrafe V, aptdo. d).

⁸⁸⁸ Art. 685.2p1: *A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos a que se refieren el artículo 550 y, en sus respectivos casos, los artículos 573 y 574 de la presente Ley.*

⁸⁸⁹ No obstante, acerca de la aplicabilidad del art. 573.1.2^º en el ámbito de la ejecución hipotecaria, MAGRO SERVET parece que da a entender una respuesta negativa al citar a RIVAS SEVA, de quien afirma decir que “normalmente, el ejecutante presenta con su demanda la escritura de préstamo y la certificación del saldo deudor, que lo será el expedido por el propio ejecutante, siendo suficientes estos documentos y no los previstos en el art. 573.1.2^º, ya que no estamos en presencia de una demanda ejecutiva de saldo de cuenta” (*Guía práctica...*, op. cit., pág. 1084, pregunta n.º 1996). Pese a tal afirmación, no podemos dejar de tener en cuenta que el art. 574.2, sobre *ejecución en casos de intereses*

to que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible (art. 573.1.3º); y, tercero, expresar en dicha demanda las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que pide el despacho de ejecución (art. 574.1). Aquellos preceptos de la ejecución ordinaria son, por tanto, también de aplicación en la hipotecaria. Sobre este particular se pronunció, en sede de esta última, el **AAP Palma de Mallorca (Secc. 3ª) 15.12.2009**⁸⁹⁰:

“b) La exigencia de notificar previamente el saldo es regulada expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 573.1.3º, al que se remite el 685.2) pero de modo diferente, sin exigir ahora la fehaciencia.

c) La nueva regulación no necesariamente implica menores garantías para el deudor pues ahora se exige fehaciencia para el documento que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo (artículo 573.1.2º en relación con el 685.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) lo que el artículo 153 de la Ley Hipotecaria no exigía.

e) El error en la determinación de la cantidad exigible puede, en su caso, ser invocado dentro ya del procedimiento de ejecución, como causa de oposición prevista en el artículo 695.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo cual la omisión de la fehaciencia en la notificación del saldo no puede producir indefensión ya que siempre queda a salvo la posibilidad del demandado de invocar el error dentro del proceso ejecutivo, lo que antes había de hacer en fase previa a la iniciación de la ejecución.

Por todo ello se entiende que basta con la notificación no fehaciente del saldo al deudor para que pueda despacharse la ejecución, lo que conlleva la estimación del recurso y la sustitución del auto recurrido por otro en el que así se acuerde” (F. J. 3º).

Así pues, no existe a nuestro juicio diferencia sustancial respecto de la ejecución común y al epígrafe que a su estudio hemos dedicado nos remitimos. No obstante, algunas matizaciones son necesarias realizar en cuanto a las personas a las que el acreedor hipotecario tiene que notificar el saldo deudor. La LEC se refiere solo al deudor y al fiador, pero la correcta coordinación de la llamada que el art. 685.2 hace al art. 573 debería conllevar que también comprendiera al hipotecante no deudor⁸⁹¹, pues a los efectos de intimación por el acreedor, como sucede con el posterior requerimiento de pago, la finalidad de la norma es la misma tanto para aquellos como para este.

Incluso habría que plantearse si hay que incluir al tercer poseedor, pese a que tampoco lo menciona expresamente el art. 573.1.3º, tal y como entendió el **AAP Madrid (Secc. 12ª) 12.12.2012**⁸⁹². En dicho auto, el tribunal madrileño confirmó la denegación del despacho de ejecución hipotecaria por parte del Juzgado de 1ª

variables, hace una remisión expresa al precepto que le precede, y de ahí nuestra postura por su necesaria aplicación.

⁸⁹⁰ Roj: AAP IB 404/2009.

⁸⁹¹ En contra, MAGRO SERVET (Coord.), *Guía práctica...*, op. cit., pág. 1086-87, pregunta n.º 2004, donde la respuesta dada se limita a aplicar literalmente el art. 572.2 ‘in fine’.

⁸⁹² Roj: AAP M 21648/2012.

Instancia, entre otras razones, porque “la notificación de la cantidad de exigible al tercer poseedor no se había realizado correctamente, ya que el domicilio en el que se intentó practicar el requerimiento de pago no constaba que fuese el que figura ba inscrito en el Registro de la Propiedad” (F. J. 1º).

2.4.- PRÁCTICA DEL REQUERIMIENTO DE PAGO: EL ARTÍCULO 686 LEC

Dispone el art. 686.1 que *en el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor, y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro*. No obstante, el primer párrafo del art. 686.2 matiza lo anterior estableciendo que, *sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581*.

Previamente hay que tener en cuenta que el precepto, al decir *sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución...*, da por sentado que hay que aplicar la regla de la ejecución común contenida en el art. 553. A partir de ahí el desenvolvimiento del proceso empezará a mostrar una de las grandes diferencias que presenta con aquella.

2.4.1.- El previo requerimiento extrajudicial

El trámite del requerimiento de pago por parte del órgano judicial tiene carácter imperativo cuando no se acredita haberse practicado extrajudicialmente, por lo que basta con que no se haya puesto de manifiesto y acreditado en la demanda este extremo para que deba aquel acordarlo de oficio (de ahí el *se mandará* del art. 686.1). E igualmente preceptivo resulta el requerimiento de pago judicial cuando, pese a haberse practicado previamente por Notario, este no se ha realizado correctamente. Por este motivo entendemos erróneo el **AAP Ciudad Real (Secc. 1ª) 25.06.2009**⁸⁹³, que confirmó la no continuación de la ejecución tras la estimación por el juzgado ‘a quo’ de la oposición a la ejecución por haberse requerido de pago extrajudicialmente por cantidad inferior a la luego despachada y por no haberse pedido por la parte ejecutante el requerimiento judicial:

“En este supuesto se efectuó requerimiento extrajudicial, pero este se efectuó por cantidad menor a la reclamada, con infracción del preceptuado en el artículo 573 de la LEC, defecto o error insubsanable, pues en estos procedimientos por imperativo legal es requisito imprescindible el requerimiento extrajudicial o la solicitud por el ejecutante de que se efectúe el requerimiento judicial, por ello se estima plenamente ajustado a derecho la fundamentación jurídica del Auto recurrido, debiendo desestimarse el recurso” (F. J. 2º).

Por otra parte, pese a su importante efecto práctico y su carácter preventivo, el legislador no establece como requisito de procedibilidad el requerimiento extrajudicial previo a la demanda de ejecución hipotecaria. Tampoco en la práctica se

⁸⁹³ Roj: AAP CR 380/2009.

opta de ordinario por practicarlo voluntariamente, dado los gastos notariales que conlleva. Lo habitual será, pues, que el acreedor ejecutante interese del juzgado la práctica del requerimiento, aunque el mismo lo tendrá de todos modos que acordar de oficio, lo pida aquel o no, si en la demanda no se acredita haberlo realizado.

A la inversa, si se ha practicado en tiempo y forma el requerimiento extrajudicial la LEC impide que se requiera nuevamente de pago al deudor ya por vía judicial. El imperativo *no se practicará* del párrafo 2 del art. 686 cierra la posibilidad de brindar a aquel otra oportunidad para evitar la realización del bien hipotecado, cuando sería deseable que se pudiera permitir si así lo interesara el propio ejecutante. En realidad, el ejecutado ha debido tener previamente conocimiento de las intenciones de aquel cuando le ha notificado el saldo deudor del art. 573.1.3º, y de ahí que insistamos en que aquella otra comunicación preprocesal ha de practicarse con el máximo rigor a fin de conseguir la verdadera recepción y no la simple remisión.

El requerimiento extrajudicial no puede hacerse de cualquier manera para que resulte procesalmente eficaz. Ha de haberse practicado por Notario por expreso mandato del art. 581.2, al que llama el art. 686.2. Ello hace necesario integrar lo dispuesto en la LEC con la normativa notarial para conocer cómo ha de actuar el fedatario público:

a) *Reglas que aporta la LEC*

Como ya hemos estudiado, la Ley 19/2015 ha modificado el art. 686 en su apartado 2, cuyo segundo párrafo ha convertido en tres, y el apartado 3. Tratándose de una reforma de gran calado, la exponemos comparándola con el texto precedente:

ARTÍCULO 686 LEC	
REDACCIÓN TRAS LEY 13/2009	REDACCIÓN ACTUAL TRAS LEY 19/2015
<p>“Requerimiento de pago”</p> <p>1. En el auto <i>por el que se autorice y despache la ejecución</i> se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro.</p> <p>2. [p1] Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581.</p> <p>[p2] A estos efectos, el requerimiento extrajudicial deberá haberse practicado en el domicilio que resulte vigente en el Registro, bien personalmente si se encontrare en él el deudor, el</p>	<p>“Requerimiento de pago”</p> <p>1. [sin cambios]</p> <p>2. [p1 sin cambios]</p> <p>[p2] A estos efectos, el requerimiento al deudor y en su caso las notificaciones al tercer poseedor hipotecante no deudor y titulares, en su caso, de derechos inscritos con poste-</p>

hipotecante no deudor o el tercer poseedor que haya de ser requerido, o bien al pariente más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años que se hallaren en la habitación del que hubiere de ser requerido y si no se encontrare a nadie en ella, al portero o al vecino más próximo que fuere habido.

3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164 de esta ley.

[La cursiva resalta el cambio realizado por la Ley 13/2009 respecto de la Ley 1/2000]

rioridad al derecho real de hipoteca que se ejerce, habrá de realizarse en el domicilio que conste consignado por cada uno de ellos en el Registro. El requerimiento o notificación se hará por el Notario, en la forma que resulte de la legislación notarial, en la persona del destinatario, si se encontrare en el domicilio señalado. No hallándose en el domicilio, el Notario llevará a efecto la diligencia con la persona mayor de edad que allí se encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal o laboral. El Notario hará constar expresamente la manifestación de dicha persona sobre su consentimiento a hacerse cargo de la cédula y su obligación de hacerla llegar a su destinatario.

No obstante lo anterior, será válido el requerimiento o la notificación realizada fuera del domicilio que conste en el Registro de la Propiedad siempre que se haga en la persona del destinatario y, previa su identificación por el Notario, con su consentimiento, que será expresado en el acta de requerimiento o notificación.

En caso de que el destinatario sea una persona jurídica el Notario entenderá la diligencia con una persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en el Registro y que forme parte del órgano de administración, que acredite ser representante con facultades suficientes o que a juicio del Notario actúe notoriamente como persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés.

3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, **y realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor**, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164.

Por tanto, en el caso del requerimiento extrajudicial de pago en la ejecución judicial hipotecaria las especialidades que aporta la LEC:

1. El plazo mínimo con que ha debido requerirse notarialmente de pago para que no tenga que practicarse judicialmente: *al menos diez días de antelación* (art. 581.2, por remisión del art. 686.2p1)⁸⁹⁴.
2. El lugar donde ha de practicarse el requerimiento extrajudicial: Tras la Ley 19/2015 se presentan dos:
 - a.- Domicilio registral: En el domicilio *que conste consignado* en el Registro de la Propiedad (art. 686.2p2).
 - b.- Domicilio extrarregistral: Alternativamente, y solo si se trata de persona física, fuera de ese domicilio que conste en el Registro, *siempre que se haga en la persona del destinatario y, previa su identificación por el Notario, con su consentimiento* (art. 686.2p3 y 4).

La reforma parece haberse inspirado en el art. 202 RN, que, después de emplear la expresión genérica de *el domicilio o lugar en que la notificación o el requerimiento deban practicarse, según la designación efectuada por el requirente* (párr. 3), permite que la diligencia pueda practicarse *en cualquier lugar distinto del designado, siempre que el destinatario se preste a ello y sea identificado por el notario* (párr. 7).

3. La concreción de las personas con las puede practicarse el requerimiento si no se encontrare el deudor en el domicilio:
 - a.- Si es persona física: *la persona mayor de edad que allí se encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal o laboral* (art. 686.2p2⁸⁹⁵). Respecto de la norma anterior desaparecen como posibles receptores subsidiarios la persona menor de edad, aun siendo mayor de catorce años, el “portero” y, lo más importante, el “vecino más próximo que fuere habido”, polémico vestigio de la LEC de 1881⁸⁹⁶ que resultaba perturbador y se encontraba absolutamente fuera de lugar en nuestras leyes de procedimiento judicial, salvedad hecha de la LECrim., cuyo art. 172⁸⁹⁷ sigue albergan-

⁸⁹⁴ Nada contempla al respecto el RN, si bien cabe entender que el tiempo de realización del requerimiento vendrá dado por los términos en que haya sido solicitada la intervención notarial (cfr. art. 202p1).

⁸⁹⁵ El art. 202p3 RN es más flexible y se ciñe a decir que *podrá hacerse cargo de la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su identidad*.

⁸⁹⁶ Art. 268p1 LEC 1881: “Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido”.

⁸⁹⁷ **Art. 172 LECrim.:** *Cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su ausencia, se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación.*

Si no hubiere nadie, se hará la entrega a uno de los “vecinos” más próximos.

do este residuo histórico⁸⁹⁸. Tampoco en la legislación notarial se prevé la entrega de notificaciones y requerimientos con el vecino, salvo que coincida que el mismo se encuentre *en el lugar designado* como domicilio (art. 202 RN), en cuyo caso la eficacia de la diligencia no vendrá dada por la cualidad de la persona, sino por su presencia en dicho lugar. Y agotando los supuestos que conciernen a actos de comunicación, lo mismo hay que decir de la legislación postal, que solo permite la entrega a terceros si están presentes en el domicilio del destinatario (arts. 32.1 y 41.2 RD 1829/1999).

b.- Si es persona jurídica: La norma de 2015 introduce (art. 686.2p4) una precisión para cuando el destinatario sea una persona jurídica, impidiendo incomprensiblemente que sea pueda verificar el requerimiento en domicilio extrarregistral cuando lo acaba de permitir para las personas físicas; y además lo hace con una mala redacción que induce a confusión y no deja bien claro que el Notario puede entenderse con una de las tres personas siguientes: que sea *mayor de edad y que se encontrare en el domicilio señalado en el Registro...*

(i) *...y que forme parte del órgano de administración,...*

(ii) *...[o] que acredite ser representante con facultades suficientes...*

(iii) *...o que a juicio del Notario actúe notoriamente como persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés.*

Puede apreciarse que si no se inserta la conjunción “o” como lo acabamos de hacer nosotros, la frase resulta incoherente porque exigiría del Notario estar ante una persona que reúna cumulativamente tres requisitos (ser miembro del órgano de administración + acreditar ser representante con facultades + actuar como persona encargada para recibir requerimientos y notificaciones), lo que es absurdo. Lo que pretende la reforma es, por el contrario, asegurar que el acto de comunicación sea válido tanto con quien orgánicamente administra y representa la sociedad, como con un apoderado o con un simple empleado de la entidad encargado de

⁸⁹⁸ Aquella ley procesal permitía que un trámite tan crucial como es el de requerir de pago por cantidades que, por lo general, son considerables, se pudiera practicar con una persona que, quizá en el siglo XIX, sí que pudiera haber tenido unas relaciones de vecindad estrechas con el destinatario, justificado por ello la existencia de un artículo como el antiguo 268 LEC 1881, pero no en el siglo XXI, en que el celo por intentar preservar la intimidad y la privacidad ante tanta exposición pública es cada vez mayor. Nada más lejos para conseguirlo que requerir de pago a dicho tercero, haciendo inevitable que conozca que existe una reclamación judicial contra su convecino. Por mucho que se le entregue en sobre cerrado la documentación, el art. 682.2 exige una intimación de pago practicada en persona y de persona a persona, como es consustancial a la naturaleza de cualquier requerimiento.

una recepción o atención al público, evitando así tácticas dilatorias.

b) *Reglas que aporta el Reglamento Notarial*

Por su parte, los artículos 202 a 206 del vigente Reglamento Notarial de 1944, amén de los que resultan de general aplicación, regulan las “Actas de notificación y requerimiento”⁸⁹⁹ y su coordinación con las normas de la LEC viene expresamente prevista en el art. 206 RN, que establece el carácter subsidiario de dichas normas reglamentarias en favor de lo especialmente dispuesto *por las Leyes o Reglamentos*⁹⁰⁰. A su vez, la propia LEC hace ahora el reenvío inverso al decir que *el requerimiento o notificación se hará por el Notario, en la forma que resulte de la legislación notarial* (art. 686.2p2). Las reglas o particularidades que proporcionan las normas notariales son, principalmente, las siguientes:

a') Con carácter general:

1. La jurisdicción del actuario: *La jurisdicción notarial, fuera de los casos de habilitación, se extiende exclusivamente al Distrito Notarial en que está demarcada la Notaría* (art. 3p4 RN).
2. La veracidad e integridad del contenido del acta: *Los documentos públicos autorizados o intervenidos por notario gozan de fe pública, presumiéndose su contenido veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en la Ley* (art. 143p3 RN).
3. La necesidad de documentar el acto en papel timbrado: *Los instrumentos públicos, a excepción de las pólizas, se extenderán en el papel timbrado correspondiente, comenzando cada uno en hoja o pliego distinto, según se emplee una u otra clase de papel y, en todo caso, en la primera plana de aquellos. [...]* (art. 154p1 RN).
4. La lengua empleada: Como norma de principio, *los instrumentos públicos se redactarán en el idioma oficial del lugar del otorgamiento que los otorgantes hayan convenido* (art. 149 RN)⁹⁰¹.

⁸⁹⁹ Título Cuarto (“Del instrumento público”), Capítulo II (“Del instrumento público”), Sección 4ª (“Actas Notariales”), Subsección 1ª, apartado “b”).

⁹⁰⁰ **Art. 206 RN:** *Las notificaciones o requerimientos previstos por las Leyes o Reglamentos sin especificar sus requisitos o trámites se practicarán en la forma que determinen los artículos precedentes. Pero cuando aquellas normas establezcan una regulación específica o señalen requisitos o trámites distintos en cuanto a domicilio, lugar, personas con quienes deban entenderse las diligencias, o cualesquiera otros, se estará a lo especialmente dispuesto en tales normas, sin que sean aplicables las reglas del artículo 202 y concordantes de este Reglamento.*

Los notarios, salvo en los casos taxativamente previstos en la ley, no aceptarán requerimientos dirigidos a Autoridades Públicas, Judiciales, Administrativas y funcionarios, sin perjuicio de que puedan dejar constancia en acta notarial de presencia de la realización por los particulares de acciones o actuaciones que les competan conforme a las normas administrativas.

⁹⁰¹ Téngase cuenta también el **art. 150 RN:** *Cuando se trate de extranjeros que no entiendan el idioma español, el Notario autorizará el instrumento público si conoce el de aquellos, haciendo constar*

b') Con carácter específico para las actas de notificación y requerimiento:

1. La habilitación del notario para poder efectuar notificaciones y requerimientos: *Los notarios, previa instancia de parte en todo caso, extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten, y que por su naturaleza no sean materia de contrato (art. 198.1p1 RN).*
2. La finalidad: *Las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión del que solicita la intervención notarial, y las de requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta (art. 202p1 RN).*
3. El contenido y forma de cumplimentar la diligencia: *La diligencia se cumplimentará mediante entrega de cédula que, suscrita por el notario con media firma al menos, contendrá el texto literal de la notificación o el requerimiento y expresará el derecho de contestación del destinatario y su plazo, conforme al artículo 204. Si la diligencia se entendiera con persona distinta de este, la cédula deberá entregarse en sobre cerrado en el que se hará constar la identidad del notario y el domicilio de la Notaría. El notario advertirá, en todo caso, al receptor de la obligación de hacer llegar a poder del destinatario el documento que le entrega, consignando en la diligencia este hecho, la advertencia y la respuesta que recibiere. La cédula podrá ir extendida en papel común y no será necesario dejar en la matriz nota de su expedición; bastará indicar el carácter con que se expide y la fecha de su entrega (art. 202p4y5 RN).*
4. El derecho de la persona requerida a poder responder al requerimiento: *El requerido o notificado tiene derecho a contestar ante el notario dentro de la misma acta, pero sin introducir en su contestación otros requerimientos o notificaciones que deban ser objeto de acta separada. La contestación deberá hacerse de una sola vez, bajo la firma del que contesta, y en el plazo improrrogable de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya practicado la diligencia o recibido el envío postal. No se consignará en el acta ninguna contestación que diere el destinatario antes de haber sido advertido por el notario de su*

que les ha traducido verbalmente su contenido y que su voluntad queda reflejada fielmente en el instrumento público.

También podrá en este caso autorizar el documento a doble columna en ambos idiomas, si así lo solicitare el otorgante extranjero, que podrá hacer uso de este derecho aun en la hipótesis de que conozca perfectamente el idioma español. Podrá sustituirse la utilización de la doble columna por la incorporación de la traducción en idioma oficial al instrumento público [...].

derecho a contestar y del plazo reglamentario para ello (Art. 204p1y2 RN)⁹⁰².

5. Como cualquier acta notarial, la necesidad de consignar la firma del requirente: *Las actas notariales se firmarán por los requirentes y se signarán y rubricarán por el notario, salvo que alguno de aquellos no pudiere o no supiere firmar, en cuyo caso se hará constar así. Quedarán a salvo aquellos supuestos de urgencia libremente apreciados por el notario* (art. 198.1.8º RN).

Cuestión que no queda suficientemente despejada ni LEC ni en el RN es si el Notario puede, *discrecionalmente*, practicar el requerimiento de pago por correo, algo que para las actas notariales prevé genéricamente el art. 202p2 RN, *siempre que de una norma legal no resulte lo contrario*⁹⁰³. La LEC no es concluyente al respecto, ni siquiera después de la Ley 19/2015, que es ambivalente por cuanto lo primero que hace al abordar la *forma* es remitirse a la legislación notarial, donde la comunicación postal sí tiene cabida, pero después sustituye el anterior y ambiguo adverbio *personalmente* por *en la persona del destinatario*, lo que invita a descartar aquel sistema si a dicho dato unimos el carácter coactivo del requerimiento y la especial trascendencia del trámite, todos ellos factores coadyuvantes que permiten concluir que el notario habrá de personarse preceptivamente en el domicilio (el registral en todo caso para las personas jurídicas) y practicar por sí mismo el trámite⁹⁰⁴, bien directamente con el deudor, bien con las terceras personas que especialmente señala este precepto de la ley procesal, además con carácter especial para este supuesto respecto de las personas del art. 161.3.

⁹⁰² Los párrafos cuarto y quinto (el tercero fue anulado) que completan el **art. 204 RN** dicen: *Los derechos y gastos notariales de la contestación serán de cargo del requirente, pero si su extensión excediera del doble del requerimiento o notificación iniciales, el exceso será de cargo del que contesta.*

El notario no podrá librar copia de un acta de notificación o requerimiento sin hacer constar en aquella la contestación, si la hubiere. Tampoco podrá expedir, antes de caducar el plazo, copia del acta pendiente de contestación, salvo que lo solicite, bajo su responsabilidad, quien tenga interés legítimo para ejercitar desde luego cualquier acción o derecho, todo lo cual se hará constar en la cláusula de suscripción de la copia y en la nota de expedición que ha de consignarse en la matriz, entendiéndose reservado el derecho a contestar mientras no caduque el plazo.

⁹⁰³ **Art. 202p2 RN:** *El notario, discrecionalmente, y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y los requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con aviso de recibo.*

⁹⁰⁴ ADÁN GARCÍA opinaba igual, lo que sigue siendo válido tras la reforma: “deberá personarse el Notario en el domicilio que resulte vigente en el Registro para hacer el requerimiento” (“La ejecución directa...”, op. cit., pág. 860).

Con la situación vigente tras la Ley 13/2009 también apostábamos por la misma solución contraria al uso del correo y teníamos el argumento adicional que proporciona la normativa postal (RD 1829/1999), que exige por definición la entrega de los envíos en el propio domicilio del interesado (art. 32p1), que medie autorización expresa para poder hacerlo con el *portero, encargado o gerente* si estamos ante envíos certificados (art. 38p6) y que en ningún caso contempla al vecino, como si lo hacía la LEC en 2009.

De tal parecer fue el ya citado **AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª) 14.07.2011**⁹⁰⁵, que rechazó la pretensión de la entidad bancaria ejecutante de atribuir al acta notarial que acompañó a la demanda la doble función de notificación al deudor de la cantidad exigible (exigida en el art. 573.1.3º) y de requerimiento de pago extrajudicial; para lo primero bastó haber dejado aviso en el buzón del domicilio pactado, pero para lo segundo:

“El requerimiento de pago a los efectos del art. 686 de la LEC es sin embargo mucho más exigente. Comparte la Sala la interpretación que de este precepto se efectúa por el Juez a quo en el sentido de resultar exigible la presencia del notario en el domicilio en el que se ha de efectuar el requerimiento como único medio de garantizar que la entrega del requerimiento se hace, en caso de ausencia del ejecutado o interesado a requerir, a las personas que se expresan en el precepto” (F. J. 2º).

2.4.2.- El desconocimiento inicial del domicilio vigente en el Registro

Una vez constatado por el que órgano judicial que procede acordar el requerimiento de pago, el art. 686.1 ordena que el requerimiento de pago se efectúe *en el domicilio que resulte vigente en el Registro*. Recordemos que el art. 683.3 exige al Registrador hacer constar en la inscripción la circunstancia relativa al domicilio que, en su caso, hayan pactado las partes. El problema está en que la mayoría de las ocasiones al despachar ejecución solo se conoce el domicilio que figura en la propia escritura de hipoteca que sirve de título ejecutivo, sin que el acreedor esté obligado en todo caso a acompañarla de certificación registral del contenido del Registro que acredite tal dato, aparte de la inscripción y subsistencia de la misma (cfr. art. 685.2 y 3). En este momento inicial el juzgado solo puede presumir, pero no aseverar de forma indubitada, aunque en el 99% de los casos así sea, que el domicilio que aparece en la escritura es el que consta en los asientos registrales, y, pese a ello, confiando en tal presunción, se cursan acto seguido de dictarse el auto los correspondientes despachos para que la parte ejecutada sea notificada y requerida de pago. Sin embargo, con una escrupulosa aplicación del apartado 1 del art. 686, apoyado por el párrafo segundo del apartado 2 en cuanto a la eventual reclamación extrajudicial, se debería esperar a recibir la certificación registral para no actuar con meras presunciones y sí con certezas; precisamente, uno de los primeros trámites que en la ‘praxis’ se realizan tras autorizar la ejecución es el de reclamar del Registro de la Propiedad dicho documento, aunque el art. 688.1 no diga exactamente en qué momento procesal hay que hacerlo, ni quien, Juez o Letrado de la Administración de Justicia, ha de acordarlo (dice *se reclamará*)⁹⁰⁶.

Con esta situación legal no solo sucede que el Juzgado acuerda requerir de pago “a ciegas” –si bien es verdad que lo normal será que haya coincidencia y, como

⁹⁰⁵ Auto n.º 110/2011, Roj: AAP GC 1717/2011.

⁹⁰⁶ De hecho, en unos juzgados se sigue acordando en el auto despachando ejecución y en otros en un decreto cuya principal disposición es la de interesar aquella certificación; quizá por economía procesal sea mejor la primera opción, porque el hecho de que el competente para expedir los mandamientos sea el Letrado de la Administración de Justicia no impide que pueda acordar su expedición el Juez o Magistrado.

acabamos de apuntar, rara vez se encontrará con que ha habido un cambio de domicilio inscrito tras la constitución e inscripción de la hipoteca-, sino también que no puede comprobar que, en caso de haberse requerido de pago extrajudicialmente y no se haya verificado con el propio interesado, el acreedor lo habrá debido practicar en los domicilios que exige el art. 686.2, dato que resulta determinante para pronunciarse en el auto autorizando la ejecución sobre si es necesaria o no la reclamación por vía judicial. A día de hoy, en los minoritarios casos en que se ha aportado a la demanda el acta notarial de requerimiento de pago, no conocemos ningún expediente judicial en el que se haya determinado la imposibilidad de dictar aquel auto por ignorar aquella circunstancia, con lo cual, si se ha llegado despachar ejecución, habrá sido a expensas de incumplir de lleno lo dispuesto por el art. 686.

Por eso proponemos lo que ya ha sido defendido tiempo atrás por la doctrina (entre otros, CARBONELL LLORENS, ADÁN GARCÍA o DE LA RÚA) y que es que esta certificación deba ser aportada de forma preceptiva por el actor junto a su demanda⁹⁰⁷, independientemente de que el mismo pueda o no acompañar el título (art. 685.3) y del tipo de acreedor que sea (art. 685.4). De adoptarse esta medida, los efectos para el proceso serían altamente beneficiosos:

- De entrada, podría constituir un factor de evitación del proceso, sobre todo cuando se trata de grandes acreedores (léase, entidades bancarias) que tienen que lidiar con una considerable cartera de morosos, pudiendo producirse situaciones de descoordinación interna que aboquen a reclamaciones judiciales frente a quienes ya han saldado su deuda, obtenido su carta de pago y cancelado en el Registro la inscripción de hipoteca.

⁹⁰⁷ Ya en el año 2000 decía CARBONELL LLORENS, CRISTINA, que, “[p]recisamente por lo dispuesto en el citado 130 LH, resulta chocante que el legislador continúe sin exigir, para iniciar el procedimiento, una certificación literal de la inscripción de hipoteca, bastando con la escritura «inscrita». Si el Juez no tiene a la vista la certificación literal, ¿cómo podrá determinar cuáles son los extremos inscritos, que serán los únicos relevantes para la ejecución?”; así como que “se puede dar entonces el contrasentido de que el Juez ordene practicar el requerimiento en el domicilio fijado en la escritura, cuando en la realidad, y en el Registro, dicho domicilio había sido cambiado, con la consecuencia de que después, a la vista de la certificación que se solicita más tarde, el Juez quizá tenga que repetir los requerimientos. A mi juicio, sería deseable que el legislador hubiera exigido desde el primer momento certificación literal de la inscripción de hipoteca y de la de dominio y demás derechos reales sobre la finca, a fin de conocer con certeza “ab initio” si existe o no un tercero poseedor a quien requerir y los domicilios donde deben tener lugar los requerimientos” (“La ejecución hipotecaria...”, op. cit., págs. 298-299 y 308-309, respectivamente). Idea también defendida por ADÁN GARCÍA, quien prefiere “la certificación literal actualizada de la situación de la hipoteca en lugar del título inscrito, y no el título inscrito, que no recoge las vicisitudes posteriores a la misma” (“La ejecución directa...”, op. cit. pág. 868); o DE LA RÚA NAVARRO: “Llama la atención que no se exija que la certificación sea literal, como han puesto de relieve RIVAS TORRALBA y CARBONELL LLORENS, si tenemos en cuenta que la ejecución se ha de llevar a cabo sobre la base de los extremos contenidos en el asiento respectivo, y que por tanto, para el Juez resulta de suma importancia conocer exactamente las cláusulas del préstamo hipotecario que aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad y los términos precisos en que lo están” (“La ejecución hipotecaria...”, op. cit., págs. 525-526).

- Se sabría, ya desde el principio, si existe un tercer poseedor⁹⁰⁸, lo que haría, a su vez, más comprensible el art. 689.1. Este conocimiento no solo interesa al órgano judicial, sino también, aún más, al propio acreedor, que puede no haber tenido conocimiento de la transmisión del bien hipotecado y de la posterior inscripción de la misma.
- En caso de requerimiento previo notarial, se podría comprobar si el acreedor lo ha realizado correctamente, orientando así el contenido, con o sin requerimiento judicial, del auto de despacho de la ejecución.
- Dotaría de mayor coherencia al trámite del requerimiento de pago judicial, conociendo exactamente que el domicilio a donde se dirigen las comunicaciones es el que marca la ley. De otro modo, en caso de discordancia entre lo indicado en la escritura y el Registro, la diligencia, salvo que haya resultado positiva, habrá devenido inútil y será necesario reiterar la notificación-requerimiento.
- Por último, en caso de ser despachada la ejecución, en nada influiría al efecto de publicidad perseguido por el art. 686.2, pues el mismo se cumpliría con el mandamiento que habría de librar el Letrado de la Administración de Justicia al Registro de la Propiedad, ya no para que expidiese aquella certificación, sino para que hiciese constar la incoación del procedimiento. La nota que al efecto se practicaría al margen de la inscripción de hipoteca seguiría del mismo modo advirtiendo 'erga omnes' que el acreedor ha iniciado ya los trámites para realizar el bien hipotecado ante un juzgado y bajo un número de procedimiento cuyos datos habrían de figurar en aquel asiento.

La reformada operada por Ley 19/2015 no ha solventado este problema, pero al menos garantiza que cuando el órgano judicial reciba la certificación de cargas pueda consultar la *inserción literal de la inscripción de hipoteca* (art. 688.1) y comprobar la validez los anteriores extremos.

2.4.3.- Forma de practicar el requerimiento judicial

A la vista de lo escueto del art. 686.1 (...se mandará requerir de pago...), ningún cuidado especial merece para la LEC la forma en que se ha de practicar el importantísimo trámite del requerimiento judicial de pago en la ejecución hipotecaria, echándose en falta una disposición como la del apartado 2 del art. 815.1 para el proceso monitorio, o la del apartado 4 del art. 440.3 para el juicio verbal de desahucio. En ambos se deja patente que el requerimiento es un acto de comunicación que requiere ser practicado por la vía del art. 161, por ende a través de funcionario judicial o procurador, y, sin embargo, el art. 686.1 nada dice al respecto. Afortunadamente, en la práctica no se discute que tenga que hacerse con la intervención de esos profesionales.

⁹⁰⁸ ÁLVAREZ ÁLVAREZ: "El domicilio del deudor...", op. cit., edición digital V-lex, epígrafe II.3.

En cuanto a los destinatarios del requerimiento, la Ley 19/2015 continúa con el sistema de equiparar en este aspecto el requerimiento extrajudicial con el judicial y mantiene la remisión que, “con cierta impropiedad”⁹⁰⁹, realiza el apartado 3 del art. 686 al apartado 2 del mismo cuando refiere que el requerimiento no se ha podido realizar *con las personas a las que se refiere el apartado anterior*, redacción ilógica porque en ningún momento anterior se ha dejado ordenado que el requerimiento judicial se tenga que realizar con aquellas. Por lo demás, sería injusto no reconocer la mejora realizada por la nueva ley al modificar el art. 686.2, que clamaba una reforma más que urgente, sobre todo porque se permitía la práctica de los requerimientos a través de los vecinos.

2.4.4.- Plazo de pago

Puede producir desconcierto advertir que, pese a tratarse el requerimiento de pago de un trámite capital en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el precepto que lo desarrolla no prevé un plazo para poder verificarlo. Tal omisión se trata de solucionar en la práctica judicial con la fijación de un plazo que mayoritariamente ha sido el de 30 días, pues se tienen en cuenta lo hasta hace poco dispuesto en el art. 691.1, que exigía que estuvieran *transcurridos* “treinta días” – ahora *veinte días* desde la Ley 19/2015– *desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas*. El precepto da erróneamente por sentado que dicho requerimiento se ha acordado en todo caso, pese a que, como acabamos de ver, cabe la posibilidad de que el mismo no sea necesario por haberse realizado previamente en forma notarial (art. 686.2); aún más importante es que, en realidad, el ejecutado dispone de un plazo mayor que el indicado, pues no porque hayan pasado ya esos treinta o veinte días se le podrá privar del derecho que le brinda el art. 650.6 (bienes muebles) y 670.7 (inmuebles) de liberar el bien pagando lo que se deba al ejecutante por principal, intereses, siempre que lo realice *en cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante*. Así pues, el ‘dies ad quem’ no puede ser en todo caso el de treinta o veinte días, sino el día, y dentro del mismo el *momento anterior*⁹¹⁰, en que el Letrado de la Administración de Justicia dicta el decreto por el que acuerda tal aprobación o adjudicación. Incluso habría que decir que no cabe fijar como momento preclusivo el de la aprobación del remate (sí en el caso del decreto de adjudicación), pues si el rematante no llega a consignar el precio habrá que declarar la

⁹⁰⁹ ACHÓN BRUÑÉN: “Soluciones para la mejora...”, op. cit., pág. 5; reiterado en “Comentario crítico de las modificaciones...”, op. cit., pág. 2.

⁹¹⁰ Resulta complicado determinar ese *momento anterior* del que habla el precepto. Puede ocurrir que el deudor consigne en la cuenta del juzgado la cantidad debida a las 11:00 horas del día en que el Letrado de la Administración de Justicia tiene previsto dictar el decreto y que este no tome conocimiento de esa consignación hasta el día siguiente, independientemente de que aquel presente escrito o no al respecto. ¿Habría que dejar sin efecto dicha resolución? Pensamos que sí. Para evitar problemas como el descrito, sería prudente que se consultara la cuenta antes de adoptar aquella decisión.

subasta en quiebra y acordar celebración de una nueva (art. 653.1), con la consiguiente reactivación del derecho de liberación del bien por parte del deudor⁹¹¹.

Por otro lado, si se tratara de ejecución hipotecaria por vencimiento anticipado de deudas a plazos y el bien hipotecado fuese la vivienda habitual del ejecutado, podrá incluso rehabilitar el crédito si lo regulariza antes de que *se cierre la subasta*, conforme establece el art. 693.3.

Al margen de la tónica habitual, no faltan resoluciones que optan por el plazo de diez días⁹¹², que es el usualmente utilizado ‘extra legem’ con carácter general en cualquier procedimiento en defecto de plazo concreto definido por la ley. También puede servir de referente el plazo de diez días que el art. 690.1 dispone para que el acreedor pueda pedir la administración o posesión interina del bien hipotecado. E incluso hay quien postula la falta de otorgamiento de plazo, requiriéndose de pago en el acto como sucede en la ejecución ordinaria con el resto de títulos no procesales o arbitrales (art. 581.1), propuesta muy coherente, desde luego, con la naturaleza del título en que se funda la ejecución hipotecaria, pero de todo punto huérfana de sentido práctico si tenemos en cuenta que será muy extraño que en este proceso el requerimiento no sea para pagar decenas de miles de euros y, aun más raro todavía, que el ejecutado disponga en dicho momento de semejantes cantidades.

La conclusión que alcanzamos sobre este particular es que no resulta tan descabellada la llamativa ausencia de plazo en la ley para que la parte ejecutada en el procedimiento hipotecario atienda el requerimiento de pago. Ciertamente es que ocasiona “inseguridad jurídica, prácticas diversas y opiniones discrepantes” (ACHÓN BRUÑÉN⁹¹³), pero el derecho potencial del ejecutado de liberar el bien y, en su caso, rehabilitar el préstamo, durante la tramitación del proceso de ejecución conlleva que sea difícil establecer un plazo. Quizá por ello, el art. 686.1 podría, al menos, completarse instruyendo al ejecutado acerca de que el requerimiento de pago podrá ser atendido hasta el momento en que el bien hipotecado sea enajenado a tercero, previniéndole al mismo tiempo del mayor importe que por intereses y costas se va a irremediabilmente devengar.

2.5.- COMUNICACIONES AL TERCER POSEEDOR Y A LOS ACREEDORES POSTERIORES

2.5.1.- Tercer poseedor

a) *Diferencias con la ejecución ordinaria*

Bajo la rúbrica de “Comunicación del procedimiento al titular inscrito y a los acreedores posteriores”, dispone el art. 689.1 que:

Si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las

⁹¹¹ Cfr. PEDRAZ PENALVA, ERNESTO: “Comentarios al artículo 670”, *Proceso Civil Práctico*, Tomo VIII (Artículos 634 a 747), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, pág. 252, nota al pie n.º 3.

⁹¹² V. gr., AAJPI n.º 13 Málaga 20.11.2012 (Roj: AJPI 15/2012) y 10.04.2013 (Roj: AJPI 7/2013).

⁹¹³ ACHÓN BRUÑÉN: “Soluciones para la mejora...”, op. cit. pág. 5.

formas notarial o judicial, previstas en los artículos anteriores, se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio que conste en el Registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca.

El precepto se refiere, sin decirlo, pero bajo la genérica fórmula de *titular inscrito*, al tercer poseedor, cuya figura ya hemos estudiado en la ejecución ordinaria y cuyo art. 662 sí lo nombra expresamente. Resulta extraño que la ley de por sentando que el operador jurídico comprende el significado de tal figura en aquel procedimiento y, sin embargo, tenga que hablar en la ejecución hipotecaria de *la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio*, perifrasis con la que tampoco termina de perfilar la noción de tercer poseedor. Aparte de consideraciones formales, lo esencial reside en el diferente tratamiento que la ley dispensa al tercer poseedor de un bien embargado y al tercer poseedor de un bien hipotecado. El primero es el ya referido del art. 662.1 y la sola existencia de la previa anotación de embargo se entiende publicidad suficiente como para que no sea necesario “avisarle” de la existencia de la ejecución; el segundo es el del art. 689.1 y, a diferencia de aquel, la LEC considera que, si no ha sido requerido de pago, hay que notificarle la existencia del proceso judicial en el que el acreedor está pretendiendo ejecutar la garantía, que a la postre podrá suponer la adjudicación del bien hipotecado a otra persona y la cancelación registral de su inscripción de dominio. Hay que matizar que la ley se refiere en todo momento a un tercer poseedor que ha inscrito su derecho y que lo ha hecho con anterioridad a la expedición de la certificación de cargas del art. 688⁹¹⁴; si lo ha sido con posterioridad, estaremos ante el supuesto también previsto en el art. 662.1 de adquisición de un bien *después de consignado registralmente el comienzo de apremio*, en alusión a la anotación de expedición por el Registrador de aquella certificación, que tendrá idéntico efectos de publicidad que la antes mencionada anotación de la traba.

A la hora de practicar la notificación al tercer poseedor del art. 689.1 hay que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 683.3, que es el que determina el domicilio del tercer poseedor en este ámbito, que será *el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición*. Pese a esta disposición, puede ocurrir que estemos ante un poseedor cuya adquisición haya sido en virtud de otro procedimiento de realización del mismo bien hipotecado, pero por una carga o garantía posterior y no preferente. El adquirente se habrá subrogado en la carga o hipotecaria anterior (art. 668.p2) y quizá le interese comunicar al Registro un domicilio “a efectos de requerimientos y notificaciones para una eventual ejecución de la carga «subsistente» preferente”, supuesto que extraemos de la **RDGRN de 29.05.2013**, en cuyo caso el domicilio fue el que se hizo constar por nota marginal en la inscripción de

⁹¹⁴ Pese a que en la doctrina se ha afirmado que no es preciso que ese tercero haya inscrito su titularidad para ser considerado jurídicamente como tercer poseedor. Vid. PUEBLA POVEDANO, ANTONIO: “El procedimiento de apremio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31/2000) Escuela Judicial, CGPJ, Madrid, 2000, pág. 387.

hipoteca⁹¹⁵. Nótese, por último, que el precepto utiliza una tercera denominación de la figura que estudiamos y que al final resulta ser la más correcta de todas: la de *terceros adquirentes*.

b) Órgano competente para notificar al tercer poseedor la existencia del proceso hipotecario

Siendo así que el tercer poseedor tendrá un evidente interés directo en el proceso hipotecario, la ley prevé que si, advertida su presencia en la certificación de cargas del art. 688, y no habiendo sido requerido de pago ni notarial ni judicialmente por no haber acreditado al acreedor su adquisición –en cuyo caso habría de ser una de las partes ejecutadas del art. 685.1–, *se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona*⁹¹⁶.

Como siempre que una ley emplea un verbo en forma reflexiva (*se notificará*), surge el interrogante de a quién se refiere, pudiendo pensarse, por un lado, en el propio **órgano judicial**, más en concreto en el Letrado de la Administración de Justicia, bajo cuya dirección se realizarán los actos de comunicación judicial (art. 152.1), como ya estudiamos al principio del trabajo. Así lo entienden, entre otros, VEGAS TORRES, para quien, a diferencia de lo que sucede en la ejecución ordinaria, “en la ejecución hipotecaria, sin embargo, la notificación debe realizarla el tribunal”⁹¹⁷; MONTERO AROCA, que, sencillamente, dice que “esta notificación la hará el Juzgado”⁹¹⁸; o GARBARI LLOBREGAT, autor que excluye expresamente al Registrador y hace recaer sobre el Letrado de la Administración de Justicia el “deber de comu-

⁹¹⁵ BOE de 28.06. La resolución relata que “[a]l margen de la inscripción de hipoteca consta extendida una nota de fecha 27 de junio de 2010, por la que se hace constar que el titular registral de la finca «solicita respecto de la obligación hipotecaria subsistente, objeto de la inscripción tercera, de la cual el que suscribe como adjudicatario debe responder frente al tenedor, solicita que ante una hipotética ejecución hipotecaria de esta finca, por quien pudiera ser tenedor de dicha obligación, viene a señalar como domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos la calle...»” (Punto Primero de los “Hechos”).

⁹¹⁶ El precepto es copia casi literal del antiguo art. 131 LH, regla Quinta, párrafo 1º, antes de su reforma por la Ley 1/2000, que también empleaba la partícula reflexiva: “Quinta. Si de la certificación del Registro apareciese que la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio o de posesión, en su caso, a que se refiere el extremo primero de la regla cuarta, no ha sido requerida de pago en ninguna de las formas notarial o judicial antes indicadas, se notificará a la misma la existencia del procedimiento en el lugar prevenido en la regla tercera de este artículo para que pueda, si le conviene, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito y de los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca”.

Y con ese mismo reflexivo aparece redactado hoy el art. 132.2º LH tras su reforma por la Ley 1/2000, que extiende el ámbito de calificación del Registrador de la Propiedad a verificar, entre otros extremos, que “*se*” *ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca, a excepción de los que sean posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas, respecto de los cuales la nota marginal surtirá los efectos de la notificación*.

⁹¹⁷ VEGAS TORRES: “La ejecución sobre bienes hipotecados...”, op. cit., pág. 285, lo que reitera en págs. 305 y 307.

⁹¹⁸ MONTERO AROCA: *Ejecución de la hipoteca inmobiliaria*, op. cit., cap. 8º, ep. IV.a).

nicar la litispendencia de la ejecución al titular del bien hipotecado o pignorado”⁹¹⁹.

La otra posibilidad es pensar en que sea el **Registrador** de la Propiedad, entendido que el tercer poseedor es titular de un derecho (en este caso de dominio) cuya inscripción de dominio es posterior a la de la hipoteca que sustenta el derecho del acreedor ejecutante, de tal modo que, como sucede en la ejecución ordinaria respecto de los titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad al gravamen que se ejecuta, resultará de aplicación el art. 659.1 por remisión del art. 689.2 y que obliga a dicho *registrador a comunicar[les] la existencia de la ejecución*. Aunque no hay consenso en la doctrina⁹²⁰, esta segunda interpretación es la que acoge la propia DGRN, que en **Resolución de 23.07.2011** no duda en afirmar que “la notificación de la existencia del procedimiento al tercer poseedor debe realizarse por el registrador –en la forma recogida por el artículo 659– y no por el juez” (F. D. 3, aptdo. B)⁹²¹. Tal postura resulta coherente con la mostrada años antes por el Centro Directivo en la **Instrucción de 12.12.2000**⁹²², por la que vino a dar respuesta a diversas consultas realizadas por varios profesionales del Derecho con motivo de la promulgación de la Ley 1/2000, entre ellas la relativa a “quién debe realizar las comunicaciones a titulares de derechos inscritos con pos-

⁹¹⁹ GARBERI LLOBREGAT: “Comentario de los artículos 681 a 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *El Proceso de Ejecución Forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Civitas, 2013 (BIB 2013\1799); edición digital, epígrafe “1 IV.1. Comunicación de la existencia del procedimiento a terceros interesados”.

Aún podríamos citar a más autores, como a DE LA RÚA NAVARRO: “La notificación la hace la Autoridad Judicial. Esta circunstancia no viene prevista de forma expresa en el precepto [...], pero mayoritariamente se entiende que la lleva a cabo el Juez, que es por otro lado el que puede saber si el tercer poseedor fue o no demandado y requerido de pago previamente” (“La ejecución hipotecaria...”, op. cit. pág. 529); a SÁNCER PELEGRINA, JOSÉ ANTONIO: “La ejecución hipotecaria sobre bienes inmuebles en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *BIMJ* n.º 1932-33, Madrid, 15 de enero de 2003, pág. 28.

⁹²⁰ Por ejemplo, ADÁN GARCÍA atribuye la tarea la Registrador (“La ejecución directa...”, op. cit., pág. 873); RAMÓN CHORNET, JUAN CARLOS, al órgano judicial: “esta notificación a personas que tienen derecho a intervenir en diversas fases del procedimiento, se realiza, como es lógico, por el Juzgado y como un trámite más del procedimiento de ejecución” (“La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva LEC 2000”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31-2000, CGPJ, págs. 397-505 (Edición digital, Código ED0003108), CGPJ, Madrid, Aptdo. VI.5.d).

⁹²¹ BOE de 29.09.2011. El órgano directivo argumenta que “esta conclusión es coherente con el principio general de notificación por el registrador”, lo cual “no es incompatible con la separación de apartados que contiene el artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto ésta se explica suficientemente con la facultad de intervención concedida al tercer poseedor en el artículo 662, que no prevé para los titulares de cargas o derechos reales a que refiere el artículo 689.2”; y añade, por último, que “es compatible también con lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Ley Hipotecaria, de suerte que, si el registrador ha de calificar las notificaciones que él mismo debe realizar a titulares de cargas posteriores, debe poder también calificar las notificaciones que él –o su antecesor en el Registro– haya realizado a los terceros poseedores de la finca hipotecada” (ídem).

⁹²² BOE de 22.12.2000. Aunque la instrucción se titula “sobre interpretación del artículo 86 de la Ley Hipotecaria en la nueva redacción dada por la disposición novena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, lo cierto es que no solo se ocupa de aquel precepto, sino también de resolver otras consultas, como la que aquí analizamos, formulada por la Registradora de la Propiedad de Toledo número 1.

terioridad al gravamen que se ejecuta en las ejecuciones sobre bienes hipotecados”. Ni la pregunta ni la respuesta distinguían entre titulares dominicales y no dominicales, como sí hace el art. 689 en sus apartados 1 y 2, manifestando que:

“[...] las comunicaciones a titulares de derechos inscritos en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, a que se refiere el artículo 689 en relación con el 659 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, las realizará el Registrador de la Propiedad tratándose de ejecuciones iniciadas con arreglo a la citada Ley (cfr. disposición transitoria séptima de la Ley 1/2000). Las ejecuciones hipotecarias que aún se tramiten por el procedimiento judicial sumario con arreglo al artículo 131 de la Ley Hipotecaria todavía vigente, las realizará el Juez, aunque el mandamiento ordenándolas se presente una vez en vigor aquella” (Aptdo. XI).

Aun aceptando esta opción en la que se impone al Registrador de la Propiedad una especie de “auto-calificación” (que, desde luego, es clara con los art. 659.1 LEC y art. 132.2º LH), la misma no resuelve la duda de cómo sabe el Registrador si se ha requerido de pago notarial o judicialmente al tercer poseedor, puesto que la LEC no exige al Letrado de la Administración de Justicia que al tiempo de reclamarle la certificación le haga constar un particular relativo a una persona de la que ni siquiera puede que tenga conocimiento de sus existencia. Todas estas disquisiciones que estamos estudiando son consecuencia de la artificial e innecesariamente enrevesada y defectuosa redacción del art. 689.1. Veamos por qué:

- El precepto no está coordinado con lo que dispone el art. 132.1º LH, que obliga al Registrador a extender su deber de calificación a comprobar que “se ha demandado y *requerido de pago*” a los terceros poseedores que tengan su derecho inscrito en el momento de expedirse la certificación de cargas. La disposición procesal solo establece la notificación, pero la hipotecaria habla de notificar y de requerir.
- Como dice RAMÓN CHORNET, “de la certificación registral nunca aparecerá si el titular dominical ha sido o no requerido de pago”⁹²³, o, dicho de otro modo, el documento que expide el Registrador no puede ser la fuente del conocimiento (*...si de la certificación registral apareciere...*) acerca de tal extremo, puesto que el único que lo sabrá será el órgano judicial que está ejecutando la hipoteca de que se trate, bastándole comprobar si la persona que allí aparece ha sido demandada o no. Así pues, siguiendo al mismo autor, “lo que la norma quiere decir es que el Juez deberá comprobar si el dueño registral de la finca ha sido demandado y requerido de pago conforme a los arts. 685 y 686 LEC o si, por no darse los presupuestos que contemplan estos preceptos -y en concreto por no haber acreditado al acreedor la adquisición del inmueble antes de la interposición de la demanda-, no ha sido demandado ni requerido y procede hacer la notificación prevista en el art. 689.1”⁹²⁴.

⁹²³ RAMÓN CHORNET: “La oposición a la ejecución...”, op. cit., Aptdo. VI.5.b).

⁹²⁴ Ídem nota anterior.

- Y si, en efecto, aparece de forma sobrevenida en el procedimiento la figura del tercer poseedor, la consecuencia será, no la de que se le requiera de pago, sino simplemente la de que se le notifique la existencia de la ejecución contra su bien hipotecado. Esta diferencia de trato con el tercer poseedor que sí ha sido demandado por el acreedor no tiene justificación desde el punto de vista técnico.

Visto el estado de la cuestión, a pesar de la tesis contraria que tiene la DGRN y de la fuerza vinculante que sus resoluciones puedan tener, al menos *para todos los Registradores* (art. 327p10 LH), debemos posicionarnos a favor de la primera de las posibilidades estudiadas. El conocimiento directo del pleito y de sus vicisitudes por el juzgado, la separación nada casual del ‘dominus’ posterior en el apartado 1º del art. 686 de quien ostenta un derecho de diferente naturaleza en el apartado 2º, así como el significativo empleo del término más técnico de notificación – para quien tiene propiamente practicarlo –, frente al más genérico de comunicación, que es el que utiliza la LEC cuando menciona expresamente al Registrador de la Propiedad, abonan este planteamiento, el cual, además, termina a de apuntalar-se si observamos que en el proyecto de ley de 1998 de la que luego sería la Ley 1/2000 sí que se señalaba expresamente al *tribunal*⁹²⁵. La conclusión será la de que, una vez recibida la certificación de cargas, el órgano judicial examinará quién es el último titular de dominio inscrito y si se trata de una persona distinta de la que aparece en autos como parte ejecutada, será dicho órgano, y no el Registrador, quien deba notificarle la existencia de la ejecución.

c) Simple notificación y no requerimiento de pago al tercer poseedor

Siguiendo con el estudio del art. 689, la doctrina ha puesto de manifestó que el precepto solo prevé que se notifique al tercer poseedor la existencia de la ejecución hipotecaria, pero no que se le requiera de pago, como sí procede cuando el ejecutante ha tenido conocimiento de su existencia y por ello ha debido demandarle en litisconsorcio pasivo necesario con el deudor (art. 685.1). Se trata de un opción legal incoherente, pues en ambos casos, aun cuando el tercer poseedor no es el prestatario del crédito hipotecario ni se ha constituido formalmente en deudor, su posición es, por subrogación real, cercana a la del hipotecante no deudor y, lo mismo que a aquel se le requiere que pague una deuda ajena, así habría de acordarse respecto a este, si bien hasta el límite de la cobertura hipotecaria, como

⁹²⁵ En el proyecto de ley, aprobado por Consejo de Ministros de 30.10.1998, el contenido del entonces artículo 692.1, luego reubicado al art. 689.1, establecía que “*el tribunal* ordenará que se notifique la existencia del procedimiento a aquella persona...”, permaneciendo el resto del párrafo idéntico a como lo conocemos en la actualidad. La supresión de la referencia “*el tribunal*” fue consecuencia de la aceptación de la enmienda n.º 972 del Grupo Parlamentario Popular, considerándola como una “mejora técnica” (sic). Se justificaba en que “al suprimir la palabra «tribunal» y sustituirla por el impersonal «se», desaparece el doble uso del terminal «tribunal» —como personal juzgador y como órgano jurisdiccional— y además se aclaran las actuaciones que puede practicar el Secretario Judicial por sí mismo, al formar parte de la ordenación del proceso.” (BOCG, Serie A, núm. 147-9 de 26.03.1999, pág. 463).

ya previene el art. 1879 CC⁹²⁶ y del que es trasunto la parte final del art. 689.1 LEC. La relación que une al tercer poseedor con el acreedor no es de naturaleza personal, sino real, explicándose por ello que tenga la legitimación pasiva que prevé el art. 538.2.3⁹²⁷, en litisconsorcio necesario con el deudor (art. 685.1).

2.5.2.- Acreedores posteriores. Omisión o defectos en las comunicaciones

La LEC no establece diferencias en la forma de proceder respecto a quienes en el título del art. 689 denomina *acreedores posteriores*, y por ello el apartado 2 de dicho precepto es una norma en blanco: *Cuando existan cargas o derechos reales⁹²⁸ constituidos con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito del actor, se aplicará lo dispuesto en el artículo 659*; dicho de otro modo: el Registrador de la Propiedad será el que efectúe la “comunicación” de la existencia de la ejecución.

Sin embargo, lo anterior es solo en apariencia. Retomando lo anunciado en el epígrafe anterior respecto del art. 660.2, que hay que aplicar junto al art. 659, en cuanto a la inocuidad de la omisión o defectos en las comunicaciones con estas personas, la **RDGRN 23.07.2011**⁹²⁹ entendió que “este precepto carece de aplicación en el ámbito de la ejecución directa sobre bienes hipotecados”, de modo que “la omisión de las notificaciones hubiera impedido la inscripción y cancelación pretendidas” (F. D. 3.C y 4). La resolución contiene “las siguientes razones”:

“el propio artículo 132 de la Ley Hipotecaria impone al Registrador la necesidad de calificar las notificaciones; la remisión realizada en el artículo 689 lo es al artículo 659 y no al 660; y sobre todo, la diferencia sustancial entre anotación de embargo e hipoteca, en cuanto que en la hipoteca los terceros, ya sean adquirentes o titulares de derechos o cargas, solo pueden conocer la apertura de la fase de ejecución mediante la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, mientras que en la ejecución ordinaria basta para este conocimiento la práctica de la anotación preventiva” (F. D. 3.C).

3.- COMUNICACIONES EN EL AMBITO DEL JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO

3.1.- DIFERENTES TIPOS DE JUICIO DE DESAHUCIO

Uno de los motivos por los que la LEC ha sufrido varias reformas en los últimos años ha sido el de la necesidad de agilizar aquellos procesos judiciales destinados a restituir a su propietario en la posesión de un bien inmueble –o *finca*, como dice

⁹²⁶ **Art. 1879 CC:** *El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de la parte del crédito asegurada con los que el último posee, en los términos y con las formalidades que la ley establece.*

⁹²⁷ **Art. 538.2:** [...] *solo podrá despacharse ejecución frente a los siguientes sujetos: [...]*

^{3.º} *Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección derive de la Ley o se acredite mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará, respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos.*

⁹²⁸ La disposición debería decir *cundo existan* “otras” *cargas o derechos reales*, por cuanto el dominio es también un derecho real. Solo así se comprende la separación del precepto en dos párrafos.

⁹²⁹ BOE de 29.09.2011.

aquella (art. 250.1.1º y 2º)– tras cederlo en arrendamiento. Desde la promulgación de nuestra ley rrituaria en el año 2000, las leyes 23/2003, 13/2009, 19/2009, 37/2011 y 4/2013 –sin olvidar la LO 19/2003, que creó las (fallidas) “Oficinas de Señalamiento Inmediato”⁹³⁰–, han tratado de depurar y perfeccionar, sin conseguirlo del todo, el proceso judicial de desahucio, en especial cuando el motivo es la falta de pago de las rentas o cantidades asimiladas. Este último es el que ha experimentado el cambio más profundo e innovador, sobre todo tras aplicársele por Ley 37/2011 la técnica del proceso monitorio.

Hemos enunciado en plural el título de este epígrafe porque no existe un único juicio de desahucio, sino tres⁹³¹:

- a) Juicio verbal por demandas que, *con fundamento en el impago de rentas y cantidades debidas, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca* (art. 250.1.1º).
- b) Juicio verbal por demandas que, *con fundamento en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca* (art. 250.1.1º).
- c) Juicio verbal por demandas que *pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca* (art. 250.1.2º).

Estos tres juicios, aun ventilándose todos por el cauce del juicio verbal, cuentan cada uno con especialidades, siendo el primero el que tiene un régimen jurídico radicalmente diferenciado de los otros dos por razón de que estamos, en realidad, ante un proceso monitorio aplicado a los litigios arrendaticios. En cualquier caso, las modificaciones introducidas por el legislador en este ámbito tienen una repercusión directa en los actos de comunicación y abarcan desde la propia incoación del proceso hasta la notificación de la resolución final, pasando por la forma en que se cita o convoca a las partes a la celebración de la vista, si es que la celebración de la misma resulta procedente.

3.2.- EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

El régimen de comunicaciones en los procesos de desahucio ha ido de la mano de las sucesivas reformas legales que ha experimentado la LEC en torno a ellos, muchas de las cuales han tenido por objeto, precisamente, los actos de comunica-

⁹³⁰ Disp. Adic. 12.3 de la LO 19/2003, que añadió a la LEC la Disposición Adicional Quinta.

⁹³¹ Mención aparte de aquellos otros “desahucios” en sentido impropio o desposesiones de bienes inmuebles que pudieran ser consecuencia de la extinción anormal de la relación arrendaticia y que vienen necesariamente incardinados en el juicio ordinario del art. 249.1.8º.

ción. Los primeros cambios se produjeron por Ley 23/2003 y los últimos, hasta la fecha, por Ley 4/2013, así como colateralmente por la Ley 42/2015 con la generalización de la contestación escrita a la demanda en el juicio verbal. Estudiamos a continuación los cambios introducidos en lo que a nuestra materia se refiere:

a) *Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo*:

1. **La reducción del plazo preclusivo para enervar el desahucio.** Aunque se trata de una cuestión pre-procesal y no concerniente propiamente a los actos de comunicación judicial, es de destacar la reducción del plazo, de cuatro a *dos meses*, que el arrendador tenía que esperar para interponer la demanda de desahucio una vez requerido extrajudicialmente de pago al arrendatario si pretendía que este no enervara la acción abonando o poniendo a su disposición las cantidades reclamadas (art. 22.4⁹³²). Este plazo ha sido reducido posteriormente en dos ocasiones, llegando a los treinta días de la actualidad. Lo que no ha cambiado es que el citado requerimiento ha de hacerse *por cualquier medio fehaciente*, es decir, de forma que el arrendador pueda demostrar que ha existido una comunicación previa al proceso judicial para intentar evitarlo y que suele corresponder con el envío al arrendatario de un burofax con acuse de recibo y con certificación de texto.

Con la Ley 37/2011 este plazo para poder presentar la demanda sin posibilidad de enervación se reducirá a, *al menos, un mes de antelación* (art. 22.4⁹³³) y más tarde la Ley 4/2013 realizará una pequeña modifi-

⁹³² “Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los términos siguientes: Uno. El segundo párrafo del apartado cuarto del artículo 22 queda redactado de la forma siguiente: Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con, al menos, *dos meses* de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación».

⁹³³ “[...] Artículo cuarto. *Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.* La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes términos: Uno. El apartado 4 del artículo 22 queda redactado en los siguientes términos: «4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán *mediante decreto dictado al efecto por el Secretario Judicial si, requerido aquél previamente a la celebración de la vista en los términos previstos en el artículo 440.3 de esta Ley, paga al actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda, y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.*»

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, *un mes* de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación».

cación, pasando de “un mes” a *treinta días*, debiendo computarse como días naturales⁹³⁴ por tratarse de un trámite previo al proceso y no de un plazo procesal (cfr. art. 133.2).

2. **La expresa mención de la vivienda o local arrendado como lugar hábil para actos de comunicación.** La gran dilación de los procesos de desahucio arrendaticio ha venido motivada desde siempre por la “desaparición” del deudor arrendatario del bien inmueble arrendado, complicando con ello la tarea de localizarlo para darle a conocer la existencia del litigio planteado en su contra y citarlo con las debidas garantías a juicio. Para evitarlo, la Ley 23/2003 incorpora expresamente *la vivienda o local arrendado* como domicilio que puede designar el actor *a efectos de actos de comunicación* (nuevo párrafo 2º del art. 155.3⁹³⁵) y, correlativamente, que es lo realmente importante, añade el inciso *o fuere la vivienda o local arrendado al demandado* como uno de los lugares en que será procesalmente eficaz la comunicación domiciliaria con terceros receptores subsidiarios si *no se encontrare allí dicho destinatario* (art. 161.3⁹³⁶), y aunque este se encuentre empadronado en otro lugar, por ejemplo.
3. El señalamiento del **lanzamiento** en el propio auto de admisión a trámite, con carácter anticipatorio para el caso de sentencia estimatoria de la acción de desahucio, llevándose a efecto una vez firme si así lo solicitara el demandante mediante demanda ejecutiva y con apercibimiento ex-

⁹³⁴ ACHÓN BRUÑÉN: “Estudio crítico de la reforma del juicio de desahucio por falta de pago por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler”, *Diario La Ley*, n.º 8130, 19.07.2013, Editorial La Ley, Madrid, pág. 1.

⁹³⁵ “[...] Tres. Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del artículo 155, con el siguiente texto: «Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, podrá designarse como domicilio del demandado, a efectos de actos de comunicación, la vivienda o local arrendado»”.

Se trataba de una novedad un tanto intrascendente, tal y como comentó LÓPEZ CHOCARRO en torno a este precepto (y también al art. 161.3): “no veo la efectividad práctica de la reforma, pues de hecho en la mayoría de ocasiones ya se designaba como domicilio del demandado a efectos de actos de comunicación el de la vivienda o local arrendado” (“El desahucio por falta de pago en la nueva LECiv; un largo y tortuoso camino hacia la ejecución. Incidencia de la reforma contenida en la Ley 23/2003”, *Actualidad Jurídica Aranzadi* n.º 589 (opinión), Aranzadi, Pamplona, 2003; edición digital ref. BIB 2003\1004).

⁹³⁶ “[...] Cuatro. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 161 quedará redactado de la siguiente forma: «3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal o a efectos fiscales o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales *o fuere la vivienda o local arrendado al demandado*, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndolo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero»”.

preso al demandado sobre esta eventualidad (art. 440.3)⁹³⁷.

4. **La reducción del plazo para dictar sentencia y el lugar de notificación de la misma.** Como excepción a la regla general, *la sentencia se dictará en los cinco días siguientes –en lugar de diez–, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del Tribunal para recibir la notificación, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia* (nuevo art. 447.1p1⁹³⁸). No obstante, siendo preceptiva la intervención de procurador y abogado⁹³⁹, la notificación de la sentencia debería realizarse a través de estos profesionales en la forma ordinaria, que hoy día es la telemática al Colegio de Procuradores vía Lexnet (arts. 154.2 y 162.1), no teniendo sentido obligarles a comparecer a la sede judicial expresamente para realizar aquel trámite. Además, el precepto es ambiguo respecto al día en que se cita a las partes. Si el juez tiene cinco días para dictar la sentencia y es a partir del dictado de la misma cuando comienza el cómputo de los otros cinco días para recibir la notificación, ¿cómo saben las partes cuándo está aquella resolución dictada?

b) *Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios*⁹⁴⁰:

⁹³⁷ “[...] Siete. El apartado 3 del artículo 440 tendrá el siguiente texto: «3. En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el Tribunal indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo fin otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento. También se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites. Igualmente, el Tribunal fijará en el auto de admisión día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que podrá ser inferior a un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada si lo solicita el demandante en la forma prevenida en el artículo 549»”.

⁹³⁸ “[...] Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 447, que tendrá el siguiente texto: «1. Practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, en otro caso, las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del Tribunal para recibir la notificación, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia»”.

⁹³⁹ Esa es la postura mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia, al tratarse de un juicio verbal que se sustancia por razón de la materia, lo que ya ha sido confirmado por Ley 42/2015 y su reforma aclarando el art. 23.2.1º.

⁹⁴⁰ Esta ley es, junto a la Ley 37/2011, la que aborda con más detenimiento los juicios de desahucio e introduce cambios de mayor calado. En su Preámbulo se resume la reforma realizada en aquel año 2009: “[...] El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por falta de pa-

1. **Refuerzo de la eficacia del inmueble arrendado como domicilio para actos de comunicación.** La Ley 19/2009 continúa el cambio iniciado por la Ley 23/2003 y, si con aquella podía designarse la vivienda o local arrendado como un domicilio más donde surtirían efectos los actos de comunicación judicial, ahora ese domicilio será el que, *a todos los efectos*, se entienda como el pactado por las partes si las mismas no han acordado señalar otro distinto en el contrato de arrendamiento (párrafo 2º reformado del art. 155.3⁹⁴¹), solución similar a la ya existente en la Ley de Propiedad Horizontal (art. 9); lógicamente, la novedad solo resulta aplicable a los juicios de desahucio por falta de pago o por expiración del plazo, no por precario, donde no hay contrato en el que incorporar una cláusula relativa a las comunicaciones entre las partes.
2. **Comunicación edictal semi-directa:** En conexión con la novedad anterior, y con cierta osadía que no mucho tiempo después el Tribunal Constitucional censurará (vid. STC 30/2014), la ley modifica el régimen de comunicación edictal en los procesos de desahucio tanto por falta de pago como por expiración del plazo y, en caso de que el arrendatario no fuere hallado, bien en el domicilio señalado en el contrato de arrendamiento, bien, en defecto de dicha designación, en el de la propia vivienda o local arrendado, ordena proceder, *sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial* (nuevo párrafo

go de rentas o cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración legal o contractual del plazo del arrendamiento. Se amplía también el ámbito del juicio verbal para que puedan sustanciarse por este procedimiento las reclamaciones de rentas derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio, lo que permite salvar, en su caso, la relación arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el propietario acreedor de rentas o cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la del desahucio si quería acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. Igualmente, cuando las reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al proceso monitorio y se formule oposición por el arrendatario, la resolución definitiva seguirá los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Además, en varios supuestos se reducen plazos y se eliminan trámites no sustanciales que hasta ahora dilataban en exceso la conclusión del proceso" (Aptdo. II).

⁹⁴¹ "[...] Cuatro. El apartado 3 del artículo 155 queda redactado del siguiente modo: 3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se trate, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial".

4º del art. 164⁹⁴², al que la Ley 4/2013 añadirá *o requerimiento*). Esta reforma era muy necesaria porque ha hecho viable desde entonces poder cumplir los breves plazos que se establecen para practicar los lanzamientos. De esta importante modificación nos ocuparemos en un epígrafe específico más adelante.

3. **El fin de la fase de cognición, en todos los desahucios, por la incomparecencia del demandado.** La Ley 19/2009 modifica de nuevo el aptdo. 3 (hoy aptdo. 4 tras la Ley 4/2013) del art. 440⁹⁴³ para extender a los tres tipos de desahucio el efecto de declarar el desahucio *sin más trámites* si el demandado no comparece a la vista, medida que con anterioridad solo se contemplaba para el desahucio por falta de pago. Por su importancia, el precepto ordena que en la citación se aperciba expresamente a aquella parte sobre esta previsión, que viene a ser una excepción a la regla general del art. 497.2, en cuanto que la rebeldía *no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos, salvo los casos en la que la ley expresamente disponga lo contrario*.
4. **Citación anticipada al demandado para recibir la notificación de la sentencia.** La ley mejora la redacción del art. 440.3 reformado por Ley 23/2003 y, para evitar el problema de dónde y cómo notificar la sentencia al demandado que no comparece a la vista y que en muchas ocasiones ya se ha marchado del inmueble, se introduce la novedad de dejarle citado, al mismo tiempo que se le cita a juicio, *para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista. Si no llegara a comparecer, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial*,

⁹⁴² “[...] Cinco. Se añade un nuevo párrafo al artículo 164, que queda redactado en los siguientes términos: «En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial»”.

⁹⁴³ “[...] Trece. El apartado 3 del artículo 440 queda redactado del siguiente modo: «3. En los casos de demandas de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, se indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo fin se otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento.

En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en la citación que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá producirse antes de un mes desde la fecha de la vista, advirtiéndole al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior»”.

conforme ordena el nuevo párrafo 3º que oportunamente se añade al art. 497.2 para dar cobertura legal a dicha medida⁹⁴⁴.

Lo que sí olvida la Ley 29/2009 es que si no se trata de desahucio de finca urbana sino rústica el plazo para dictar sentencia será el de diez días como de ordinario y no de cinco (art. 447.1), por lo que puede suceder que el arrendatario acuda al juzgado al sexto día y la misma no haya sido dictada todavía⁹⁴⁵.

5. **Adelanto de la fecha de lanzamiento.** Si con la Ley 23/2003 se estableció que la fecha del lanzamiento en caso de sentencia firme condenatoria “podrá ser inferior a un mes desde la fecha de la vista”, ahora se pasa de una mera posibilidad a una obligación, de forma que *deberá producirse antes de un mes desde la fecha de la vista* (art. 440.3).
6. **Supresión de la demanda ejecutiva y de la notificación confirmando el lanzamiento.** Se refuerza el automatismo de la medida de lanzamiento eliminando la necesidad de que el actor presente demanda ejecutiva (excepto en caso de precario), estableciendo que *la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento* (nuevo aptdo. 3 del art. 549⁹⁴⁶). Paralelamente, en la advertencia a realizar al demandado sobre la práctica del lanzamiento en caso de sentencia condenatoria que no sea recurrida se aclara que esta diligencia ejecutiva se llevará a cabo *sin necesidad de notificación posterior* (art. 440.3). Con ello se cierra la posibilidad de que aquel alegue ante la Comisión judicial, en el mismo acto del lanzamiento, su “sorpresa” por no haber tenido conocimiento de la medida adoptada por el juzgado y por no haber sido avisado con antelación.

⁹⁴⁴ “[...] Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 497 con la siguiente redacción: «Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial»”.

⁹⁴⁵ Así lo pone en evidencia ACHÓN BRUÑEN en “Estudio crítico...”, op. cit., pág. 7 ‘in fine’. El trabajo se refiere a la Ley 4/2013, pero es aplicable a la Ley 29/2009 porque aquella no elimina tal “incoherencia”.

⁹⁴⁶ “[...] Diecisiete. Se añaden nuevos apartados 3 y 4 del artículo 549, que quedan redactados del siguiente modo: «3. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la citación al demandado.

4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos.»”.

c) *Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal:*

1. **Monitorización del desahucio por falta de pago.** La reforma de 2011 supone un antes y un después en la historia del juicio de desahucio, si bien únicamente cuando el supuesto sea por impago de las rentas y cantidades debidas (art. 250.1.1º). El legislador toma la decisión de aplicar la técnica del proceso monitorio con la intención de acudir con la mayor rapidez posible a la fase ejecutiva en caso de que el demandado adopte una actitud pasiva a la reclamación judicial. En el Preámbulo de la ley se explica en síntesis la medida:

“Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución, evitándose asimismo la celebración de vistas innecesarias” (Aptdo. III).

Las diferencias son sustanciales, como se puede apreciar de forma más gráfica en los dos cuadros siguientes:

[A] Art. 440.3 LEC antes de la “monitorización” del desahucio	
LEY 23/2003	LEY 19/2009
<p>«3. En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, <u>el Tribunal indicará</u>, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo fin otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento.</p> <p>También se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites.</p> <p><u>Igualmente, el Tribunal fijará en el auto de admisión día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que podrá ser inferior a un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada si lo solicitase el demandante en la forma prevenida en el artículo 549.»</u></p>	<p>«3. En los casos de demandas de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, <u>se indicará</u>, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo fin se otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si acepta el requerimiento.</p> <p>En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en la citación que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites <u>y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a contar del señalado para la vista.</u> Igualmente, <u>en la resolución</u> de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, <u>que deberá producirse antes de un mes</u> desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, <u>sin necesidad de notificación posterior.»</u></p> <p><i>(Subrayado: modificaciones respecto a la ley</i></p>

<i>(Subrayado: modificaciones respecto a la versión inicial del art. 440.3⁹⁴⁷).</i>	<i>precedente, Ley 23/2003).</i>
--	----------------------------------

[B] Art. 440.3 LEC después de la “monitorización” del desahucio	
LEY 37/2011⁹⁴⁸	LEY 4/2013 (texto actual)
<p>[p1] «3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, <u>acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.</u></p> <p>[p2] Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.</p> <p>[p3] <u>Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista, para la que</u></p>	<p>[p1] «3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el secretario judicial, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.</p> <p>[p2] Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.</p> <p>[p3] Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista <u>en caso de</u></p>

⁹⁴⁷ Con anterioridad a la Ley 23/2003 el texto del art. 440.3 dado por Ley 1/2000 era el siguiente: “3. En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el tribunal indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley. También se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites.”

Se constata así que ya en el año 2000 el legislador era consciente de la necesidad de introducir especialidades en este juicio que aceleraran la pronta restitución del inmueble arrendado, estableciendo por ello las dos primeras: la posibilidad de enervar el desahucio pagando las cantidades debidas y la “declaración del desahucio sin más trámites” en caso de incomparecencia del demandado; esta segunda medida no estaba contemplada en el proyecto de ley de 1998, que solo preveía la primera (Art. 440.3: “En los casos de demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el tribunal indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado cuarto del artículo 20 de esta Ley”), y fue añadida por una enmienda del Senado que fue luego aprobada por el Congreso (vid. BOCG Serie A, n.º 147-16, 16.12.1999, pág. 1332).

⁹⁴⁸ “Artículo cuarto. *Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.* La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes términos: [...] Seis. Se da una nueva redacción al apartado 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 440, queda redactado en los siguientes términos: [...]” (véase cuadro).

servirá de citación, y la práctica del lanzamiento. Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento.

[p4] El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.

[p5] Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

[p6] Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

oposición del demandado, para la que servirá de citación, y la práctica del lanzamiento en caso de que no hubiera oposición. Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento, así como que la falta de oposición al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador.

[p4] El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en apartado 3 del artículo 155 y en el último párrafo del artículo 164, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.

[p5] Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada.

[p6] Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento, y dejando sin efecto la diligencia de lanzamiento, a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta sobre el estado en que se encuentre la finca, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, bastando para ello con la mera solicitud.

[p7] En los dos supuestos anteriores, el decreto dando por terminado el juicio de desahucio, impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Si el demandado formulara oposición, se celebrará la vista en la fecha señalada.

<p>4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en <u>el requerimiento que se le realice</u> que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia <u>que se dicte</u> el sexto día siguiente <u>al</u> señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá <u>verificarse</u> antes de un mes desde la fecha <u>señalada para</u> la vista, advirtiéndolo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.» (Subrayado: modificaciones respecto a la ley precedente, Ley 29/2009).</p>	<p>4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución <u>que se dicte teniendo por opuesto al demandado</u> se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de <u>treinta días</u> desde la fecha señalada para la vista, advirtiéndolo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.» (Subrayado: modificaciones respecto a la ley precedente, Ley 37/2011).</p>
--	--

2. **Regulación específica del contenido del requerimiento.** La compilación del primer acto de comunicación que se realiza al demandado, con el que el Juzgado no se limita ya a citarle a juicio y a advertirle de las consecuencias de su incomparecencia, trae consigo que el contenido del requerimiento sea mayor. La ley 37/2011, además de establecer que se requiera al demandado para que desaloje, pague o formule oposición, obliga a que al practicar el requerimiento se le instruya expresamente del corto plazo de tiempo de que dispone para solicitar asistencia jurídica gratuita (*en los tres días siguientes*) que ya venía establecido desde Ley 19/2009 para los juicios de desahucio por falta de pago y por expiración del plazo, pero en la que no se ordenaba que así se advirtiera expresamente al demandado⁹⁴⁹. Y lo más importante, despeja la duda

⁹⁴⁹ Junto a la cuestión relativa a los actos de comunicación, la dilación de los procesos de desahucio ha venido también provocada por la petición del demandado, muchas veces ‘in extremis’, del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o, aun sin ella, a la designación de abogado y procurador de oficio. La primera medida legal para evitarlo vino con la Ley 23/2003 y el nombramiento inmediato de ambos profesionales, si así lo solicita el demandado, con la novedad de que no hay que esperar a que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita estime la solicitud, sino que el Tribunal, *tan pronto como tuviera noticia* del hecho de la petición, ha de dictar *resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador*, y ello *sin perjuicio del rescatamiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita* (nuevo apartado 3 del art. 33)*.

Pero a la ley de 2003 se le olvidó algo importante como obligar al demandado a solicitar la designación de dichos profesionales en un breve plazo de tiempo tras ser citado a juicio y evitar así tácticas dilatorias, defecto que sería subsanado por Ley 13/2009, que con carácter general establece para todos los procesos que el demandado que quiera valerse de abogado y procurador y no los contrate por sí mismo habrá de pedir su designación *en el plazo de los tres días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación* (nuevo apartado 2 art. 33.2)**.

Posteriormente, por Ley 19/2009 se establecerá esta obligación específicamente para los casos de desahucio por falta de pago y por expiración de plazo, donde, además, la solicitud del reconocimiento de derecho a asistencia jurídica gratuita también habrá de hacerse *dentro de los tres días siguientes*

acerca del modo de practicar el requerimiento, remitiéndose directamente al art. 161 y al sistema de comunicación de entrega por funcionario o procurador, único modo de transmitir al demandado tantas prevenciones legales. Haría falta, no obstante, conjugar aquel precepto con las previsiones del art. 164p4 y art. 155.3p2 para entender inaplicables las averiguaciones de domicilio que marca el apartado 4, párrafo 3 del mismo⁹⁵⁰, tal y como tratará de aclarar la Ley 4/2013 al precisar que la

*tes al de la notificación de la demanda (nuevo art. 33.4)***.*

Finalmente, por Ley 37/2011 se dispondrá que una de las advertencias obligatorias a realizar en el requerimiento sea la de expresar *que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento* (art. 440.3p3).

*(Ley 23/2003) "Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los términos siguientes: [...] Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 33, con el siguiente contenido: «3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega después el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita»".

** (Ley 13/2009) "Artículo decimoquinto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil se modifica en los siguientes términos: [...] Dieciséis. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado como sigue: «2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador.

En el caso de que la petición se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los tres días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación.

Estas peticiones se harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen»".

*** (Ley 19/2009) "Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos: [...] Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 33, que queda redactado del siguiente modo: «4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de abogado y procurador de oficio dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita»".

⁹⁵⁰ Así lo entiende también FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO ("La averiguación del domicilio...", op. cit., pág. 20). Coincidimos con este autor al afirmar que "en este caso habríamos de proceder a la citación edictal", pero disentimos cuando a continuación considera que "no podrá dictarse ya decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, puesto que no ha tenido lugar el requerimiento de pago en la forma personal dispuesta en el art. 161, sino que deberá celebrarse la vista señalada, terminando el procedimiento de forma inexorable mediante sentencia" (ídem). Nada de esto está en la ley ni a efectos prácticos nada cambia que se dicte sentencia tras celebrar una vista a la que muy probablemente no acuda el demandado citado por edictos, aunque

aplicación del art. 161 se hará *teniendo en cuenta las previsiones contenidas en apartado 3 del artículo 155 y en el último párrafo del artículo 164*.

En cuanto al lanzamiento, se incorpora un párrafo por el que se establece que el *requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista, para la que servirá de citación, y la práctica del lanzamiento*, lo que implica una deficiencia porque en ningún momento anterior el precepto ha dejado dispuesto que se realicen tales señalamientos (vista y lanzamiento); habrá que interpretar necesariamente que se está refiriendo al propio decreto de incoación.

Por otra parte, en franca descoordinación con el apartado 3, en el apartado 4 se comete el error (no subsanado por Ley 4/2013) de decir *en todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice...*, cuando ese requerimiento solo se practica si la acción de desahucio lo es por falta de pago de rentas o cantidades debidas, única a la que se le ha aplicado la técnica monitoria⁹⁵¹. Como estamos estudiando, el resto de supuestos de juicio verbal de desahucio (por expiración del plazo –art. 250.1.1º– y por precario –art. 250.1.2º–) tenían hasta la Ley 42/2015 que sustanciarse con celebración de vista, previa citación a las partes a la misma (art. 440.1), y finalizar, en su caso, con el dictado de una sentencia que resuelva sobre el fondo (art. 447.1). En realidad la falta no está en el inciso “en todos los casos de desahucio”, sino en el “requerimiento”, ya que hubiera debido decir “*en el requerimiento* o, en su caso, en la citación, que se le realice”, dando así cabida a todas las modalidades de desahucio.

3. **Posibilidad (tácita) de fijar dos fechas de lanzamiento.** Desde la ley 23/2003 y hasta la ley 37/2011 la LEC establecía que en la resolución de admisión se fijaría día y hora para que tuviera lugar el lanzamiento *desde la fecha de la vista* (art. 440.3 ‘in fine’). La ley 37/2011 mantiene tal previsión *en todos los casos de desahucio* (art. 440.4), pero al prever específicamente para el desahucio por falta de pago que si el demandado no realiza *ninguna de las actuaciones citadas* (desalojar, pagar u oponerse), *se procederá a su inmediato lanzamiento* (párrafo 4º), en la

no es desdeñable pensar que una consecuencia tan grave como el desahucio exigiría practicar el requerimiento de forma personal y efectiva con el demandado.

⁹⁵¹ Contradicción ya denunciada por la doctrina; vid. ACHÓN BRUÑÉN: “Estudio crítico...”, op. cit., pág. 7 ‘in fine’; IBARRA SÁNCHEZ, JUAN LUÍS: “El decreto del Secretario de admisión de la demanda, citación y emplazamiento a las partes a la vista oral. El requerimiento de pago en la fase monitoria del juicio verbal”, *Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio*, La Ley, Madrid, 2012 (edición digital ref. La Ley 5437/2012); PÉREZ RAMOS, JUAN MANUEL: “Admisión de la demanda y requerimiento al demandado. El acto de comunicación”, Ponencia del Curso *Derecho procesal civil. Desahucio, regulación, procedimiento y peculiaridades*, 2ª ed., Centro de Estudios Jurídicos, 2013, pág. 18 (www.cej-mjusticia.es, Sección “formación continua”).

práctica forense ello ha dado pie a fijar en el propio decreto de incoación dos fechas para realizar dicho lanzamiento, una para dar cumplimiento “inmediato” a la anterior previsión y otra para el solo caso de que el demandado se oponga, se celebre vista y recaiga sentencia condenatoria. Es cierto que tal solución no está definida de forma tan clara en el art. 440, pero tiene encaje en el mismo gracias a su enredada y confusa redacción, además de que con ella se logra, primero, no tener que esperar, si se señalara una sola fecha de lanzamiento, a un momento posterior a una vista eventual que probablemente no se celebre y, segundo, poder restituir al arrendador el inmueble con anterioridad a la fecha de aquella vista tan pronto haya transcurrido el plazo de diez días otorgado al demandado.

d) *Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas*⁹⁵²:

1. **Aclaración sobre el carácter residual de la vista.** La ley vuelve a modificar, otra vez, el aptdo. 3 del art. 440⁹⁵³ para puntualizar que la eventual vista solo tendrá lugar *en caso de oposición del demandado*, aunque ello ya se deducía ‘a sensu contrario’ del párrafo 4º (...*de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento...*) y se insistía en el párrafo 5º (...*si el demandado no atendiere... se procederá al lanzamiento...*).
2. **Nueva ampliación del contenido del requerimiento.** Consecuencia de la atribución al hoy Letrado de la Administración de Justicia de la competencia para declarar resuelto el contrato, en el requerimiento habrá de expresarse al demandado que se entenderá otorgado su consentimiento a dicha resolución por el solo hecho de no formular oposición a la demanda.
3. **Empeoramiento de la previsión respecto al lanzamiento.** La Ley 4/2013 trata de mejorar la cuestión relativa al lanzamiento, pero consigue el efecto contrario. En primer lugar, en cuanto al señalamiento del mismo cambia el apartado 4 del art. 440 para decir ahora que *en la reso-*

⁹⁵² Preámbulo, Aptdo. III: “Esta Ley opera una reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar las cuestiones más puntuales que están generando problemas en los procesos de desahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura. En concreto, se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si éste no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual que impide señalar el lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Estas modificaciones obligan a efectuar el ajuste de otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

⁹⁵³ “Artículo segundo. *Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.* Los artículos 22, 164, 220, 440, 497, 549 y 703 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan modificados como sigue: [...] Cuatro. Los apartados 3 y 4 del artículo 440 quedan redactados como sigue: [...]” (véase cuadro anterior).

lución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, pero con ello no tiene en cuenta que en el decreto de admisión tal fecha ya ha sido anteriormente fijada y por tanto, como entiende ACHÓN BRUÑEN tras calificar la modificación de “incomprensible”, “la resolución admitiendo su oposición no podrá sino reiterar la fecha ya señalada por si su oposición fuere desestimada”⁹⁵⁴; así se hace en la práctica, con el matiz de que lo que se reitera es la segunda de las fechas que se dejan previstas para el lanzamiento posterior a la vista. Además, esa resolución (una diligencia de ordenación) solo puede tener lugar en el desahucio por falta de pago, porque en los otros dos supuestos, antes de la Ley 42/2015 el demandado era citado directamente a la vista y era allí donde podía ejercitar su oposición, y actualmente es emplazado para que conteste a la demanda por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto en el juicio ordinario.

En segundo lugar, en cuanto a la ejecución de dicho lanzamiento, elimina la incongruencia introducida por la ley 37/2011 de tener que dar traslado al demandante para que instare el despacho de ejecución tras dictarse el decreto dando por terminado el juicio de desahucio (párrafo 5º art. 440.3), cuando la Ley 19/2009 ya había establecido en el art. 549.3 que bastaba haberlo dejado interesado en la demanda para proceder a la *ejecución directa* –solo del lanzamiento, no respecto de las cantidades debidas si se hubieren reclamado–, sin necesidad de demanda ejecutiva como exigía la Ley 23/2003. Ahora con la reforma se *procederá al lanzamiento en la fecha indicada*, expresión imperativa que parece dar a entender que el tribunal habrá de proceder a su ejecución de oficio, debiendo haber dejado claro para no incurrir en contradicción con el citado art. 549.3 que así se hará siempre que haya mediado previa petición de parte al respecto en la demanda de juicio verbal.

3.3.- SITUACIÓN ACTUAL TRAS LA LEY 42/2015

La última reforma realizada en la LEC introduce la forma escrita en la contestación a la demanda en todos los juicios verbales⁹⁵⁵, sin afectar al verbal de desahu-

⁹⁵⁴ ACHÓN BRUÑEN: “Estudio crítico...”, op. cit., pág. 4. No obstante, PÉREZ RAMOS aplica la literalidad del precepto y considera que “en caso de que se opusiera, se concretará una nueva fecha de lanzamiento en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado” (“Admisión de la demanda...”, op. cit., pág. 23).

⁹⁵⁵ Vid. Preámbulo: “Por otro lado, se aprovecha la presente reforma para introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que son fruto de la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que venían siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos.

Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales” (Aptdo. IV).

cio por falta de pago, donde la oposición escrita del demandado ya equivale a aquella contestación, pero sí a las otras dos modalidades de desahucio. A efectos de actos de comunicación la gran diferencia actual entre el desahucio por falta de pago y las otras dos modalidades es que en el primero la demanda se da a conocer a aquella parte con un requerimiento y una citación a vista que es solo eventual, unido al apercibimiento de lanzamiento directo si no se opone, mientras que en los de desahucio por expiración del plazo y por precario la primera comunicación con aquella es, desde el pasado 07.10.2015, la del emplazamiento para contestar a la demanda. A partir de ahí se hace obligado reinterpretar el art. 440.4, que no ha sido afectado por la nueva ley, y entender, junto a los arts. 438.1 y 440.1, que en la resolución que se dicte (una diligencia de ordenación), bien teniendo al demandado por contestada la demanda, bien declarándole en rebeldía, se habrá de señalar día y hora para practicar el lanzamiento en caso de que, con o sin vista, la sentencia sea condenatoria y devenga firme, si bien en la práctica también hay juzgados que optan por fijar dicha fecha en el propio decreto de incoación, quizá la mejor postura al quedar advertido el demandado ya desde el principio del proceso. Incluso cabría una tercera opción, que sería la de señalar aquella fecha en la propia sentencia condenatoria de desahucio por expiración del plazo a tenor del art. 549.3, que por analogía habría que extender al desahucio por precario.

En definitiva y como se puede observar, la vigente regulación de “los juicios” por desahucio es un tanto caótica e innecesariamente enrevesada tras numerosos parches legislativos que solo en el caso del desahucio por falta de pago se ha traducido en un acortamiento significativo de los plazos en la tramitación completa de estos procedimientos, desde que el actor interpone la demanda hasta que se ve restituido en la posesión material del inmueble arrendado. Por otro lado, las diferencias de Derecho material que presentan los desahucios por expiración del plazo y por precario no son de la suficiente entidad como para que no esté justificado que no se les haya introducido también una fase monitoria como se ha hecho con el desahucio por falta de pago. En ambos supuestos estamos ante una ocupación de hecho (originaria o sobrevenida) de la propiedad ajena sin contraprestación alguna para un arrendador al que se le ocasiona un agravio comparativo (más con el precario y, por analogía, con el fenómeno “okupa”) respecto a aquel otro que demanda por la falta de pago de su arrendatario, situación injusta que con algunos retoques de la LEC⁹⁵⁶ podría fácilmente eliminarse mediante la unificación procesal de estos litigios.

Para intentar ofrecer una visión de conjunto de una regulación que no destaca precisamente por su claridad, ofrecemos el siguiente esquema:

⁹⁵⁶ Entre ellos, quizá, atribuir carácter sumario, y no plenario como hasta ahora, al juicio por precario.

JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO EN LA LEC		
Tipo → Trámite ↓	Por impago de rentas y cantidades debidas (art. 250.1.1º)	Por expiración del plazo (art. 250.1.1º) / Por precario (art. 250.1.2º)
Contenido del Decreto de incoación	<ul style="list-style-type: none"> • Admisión a trámite (art. 438.1). • Requerimiento de (art. 440.3p1): <ul style="list-style-type: none"> - Desalojo. - Pago (con/sin enervación). - Oposición. • Señalamiento y citación eventual a vista para el solo caso de oposición (art. 440.3p3). • Señalamiento del lanzamiento si no hay oposición (art. 440.3p3) (+en la práctica: señalamiento del 2º lanzamiento tras la vista eventual⁹⁵⁷). • Previsiones legales en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad de negociación/mediación (art. 440.1p2). - Medios de prueba (art. 440.1p3 y p5). - Efectos de inasistencia (art. 440.1p3). - Oposición restringida (pago o procedencia de enervación, art. 440.3p1). - Solicitud de asistencia jurídica gratuita (art. 440.3p3). - Consentimiento tácito a resolución del contrato por falta de oposición (art. 440.3p3). - Apercibimiento de lanzamiento inmediato si actitud pasiva (art. 440.3p4). 	<ul style="list-style-type: none"> • Admisión a trámite (art. 438.1). • Emplazamiento para contestar a la demanda en diez días (art. 438.1). • Previsiones legales en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad de negociación/mediación (art. 440.1p2). - Medios de prueba (art. 440.1p3 y p5). - Efectos de inasistencia (art. 440.1p3). - En la práctica, dependiendo de cada juzgado: Apercibimiento de lanzamiento en día y hora que se señalan para el caso de que la sentencia sea condenatoria y devenga firme.
Traslado del Decreto	<ul style="list-style-type: none"> • Por medio de entrega ex art. 161 (art. 440.3p4). • Si infructuoso en domicilio pactado: edictos (arts. 155.3p2, 164p4 y 440.3p4). 	<ul style="list-style-type: none"> • Por remisión ex art. 155 y, solo subsidiariamente, mediante entrega (art. 158). • Si infructuoso en domicilio pactado (excepto en precario): edictos (arts. 155.3p2 y 164p4).
Vista	<ul style="list-style-type: none"> • Solo en caso de oposición (art. 440.3p3). • Prueba restringida al pago o a la enervación (art. 444.1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Preceptiva si al menos la pide una de las partes (art. 438.4p2). • Prueba plena en precario (art. 443.4).
Sentencia	<ul style="list-style-type: none"> • Solo si se celebra vista (y salvo excepciones procesales). • Sin efecto de cosa juzgada (art. 447.2). • En 5 días desde la vista si finca urbana, o 10 si es rústica (art. 447.1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin efecto de cosa juzgada (art. 447.2), salvo precario (tutela plenaria). • En 5 días desde la vista si finca urbana, o 10 si es rústica (art. 447.1).

⁹⁵⁷ En la práctica se suelen señalar dos fechas de lanzamiento, una para el “lanzamiento inmediato”, antes de la fecha de la vista y para el caso de que el demandado no se oponga, y otra para el “lanzamiento eventual”, en previsión de que, opuesto el demandado, la sentencia sea condenatoria.

<p>Notificación de la Sentencia al ddo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si comparece a la vista: citación en el mismo acto el día más próximo posible en los 5 días ss. a la sentencia (arts. 447.1)⁹⁵⁸. • Si no comparece (art. 442.2): Citación previa en el Decreto para recibir la notificación de la sentencia el 6º día siguiente de la vista (eventual) (art. 440.4). Si no comparece a recogerla: edicto en el tablón de anuncios de la oficina judicial (art. 497.2p3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si comparece a la vista: citación en el mismo acto el día más próximo posible en los 5 días ss. a la sentencia (arts. 447.1)⁹⁵⁹. • En caso de rebeldía (art. 438.1): Citación previa en el Decreto para recibir la notificación de la sentencia el 6º día siguiente de la vista (art. 440.4). Si no comparece a recogerla: <ul style="list-style-type: none"> [a] Por expiración del plazo: Edicto en el tablón de anuncios de la oficina judicial (art. 497.2p3). [b] Por precario: <ul style="list-style-type: none"> - Domicilio conocido: personalmente conforme al art. 161 (art. 497.2p1). - Paradero desconocido: edicto en BOP/BOE (art. 497.2p1).
<p>Lanzamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se pre-señala en el propio Decreto de admisión, pudiendo llegar a practicarse antes de la vista eventual (art. 440.3p3). • Basta solicitarlo en la demanda de juicio verbal para la ejecución directa (art. 549.3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Opciones teóricas, siendo obligatorio en las tres esperar a después la sentencia: <ul style="list-style-type: none"> - A: Se pre-señala en el decreto de incoación (art. 440.4p3 por analogía). - B: Se pre-señala en la diligencia de ordenación teniendo por contestada a la demanda o declarando en rebeldía al demandado (reinterpretación art. 440.4). - C: Se señala en la propia sentencia (art. 549.3, en el caso de precario por analogía). • Por expiración del plazo: basta solicitarlo en la demanda de juicio verbal para la ejecución directa: (art. 549.3). • Por precario: precisa demanda ejecutiva (art. 549.3 por omisión).

3.4.- EFICACIA DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN EN EL INMUEBLE ARRENDADO

Antes estudiamos que la Ley 19/2009 introdujo una modificación en el art. 164, vigente en la actualidad, que, lejos de ser irrelevante, supuso un importantísimo avance en la tramitación de los juicios por desahucio (excepto en caso de precario). Nos referimos a la posibilidad de acudir directamente y *sin más trámites* a la vía edictal si el primer acto de comunicación con el demandado (requerimiento en caso de falta de pago o citación si es por expiración del plazo) resulta negativo en los domicilios “arrendaticios” (el pactado o, en su defecto, el del propio inmueble) que la Ley 23/2003 había ya introducido añadiendo un segundo párrafo al art. 155.3 con la clara intención de tutelar los intereses de los arrendadores frente a arrendatarios que “se esfuman” de la vivienda o local arrendado. El

⁹⁵⁸ En la práctica la notificación se realiza, ex art. 28.1 LEC, a través del Procurador que haya comparecido en nombre y representación del demandado.

⁹⁵⁹ Ídem nota anterior.

añadido era para su aplicación concreta a las demandas del art. 250.1.1º, con lo que podía y puede sostenerse que en esos casos se excluyen los otros domicilios que con carácter general señala el apartado 1 del precepto (padrón municipal, registro oficial, colegios profesionales,...), mientras que con la expresión *a todos los efectos* se estaba eximiendo al Juzgado, sin decirlo abiertamente, de tener que efectuar averiguaciones domiciliarias previas a la comunicación por edictos⁹⁶⁰.

Así pues, aplicando la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus literales y exactos términos actuales, el operador jurídico, más concretamente el órgano judicial, debería actuar de la forma descrita. Sin embargo, el TC ha venido, nuevamente, a alterar significativamente la aplicación real de lo que en la ley está meridianamente claro y, exactamente igual a como ha ocurrido hasta la Ley 19/2015 en el ámbito de la ejecución hipotecaria con la STC 122/2013, en el juicio de desahucio el equivalente de aquella sentencia es la **STC 30/2014**, de 24.02⁹⁶¹, que deroga, ‘de facto’, el mandato legal. Con dicha resolución el órgano constitucional aborda un asunto relativo a un juicio verbal de desahucio sustanciado conforme a la normativa anterior a la Ley 37/2011, pero posterior a la Ley 19/2009, en que el Juzgado de 1ª Instancia citó al demandado mediante edictos por haber resultado negativo el acto de comunicación en la vivienda arrendada, incurriendo el órgano en el grave error –esto hay que resaltarlo desde el principio– de no tener en cuenta que las partes habían pactado en el contrato de arrendamiento un domicilio diferente del inmueble a efectos de notificaciones. Al omitir este importante factor aplicó ciega y sesgadamente la nueva redacción dada al artículo 164 LEC por Ley 19/2009, lo que se mantuvo en el auto por el que desestimó la nulidad de actuaciones solicitada con el argumento, entre otros, de que “el art. 164 LEC, desde la reforma operada por la Ley 13/2009 [debió decir 19/2009], de 23 de noviembre, [...], dispone que, cuando no pudiera efectuarse la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el art. 155.3 [...], se procederá, sin más, al trámite del tablón de anuncios de la oficina judicial. A su vez, el art. 155.3 LEC establece que [...]. En el presente procedimiento se intentó la notificación en la vivienda arrendada y resultó negativo, por lo que conforme al art. 164 LEC se hizo a través de edictos, sin que la Ley de enjuiciamiento civil exija realizar más averiguaciones” (Antecedentes, aptdo. 2.g).

Visto lo anterior, está claro que el juzgado actuó con torpeza y dejó allanado el camino hacia el recurso de amparo. Pero lo relevante es que el Tribunal Constitucional va más allá y trasciende del caso concreto para soslayar la reforma operada por Ley 19/2009 e imponer su tenaz doctrina sobre el carácter obligatoriamente residual de la comunicación edictal:

⁹⁶⁰ En el mismo sentido, MACÍAS MALDONADO: “Solución al problema del emplazamiento del arrendatario moroso”, *Noticias Jurídicas* (www.jurídicas.com), sección “Artículos Doctrinales”, diciembre 2009 (fecha consulta 27.04.2013).

⁹⁶¹ BOE de 25.03.2014. Vid. el comentario que a dicha sentencia realizan NICASIO JARAMILLO, NÚÑEZ BOLAÑOS y PIZARRO MORENO en “El emplazamiento edictal en el juicio de desahucio tras la STC 30/2014, de 24 de febrero”, *Diario La Ley* n.º 8327, 6 de junio de 2014, La Ley, Madrid.

“A la conclusión alcanzada no cabe oponer, como sostiene el órgano judicial en el Auto de 18 de octubre de 2011, que desestima la solicitud de nulidad interpuesto por el recurrente, que la Ley de enjuiciamiento civil no exige realizar mayores averiguaciones tras la reforma llevada a cabo mediante por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. Como ya advertimos en la STC 122/2013, de 20 de mayo, en relación con los juicios hipotecarios y la reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, –reforma muy semejante en sus términos a la que ahora analizamos–, la doctrina constitucional en materia de emplazamientos es una doctrina muy consolidada que no puede verse interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009 [...]. Ciertamente es que la Ley 19/2009 reforma el art. 164 LEC relativo a la comunicación edictal como forma de comunicación procesal y añade a dicho precepto un segundo párrafo relativo a los desahucios en un arrendamiento por falta de pago de las rentas, que dispone: [...].

Pero, como pusimos de manifiesto en la STC 122/2013, de dicho precepto ha de realizarse una interpretación *secundum constitutionem* integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado” (F. J. 5, aptdo. 5).

Aun aprovechará para imponer en la sentencia su propia interpretación sobre la remisión que hace el art. 164 al art. 155.3:

“Por lo demás, se trata, en todo caso, de una operación sencilla que no requiere mayor esfuerzo intelectual, pues el nuevo párrafo del art. 164 LEC tiene una remisión legislativa al art. 155.3 LEC y este precepto no limita el domicilio a uno, sino a varios. Así se deduce de la lectura de su contenido, a tenor del cual: [...]” (ídem).

Con tal frase está errando, porque la “remisión legislativa” no es al art. 155.3 LEC sin más, sino al *párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155*, expresamente previsto para los juicios de desahucio por falta de pago y por expiración del plazo (art. 250.1.1º), y a los *domicilios designados* por el mismo, que son solo dos: el acordado por las partes en el contrato o, en su defecto, el de la vivienda o local arrendado.

Tras esta sentencia, si hemos sido especialmente críticos en el capítulo anterior con la interpretación hipergarantista del Tribunal Constitucional del domicilio hipotecario, ahora nuestra opinión es aun más severa, pues las consecuencias son todavía más graves en los juicios de desahucio. Tantos años tratando de acelerar el procedimiento para otorgar tutela judicial a quien a veces se ignora, el arrendador, para ahora tener que volver prácticamente al punto de partida, pues si hay que buscar a toda costa al arrendatario que se ha marchado del inmueble, lo más seguro es que los plazos fijados para la práctica del lanzamiento sean insuficientes y haya que suspender los señalamientos. Buscar a aquella parte puede dilatarse y si además estamos ante supuestos de arrendatarios que son auténticos profesionales de la estafa y que se aprovechan de la lentitud de la burocracia judicial para ir arrendando inmuebles aquí y allá sin abonar más que las primeras mensualida-

des y sin empadronarse en los municipios correspondientes, la tarea de requerirles o emplazarles para el juicio de desahucio se complicará ostensiblemente si echamos por tierra todas las medidas aplicadas por la ley para neutralizar estos comportamientos. De la misma opinión encontramos a FERNÁNDEZ-GALLARDO, para quien “en este supuesto no ha lugar a duda alguna que la investigación domiciliaria resulta innecesaria y que su práctica dejaría sin virtualidad la regulación que de este procedimiento establece el legislador”⁹⁶²; o a PÉREZ RAMOS, que entiende que “no es necesario que se proceda previamente, como es regla general a una investigación previa del Secretario judicial (art. 164 LEC)”⁹⁶³.

Por el contrario, ACHÓN BRUÑÉN, coherente con su discurso acorde con los postulados del TC, manifiesta al comentar el art. 164 que “el precepto puede vulnera el derecho de defensa, pues antes de acudir «sin más trámites» a la comunicación edictal, sería oportuno que se exigiera expresamente la averiguación del actual paradero del deudor, lo que no supone más molestia ni dilación para el juzgado que acceder a la base de datos de punto neutro judicial”⁹⁶⁴. Ciertamente que no supondrá ninguna molestia por dicho acceso, pero la medida en muchas ocasiones será inútil porque posiblemente los datos domiciliarios del demandado no habrán sido actualizados por este y seguirá apareciendo, en el mejor de los casos, el mismo domicilio del inmueble arrendado objeto del litigio; y si aparecen otras señas, sí que se producirá esa dilación, más que para el juzgado, para la parte actora, quien es más que probable que vea suspendido el lanzamiento previamente señalado.

⁹⁶² FERNÁNDEZ-GALLARDO: “La averiguación del domicilio del demandado...”, op. cit., pág. 20. Continúa el autor diciendo que “se trata de un procedimiento de tutela sumaria con una tramitación ágil y rápida que, de no procederse a la citación edictal en la forma dispuesta en el caso de resultar negativa la citación en el domicilio correspondiente, estaría abocado a una suspensión del acto de juicio y correlativa fecha de lanzamiento, y consiguientemente se estaría frustrando la finalidad perseguida con la nueva regulación de este proceso, cual es agilizar su tramitación sin dejar resquicio alguno a una eventual suspensión debido a la mala fe del demandado poniéndose en una situación de ilocalización” (ídem).

⁹⁶³ PÉREZ RAMOS: “Admisión de la demanda...”, op. cit., pág. 36.

⁹⁶⁴ ACHÓN BRUÑÉN: “Estudio crítico...”, op. cit., pág. 2. Del planteamiento de la autora discrepa PÉREZ RAMOS, exponiendo que, “a pesar de la opinión anteriormente expuesta, entendemos que no hay vulneración del derecho de acceso a la justicia si no se consigue citar personalmente al demandado en el domicilio que él mismo ha facilitado, sabiendo a qué efectos lo facilitaba y las consecuencias que de ello se derivaban. La comunicación edictal sólo será consecuencia de su conducta, negligente, descuidada o maliciosa” (“Admisión de la demanda...”, op. cit., pág. 37).

4.- COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS MONITORIO Y CAMBIARIO

4.1.- PROCESO MONITORIO

4.1.1.- Importancia del requerimiento de pago en forma personal

La inversión del principio de contradicción que caracteriza el proceso monitorio, trasladando al deudor la carga de discutir formalmente la realidad de una deuda que se presume como punto de partida existente y acreditada por el acreedor, hace que la puesta en conocimiento a aquel de la reclamación y de la práctica del consiguiente requerimiento de pago sea fundamental para que pueda ofrecerse al primero una tutela rápida de su crédito, preparándole un título ejecutivo, pero sin que, al mismo tiempo, ello suponga una vulneración de los derechos de defensa del segundo. Por eso, siguiendo las palabras de CORREA DELCASSO, “la notificación del mandato o requerimiento de pago constituye la auténtica columna vertebral de todo el proceso monitorio en torno a la cual gira la entera legitimidad de este proceso: una notificación defectuosa o inexistente, en un procedimiento en el cual el silencio lleva aparejadas unas consecuencias tan severas (como es la imposibilidad de interponer, sin más, cualquier tipo de recurso ordinario contra la resolución final recaída en el mismo), abortará cualquier posibilidad de éxito de este proceso”⁹⁶⁵.

De ahí que, ya desde el Proyecto de Ley de 1998 de la LEC⁹⁶⁶, el legislador haya previsto que el modo de practicar ese acto de comunicación, en puridad dos (notificación y requerimiento), haya de ser mediante entrega. Así se refleja en el art. 815.1p2:

El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. Sólo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo.

El último inciso (*Sólo se admitirá...*) fue añadido por Ley 13/2009⁹⁶⁷ y con él dejó de tener en gran parte sentido el debate que hasta entonces había existido en la doctrina⁹⁶⁸ y en la jurisprudencia menor⁹⁶⁹ acerca de si cabía en un proceso de

⁹⁶⁵ CORREA DELCASSO, JUAN PABLO: “Sugerencias para una futura reforma de los artículos 812 a 818 LEC reguladores del proceso monitorio” (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, pág. 872.

⁹⁶⁶ Artículo 813 Proyecto de LEC de 30.10.1998 (luego art. 815), párrafo 2º: “El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 160 de esta Ley [art. 161], con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente”.

⁹⁶⁷ De este añadido, que no es baladí, nada se explica en el preámbulo de ley, ni tampoco consta que fuera objeto de enmienda o alusión alguna durante la tramitación parlamentaria del proyecto, donde ya estaba presente.

⁹⁶⁸ La cuestión fue estudiada poco después de promulgada la LEC 2000. Vid. MAGRO SERVET: “El domicilio del deudor en el proceso monitorio. ¿Puede realizarse el requerimiento por edictos?”, *Sepin Propiedad Horizontal* n.º 217, septiembre 2001, Sepin, Madrid, págs. 13-25. El autor, como muchos

estas características la comunicación edictal, habida cuenta que la remisión al art. 161 era y sigue siendo al completo, sin distinción, y que su apartado 4 remite al art. 156 para el caso de que el deudor no sea localizado, y ese, a su vez, al art. 164. La postura mayoritaria era la de no permitir la comunicación subsidiaria⁹⁷⁰, con dos argumentos que concretó muy bien el **AAP Alicante (Secc. 4ª) 10.04.2002**:

“[...] a pesar de la remisión del apartado 4 del citado artículo 161 y de que el conjunto de la regulación vigente no contiene una expresa prohibición para la comunicación del requerimiento de pago a través de edictos, la doctrina generalizada se inclina por imposibilidad de comunicar este mandamiento al deudor a través de esta fórmula: de una parte, porque la prevención legal exige que el requerimiento se acompañe de un apercibimiento [...]; y, por otra parte, porque en uno de los procesos específicos que se sustancian por el trámite monitorio, el de reclamación de gastos de comunidad de propietarios (que no es el caso que nos ocupa), se regula expresamente (arts. 815.2) que puede acudir a la citación por edictos del art. 164, lo que debe entenderse que la excluye para el resto de los procesos monitorios” (F. D. 1ª)⁹⁷¹.

[*], entendía “que no es posible realizar la comunicación por edictos en el caso del proceso monitorio [...]. La propia esencia del monitorio exige una comunicación personal, un requerimiento cuya omisión abre la vía de ejecución una vez se le ha dado la oportunidad de tener conocimiento de la reclamación y sus motivos” (pág. 19).

[*] Por ejemplo, GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS: “Comentarios prácticos a los arts. 812 a 818 del Capítulo I del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil: del proceso monitorio”, *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, pág. 421).

En la misma línea y abogando porque el legislador procediese a aclararlo en la LEC: GÓMEZ AMIGO, LUIS: “La introducción del proceso monitorio en el sistema procesal español”, *Actualidad Civil*, Sección, Sección Doctrina, 1999, Ref. LIX, pág. 1175, tomo 4, Editorial LA LEY, Madrid (LA LEY 2347/2001): “Por eso pensamos que lo más eficaz para garantizar el derecho de defensa del deudor, dado que si no presenta oposición en el brevísimo plazo de veinte días el mandato de pago adquirirá fuerza ejecutiva, es que se introduzca en la regulación del proceso monitorio la expresa previsión de que la notificación del requerimiento y del mandato de pago debe realizarse personalmente al deudor, de modo que cuando ello no sea posible no le quedará al acreedor más remedio que acudir al proceso declarativo ordinario que corresponda” (edición digital, aptdo. IV).

⁹⁶⁹ Vid., v. gr., Acuerdo para unificación de criterios de los Magistrados de la Audiencia de Barcelona de marzo de 2004: “Si no puede practicarse el requerimiento de pago no es posible continuar con el juicio. El acreedor puede acudir a los procedimientos ordinarios pidiendo la notificación edictal o bien suspenderlo utilizando el mecanismo del art. 179 de la LEC, esto es, mediante el archivo provisional hasta que se facilite un nuevo domicilio y esperar a la caducidad”.

⁹⁷⁰ Minoritariamente a favor de la comunicación por edictos en el proceso monitorio se mostraba CASADO ROMÁN, JAVIER: “Parece desprenderse de todo lo expuesto que el legislador español ha admitido abiertamente la posibilidad de que la notificación edictal pueda ser utilizada como instrumento de notificación en el proceso monitorio. Esta admisión tendría cabida por la regulación genérica de los actos de comunicación y su no exclusión expresa dentro de este procedimiento especial” (“La notificación edictal en el juicio monitorio”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia* n.º 2003, 15 de diciembre de 2005, Madrid, pág. 21).

⁹⁷¹ Por la misma razón, tampoco cabe plantear un monitorio contra la herencia yacente: “[...] no se puede requerir de pago a una herencia yacente, sino a su representante o a los herederos, los cuales han de estar identificados. Es por esta razón de necesidad de requerimiento personal, característica

Tanto antes de la Ley 13/2009 como en la actualidad, la imposibilidad de requerir al deudor por la vía del art. 161 tenía y tiene una importante consecuencia: el archivo del proceso monitorio (art. 813p3) y la obligación del acreedor de acudir al juicio declarativo, ordinario o verbal, que corresponda para no ver frustrado definitivamente su derecho.

4.1.2.- Monitorio por gastos comunes de Comunidades Propietarios

a) *La excepción a la prohibición del requerimiento por edictos*

El estricto régimen de comunicación con el deudor expuesto en el apartado anterior queda exceptuado en el caso de proceso monitorio por *impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de Propietarios de inmuebles urbanos* que señala el art. 812.2.2º. En dicho supuesto sí que es posible la comunicación edictal por venir así explicitado en el art. 815.2:

En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, la notificación⁹⁷² deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley⁹⁷³.

Este factor constituye la principal característica diferenciadora, junto a la imposición de costas al deudor aunque pague la cantidad reclamada, respecto a cualquier otra reclamación monitoria por deuda de diferente origen o naturaleza. De ahí que se hable de dos clases de proceso monitorio, el “ordinario” o “común” y el “especial” o “privilegiado”, este segundo reservado en exclusiva a las Comunidades de Propietarios⁹⁷⁴. Este diferente tratamiento procesal se justifica, siguiendo a BONET NAVARRO, “en que el deudor debe pechar con las consecuencias de no haber designado domicilio a efectos de notificaciones (art. 9.f LPH), y en que debió conocer la reclamación en dos ocasiones previas (junta y notificación del acuerdo por la misma)”⁹⁷⁵, algo similar a lo indicado por ACHÓN BRUÑÉN, para quien la nor-

del monitorio, que este proceso excluye el requerimiento por edictos” (AAP Barcelona, Secc. 19, 14.01.2005, Roj: AAP B 222/2005, F. D. 3º).

⁹⁷² Debería decir “requerimiento”.

⁹⁷³ Este párrafo 2º del art. 815 no estaba contemplado en el Proyecto de 1998 de la futura Ley 1/2000, sino que fue añadido en el Senado en virtud de una enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) con el contenido que hoy día sigue vigente y cuya escueta justificación fue la de “adaptar la LPH y la LEC, manteniendo las principales novedades que se habían introducido en la LPH tras la reforma producida por la Ley 8/1999, de 6 de abril” (Enmienda n.º 295, BOCG, Senado, Serie II, n.º 154, 27.10.1999, pág. 335).

⁹⁷⁴ El proceso monitorio fue introducido en nuestro Ordenamiento jurídico por Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, como unas las “medidas” que el legislador pretendió establecer para paliar el problema de las Comunidades de Propietarios asfixiadas económicamente ante el incumplimiento de los comuneros de sus obligaciones.

⁹⁷⁵ BONET NAVARRO: “Proceso monitorio con especialidades en materia de propiedad horizontal: Veinte cuestiones polémicas y una perspectiva general previa”, *Práctica de Tribunales* n.º 17, junio 2005, La Ley, Madrid, cuestión n.º 13 (edición digital ref. 1163/2005).

ma “encuentra su explicación en la solemnidad del documento por el que se inicia este procedimiento, ya que el deudor debe haber sido convocado a la Junta de propietarios en que se aprobó el acuerdo liquidatorio y, además, éste le debió haber sido notificado con carácter previo a instar el proceso”⁹⁷⁶.

No obstante, siguiendo la tesis dominante, los dos autores citados coinciden también en que la posibilidad de practicar el requerimiento mediante edicto en este caso particular de deudas del régimen de propiedad horizontal no altera el carácter subsidiario de esta modalidad procesal de comunicación con el deudor ni la plena aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia que obliga al órgano judicial agotar los intentos de localización de dicha parte. Esto sucede a pesar de que, de nuevo, la Ley es explícita en la redacción de la norma, utilizando la forma verbal imperativa al ordenar que el requerimiento, una vez que se ha intentado sin éxito en el domicilio del propietario moroso, *se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley* (art. 815.2 ‘in fine’).

b) El requisito pre-procesal de la aprobación y notificación de la deuda al propietario moroso

La vía procesal que se facilita a estas entidades sin personalidad jurídica con el proceso monitorio exige el previo cumplimiento de una serie de requisitos para la viabilidad de sus pretensiones, fruto de la combinación de las disposiciones de la LEC con las de la LPH, en especial de su art. 21⁹⁷⁷, precepto de marcado carácter procesal y que bien podría haberse integrado completamente en aquella:

1. Que se trate de comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal (art. 396 CC y art. 1 LPH).

⁹⁷⁶ ACHÓN BRUÑÉN: “Cuestiones prácticas sobre la reclamación de deudas a copropietarios morosos en las comunidades en régimen de propiedad horizontal”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* n.º 684, julio-agosto 2004, aptdo. IV.4 (edición digital vLex ref. 328764), idea que repite en el número n.º 702, julio-agosto 2007, de la misma revista, artículo “Lagunas legales en la regulación del juicio monitorio y soluciones prácticas” (pág. 1476).

⁹⁷⁷ **Art. 21 LPH** (Ley 49/1960, de 21.07, sobre Propiedad Horizontal): 1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.

2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9.

3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la derivada de los gastos del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente la realización de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos.

[...].

2. Que se demande al propietario para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del art. 9.1⁹⁷⁸ de la LPH (art. 21.1 LPH).
3. Que la liquidación de la deuda haya sido previamente aprobada por acuerdo de la Junta de propietarios y que esta haya quedado consignada en certificación expedida por quien actúe como secretario de la misma con el visto bueno del presidente (art. 21.2 LPH).
4. Que dicha dicho acuerdo haya sido, también con carácter previo al proceso judicial, *notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9* (art. 21.2 'in fine' LPH), exigencia de la que nos ocupamos seguidamente.

La Ley de Propiedad Horizontal impone a cada propietario una obligación, para muchos de ellos desconocida, que luego acarrea no pocas lamentaciones en el Juzgado: *Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad* (art. 9.1.h); y, como en materia de arrendamientos, el mismo apartado deja sentado que *[e]n defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo. Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad [...]*. Si a esta previsión legal unimos el respaldo que supone para las Comunidades de Propietarios el art. 815.1p2 y aptdo. 2, permitiendo el requerimiento edictal en el proceso monitorio, constataremos la gran repercusión procesal que tiene este domicilio en particular.

No obstante, la LEC no se refiere a la LPH en ningún momento, exigiendo únicamente que la deuda venga acreditada *mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes* (art. 812.2.2º), sin hacer mención, como sería deseable, a que en esa certificación se deba especificar obligatoriamente que se ha procedido a dicha notificación en un lugar y fecha concretos, incluso confiriendo carácter de requisito de procedibilidad a esa notificación, de modo que su omisión constituyera un defecto insubsanable que implicase la inadmisión de la petición monitoria.

⁹⁷⁸ **Art. 9.1 LPH:** *Son obligaciones de cada propietario: [...] e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. [...].*

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación. [...].

Por otro lado, la regla del art. 9.1.h) prevista en la ley sustantiva contrasta con el art. 161 LEC, por cuanto permite la entrega del acuerdo de la Junta *al ocupante*, sin que se exijan mayores condicionantes como la edad, el parentesco o su relación con el destinatario. No obstante, como se trata de una comunicación previa al inicio del proceso judicial, entendemos que resulta adecuado tan alto grado de flexibilidad para no poner trabas innecesarias a la Comunidad de cara a la posterior reclamación judicial, lo que se hace extensible a la acreditación de tal notificación⁹⁷⁹.

También llama la atención que exija que el domicilio tenga que estar en España, lo que no parece muy acorde con nuestra integración en Europa y la progresiva desaparición de fronteras entre los Estados de la Unión, entre ellas también la jurídica. De hecho se ha planteado si es posible que por la vía de la autonomía de la voluntad y la capacidad auto-organizativa que ostentan las Comunidades pueda sortearse esta limitación legal en Junta de propietarios, siguiendo el procedimiento habilitado al efecto y con el 'quorum' correspondiente, de tal modo que se acuerde que las notificaciones puedan realizarse en el extranjero⁹⁸⁰.

4.2.- JUICIO CAMBIARIO

4.2.1.- El requerimiento de pago

La necesidad de dedicar un epígrafe al juicio cambiario (arts. 819-827 LEC) viene dada por la controversia existente en torno a la forma en que se ha de practicar el requerimiento de pago al deudor, en particular, si llegado el caso es posible realizarlo mediante edictos. Como es sabido, el art. 821 de la LEC dispone bajo el título "Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo preventivo" lo siguiente:

1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.

⁹⁷⁹ Explica BONET NAVARRO al respecto que "la jurisprudencia no suele exigir fehaciencia (SAP Valencia, Secc. 7.ª, 4 julio 2001). Podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, sin perjuicio de que se realice mediante la «colocación» de la notificación en tablón o lugar visible. Por ejemplo, mediante la correspondiente acta notarial; por la copia de la notificación con el recibí del propietario o, en su caso, ocupante; por el acuse de recibo en el que conste el objeto de la notificación y la firma del receptor (SAP Ciudad Real, Secc. 2.ª, 12 diciembre 2001), o mediante burofax (AAP Córdoba, Secc. 2.ª, 19 marzo 2003; SAP Baleares, Secc. 4.ª, 30 abril 2002). Más dudosas serían otros medios de comunicación, como a través del correo electrónico (*Pedraz y Pérez*) o fax, pues no son remitidos a domicilio alguno claramente, salvo que el deudor se diera por notificado contestando. Así mismo, no parece que una simple llamada telefónica o correo ordinario, incluso aunque sea certificado y hasta aunque su remisión se confirme por declaración testifical (SAP Zaragoza, Secc. 5.ª, 9 noviembre 2000), sean medios idóneos para dejar constancia de su recepción" ("Proceso monitorio con especialidades...", op. cit. cuestión n.º 11).

⁹⁸⁰ En una "encuesta jurídica" realizada al efecto por la editorial Sepin la respuesta fue mayoritariamente contraria a tal posibilidad al contravenir una norma imperativa: Vid. "¿Puede la junta acordar que las citaciones y notificaciones de la comunidad se hagan en el extranjero sin necesidad de fijar domicilio en España, como señala el art. 9.1 h) LPH?" (Coord.: MARINA MARTÍNEZ-PARDO, JESÚS), *Sepin Propiedad Horizontal* n.º 255, febrero 2005, Sepin, Madrid.

2. El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:

1.ª Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.

2.ª Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.

3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552.

El precepto se limita, como es de apreciar, a *requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días*, sin más, a diferencia de lo que ocurre con su homónimo art. 815p2 en sede de proceso monitorio, que es mucho más completo y se preocupa de precisar que el requerimiento se practique conforme al art. 161, de ordenar que se efectúe al deudor el apercibimiento de despachar contra él ejecución si no paga o se opone, así como de aclarar que solo cabrán los edictos en caso de monitorios de Comunidades de Propietarios.

No obstante, la propia naturaleza del requerimiento, la necesidad de poder dejar constancia de las manifestaciones del deudor (art. 152.5 LEC) –con lo que implícitamente, como afirma HURTADO YELO⁹⁸¹, se excluye el uso del correo, telegrama o similar– y el referente teleológico que supone el proceso monitorio y su art. 815, hacen que resulte pacífica la necesidad de practicar dicho acto de comunicación mediante entrega, o sea, conforme al art. 161⁹⁸², ya con el propio deudor, ya con los terceros subsidiarios señalados en el mismo.

4.2.2.- El domicilio del deudor cambiario

La LEC no precisa tampoco qué lugar se ha de reputar como domicilio del deudor, no solo para requerirle de pago, sino ya para determinar la propia competencia territorial del órgano judicial, atribuida de forma imperativa junto a la competencia objetiva por el art. 820 al *Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor*. Asimismo, pese a la intrínseca vinculación de este proceso especial con el título cambiario que lo fundamenta (letra de cambio, cheque o pagaré), no se establece que tenga que ser necesariamente el que pueda aparecer en el mismo en

⁹⁸¹ HURTADO YELO, JUAN JOSÉ: “La diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio cambiario. Posibilidad de levantamiento del embargo”, *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º VII, 2001, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, pág. 823.

⁹⁸² Ídem HURTADO YELO nota anterior; BONET NAVARRO: “Juicio cambiario: algunas respuestas a demasiadas cuestiones controvertidas”, *Revista del Poder Judicial* n.º 71, CGPJ, Madrid, 2003, pág. 217; SANZ ACOSTA, LUIS AURELIO: “Juicio cambiario. Problemática en su aplicación” (ponencia), *Problemas procesales del juicio cambiario* (Cuadernos Digitales de Formación), CGPJ, Madrid, 2010, pág. 27 (aunque es de señalar que el autor llega a la conclusión correcta tras un planteamiento erróneo que olvida el art. 155 LEC: “La notificación del requerimiento se efectuará en la forma establecida en el artículo 161 de la LEC, es decir, a través de la forma de comunicación reglada para las partes aún no personadas o no representadas por procurador, que exige una entrega personal”).

los términos establecidos por la Ley Cambiaria⁹⁸³, donde el domicilio no figura como una de las menciones obligatorias⁹⁸⁴. Si hubiera habido una remisión a la ley especial, se estaría aplicando la misma medida que se adopta en el art. 582 LEC con la práctica del requerimiento de pago *en el domicilio que figure en el título ejecutivo*.

A falta, pues, de una disposición que constriña las opciones del acreedor, nada impide que el mismo pueda señalar conforme al art. 155.2 LEC otros domicilios del deudor, sin perjuicio de tener que atender a las reglas generales sobre competencia territorial de los arts. 50 y 51 LEC. En este punto y a fin de evitar “foros de conveniencia” (‘forum shopping’) sería de exigir una mínima acreditación de ese lugar, ya mediante documentos oficiales (v. gr., nota o certificación registral acerca del domicilio social), o contractuales (facturas, albaranes, misivas entre las partes, etc.). En este sentido, apunta GARCÍA-GALÁN SAN JOSÉ que “la mención en la demanda de un domicilio erróneo como del demandado para «elegir» a la competencia territorial, siempre que se acredite que la actora conocía (o podía conocer, por ejemplo según el Registro Mercantil) el domicilio real, permitirá al tribunal examinar nuevamente su competencia una vez se comprobase dicha circunstan-

⁹⁸³ Letra de cambio: Art. 2.b) de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque: *A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librado se considerará como el lugar del pago y, al mismo tiempo, como lugar del domicilio del librado.*

Art. 92: *A los efectos de la presente Ley, en lo que haga referencia a la letra de cambio, se entenderá por lugar la localidad o población, y por domicilio, la dirección o residencia.*

Pagaré: Art. 95 LCCH: *El título que carezca de alguno de los requisitos que se indican en el artículo precedente no se considerará pagaré, salvo en los casos determinados en los párrafos siguientes:*

a) *El pagaré cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadero a la vista.*
b) *A falta de indicación especial, el lugar de emisión del título se considerará como lugar del pago y, al mismo tiempo, como lugar del domicilio del firmante.*
c) *El pagaré que no indique el lugar de su emisión se considerará firmado en el lugar que figure junto al nombre del firmante.*

Tendrán la consideración de cláusulas facultativas todas las menciones puestas en el pagaré distintas de las señaladas en el artículo precedente.

⁹⁸⁴ Letra de cambio: **Art. 1 LCCH:** *La letra de cambio deberá contener: Primero.–La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del título expresada en el idioma empleado para su redacción. Segundo.–El mandato puro y simple de pagar una suma determinada en pesetas o moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial. Tercero.–El nombre de la persona que ha de pagar, denominada librado. Cuarto.–La indicación del vencimiento. Quinto.–El lugar en que se ha de efectuar el pago. Sexto.–El nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago o a cuya orden se ha de efectuar. Séptimo.–La fecha y el lugar en que la letra se libra. Octavo.–La firma del que emite la letra, denominado librador.*

Pagaré: **Art. 94 LCCH:** *El pagaré deberá contener: Primero.–La denominación de pagaré inserta en el texto mismo del título y expresada en el idioma empleado para la redacción de dicho título. Segundo.–La promesa pura y simple de pagar una cantidad determinada en pesetas o moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial. Tercero.–La indicación del vencimiento. Cuarto.–El lugar en que el pago haya de efectuarse. Quinto.–El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden se haya de efectuar. Sexto.–La fecha y el lugar en que se firme el pagaré. Séptimo.–La firma del que emite el título, denominado firmante.*

cia. De otro modo se podría consumir un fraude procesal”⁹⁸⁵. De las palabras de la autora se colige que no opera aquí el instituto de la ‘perpetuatio iurisdictionis’ (art. 411), tal y como ha tenido que venir a aclarar el TS, siempre que se acredite “que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real en el momento en que se presentó la petición”⁹⁸⁶.

4.2.3.- La diligencia de requerimiento y embargo preventivo

La diligencia judicial consistente en requerir de pago al demandado tendrá diferente objeto dependiendo de lo que haya dispuesto el Juez o Magistrado en el auto de admisión:

- a) Diligencia “unipersonal”: Si ya ha embargado preventivamente un determinado bien del deudor en la propia resolución⁹⁸⁷, para lo cual habrá sido obligado que el actor lo haya conocido previamente⁹⁸⁸ y que así lo haya pedido, la diligencia será llevada a cabo por el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial (o, en su caso, Procurador) realizando un doble acto de comunicación consistente en dicho requerimiento y, también, aunque nada diga la ley, en la notificación del auto de incoación con traslado de la demanda.
- b) Diligencia “en comisión”: Si el embargo preventivo lo ha diferido al momento mismo del requerimiento de pago por desconocimiento de bienes del deudor, el requerimiento de pago formará parte de una diligencia judicial de carácter compuesto en la que, no solo se practicarán los anteriores actos de comunicación (requerimiento + notificación), sino también la medida cautelar de la traba de bienes. En este caso, aquel funcionario judicial habrá de estar constituido en Comisión judicial junto con el Gestor procesal [arts. 476.c) y 478.a) y b) LOPJ] y este, en la medida en que se trata de una actuación pseudo-ejecutiva, habrá de levantar acta conforme al art. 624.

⁹⁸⁵ GARCÍA-GALÁN SAN JOSÉ, M.^a JOSÉ: “El juicio cambiario” (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, pág. 905.

Pese a lo dicho, no escatimamos la idea de BONET NAVARRO de que el requerimiento “pudiera hacerse, además, a petición del actor, en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el demandado pudiera ser hallado, tal y como previene el artículo 582 LEC y, en cierto modo, contempla el artículo 813 LEC” (“Juicio cambiario...”, op. cit., pág. 218).

⁹⁸⁶ ATS 10.09.2013, F. J. Único (Roj: ATS 8146/2013).

⁹⁸⁷ El juicio cambiario sigue incoándose por auto, y no por decreto siguiendo la normal general establecida por la Ley 13/2009, en tanto que el tribunal puede en ese mismo momento acordar con carácter preventivo el embargo de bienes *por si no se atendiera el requerimiento de pago* en el plazo de diez días. El carácter cautelar y no ejecutivo de la traba, unido la mayor tutela que se pretende dispensar a los acreedores cambiarios, hace que defendamos la postura de que la medida hay que adoptarla desde el inicio, sin esperar a conocer si se ha atendido o no el requerimiento, ordenando por ello la LEC que habrá de hacerse con el carácter de *inmediato y sin más trámites*.

⁹⁸⁸ No creemos posible que el actor pueda pedir, en sede de juicio cambiario, la investigación judicial del patrimonio del deudor ex art. 590 LEC, solo de aplicación en fase ejecutiva.

4.2.4.- Posibilidad de comunicación edictal en el juicio cambiario

Si el deudor cambiario no puede ser localizado surge de nuevo la cuestión de que si cabe acudir a la comunicación edictal. A falta de regla especial al respecto en el juicio cambiario, la respuesta más fácil puede ser la de aplicar las normas generales de los arts. 156.4 y 164 y acordar que el requerimiento de pago y la notificación del inicio del proceso se realicen mediante edicto, algo que ha sido defendido por la doctrina mayoritaria⁹⁸⁹ y puede observarse en la práctica⁹⁹⁰. Así, las Audiencias Provinciales están abrumadoramente a favor de exigir el agotamiento de las posibilidades de averiguación del domicilio del deudor, así como de entender que no se puede confundir ni asimilar el régimen del proceso monitorio con el del cambiario. Por eso coinciden en censurar el criterio de los juzgados de 1ª instancia que archivan el juicio cambiario con el argumento de que no es posible la comunicación edictal dada la naturaleza del proceso cambiario; los tribunales ‘ad quem’ entienden, por el contrario, que no existe en dicho proceso norma especial al respecto que impida aplicar aquellas disposiciones de aplicación general. Sirva el ejemplo del **AAP Sevilla (Secc. 6ª) 18.12.2012**⁹⁹¹:

“El Juzgado de instancia rechazó el requerimiento por edictos “al considerar que tal forma no era acorde con la naturaleza de la acción ejercitada y las consecuencias procesales del requerimiento de pago” (F. J. 1º), pero el órgano de apelación sostiene que “el art. 821 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no contempla una especial exigencia en cuanto a la forma de hacerse el requerimiento de pago, al contrario de lo que sucede para el proceso monitorio en el art. 815.1 párrafo segundo y con la modalidad del número 2 de idéntico precepto, por lo que, pudiendo el legislador haber contemplado alguna especialidad para el cambiario como lo hizo para el monitorio, ha de aplicarse el régimen general del art. 161 y 156 de la ley adjetiva” (F. J. 2º).

En el mismo sentido cabe citar, entre muchas otras resoluciones, los AAP Madrid (Secc. 14ª) 11.01.2013⁹⁹²; AAP Jaén (Secc. 2ª) 27.06.2012⁹⁹³; AAP Huelva

⁹⁸⁹ Vid., entre otros, LÓPEZ ORELLANA: “Eso sí, [aclara el autor] por ser un último recurso, una vez agotadas antes todas las posibilidades de averiguación del domicilio del deudor” (“El juicio cambiario: procedimiento,...”, op. cit., pág. 283).

⁹⁹⁰ Como ejemplo, véase el edicto publicado en la Diario Oficial de la Comunidad Valenciana por el Juzgado de 1ª Instancia n.º 4 de Elche (n.º 7392, de 30.10.2014)(*) de “notificación de la diligencia de requerimiento de pago” y “en atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada”; nótese que, extrañamente, según da fe la Secretaría judicial, es el juez quien por providencia acuerda la publicación del edicto (quizá por haber utilizado, y permitido, un modelo desfasado).

(*) http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9773.pdf

⁹⁹¹ Roj: AAP SE 3059/2012.

⁹⁹² (Roj: AAP M 1807/2013): “El Juez de Instancia transporta al proceso cambiario la técnica del proceso monitorio, y no estamos de acuerdo con esa importación. Mientras, en el proceso monitorio no caben los emplazamientos edictales, en el cambiario si lo son al no existir norma especial en la materia como es el Art.813 L.E.C. Esas limitaciones se basan en la naturaleza del título de deuda. En el proceso cambiario se parte de un título riguroso, formal y completo, de carácter solemne, formalista, y objetivo, que acredita la naturaleza y extensión de la deuda, y la legitimidad del tenedor por primera designación o por la cadena de endosos. En cambio el proceso monitorio, y no digamos en el

(Secc. 3^a) 25.05.2012⁹⁹⁴; AAP Madrid (Secc. 13^a) 30.03.2012⁹⁹⁵; AAP Sevilla (Secc. 5^a) 21.03.2012⁹⁹⁶; AAP Sevilla (Secc. 2^a) 15.02.2012⁹⁹⁷; AAP Madrid (Secc. 12^a) 29.09.2011⁹⁹⁸; AAP Toledo (Secc. 2^a) 26.04.2011⁹⁹⁹; o AAP Madrid (Secc. 18^a) 14.02.2011¹⁰⁰⁰; AAP Girona (Secc. 1^a) 17.11.2010¹⁰⁰¹; AAP Zamora (Secc. 1^a) 30.09.2010¹⁰⁰²; AAP Oviedo (Secc. 4^a) 19.07.2010¹⁰⁰³; AAP León (Secc. 2^a) 18.06.2010¹⁰⁰⁴; AAP Barcelona (Secc. 13^a) 11.03.2009¹⁰⁰⁵; AAP Valencia (Secc. 7^a)

monitorio puro, no existe título de esas características; el rigor de los títulos cambiarios propio de su naturaleza cartácea, no tiene nada que ver con los documentos del Art. 812 L.E.C., lo que permite que en un caso pueda emplazarse por edictos y en otro no" (F. J. 2^º).

⁹⁹³ Roj: AAP J 142/2012: "Es reiterada la corriente doctrinal mantenida por esta Audiencia de que en el proceso cambiario a diferencia del monitorio es factible realizar el requerimiento por edictos. En efecto, tiene establecido esta Sala, en consonancia con otras Audiencia Provinciales (S. 31-3-2008) que no resulta admisible tratar de fundamentar la negativa a la práctica de la comunicación edictal en base a preceptos que no son específicos del mismo" (F. J. 1^º).

⁹⁹⁴ Roj: AAP H 697/2012: "[...] no hay base legal alguna para archivar definitivamente el procedimiento y sí hay base para que el Juzgado (hoy día el Secretario) siga investigando lo que sea menester o acuerde el requerimiento por Edictos, más aún si lo pide la parte y es a costa del solicitante" (F. J. 1^º).

⁹⁹⁵ Roj: AAP M 13266/2012: "Ya en el ámbito del juicio cambiario, el artículo 821 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no excluye la utilización de la comunicación edictal [...]. [...] cuando la deuda consta documentada y acreditada con mayores garantías –supuesto del artículo 812.2.2^º–, el nº 2 del artículo 815 expresamente autoriza a que la notificación (requerimiento de pago) se efectúe conforme a lo dispuesto en el artículo 164 (comunicación edictal). Luego si en el juicio monitorio, para el supuesto especial aludido de cualificación del documento que le sirve de base, y en la ejecución ordinaria dineraria esta admitida la práctica del requerimiento de pago, naturalmente de modo subsidiario una vez agotadas sin éxito las averiguaciones pertinentes en torno a cual sea el domicilio del deudor, a través de la comunicación edictal, no se ve la razón para rechazarla en el juicio cambiario" (F. J. 3^º).

⁹⁹⁶ Roj: AAP SE 1497/2012: "En lo no previsto en la normativa especial del juicio cambiario deben aplicarse las disposiciones generales relativas a todos los juicios civiles que se contienen en el Libro I" (F. J. 3^º).

⁹⁹⁷ Roj: AAP SE 1263/2012 (F. J. 2^º); ídem en Auto de 15.11.2011 (Roj: AAP SE 3725/2011; F. J. 1^º y único).

⁹⁹⁸ Roj: AAP M 13871/2011: "[...] si en el monitorio es la voluntad presunta del interpelado la que acaba conformando el título de ejecución, en el cambiario se parte ya de un documento que revela el crédito, y al deudor se le ofrece una más o menos limitada posibilidad de oposición, según las relaciones - personales o abstractas- que mantenga con el acreedor. Si en un proceso de otra índole (los ordinarios y la mayoría de los especiales), que se abre con la sola voluntad del demandante, se permite la posibilidad de comunicación edictal, siempre que, por su carácter subsidiario, sea el último remedio, no se comprende razón alguna por la que en el cambiario no se admitiría la misma (F. J. 2^º).

⁹⁹⁹ Roj: AAP TO 82/2011 (F. J. 2^º).

¹⁰⁰⁰ Roj: AAP M 2401/2011 (F. J. 1^º).

¹⁰⁰¹ AAP GI 927/2010 (F. J. 2^º); ídem Auto de la misma Sección de 20.09.2010 (Roj: AAP GI 600/2010; F. J. 2^º).

¹⁰⁰² Roj: AAP ZA 158/2010 (F. J. 2^º y 3^º).

¹⁰⁰³ Roj: AAP O 636/2010 (F. J. 2^º).

¹⁰⁰⁴ Roj: AAP LE 522/2010 (F. J. 2^º y 3^º).

¹⁰⁰⁵ Roj: AAP B 1400/2009 (F. J. 2^º).

15.04.2008¹⁰⁰⁶; AAP Jaén (Secc. 2ª) 31.03.2008¹⁰⁰⁷; AAP Pontevedra (Secc. 1ª) 23.11.2006¹⁰⁰⁸; o AAP Bilbao (Secc. 3ª) 23.06.2006¹⁰⁰⁹.

Aquí proponemos una solución intermedia consistente en permitir el requerimiento por edictos cuando el requerimiento se haya practicado, al menos, en el domicilio que hubiera podido indicar en el propio deudor en el título cambiario. Se trata de un idea inspirada en BONET NAVARRO, autor antes citado que, a pesar de sumarse a la opinión minoritaria de excluir para el cambiario “la posibilidad del emplazamiento edictal”, afirma que cuando conste el domicilio del obligado en el título-valor cambiario, “dado que ha asumido la obligación documentada, igualmente tendría que asumir el domicilio que consta en el título-valor cambiario, de modo que en éste habrá de realizarse la notificación y, en caso de no ser posible, habría de asumir las consecuencias sobre la posibilidad de notificación edictal”¹⁰¹⁰.

¹⁰⁰⁶ Roj: AAP V 83/2008 (F. J. 1º).

¹⁰⁰⁷ Roj: AAP J 104/2008 (F. J. 1º).

¹⁰⁰⁸ Roj: AAP PO 392/2006 (F. J. 3º).

¹⁰⁰⁹ Roj: AAP BI 786/2006 (F. J. 1º, 2º y 3º).

Vid. también otras resoluciones en las que, sin ser el asunto principal la cuestión que aquí nos ocupa, aceptan ‘obiter dicta’ la comunicación edictal en este tipo de proceso: AAP Almería (Secc. 1) 28.01.2014 (Roj: AAP AL 3/2014); AAP Zaragoza (Secc. 5) 24.02.2012 (Roj: AAP Z 645/2012); AAP Albacete (Secc. 2) 17.02.2011 (Roj: AAP AB 25/2011).

¹⁰¹⁰ BONET NAVARRO: “Juicio cambiario...”, op. cit., pág. 218.

VII

Conclusiones

– I –

Los actos de comunicación judicial son actos de naturaleza procesal que tienen por objeto más elemental dar a conocer una decisión o actuación procesal a un determinado sujeto, quien por ello recibe el nombre genérico de “destinatario”, y que puede concretarse en una parte procesal, un testigo, un perito, una entidad pública o privada, otro órgano judicial o un organismo, en definitiva, en quien con una mayor o menor intensidad, aun de forma colateral o meramente auxiliar, ha de participar en el desarrollo del proceso o puede verse afectado por el mismo.

Al mismo tiempo, los actos de comunicación contribuyen al avance del proceso hacia su resolución final y al desarrollo de cada una de las fases en que se compone el procedimiento judicial.

Su regulación en la jurisdicción civil se encuentra principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que actúa como vertebradora del Derecho positivo de la materia en nuestro proceso civil, pero junto a ella hay que tener presente todo un conglomerado de normas de diferente rango y naturaleza que la complementan y que tienen incidencia en las múltiples facetas que caracteriza el fenómeno de los actos de comunicación en los procesos judiciales.

– II –

Los actos de comunicación afectan de forma transversal a todo el conjunto de la actividad jurisdiccional y su correcta práctica forma parte del derecho funda-

mental a la **tutela judicial efectiva** del artículo 24 de la Constitución Española. Un emplazamiento mal hecho o una citación no intentada ajustándose a las prescripciones legales pueden acarrear la grave consecuencia de la anulación de las actuaciones por indefensión y la retroacción de las mismas casi al instante mismo de la incoación de la demanda. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en infinidad de ocasiones al respecto, como también lo han hecho el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor.

- III -

El sistema diseñado por las leyes procesales en relación con actos de comunicación descansa fundamentalmente en la **regla o principio de la recepción** o conocimiento formal, el cual, frente al principio del conocimiento, atribuye plena validez procesal a aquellas comunicaciones que se hayan practicado cumpliendo las formas y ritos del procedimiento, independientemente de que el destinatario haya tomado conocimiento efectivo del objeto de la comunicación. Sin embargo, la comunicación también será válida, si pese al quebranto de aquellas formalidades, se produce finalmente, aquel conocimiento.

La finalidad de información antes mencionada de los actos de comunicación no solo se tiene por cumplida cuando se constata que el destinatario de los mismos ha tenido realmente conocimiento del objeto o contenido de aquellos; antes al contrario, existe otro factor que la condiciona o modula, que es el de la tutela de la propia parte demandante, que no puede quedar indefinidamente postergada, y que hace que rija la presunción de aquel conocimiento cuando se hayan respetado las normas reguladoras de estas actuaciones.

En la LEC este principio está en la base misma del régimen legal de los actos de comunicación procesal, teniendo como expresión más pura y directa en el art. 155.4, disposición según la cual, cuando las partes no estén representadas por procurador y aquellos se efectúen en determinados domicilios que el mismo precepto señala, las mismas surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse. Otro buen ejemplo es el de las comunicaciones telemáticas, en las que si consta la correcta remisión del acto en el “buzón electrónico” del destinatario, aunque el mismo no acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos. Este principio tan básico, por último, es el que da sentido a las comunicaciones personales realizadas a través de personas distintas del destinatario.

- IV -

No obstante, se trata de una presunción ‘iuris tantum’, de tal forma que si el destinatario prueba que la comunicación no ha llegado a su conocimiento por causa no imputable al mismo, el Ordenamiento le permite, bajo determinadas condiciones, revocar los efectos procesales de dicha comunicación, aun cuando la misma se haya practicado con todas las formalidades legales.

En este sentido, el legislador ha otorgado carácter esencial a los actos de comunicación, en línea con lo reiteradamente declarado por la jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Constitucional, pero que, al mismo tiempo, ha establecido un régimen de **nulidad** jurídica ‘sui generis’ o, con muchas reservas, nulidad “atenuada”, que persigue la conservación, casi a toda costa, de la eficacia de dichos actos. Y ello porque, primero, transmuta dicha nulidad en mera anulabilidad, al permitirse su subsanación o convalidación, lo que va en contra de la esencia del instituto jurídico de la nulidad, razón por la cual el legislador tendría que haber hablado de “anulabilidad”; segundo, exige que se haya producido indefensión, que debe ser una **indefensión efectiva**, como ordenan el art. 240.1 LOPJ y el art. 227.1 de la propia LEC, lo que no parece cohonestarse con la mera indefensión en potencia que parece referir el art. 166.1 de la segunda cuando refiere que “pudieran causar indefensión”. Los tribunales han exigido también que dicha indefensión ha de ser efectiva y no meramente formal, debiendo haber causado un perjuicio real en los derechos procesales del destinatario y que, de nuevo, el mismo no sea consecuencia de su propia negligencia, además de tener que denunciar el vicio si ha tenido la oportunidad de hacerlo; y tercero, fija un momento preclusivo para la denuncia, pues la persona afectada ha de formularla en su primer acto de comparecencia ante tribunal, entendiéndose en caso contrario que tolera tácitamente el defecto y sus consecuencias procesales.

– V –

La LEC ha optado por sistematizar los actos de comunicación en razón a su finalidad y destino, y ha dedicado uno de sus preceptos a establecer una clasificación legal en la que distingue hasta seis **clases** de actos de comunicación. A estas clases las denomina notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios, si bien debería añadir una séptima clase, que en otro lugar denomina exhortos.

De la citada clasificación se observa una inadecuada descripción de los oficios, disconforme con el empleo tradicional de los mismos, e incluso en la propia ley procesal, que no establece un criterio homogéneo, y a destinatarios distintos de los descritos legalmente. Se debería ajustar, por tanto, a la práctica cotidiana.

Asimismo, los mandamientos deberían ir dirigidos únicamente a los funcionarios de la Administración de Justicia, descartando a los Notarios y Registradores, que carecen de relación de dependencia y subordinación, con los que habría que comunicarse mediante oficio, que, a su vez, tendría que ser la clase a emplear para las comunicaciones con autoridades, entidades y organismos públicos de cualquier clase, así como con órganos judiciales cuando no deban solicitar auxilio judicial, para la cual se contemplan los exhortos.

Debería rescatarse la posibilidad de emplear también las cédulas para las notificaciones, desde luego cuando, además de dar noticia de una resolución o actuación (art. 149.1º), se esté realizando un traslado y/o sea oportuno enfatizar la

existencia de determinadas prevenciones legales o advertencias. Exactamente igual habría de estipularse respecto de los requerimientos.

- VI -

La LEC carece de una norma específica donde se defina el **lugar** en que han de realizarse los actos de comunicación judicial. Este vendrá determinado por la forma en que han de practicarse dichos actos de comunicación y quiénes sean sus destinatarios, pudiendo identificarse como tal el propio domicilio del destinatario, la sede del órgano judicial o la de sus Servicios Comunes, así como con carácter virtual a través de Internet y los modernos sistemas telemáticos de remisión de las comunicaciones.

Tampoco proporciona con carácter general una definición legal de **domicilio** a efectos de notificaciones. Respecto del demandado, establece una serie de lugares susceptibles de ser designados por el actor que parecen presentarse con carácter cerrado o taxativo. Se debería eliminar esta limitación, que, además, en la práctica es superflua, de modo que la comunicación con el demandado se pueda realizar en cualquier lugar en que pudiera ser hallado, incluso de forma accidental, tal y como permite el art. 581 con el requerimiento de pago en la ejecución ordinaria y, recientemente, el art. 686.2 en el requerimiento de pago extrajudicial hipotecario. Aquella relación solo debería circunscribirse a los casos en que se practiquen los actos de comunicación domiciliarios con terceros receptores, a efectos de poder presumir, al menos por razón del lugar, la vinculación de los mismos con el destinatario.

El legislador se basa en unos domicilios que tienen un reconocimiento por el Derecho (padrón municipal, Registro Mercantil, organismos tributarios, Seguridad Social, etc.) y que por seguridad jurídica se pretende que tengan una efectividad real y no meramente formal u oficial como para poder presumir que los destinatarios de las comunicaciones van a poder ser localizados en un alto porcentaje de casos en aquellos lugares por ellos mismos designados y que van a recibir aquello que se les remite, hasta tal punto que debería resultar innecesario preocuparse de tener constancia de aquella recepción, como ocurre en el caso excepcional del art. 155.4.

- VII -

En cuanto a la **averiguación del tribunal sobre el domicilio** del demandado, la ley debería exigir una mayor y real participación de la parte demandante en tal cometido. En el caso de las personas naturales aquel no tiene posibilidad de acceder por sí solo al padrón municipal, pues el mismo tiene carácter confidencial. Solo si no tiene más recursos, estará legitimado para interesar del órgano judicial que efectúe una consulta domiciliaria al censo del Instituto Nacional de Estadística (domicilio padronal) y de las bases de datos de la Agencia Tributaria (domicilio fiscal), Seguridad Social (domicilio a efectos de cotizaciones y prestaciones) y Cuerpo Nacional de Policía (DNI), todas ellas accesibles hoy día de forma centrali-

zada a través del denominado “Punto Neutro Judicial”, aplicación informática gestionada por el CGPJ.

También podría consultarse el Registro Central de Rebeldes Civiles a fin de comprobar si el demandado consta inscrito en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos o son diferentes. Sin embargo, apostamos por la supresión de este Registro tan singular, que tras trece años desde su creación, lejos de haber demostrado ser una herramienta eficaz, constituye un riesgo para los derechos de esos “rebeldes civiles” al no existir una disciplina seria ni generalizada por parte de los órganos judiciales en proceder a la inscripción de los datos correspondientes del demandado, ni en solicitar de oficio su cancelación cuando fuere conocido su domicilio conforme dispone el art. 157, resultando por todo ello un medio de averiguación poco eficaz y, sobre todo, una fuente de información poco fiable.

Tratándose de sociedades mercantiles y de otros sujetos de Derecho cuyos actos han de inscribirse en el Registro Mercantil, el órgano judicial debería rechazar la recurrente petición de la parte actora de que averigüe el domicilio social de la entidad demandada, pues el mismo consta en un registro público al que aquella puede acceder sin necesidad de recabar el auxilio judicial y aportar una certificación o, al menos, una nota simple comprensiva de aquel extremo. Reivindicamos aquí el importante significado de ese Registro público, al tiempo que apelamos al mayor celo que entendemos deben tener los administradores de esas sociedades, en tanto que ficciones jurídicas, a la hora de cumplir con sus obligaciones legales. Y entre ellas, la de comunicar a aquel Registro cualquier cambio de domicilio social, constituyendo el mismo uno de los datos esenciales exigidos legalmente, no solo para la primera inscripción de las sociedades y demás entidades conforme al Reglamento del Registro Mercantil, –debiendo además constar obligatoriamente en los Estatutos de las sociedades de capital–, sino también para la debida publicidad de actos posteriores. Tanto es así que la Ley de Sociedades de Capital, viene a establecer una distinción entre domicilio “registral” y domicilio “real” y advierte claramente que en caso de discordancia entre uno y otro, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos. Con ello cabe sostener que legislador impone una especie de penalización a las sociedades que no se cuiden de evitar esa falta de identidad, de tal modo que, bajo esta permisa, en caso de ser demandadas en el domicilio que conste en el Registro no podrían alegar que ya no estaban domiciliadas allí o que su actividad económica ha pasado a desarrollarse en otro lugar.

– VIII –

Siguiendo con el razonamiento anterior, el Ordenamiento debería ser más exigente con las personas que no atienden su deber ciudadano, y muchas veces legal, de mantener actualizado su domicilio, debiendo asumir, como ya dijera el CGPJ en su Libro Blanco de la Justicia, las consecuencias desfavorables que deriven de la falta de coincidencia entre su domicilio real con el que figura en registros, archivos y oficinas públicas. La dilación de los procesos se convierte en indebida desde

el momento en que los órganos judiciales han de invertir tiempo y recursos materiales y humanos en localizar a estas personas, ya que, de otro modo, aquellas “consecuencias desfavorables” las está sufriendo la parte que está demandando tutela judicial.

Si tras la promulgación de las Leyes 13/2009 y 19/2009, el Tribunal Constitucional ha venido a reafirmarse expresamente en su interpretación excesivamente garantista y proteccionista de la figura de la parte demandada o ejecutada en lo que a actos de comunicación se refiere. Esta situación no solo concierne a la ejecución hipotecaria, sino que también se han visto afectados procedimientos que llevaban años reclamando mayor celeridad para que exista una verdadera tutela judicial, como es el caso del juicio verbal de deasahucio. Incluso el resto de ejecuciones de títulos extrajudiciales diferentes del hipotecario también se están viendo comprometidas todas ellas por la, en demasiadas ocasiones, tenaz localización del demandado o del ejecutado, sin importar o minusvalorando cuál haya su comportamiento o diligencia exigible como problema de fondo.

– IX –

La LEC no se preocupa suficientemente de las prevenciones legales. Habría que esforzarse en proporcionar más información al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, sin perjuicio del asesoramiento legal que pueda recabar. Es imprescindible que se le instruya sobre el régimen de postulación procesal, independientemente de que pueda o no solicitar asistencia jurídica gratuita.

Esas mismas prevenciones o advertencias deberían incentivarse en las leyes sustantivas que son el fundamento jurídico de los posteriores procesos judiciales, especialmente en lo que al domicilio de las partes concierne, que, ya se establezca contractualmente, ya por disposición legal, habrá de ser el lugar donde hayan de realizarse con plena eficacia procesal los eventuales actos de comunicación. En este punto, la intervención notarial podría ser clave en aquellos negocios jurídicos formalizados en documento público, de suerte que el mismo tuviera que apercebir expresamente a los contratantes sobre aquel particular y de las perjudiciales consecuencias que para su derechos acarrearía no comunicar a su contraparte y, eventualmente, al órgano judicial, el cambio de domicilio mientras perdurase en el tiempo la relación jurídica que une a las mismas.

– X –

Por otro lado, aunque con cierta relación con lo anterior, carecemos de unas mínimas normas generales que disciplinen la elaboración de las disposiciones legales con la prevención de un uso moderado del lenguaje jurídico que aúne la claridad en la exposición con el rigor y precisión que muchas veces solo los tecnicismos propios del Derecho pueden proporcionar. Se trata de una necesidad que se hace aun más patente en los actos de comunicación, en cuya práctica hay que tener siempre presente que sus destinatarios van a ser en muchas ocasiones personas legas y ajenas a la jerga forense, que, por muy familiar que pueda resultar a los profesionales de la Justicia, no solo puede resultarles extraña, sino también

incomprensible, algo que la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia proscribe.

– XI –

La noción de **sujeto activo** de los actos de comunicación contiene diferentes aspectos en los que puede identificarse, no un único sujeto, sino diferentes sujetos, como son los que ordenan la realización de los actos de comunicación, los que ejecutan materialmente los mismos y los que colaboran o coadyuvan a su efectiva realización.

Partiendo de estos diferentes roles o competencias que puede tener estos sujetos, puede hablarse de “sujeto o agente emisor” y “autor del acto notificado” o sujeto “mediato”, y “sujeto ejecutor”. Desde la primera de las perspectivas, serían sujetos activos el Letrado de la Administración de Justicia, principalmente, y el Juez o Magistrado, puntualmente. La LEC se refiere expresamente a la segunda de estas distinciones en su art. 152.1, cuando establece que los actos de comunicación se ejecutarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el procurador de la parte que lo solicite, profesionales ambos que actúan como sujetos “inmediatos” de la comunicación.

Los primeros son funcionarios pertenecen a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia y sus competencias vienen conferidas por la LOPJ, entre ellas la de la práctica de los actos de comunicación, a cuyo efecto ostentan capacidad de certificación. Junto a ellos, los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa intervienen en la confección material de las cédulas y resoluciones objeto de comunicación, mientras que los del Cuerpo de Gestión Procesal, pese a carecer en la LOPJ de competencias en la materia, suelen realizar las mismas funciones que sus compañeros tramitadores y siguen practicando actos de comunicación domiciliarios sin distinción respecto de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio. Además, en la práctica las comunicaciones telemáticas son materialmente realizadas por tramitadores y gestores indistintamente desde sus respectivos sistemas informáticos.

Los procuradores son profesionales del Derecho sujetos a un régimen estatutario que, junto a su tradicional función de representación de las partes procesales, tienen reconocido por la propia LOPJ la condición de cooperadores de la Administración de Justicia, a la que desde el año 2003 las sucesivas reformas legales han ido dando contenido efectivo. En esa función pueden, desde Ley 13/2009, practicar los actos de comunicación del órgano judicial a otras personas y terceros con plenos efectos jurídicos, habiéndoseles otorgado también, tras muchos años reivindicándola, capacidad de certificación de dichos actos por la reciente Ley 42/2015.

– XII –

Los **sujetos pasivos** o destinatarios por antonomasia de los actos de comunicación son las partes que integran el proceso judicial, pero hay que tener en cuen-

ta que, excepción hecha de las primeras comunicaciones con el demandado, en las que, obviamente, el mismo no está todavía personado, las notificaciones y restos de actos de comunicación solo deberían practicarse a aquellas partes que estén personadas, ya sea con procurador o sin él, excepto cuando la ley disponga expresamente que así se haga. Esta es la interpretación correcta que, a nuestro entender, habría que dar al art. 150.1 cuando dispone que las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso, esto es, a quienes hayan comparecido en el proceso y se hayan constituido formalmente en parte siguiendo las reglas sobre postulación.

Teniendo claro lo anterior, se acogería la petición que ya formuló el CGPJ en 1997 con su Libro Blanco de la Justicia y descendería el número de notificaciones y traslados que a diario se realizan en los órganos judiciales a partes no personadas respecto de actuaciones de las que no dependen ni su personación ni su intervención personal.

– XIII –

Como contrapartida, habría que hacer un esfuerzo en hacer valer las ventajas del acto formal de personación, resaltando las ventajas y desventajas que ello trae consigo, especialmente, la dilación excesiva de los procedimientos. La personación supone, además, una actitud hacia el proceso, podría decirse incluso que un gesto de respeto hacia la institución, a la que la parte se somete con responsabilidad a las reglas del juego y al órgano investido de jurisdicción para resolver de forma civilizada la controversia surgida entre los particulares. La falta de medios económicos para disponer de asistencia letrada y representación procesal cuando la misma sea preceptiva conforme a ley no debería ser obstáculo para conseguir aquella finalidad.

– XIV –

A grandes rasgos, la LEC establece dos sistemas o *formas* de practicar los actos de comunicación, la *remisión*, caracterizada por la ausencia de contacto físico entre el emisor y el receptor, y la *entrega*, la forma más antigua y simple, aquella que se efectúa de forma directa, entre personas, sin intermediarios y sin el empleo de medios de carácter técnico creados por el hombre para salvar las distancias entre unos y otros.

El de remisión es el sistema principal de comunicación y se configura con carácter obligatorio en la LEC, salvo en determinados supuestos. Como requisitos generales para su utilización se exige que permita dejar constancia de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado, si bien, por excepción, el requisito de la recepción no se exige para comunicaciones de las que no dependa la personación o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones, siempre que se hayan remitido a los domicilio legales u oficiales que la propia ley establece (art. 155.4).

Cuando se trata de remisión postal la constancia de la comunicación se refleja en el acuse de recibo, documento normalizado que utiliza un empleado ajeno a la Administración de Justicia. Ese trabajador, si pertenece al llamado “Operador Postal Universal”, tiene atribuida por la Ley 43/2010 la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción, rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales. Tal Operador es en la actualidad la empresa Correos y Telégrafos y ostentará dicha presunción legal hasta el año 2025. Se establece, por tanto una facultad análoga a la de los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y a los procuradores, que ostentan ambos capacidad de certificación a esos mismos efectos.

Otros operadores privados pueden también efectuar comunicaciones judiciales, pero carecerán de aquella presunción y deberán acreditar el hecho de la recepción por otros medios de prueba admitidos en Derecho.

– XV –

Respecto al contenido de lo remitido, el servicio postal puede hacer constar que se ha enviado un determinado correo, que el mismo se ha remitido a una dirección y a destinatario concretos y que ha sido entregado a una persona individualizada, pero no de lo que el sobre contiene. Solo con el burofax o el telegrama bajo la modalidad o servicio adicional denominado “copia certificada” se podrá contar con una reproducción exacta y autenticada del contenido remitido.

Ante el silencio de la LEC, se hace necesaria una reforma de la misma a fin de que establezca normas procesales sobre la práctica del correo, o bien efectúe una remisión expresa a la legislación sectorial, convenientemente adaptada a las necesidades de los procesos judiciales en general y del civil en particular. En concreto, habría de prever que el empleado postal deba consignar la relación que une al receptor de la comunicación con el destinatario cuando ambos sujetos no coincidan en la misma persona, exigencia ya presente en la Ley de la Jurisdicción Social.

En este sentido, es urgente un nuevo Reglamento de los Servicios Postales que solvante el problema de ilegalidad parcial declarada por el Tribunal Supremo en el año 2004 en lo relativo las entregas de notificaciones que sean de órgano judiciales, que vino motivada por no haberse recabado previamente en su día el informe preceptivo del CGPJ.

– XVI –

El correo postal siguiendo el medio de comunicación por excelencia del órgano judicial con las partes no personadas con procurador y con otros sujetos intervinientes en el proceso, y, todavía, el instrumento más esencial con el que se relaciona con otros organismos y autoridades, a pesar de encontrarnos ya en plena “era digital”.

El problema radica en que la LEC configura el sistema de remisión, ya sea postal o electrónico o telemático, como el primero a utilizar cuando trate del primer emplazamiento o citación al demandado. Tratándose de un momento tan deter-

minante, en tanto que de él depende que aquella parte tenga conocimiento del proceso mismo, **debería invertirse la prelación legal** y establecerse la comunicación mediante entrega como la forma de comunicación inicial, no como hasta ahora, en que este segundo sistema es subsidiario a aquel.

Con la remisión, sobre todo si se trata de la remisión postal, la interacción con el destinatario es prácticamente inexistente, lo que en determinadas situaciones no resulta recomendable. Si pensamos en el demandado, el mismo va a tener conocimiento por primera vez de la existencia de un proceso judicial que le concierne únicamente a través de una fría e impersonal “carta” o sobre postal, sin ningún interlocutor al que se le pueda plantear la más elemental cuestión y, lo más importante, sin ninguna persona –funcionario o procurador– que en representación del órgano judicial le traslade unas mínimas prevenciones legales al respecto, aunque las mismas vengan ya escritas, en un lenguaje jurídico cuando menos ajeno al profano, en la correspondiente cédula o copia de la resolución de que se trate. Precisamente ahí está el gran potencial del sistema de entrega y su principal rasgo diferenciador.

En este sentido, aun siendo plenamente conscientes de la mayor movilización de medios humanos que ello exigiría, no nos parece fuera de lugar la posibilidad de que el juzgado o tribunal –el Letrado de la Administración de Justicia para ser más precisos– acuerde desde el mismo instante de la incoación del procedimiento que se acuda, directamente y sin más trámites, a la comunicación al amparo del art. 161, como de hecho sucede en muchos partidos judiciales que cuentan con Servicios Comunes de Actos de Comunicación y con personal suficiente.

– XVII –

Cuando resulte de aplicación el art. 158 y pese a lo declarado por algunas Audiencias y parte de la doctrina, si en la tarjeta o acuse de recibo de correos se hace constar el nombre de otra persona, aunque se indique su relación con el destinatario, no por ello quedará acreditada su recepción por este ni se podrá decir que ese tercero fue o debió ser advertido de su obligación de hacer llegar a manos de aquel el sobre entregado. El empleado del servicio postal no está obligado a consignar la relación que une al receptor con el destinatario ni puede cumplir una función, la de advertir al primero de la obligación que contrae para con el segundo, que solo está atribuida al funcionario judicial o, en su caso, al procurador, y en los casos en que se acuda a la comunicación por medio de entrega. Al órgano judicial debería bastarle para aplicar sin más aquel precepto y, por ende, reiterar el trámite vía art. 161 tan pronto como advierta que el acuse de recibo no viene firmado por el destinatario.

– XVIII –

La otra modalidad de remisión es la de la **remisión telemática** o electrónica, que exige los mismos requisitos que la postal o convencional, si bien estos se cumplen teniendo en cuenta las características técnicas de las tecnologías que se emplean para dicha finalidad.

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han llegado para quedarse en nuestra Sociedad, y lo han hecho, además, para revolucionarla. La obligatoriedad de relacionarse por medios telemáticos con estos profesionales por parte del órgano judicial impide que se practiquen los actos de comunicación por los medios convencionales, salvo que no sea posible por causas técnicas, eventualidad para la que el art. 162 prevé que el acto de comunicación se efectúe, paradójicamente, no por la otra submodalidad del sistema de remisión, el correo tradicional, sino mediante el de entrega de copia de la resolución.

Además, la nueva cultura del “papel cero” en las Administraciones públicas y, entre ellas, la de Justicia, lleva consigo una multitud de cambios metodológicos y de mentalidad en los diversos operadores jurídicos que interactúan con ella. Donde con mayor intensidad se ha de percibir es en la relación entre los órganos judiciales (y fiscales) y los profesionales del ámbito de la Justicia, y entre ellos particularmente los procuradores. Se trata de una relación bidireccional, de los primeros con los segundos en los actos de comunicación, esencialmente notificaciones, y de estos con aquellos con la presentación de escritos y documentos, que a partir del próximo 1 de enero de 2016 habrá de ser, en una y otra dirección y ya sin más períodos de paulatina progresión, totalmente en formato digital.

Sin embargo, es generalizada en el foro la convicción de que dicha fecha es har-to prematura. Las comunicaciones por Lexnet y otros sistemas análogos siguen planteando numerosos problemas en el día a día, y, si bien es cierto que se han ido depurando con el paso del tiempo gracias a la propia experiencia de su aplicación real, aun necesitan más recorrido, especialmente en lo que a la faceta de presentación de escritos y documentos y del traslado de los mismos entre profesionales se refiere. Entre estos últimos, los procuradores constituyen, sin duda, la voz más autorizada para dar fe y testimonio de todo cuanto viene aconteciendo en los últimos años en esta materia.

– XIX –

Además, el legislador ha querido con la recentísima Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determinados ciudadanos, por presumirse su aptitud y acceso a las nuevas tecnologías, deban también, junto a los profesionales de la Justicia, relacionarse con ella por medios telemáticos, lo que incluye la recepción con plena eficacia procesal de los actos de comunicación. Esto será un año más tarde que respecto a los profesionales de la Justicia, a partir del 1 de enero de 2017, momento en el que, ya se esté obligado, ya se interese potestativamente, será posible que dichos actos se realicen en la “dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático”, cobrando así mayor relevancia la ya existente Sede judicial electrónica.

– XX –

Los actos de comunicación mediante **entrega**, término empleado por la LEC para referirse al sistema de comunicación directa y personal por parte de funcionario judicial o de procurador con el propio destinatario o un tercero receptor

predeterminado legamente, se configura en general con carácter subsidiario al sistema de *remisión*, ya sea por correo postal o por medios telemáticos, supereditándolo al previo fracaso de estos. Solo en tres casos puntuales se prevé expresamente su utilización inicial: requerimiento de pago de juicio monitorio, requerimiento de pago, desalojo u oposición en el juicio verbal de desahucio “monitoreizado” por impago de rentas; y notificación al rebelde de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Asimismo, está prevista su utilización facultativa, a criterio del Letrado de la Administración de Justicia o cuando lo pida el procurador, para las comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte. Sin embargo, se debería prever expresamente para la práctica de otros trámites destacados, como los del requerimiento de pago en el juicio cambiario o en cualquier otro en que aquel Letrado así lo entendiese justificado.

– XXI –

El escenario habitual de los actos de comunicación mediante entrega, sin perjuicio de que puedan practicarse en las sedes judiciales, es el domicilio del destinatario, normalmente el demandado, donde se constituye el funcionario y el procurador. Si este no se opone, el acto de comunicación se documenta por diligencia, surtiendo plenos efectos legales. Si rehúsa la entrega, frente al criterio legal anterior a 2009, en que se le amonestaba, el modo de proceder es el de informar a dicho destinatario que la comunicación queda a su disposición en la Oficina judicial y que, acuda allí o no, se le tendrá de todos modos por notificado, citado, emplazado o requerido. Con esta mejora se ha conseguido que el funcionario o procurador transmita cierto distanciamiento, que no desinterés, con el trámite a realizar, evitando así cualquier recelo de tener un interés personal en el asunto más allá del que le exige su deber profesional. Este deber empieza en poner todo su empeño en localizar a la persona, pero ha de acabar cuando se le pone a su inmediata disposición aquello que ha de serle comunicado; que lo acepte o no, al profesional le ha de resultar absolutamente indiferente.

Aunque no soluciona todos los problemas que se pueden suscitar, el art. 161 prevé también el supuesto de que el destinatario de la comunicación no se halle en el domicilio, pero sí otras personas, exigiendo la concurrencia cumulativa de determinados requisitos para que el acto de comunicación sea igualmente válido. En esencia, los mismos se refieren al lugar donde llevar a efecto el trámite y a la cualidad de esos receptores subsidiarios, quienes por razón de su parentesco o afinidad, convivencia o dependencia, se encuentran vinculados al destinatario o al entorno donde presumiblemente desarrolla su vida cotidiana. De ser así, el legislador confía razonablemente en que llegará a su conocimiento la comunicación proveniente del órgano judicial.

Por lo que al lugar o domicilio de entrega se refiere, este deberá ser uno de los que ya se relacionan en el art. 155.3 considerados oficiales u “oficiosos”, limitación legal que no consideramos adecuada porque la mayor probabilidad de que el acto de comunicación llegue a su destinatario no está tanto en el lugar, aunque también, sino en la condición de la persona receptora. Además, la LEC ha pasado

por alto que el funcionario o procurador que practique el trámite no sabrá si se ha constituido o no en uno de esos domicilios oficiales, a menos que así se le hayan informado expresamente por parte del órgano judicial.

– XXII –

Los terceros a los que la LEC permite ser receptores de los actos de comunicación con carácter general son cualquier empleado del destinatario, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere. Sería conveniente, no obstante, acoger el criterio aperturista con el que están reguladas las notificaciones administrativas o las comunicaciones notariales y permitir la entrega a cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad, siendo no obstante imprescindible que se consigne la vinculación o relación que le une con el destinatario, de tal forma que permita presumir que la comunicación va a poder llegar a su destinatario.

En cualquier caso, la LEC da por hecho que ese tercero se va a convertir en receptor y que va aceptar voluntariamente la entrega o, al menos, que el mismo tiene un deber legal de ineludible cumplimiento al efecto. En este sentido, existe controversia en la jurisprudencia y en la práctica acerca de la expresión “podrá efectuarse la entrega” del art. 161.3, que se ha llegado a interpretar como una auténtica obligación legal. Para nosotros, sin embargo, es necesaria la voluntariedad de la recepción y que el tercero se preste a la entrega. El precepto solo pretende dotar de la misma validez procesal a una comunicación que por su naturaleza ha de ser dirigida a su destinatario y no a intermediarios ni terceros totalmente extraños al litigio, pero que por la propia dinámica del sistema y para no abocarlo al colapso se hace necesario darles esa intervención puntual. Por eso elige el verbo “poder”, pero no como sinónimo de “deber”, sino de “permitir” o de “caber”, es decir, que es procesalmente “posible”. Así las cosas, el error puede ser considerable si no se interpreta adecuadamente que la previsión “podrá efectuarse la entrega a...” significa únicamente que no será nulo o ineficaz desde el punto de vista procesal entenderse con persona distinta del destinatario. De ningún modo habilita por sí misma para obligar a ese tercero que no quiere o no debe hacerse cargo de dicha entrega y convertirse automáticamente con ello en receptor de la comunicación. La práctica ‘in situ’ demuestra que obligar a los terceros crea enfrentamientos absolutamente innecesarios. Si la ley no obliga al propio destinatario de la comunicación, auténtico interesado en la misma, a que se haga cargo de ella, y teniendo en cuenta que desde el año 2010 ya ni siquiera se le advierte ni se le amonesta, resulta absurdo y excesivo imponer por la fuerza dicha obligación a quienes nada tienen que ver con el proceso judicial.

– XXIII –

Otro problema o irregularidad que puede advertirse en la práctica y en la jurisprudencia al aplicar el art. 161 se refiere al indebido tratamiento del rehúse de

la comunicación. Si es el propio destinatario el que rechaza la comunicación, la misma se tendrá a todos los efectos por efectuada, pues así lo dispone taxativamente el art. 161.2. El problema reside en que se incurre con mucha frecuencia en el error (grave, según nuestro parecer) de extender dicha consecuencia a los supuestos del art. 161.3, pues no solamente sucede que el apartado 2º del art. 161 está previsto para cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio, mientras que el apartado 3º lo es para cuando no se encontrare allí, sino que, como se puede apreciar de la lectura conjunta de ambos apartados, el único supuesto en que se puede “hacer saber” que la cédula o la copia de la resolución queda a su disposición en la Oficina judicial, entendiéndose positivo el trámite aunque se rehúse, es cuando esa persona es la propia destinataria, pero no cuando es un tercero, situación en la que el legislador civil no ha previsto ninguna consecuencia. A pesar de esta clara distinción, hay muchos órganos judiciales que no lo entienden así, otorgando los mismos efectos a la negativa del tercero a recibir la comunicación que a la negativa del propio destinatario, lo cual consideramos absolutamente improcedente.

Por el contrario, la reacción correcta del funcionario o del procurador que se entienda con ese tercero que se niega a recibir la comunicación debería ser, como la de tratar que comprenda la importancia de hacer llegar la comunicación al destinatario, con diplomacia pero sin llegar a la intimidación. Si persiste en su rechazo, entonces le habrá de entregar un aviso de comparecencia comprometiéndole a su posterior entrega a aquel, pero de ningún modo podrá tenerse por efectuada la comunicación al amparo del art. 161.2 como si se estuviese entendiendo con el propio destinatario. No obstante, esta postura habrá de tener su excepción cuando el mismo fuese persona jurídica y el funcionario o procurador se entendiese con persona física representante legal de aquella o con empleado que actúe notoriamente como persona encargada de la recepción o atención al público.

– XXIV –

Cuando en la comunicación por entrega no se encuentre a nadie en el domicilio, el funcionario o procurador habrá de realizar una mínima labor de investigación para saber si aquél vive allí, debiendo preguntar a los vecinos más cercanos o al conserje si lo hubiere, consultando en los buzones o comprobando las señas en la documentación a entregar.

Existe la práctica generalizada de reiterar, al menos una vez, la visita al domicilio para intentar nuevamente la comunicación y de, como mínimo, dejar una “nota informativa de recogida” o un “aviso judicial” en el mismo, soluciones ambas que por ser garantistas y buscar la efectividad de aquellas comunicaciones cuentan con el beneplácito de los tribunales y pueden verse reconocidas en algunas disposiciones de naturaleza reglamentaria. El problema reside en que no existe una regulación con rango de ley sobre este sistema de las reiteraciones de los intentos de entrega domiciliaria y de los avisos judiciales, no teniendo apoyo en ningún precepto de la LEC ni en la LOPJ, de ahí que no existan criterios homogéneos en todos los territorios. El CGPJ otorgó en cierto modo carta de naturaleza a este mo-

do de proceder con su Instrucción 2/2001, relativa a la coordinación entre Juzgados y Tribunales y los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución, pero la misma fue derogada por el vigente Reglamento 2/2010, sobre criterios generales en la actuación de los Servicios Comunes, que nada dice en su lugar al respecto.

En cualquier caso, si de las averiguaciones que hay que hacer en el domicilio resulta que el destinatario sí vive allí, habría que intentar nuevamente la comunicación al menos una vez más, pudiendo ser de inspiración la solución arbitrada en el ámbito de las notificaciones administrativas, donde se reitera el intento una sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes.

En suma, dado que es un instrumento básico que a diario se emplea por doquier, sería deseable que el legislador incorporara al Derecho positivo esta situación de hecho y aprovechara para regularla con más detalle, determinando si hay que reiterar la comunicación domiciliaria y, de ser así, cuántas veces y en qué horario, así como si hay que dejar nota o aviso, el formato y contenido del mismo, en especial las prevenciones legales que procedan, o el lugar y tiempo donde dejarlo expuesto.

– XXV –

Desde su propia redacción originaria y aun constituyendo un gran avance respecto al sistema anterior, la Ley 1/2000 y sus sucesivas reformas han sido el reflejo en muy concretos casos de una cierta resistencia velada del legislador frente al Tribunal Constitucional, promulgando leyes que tratan de agilizar determinados procesos y remover las deficiencias que la experiencia judicial ha ido revelando – ejecución hipotecaria y juicio de desahucio, principalmente –, pero que, al mismo tiempo, y a juicio de aquel órgano constitucional, han supuesto la instauración de algunas disposiciones ‘contra constitutionem’ que, no mucho tiempo después, van a obligar a la ulterior “reforma de la reforma” con la que se termina elevando a Derecho positivo la aplicación e interpretación ‘secundum constitutionem’ de las normas procesales que previamente el mismo ha impuesto a través de sus resoluciones de amparo. El último ejemplo de estos avances y retrocesos, según la posición desde que se observen, es la reciente Ley 19/2015 y la nueva modificación del art. 686 respecto al requerimiento de pago en la ejecución hipotecaria.

De esa tensión dialéctica es fruto el art. 164, aparentemente el precepto de aplicación general que determina los casos en los que procede la comunicación edictal. Ya en su primer párrafo se presenta al mismo tiempo la postura conservadora de acudir a los edictos únicamente ‘in extremis’ y otra intermedia (inciso tercero) de poder acordarlos casi de forma inmediata si un registro público como es el Registro Central de Rebeldes Civiles refleja que al demandado ya se le ha intentando localizar en otro proceso y ha sido declarado rebelde civil; la postura radical de acudir, casi sin más trámites, al tablón de anuncios de la oficina judicial la encontramos en el párrafo cuarto, toda una declaración de fuerza introducida por la Ley 19/2009 para agilizar los procesos de desahucio.

– XXVI –

En sede de **ejecución forzosa**, la novedosa previsión legal de dotar al anuncio en el BOE de la convocatoria de subasta el doble efecto de dar publicidad ‘erga omnes’ a una decisión adoptada por un órgano judicial y, simultáneamente, de poner la misma formalmente en conocimiento de una de las partes del proceso, podrá traer problemas, pese a que desde el punto de vista técnico no cabe reproche alguno y la medida lo único que hace es hacer valer el art. 553, tantas veces olvidado en la práctica, de entender las actuaciones con el ejecutado solamente si se persona en la ejecución. Sin embargo, el anuncio en boletín oficial no deja de ser un acto de comunicación edictal, con su consabido carácter subsidiario. El tiempo dirá si esto se traduce en recursos e incidentes de nulidad de actuaciones en los que se alegue indefensión por la parte ejecutada y si la reforma acaba en el Tribunal Constitucional, si bien ya es posible encontrar juzgados que están tratando de “amortiguar” la reforma interpretando que el nuevo decreto del art. 644 acordando la previa convocatoria de la subasta ha de ser en todo caso notificado al ejecutado y así pueda devenir firme.

– XXVII –

Requisito imprescindible para poder acudir al procedimiento de ejecución especial sobre bienes hipotecados es el de que en la escritura de constitución coste un domicilio que ha de fijar el deudor para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones. Asimismo, para reforzar la protección del acreedor hipotecario y garantizar que el proceso se sustancie lo más rápidamente posible, el cambio de dicho domicilio está sometido a determinadas restricciones. Después de muchos años de discusiones acerca de si se podía o no acudir directamente a la comunicación edictal, la Ley 13/2009 vino a blindar la plena eficacia del domicilio que resulte en el Registro, de tal modo que, intentado sin efecto el requerimiento (de pago) en el mismo, disponía taxativamente que se procediese a ordenar la publicación de edictos. Lo anterior, sin embargo, ha quedado absolutamente mediaticado por la importante STC 122/2013, que podría decirse que contribuye al dismantelamiento del proceso de ejecución hipotecaria, al quedar diluido ese segundo pilar que lo caracteriza –siendo el primero la previa tasación del inmueble– por exigir que se agoten los intentos de localización y comunicación personal con el ejecutado, como finalmente ha terminado por asumir el legislador en la reciente Ley 19/2015.

En consecuencia, en este punto ya no hay diferencias en el procedimiento de ejecución hipotecaria respecto al de ejecución ordinaria, lo que resulta desde el punto de vista procesal hartamente discutible. En el presente trabajo hemos tratado de ofrecer argumentos para evitar esta desnaturalización de ese proceso especial y nos hemos puesto del lado de aquel sector minoritario de la doctrina que apuesta por evitar que las disposiciones de la Ley Hipotecaria y de la LEC relativas al domicilio hipotecario no se conviertan en auténtico papel mojado y se vulnere, entre otros principios, el de seguridad jurídica.

-XXVIII -

En la medida en que la LEC exige practicar el requerimiento de pago hipotecario en el domicilio que figure vigente en el Registro, resulta necesario adelantar el momento procesal en que la certificación de dominio y cargas que establece el art. 688 ha de estar a disposición judicial, debiendo reformarse la ley procesal a fin de que la misma sea aportada de forma preceptiva por el acreedor junto a su demanda ejecutiva.

- XXIX -

En materia de **desahucios**, los actos de comunicación han tenido siempre una gran repercusión, especialmente cuando se refieren a la parte arrendataria demandada. Las reformas emprendidas por el legislador desde la Ley 23/2003 han tratado de agilizar aquellos procesos judiciales destinados a restituir a su propietario en la posesión del bien arrendado, tratando de contribuir a la dinamización del mercado del alquiler, constreñido en España por el dominio de la cultura de la vivienda en propiedad. La Ley 19/2009, con cierta osadía que no mucho tiempo después el Tribunal Constitucional ha censurado en su sentencia n.º 30/2014, modifica el régimen de comunicación edictal en los procesos de desahucio tanto por falta de pago como por expiración del plazo y, en caso de que el arrendatario no sea hallado, bien en el domicilio señalado en el contrato de arrendamiento, bien, en defecto de dicha designación, en el de la propia vivienda o local arrendado, ordena proceder, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Esta reforma era muy necesaria porque ha hecho viable desde entonces poder cumplir los breves plazos que se establecen para practicar los lanzamientos. Sin embargo, aquella resolución del órgano constitucional ha puesto en tela de juicio tantos años tratando de acelerar estos procesos para otorgar tutela judicial a quien a veces se ignora, el arrendador, debiendo ahora tener que volver prácticamente al punto de partida. Si hay que buscar a toda costa al arrendatario que se ha marchado del inmueble, lo más seguro es que los plazos fijados para la práctica del lanzamiento sean insuficientes y haya que suspender los señalamientos.

· Bibliografía consultada ·

- ACHÓN BRUÑÉN, M.^a JOSÉ: “Comentario crítico de las modificaciones introducidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria por la Ley 19/2015, de 13 de julio”, *Diario La Ley*, n.º 8619, 6 de octubre de 2015, La Ley, Madrid, págs. 1-5.
- : *Soluciones a problemas prácticos en las enajenaciones forzosas de bienes embargados e hipotecados*, La Ley, Madrid, noviembre 2014.
 - : “Estudio crítico de la reforma del juicio de desahucio por falta de pago por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler”, *Diario La Ley* n.º 8130, 19 de julio de 2013, La Ley, Madrid.
 - : *Tratado práctico de ejecución forzosa*, Sepin, Madrid, 2012.
 - : “Soluciones para la mejora del procedimiento de ejecución hipotecaria”, *Diario La Ley*, suplemento especial al n.º 7966, 16 de noviembre de 2012, La Ley, Madrid, págs. 4-10.
 - : “Lagunas legales en la regulación del juicio monitorio y soluciones prácticas”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* n.º 702, julio-agosto 2007, págs. 1469-1534.
 - : “Cuestiones prácticas sobre la reclamación de deudas a copropietarios morosos en las comunidades en régimen de propiedad horizontal”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* n.º 684, julio-agosto 2004, aptdo. IV.4 (edición digital vLex ref. 328764).
- ADÁN GARCÍA, M.^a EMILIA: “La ejecución directa de los bienes hipotecados. Un procedimiento de base registral”, *Derecho inmobiliario: problemática actual* (Manuales de Formación continua n.º 50), CGPJ, Madrid, 2009, págs. 803-942.
- ADÁN DOMÈNECH, FEDERIC: “Documentación de la actividad procesal y nulidad de actuaciones”, *Revista General de Derecho Procesal* n.º 30, 2013, Iustel, Madrid, págs. 1-23 (versión digital).
- ALFINT MASSOT, JOSÉ MARÍA: “Registro de la Propiedad y vía de apremio”, *Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 29/1996; Dir.: PEREDA GÁMEZ, FRANCISCO JAVIER), CGPJ, Madrid, 1997, pág. 287-346.

- ALEGRE ÁVILA, JUAN MANUEL: "El aseguramiento de la responsabilidad civil extracontractual de la Administración pública: procedimiento y jurisdicción", *DS: Derecho y Salud*, Vol. 13, n.º 1, 2005, Asociación Juristas de la Salud, Albacete, págs. 1-15.
- ALFINT MASSOT, JOSÉ MARÍA: "Registro de la Propiedad y vía de apremio", *Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 29/1996; Dir.: PEREDA GÁMEZ, FRANCISCO JAVIER), CGPJ, Madrid, 1997, pág. 287-346.
- ÁLVAREZ ÁLVAREZ, HENAR: "El domicilio del deudor en la ejecución hipotecaria", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (RCDI) n.º 684, julio-agosto 2004, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, págs. 1635-1709 (ed. Digital V-Lex, ref. VLEX-328745).
- ÁLVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS, MANUEL: "Los actos de comunicación practicados por procuradores: referencia a la próxima Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00", *ICPM, Revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid* n.º 32, 1º trimestre 2015, págs. 44-53.
- : "Regulación, fecho de notificaciones y resolución de incidencias", *ICPM, revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid* n.º 31, 4º trimestre 2014, págs. 52-57.
 - : "Práctica de los actos de comunicación por procuradores de los tribunales", *ICPM, revista del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid* n.º 14, 3º trimestre 2010, págs. 12-22.
- ARIZA COLMENAREJO, MARÍA JESÚS: "El acto de comunicación entre las funciones de los procuradores", *Boletín del Ministerio de Justicia*, n.º 2149, diciembre 2012 (págs. 1-26, edición digital), Madrid.
- AZNAR LÓPEZ, MARÍA ISABEL: "Actos de comunicación y embargo" (Ponencia impartida en el curso "Macrooficinas judiciales y servicios comunes. Una Visión práctica de los mismos), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º IV, 2002, págs. 511-536.
- BALDASANO SUPERVIELLE, MARÍA ESTHER: "El auxilio judicial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", *Revista General de Derecho*, n.º 676-677, enero-febrero 2001, Valencia, págs. 67-70.
- BARBANCHO TOVILLAS, FRANCISCO JOSÉ: "Artículo 682" y "Artículo 686", *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo III: Artículos 556 a 827, VV.AA. Atelier, Barcelona, 2001.
- BERNABÉU PÉREZ, ISAAC CARLOS: "El requerimiento de pago personal en la ejecución hipotecaria practicado por el procurador ejecutante", *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2010 (págs. 66-67), La Ley, Madrid, 2010.
- : "La necesidad de notificar la subasta en la finca subastada", *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2010 (págs. 68-69), La Ley, Madrid.
- BERNAL LÓPEZ, M^a DEL CARMEN: "Actos de comunicación, auxilio judicial y presentación de escritos en la L.E.C.; pasado, presente y futuro" (Ponencia impartida en las Jornadas "Actos de comunicación: nuevas tecnologías" -2001-), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º VI, 2001, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, págs. 731-764.

- BERNARDO SAN JOSÉ, ALICIA y SÁNCHEZ LÓPEZ, BÁRBARA: "Sección V. Reformas del Libro III de la LEC sobre proceso de ejecución y medidas cautelares, *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, págs., 307-368.
- BOLÓS FARIÑAS, CRISTINA, y IGLESIAS MEJUTO, JESÚS: *Practicum de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cedecs, Rubí (Barcelona), mayo 2002.
- BONET NAVARRO, JOSÉ: "Proceso monitorio con especialidades en materia de propiedad horizontal: Veinte cuestiones polémicas y una perspectiva general previa", *Práctica de Tribunales* n.º 17, junio 2005, La Ley, Madrid (edición digital ref. 1163/2005).
- : "Juicio cambiario: algunas respuestas a demasiadas cuestiones controvertidas", *Revista del Poder de Judicial* n.º 71, CGPJ, Madrid, 2003, págs. 193-231.
 - : "Comentarios al artículo 517", *Proceso Civil Práctico*, Tomo VI (Artículos 517 a 570) (Dir. GIMENO SENDRA, VICENTE), La Ley, Madrid, 2002, págs. 3-27.
- CACHÓN CADENAS, MANUEL: "La ejecución forzosa. Algunos problemas prácticos", *La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000* (Coord.: GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS), Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 295-324.
- : "Jurisdicción, partes y actos procesales", *Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo I (Dir.: BARBANCHO TOVILLAS, FRANCISCO JOSÉ), Estudios de Derecho Judicial n.º 17/1999, CGPJ, Madrid, 2000, págs. 337-392.
- CALAZA LÓPEZ, SONIA: "Principales proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrina del Tribunal Constitucional", *Revista General de Derecho Procesal* n.º 23, año 2011, Iustel, Madrid, págs. 1-36.
- CANCIO FERNÁNDEZ, RAÚL C.: "Auxilio Judicial y Justicia de Paz: Extensión y límites del deber de colaboración en materia de ejecución civil", *Boletín Aranzadi Civil-Mercantil* n.º 52-2003, Pamplona, 2003 (ed. Digital Westlaw ref. BIB 2003\1016).
- : "Los actos de comunicación judicial y la intervención del Secretario en nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", *Revista de Derecho Procesal*, año 2001, n.º 1-3, Edersa, Madrid, págs. 53-77.
- CARBONELL LLORENS, CRISTINA: "La ejecución hipotecaria: Presupuestos y desarrollo del procedimiento hasta la práctica de los correspondientes asientos registrales", *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31/2000) Escuela Judicial, CGPJ, Madrid, 2000, págs. 283-335.
- CARNELUTTI, FRANCESCO: *Cómo se hace un proceso*, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, de la 2ª edición italiana, Temis, Santa Fe de Bogotá (Colombia), 1994.
- CARRASCOSA LÓPEZ, VALENTÍN: "Nuevas Tecnologías en la Oficina judicial", *Revista Universitaria de Derecho Procesal*, 1988, n.º 1, UNED, Madrid, págs. 147-159.
- CARREÑO ARNAL, RICARDO: "Visión crítica de las reformas procesales contenidas en el Proyecto de Ley 121/000021 de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas", *Diario La Ley* n.º 7956, 2 de noviembre de 2012, La Ley, Madrid.

- CARRERAS DEL RINCÓN, JORGE: *Comentarios a la doctrina procesal civil del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El artículo 24 de la Constitución Española. Los derechos fundamentales del justiciable*, Marcial Pons, Madrid, 2002.
- CARRILLO POZO, LUÍS FRANCISCO, y ELVIRA BENAYAS, MARÍA JESÚS: *Instrumentos procesales de la UE. Los reglamentos sobre notificaciones y obtención de pruebas*, Comares, Granada, 2012.
- CASADO ROMÁN, JAVIER: “La notificación edictal en el juicio monitorio”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia* n.º 2003, 15 de diciembre de 2005, Madrid, págs. 5-22.
- CASERO ALONSO, JOSÉ LUÍS: “Principios constitucionales que rigen los actos de comunicación”, *Civil (Volumen II). Recopilación de ponencias y comunicaciones. Planes provinciales y territoriales de formación. Año 1996*, CGPJ, Madrid, 1997, págs. 545-575.
- CASTAÑO SUÁREZ, RAQUEL: “El servicio postal universal”, *Noticias de la Unión Europea* n.º 192, enero de 2001, Cisspraxis, Barcelona-Valencia, págs. 23-30.
- CASTILLO SOLSONA, M. MERCÈ: “Las notificaciones en el Derecho Tributario: análisis del régimen vigente y propuestas de reforma”, *Las notificaciones. Problemas y reformas*, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2008, págs. 45-78.
- CERRADA MORENO, MANUEL: *Actos de comunicación procesal y derechos fundamentales*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012.
- CHÁVES GARCÍA, JOSÉ RAMÓN: “El Tribunal Constitucional respalda las notificaciones por fax”, *Contencioso.es* (‘Blog’ del autor, alias “Sevach”) y mismo dominio (www.contencioso.es).
- CHIOVENDA, GIOVANNI: *Principios de Derecho procesal civil* (traducción española de la tercera edición italiana –*Principii di diritto processuale civile*, 1913–, prólogo y notas de José Casais Santaló), dos tomos, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1977, págs. 257-258.
- COLOM PERPIÑÀ, JORDI: “Las notificaciones en los procesos judiciales con especial referencia al contencioso-administrativo y propuestas de reforma”, *Las notificaciones. Problemas y reformas* (VV.AA.) Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2008, págs. 21-43.
- COMELLAS, MANUEL: “El Cuerpo de Agentes Judiciales”, *Revista de Derecho Procesal*, n.º 3, julio-agosto-septiembre 1946, Madrid, págs. 525-528.
- COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ESPAÑOLA (CNC): *El nuevo marco de regulación del sector postal tradicional en España*, Madrid, 2011, (online: www.cnmc.es).
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: *Estudios, informes y dictámenes (2002)* (dos Tomos), Madrid, 2003.
- : *Libro Blanco de la Justicia*, Madrid, 1997.
- : *Dictámenes y Criterios Gubernativos del Consejo General del Poder Judicial (primera y segunda época)* (edición preparada por PUYOL MONTERO, FRANCISCO JAVIER), Madrid, 1991.
- : *Estudios, informes y dictámenes (1998)* (dos Tomos), Madrid, 1999.
- : *Estudios, informes y dictámenes (1999)* (dos Tomos), Madrid, 2000.
- : *Estudios, informes y dictámenes (2000)* (dos Tomos), Madrid, 2001.

- : *Estudios, informes y dictámenes (2001)* (dos Tomos), Madrid, 2002.
- : *Estudios, informes y dictámenes (2002)* (dos Tomos), Madrid, 2003.
- : *Estudios, informes y dictámenes (2004)*, Madrid, 2005.
- CORDÓN MORENO, FAUSTINO (COORD.): *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Vol. 1, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011.
- CORREA DELCASSO, JUAN PABLO: “Sugerencias para una futura reforma de los artículos 812 a 818 LEC reguladores del proceso monitorio” (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, págs. 857-893.
- CUBILLO LÓPEZ, IGNACIO: “Actuaciones procesales en general”, *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil: propuesta de mejora* (Dir.: UREÑA GUTIÉRREZ, PABLO), Manuales de Formación Continua n.º 29/2004, CGPJ, Madrid, 2005, págs. 23-60.
- : *La regulación de las actuaciones del juicio*, La Ley, Madrid, junio 2001.
- : *La comunicación procesal en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Edersa, Madrid, 2001.
- : “Los actos de comunicación. Estudio de la nueva regulación de la notificación a Procurador” (Ponencia impartida en el Curso “Ley de Enjuiciamiento Civil, 3ª Edición” –2000–), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000, Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid, págs. 293-323.
- CURIEL LÓPEZ, CÁNDIDO: “Notificaciones en general. Funcionario competente para realizarlas”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 684, diciembre 165 (págs. 3-6), Madrid.
- DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ: *La situación de los Juzgados de Paz en Andalucía. Informe especial al Parlamento*, Sevilla, noviembre 2003.
- DE FRUTOS VIRSEDA, FRANCISCO JAVIER: “Los servicios comunes de notificaciones y embargos (nulidad de los actos procesales practicados por los funcionarios destinados en los mismos)”, *Diario La Ley*, 1992, pág. 1072 y ss. (versión digital en www.laleydigital.es; ref. LA LEY 17845/2001), La Ley, Madrid.
- DE LA OLIVA, ANDRÉS (con FERNÁNDEZ LÓPEZ, MIGUEL): *Derecho procesal civil II*, 4ª ed. (1ª reimpresión), Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996.
- DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA y OLIVER CUELLO, RAFAEL: *Las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*, IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), Bilbao, 2006.
- DE LA RÚA NAVARRO, ALICIA M.ª: “La ejecución hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, págs. 505-562.
- DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, YOLANDA: “IV. El incidente de nulidad de actuaciones” (Capítulo Quinto), *Los recursos en el proceso laboral* (VV.AA.; Coord.: CAVAS MARTÍNEZ, FAUSTINO), Laborum, Murcia, 2010, págs. 227-246.
- : *La tutela jurisdiccional civil de los intereses de consumidores y usuarios*, Edisofer, Madrid, 2005.

DE ROSA TORNER, FERNANDO: “La modernización de la Justicia y la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías (RdNT)*, n.º 28, enero-abril 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 109-117.

–: “Las nuevas tecnologías al servicio de la administración de justicia”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías (RdNT)*, n.º 22, 2010-1, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 19-32.

DÍAZ FIEIRAS, M.ª JOSÉ: “Actos de comunicación procesales”, *Procuradores* n.º 88, octubre 2010 (págs. 30-33), Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de España (CGPE), Madrid.

DÍEZ NÚÑEZ, JOSÉ JAVIER: “Artículo 9”, *Propiedad Horizontal*, Tomo I, Manuales de Formación Continua, n.º 45/2007, CGPJ, 2008, Madrid, págs. 659-854.

DOMÍNGUEZ ESQUIVEL, J. AMADOR: *Procesos Operativos de Correos. Temario. Volumen I* (Oposiciones Personal Laboral Fijo), Editorial Mad, Sevilla, 2005.

ESCRIBANO MORA, FERNANDO (COORD.): *El proceso civil*, vol. II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001 (edición digital en Tirant online).

ESPINIELLA MENÉNDEZ, ÁNGEL: “El lugar de entrega de la cédula de emplazamiento a sociedades con domicilio fuera de España. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 162/2002, de 16 de septiembre”, *Diario La Ley* n.º 5687, 31 de diciembre de 2002 (versión digital en www.laleydigital.es), La Ley, Madrid.

FENECH NAVARRO, MIGUEL, *Derecho procesal penal*, tomo I, Barcelona, 1952.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ, y DEL CASTILLO VÁZQUEZ, ISABEL-CECILIA: “*Manual de las Notificaciones Administrativas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2004.

FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO, JAVIER ÁNGEL: “La averiguación del domicilio del demandado para la práctica de los actos de comunicación”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 2139, febrero de 2012, Madrid.

FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ ARTURO: “Los expedientes de dominio. Problemas más habituales que se plantean en la praxis”, *Civil (volumen II). Recopilación de ponencias y comunicaciones. Planes provinciales y territoriales de formación año 1996*, CGPJ, Madrid, 1997, págs. 737-758.

FERNÁNDEZ GOYA, IVÁN: “De los Oficiales de Sala a los Gestores Procesales: aproximación histórica y perspectivas de futuro del nuevo cuerpo tras la Ley Orgánica 19/2003”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 2172, noviembre de 2014, Madrid.

FERNÁNDEZ MONTALVO, RAFAEL, y XIOL RÍOS, JUAN ANTONIO: *Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal* [Ley 10/1992], Tirant lo Blanch, Valencia, 1992.

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS, y SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO: *Derecho internacional privado*, 7ª ed, Civitas, Cizur Menor, agosto 2013.

FERRER GUTIÉRREZ, ANTONIO: *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada*, tomo II, Sepin, 2000.

- FRANCO ARIAS, JUST: "Algunas consideraciones sobre el apremio de bienes inmuebles", *Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 29/1996; Dir.: PEREDA GÁMEZ, FRANCISCO JAVIER), CGPJ, Madrid, 1997, págs. 87-13.
- FUENTES TOMÁS, PILAR: "Praxis en la puesta en práctica del art. 152.1.2 LEC para optimizar los actos de comunicación", *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2011 (págs. 18-30), La Ley, Madrid.
- FUENTES TOMÁS, PILAR: "La ejecución de los actos de comunicación por el procurador (Tras la reforma de la LEC de noviembre de 2009. Artículos 152, 161.2 y 161.5)", *Práctica de Tribunales* n.º 70, abril 2010 (págs. 6-23), La Ley, Madrid.
- FURQUET MONASTERIO, NOELIA: *Las comunicaciones procesales*, Atelier, Barcelona, 2005.
- GAMERO CASADO, EDUARDO, *Notificaciones telemáticas*, Bosch, Barcelona, enero 2005.
- GARBERÍ LLOBREGAT, JOSÉ: *Derecho procesal civil II*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 2012.
- GARCÍA-GALÁN SAN JOSÉ, M.ª JOSÉ: "El juicio cambiario" (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, págs. 895-915.
- GARCÍA LUBÉN BARTHE, PALOMA: "Sección II. Reformas del Libro I de la LEC sobre disposiciones relativas a los juicios civiles (II): Artículos 129 a 247 LEC", *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, págs. 169-225.
- GASCÓN INCHAUSTI, FERNANDO: "Artículo 149" y "Artículo 160", *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo I: Artículo 1 a 280, VV.AA. Atelier, Barcelona, 2001, págs. 633-642 y 675-678.
- GIL SÁEZ, JOSÉ MARÍA: "La situación de rebeldía en el proceso civil", *Cuestiones de Derecho procesal civil (Juicio de rebeldía. Terminación anormal del proceso. Recursos)* (Dir. GIL SÁEZ, JOSÉ MARÍA), Cuadernos de Derecho Judicial n.º 30/1995, CGPJ, Madrid, mayo 1995, págs. 11-36.
- GIMENO SENDRA, VICENTE: *Introducción al Derecho procesal*, 5ª ed., Colex, Madrid, 2007.
- GÓMEZ AMIGO, LUÍS: "La introducción del proceso monitorio en el sistema procesal español", *Actualidad Civil*, Sección, Sección Doctrina, 1999, Ref. LIX, pág. 1175, tomo 4, Editorial LA LEY, Madrid (LA LEY 2347/2001).
- GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUÍS: "Comentarios prácticos a los arts. 812 a 818 del Capítulo I del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil: del proceso monitorio", *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, págs. 385-438.
- GÓMEZ SALCEDO, AGUSTÍN: "Ejecución hipotecaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Problemas prácticos (Comunicación)", *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44-2003, Dir.: LÓPEZ LÓPEZ y ALEGRET BURGÚES), CGPJ, Madrid, 2004, págs. 843-856.
- GONZÁLEZ CRESPO, MIGUEL ÁNGEL: "Los actos de comunicación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil" (Ponencia impartida en el Curso "Ley de Enjuiciamiento Civil, 1ª Edición", -2000-), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000 (págs. 209-239), Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid.

- GONZÁLEZ MORALES, ALBERTO: “Las costas y su tasación en juicio cambiario sin oposición ni pago”, revista *La Toga* (Colegio de Abogados de Sevilla) n.º 187, enero-abril 2013, págs. 49-50.
- GONZÁLEZ GRANDA, PIEDAD: “Tomo I. Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas procesales”, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (5 tomos; Coord.: CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN, y MORENO CATENA, VÍCTOR) Tecnos, Madrid, 2000, 367 páginas.
- GONZÁLEZ SALGADO, JOSÉ ANTONIO: “El lenguaje jurídico del siglo XXI”, *Diario La Ley* n.º 7209, 2 de julio de 2009, La Ley, Madrid, págs. 1-6.
- GRANIZO GARCÍA CUENCA, JOSÉ LUÍS: “Los principios constitucionales de contradicción, audiencia y defensa en el proceso civil. En especial los actos de comunicación de las partes y del órgano judicial”, *Principios constitucionales en el proceso civil* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 22/1992), CGPJ, Madrid (págs. 157-237).
- GUASP DELGADO, JAIME: *Derecho procesal civil*, Tomo I, 3ª ed. corregida, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1973.
- GUASP DELGADO, JAIME, y ARAGONESES ALONSO, PEDRO: *Derecho procesal civil, Tomo I, Introducción, parte general y procesos declarativos*, 6ª ed., Civitas, Madrid, julio 2003.
- GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, FAUSTINO: *La Administración de Justicia digitalizada. Una necesidad inaplazable*, Ediciones Experiencia, Barcelona, julio 2008.
- GUERRA VIDAL, JAVIER DANIEL: “El Agente judicial en la Administración de Justicia española”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, n.º 1874, agosto 2000, págs. 5-17.
- GUTIÉRREZ CARBONELL, MIGUEL: “Artículo 166” [“Artículos 149 a 177”] (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo II (Artículos 99 a 205) (Dir. GIMENO SENDRA, VICENTE), La Ley, Madrid, 2002.
- : “Artículos 149 a 177” (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo II (Artículos 99 a 205), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, págs. 427-673.
- : “Artículos 206 a 216” (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo III (Artículos 206 a 280), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, págs. 15-40”.
- GUZMÁN FLUJA, VICENTE CARLOS: “Reflexiones en torno a la ejecución hipotecaria en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil”, *La ejecución civil* (Estudios de derecho judicial n.º 54/2004), epígrafe III, edición digital, código ED0405319, CGPJ, Madrid, (págs. 937-1015).
- HERCÉ QUEMADA, VICENTE: *Derecho procesal penal* (junto con Gómez Orbaneja, Emilio), 10ª ed., Madrid, 1984.
- HERNÁNDEZ LÓPEZ, VIDAL: “La notificación normalizada” (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985] Madrid, 1985, CGPJ, págs. 331-351.
- HERRERO PEREZAGUA, JUAN F.: *La representación y defensa de las partes y las costas en el proceso civil*, La Ley, Madrid, abril 2000, Madrid.
- HUGUET MONFORT, JOSÉ: “El derecho a la identificación del operador y el derecho a la prueba de depósito y entrega de los envíos certificados”, en PETIT LAVALL, Mª VICTORIA (Directora), *Régimen jurídico del sector postal. Comentario a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre*,

del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 169-182.

HURTADO YELO, JUAN JOSÉ: "La diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio cambiario. Posibilidad de levantamiento del embargo", *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º VII, 2001 (págs. 815-857), Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid.

IBARRA SÁNCHEZ, JUAN LUÍS: *Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio*, La Ley, Madrid, 2012.

-: "El decreto del Secretario de admisión de la demanda, citación y emplazamiento a las partes a la vista oral. El requerimiento de pago en la fase monitoria del juicio verbal", *Teoría y práctica de los juicios verbales de desahucio*, La Ley, Madrid, 2012 (edición digital ref. La Ley 5437/2012).

-: "El nuevo y alternativo sistema de las notificaciones en los desahucios sumarios civiles", *Diario La Ley* n.º 7540, 4 de enero de 2011, La Ley, Madrid (edición digital ref. La Ley 1486/2010).

ÍÑIGO FUSTER, ANDRÉS: "Las notificaciones postales", página web *Noticias Jurídicas* (<http://noticias.juridicas.com>), Sección "Artículos doctrinales: Derecho Administrativo", marzo 2002.

JAUME BENNASAR, ANDRÉS: *La validez del documento electrónico y su eficacia procesal*, Lex Nova, Valladolid, 2010.

JUEZ PÉREZ, ANDRÉS: "Identificación gráfica de fincas registrales", *Revista Jurídica de Castilla-La Mancha* n.º 42, septiembre 2007 (págs. 109-129), Toledo.

JULVE GUERRERO, INMACULADA: "Actos de comunicación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El nuevo papel de los procuradores en el proceso" (Ponencia impartida en el Curso "Ley de Enjuiciamiento Civil, 7ª Edición", -2000-), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, n.º V, 2000 (págs. 325-376), Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid.

JÚLVEZ LEÓN, M.ª ÁNGELES: "Los actos de comunicación, Protocolo de actuación" (Ponencia impartida en el Curso "Derecho e informática" -2001-), *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, 2005.

LACALLE SERER, ELENA, y SANMARTÍN ESCRICHE, FERNANDO: *La ejecución civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

LACUEVA BERTOLACCI, RODRIGO: "Aspectos actuales relativos al Procurador de los Tribunales tras la promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil", *Noticias Jurídicas* (<http://noticias.juridicas.com>), Sección "Artículos Doctrinales", abril 2003.

LOBO GARCÍA, ALFONSO: "Notificación de Sentencia a litigante rebelde. Validez de la practicada por cédula (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 13 de noviembre de 1993. Ponente: Excmo. Sr. Don José Almagro Nosete)", *Revista General de Derecho*, n.º 597, junio 1994, Valencia, págs. 6543-6550.

LÓPEZ CHOCARRO, IGNACIO: "El desahucio por falta de pago en la nueva LECiv; un largo y tortuoso camino hacia la ejecución. Incidencia de la reforma contenida en la Ley

- 23/2003", *Actualidad Jurídica Aranzadi* n.º 589 (opinión), Aranzadi, Pamplona, 2003; edición digital ref. BIB 2003\1004.
- LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, TOMÁS & REVERÓN PALENZUELA, BENITO: "Artículos 206 a 216, *Proceso Civil Práctico*, Tomo III (Artículos 206 a 280) (Dir. GIMENO SENDRA, VICENTE), La Ley, Madrid, 2002, págs. 15-40.
- LÓPEZ MERINO, FRANCISCO: *La notificación en el Ordenamiento jurídico español*, 2ª ed., Comares, Granada, 1989.
- LÓPEZ ORELLANA, MANUEL JOSÉ: "El juicio cambiario: procedimiento, recursos y costas", *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, págs. 265-308.
- LUJÁN ALCARÁZ, JOSÉ: "La reforma procesal de 2009-2010 (III): novedades en relación con los actos de comunicación", *Aranzadi Social* n.º 18/2010 (BIB 2009/2122), Aranzadi, Pamplona, 2010.
- MACÍAS, JOSÉ: "Solución al problema del emplazamiento del arrendatario moroso", *Noticias Jurídicas* (www.jurídicas.com), sección "Artículos Doctrinales", diciembre 2009.
- MAGRO SERVET, VICENTE: "El domicilio electrónico como garantía de la agilización de los actos de comunicación entre la Administración pública y los ciudadanos", *Diario La Ley*, n.º 8131, 22 de julio de 2013, Madrid, págs. 9-15.
- : "Ejecución de actos de comunicación por correo, telegrama u otros medios semejantes incluidos los tecnológicos: hacia la creación de la figura de los notificadores de la administración en general", *Práctica de Tribunales* n.º 80, marzo 2011 (págs. 48-54), La Ley, Madrid.
 - : "Alcance de la exigencia del art. 686 LEC de llevar a cabo el requerimiento en el inmueble hipotecado. Posibilidades de llevarlo a cabo en otro domicilio si es real del deudor. STC 28/2010, de 27 de abril de 2010", *Práctica de Tribunales* n.º 75, octubre 2010 (edic. digital, ref. La Ley 12199/2010), La Ley, Madrid.
 - : "Actos de comunicación y procuradores: reformas de la LEC por LO 19/2003 y futura Oficina Judicial", *Sepin Proceso Civil, Cuadernos jurídicos*, n.º 92, marzo-abril 2009, Sepin, Madrid, págs. 15-21.
 - : "Análisis de la reforma de la LEC en la Ley 41/2007. Las tecnologías y los actos de comunicación", *Diario La Ley* n.º 6862 (págs. 1-5), 16 de enero de 2008, La Ley, Madrid.
 - : "Análisis de la doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales sobre el juicio cambiario", *Diario La Ley* n.º 6304, 27 de julio de 2005, La Ley, Madrid, págs. 1-12.
 - : "El domicilio del deudor en el proceso monitorio. ¿Puede realizarse el requerimiento por edictos?", *Sepin Propiedad Horizontal* n.º 217, septiembre 2001, Sepin, Madrid, págs. 13-25.
- MAGRO SERVET, VICENTE (COORD.): *Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 4ª ed., La Ley, Madrid, 2010.
- MANRESA Y NAVARRO, JOSÉ MARÍA: *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento Civil* (6 tomos), Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1881-1891.

- MANRIQUE CABRERO, JOSÉ CARLOS: "El régimen de los actos de comunicación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", *Revista General de Derecho*, n.º 673-674, octubre-noviembre 2000, Valencia, págs. 12743-12751.
- MARES ROGER, FRANCISCO: "Los actos de comunicación judicial en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (perspectivas de práctica forense)", *Diario La Ley* n.º 5282 (parte I, págs. 1-8) y n.º 5283 (parte II, págs. 1-8), 4 y 5 de abril de 2001, La Ley, Madrid.
- MARTÍ MARTÍ, JOAQUÍN: "Desahucio por precario contra el movimiento «ocupa»", *Diario La Ley* n.º 6446, 22 de marzo de 2006, La Ley, Madrid, págs. 1-4.
- MARTÍ MINGARRO, LUÍS: "Los actos de comunicación y el auxilio judicial", *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985] Madrid, 1985, CGPJ, págs. 273-290.
- MARTÍN DE LA LEONA, JOSÉ MARÍA: "Capítulo X. De la nulidad de las actuaciones judiciales" (comentarios), *Proceso Civil Práctico*, Tomo III (Artículos 206 a 280) (Dir. GIMENO SENDRA, VICENTE), La Ley, Madrid, 2002, págs. 367-534.
- MARTÍNEZ DE SANTOS, ALBERTO: *Sobre la ejecución hipotecaria ¿Puede evitarse la ruina del ejecutado?*, Ed. Foro Jurídico, Valencia, 2013.
- : *Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución civil*, La Ley, Madrid, 2010.
- MARTÍN OSTOS, JOSÉ DE LOS SANTOS: "El fedatario judicial en la justicia civil", *Diario La Ley* n.º 6442, 16 de marzo de 2006, La Ley, Madrid, págs. 1-9.
- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: *Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas*, Madrid, enero 2014.
- MINISTERIO DE JUSTICIA: "Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil / Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial", *BIMJ*, suplemento al n.º 1832, de 01.11.1998, 343 págs. Madrid.
- MONTERO AROCA, JUAN: *Tratado de proceso de ejecución civil* (2 tomos), 2ª ed., Tirant, Valencia, 2013 (versión digital en www.tirantonline.com).
- : *Ejecución de la hipoteca inmobiliaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012 (versión digital en www.tirantonline.com).
- : *Proceso (civil y penal) y Garantía. El proceso como garantía de libertad y de responsabilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- : *Las ejecuciones hipotecarias en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001.
- : "Apartado 4.º: Representación y defensa por procurador y abogado", *La reforma de los procesos civiles (Comentario a la Ley 10/1992, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal)* (Coord.: MONTERO AROCA), Civitas, Madrid, 1993, págs. 65-74.
- MONTERO AROCA, JUAN, y FLORS MATÍES, JOSÉ: *Tratado de Juicio Verbal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003.
- MONTES REYES: "Jurisdicción voluntaria" (Tema 59), *Conceptos básicos de Derecho procesal civil* (Dir.: ROBLES GARZÓN), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2013, págs. 701-709.

- MONTÓN REDONDO, ALBERTO: “El respeto a derechos y garantías constitucionales en la regulación de los actos procesales por la LEC/2000”, *La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000* –Coord.: GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS–, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 45-59.
- MONTSERRAT MOLINA, PEDRO EUGENIO: “Particularidades de los actos de comunicación en la LEC, tras las reformas de la LO 1/2009 y Ley 13/2009”, *Práctica de Tribunales* n.º 70, abril 2010, La Ley, Madrid, reproducido en *Diario La Ley*, n.º 7394, 4 de mayo de 2010, La Ley, Madrid.
- MORENO CATENA, VÍCTOR: “Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La postulación procesal: Arts. 23 a 30 LEC”, *InDret, Revista para el análisis del Derecho*, n.º 305, Barcelona, octubre 2005, edición digital, 44 páginas.
- : “Artículo 28”, *La Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplicación práctica* (Dir.: CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN, y MORENO CATENA, VÍCTOR), Vol. I, Tecnos, Madrid, 2004, págs. 191-194.
- MOYA GARRIDO, ANTONIO: “Doctrina constitucional sobre emplazamientos y valoración legal de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los recursos de amparo”, *Revista jurídica de Catalunya*, 1988, n.º 1, págs. 209-230.
- MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: *Derecho Penal. Parte Especial*, 19ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO: *Servicio público y mercado. II: Las telecomunicaciones*, Civitas, enero 1998, Madrid.
- NAVARRO SANCHÍS, JUAN ANTONIO: “Especialidades de la ejecución hipotecaria”, *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º III-2002 (págs. 249-284), Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid.
- ORTEGA SÁNCHEZ, EUGENIO FÉLIX: “Los actos de comunicación judicial a través del Servicio de Correos”, *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, Año 1980, n.º 1, Madrid, págs. 271-278.
- ORTELLS RAMOS, MANUEL (DIR.): *Derecho Procesal Civil*, 8ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008.
- ORTIZ CRUZ, FRANCISCA: “La notificación personal: análisis del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Problemas prácticos”, *Diario La Ley* n.º 5833, 28 de julio de 2003 (págs. 1-3), La Ley, Madrid.
- ORTIZ DE ZÚÑIGA, MANUEL: *Práctica general forense. Tratado que comprende la constitución y atribuciones de todos los tribunales y juzgados y los procedimientos judiciales* (7ª edición corregida y arreglada a la nueva legislación por Carlos de Sanjuán y Bouvier), Imprenta de José Rodríguez, Madrid, 1874.
- OTEROS FERNÁNDEZ, MANUEL: “Aspectos procesales del expediente de dominio”, *Derecho y Opinión* n.º 6, Departamento de Disciplinas Histórico-Jurídicas y Económico Sociales, Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba, 1998, págs. 355-366.
- PASCUAL BROTONS, CRISTINA CAROLINA: “¿Existe la notificación personal”, *Proceso civil. Cuadernos Jurídicos*, n.º 119, 2º trimestre 2015, Sepin, Madrid, págs. 12-19.

- PASTOR LÓPEZ, MIGUEL: "Orígenes, desarrollo y alcance de la Ley de Enjuiciamiento Civil" (Ponencia), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [por Ley 34/1984; celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985], CGPJ, Madrid, 1985, págs. 1-44.
- PAZ-ÁRES, CÁNDIDO: "Lección 10. Las sociedades mercantiles", *Lecciones de Derecho Mercantil* (Coord.: MENÉNDEZ, AURELIO), 3ª ed. (págs. 229-247), Thomson-Civitas (Aranzadi), Cizur Menor, Navarra, 2005.
- PEDRAZ PENALVA, ERNESTO: "Comentario al art. 660", *Proceso Civil Práctico*, Tomo VIII (Artículos 634 a 747), Dir. GIMENO SENDRA, La Ley, Madrid, 2002, págs. 193-195; ídem, "Comentarios al artículo 663", págs. 215-217; "Comentarios al artículo 667", págs. 237-238. "Comentarios al artículo 670", págs. 247-254.
- PELAYO TORRENT, RAMÓN: "¿Pueden vulnerar los "protocolos de funcionamiento" del sistema LexNet lo dispuesto, respecto al cómputo de plazos procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Civil", *Revista Aranzadi Doctrinal* (RAD) n.º 2, mayo 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pág. 133-144.
- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, AGUSTÍN-JESÚS: "El tratamiento de la rebeldía del actor en el Borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (especial consideración de los artículos 499 a 503 del Borrador)", *Revista General del Derecho*, n.º 644, mayo 1998, Valencia, págs. 5319-5337.
- PÉREZ RAMOS, JUAN MANUEL: "Admisión de la demanda y requerimiento al demandado. El acto de comunicación", Ponencia del Curso *Derecho procesal civil. Desahucio, regulación, procedimiento y peculiaridades*, 2ª ed., Centro de Estudios Jurídicos, 2013 (38 págs.).
- PICÓ I JUNOY, JOAN: "La interpretación judicial de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", *Diario La Ley*, n.º 5568, 18 de junio de 2002, Madrid, págs. 1-11.
- : "Los requisitos constitucionales del emplazamiento edictal y la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (especial atención al proceso monitorio)", *Revista jurídica de Catalunya*, 2000, n.º 3, págs. 85-105 (721-741)
- : *Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, Barcelona, 1997.
- PONS VIVES, ALBERTO: "Capítulo Primero. Derecho orgánico", *La actuación de la Policía Judicial en el proceso penal* (Coord.: MARTÍN GARCÍA, PEDRO), Marcial Pons, Madrid, 2006, pág. 11-25.
- PINEDA GUERRERO, M.ª ÁNGELES: "Régimen de comunicaciones de la existencia del proceso de ejecución y subasta de bienes inmuebles", *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 1956-57, 15 de enero de 2004, Madrid, págs. 7-19.
- PRADO ARDITTO, JUAN-FERMÍN: "La notificación de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en la nueva LOPJ", *Justicia* 86, n.º I, Bosch, Barcelona, 1986, págs. 81-98. Artículo también publicado en *Segundas Jornadas sobre la Fe Pública Judicial*. Alicante, 7-9 de abril de 1986, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, págs. 235-251.
- : "Los actos de comunicación y el auxilio judicial" (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [por Ley 34/1984; celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985], CGPJ, Madrid, 1985, págs. 291-319.

PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, LEONARDO: *Sistema de Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1989.

—: *Cuestiones de Derecho procesal*, Reus, Madrid, 1947.

PUEBLA POVEDANO, ANTONIO: “El procedimiento de apremio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31/2000) Escuela Judicial, CGPJ, Madrid, 2000, págs. 337-395.

PUGNAIRE HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL: *Términos y plazos en los procesos civiles*, Bosch, Barcelona, 1992.

PULIDO BEGINES, JUAN LUÍS: “La liberalización del sector postal en España”, *Régimen jurídico del sector postal. Comentario a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal* (Dir. PETIT LAVALL, M.ª VICTORIA), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 24 a 80 (versión digital ref. TOL 2.383.727).

RAMÓN CHORNET, JUAN CARLOS: “La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva LEC 2000”, *La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Estudios de Derecho Judicial n.º 31-2000, CGPJ, Madrid, págs. 397-505.

REGO BLANCO, M.ª DOLORES: “Capítulo VIII. Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales”, *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio* (Coord.: GAMERO CASADO, EDUARDO, y VALERO TORRIJOS, JULIÁN) Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 335-381

REVILLA PÉREZ, LUÍS: “Los actos de comunicación en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales* n.º V, 2000 (págs. 241-292), Centro de Estudios Jurídicos (Mº de Justicia), Madrid.

RICHARD GONZÁLEZ, MANUEL: “Los procesos de la nueva Ley de Propiedad Horizontal”, *Revista General del Derecho* n.º 661-662, octubre-noviembre 1999, Valencia, págs. 12399-12418.

ROBLES GARZÓN, JUAN ANTONIO (DIR.-COORD.): *Conceptos básicos de Derecho Procesal Civil*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2013.

RODRÍGUEZ CARBAJO, JOSÉ RAMÓN: “El Tribunal Supremo ya dispone, al fin, de un número único de fax para la presentación de escritos”, *Actualidad Administrativa* n.º 3, 1-15 febrero 2012 [La Ley 24406/2011], La Ley, Madrid.

RODRÍGUEZ MERINO, ABELARDO: “Artículos 149 a 177”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Dir.: LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA), Tomo I, Lex Nova, Valladolid, 2ª ed., noviembre 2000, págs. 986-1129.

RODRÍGUEZ PARADA, ANA ISABEL: “Registro de la Propiedad y proceso de ejecución”, Ponencia del curso “El proceso de ejecución”, Vigo, 2 a 5 de junio de 2009”?, CGPJ.

RODRÍGUEZ RIVERA, FRANCISCO ENRIQUE: “Funciones de los secretarios judiciales y del resto de Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tras la entrada en

- vigor de la Ley Orgánica 19/2003, que modifica a la Ley Orgánica del poder judicial", *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 1963 (págs. 5-29), Madrid, 2004.
- RODRÍGUEZ Y GONZÁLEZ DEL REAL, CONCEPCIÓN: "La rebeldía en el proceso civil" (Comunicación), *Cuestiones de Derecho procesal civil (Juicio de rebeldía. Terminación anormal del proceso. Recursos)* (Dir. GIL SÁEZ, JOSÉ MARÍA), Cuadernos de Derecho Judicial n.º 30/1995, CGPJ, Madrid, mayo 1995, págs. 451-471.
- ROIG VALDIVIESO, JOSÉ LUÍS: "Las actuaciones judiciales. Actuaciones y caducidad de la instancia. Lugar, tiempo y forma. Fe pública judicial y documentación de las actuaciones. Actos de comunicación y auxilio judicial. Resoluciones judiciales y diligencias de ordenación", Ponencia dentro del curso del CEJ "Presupuestos, actos procesales, recursos y ejecución en la LEC 1/2000" (2001). *Centro de Estudios Jurídicos*.
- ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, ÁNGEL: "Lección 4. El Registro Mercantil", *Lecciones de Derecho Mercantil* (obra colectiva coordinada por MENÉNDEZ, AURELIO), 3ª ed. (págs. 91-112), Thomson-Civitas (Aranzadi), Cizur Menor, Navarra, 2005.
- RUIZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL, y DE LUCCHI LÓPEZ TAPIA, YOLANDA: "El debido tratamiento de las ejecuciones hipotecarias a la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE", *Diario La Ley* n.º 8139, 2 de septiembre de 2013, págs. 1-9.
- SALÓM ESCRIVÁ, JUAN-SALVADOR: "La oposición por defectos procesales a la ejecución de títulos extrajudiciales; motivos, sustanciación y efectos", *Ejecución judicial de títulos extrajudiciales. Juicio cambiario y monitorio* (Estudios de Derecho Judicial n.º 69/2005 (Dir.: SOLAZ SOLAZ, ESTÉBAN), CGPJ y Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Madrid, 2005, págs. 101-264.
- SÁNCER PELEGRINA, JOSÉ ANTONIO: "La ejecución hipotecaria sobre bienes inmuebles en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", *Boletín de Información del Ministerio de Justicia* n.º 1932-33, enero 2003, Madrid, págs. 7-40.
- SÁNCHEZ CARRIÓN, JOAQUÍN LUIS: "Significación actual e incidencia en el proceso de la indefensión jurídico-constitucional", *Revista del Poder Judicial* n.º 45, Primer trimestre 1997, CGPJ, Madrid, págs. 291-303 (Colección Digital 2008, código PJ 9704510).
- SÁNCHEZ LÓPEZ, BÁRBARA: "Sección I. Reformas del Libro I de la LEC sobre disposiciones relativas a los juicios civiles (I): Artículos 1 a 128 LEC", *Guía práctica de la nueva Oficina Judicial* (Coord.: BANACLOCHE PALAO, JULIO), La Ley, mayo 2010, págs. 115-168.
- SÁNCHEZ MELGAR, JULIÁN: "Constitución y proceso civil", *Amparo judicial. Jurisprudencia constitucional práctica: laboral, penal, civil y contencioso-administrativa* (Dir. GABALDÓN LÓPEZ, JOSÉ), Cuadernos de Derecho Judicial n.º XXVII/1994, CGPJ, Madrid, septiembre 1994, págs. 161-229.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RICARDO: Artículos 260 a 283, *Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia* (DIR.: ALBÁCAR LÓPEZ, JOSÉ LUÍS), Tomo I (Introducción. Artículos 1 a 459), Trivium, Madrid, 1994.
- SANZ ACOSTA, LUÍS AURELIO: "Juicio cambiario. Problemática en su aplicación" (ponencia), *Problemas procesales del juicio cambiario* (Cuadernos Digitales de Formación) (versión digital, 42 págs.), CGPJ, Madrid, 2010.

- SEOANE CACHARRÓN, JESÚS: “El Secretario judicial como sujeto activo de los actos de comunicación” (Comunicación), *Jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil* [celebradas los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985], CGPJ, Madrid, 1985, págs. 321-329.
- SERRANO PATIÑO, ALBERTO: “Breve análisis de los Actos de Comunicación Judicial en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero”, *Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid* n.º 22, septiembre 2005, edición digital en www.madrid.org.
- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.: *Informe Anual del Grupo Correos 2013*, Madrid, 2014.
- SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO JOSÉ: “La actividad del órgano judicial ante la interpretación de los principios constitucionales del proceso civil”, *Revista jurídica de Catalunya*, 1995, n.º 3, págs. 145-162 (730-746).
- SINDIC: *Estudio sobre las notificaciones en el procedimiento sancionador en materia de tráfico*, Barcelona, 2012.
- TORIBIOS FUENTES, FERNANDO: *Averiguación de bienes en la ejecución civil. Manual para la práctica de la investigación patrimonial del deudor*, La Ley, Madrid, 2013.
- TORRES YANES, FRANCISCO: “Comunicaciones judiciales civiles mediante entrega por funcionario o procurador. Problemas prácticos que plantea el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, *Boletín del Ministerio de Justicia* n.º 2164, marzo 2014, Madrid.
- UCEDA OJEDA, JUAN: “Artículo 667”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tomo III: Artículos 556 a 827, VV.AA. Atelier, Barcelona, 2001.
- VALENCIA MIRÓN, ANTONIO JOSÉ, “Artículo 28”, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil* (Dir.: LORCA NAVARRETE, ANTONIO MARÍA), Lex Nova, Valladolid, 2ª. ed., noviembre 2000, págs. 318-324.
- VALERO CANALES: “El expediente de dominio. Presente y futuro”, *Noticias Jurídicas* (www.juridicas.com), sección “Artículos Doctrinales”, noviembre de 2010.
- VEGAS TORRES, JAIME: *El reembargo*, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004.
- : “La ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales* (con DE LA OLIVA, A., y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.), 2ª ed., Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002, págs. 293-315.
- VERGÉ GRAU, JOAN: *La rebeldía en el proceso civil*, Bosch, 1989.
- VILA RODRÍGUEZ, JOSÉ PEDRO: “Los actos de comunicación judicial”, *Disposiciones generales relativas a los juicios civiles en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cuadernos de Derecho Judicial, I-2000, (DIR.: Díez-PICAZO GIMÉNEZ, IGNACIO), Madrid, CGPJ, 2000, págs. 195-217.
- VILATA MENADAS, SALVADOR: “Actuaciones procesales: términos y plazos. Presentación de escritos y traslado de copias. Actos de comunicación. Documentación” (comunicación), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia* (Estudios de Derecho Judicial n.º 44/2003), Madrid, CGPJ, 2004, págs. 129-151.

VILLAMOR MONTORO, PEDRO ROQUE: "Publicidad registral y el procedimiento de apremio sobre inmuebles (Comunicación)", *Derecho Hipotecario* (Cuadernos de Derecho Judicial n.º 38/1994), CGPJ, Madrid, 1995, págs. 925-938.

WIK-CONSULT: *Principales desarrollos en el Sector Postal (2004-2006)* (2006).

YÉLAMOS BAYARRI, ESTELA: "¿Ha aclarado la LEC 2000 cuáles son las vías excepcionales de que dispone el justiciable para atacar la nulidad de una notificación y en qué casos optar por una u otra?", *Justicia 2007, Revista de derecho procesal*, números 3-4, Bosch, Barcelona, 2008, págs. 52-55.

-: *Nulidad procesal y comunicaciones judiciales fallidas*, Atelier, Barcelona, 2006.

ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, LUIS: "La Ley de Enjuiciamiento Civil: Un folletón por entregas", *Procesos de familia. Aspectos dudosos: soluciones e interpretaciones* (VV.AA) (Asociación Española de Abogados de Familia), Dykinson, Madrid, 2003, págs. 15-33.

OBRAS COLECTIVAS

VVAA (Coord: JIMÉNEZ CONDE, FERNANDO): *Ley de Enjuiciamiento Civil: Respuestas a 100 cuestiones polémicas*, Sepin, Madrid, 2002.

VV.AA.: *Memento Práctico Procesal Francis Lefebvre 2010*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2010.

VV.AA.: ALBÁCAR LÓPEZ, JOSÉ LUÍS -DIR.-: *Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia*, Tomo I (Introducción. Artículos 1 a 459), Trivium, Madrid, 1994.

VV.AA.: ALMAGRO NOSETE, JOSÉ; GIMENO SENDRA, VICENTE; CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN; MORENO CATENA, VÍCTOR: *Derecho procesal*, Tomo I (Vol. I), Parte General Proceso civil (1), 6ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992.

VV.AA.: ALMENAR BELENGUER, MANUEL -COORD.-: *Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles*, Madrid, 2012.

VV.AA.: BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL; BENDALA GARCÍA, ROSA; CARMENA CASTRILLO, MANUELA: *Claves para la gestión de la nueva oficina judicial*, Ministerio de Justicia-El Derecho, Madrid, noviembre 2005.

VV.AA.: COLOM PERPIÑÀ, JORDI; CASTILLO SOLSONA, M. MERCÈ; OLAÑETA FERNÁNDEZ-GRANDE, RAFAEL; CASES PALLARÈS, JORDI: *Las notificaciones. Problemas y reformas*, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona 2008.

VV.AA.: DE LA OLIVA SANTOS, ANDRÉS; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, IGNACIO; VEGAS TORRES, JAIME: *Curso de Derecho procesal civil, I, Parte General*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2012.

VV.AA.: GARBERÍ LLOBREGAT, JOSÉ -DIR.-; MORENILLA ALLARD, PABLO; BUITRÓN RAMÍREZ, GUADALUPE: *Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). Jurisprudencia aplicable y legislación complementaria*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 2000.

VV.AA.: NICASIO JARAMILLO, ISABEL M.ª; NÚÑEZ BOLAÑOS, MARÍA; PIZARRO MORENO, EUGENIO: "El emplazamiento edictal en el juicio de desahucio tras la STC 30/2014, de 24 de febrero", *Diario La Ley* n.º 8327, 6 de junio de 2014, La Ley, Madrid.

VV.AA.: MONTERO AROCA, JUAN; GÓMEZ COLOMER, JUAN LUÍS; MONTÓN REDONDO, ALBERTO; BARONA VILAR, SILVIA, *Derecho jurisdiccional*, Tomo I, Parte General, 10ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

VV.AA.: “Encuesta jurídica: ¿Puede la junta acordar que las citaciones y notificaciones de la comunidad se hagan en el extranjero sin necesidad de fijar domicilio en España, como señala el art. 9.1 h) LPH?” (Coord.: MARINA MARTÍNEZ-PARDO, JESÚS), *Sepin Propiedad Horizontal* n.º 255, febrero 2005 (SP/DOCT/2348), Sepin, Madrid, págs. 4-11.

VV.AA.: “Encuesta jurídica: “Deben notificarse la preparación e interposición del recurso de apelación al rebelde en la instancia?”, *SepinNet revista enjuiciamiento civil*, n.º 76, julio-agosto 2007, págs. 4-9. De los seis magistrados encuestados, cinco de ellos respondieron en sentido negativo aplicando.

ANEXO A
JURISPRUDENCIA CITADA

1.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

STJUE de 26.04.2012

STJUE de 15.06.2012

STJUE de 14.03.2013

STJUE de 29.10.2015

2.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 41/1981, de 18.12

STC 83/1983, de 21.10

STC 114/1986, de 02.10

STC 39/1987, de 03.04

STC 123/1989, de 06.07

STC 184/1989, de 06.11

STC 196/1989, de 27.11

STC 211/1989, de 19.12

STC 48/1990, de 20.03

STC 242/1991, de 16.12

STC 9/1992, de 16.01

STC 22/1992, de 14.02

STC 17/1992, de 19.02

STC 165/1998, de 14.07

STC 34/1999, de 22.03

STC 65/1999, de 26.04

STC 219/1999, de 29.11

STC 7/2000, de 17.01

STC 39/2000, de 14.02

STC 268/2000, de 13. 11

STC 113/2001, de 07.05

STC 199/2002, de 28.10

STC 55/2003, de 24.03

STC 67/2003, de 09.04

STC 78/2003, de 28.04

STC 87/2003, de 19.05

STC 191/2003, de 27.10

STC 40/2005, de 28.02

STC 117/2005, de 09.05

STC 38/2006, de 13.02

STC 61/2010, de 18.10

STC 122/2013, de 20.05

STC 197/2013, de 02.12

STC 131/2014, de 21.07

3.- TRIBUNAL SUPREMO

SALA 1ª, DE LO CIVIL

STS 08.04.1980

STS 03.04.1987

STS 30.01.1993

STS 17.05.1993

STS 08.07.1994

STS 11.10.1994

STS 26.04.1996

STS 05.06.1996

STS 04.07.1996

STS 05.11.1996

STS 25.10.1997

STS 26.05.1998

STS 04.10.1999

STS 15.06.2000

STS 16.06.2005

STS 10.03.2010

SALA 2ª, DE LO PENAL

STS 15.03.1991

STS 05.11.1996

SALA 3ª, DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

STS 12.12.1997

STS 22.03.2002

STS 17.02.2004

STS 08.06.2004

STS 20.07.2012

STS 25.05.2014

STS 09.06.2014

4.- TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

STSJ Madrid (C-Advo) (Secc. 3ª) 17.12.2004

STSJ Cataluña (Social) (Secc. 1ª) 20.06.2012

STSJ Cataluña (Social) (Secc. 1ª) 14.01.2013

STSJ Galicia (C-Advo.) (Secc. 1ª) 24.04.2013

STSJ Castilla-La Mancha (C-Advo.) (Secc. 2ª) 15.07.2013

STSJ Cataluña (C-Advo.) (Secc. 1ª) 13.05.2014

STSJ Cataluña (C-Advo.) (Secc. 3ª) de 22.05.2014

5.- AUDIENCIAS PROVINCIALES

AAP A Coruña (Secc. 5ª) 25.06.2010

SAP A Coruña (Secc. 5ª) 28.02.2012

SAP A Coruña (Secc. 4ª) 14.03.2013

AAP Álava (Secc. 1ª) 21.09.2010

SAP Albacete (Secc. 2ª) 24.09.2009

SAP Albacete (Secc. 2ª) 24.09.2009

AAP Albacete (Secc. 2ª) 17.05.2011

SAP Alicante (Secc. 6ª) 26.07.2012

SAP Alicante (Secc. 5ª) 28.02.2013

SAP Alicante (Secc. 5ª) 29.04.2014

AAP Almería (Secc. 1ª) 02.03.2011

AAP Almería (Secc. 1ª), 28.01.2014

SAP Ávila (Secc. 1ª) 01.09.2005

SAP Ávila (Secc. 1ª) 19.02.2009

AAP Tarragona (Secc. 3ª) 30.07.2009

SAP Badajoz (Secc. 3ª) 29.07.2012

SAP Badajoz (Secc. 3ª) 15.07.2014

SAP Baleares (Secc. 5ª) 17.07.2002

SAP Baleares (Secc. 5ª), 13.07.2004

AAP Barcelona (Secc. 18ª) 14.01.2005

SAP Barcelona (Secc. 13ª) 14.03.2005

AAP Barcelona (Secc. 1ª) 18.07.2008

AAP Barcelona (Secc. 13ª) 11.03.2009

SAP Barcelona (Secc. 13ª) 14.09.2010

SAP Barcelona (Secc. 1ª) 13.02.2012

AAP Barcelona (Secc. 1ª) 17.09.2012

SAP Barcelona (Secc. 19ª) 13.03.2013

SAP Barcelona (Secc. 4ª) 15.03.2013

AAP Bilbao (Secc. 3ª) 23.06.2006

SAP Burgos (Secc. 1ª) 31.03.2004

SAP Burgos (Secc. 3ª) 20.04.2012

SAP Burgos (Secc. 2ª) 19.06.2013

SAP Cáceres (Secc. 1ª) 03.02.2012

AAP Cádiz (Secc. 2ª), 02.02.2009

AAP Cádiz (Secc. 8ª) 11.02.2009

SAP Cádiz (Secc. 1ª) 22.04.2000

SAP Cádiz (Secc. 8ª) 14.11.2011

AAP Cádiz (Secc. 5ª) 17.01.2012

SAP Cádiz (Secc. 7ª) 07.03.2013

AAP Girona (Secc. 1ª) 20.09.2010

AAP Girona (Secc. 1ª) 17.11.2010

SAP Girona (Secc. 1ª) 09.01.2014

SAP Granada (Secc. 3ª) 11.09.2009

SAP Guadalajara (Secc. 1ª) 19.03.2013

AAP Huelva (Secc. 3ª) 30.09.2009

AAP Huelva (Secc. 3ª) 25.05.2012

AAP Jaén (Secc. 2ª) 31.03.2008

AAP Jaén (Secc. 2ª) 27.06.2012

SAP La Rioja (Secc. 1ª) 16.02.2004

SAP La Rioja (Secc. 1ª) 06.02.2012

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª) 04.07.2005

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª) 19.02.2009

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 29.01.2010

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 22.02.2013

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª) 28.02.2013

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª) 09.04.2014

AAP León (Secc. 1ª) 30.04.2008

AAP León (Secc. 2ª) 18.06.2010

SAP León (Secc. 1ª) 05.07.2013

SAP Lugo (Secc. 1ª) 14.12.2009

SAP Madrid (Secc. 20ª) 18.06.2001

AAP Madrid (Secc. 12ª) 05.04.2006

SAP Madrid (Secc. 10ª) 20.07.2006

SAP Madrid (Secc. 14ª) 22.07.2008

SAP Madrid (Secc. 10ª) 17.09.2009

SAP Madrid (Secc. 18ª) 26.04.2010

SAP Madrid (Secc. 21ª) 04.05.2010

SAP Madrid (Secc. 20ª) 09.12.2010

AAP Madrid (Secc. 18ª) 14.02.2011

AAP Madrid (Secc. 12ª) 29.09.2011

SAP Madrid (Secc. 8ª) 13.02.2012

AAP Madrid (Secc. 13ª) 30.03.2012

SAP Madrid (Secc. 12ª) 11.07.2012

SAP Madrid (Secc. 20ª) 26.12.2012

AAP Madrid (Secc. 14ª) 11.01.2013

SAP Madrid (Secc. 18ª) 15.01.2013

SAP Madrid (Secc. 20ª) 22.01.2013

SAP Madrid (Secc. 21) 26.02.2013

SAP Madrid (Secc. 11ª) 21.04.2014

SAP Madrid (Secc. 21ª) 17.06.2014
SAP Madrid (Secc. 13ª) 17.09.2014
SAP Madrid (Sec. 21ª) 10.03.2015
SAP Madrid (Sec. 11ª) 06.04.2015

SAP Málaga (Secc. 6ª) 10.03.2000
SAP Málaga (Secc. 6ª) 22.04.2010
SAP Málaga (Secc. 6ª) 09.02.2011

SAP Murcia (Secc. 4ª) 10.06.2010

SAP Ourense (Secc. 1ª) 18.06.2010

AAP Oviedo (Secc. 4ª) 19.07.2010

SAP Palma de Mallorca (Secc. 4ª) 15.06.2010

AAP Pontevedra (Secc. 1ª) 23.11.2006
SAP Pontevedra (Secc. 1ª) 28.01.2013
SAP Pontevedra (Secc. 1ª) 28.02.2013

AAP S. C. de Tenerife (Secc.4ª) 05.12.2007
AAP S. C. de Tenerife (Secc. 4ª) 16.01.2008
SAP S. C. de Tenerife (Secc.1ª) 09.06.2008
SAP S. C. de Tenerife (Secc. 3ª) 17.01.2012
SAP S. C. de Tenerife (Secc. 1ª) 11.04.2014

SAP Sevilla (Secc. 5ª) 12.09.2007
AAP Sevilla (Secc. 2ª) 15.11.2011
AAP Sevilla (Secc. 2ª) 15.02.2012
AAP Sevilla (Secc. 5ª) 21.03.2012
AAP Sevilla (Secc. 6ª) 18.12.2012

SAP Toledo (Secc. 1ª) 16.12.1998
AAP Toledo (Secc. 2ª) 26.04.2011

SAP Valencia (Secc. 11ª) 10.10.2005
AAP Valencia (Secc. 7ª) 15.04.2008
SAP Valencia (Secc. 9ª) 28.07.2009
SAP Valencia (Secc. 11ª) 07.12.2010
SAP Valencia (Secc. 9ª) 28.05.2012
SAP Valencia (Secc. 7ª) 11.12.2012
SAP Valencia (Secc. 6ª) 18.01.2013
SAP Valencia (Secc. 9ª) 08.05.2013

SAP Vizcaya (Secc. 4ª) 16.02.2010
SAP Vizcaya (Secc. 4ª) 29.09.2011
SAP Vizcaya (Secc. 3ª) 20.06.2013

AAP Zamora (Secc. 1ª) 30.09.2010

SAP Zamora (Secc. 1ª) 28.09.2011

AAP Zaragoza (Secc. 4ª) 11.10.2007

AAP Zaragoza (Secc. 5ª) 24.02.2012

ANEXO B

**PROPUESTA ESENCIAL DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
EN MATERIA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN**

TEXTO ACTUAL	PROPUESTA DE REFORMA (en negrita y subrayado)
<p>Artículo 28. <i>Representación pasiva del procurador.</i></p> <p>1. Mientras se halle vigente el poder, el procurador oír y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.</p> <p>2. [...] 3. [...]</p> <p>4. Se exceptúan de lo establecido en los apartados anteriores los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona.</p>	<p>1. Mientras se halle vigente el poder, el procurador oír y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste, <u>salvo cuando así lo acuerde expresamente el tribunal.</u></p> <p><u>4- [Se suprime]</u></p>
<p>Artículo 58. <i>Apreciación de oficio de la competencia territorial.</i></p> <p>Quando la competencia territorial viniere fijada por reglas imperativas, el Secretario judicial examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandan-</p>	<p>[p1] Quando la competencia territorial viniere fijada por reglas imperativas, el <u>Ltrado de la Administración de Justicia</u> examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente, <u>con emplazamiento a aquellas partes para que en el plazo de diez días se personen</u></p>

<p>te, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos.</p>	<p><u>ante el mismo.</u> [p2] Si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos.</p>
--	--

<p>Artículo 133. Cómputo de los plazos.</p> <p>1. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.</p> <p>No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.</p>	<p>Artículo 133. Cómputo de los plazos. <u>Momento de producción de efectos.</u></p> <p><i>[traslado del art. 151.2 y 3 como nuevos párrafo 2 y 3]</i></p> <p><u>2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.</u></p> <p><u>3.</u> Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comuni-</p>
--	---

Artículo 149. *Clases de actos de comunicación.*

6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

6.º Oficios, para las comunicaciones con **otras administraciones y autoridades**, **con** funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior **y con otros**

	<u>órganos judiciales, salvo para el supuesto del ordinal siguiente.</u> <u>7.º Exhortos, para solicitar el auxilio de otros órganos judiciales en la práctica de las actuaciones que así lo requieran.</u>
--	--

<p>Artículo 150. <i>Notificación de resoluciones y diligencias de ordenación.</i></p> <p>1. Las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso.</p> <p>2. Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.</p> <p>3. También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.</p>	<p>Artículo 150. <i>Notificación de <u>las resoluciones procesales a las partes personadas diligencias de ordenación. Comunicaciones con terceras personas.</u></i></p> <p>(Rúbrica alternativa 2: <u>Destinatarios de los actos de comunicación</u>)</p> <p>1. Las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte <u>debidamente personada</u> en el proceso.</p> <p><u>Se exceptúan de la anterior regla, debiéndose notificar en todo caso:</u></p> <p>a) <u>Las resoluciones de admisión a trámite de las demandas y peticiones.</u></p> <p>b) <u>Las resoluciones que pongan fin al proceso.</u></p> <p>c) <u>Aquellas otras resoluciones dictadas durante el curso del proceso en que así se establezca expresamente en esta Ley.</u></p> <p>2. Por disposición del Tribunal, también se <u>comunicará</u> la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.</p> <p>3. También se harán <u>notificaciones y otras comunicaciones</u> a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.</p> <p><u>4. Las comunicaciones previstas en este artículo se practicarán mediante remisión.</u></p>
--	---

<p>Artículo 151. <i>Tiempo de la comunicación.</i></p> <p>1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.</p>	<p>Artículo 151. <i><u>Plazo para la práctica de los actos de comunicación.</u></i></p> <p>1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán <u>a las partes personadas</u> en el plazo máximo de tres días desde fecha o publicación.</p>
--	--

<p>2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.</p> <p>3. Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento.</p>	<p><u>En el mismo plazo habrán de remitirse para su práctica el resto de actos de comunicación.</u></p> <p>[2. Se traslada íntegro al art. 133, nuevo párrafo 2]</p> <p>[3. Se traslada íntegro al art. 133, nuevo párrafo 3]</p>
---	--

<p>Artículo 152. Forma de los actos de comunicación. Respuesta.</p> <p>1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:</p> <p>1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.</p> <p>2.º El procurador de la parte que lo solicite.</p> <p>A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que todos</p>	<p>1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del <u>Letrado de la Administración de Justicia</u>, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se ejecutarán por:</p> <p>1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.</p> <p>2.º El procurador de la parte que lo solicite, <u>a su costa</u>.</p>
---	--

los actos de comunicación se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el secretario judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación conforme a la nueva petición.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

2. Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia **o documento electrónico** quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia **o instrumento electrónico** quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.

El destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:

1.^a A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.

2.^a Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

A título complementario, el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán **únicamente** para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, **pero no para la práctica de notificaciones**. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta ley:

1.^a Mediante remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio técnico en los términos previstos en los artículo 160 y 162 de esta ley.

Las anteriores comunicaciones se realizarán a través de procurador cuando se dirijan a quienes estén personados en el proceso con representación de aquel.

La remisión se efectuará, en todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.

3.^a Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.

4.^a En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.

4. En la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

5. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.

2.^a **Mediante entrega por parte de funcionario judicial o procurador al propio destinatario o a terceros receptores en los casos y condiciones que establece el artículo 161 de esta ley.**

3.º Mediante edictos, cuando así lo disponga expresamente esta ley.

4. En las cédulas se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el tribunal o **Letrado de la Administración de Justicia** que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación, o emplazamiento **o requerimiento**, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento **o el requerimiento**, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.

5. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.

Si el requerimiento se practicase a través del procurador de la parte requerida, podrá consignar aquella respuesta por escrito, una vez instruido por la misma, en el plazo de cinco días.

Artículo 155. *Actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador. Domicilio.*

1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.

2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso.

Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión

1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador **y salvo en los supuestos previstos en el artículo 161**, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. ~~En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.~~

2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso.

Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, **todos aquellos lugares que conozca**, indicando el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante [...].

3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio **cualquier lugar en que el demandado pueda ser hallado**.

para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.

4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158.

5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la Oficina judicial.

Asimismo deberán comunicar los

Si la demanda se dirigiese [...].

4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador **y no se tratase de las comunicaciones a que se refiere el artículo 161**, las efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, **en los designados expresamente por las partes o en los que en una ocasión anterior hubiera resultado hábiles**, surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario, **computándose en ese caso los eventuales plazos procesales a partir de la fecha que se haya consignado en el acuse o diligencia acreditativa del intento de comunicación**.

~~No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 161.~~

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la Oficina judicial.

Artículo 156. *Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio.*

1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155.

Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.

2. En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiese tenerse acceso.

3. Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado 1 resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación de la segunda forma establecida en el apartado 2 del artículo 152, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 158.

4. Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Secretario judicial ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos.

1. En los casos en que el demandante manifestare **motivadamente** que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155.

Al recibir estas comunicaciones [...].

Artículo 157. *Registro Central de Rebellones Civiles.*

1. Cuando las averiguaciones a las que se refiere el artículo anterior hubieren resultado infructuosas, el Secretario judi-

Artículo 157. ~~Registro Central de Rebellones Civiles.~~ [SE SUPRIME Y SE CAMBIA DE TÍTULO Y CONTENIDO] Artículo 157 Efectividad del domicilio señalado por las partes (*)

cial ordenará que se comunique el nombre del demandado y los demás datos de identidad al Registro Central de Rebeldes Civiles, que existirá con sede en el Ministerio de Justicia, con indicación de la fecha de la resolución de comunicación edictal del demandado para proceder a su inscripción.

2. Cualquier Secretario judicial que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso, mediante diligencia de ordenación, podrá acordar directamente la comunicación edictal del demandado.

3. Cualquier órgano judicial, a instancia del interesado o por iniciativa propia, que tuviera conocimiento del domicilio de una persona que figure inscrita en el Registro Central de Rebeldes Civiles deberá solicitar la cancelación de la inscripción comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales. El Registro remitirá a las Oficinas judiciales en que conste que existe proceso contra dicho demandado, el domicilio indicado por éste a efecto de comunicaciones, resultando válidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio.

4. Con independencia de lo anterior, cualquier Tribunal que necesite conocer el domicilio actual del demandado en un procedimiento, que se encuentre en ignorado paradero con posterioridad a la fase de personación, podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para que se practique la oportuna anotación tendente a que le sea facilitado el domicilio donde puedan dirigírsele las comunicaciones judiciales si este dato llegara a conocimiento del citado Registro.

Salvo disposición expresa, se tendrá como domicilio, físico o telemático, de las partes el que las mismas hayan hechos constar a efectos de notificaciones al tiempo de personarse en el procedimiento o en escrito o comparecencia posterior en el órgano judicial.

Dicho domicilio y los datos de localización facilitados por las mismas con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones y resto de comunicaciones en ellos intentadas sin efecto, serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. A tales efectos, bastará la simple comparecencia del interesado.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares.

Las anteriores prevenciones se realizarán expresamente a las partes en la primera comunicación que acuerde el órgano judicial.

(* Inspirado en el art. 53.2 LJS, que se transpone con cambios)

Artículo 158. *Comunicación mediante entrega.*

Cuando, en los casos del apartado 1 del

Artículo 158. *Comunicación mediante entrega [queda sin contenido por traslado al art. 161]*

artículo 155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161.	
---	--

<p>Artículo 159. <i>Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio.</i></p> <p>1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 160. La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo 156. Estas comunicaciones serán diligenciadas por el procurador de la parte que las haya propuesto, si así lo hubiera solicitado.</p> <p>2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicación mediante remisión o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el Secretario judicial ordenará que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161.</p> <p>3. Las personas a que se refiere este artículo deberán comunicar a la Oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la primera comparecencia que efectúen se les informará de esta obligación.</p>	<p>1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él o tener conocimiento de su existencia, se remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 160. La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada o conste en las actuaciones, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo 156.</p> <p>3. Las personas a que se refiere este artículo deberán comunicar a la Oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la primera comunicación que se le practique se les advertirá de esta obligación.</p>
--	---

<p>Artículo 160. <i>Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes.</i></p> <p>1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio</p>	<p>1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que</p>
--	---

semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el Secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido éste a la comunicación.

2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del artículo 155.

3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado 1, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito.

La cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.

permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la **comunicación**, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el **Letrado de la Administración de Justicia** dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido éste a la comunicación.

[+nuevo párr. 2º] **Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo** [importado del art. 166p4 LECRIM].

2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse que la remisión se haga de manera simultánea **o sucesiva** a varios lugares ~~de los previstos en el apartado 3 del artículo 155,~~ **surtiendo en esos casos efectos procesales la primera de las comunicaciones en que se cumplan las formalidades del apartado anterior.**

Artículo 161. *Comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o de cédula.*

1. La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución.

La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar.

2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o procurador que asuma su práctica le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos

Artículo 161. *Comunicación mediante entrega personal por funcionario judicial o procurador.*

1. No tratándose de partes representadas por procurador, se procederá a la práctica de los actos de comunicación conforme a lo dispuesto en este artículo cuando el objeto de los mismos sea alguno de los siguientes:

a) Emplazamiento o citación que tenga por finalidad la personación en juicio o la intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales.

b) Requerimientos, cuando así lo estime necesario el Letrado de la Administración de Justicia.

c) Notificación de la sentencia que ponga fin al proceso.

d) Cualquier otra comunicación en que así lo prevea expresamente esta Ley.

2. La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en **dependencias judiciales** o, en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, **o en cualquier otro lugar donde la misma fuere hallada.**

La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la efectúe y por **el destinatario** a quien se haga, cuyo nombre **y datos de identidad** se harán constar.

2. Cuando el **propio** destinatario de la comunicación ~~sea hallado en el domicilio y~~ se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o procurador que asuma su práctica le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, **advirtiéndole expresamente que la comunicación se entenderá de todos modos entregada y que producirá sus efectos,** de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

4. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación **hubiese sido designado por el propio destinatario o su representante ante el órgano judicial,** o

fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiéndole al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndole en todo caso al receptor de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella, con las mismas advertencias del párrafo anterior.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

fuere el lugar en el que el **mismo** tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje **de la finca o Comunidad de Propietarios**, si lo tuviere, **siempre que medie el consentimiento de estas personas**, advirtiéndole al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiéndole en todo caso ~~al receptor~~ de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo ~~no ocasional~~ del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se podrá efectuar a persona **de su entorno laboral** que manifieste conocer a aquél **y que acepte comprometerse a su entrega** o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella, con las mismas advertencias del párrafo anterior.

En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre **y datos de identidad del tercero receptor** que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación del **mismo** con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

Si la persona distinta del destinatario se negara a la recepción, se le entregará el aviso dirigido a aquel a que se refiere el apartado siguiente, advirtiéndole de su obligación de entregarlo al mismo. Si aquella rehusara también dicho aviso, este se dejará, de ser posible, el buzón o puerta del domicilio. Todas las anteriores circunstancias deberán ser consig-

4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el secretario judicial, funcionario o procurador, procurará averiguar si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación, procediéndose a la realización del acto de comunicación en el domicilio facilitado.

nadas en la diligencia negativa que se extenderá al efecto.

La anterior previsión no será de aplicación en el caso de destinatario persona jurídica, en que se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo cuando el funcionario o procurador se entienda con el representante legal de la misma o con empleado que actúe notoriamente como persona encargada de la recepción o atención al público.

4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el ~~secretario judicial~~, funcionario o procurador, procurará averiguar si vive **o trabaja** allí su destinatario, **actuando seguidamente del siguiente modo:**

a) Si por signos externos o por ser informado por tercero averiguara que vive o trabaja allí, le dejará aviso en el buzón o, si no lo hubiere, debajo de la puerta del domicilio, a fin de que en plazo máximo de tres días acuda a la sede del servicio, órgano judicial o despacho profesional, según corresponda, a fin de poder practicar el acto de comunicación.

Transcurrido el plazo indicado sin que el destinatario haya atendido el aviso judicial, se intentará nuevamente la comunicación en el domicilio por una sola vez a la mayor brevedad posible, dejando, de resultar infructuosa la diligencia, un segundo y último aviso con apercibimiento al destinatario de que, de no comparecer, se devolverá la comunicación al órgano judicial, pudiendo ocasionarle los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.

b) Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación, procediéndose a la realización del acto de comunicación en el domicilio facilitado a la mayor brevedad por el propio funcionario o procurador, si aquel radicare en el mismo término municipal que el anterior. En otro caso,

<p>Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 156.</p>	<p><u>previa devolución de lo actuado al órgano judicial, éste acordará, en su caso, acudir al auxilio judicial.</u></p> <p>c) Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, <u>se extenderá diligencia negativa en el órgano judicial, este</u> procederá, <u>en su caso</u>, de conformidad con lo establecido en el artículo 156.</p>
---	--

<p>Artículo 163. Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación.</p> <p>En las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse por la Oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado así la parte a la que represente.</p>	<p>En las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación practicará los actos de comunicación <u>domiciliarios</u> que hayan de realizarse por la Oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado así la parte a la que represente.</p>
--	---

<p>Artículo 166. Nulidad y subsanación de los actos de comunicación.</p> <p>1. Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y pudieren causar indefensión.</p> <p>2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de la ley.</p>	<p>Artículo 166. <u>Anulabilidad</u> y subsanación de los actos de comunicación.</p> <p>1. Serán <u>anulables</u> los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y <u>hubieren causado</u> indefensión.</p> <p><u>Se entenderá que ha habido indefensión cuando hubiere precluido para el destinatario la oportunidad de realizar actos procesales por causas no sido imputables al mismo.</u></p>
--	--

<p>Artículo 227. Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales.</p> <p>1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos</p>	
---	--

procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.

2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin a proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

2. Sin perjuicio de ello, **los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin a proceso**, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

En todo caso, dicha declaración se efectuará de oficio cuando se aprecie que el perjudicado, por causas no imputables al mismo, no tuvo oportunidad de denunciar la nulidad en el momento procesal oportuno.

Artículo 447. Sentencia. Ausencia de cosa juzgada en casos especiales.

1. Practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieran representadas por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias de condena por allanamiento a

1. Practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, en otro caso, las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará sentencia dentro de los **diez** días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales de desahucio ~~en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del Tribunal para recibir la notificación el sexto día de finalizado el juicio. Lo dispuesto no será de aplicación si las partes hubieren comparecido con procurador, en cuyo caso la notificación se realizará a través de dicho profesional en el tiempo y forma ordinarios.~~

Sin perjuicio [...]

<p>que se refieren los apartados 3 de los artículos 437 y 440, en previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite.</p> <p>2. [...] 3. [...] 4. [...]</p>	
---	--

<p>Artículo 497. Régimen de notificaciones.</p> <p>1. [...]</p> <p>2. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado personalmente, en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley. Pero si el demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará publicando un extracto de la misma por medio de edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado.</p> <p>Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación, en recurso extraordinario por infracción procesal o en casación.</p> <p>Quando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.</p> <p>3. No será necesaria la publicación de edictos en el "Boletín Oficial" de la Comu-</p>	<p>2. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado personalmente, en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley. Pero si el demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará publicando un extracto de la misma por medio de edicto, que se publicará, <u>además de en la sede judicial electrónica</u>, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma <u>o Ciudad Autónoma del último domicilio conocido del destinatario</u>, o en el Boletín Oficial del Estado, <u>a elección del actor</u>.</p> <p>Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación, en recurso extraordinario por infracción procesal o en casación.</p> <p>Quando se trate de sentencia condenatoria de desahucio <u>o de decreto poniendo fin al mismo por incomparecencia del demandado requerido en forma</u>, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de <u>una u otra resolución en la sede judicial electrónica</u>. <u>No obstante, copia de dicha resolución será entregada al demandado al tiempo de ejecutar el lanzamiento</u>.</p> <p>3. No será necesaria la publicación de edictos en el "Boletín Oficial" de la Comunidad Autónoma o en el "Boletín Oficial del</p>
---	--

<p>nidad Autónoma o en el "Boletín Oficial del Estado" en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada y en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.</p> <p>4. [...].</p>	<p>Estado" en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada.</p>
<p>Artículo 498. <i>Comunicación de la existencia del proceso al demandado rebelde citado o emplazado por edictos.</i></p> <p>Al demandado rebelde que, por carecer de domicilio conocido o hallarse en ignorado paradero, hubiese sido citado o emplazado para personarse mediante edictos, se le comunicará la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación.</p>	<p>Al demandado rebelde que, por carecer de domicilio conocido o hallarse en ignorado paradero, hubiese sido citado o emplazado para personarse mediante edictos, se le comunicará <u>de oficio</u> la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación.</p>
<p>Artículo 500. <i>Ejercicio por el demandado rebelde de los recursos ordinarios.</i></p> <p>El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia, sólo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el extraordinario por infracción procesal o el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.</p> <p>Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido notificada personalmente la sentencia, pero en este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, por los medios telemáticos, informáticos o electrónicos a que se refiere el apartado 2 del artículo 497 de esta ley o del modo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.</p>	<p>El demandado [...]</p> <p>Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido notificada personalmente la sentencia, pero en este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado <u>o</u> Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma <u>o Ciudad Autónoma o Boletín Oficial de la Provincia</u> o, en su caso, por los medios telemáticos, informáticos o electrónicos a que se refiere el apartado 2 del artículo 497 de esta ley o del modo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.</p>

Artículo 541. Ejecución en bienes gananciales.

1. No se despachará ejecución frente a la comunidad de gananciales.

2. Cuando la ejecución se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución podrá fundarse en las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado la ejecución. Cuando la oposición se funde en esta última causa, corresponderá al acreedor probar la responsabilidad de los bienes gananciales. Si no se acreditara esta responsabilidad, el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad conyugal conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. [...] 4. [...].

2. Cuando la ejecución se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución y del decreto de medidas ejecutivas a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la ejecución. La oposición a la ejecución [...].

Artículo 553. Notificación.

El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

1. El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, ~~entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.~~

2. En el auto referido se advertirá expresamente al ejecutado que solo en el caso de que se persone en legal forma se entenderán con él las ulteriores actuaciones y que, de no hacerlo, no se llevará a cabo ninguna otra comunicación, excepto la notificación de la resolución que

	<u>ponga fin al proceso de ejecución o de aquellas otras en que así se disponga expresamente en este Libro.</u>
--	--

Artículo 639. *Actuación del perito designado e intervención de las partes y de los acreedores posteriores en la tasación.*

1. El nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida.

2. El perito entregará la valoración de los bienes embargados al Tribunal en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del encargo. Solo por causas justificadas, que el Secretario judicial señalará mediante decreto, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración.

3. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 666.

4. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 658 podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el Secretario judicial, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante decreto, la valoración definitiva a efectos de la ejecución.

La resolución dictada por el Secretario judicial será susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución.

4. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo **659 que se hubieren personado** podrán presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el Secretario judicial, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante decreto, la valoración definitiva a efectos de la ejecución.

La resolución [...].

<p>Artículo 644. <i>Convocatoria de la subasta.</i></p> <p>Una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el Secretario judicial, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta.</p> <p>La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del Secretario judicial.</p>	<p>1. Una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles embargados, el <u>Letrado de la Administración de Justicia</u>, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta.</p> <p><u>Dicha resolución se notificará al ejecutado no personado por simple remisión al domicilio que del mismo conste en las actuaciones o en el título ejecutivo no procesal, o, en caso de ejecución hipotecaria, en el domicilio que conste en el Registro.</u></p> <p>2. La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del <u>Letrado de la Administración de Justicia</u>.</p>
<p>Artículo 645. <i>Anuncio y publicidad de la subasta.</i></p> <p>1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la subasta se anunciará en el “Boletín Oficial del Estado”, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado. El Secretario judicial ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma telemática, al “Boletín Oficial del Estado”. Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia.</p> <p>Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Secretario judicial responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar.</p>	<p><u>2. En todo caso, a efectos de publicidad a terceros interesados, se fijará edicto por el procurador de la parte ejecutante</u></p>

<p>2. Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, se hubieran generado al ejecutante.</p>	<p><u>en lugar visible del exterior del bien inmueble con la indicación genérica de “inmueble en subasta judicial”, junto a la identificación del órgano ejecutante y mención al Boletín Oficial del Estado y al Portal de Administración de Justicia.</u></p> <p><u>3. Además, a instancia de las partes o de cualquier acreedor posterior al derecho del ejecutante, y si el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar.</u></p> <p><u>4. Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado y así lo hubiera juzgado conveniente el Letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por este concepto, soporte el ejecutante.</u></p> <p><i>[Aptdos. 3 y 4: restitución de la versión dada por Ley 13/2009]</i></p>
--	---

<p>Artículo 659. Titulares de derechos posteriormente inscritos.</p> <p>1. El registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el Registro.</p> <p>2. A los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación de dominio y cargas no se les realizará comunicación alguna, pero, acreditando al Secretario judicial responsable de la ejecución la inscripción de su derecho, se les dará intervención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten.</p>	<p>1. El registrador comunicará <u>el inicio del procedimiento de apremio</u> a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el Registro.</p> <p><u>Si dichos titulares se personaren en el procedimiento en legal forma, se les dará intervención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten.</u></p> <p>2. A los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación de dominio y cargas no se les realizará comunicación alguna, pero, acreditando al Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución la inscripción de su derecho, <u>tendrán las mismas facultades que los titulares del apartado anterior.</u></p>
--	--

<p>ten.</p> <p>3. Cuando los titulares de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, dentro del límite de responsabilidad que resulte del Registro, quedarán subrogados en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho. Se harán constar el pago y la subrogación al margen de la inscripción o anotación del gravamen en que dichos acreedores se subrogan y las de sus créditos o derechos respectivos, mediante la presentación en el Registro del acta notarial de entrega de las cantidades indicadas o del oportuno mandamiento expedido por el Secretario judicial, en su caso.</p>	
--	--

<p>Artículo 661. <i>Comunicación de la ejecución a arrendatarios y a ocupantes de hecho. Publicidad de la situación posesoria.</i></p> <p>1. Cuando, por la manifestación de bienes del ejecutado, por indicación del ejecutante o de cualquier otro modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad de personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el Secretario judicial.</p> <p>En la publicidad de la subasta que se realice en el Portal de Subastas, así como en los medios públicos o privados en su caso, se expresará, con el posible detalle, la situación posesoria del in-</p>	<p>1. Cuando, por la manifestación de bienes del ejecutado, por indicación del ejecutante o de cualquier otro modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad de personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les notificará la existencia de la ejecución <u>y se les requerirá para que</u>, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación, <u>a efectos de que en el anuncio de subasta se pueda expresar la situación posesoria aparente del inmueble, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.</u></p> <p><u>En otro caso, si el inmueble se encontrara desocupado, acreditada</u> cumplidamente esta circunstancia al <u>Letrado de la Administración de Justicia</u> responsable de la ejecución, <u>así se hará constar en el anuncio.</u></p> <p>En la publicidad de la subasta que se realice en el Portal de Subastas, así como en los medios públicos o privados en su caso, se expresará, con el posible detalle, la situación posesoria del inmueble o que, por el</p>
---	--

<p>mueble o que, por el contrario, se encuentra desocupado, si se acreditase cumplidamente esta circunstancia al Secretario judicial responsable de la ejecución.</p> <p>2. El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el Tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos.</p> <p>Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en la publicidad de la subasta.</p>	<p>contrario, se encuentra desocupado, si se acreditase cumplidamente esta circunstancia <u>al Letrado de la Administración de Justicia</u> responsable de la ejecución.</p> <p>2. El ejecutante <u>y cualquier otra persona con interés legítimo persona en las actuaciones</u>, podrán pedir que, antes de anunciarse la subasta, el tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que este se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquellos.</p> <p>Las declaraciones [...].</p>
--	--

<p>Artículo 662. Tercer poseedor.</p> <p>1. Si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercer poseedor, este, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Oficina judicial, lo que se acordará por el Secretario judicial sin paralizar el curso del procedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores.</p> <p>2. [...] . 3. [...].</p>	<p>1. Si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercer poseedor, este, acreditando la inscripción de su título, <u>esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad</u>, podrá pedir que se le exhiban los autos en la propia Oficina judicial, lo que se acordará por el Secretario judicial sin paralizar el curso del procedimiento. <u>Si el tercero se personare en legal forma en el proceso, se entenderán también con él las actuaciones ulteriores.</u></p>
--	--

<p>Artículo 663. Presentación de la titulación de los inmuebles embargados.</p> <p>1. En la misma resolución en que se</p>	<p>1. En la misma resolución en que se man-</p>
---	---

<p>mande expedir certificación de dominio y cargas de los bienes inmuebles embargados, el Secretario judicial podrá, mediante diligencia de ordenación, de oficio o a instancia de parte, requerir al ejecutado para que en el plazo de diez días presente los títulos de propiedad de que disponga, si el bien está inscrito en el Registro.</p> <p>2. Cuando la parte así lo solicite el procurador de la parte ejecutante podrá practicar el requerimiento previsto en el número anterior.</p> <p>La presentación de títulos se comunicará al ejecutante para que manifieste si los encuentra suficientes, o proponga la subsanación de las faltas que en ellos notare.</p>	<p>de expedir certificación de dominio y cargas de los bienes inmuebles embargados, el <u>Letrado de la Administración de Justicia</u> podrá, mediante diligencia de ordenación, de oficio o a instancia de parte, requerir al ejecutado para que en el plazo de diez días presente los títulos de propiedad de que disponga, si el bien está inscrito en el Registro.</p> <p>2. Cuando la parte así lo solicite el procurador de la parte ejecutante podrá practicar el requerimiento previsto en el número anterior.</p> <p>La presentación de títulos [...].</p>
--	--

Artículo 683. *Cambio del domicilio señalado para requerimientos y notificaciones.*

1. El deudor y el hipotecante no deudor podrán cambiar el domicilio que hubieren designado para la práctica de requerimientos y notificaciones, sujetándose a las reglas siguientes:

1.^a Cuando los bienes hipotecados sean inmuebles, no será necesario el consentimiento del acreedor, siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población que se hubiere designado en la escritura, o de cualquier otra que esté enclavada en el término en que radiquen las fincas y que sirva para determinar la competencia del Juzgado.

Para cambiar ese domicilio a punto diferente de los expresados será necesaria la conformidad del acreedor.

2.^a Cuando se trate de hipoteca mobiliaria, el domicilio no podrá ser cambiado sin consentimiento del acreedor.

3.^a En caso de hipoteca naval, bastará con poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio.

En todo caso, será necesario acreditar la notificación fehaciente al acreedor.

2. Los cambios de domicilio a que hace referencia el apartado anterior se harán

1. El deudor y el hipotecante no deudor podrán cambiar el domicilio que hubieren designado para la práctica de requerimientos y notificaciones, sujetándose a las reglas siguientes:

1.^a Cuando los bienes hipotecados sean inmuebles, **podrá cambiarse el domicilio a cualquier otro punto del territorio nacional, bastando en ese caso con poner en conocimiento del acreedor por medio fehaciente el cambio efectuado.**

Para cambiar el domicilio a punto **situado en el extranjero** será necesaria la conformidad del acreedor.

2.^a Cuando se trate de hipoteca mobiliaria, el domicilio no podrá ser cambiado sin consentimiento del acreedor.

3.^a En caso de hipoteca naval, bastará con poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio.

En todo caso, será necesario acreditar la notificación fehaciente al acreedor.

constar en el Registro por nota al margen de la inscripción de hipoteca, bien mediante instancia con firma legitimada o ratificada ante el Registrador, bien mediante instancia presentada telemáticamente en el Registro, garantizada con certificado reconocido de firma electrónica, o bien mediante acta notarial.

3. A efectos de requerimientos y notificaciones, el domicilio de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición. En todo caso será de aplicación la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 660.

4. Carecerá de efectos procesales cualquier cambio de domicilio que no se realice cumpliendo las prescripciones contenidas en este artículo.

Artículo 685. *Demanda ejecutiva y documentos que han de acompañarse a la misma.*

1. La demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes.

2. A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos a que se refieren el artículo 550 y, en sus respectivos casos, los artículos 573 y 574 de la presente Ley.

2. A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos a que se refieren el artículo 550 y, en sus respectivos casos, los artículos 573 y 574 de la presente Ley.

Se deberá acompañar igualmente certificación literal del Registro de la Propiedad en la que consten los extremos a que se refiere el apartado 1 del artículo 656 y en la que se exprese, además, que la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar, así como, de haberse estipulado, el domicilio que se hubiere fijado por el deudor y, en su caso, el hipotecante no deudor o el tercer poseedor, a efectos de notificaciones y requerimientos.

En caso de ejecución sobre bienes hipotecados o sobre bienes en régimen de prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse el título inscrito, deberá acompañarse con el que se presente certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.

3. A los efectos del procedimiento regulado en el presente capítulo se considerará título suficiente para despachar ejecución el documento privado de constitución de la hipoteca naval inscrito en el Registro de Bienes Muebles conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Navegación Marítima.

4. Para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una Entidad de las que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse el procedimiento, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, bastará la presentación de una certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Dicha certificación se completará con cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca, que podrá ser parcial comprendiendo tan solo la finca o fincas objeto de la ejecución.

Artículo 686. *Requerimiento de pago.*

1. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro.

2. Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 581.

Artículo 686. [Nueva rúbrica y nuevo contenido] Despacho de la ejecución hipotecaria

1. La demanda ejecutiva será, en su caso, autorizada y despachada en los términos establecidos en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 551.

2. El tribunal denegará el despacho de la ejecución por los motivos en previstos en el artículo 552, así como cuando de la certificación registral se advirtiere que la hipoteca en la que el ejecutante funda su reclamación no existe o ha sido cancelada.

3. Despachada la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia responsable, en el mismo día o en el siguiente hábil, dictará decreto en el que acordará:

A estos efectos, el requerimiento al deudor y en su caso las notificaciones al tercer poseedor hipotecante no deudor y titulares, en su caso, de derechos inscritos con posterioridad al derecho real de hipoteca que se ejerce, habrá de realizarse en el domicilio que conste consignado por cada uno de ellos en el Registro. El requerimiento o notificación se hará por el Notario, en la forma que resulte de la legislación notarial, en la persona del destinatario, si se encontrare en el domicilio señalado. No hallándose en el domicilio, el Notario llevará a efecto la diligencia con la persona mayor de edad que allí se encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal o laboral. El Notario hará constar expresamente la manifestación de dicha persona sobre su consentimiento a hacerse cargo de la cédula y su obligación de hacerla llegar a su destinatario.

No obstante lo anterior, será válido el requerimiento o la notificación realizada fuera del domicilio que conste en el Registro de la Propiedad siempre que se haga en la persona del destinatario y, previa su identificación por el Notario, con su consentimiento, que será expresado en el acta de requerimiento o notificación.

En caso de que el destinatario sea una persona jurídica el Notario entenderá la diligencia con una persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en el Registro y que forme parte del órgano de administración, que acredite ser representante con facultades suficientes o que a juicio del Notario actúe notoriamente como persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés.

3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, y realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes

a) Notificar al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor la existencia de la ejecución en los términos previstos en el art. 553.

b) Requerir de pago, en su caso, a los anteriores y con las formalidades que se señalan en el artículo siguiente.

A dichas partes se les advertirá que, transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación y, en su caso, el requerimiento de pago, se procederá a instancia del acreedor a la pública subasta del bien hipotecado.

c) Librar mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que haga constar por nota marginal en la inscripción de la hipoteca la incoación del procedimiento judicial.

En tanto no se cancele por nuevo mandamiento del Letrado de la Administración de Justicia de dicha nota marginal, el Registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución.

4. Contra el decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere despachado la ejecución.

para determinar el domicilio del deudor, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164.

Artículo 688. *Certificación de dominio y cargas. Sobreseimiento de la ejecución en caso de inexistencia o cancelación de la hipoteca.*

1. Cuando la ejecución se siga sobre bienes hipotecados, se reclamará del Registrador certificación en la que consten los extremos a que se refiere el apartado 1 del artículo 656, así como inserción literal de la inscripción de hipoteca que se haya de ejecutar, expresándose que la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 656.

2. El registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que se ha expedido la certificación de dominio y cargas, expresando su fecha y la existencia del procedimiento a que se refiere.

En tanto no se cancele por mandamiento del Secretario judicial dicha nota marginal, el registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución.

3. Si de la certificación resultare que la hipoteca en la que el ejecutante funda su reclamación no existe o ha sido cancelada, el Secretario judicial dictará decreto poniendo fin a la ejecución.

Artículo 688. [Nueva rúbrica y nuevo contenido] **Del modo de practicar el requerimiento de pago**

1. Sin perjuicio del deber de notificación a **la parte ejecutada** del despacho de la ejecución, **no será preceptivo** el requerimiento de pago cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente **el mismo por fedatario público constituido en el domicilio que figure vigente en el Registro, bien personalmente si se encontrare en él el deudor, el hipotecante no deudor o el tercer poseedor que hayan de ser requeridos, bien a las terceras personas a que se refiere el apartado 3 del artículo 161.**

2. De acordarse el requerimiento judicial de pago, el mismo habrá de practicarse en la forma prevista en el apartado anterior en el domicilio que a efectos de notificaciones y requerimientos conste en la certificación registral aportada con la demanda.

3. Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, **se tendrá por cumplido, sin más trámites, el intento de comunicación a la parte o partes ejecutadas de la existencia de la ejecución y, cuando corresponda, del requerimiento de pago. En tal caso, se procederá a practicar ambos actos de comunicación por edicto en la sede judicial electrónica.**

4. Solo a instancia de la parte ejecutante se podrá acordar la práctica de los actos de notificación y requerimiento en cualesquiera otros domicilios diferentes de los que figuren en el Registro de la Propiedad.

Artículo 689. *Comunicación del procedimiento al titular inscrito y a los acreedores posteriores.*

1. Si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las formas notarial o judicial, previstas en los artículos anteriores, se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio que conste en el Registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca.

2. Cuando existan cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito del actor, se aplicará lo dispuesto en el artículo 659.

Artículo 689. *Comunicación del procedimiento ~~al titular inscrito tercer poseedor y~~ a los acreedores posteriores.*

Practicada la anotación a que se refiere el artículo 686, el Registrador de la Propiedad comunicará, si los hubiere, la existencia del procedimiento a los titulares de cargas o derechos posteriores inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito del actor, aplicándose entonces lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 659 y en el apartado 1º del artículo 660.

Artículo 691. *Convocatoria de la subasta de bienes hipotecados. Anuncio y publicidad de la convocatoria.*

1. Cumplido lo dispuesto en los artículos anteriores y transcurridos veinte días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá a instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor, a la subasta de la finca o bien hipotecado.

2. La subasta se anunciará y dará publicidad en la forma determinada por los artículos 667 y 668.

3. Cuando se siga el procedimiento por deuda garantizada con hipoteca sobre establecimiento mercantil el edicto que se publique en el Portal de Subastas indicará que el adquirente quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley sobre arrendamientos urbanos, aceptando, en su caso,

1. Cumplido lo dispuesto en los artículos anteriores y transcurridos **al menos** veinte días desde que **hayan tenido** lugar **el requerimiento de pago, si haber sido procedente, y las notificaciones del despacho de la ejecución al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor,** ~~el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas,~~ se procederá a instancia del actor, del deudor, **del hipotecante no deudor** o del tercer poseedor, a la subasta de la finca o bien hipotecado.

2. La subasta se anunciará y dará publicidad en la forma determinada por los artículos **645,** 667 y 668.

<p>el derecho del arrendador a elevar la renta por cesión del contrato.</p> <p>4. La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la subasta de bienes inmuebles.</p> <p>5. Cuando le conste al Secretario judicial la declaración de concurso del deudor, suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado.</p> <p>En este caso se reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 649. En todo caso el Registrador de la Propiedad notificará a la Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecutivo la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario el bien a la actividad profesional o empresarial del deudor.</p> <p>6. En los procesos de ejecución a que se refiere este Capítulo podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización por medio de persona o entidad especializada reguladas en las Secciones 3.ª y 4.ª del Capítulo IV del presente Título.</p>	
--	--

<p>Artículo 815. <i>Admisión de la petición y requerimiento de pago.</i></p> <p>1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad re-</p>	
--	--

clamada. En caso contrario dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.

El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. Sólo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo.

2. En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiese hacerse efectiva de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente Ley.

3. Si de la documentación [...].

2. [p1] El requerimiento se **practicará** en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, **se pondrá fin al proceso monitorio sin más trámites, así como que a instancia del acreedor** se despachará contra él ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente.

[p2] Solo se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo.

3. En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del artículo 812, **el requerimiento** deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios, **extremo que deberá ser acreditado en la petición inicial mediante certificado expedido al efecto por el Secretario o Administrador de la Comunidad y con el visto bueno del Presidente**. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiese hacerse efectiva de este modo, se le **requerirá, sin más trámites, por medio de edicto en el tablón de anuncios de la oficina judicial**.

4. [Si de la documentación...]

Artículo 816. Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. Intereses.

1. Si el deudor no atiende el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.

1. Si el deudor no atiende el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.

<p>2. Despachada ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere.</p> <p>Desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés a que se refiere el artículo 576.</p>	<p><u>El decreto se notificará al deudor aunque no hubiese comparecido, pero su falta de recepción no será obstáculo para despachar la ejecución.</u></p> <p>2. Despachada ejecución, [...].</p>
---	---

<p>Artículo 821. Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo preventivo.</p> <p>1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.</p> <p>2. El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:</p> <p>1.^a Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.</p> <p>2.^a Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.</p> <p>3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior podrá interponer el</p>	<p>2. El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:</p> <p>1.^a Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.</p> <p>2.^a <u>El</u> inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.</p> <p><u>La anterior medida se adoptará en la propia resolución judicial si el acreedor hubiera designado bienes del deudor de valor proporcional a las cantidades reclamadas.</u></p> <p><u>En otro caso, el embargo preventivo se practicará por la Comisión judicial inmediatamente después de haber requerido de pago al deudor y salvo que este pagase en el acto.</u></p>
--	--

<p>demandante los recursos a que se refiere el apartado 2 del artículo 552.</p>	<p><u>4. El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la negativa al pago, se despachará de oficio ejecución contra él.</u></p> <p><u>Solamente se admitirá el requerimiento al deudor por medio de edictos en el supuesto de que se haya intentado practicar, al menos, en el domicilio del título cambiario y se hayan agotado las averiguaciones tendentes a su localización.</u></p>
---	--